431

164545

OFICINA DE APOYO
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS

2015 NOV 12 PM 4 51

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Hernando Leiva V

Señora

JUEZA VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN

De Oralidad Circuito Judicial de Bogotá

Sección Tercera

E. S. D.

NATURALEZA: **REPETICIÓN**
RADICACIÓN: **11001-3336-722-2014-00109-00**
DEMANDANTE: **NACIÓN–MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
DEMANDADO: **HERNANDO LEIVA VARÓN**
ASUNTO: **CONTESTACIÓN DEMANDA**

JUAN ANTONIO ARAUJO ARMERO, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía 1.085.263.640 de Pasto, abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 203.646 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado de **HERNANDO LEIVA VARÓN**, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía 10.963, domiciliado en la ciudad de Bogotá, me permito formular contestación a la demanda interpuesta por la **NACIÓN–MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** en contra de **HERNANDO LEIVA VARÓN Y OTROS**, en los siguientes términos:

I. FRENTE A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones formuladas por el demandante contra mi poderdante, en la medida que carecen de fundamentos jurídicos y las interpretaciones fácticas y jurídicas del demandante son erróneas, todo por lo cual no puede imputarse responsabilidad patrimonial alguna a mi representado, el

señor HERNANDO LEIVA VARÓN y por lo tanto dichas pretensiones están llamadas al fracaso.

En ese sentido, se hace necesario señalar desde ya que en el asunto de la referencia, respecto de mi representado, no se configuran los elementos *sine qua non* exigidos por la Ley y la Jurisprudencia para imputarle responsabilidad patrimonial alguna, como por ejemplo, accionar doloso o con culpa grave en el ejercicio de las funciones públicas a su cargo.

II. A LOS HECHOS

PRIMERO: Cierto. En el sentido que lo establecen los artículos 23 a 27 del Decreto 10 de 1992.

SEGUNDO: No es cierto. Si bien dentro de las citadas normas se establecen asuntos relacionados con la notificación de las liquidaciones del auxilio de cesantías, ninguna de ellas, como erróneamente lo esboza la parte demandante, asigna a mi poderdante la función de notificar la liquidación de las cesantías de la señora Ángela María Correa Moreno.

TERCERO: No me consta. La parte demandante no allega prueba alguna respecto de la vinculación de la señora Ángela María Correa Moreno, por lo tanto este será un asunto que deba acreditarse en el transcurso del proceso.

CUARTO: No me consta. En el expediente no se encuentra ninguna reproducción del mencionado oficio.

QUINTO A OCTAVO: Es parcialmente cierto. Al respecto, debe señalarse enfáticamente que los mismos no demuestran en absoluto una actitud dolosa o con culpa grave de mi representado, requisito que es indispensable para endilgar responsabilidad patrimonial alguna dentro del asunto de la referencia.

En efecto, constituye una falacia argumentativa entender que la reclamación económica realizada al Ministerio de Relaciones Exteriores por parte de la señora Ángela María Correa Moreno es consecuencia directa de la supuesta falta de notificación de la liquidación de sus cesantías, cuando lo cierto, es que la misma tuvo sustento única y exclusivamente en la disconformidad del valor contenido en

dicha liquidación por no corresponder, en los términos desarrollados por el Consejo de Estado[1], al salario realmente devengado.

NOVENO: No es cierto. Debe reiterarse, una vez más, que dentro de las funciones legalmente asignadas a mi poderdante mediante Resolución No. 2149 del 10 de septiembre de 1991, no se encontraba la de notificar las liquidaciones de las cesantías de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese sentido, es evidente que los argumentos facticos y jurídicos esbozados por el extremo demandante no tienen asidero jurídico alguno, y no pueden ser por tanto, fundamento de una eventual asignación de responsabilidad patrimonial en cabeza de mi representado.

Al respecto, conviene traer a colación lo contenido en la Certificación DITH No. 0940, expedida por el Director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, aportada al proceso por el mismo demandante y en la cual, como bien puede observar el Despacho, no se estableció como una de las funciones a cargo de mi representado la de notificar las liquidaciones de cesantías.

Aunado a ello, es preciso hacer énfasis en que tanto la reclamación presentada por la señora Ángela María Correa Moreno como el pago realizado por la cartera ministerial, tuvieron lugar en el tratamiento injustificado que se presentaba respecto de las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior y no, como mal lo entiende el extremo demandante, en el trámite de notificación de dichas liquidaciones.

DÉCIMO: No es un hecho. Es una simple referencia textual de una disposición de carácter legal.

III. DE LAS NORMAS APLICABLES AL CASO EN PARTICULAR

Se debe tener en cuenta que el demandante incoa la acción de repetición en contra de varios funcionarios, con fundamento en diferentes normas que, como se verá, no resultan todas aplicables a todos los demandados y por lo tanto, lo primero que debe ponerse de presente en este escrito es que por la época en que ocurrieron los hechos en que se fundamentan las pretensiones en contra de mi poderdante, las normas aplicables y con base en las cuales se debe realizar el juicio de responsabilidad son exclusivamente el inciso segundo del artículo 90 de

[1] Sentencia del 21 de octubre de 2011. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección "A". M.P. GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN. Radicación No. 25000-23-25-000-2005-04144-01.

la Constitución Política de Colombia y los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

Lo anterior, en virtud de la aplicación del principio de legalidad que debe regir todo tipo de actuaciones judiciales, en especial aquellas que contienen pretensiones de carácter condenatorio (Inc. 2° Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia[2]), y a lo señalado por el H. Consejo de Estado, en cuanto a que en los trámites de las acciones de repetición, se debe tener en cuenta la aplicación de la ley en el tiempo[3].

Lo precedente se pone de presente, para que dentro del trámite del presente proceso, y respecto de mi representado Hernando Leiva Varón, no se de aplicación a normas que, por lo explicado previamente serían inaplicables, como es el caso de la Ley 678 de 2001.

Ahora bien, dado que por medio de la acción de repetición se pretende establecer la responsabilidad patrimonial de un funcionario público respecto de unos daños antijurídicos que fueron imputados a una entidad pública, con ocasión del actuar doloso o con culpa grave de dicho funcionario, vale la pena resaltar que los requisitos que deben aparecer probados dentro del proceso son los que deben acreditarse en cualquier proceso de responsabilidad. Es decir, un factor de atribución de la responsabilidad, un daño y un nexo causal entre el primero y el segundo. Requisitos que la jurisprudencia del Consejo de Estado, en otras palabras, pero con identidad en cuánto a los criterios enunciados, ha establecido como:

> *"a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar los daños antijurídicos causados a un particular; b) Que la entidad haya pagado a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria y c) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas."*[4]

Respecto de lo anterior debe indicarse que:

---

[2] Establece el Inc. 2° del Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia: "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes **preexistentes al acto que se le imputa**, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio." (Negrillas y subrayas fuera de texto original)

[3] Sentencia del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 3 de octubre de 2007. Rad. No. 41001-23-31-000-1995-08354-01(24844). C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

[4] Ibídem.

i) El factor de atribución de la responsabilidad en este tipo de procesos es uno altamente exigente. Este es que la conducta del funcionario debe poderse calificar como dolosa o gravemente culposa.

ii) El daño antijurídico que se debe demostrar consta de dos componentes. De una parte el daño antijurídico que se causó a un tercero y por el cual fue condenada la entidad y, de otra parte, el pago que la entidad realiza en virtud de dicha condena.

iii) Respecto del nexo causal, es claro que, tal como lo ha establecido el H. Consejo de Estado, el mismo estará presente cuando la condena impuesta a la entidad o una conciliación celebrada por la misma, se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario.

Es de importante relevancia tener plena claridad que estos elementos son todos indispensables para que las pretensiones de la acción de repetición puedan prosperar en contra del funcionario respectivo, pues en ausencia de al menos uno, las pretensiones estarán llamadas al fracaso.

Pues bien, visto lo anterior ahora se procederá a exponer las diferentes excepciones que demuestran que todos los elementos *sine qua non* para que prospere la acción de repetición incoada contra mi representado, no se encuentran presentes en el asunto que hoy nos ocupa y, por lo tanto, no es posible, a la luz del ordenamiento jurídico colombiano, imputar responsabilidad alguna al mismo.

IV. EXCEPCIONES

PRIMERA EXCEPCIÓN. AUSENCIA DE UNA CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA

Cobra especial importancia para el proceso que hoy nos ocupa, recordar que la tanto la existencia, así como la debida acreditación por parte de la entidad pública de una conducta dolosa o gravemente culposa por parte del funcionario público contra el cual se pretende repetir, es un requisito indispensable para la prosperidad de la acción.

En efecto, de no encontrarse debidamente probada la configuración de estos elementos de imputación respecto de un determinado funcionario o ex funcionario público, el mismo no estará llamado a ser declarado

responsable. Al respecto, resulta ilustrativo lo señalado por el Doctor Carlos Betancur Jaramillo en su libro *Derecho Procesal Administrativo*[5]. A saber:

> "(...) ***solo cuando el agente público haya actuado en forma dolosa o gravemente culposa en ejercicio de funciones públicas*** *y comprometa de ese modo la responsabilidad de la entidad pública, podrá hablarse del derecho que ésta tiene para repetir, en todo o en parte, contra aquel por lo que tenga que pagarle a la persona o personas damnificadas.*" (Negrilla y subraya fuera de texto)

En ese sentido, se tiene que, por un lado, el accionar de la persona contra quien se interpone la acción de repetición debió haber sido doloso o gravemente culposo y por el otro, que dicho comportamiento se predique respecto de las funciones que por ley le fueron asignadas, ya que de no ser así, no es posible determinar su incidencia en la responsabilidad atribuida a la entidad por cuanto la misma se deriva del incumplimiento de unas funciones ajenas a su competencia. En este punto es preciso recordar que los servidores públicos tan solo pueden adelantar las funciones previstas para su cargo por la Constitución, las leyes y los reglamentos, no encontrándose por tanto habilitados para desarrollar funciones ajenas a su competencia, pues hacer lo contrario, sería tanto como incurrir en una extralimitación de funciones que no le corresponden.

Lo expuesto en precedencia reviste especial importancia, dado que la conducta gravemente culposa o dolosa que se le pretende imputar al señor Leiva Varón, tiene fundamento en que éste presuntamente incumplió con una de sus funciones, lo cual es a todas luces incorrecto pues, a diferencia de lo sostenido por la parte actora, no existe deber o función alguna en cabeza de mi representado que le imponga la obligación de notificar la liquidación de cesantías.

Así las cosas, al no existir una función indebidamente pretermitida por mí representado, es evidente la inexistencia de una conducta susceptible de ser valorada como dolosa o gravemente culposa, y de suyo, de uno de los factores elementales de atribución de responsabilidad que deben ser tenidos en cuenta a la hora de proferir una decisión dentro del presente asunto.

---

[5] Betancur Jaramillo, Carlos. (2013). *Derecho Procesal Administrativo.* Octava edición. Señal Editorial. Página 123. Bogotá D.C., Colombia.

Afirma el demandante que mi representado ostentaba dentro de sus funciones, la de notificar la liquidación de las cesantías de la señora Ángela María Correa Moreno y que con ocasión del incumplimiento de dicha función, generó un perjuicio al Estado. Sin embargo, tal y como se demostrará a lo largo del presente escrito, dicha afirmación carece totalmente de sustento legal, en la medida que si bien el Decreto 3118 de 1968, el cual valga la pena señalar es la única norma aplicable al presente asunto, dispone en su artículo 30 la obligación de realizar la notificación de la liquidación de las cesantías, lo cierto es que dicha norma fue dictada de manera genérica y no establecía a que funcionario le corresponde realizar la mentada notificación. En ese sentido, en atención al carácter genérico de la norma y a que dentro de las funciones asignadas a mi representado no se encontraba la de notificar las liquidaciones de cesantías, como bien puede observar el Despacho en la certificación aportada al proceso por el mismo demandante, debe concluirse que aquella función no le fue asignada ni por delegación del Ministro del momento, ni por norma alguna vigente en dicha época.

El demandante erige su demanda y establece que las funciones de notificación a cargo de mi representado encuentran sustento en las siguientes disposiciones normativas: artículo 30 del Decreto 3118 de 1968, articulo 44 y siguientes del Decreto Ley 01 de 1984, articulo 32 del Decreto 2126 de 1992, articulo 23 del Decreto 1295 de 2000, articulo 23 del Decreto 2105 de 2001 y articulo 25 del Decreto 110 de 2004.

Dado que las citadas normas resultan ser el único fundamento jurídico esbozado por el extremo demandante para asegurar que mi representado, para la época en que ejerció funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenía la función y por lo tanto, la consecuente obligación, de notificar a la señora Ángela María Correa Moreno de la liquidación de las cesantías anuales, vale la pena citarlas textualmente para que el Despacho pueda verificar, con plena claridad, que ninguna de dichas normas obligaba o estableció función alguna en cabeza de mi poderdante respecto de la mencionada notificación. Dicen las normas mencionadas:

- **Decreto 3118 de 1968. Artículo 30:** "*Las liquidaciones del auxilio de cesantía de empleados públicos y trabajadores oficiales de que tratan los Artículos 22., 25., 27. y 28* ***se notificarán*** *a los interesados, quienes si las encuentran correctas deberán suscribirlas en señal de asentimiento.*

Si el respectivo empleado público o trabajador oficial no estuviere conforme con la liquidación practicada podrá hacer uso de los recursos legales correspondientes.

Vencidos los términos establecidos para tales recursos, la liquidación quedará en firme y contra ella no cabrá ninguna otra clase de acciones." (Negrilla y subraya fuera de texto original)

- **Artículo 44 del Código Contencioso Administrativo:** "*Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado o a su representante o apoderado.*

  Los procesos correspondientes se adelantarán por escrito.

  Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha con tal finalidad. La constancia del envío de la citación se agregará al expediente. La citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.

  No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación.

  Al hacer la notificación personal se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión.

  En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera del Código Contencioso Administrativo."

- **Decreto 2126 de 1992. Artículo 32 Numeral 5:** "*Son funciones de la Subsecretaría de Recursos Humanos, las siguientes:*

  5. Atender el manejo y la tramitación de asuntos relacionados con selección, nombramientos, capacitación, evaluación, traslados, licencias, permisos, comisiones, prestaciones sociales y demás situaciones administrativas y elaborar los correspondientes actos administrativos sobre las novedades de personal."

- **Decreto 1295 de 2000. Artículo 23:** "*Son funciones de la Dirección del Talento Humanos las siguientes:*

1. Asesorar al Secretario General y por su intermedio al Ministro, en la formulación de políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos humanos.

2. Ser el órgano para la administración y vigilancia de la Carrera Diplomática y Consular y por ello orientar y coordinar las políticas de ingreso, permanencia, concurso, alternación y todos los asuntos de carácter administrativo relacionados con ella, de acuerdo con el Decreto-ley 274 de 2000.

3. Administrar la planta de personal del servicio exterior y sus archivos, bajo la dirección de la Secretaría General y recomendarle programas de distribución o redistribución de los cargos y de ubicación del personal, de acuerdo con las necesidades del servicio.

4. Cumplir las funciones especiales relacionadas con la administración y desarrollo del personal del Ministerio.

5. Coordinar y programar las actividades de administración del personal, incluidas las relativas a Bienestar Social, salud ocupacional y demás situaciones del personal de planta, y elaborar los correspondientes actos administrativos sobre novedades de personal.

6. Mantener actualizado el manual específico de funciones y requisitos del Ministerio, de acuerdo con las políticas del Ministerio y las normas legales vigentes establecidas sobre estas materias.

7. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las carreras diplomática y consular y administrativa.

8. Atender, por delegación o poder otorgado por el Ministro, todos los procesos que se relacionen con el Ministerio en materia laboral.

9. Responder las acciones de tutela y los derechos de petición que se relacionen con asuntos atinentes a las funciones asignadas a esta Dirección.

10. Absolver las consultas que le formulen las dependencias de la Cancillería y que tengan relación con temas jurídicos de carácter laboral.

11. Custodiar y mantener actualizadas las hojas de vida de todos los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

12. Ejercer la función de Secretaría de la Comisión de Personal de la Carrera Administrativa.

13. Las demás que le sean asignadas y que por su naturaleza le sean afines a las ya descritas."

- **Decreto 2105 de 2001. Artículo 23:** *Son funciones de la Dirección del Talento Humano, además de las señaladas en el Decreto 274 del 22 febrero de 2000 o en las normas que lo adicionen, lo modifiquen o sustituyan las siguientes:*

1. Asesorar al Secretario General y por su intermedio al Ministro, en la formulación de políticas, normas y procedimientos para la administración del talento humano.

2. Administrar la planta de personal del servicio exterior, bajo la dirección de la Secretaría General y recomendarle programas de distribución o redistribución de los cargos y de ubicación del personal, de acuerdo con las necesidades del servicio.

3. Coordinar, programar y dirigir las actividades de administración del personal, capacitación, bienestar social y prestaciones sociales de los funcionarios del Ministerio.

4. Mantener actualizado el manual específico de funciones y requisitos del Ministerio, de acuerdo con las políticas del Ministerio y las normas legales vigentes establecidas sobre estas materias.

5. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las carreras diplomática y consular y administrativa.

6. Custodiar y mantener actualizadas las hojas de vida de todos los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

7. Participar en los Consejos, Comisiones o Juntas, que determine el Ministro o el Secretario General, e informarles las determinaciones tomadas.

8. Llevar el registro y la numeración de las resoluciones que se expidan en el Ministerio y su Fondo Rotatorio.

9. Estudiar y tramitar las solicitudes formuladas por las Misiones Diplomáticas y Consulares sobre asuntos de su competencia.

10. Las demás que le sean asignadas o que por su naturaleza sean afines a las ya descritas."

- **Decreto 110 de 2004 Artículo 25:** "*Son funciones de la Dirección del Talento Humano, además de las señaladas en el Decreto 274 del 22 febrero de 2000, o en las normas que lo adicionen, lo modifiquen o sustituyan, las siguientes:*

  1. Asesorar al Secretario General y por su intermedio al Ministro, en la formulación de políticas, normas y procedimientos para la administración del talento humano.

  2. Administrar la planta de personal del servicio exterior, bajo la dirección de la Secretaría General y recomendarle programas de distribución o redistribución de los cargos y de ubicación del personal, de acuerdo con las necesidades del servicio.

  3. Dirigir, programar y ejecutar las actividades de administración del personal, capacitación, bienestar social y prestaciones sociales de los funcionarios del Ministerio.

  4. Mantener actualizado el manual específico de funciones y re quisitos del Ministerio, de acuerdo con las políticas del Ministerio y las normas legales vigentes establecidas sobre estas materias.

  5. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las carreras diplomática y consular y administrativa.

  6. Custodiar y mantener actualizadas las hojas de vida de todos los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

  7. Participar en los Consejos, Comisiones o Juntas, que determine el Ministro o el Secretario General, e informarles las determinaciones tomadas.

  8. Llevar el registro y la numeración de las resoluciones que se expidan en el Ministerio y su Fondo Rotatorio.

  9. Estudiar y tramitar las solicitudes formuladas por las Misiones Diplomáticas y Consulares sobre asuntos de su competencia.

  10. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia."

Pues bien, de las normas previamente citadas puede advertirse que varias de ellas no son aplicables al presente asunto, dado que, tal y como lo indica en repetidas ocasiones el mismo demandante, y no existe discusión alguna al respecto, el periodo durante el cual laboró mi representado, el señor Hernando Leiva Varón, en el cargo de Asesor del Despacho del Ministro

(con funciones de Jefe de Personal del Ministerio – de Relaciones Exteriores), fue del diez (10) de septiembre de 1991 al diez (10) de febrero de 1992. En virtud de lo anterior, la única norma aplicable a mi representado es el Decreto 3118 de 1968.

En efecto, no debe perderse de vista que en nuestro ordenamiento jurídico tiene amplia validez el principio de ultractividad de la ley, en virtud del cual todo acto, negocio o hecho se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, sin perjuicio que dicha norma haya sido derogada. Al respecto la H. Corte Constitucional, en sentencia C-763 de 2002 señaló:

> *"Dentro de la Teoría General del Derecho, es clara la aplicación del principio "Tempus regit actus", que se traduce en que* ***la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después****. Esto es lo que explica la Teoría del Derecho, la denominada ultractividad de las normas, que son normas derogadas, que se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este fenómeno se presenta en relación con todas las normas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza (...)"* (Negrilla fuera de texto original)

Así las cosas, se hace evidente la ausencia total de asidero jurídico en las pretensiones formuladas por el extremo demandante, máxime si se tiene en cuenta que la norma aplicable, esto es; el Decreto 3118 de 1968, no establece a cargo de mi representado la función de notificar la liquidación de las cesantías como erróneamente, y valga la redundancia sin fundamento legal alguno, lo pretende la entidad accionante.

Todo lo anterior quiere decir que **no existe** prueba alguna dentro del presente proceso, así como tampoco fundamento legal, que permita acreditar que mi representado, el señor Hernando Leiva Varón, durante el periodo que laboró en al Ministerio de Relaciones Exteriores como Asesor con funciones de Jefe de Personal, tenía la función de liquidar las cesantías que se causaron a favor de la señora Ángela María Correa Moreno en el año de 1991, únicas causadas durante el periodo que mi poderdante se desempeñó en el cargo anotado, ni mucho menos de notificar el acto administrativo de liquidación de dichas cesantías.

Vale la pena reiterar que dentro de la certificación emitida por el Director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores el día 03 de abril

de 2013, bajo el documento No. DITH No. 0244 (folios 217 a 218), en la cual se certifican las funciones que tuvo mi poderdante dentro del breve lapso de tiempo que desempeñó su respectivo cargo, **NO** se indica de forma alguna que estuviera a su cargo la función de realizar la liquidación y notificación de las cesantías de los empleados del Ministerio.

Así las cosas, debe tenerse en cuenta por el Despacho que la Constitución Política de Colombia señala:

> *"Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones."* (Subraya fuera de texto original)
>
> *"Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga* ***funciones detalladas*** *en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.*
>
> (...)." (Negrilla y subraya fuera de texto original)

De las normas Constitucionales citadas se concluye que no puede pretender el demandante imponer obligaciones, funciones o deberes inexistentes para mi poderdante cuando, como se pudo ver, no existía ninguna norma aplicable que le impusiera la función de notificar las liquidaciones anuales de las cesantías, es decir, no era su competencia efectuar dicha notificación.

En ese sentido, aceptar la tesis esbozada por el demandante, según la cual mi representado tenía la obligación de notificar la liquidación de las cesantías, sería tanto como pretender legitimar una extralimitación de las funciones asignadas legalmente al señor Hernando Leiva Varón en abierta violación del principio constitucional de legalidad previsto en el precitado artículo 6° de la Constitución Política de Colombia.

Lo anterior se puede evidenciar, incluso, en el mismo acervo probatorio que aporta el demandante, pues este no acredita de manera alguna que la función de notificar la liquidación de las cesantías estuviera en cabeza de mi representado para la época en que ejerció funciones públicas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es más, no existe manual de funciones, resolución, decreto o ley que estableciera que la notificación de

la liquidación de las cesantías debió ser realizada por el Asesor del Despacho del Ministro (con funciones de Jefe de Personal del Ministerio – de Relaciones Exteriores).

Ahora bien, el hecho de que, al parecer, al interior de la entidad se haya omitido asignar la respectiva función de los trámites relacionados con la notificación de la liquidación de cesantías, no puede de manera alguna ser el fundamento para imponer a mi representado algún tipo de responsabilidad pues como bien puede observar el Despacho, la pretendida omisión se predica respecto de una función que nunca le fue asignada y que por lo tanto no le competía realizar.

Tómese en consideración lo que ha afirmado el H. Consejo de Estado al examinar el régimen de responsabilidad de los funcionarios públicos:

> *"Al respecto, es preciso resaltar que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión* ***o extralimitación en el ejercicio de sus funciones****, pues no es posible hablar de Estado de Derecho, si las autoridades, al igual que los particulares, no se encuentran sujetas al imperio de la ley,* ***hasta el punto de que su campo de acción sea exclusivamente el que aquélla delimita****. La Constitución prescribe que* ***ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la Ley y ordena****, como ya se dijo, que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y que la Ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva."*[6] (Negrilla y subraya fuera de texto original)

En atención a lo expuesto en precedencia, es evidente a estas instancias que en la medida que de bulto se aprecia la ausencia de acervo probatorio que demuestre que dentro de las funciones de mi representado se encontraba la de encargarse de los asuntos relacionados con los procesos concernientes a las cesantías (liquidación, consignación, notificación, etc.), no podrá atribuírsele en forma alguna dicha función, ni mucho menos responsabilidad alguna por su omisión.

---

[6] Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. 18 de septiembre de 2001. Rad. No. 11001-03-15-000-2000-0472-01(S- 472). C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.

En adición, como se puede advertir en el mismo nombre del cargo asignado a mi representado: "Asesor del Despacho del Ministro – Con funciones de Jefe de Personal", las funciones principales eran las de asesorar al Despacho del Ministro, junto con ciertas funciones de Jefe de Personal, que, valga reiterar, no incorporaban la de notificar las liquidaciones de cesantías y por lo tanto no se encuentran probadas dentro del presente proceso.

Bajo la luz de lo expuesto, deben estar llamadas a fracasar las pretensiones del demandante contra mi poderdante, en el sentido de que es condición esencial para que pudiera ser imputada la pretendida responsabilidad del mismo: i) que exista prueba de un reproche funcional con ocasión de una conducta dolosa o gravemente culposa y; ii) que el cumplimiento de dichas funciones haya sido asignado en debida forma a mi representado, esto es; por intermedio de un acto administrativo, un decreto o una ley, lo cual a todas luces no aconteció en el asunto de la referencia.

Pretender afirmar lo contrario sin que exista prueba alguna, sería incurrir en una conducta a todas luces inconstitucional. Así lo ha reconocido la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, apoyándose en la de la Corte Constitucional, afirmando que:

> "*Con fundamento en la norma en mención, la jurisprudencia del Consejo de Estado estudió los conceptos de culpa grave y dolo, al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición*[7] *y la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 77*[8] *y 78*[9] *del C. C. A.. Así, dijo*[10] *que, para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos* ***6º y 91*** *de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos,* ***como también la asignación***

[7] Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 25 de julio de 1994, expediente: 8483; 21 de octubre de 1994, expediente: 9618; 12 de abril de 2002, expediente: 13922; 5 de diciembre de 2005, expediente: 23218.
[8] Sentencia C –100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001.
[9] Sentencia C – 430 que dictó la Corte Constitucional el 12 de abril de 2000.
[10] Sentencia del 31 de agosto de 1999, expediente: 10865.

de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos."[11] (Negrilla y subraya fuera de texto original)

Es así como queda plenamente acreditado que mi representado no actuó con culpa grave o dolo, pues para ello es requisito *sine qua non* que hubiera omitido cumplir con las funciones que le fueron asignadas, lo cual evidentemente no está siquiera sumariamente probado dentro del presente proceso y por lo tanto, no se puede elevar ni imputar el juicio de responsabilidad que se pretende, por simple ausencia de la presunta conducta omitida.

En otras palabras, para que mi poderdante hubiera incurrido en una conducta gravemente culposa o dolosa debería haber tenido que desconocer algún tipo de parámetro que le fuera exigible. En ausencia de dicho parámetro, no puede elevarse juicio de reproche alguno, ya que no existe conducta exigible y, por lo tanto, por sustracción de materia, no puede hablarse en forma alguna de conducta gravemente culposa o dolosa.

SEGUNDA EXCEPCIÓN. AUSENCIA DE NEXO CAUSAL

Dentro de los elementos inicialmente explicados, para que pueda válidamente encontrarse que mi representado es responsable por los presuntos daños causados a la entidad, debe demostrarse por el demandante que el daño que éste pretende que le sea reparado por mi poderdante y la presunta conducta dolosa o gravemente culposa, se encuentran atados por un nexo de causalidad jurídica.

En otras palabras, debe acreditarse por el demandante que los daños que alega que se le causaron son consecuencia directa de la conducta gravemente culposa o dolosa desplegada por mi representado en el ejercicio de sus funciones.

Pues bien, siendo cierto y quedando acreditado dentro del numeral anterior que mi representado no tenía la función de notificar las liquidaciones de cesantías, función esta que valga la pena señalar pretende el extremo demandante atribuirle de manera ilegal, es preciso también demostrar las

[11] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. 13 de junio de 2013. Rad. No. 54001-23-31-000-1997-12161-01(26800). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

razones por las cuales, incluso, aún en el remoto evento de que la precitada función hubiera estado en cabeza de mi representado, las pretensiones del demandante deberían fracasar y en particular las que se erigen contra mi poderdante.

Dentro de la demanda se pretende que mi poderdante, así como los otros demandados, respondan por la suma de dinero que la entidad tuvo que pagar a la señora Ángela María Correa Moreno con ocasión de la reliquidación de sus cesantías causadas desde el año 1990 hasta el año 2003. No obstante, debe aclararse que dicho pago no se dio con ocasión de la supuesta conducta dolosa o gravemente culposa de mi representado sino que el mismo obedece, única y exclusivamente, a la declaratoria de inexequibilidad de los Decretos 10 de 1992 y 274 de 2000.

Al respecto y como apoyo a este argumento, vale la pena realizar un breve recuento de las consideraciones esbozadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la providencia por medio de la cual aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012 entre la señora Ángela María Correa Moreno y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

i) La señora Ángela María Correa Moreno interpuso solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 84 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bogotá, con el objetivo de que el Ministerio de Relaciones Exteriores liquide las cesantías correspondientes al periodo en que laboró en la entidad, tomando como base el salario realmente devengado en la planta externa y no lo establecido en el derogado Decreto 10 de 1992.

ii) El Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores acogió las pretensiones de la Convocante y decidió presentar formula de conciliación.

iii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al aprobar el acuerdo conciliatorio recordó que de conformidad con lo señalado por la Honorable Corte Constitucional, el Artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992 y el Artículo 66 del Decreto 274 de 2000 son normas violatorias de la Constitución Política de Colombia, pues estas permitían que se liquidaran los aportes al sistema de pensiones de los ex funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre un ingreso base que no

correspondía al que realmente devengaron cuando se desempeñaron como funcionarios públicos en el servicio exterior. En ese sentido, al haberse realizado la liquidación de cesantías de la señora Ángela María Correa Moreno con base en un salario inferior al realmente devengado como funcionaria del cuerpo diplomático exterior, la misma debía liquidarse nuevamente con fundamento en el ingreso realmente percibido por la funcionaria.

iv) Aunado a lo anterior, recuerda el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que el Honorable Consejo de Estado en sentencia del 21 de octubre de 2011[12] y en relación a lo que concierne al caso bajo estudio, señaló:

> *"El Decreto 274 de 2000 que derogó el Decreto 10 de 1992, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-292 del 16 de marzo de 2001, por cuanto consideró que la facultad de regular el régimen prestacional de los funcionarios de Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, no estaba dentro de las potestades otorgadas extraordinariamente por el legislador. Con fundamento en el anterior recuento, entre otras cosas, se puede inferir que, efectivamente, la liquidación de las prestaciones contaba con regulaciones especiales que desaparecieron del ordenamiento jurídico, quedando como premisa* ***que la liquidación de las cesantías de los funcionarios que prestaban sus servicios en el exterior debe efectuarse con base en el salario realmente devengado****, porque liquidar sus prestaciones, entre estas la cesantía,* ***con base en una equivalencia****, como lo declaró la Corte Constitucional* ***implicaría dar un tratamiento diferenciado e injustificado, contrario al mandato de igualdad*** *en la formulación del derecho y que, resulta lesivo a los derechos fundamentales como lo de seguridad social y mínimo vital."* (Negrillas y subrayas fuera de texto)

[12] Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguen. Radicado No.

v) En razón a estas consideraciones, el Tribunal concluyó que al calcularse las cesantías anuales de la señora Ángela María Correa Moreno **con un salario menor al realmente devengado**, se le dio un tratamiento discriminatorio, desconociéndose el derecho a la igualdad. Por esta razón, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe proceder a liquidar las cesantías con base en el valor realmente devengado por la ex funcionaria.

Como bien puede observar el Despacho, el deber de reliquidar las cesantías pagadas a favor de la señora Ángela María Correa Moreno, tiene origen en la declaratoria de inexequibilidad del sustento legal de dicha liquidación y NO en su indebida notificación, como erróneamente se pretende hacer ver al Despacho por el demandante. Es decir, independientemente de si se notificó o no la liquidación de cesantías, la entidad demandante se encontraba en la obligación legal de ajustar el monto liquidado, ya que el mismo no correspondía al salario que realmente devengaba la funcionaria por sus servicios en el exterior.

Por lo anterior, las pretensiones elevadas por el extremo demandante, por lo menos en lo que respeta a mi representado, se tornan irrisorias pues las erogaciones en que tuvo que incurrir el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene fundamento en el actuar doloso o gravemente culposo del señor Hernando Leiva Varón sino en la declaratoria de inexequibiliad de una norma legal, lo cual a todas luces, no tiene relación alguna con las funciones que le fueron legalmente asignadas.

La anterior decisión y razonamiento fue realizado por el Tribunal Administrativo ya mencionado, con apoyo en la Sentencia C-535 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) que declaró inexequible el Artículo 57 del Decreto 10 de 1992, la cual en uno de sus apartes más representativos y relevantes para este proceso indicó que:

> "***Para la Corte, como se ha visto, ese tratamiento no está justificado pues implica un desconocimiento del mandato de igualdad en la formulación del derecho y del principio de primacía de la realidad en las relaciones laborales, principios de acuerdo con los cuales la pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el***

funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le corresponde. *Esta concepción, desde luego, no se opone a que, frente a prestaciones como la pensión de jubilación, la cotización y liquidación se realice respetando los límites máximos impuestos por la ley pues el respeto de tales límites asegura el equilibrio financiero del sistema de seguridad social en pensiones.*" (Negrilla y subraya fuera de texto original)

De lo expuesto hasta el momento debe deducirse, sin mayores elucubraciones, que los motivos que llevaron a que el Ministerio de Relaciones Exteriores conciliara las pretensiones elevadas por la señora Ángela María Correa Moreno ante la Procuraduría 84 Judicial I de Bogotá, fueron relacionados con la inconstitucionalidad de dos Decretos expedidos, uno por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Decreto 10 de 1992) y otro, por el Presidente de la República (Decreto 274 de 2000), pues estos decretos establecían un trato desigual totalmente injustificado[13].

LO PREVIAMENTE EXPUESTO SIGNIFICA QUE LO QUE GENERÓ QUE LAS CESANTÍAS DE LA SEÑORA ÁNGELA MARÍA CORREA MORENO ESTUVIERAN INDEBIDAMENTE LIQUIDADAS, Y LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE DEBIÓ PROCEDER A LA RELIQUIDACIÓN Y CONSECUENTE PAGO DE LA SUMA AHORA REPETIDA CONTRA MI PODERDANTE, FUE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL ACTUAR INCONSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Y NO LA PRESUNTA CONDUCTA OMISIVA DE MI REPRESENTADO.

Lo anterior, a la luz de los requisitos de procedencia de la acción de repetición, significa que el presente proceso iniciado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra erróneamente dirigido, pues debe recordarse que es requisito indispensable para la prosperidad de las pretensiones dentro del presente proceso que exista un nexo causal entre la conducta (gravemente culposa o dolosa) y el daño causado (condena que debe pagar la entidad). Así lo ha establecido el H. Consejo de Estado al afirmar que dentro de los tres elementos que deben estar presentes para que la acción de repetición prospere se encuentra el que indica que:

---

[13] Respecto de la excepción de inconstitucionalidad que debió haberse aplicado consultar un caso idéntico fallado por el H. Consejo de Estado: Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. 24 de junio de 2010. Exp. No. 250002325000200507605 01. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

> "*Que la condena se haya producido* ***a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa*** *de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas*"[14] (Negrilla y subraya fuera de texto original)

En ese sentido, se tiene que si el motivo que llevó a la señora Ángela María Correa Moreno a interponer una solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 84 Judicial I fue la inconstitucionalidad de las normas con fundamento en las cuales se realizó la liquidación de sus cesantías, y no la que pretende atribuir el Ministerio de Relaciones Exteriores a mi poderdante. Es evidente que no puede imputársele ningún tipo de responsabilidad por no satisfacerse los requisitos y jurisprudenciales legales para ello.

Es evidente entonces la total ausencia de un nexo de causalidad entre la presunta conducta omisa de mi representado y la erogación que debió asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la medida en que dicha erogación, **NO** se produjo por la (inexistente) conducta dolosa o gravemente culposa de mi poderdante. La causa eficiente de las pretensiones de la solicitud de conciliación y el correspondiente acuerdo conciliatorio fue exclusivamente la inconstitucionalidad de las normas comentadas y NO la presunta falta de notificación de la liquidación de las cesantías de la señora Ángela María Correa Moreno.

Aunado a lo expuesto en precedencia, se tiene que de haberse liquidado las cesantías en debida forma (de conformidad con lo que establecían los decretos) por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores e incluso, haber mediado ausencia de notificación, en nada se hubiera visto afectada la entidad demandante pues la señora Ángela María Correa Moreno no habría interpuesto solicitud de conciliación extrajudicial contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que sus pretensiones se fundamentaban exclusivamente en la indebida liquidación de sus cesantías por no corresponder al salario realmente devengado durante el tiempo que prestó sus servicios en el exterior.

Al respecto debe atenderse lo establecido por el H. Consejo de Estado en el sentido de:

---

[14] Consejo de Estado, Op. Cit. Pie de Página No. 3.

Con fundamento en la norma en mención, la jurisprudencia del Consejo de Estado estudió los conceptos de culpa grave y dolo, al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición (:...).

"Es clara entonces, la determinación de una responsabilidad subjetiva, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.

Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90) haya estipulado expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, ***sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos****, lo cual, por otra parte, se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que* ***no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal****, lo cual podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública."*[15] (Negrilla y subraya fuera de texto original)

Es más, en reciente jurisprudencia se ha reconocido que la expedición de normas de orden inconstitucional afectan la responsabilidad de la entidad que las haya proferido, cuando dicha expedición de normas inconstitucionales causan perjuicios, como los sufridos por la señora Ángela María Correa Moreno.

En estos casos la entidad responsable de la expedición de los actos viciados con inconstitucionalidad debe asumir, a su propia costa y cargo, los efectos adversos de reparar el daño sufrido por terceros, con ocasión de la inconstitucionalidad de las normas proferidas, independientemente de que el perjuicio se haya causado en vigencia de las normas proferidas, es decir antes de haberse declarado su inconstitucionalidad. A saber:

"Las inquietudes que es preciso formularse son las siguientes: ***¿el reconocimiento que se deriva de la aplicación de una***

[15] Consejo de Estado, Op. Cit. 10.

ley que, con posterioridad, es declarada inexequible –sin que se imprima a la decisión efectos retroactivos– es jurídico*? ¿Cuáles son las razones para llegar a esa conclusión, máxime si estamos frente a una situación objetiva que lesiona un interés legítimo (v.gr. aminoración del patrimonio por pagar un impuesto que es a todas luces inconstitucional), que es personal, cierto y que los mismos jueces han reconocido su falta de fundamento superior, razón que determina su antijuricidad?*

El yerro conceptual se deriva de asimilar e identificar la validez o vigencia de la norma con la juricidad del daño; lo anterior, comoquiera que se entiende equivocadamente que los efectos hacia futuro de la sentencia de constitucionalidad (ex nunc), al no afectar la vigencia pasada de la disposición generan que se tenga el deber de soportar los efectos negativos.

El anterior planteamiento cae por su propio peso, por cuanto de aplicarse ese criterio sin anfibologías o matices, habría que concluir que no es procedente la responsabilidad del Estado por leyes exequibles o constitucionales, o por actos administrativos lícitos. ***En efecto, la sola legalidad de la norma de la que se desprende el daño haría nugatorio los efectos de la responsabilidad (v.gr. una ley declara un inmueble patrimonio histórico y cultural de la nación), ya que la licitud y constitucionalidad de la norma desvirtuarían la posibilidad de predicar la existencia de antijuricidad del daño.***

En otros términos, la constitucionalidad o inconstitucionalidad –es decir, los efectos, la vigencia o la validez de las normas– no son elementos estructurales de la noción de daño antijurídico. Lo que determina la antijuricidad del daño es lo siguiente: i) que esa alteración o afectación negativa a un estado de cosas favorable sea injusta, esto es, que lesione un interés jurídicamente tutelado, lícito y legítimo, y ii) que el ordenamiento jurídico en su conjunto –principios, valores y reglas según la clasificación de Robert Alexy– no le impongan a la persona el deber jurídico de soportarlo.

<u>Una posición contraria, no permitiría que se demandara en reparación directa al Estado por la expedición de una ley que, a criterio del demandante es inconstitucional, y de la cual se depreca la formulación de la excepción de inconstitucionalidad por parte del Juez de lo Contencioso Administrativo, toda vez que la Corte Constitucional, en este hipotético escenario, no se habría pronunciado sobre la validez misma.</u>"[16] (Negrilla y subraya fuera de texto original)

Es decir, si la inconstitucionalidad de las normas proferidas causaron un daño antijurídico a un tercero, aún bajo el lapso de su vigencia, tal y como sucedió en el caso bajo estudio, será la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores los únicos encargados de soportar las reparaciones e indemnizaciones de perjuicios que se le hayan causado dicho tercero. Así las cosas, se tiene que no existe en realidad justificación de ninguna índole para que estos interpongan acción de repetición alguna contra los funcionarios que actuaron bajo el amparo de dichas normas, pues dichas entidades no están habilitadas para trasladar responsabilidades que les son propias.

En atención a lo anterior, se solicita al despacho que no ampare las pretensiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues éste está pretendiendo trasladar ilegalmente a mi representado las consecuencias jurídicas de la inconstitucionalidad de las normas previamente señaladas, circunstancia que a todas luces se encuentra al margen de las funciones asignadas a mi poderdante y que por tal motivo no puede ser fundamento para imputarle responsabilidad patrimonial alguna dentro del asunto de la referencia.

Adicionalmente, no se debe perder de vista que la reliquidación de las cesantías pagadas a la señora Ángela María Correa Moreno, no tiene como fundamento la falta de notificación de la liquidación de cesantías sino la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas en las cuales se amparaba dicha liquidación. **<u>En ese sentido, el argumento esgrimido por la entidad demandante que establece que de haberse notificado la liquidación de cesantías no se hubiera encontrado obligada a pagar</u>**

[16] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. 26 de marzo de 2014. Rad. No. 25000-23-26-000-2003-00175-01 (28.741). C.P. Enrique Gil Botero.

suma alguna por el concepto antes indicado (reliquidación de las cesantías), es a todas luces incorrecto ya que, como se ha expuesto en precedencia, dicho deber nace, no de la ausencia de notificación, sino de la inconstitucionalidad de las normas en que se fundamentó para liquidar las cesantías de la señora Correa Moreno.

En suma, se ve cómo de conformidad con lo señalado en el artículo 77 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al caso de la referencia, mi representado no tiene responsabilidad alguna en las erogaciones que debió asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a la señora Ángela María Correa Moreno, ya que las mismas no tienen origen en el actuar doloso o gravemente culposo en el ejercicio de las funciones que le fueron legalmente asignadas.

Lo anteriormente expuesto, ha sido ampliamente desarrollado por el Honorable Consejo de Estado en sus providencias que estudió un asunto idéntico al que se tramita en el presente proceso, a saber:

> *"No era menester ni posible exigir al demandante el agotamiento de la vía gubernativa para cada uno de los actos mediante los cuales se liquidaron anualmente las cesantías, pues no podía anticiparse el interesado a la nulidad de las reglas que por entonces limitaban su derecho, pues* ***mientras ellas no fueran excluidas del ordenamiento conservaban la presunción de legalidad.*** *Si tiempo después, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa* ***anuló la norma*** *que excluía la Prima Especial de servicios como componente del salario,* ***a partir de ahí se generó la expectativa legítima del ciudadano a exigir que se rehiciera la liquidación***.
>
> (...)
>
> *Pero además, partiendo de la base de que el problema jurídico que se presenta aquí corresponde a la forma de liquidación de las cesantías en donde la entidad lo hizo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 del Decreto 10 de 1992 que ordena "las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones*

equivalentes en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores", norma que, como ya se indicó, fue declarada inexequible mediante sentencia C-535 de 2005.

Conforme a lo antes indicado se precisa que existía un obstáculo de orden legal que no permitía liquidar las prestaciones de los empleados del servicio exterior, con base en lo que devengaban sino sólo de acuerdo con los valores equivalentes a los de la planta interna, de manera que se puede decir, ***como ya lo ha precisado esta Sala, que el derecho a devengar la cesantía liquidada con base en lo devengado en el servicio exterior, SÓLO SURGIÓ, CON CERTEZA, A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LAS SENTENCIA REFERIDA, PUES ANTES, ES EVIDENTE QUE LA ENTIDAD PÚBLICA SE ABSTENÍA DE LIQUIDARLA.***"[17]
(Negrilla, mayúscula sostenida y subraya fuera de texto original)

En atención a lo previamente expuesto, es evidente que el pago realizado por la entidad demandante a favor de la señora Ángela María Correa Moreno por concepto de reliquidación de cesantías, tuvo origen única y exclusivamente en la declaratoria de inexequibiliad del artículo 57 del Decreto 10 de 1992 y no, como erróneamente pretende hacerlo ver el demandante, como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de mi representado en ejercicio de sus funciones. En ese sentido, mal podría argumentarse que cualquier erogación que haya tenido que asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores con ocasión de la expedición de un acto administrativo declarado posteriormente inconstitucional, deba ser repetida contra los funcionarios que aplicaron la norma mientras estuvo vigente, pues ello, sin lugar a dudas, constituiría una violación flagrante y abiertamente desproporcionada de los derechos constitucionales de los funcionarios en comento.

Debe insistirse en que aun cuando el acto de liquidación de las cesantías hubiera sido debidamente notificado, es claro que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el derecho a la reliquidación de las cesantías nació con posterioridad a la fecha en que debió realizarse dicha

[17] Sentencia del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. 04 de noviembre de 2010. Rad. No. 25000-23-25-000-2005-08742-01(1496-09). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

notificación, **no siendo entonces relevante el término de prescripción que alega la entidad demandante como fundamento de sus pretensiones, en la medida en que no existía, de conformidad con las normas vigentes para ese momento**, posibilidad legal de que la señora Ángela María Correa Moreno solicitara una liquidación diferente a la realizada. En efecto, aun si el termino de prescripción trienal se hubiera cumplido, la mencionada ex funcionaria, en atención a la inconstitucionalidad de la norma en la cual se fundamentó la entidad demandante para realizar la liquidación de sus cesantías, mantendría el derecho a solicitar la respectiva reliquidación, valga la redundancia, independientemente de la configuración de la prescripción ya que su derecho, tal como lo señaló el Consejo de Estado, surgió a partir de la expedición de la sentencia de inconstitucionalidad.

Así las cosas, y a manera de colofón, es de suma importancia hacer claridad en que, a pesar de que la liquidación de cesantías hubiera sido debidamente notificada a la señora Ángela María Correa Moreno y que respecto de dichas prestaciones sociales se hubiera configurado el fenómeno de prescripción trienal y el de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ello no es óbice para que la entidad demandante se encontrara en la obligación legal de reliquidar las cesantías pagadas indebidamente a la exfuncionaria, tomando como base el salario realmente devengado por sus servicios en el exterior, pues dicho derecho nació a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 57 del Decreto 10 de 1992, sin consideración alguna de que la prescripción de dichas prestaciones se haya configurado o no.

TERCERA EXCEPCIÓN. INDETERMINACIÓN DEL DAÑO.

Debe considerarse que además de haber ausencia de factor de atribución de responsabilidad (conducta gravemente culposa o dolosa), así como inexistencia de nexo causal, también yerra el demandante con la cuantificación del daño que pretende probar y atribuir a mi representado. En efecto, es evidente que el valor que el demandante pretende atribuir a título de repetición al señor Leiva Varón, no se encuentra debidamente determinado, cuantificado y discriminado pues las pretensiones económicas se establecen de una manera genérica respecto de todos los demandados, lo cual a todas luces es incorrecto pues mal podría entenderse que mi representado deba asumir la totalidad de la suma que el Ministerio de Relaciones Exteriores debió pagar a la señora Ángela María Correa Moreno

por concepto de reliquidación de las cesantías o que responda solidariamente por la misma junto con los demás demandados pues la ley no dispone solidaridad alguna entre estos ya que cada uno será responsable proporcionalmente al daño causado.

Al respecto, es de vital relevancia tener plena claridad respecto del periodo dentro del cual el señor Hernando Leiva Varón ejerció sus funciones, esto es; durante el lapso de tiempo comprendido entre el diez (10) de septiembre de 1991 al diez (10) de febrero de 1992. Es decir, el demandante sin sustento legal alguno pretende que por el ejercicio de funciones públicas por un periodo de cinco (5) meses, mi representado responda por un pago indebido de cesantías que se gestó en un periodo de cerca de trece (13) años, lo cual a todas luces se constituiría en una condena confiscatoria, proscrita por el ordenamiento jurídico colombiano.

A este efecto, es importante aclarar que durante el periodo en que mi representado ejerció su cargo, únicamente se causó un periodo de auxilio anual de cesantías y, por tanto, únicamente debió haberse notificado, por la persona que ostentaba dicha función, la liquidación de las cesantías a la señora Ángela María Correa Moreno correspondientes al año 1991 (Artículo 27 del Decreto 3118 de 1968).

Lo anterior genera que, si en gracia de discusión se admitiera, valga decir bajo un imposible escenario, que mi representado tuviera obligación de reembolsar a la entidad lo que esta tuvo que pagar a la señora Ángela María Correa Moreno, el monto a pagar en ningún caso podría ser el pretendido por el demandante sino el correspondiente a la diferencia entre el monto que el Ministerio de Relaciones Exteriores consignó en 1992 por concepto de cesantías causadas por la anualidad de 1991 y lo que debió haberse consignado en realidad, con base en la reliquidación realizada. Cualquier otro cálculo o condena vulneraría flagrantemente de los derechos de mi poderdante.

En suma, existe una clara indeterminación en las pretensiones elevadas por el extremo demandante lo cual, no demuestra cosa diferente a una indebida sustentación jurídica de las mismas, razón por la cual se encuentran destinadas a fracasar.

Así las cosas, mal podría fallar el juez de conocimiento, si así lo pretendiera, de manera ultra o extra *petita*, en el sentido que la congruencia de la sentencia le impediría dictar una sentencia condenatoria respecto de

pretensiones no solicitadas por el demandante, toda vez que debe recordarse en cuanto a la congruencia de la sentencia (Art. 281 del Código General del Proceso antes 305 del C.P.C) que:

> "***La presentación de la demanda en debida forma es una carga procesal que recae en el demandante y por ello le corresponde soportar las consecuencias de los defectos que ella contenga***, *puesto que no puede el juez, sin atentar contra el principio de congruencia, proceder a modificar lo pedido*, ya que como lo ha sostenido la Sala, *"(...) la facultad que tiene el juez de interpretar la demanda, no constituye un instrumento que pueda, como lo pretende el recurrente,* ***convertirse en el mecanismo idóneo para suplir las falencias de que adolece la misma****, como quiera que el demandante, al momento de su presentación, debe señalar e individualizar no solo los hechos,* ***sino las pretensiones*** *-según lo dispuesto en los artículos 136 y siguientes del Código Contencioso Administrativo-, que aspira le sean reconocidas en el trámite del respectivo proceso judicial*
>
> *De acuerdo con el principio de congruencia de las sentencias, consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el artículo 1° numeral 135 del Decreto 2282 de 1989), la decisión del juez debe resultar armónica, consonante y concordante con los hechos y las pretensiones formuladas en la demanda, por lo tanto el* ***juez debe pronunciarse con fundamento en las pretensiones expresamente planteadas en la demanda y los hechos descritos en la misma, debiendo existir una adecuación o perfecta simetría entre lo pedido y lo resuelto****, que resulta afectada cuando el juez concede más allá de lo pedido (ultra petita); o cuando concede puntos no sometidos al litigio (extra petita), o cuando deja de pronunciarse sobre cuestiones sujetas al proceso (infra o citra petita)."*[18] (Negrillas y subrayas fuera de texto original)

Incluso, si se intentara, en una labor que rayara con la legalidad del proceso, interpretar la demanda por el lector del proceso, en forma alguna podría el juez de conocimiento condenar a mi representado a pagar una suma de dinero calculada de la forma advertida, pues no aparece probado dentro del proceso cuánto fue el monto de cesantías pagadas en 1992 por la anualidad de 1991 de la señora Ángela María Correa Moreno. Aunado a

[18] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. 9 de diciembre de 2011. Rad. No. 11001-03-26-000-2001-00030-01(20410). C.P. Danilo Rojas Betancourth.

ello, tampoco aparece probado dentro del proceso a cuánto asciende la reliquidación de dicha anualidad y mucho menos aparece probado la diferencia entre una y otra o el método utilizado para efectuar la reliquidación ordenada.

Por lo anterior, así como por ausencia de pruebas suficientes para efectuar el cálculo o cuantificación NO SOLICITADA por el demandante, se debe proceder a desechar todas y cada una de las pretensiones del demandante contra mi representado.

CUARTA EXCEPCIÓN. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.

En primer lugar, se hace necesario esbozar unas precisiones previas respecto de la naturaleza de la presente excepción dada la confusión que la misma puede generar. En efecto, si bien el numeral sexto del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que en la audiencia inicial el juez decidirá sobre las excepciones previas planteadas por el demandado así como de las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, prescripción extintiva y falta de legitimación en la causa, ello no implica que esta última tenga la naturaleza de una excepción previa.

Al respecto conviene recordar que el artículo 100 del Código General del Proceso, señala que serán excepciones previas y se deberán tramitar como tal únicamente las siguientes:

- Falta de jurisdicción o de competencia.
- Compromiso o clausula compromisoria.
- Inexistencia del demandante o del demandado.
- Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.
- Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.
- No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.
- Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.
- Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.

- No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.
- No haberse ordenado la citación de otras personas que le ley dispone citar.
- Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada.

En ese sentido, es evidente que la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, a pesar de resolverse en la misma instancia que las excepciones previas, por expresa disposición legal, no es una excepción previa sino de mérito. Es más, no debe olvidarse que la legitimación en la causa ha sido entendida como un presupuesto indispensable para que se profiera una decisión de fondo sobre la relación jurídico-sustancial que se juzga. Al respecto, en reciente jurisprudencia el Honorable Consejo de Estado señaló:

> "*En este sentido y en lo atinente a la legitimación en la causa, la Sala recuerda que la misma se refiere a la posibilidad de que la persona formule o controvierta las pretensiones contenidas en la demanda por ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida en el proceso. Es claro,* ***la legitimación atañe a la relación sustancial que existe entre las partes del proceso y el interés en litigio o que es el objeto de la decisión reclamada****. En cuanto a las diferencias entre la legitmatio ad processum y la legitimatio ad causam, resulta importante realizar las siguientes precisiones: La legitimación en la causa está directamente relacionada con el objeto de la litis, es decir,* ***se trata de un elemento sustancial relacionado directamente con la pretensión****, en ese sentido, no constituye un presupuesto procesal, como sí lo es la legitimación para el proceso, por el contrario,* ***la legitimación en la causa ha sido entendida como un presupuesto para la sentencia de mérito o de fondo, se trata nada más y nada menos que de un requisito para que exista un pronunciamiento de fondo sobre la relación jurídico-sustancial juzgada****. Así pues, la ausencia de legitimación en la causa no genera la nulidad del proceso,* ***lo que enerva es la posibilidad de obtener una decisión sobre el fondo del asunto***"
> (Negrilla y subraya fuera de texto)

Agotadas las consideraciones previas, y teniendo claro que: **i)** dentro de las funciones asignadas a mi representado como Asesor con funciones de Jefe de Personal, no se encontraba la de realizar la notificación de las

liquidaciones de cesantías, **ii)** Que no se encuentra si quiera sumariamente probada la conducta dolosa o gravemente culposa de mi representado en ejercicio de sus funciones como causa del daño que debió reparar el Ministerio de Relaciones Exteriores y **iii)** Que la suma que debió pagar la entidad demandante a la señora Ángela María Correa Moreno, valga la redundancia, no tuvo origen en una conducta dolosa o gravemente culposa del señor Hernando Leiva Varón sino en la declaratoria de inconstitucionalidad de los fundamentos legales que le sirvieron a la entidad demandante para calcular el monto que debía pagar por concepto de cesantías a la señora Ángela María Correa Moreno, es evidente que se configura una **falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de mi poderdante**.

En este punto, resulta ilustrativo traer a colación lo señalado al respecto por el Dr. Carlos Betancur Jaramillo en su libro *"Derecho Procesal Administrativo"*. A saber:

> *"Legitimación por pasiva. La acción deberá instaurarse contra los servidores públicos o ex servidores públicos o contra los particulares que desempeñen funciones públicas,* ***cuando la conducta de los citados, dolosa o gravemente culposa, haya incidido en la responsabilidad de la entidad causante del daño."*** (Negrilla y subraya fuera de texto original)

Así las cosas, se reitera, dado que la conducta de mi representado en ejercicio de sus funciones en ningún momento fue dolosa o gravemente culposa y que la misma de ninguna manera incidió en la erogación que tuvo que asumir la entidad demandante a favor de la señora Ángela María Correa Moreno, es evidente que en el presente asunto se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva y de suyo, se hace necesario que el Despacho desvincule del proceso de la referencia a mi poderdante.

En ese sentido, es importante traer a colación lo señalado respecto de la falta de legitimación en la causa por el Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, en Auto No. 081-01 proferido dentro del expediente T-383-833. A saber:

> *"Acorde con los principios básicos del derecho procesal especialmente con el denominado "legitimidad en la causa por pasiva",* ***las obligaciones jurídicas son exigibles***

***respecto de quien se encuentra expresamente llamado por la Ley o el contrato a responder por ellas**. Así las cosas, para que la acción judicial se abra camino en términos de favorabilidad, **es necesario que –además de que se cumplan otros requisitos- exista una coincidencia de derecho entre el titular de la obligación pretendida y el sujeto frente a quien dicha conducta se reclama**. La incongruencia o falta de identidad entre dichos sujetos, conduce usualmente al proferimiento de sentencias desestimatorias, las cuales, como es obvio, resultan altamente perjudiciales para el demandante.*

(...)

Lo que de común ocurre es que el demandante asuma por responsable de la vulneración a quien de manera inmediata o aparente resalta como tal, sin que en todos los casos dicha coincidencia sea real." (Negrilla fuera de texto original)

Es conveniente recordar que la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Así, en sentencia del 27 de noviembre de 2002, proferida dentro del expediente 70001-23-31-000-1998-3654-01(13654), la Magistrada Ponente, Doctora María Elena Giraldo Gómez de la Sección Tercera del Consejo de Estado, señaló que:

"*Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.*

En cambio la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho

***origen de la formulación de la demanda**, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues **sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda**. En la falta de legitimación en la causa material sólo se estudia si existe o no relación real de la parte demandado o demandante con la pretensión que se le atribuye o la defensa que se hace, respectivamente. **En últimas la legitimación material en la causa o por activa o por pasiva es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado**." (Negrilla y subraya fuera de texto original)*

Posteriormente, la misma Corporación en Sentencia del 17 de junio de 2004 C.P. María Elena Giraldo Gómez. Exp. 14.452. Señaló:

*"**La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado**. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo -no el procesal-; **si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante**".* (Negrilla y subraya fuera de texto original)

A su vez, en Sentencia del 28 de julio de 2011, Expediente 19753, C.P. Mauricio Fajardo, se sostuvo lo siguiente:

"Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante o legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de

hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; ***la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño****.*

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, ***lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar*** *puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o* ***el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores***" (Negrilla y subraya fuera de texto original)

En suma, dado que es evidente que mi representado no tuvo incidencia en la responsabilidad del daño causado por la entidad demandante a la señora Ángela María Correa Moreno, también lo es que el mismo, de conformidad con la normativa que regula el asunto de la referencia, no está llamado a satisfacer de manera alguna las pretensiones elevadas por la parte actora.

Finalmente y como defensa adicional, manifiesto que me acojo a las demás excepciones que resulten probadas dentro del proceso por los demás demandados y que puedan servir a los intereses de la defensa de mi poderdante.

ANEXOS

1. Poder debidamente otorgado por el señor **HERNANDO LEIVA VARÓN.**

COSTAS

Sean a cargo del demandante – La Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo las respectivas agencias en derecho.

NOTIFICACIONES

1. Al señor HERNANDO LEIVA VARÓN a la dirección: Carrera 14 B # 112 – 23 de la ciudad de Bogotá.

2. Como apoderado las recibiré en la Cra. 7 No. 77 - 07 Oficina 501 en la ciudad de Bogotá, D.C.

Atentamente,

JUAN ANTONIO ARAUJO ARMERO
C.C. 1.085.263.640 de Pasto
T. P. 203.646 del C. S. de la J.

449

Señores

JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN

E. S. D.

NATURALEZA: **REPETICIÓN**
REF. EXP.: **11001-3336-722-2014-00109-00**
DEMANDANTE: **NACIÓN–MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
DEMANDADO: **HERNANDO LEIVA VARÓN Y OTROS**
ASUNTO: **PODER**

HERNANDO LEIVA VARÓN, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía 10.963, domiciliado en la ciudad de Bogotá, actuando en nombre propio, mediante el presente escrito manifiesto a usted que otorgamos poder especial, amplio y suficiente al Doctor **JUAN ANTONIO ARAUJO ARMERO**, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía 1.085.263.640 de Pasto, abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 203.646 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación, conteste la demanda, represente mis intereses, actúe en todas las instancias y diligencias del presente proceso y adelante las demás actuaciones y diligencias que hagan parte del objeto de este poder, en relación con el proceso que arriba se relaciona.

Por virtud del presente poder el Doctor **JUAN ANTONIO ARAUJO ARMERO** queda facultado para actuar dentro del proceso y en desarrollo de lo anterior, podrá contestar la demanda, interponer y sustentar recursos, conciliar, transigir, sustituir total o parcialmente, reasumir, desistir, recibir, tachar de falsos documentos y afirmaciones, entregar, así como adelantar cualquier otra actividad encaminada al cumplimiento del presente mandato en defensa de mis intereses, en los términos del Artículo 77 del Código General del Proceso y demás normas que resulten aplicables.

Solicito al señor Juez reconocer personería al Doctor **JUAN ANTONIO ARAUJO ARMERO** para que pueda actuar en los términos del presente mandato.

Del señor Juez,

HERNANDO LEIVA VARÓN
C.C. 10.963

Acepto,

JUAN ANTONIO ARAUJO ARMERO
C.C. 1.085.263.640 de Pasto
T.P. 203.646 del C. S. de la J.

19

EL SUBSCRITO NOTARIO CERTIFICA:
QUE ESTE ESCRITO FUE PRESENTADO
PERSONALMENTE POR
Hernando Leon Vaca
IDENTIFICADO CON C.C. No. 10965
DE [illegible] Y MANIFESTO QUE SU
CONTENIDO ES AUTENTICO Y QUE LA FIRMA PUESTA EN EL
MISMO ES SUYA.
09 NOV. 2015
FECHA:
HUELLA
NOTARIA
JORGE HUMBERTO URIBE ESCOBAR
NOTARIO 72 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

El documento fue presentado personalmente por
Luis Carlos Arroyo Duque
Quien se identificó C C No 1.085.268.680
T P No 202646 Bogotá D C 12 NOV 2015
Responsable Centro de Servicios _____ VHPP

~~450~~
451

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

JUZGADO SESENTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - SECCIÓN TERCERA

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL Y ENTREGA DE TRASLADO DE LA DEMANDA Y AUTO ADMISORIO DE LA MISMA AL DEMANDADO.

EXPEDIENTE: 110013336-722-20140010900

En la fecha de hoy tres (03) de marzo de dos mil dieciséis (2.016) comparece ante ésta Secretaría, la Dra. BERTHA ISABEL SUAREZ GIRALDO, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 31.399.567 de Cartago-Valle, en calidad de apoderada del **Demandado-RODRIGO SUAREZ GIRALDO**, según poder allegado, **a quien se le NOTIFICA DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA de fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil quince (2.015) y se le hace entrega del traslado de la presente demanda y copia del auto admisorio de la misma**, sin el traslado correspondiente

NOTIFICADA: _____

SECRETARIA: _____

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
SECRETARÍA
Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, D.C. Sección Tercera

451
452

Señor
JUEZ 22 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA
E.S.D.

Expediente No. 11001- 3336722201400109-00
Demandado:
Demandante: NACION - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Naturaleza: ACCION DE REPETICION

RODRIGO SUAREZ GIRALDO, mayor de edad y domiciliado en Villavicencio, identificado con la C. C. No. 79.326.133 de Bogotá, actuando en mi calidad de demandado dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito confiero poder especial a la doctora BERTHA ISABEL SUAREZ GIRALDO, abogada en ejercicio portadora de la tarjeta profesional No. 31.724 del Consejo Superior de la Judicatura, quien se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 31.399.567 de Cartago (Valle), para que me represente en el proceso de la referencia.

Además de las facultades inherentes al mandato judicial contempladas en el artículo 77 del Código General del Proceso, mi apoderada queda expresamente facultada para notificarse del auto admisorio de la demanda y de cualquier otra providencia, desistir, transigir, conciliar, recibir y en general para realizar todos los actos que considere necesarios para la mejor defensa de mis intereses dentro del presente proceso, incluyendo solicitar a declaratoria de nulidad de las actuaciones a que haya lugar.

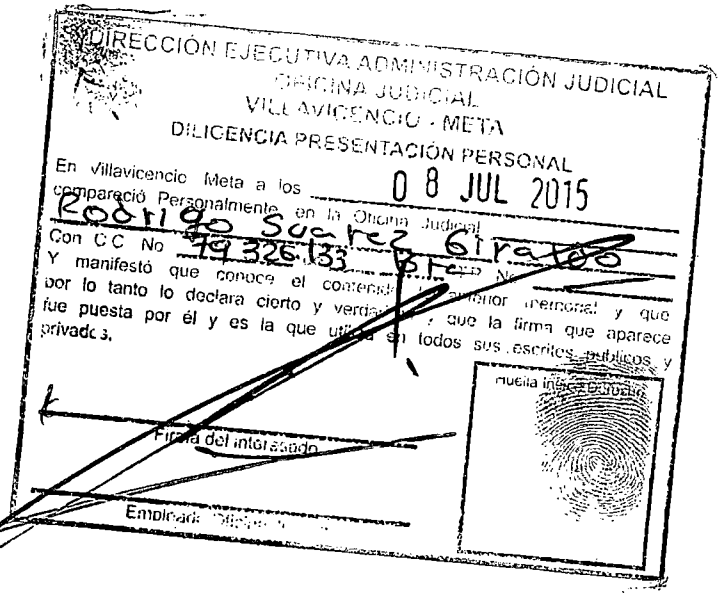
Sírvase reconocerle personería para los efectos y en los términos del poder conferido.

Señora Juez,

RODRIGO SUAREZ GIRALDO
C. C. No. 79.326.133 de Bogotá

Acepto,

BERTHA ISABEL SUAREZ GIRALDO
C. C. No. 31.399.567 de Cartago Valle
T. P. No. 31.724 del C. S. de la J.


DIRECCIÓN EJECUTIVA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
OFICINA JUDICIAL
VILLAVICENCIO - META
DILIGENCIA PRESENTACIÓN PERSONAL
En villavicencio Meta a los 08 JUL 2015
compareció Personalmente en la Oficina Judicial
Rodrigo Suarez Giraldo
Con C C No 79326133 de
Y manifestó que conoce el contenido del superior inmediato y que
por lo tanto lo declara cierto y verdadero y que la firma que aparece
fue puesta por él y es la que utiliza en todos sus escritos publicos y
privados.
Huella índice derecho
Firma del interesado
Empleado

453

000003

Señor
Juez 61 Administrativo de Oralidad
Circuito Judicial de Bogotá
Sección Tercera
E.S.D.

OFICINA DE APOYO
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS

2016 MAR 11 AM 11 06

Ref. Expediente: 11001 33 36 722 2014 00010900
Demandante: NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Demandado: CLARA INES VARGAS SILVA y otros

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

BERTHA ISABEL SUAREZ GIRALDO, mayor de edad y domiciliada en Bogotá, abogada en ejercicio, identificada con la C.C. No.31'399.567 de Cartago (Valle) y portadora de la T.P. No. 31.724, actuando en mi calidad de apoderada judicial del señor RODRIGO SUAREZ GIRALDO, también mayor de edad y con domicilio en Villavicencio (Meta), demandado dentro del proceso de la referencia, según poder a mí conferido y encontrándome dentro de la oportunidad procesal correspondiente, procedo a contestar la demanda en los siguientes términos:

Rod Suárez

A LAS PRETENSIONES

Me opongo a que prosperen por carecer de sustento fáctico y legal. El actor pretende hacer responsable de manera solidaria, sin razón legal y sin que así lo hubiera dispuesto el Comité de Conciliación, a algunos –no a todos- los funcionarios que desempeñaron los cargos de Director de Talento Humano y/o Coordinadores de Nómina y Prestaciones Sociales, o su equivalente, atribuyéndoles a estos, la responsabilidad de notificar la liquidación anual del auxilio de cesantía, sin acreditar que la función estuviera a cargo de ellos, requisito indispensable para establecer el presupuesto subjetivo de la acción de Repetición.

Olvida el demandante dentro de la presente acción que la figura del "salario equivalente" para liquidar las prestaciones de los servidores de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores sociales se declaró inexequible, con posterioridad a la fecha en que mi poderdante dejó de ser director de Talento Humano, y por tanto la actuación de mi poderdante se ciñó a la normatividad vigente.

Adicionalmente omite indicar que los pagos realizados corresponden a sumas adeudadas, por concepto de obligaciones no prescritas y exigibles por sus titulares, de conformidad con el alcance que el Consejo de Estado le dio a la sentencia C-535 de 2005 proferida por la H. Corte Constitucional, por lo que NO se genera un detrimento patrimonial.

Cabe llamar la atención que el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando cambio la normatividad sobre la forma de liquidación del auxilio de cesantías de los funcionarios de la planta exterior, no realizó el reajuste correspondiente, a pesar que el H. Consejo De Estado, ha sostenido que el auxilio de cesantía es una prestación social **UNITARIA** que se consolida a la terminación de la relación laboral y mientras el vínculo laboral subsista puede corregirse la liquidación, sin que tenga efecto definitivo la liquidación anual, como mal pretende el actor.

También omite señalar que las sumas adeudadas no habían sido canceladas porque la normatividad vigente no lo permitía, como bien se indica en el oficio DTH del 24 de

enero de 2012, la Entidad Demandante le manifiesta la señora CORREA MORENO la imposibilidad de reliquidación de sus cesantías, por cuanto las mismas fueron liquidadas conforme a la normatividad vigente (Hecho 4 de la demanda)

En consecuencia, no puede prosperar una acción en la que de manera injusta y arbitraria se pretende hacer responsable a mi mandante de decisiones adoptadas con anterioridad o posterioridad a su vinculación a la entidad o por la omisión en el cumplimiento de obligaciones que se generaron por el cambio de normatividad y que nunca estuvieron en cabeza suya.

Si el actor considera que mi poderdante es responsable de algún pago, no puede fusionar su responsabilidad con la de otros funcionarios que ejercieron el mismo cargo o que fungieron como coordinadores liquidadores de nómina y prestaciones, pues la responsabilidad en las acciones de repetición es individual, por estar supuestamente la obligación de notificar en cabeza de todos, cuando en realidad, no estaba esta obligación asignada a ningún cargo.

Es errado sostener que hay responsabilidad por haber simplemente desempeñado un cargo, pues ello implica una responsabilidad objetiva por la totalidad de lo pagado por la entidad, desconociendo que la acción de repetición requiere la presencia de CULPA GRAVE o DOLO por parte del servidor público, lo que implica ausencia de responsabilidad mancomunada y menos solidaria como se plantea en la demanda.

Siendo pertinente anotar que la Parte Actora omitió analizar la conducta de mi Representado para establecer que la misma, se enmarco dentro del requisito subjetivo de procedibilidad para este tipo de acción, es decir demostrar el dolo y culpa grave en su actuación, como tampoco cumplió con la obligación de establecer que el **daño antijurídico se derivó del proceder de mi mandante**, por cuanto, como se ha afirmado, no estableció que la función estuviera a cargo de mi Poderdante o que este, No hubiera actuado conforme a la normatividad vigente al momento de desempeñarse como Director de Talento Humano.

Adicionalmente, no es coherente que el accionante considere que la responsabilidad de notificar sea de algunos de los que ocuparon los cargos de Director de Talento Humano, y **simultáneamente** de quienes cumplieron funciones de Coordinador de Prestaciones Sociales, Jefe de División de Capacitación de Bienestar y Prestaciones Sociales, Coordinador Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones Sociales, pues si se trata de una única función, no puede ser cumplida simultáneamente por varios servidores o tiene que ser infringida por todos.

Tampoco puede la Parte actora sin análisis alguno y arbitrariamente decidir demandar a mi Poderdante, quien, cumplió todas sus funciones a su cargo y no se encontraba vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores para el 2012 en que el Ministerio niega la Reliquidación de las cesantías de la señora CORREA MORENO, por haberse liquidado conforme a la normatividad vigente.

La señora CORREA MORENO, como lo confiesa la Parte Actora en el hecho 5 de la demanda, " Como consecuencia a la anterior respuesta, la señora ANGELA MARIA CORREA MORENO, convocó a la NACION – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, para solicitar conciliación como requisito de procedibilidad de la eventual demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el oficio DITH del 24 de enero de 2012, en cuanto negó la reliquidación del auxilio de cesantía de la señora CORREA MORENO con base en el salario realmente devengado y por el tiempo en que prestó sus servicios en la planta externa de la entidad ..." es decir, entre

455

los años 1990 a 2003. Cabe resaltar que para la época en que se profirió el oficio en que el Ministerio negó la reliquidación del auxilio de la cesantía, ya había cambiado la legislación, sobre la liquidación de la Cesantía de los Funcionarios de planta externa y a pesar de lo anterior, el funcionario que profirió el mismo, contrario a la normatividad vigente no es llamado dentro de la presente Acción.

En este tipo de Acciones se requiere, por lo menos que el daño Antijurídico se hubiera causado durante el tiempo de vinculación del presunto exfuncionario, pues en este caso en particular, para la fecha en que le fue negada la reliquidación a la funcionaria CORREA MORENO ya se había desvinculado. Lo que hace esta acción temeraria y, así debe declararse.

Ahora bien, si válidamente pudiera admitirse que la función de notificar actos administrativos de liquidación de cesantía anual se encuentra radicada simultáneamente en más de un funcionario de la entidad, la demanda debe incluir a TODOS los que ocuparon esos cargos, desde la fecha en que debía efectuarse la primera notificación y el momento en que se verificó el pago que dio origen a la acción de repetición, pues todos ellos, según la teoría del incoante de la acción, debían haberlos conjuntamente notificado.

En conclusión, no pueden prosperar las pretensiones propuestas porque:

1.- La reliquidación de las cesantías que dio origen al pago que se aduce como sustento de la acción, se hizo como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de las normas que establecían que la base de liquidación de la prestación era el salario asignado a los cargos equivalentes en planta interna y no por la eventual omisión de notificar un acto de liquidación.

2.- No existió **CULPA GRAVE o DOLO,** en la conducta de mi Poderdante, al liquidar el auxilio de cesantía del actor con base en el salario realmente devengado, de acuerdo a la normatividad vigente que sólo fue superada cuando la H. Corte Constitucional dictó la sentencia C-535 de 2005, fecha en la cual mi poderdante ya no era Director de Talento Humano.

3.- La liquidación de la cesantía no podía realizarse de manera diferente a como lo hizo, pues como señala el oficio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del 1° de marzo de 2002, dirigido a la Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores, con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos del Decreto 274 de 2000 que disponían el pago del auxilio de cesantía de los servidores de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores con base en el salario equivalente en planta interna, debía darse aplicación a lo establecido en el decreto 10 de 1992, finalmente declarado inexequible en sentencia C-535 de 2005 del 24 de mayo de 2005

4.- La responsabilidad que se aduce, además de no existir, no está en cabeza de mi Poderdante y no es grupal, ni mancomunada, ni solidaria, como para que se pretenda que mi mandante asuma con los demás accionados, el importe total del pago realizado en cumplimiento de una sentencia, por situaciones generadas antes de su vinculación al Ministerio de Relaciones Exteriores.

5.- El comité de conciliación, no cumplió con la obligación de estudiar y analizar la actuación individualizada de mi mandante, ni de los demás accionados, para señalar en qué consistía el dolo o la culpa grave, de cada uno, que diera lugar a la acción de repetición. Pero si, confiesa que es hasta el Decreto 3355 que se individualiza la

función de notificar personalmente los actos administrativos de carácter particular a los funcionarios de servicio exterior.

6.- El Comité de Conciliación inexplicablemente pasa por alto y no analiza la conducta de quien expidió el acto administrativo que fue anulado en el Proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho, mediante el cual niegan la Reliquidación de las cesantías de la señora CORREA MORENO, que debe ser también llamado a responder dentro de la presente acción. Este funcionario no es llamado, a pesar de que con esta negativa, se agravó el monto de la condena en un momento ya contaban con precedentes jurisprudenciales.

Nótese que el comité nunca supo y en consecuencia nunca pudo determinar quiénes eran los encargados de notificar las cesantías, iniciándose la acción contra personas que ocuparon diferentes cargos y respecto de las cuales el comité **expresamente no estudió su proceder para adelantarla**, amén que ni siquiera se evidencia que al comité se le hubiera informado o este hubiera solicitado el nombre de todos los que desempeñaron los cargos que según el actor tenían la función de notificar la liquidación anual del auxilio de cesantía, para determinar porque se inicia la acción solo contra unos señalados caprichosamente. Y que la función de notificar las liquidaciones solo fue asignada hasta el 2010.

7. La reliquidación de la cesantía solicitada por la señora CORREA MORENO, es viable por cuanto " *el auxilio de cesantía no es una prestación periódica sino unitaria, que solo se concreta al momento de culminar la relación laboral (...)*

La anotada característica, se reitera, obliga al beneficiario inconforme con el reconocimiento de su cesantía a atacar, dentro del término establecido, el acto administrativo que lo efectúa, cuya prestación, se insiste, sólo se consolida al momento de su desvinculación. En el sub judice la demandante al momento de incoar la demanda, se encontraba vinculada con la entidad demandada, es decir que aún no había causado sus cesantías definitivas y por ello no resulta razonable que opere la prescripción...." (Acta 171 del 11 de julio 2011 3.2 Solicitud de Audiencia de Conciliación).

A LOS HECHOS

1.- No es un hecho, es una deducción del apoderado respecto de lo señalado por la normatividad aludida, a la que me remito.

2.- No es cierto.

Tan indeterminada estaba la obligación de notificar la liquidación anual del auxilio de cesantía que la presente demanda se dirige contra algunos de los que desempeñaron el cargo de Director de Talento "o quien haga sus veces", el de Coordinador del Grupo interno de Nómina y Prestaciones y algunos de quienes fungieron como jefe de la División de Capacitación de Bienestar y Prestaciones Sociales.

De hecho no aporta el actor, por no existir, un manual de funciones que radique en el Director de Talento Humano, la función de notificar liquidación anual del auxilio de cesantía. Ni determina, el acto que debía notificarse, ni quien lo produjo.

Solo hasta el año 2010, cuando mi poderdante **NO LABORABA EN LA ENTIDAD**, mediante la Resolución N°4255 del 30 de septiembre de 2010 se radicó en cabeza del Grupo de Nomina y Prestaciones Sociales la función de:

> *"Revisar y **notificar los actos administrativos de liquidación del auxilio anual de cesantía** de los funcionarios del servicio activo y retirado del Ministerio, de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia",*

Lo que evidencia que antes del 30 de septiembre de 2010, **NO SE HABIA RADICADO EN NADIE EN PARTICULAR** y por supuesto tampoco en mi mandante la función de notificar los actos administrativos de liquidación anual de cesantías.

Es decir, no tiene soporte legal afirmar que la función de notificar la liquidación anual del auxilio de cesantía correspondía a quienes desempeñaron indistintamente el cargo de Director de Talento Humano o su equivalente; Coordinador de Nómina y su equivalente; y jefe de la División de Capacitación de Bienestar y Prestaciones Sociales.

Finalmente me remito a la normatividad citada, siendo de anotar que dada la multiplicidad de disposiciones no es viable deducir que todas ellas tengan el mismo sentido en cuanto la determinación de la misma función en cabeza de diferentes cargos. La Parte actora no aporta prueba que radique en cabeza del director de talento humano la obligación de notificar las liquidaciones de cesantía efectuadas y pagadas.

3.- Por tratarse de hechos de terceros ocurridos algunos cuando mi poderdante NO LABORABA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, no me consta y me remito a las documentales que aporte la accionada para acreditar su dicho.

4.- Por tratarse de hechos de terceros ocurrido cuando mi poderdante NO LABORABA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, no me consta y me remito a las documentales que aporte la accionada para acreditar su dicho.

5.- Por tratarse de hechos de terceros ocurridos cuando mi poderdante NO LABORABA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, no me consta y me remito a las documentales que aporte la accionada para acreditar su dicho.

El apoderado de la Demandante, confiesa que la señora CORREA MORENO, solicita la reliquidación de su cesantía teniendo en cuenta el salario realmente devengado y que el eventual proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho es contra el oficio que niega la reliquidación. Proferido cuando mi Poderdante ya se había desvinculado del Ministerio.

6.- Por tratarse de hechos de terceros ocurridos cuando mi poderdante NO LABORABA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, no me consta y me remito a las documentales que aporte la accionada para acreditar su dicho.

7.- Por tratarse de hechos de terceros ocurridos cuando mi poderdante NO LABORABA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, no me consta y me remito a las documentales que aporte la accionada para acreditar su dicho.

En ninguna parte de la conciliación o en su aprobación se afirma, que la obligación de notificar estuviera en cabeza de mi Poderdante y en la de los demandados o que esta fuera la causa de la reliquidación de las cesantías. Y si, como dice el Ministerio estaba la obligación de notificar en el respectivo cargo, debe llamar a todos los que desempeñaron dichos cargos durante el periodo en que la señora CORREA MORENO

perteneció a la planta externa de la Entidad o demostrar que solo estuvo asignada esta función a los cargos durante el periodo que desempeñaron los demandados los mismos.

8.- Por tratarse de hechos de terceros ocurridos algunos cuando mi poderdante NO LABORABA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, no me consta y me remito a las documentales que aporte la accionada para acreditar su dicho.

9. - No es cierto.

En la citada acta 229, se observa que para los miembros del comité, no es claro en cabeza de quien estaba la obligación de notificar los actos administrativos de liquidación del auxilio de cesantía parcial y tampoco se realiza un estudio individualizado de la conducta desplegada por los demandados para determinar si en su conducta hubo dolo o culpa.

En el acta, se señala una serie de cargos en los que supuestamente estaba la obligación de notificar, es por esto se afirma que en cada caso se analizará en cada caso se analizará las personas que se incluirán. Análisis que no se cumplió por parte de los miembros del comité, sino que es el abogado sin ningún análisis inicia la acción contra los demandados.

Es de resaltar que en el acta 229, se señala por parte de los miembros del Comité, para aprobar las conciliaciones extrajudiciales aseveran que la cesantía, es una prestación unitaria y que su prescripción, empieza a contarse a partir de la desvinculación del funcionario. Tesis que misteriosamente es desconocida, por este mismo Comité, cuando se trata de determinar el inició o no, de la acción de repetición que nos ocupa.

Cabe señalar que el Decreto vigente durante la vinculación de mí Representado al Ministerio, era el Decreto 1295 del 2000 derogado por el 110 del 2004 y en el artículo 23 que a su tenor dice:

ARTICULO 23. DIRECCION DEL TALENTO HUMANO. *<Decreto derogado por el artículo 40 del Decreto 2105 de 2001> Son funciones de la Dirección del Talento Humanos las siguientes:*
1. Asesorar al Secretario General y por su intermedio al Ministro, en la formulación de políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos humanos.
2. Ser el órgano para la administración y vigilancia de la Carrera Diplomática y Consular y por ello orientar y coordinar las políticas de ingreso, permanencia, concurso, alternación y todos los asuntos de carácter administrativo relacionados con ella, de acuerdo con el Decreto-ley 274 de 2000.
3. Administrar la planta de personal del servicio exterior y sus archivos, bajo la dirección de la Secretaría General y recomendarle programas de distribución o redistribución de los cargos y de ubicación del personal, de acuerdo con las necesidades del servicio.
4. Cumplir las funciones especiales relacionadas con la administración y desarrollo del personal del Ministerio.
5. Coordinar y programar las actividades de administración del personal, incluidas las relativas a Bienestar Social, salud ocupacional y demás situaciones del personal de planta, y elaborar los correspondientes actos administrativos sobre novedades de personal.
6. Mantener actualizado el manual específico de funciones y requisitos del Ministerio, de acuerdo con las políticas del Ministerio y las normas legales vigentes establecidas sobre estas materias.
7. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las carreras diplomática y consular y administrativa.
8. Atender, por delegación o poder otorgado por el Ministro, todos los procesos que se relacionen con el Ministerio en materia laboral.
9. Responder las acciones de tutela y los derechos de petición que se relacionen con asuntos atinentes a las funciones asignadas a esta Dirección.
10. Absolver las consultas que le formulen las dependencias de la Cancillería y que tengan relación con temas jurídicos de carácter laboral.
11. Custodiar y mantener actualizadas las hojas de vida de todos los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
12. Ejercer la función de Secretaría de la Comisión de Personal de la Carrera Administrativa.
13. Las demás que le sean asignadas y que por su naturaleza le sean afines a las ya descritas.

El ARTICULO 21 del citado decreto establece:

"Son funciones de la Secretaría General las siguientes:
3. Dirigir las actividades de seguridad industrial, la de administración de personal, las relaciones laborales y la planta de personal del Ministerio, de acuerdo con las políticas del Ministerio y las normas legales vigentes establecidas sobre estas materias.

Obligación que de acuerdo al decreto señalado en el Acta de Conciliación corresponde a una obligación de la Secretaria General. (Decreto 1295 del 2000 articulo 23).

Nótese que el Comité guardo silencio sobre el funcionario que respondió negativamente el derecho de petición de la accionante, en el 2013, a pesar de haberse ya, modificado la normativa sobre la forma de liquidación de las prestaciones de los funcionarios de la planta externa. Oficios que son el acto generador de la conciliación.

10.- No es un hecho. Es una relación de normas

HECHOS Y RAZONES DE LA DEFENSA

La acción de repetición requiere un análisis subjetiva de la situación fáctica para establecer si la actuación se enmarca en el concepto de culpa grave o dolo, requisito indispensable para la procedibilidad de este tipo de Acciones.

En primer lugar, debe hacerse un recuento de cómo se realizaba el pago del auxilio de cesantías a los funcionarios de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores:

El artículo 76 del Decreto 2016 de 1968, derogado por el Decreto Ley 10 de 1992, disponía:

> *"Las prestaciones sociales de los empleados del Servicio Exterior se liquidarán y pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del presente estatuto y salvo lo previsto en el artículo 66"*

Así mismo el Decreto Ley 10 de 1992 en su artículo 57 señaló:

> *"Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores."*

El Decreto Ley 10 de 1992, fue derogado por el Decreto 274 de 2000 que en su artículo 66 preceptuaba:

> *"Las prestaciones sociales de los funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular se liquidarán y se pagarán con base en la asignación básica mensual y en los conceptos laborales legalmente reconocidos como factores de salario, que le correspondieren en planta interna."*

La Dirección de Talento Humano, en cumplimiento de las normas vigentes, liquidó y reportó al Fondo Nacional de Ahorro, el auxilio de cesantía de los funcionarios de la planta externa, tomando como ingreso base de liquidación el salario del cargo equivalente en la planta interna.

El artículo 66 del Decreto 274 de 2000 fue declarado INEXEQUIBLE por la Honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia C-292 del 16 de marzo de 2001. Ante la declaratoria de inexequibilidad del artículo 66 del Decreto 274 de 2000, la Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio S.G.E. 2631 de febrero de 2002, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, recursos para el cumplimiento de la citada sentencia, **es decir para pagar las prestaciones sociales de los funcionarios de la planta externa con el salario realmente devengado.** El Ministerio de Hacienda y Crédito Público con oficio del 1° de marzo de 2002, dio respuesta en a la Cancillería en los siguientes términos:

> *"Se observa entonces que al haberse declarado inexequible los artículos 65, 66 y otros del decreto 274 de 2000, bajo la óptica de una lógica jurídica, los Decretos 10 de 1992 y 1111 de 1995, automáticamente gozarían de una presunción de legalidad, por lo que a juicio de esta Dirección sería posible continuar aplicando los descuentos a dichos funcionarios, con base en las equivalencias previstas en cada uno de ellos."*

Con base en la anterior interpretación y por no tener **posibilidad de realizar el pago del auxilio de cesantía de manera diferente por no contar con los recursos para ello,** la Cancillería liquidó y trasladó al Fondo Nacional del Ahorro el valor de las cesantías de los empleados de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores con base en el salario equivalente en la planta interna.

Finalmente el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-535-05 del 24 de mayo de 2005.

Es decir, el pago de la diferencia del auxilio de cesantía a los funcionarios que prestaron sus servicios en la planta externa se debió a que las normas que establecían el procedimiento para liquidar el auxilio de cesantía desde un principio eran inconstitucionales. En otras palabras, notificada o no, se debía *reliquidar el auxilio de cesantías de* los funcionarios de la planta debido a que los Decretos que regulaban la materia debieron ser inaplicados por contrariar la Constitución, al tenor de lo dispuesto por la justicia contencioso administrativa.

El Honorable Consejo de Estado ha señalado que, aun después de estar notificado y ejecutoriado un acto, si sobreviene una expectativa legítima de incremento en el salario base de liquidación de su cesantía anual, **como consecuencia de una decisión judicial de anulación de las normas vigentes sobre la materia el funcionario puede solicitar la correspondiente reliquidación de su cesantía**:

> *"Este criterio, sin embargo, no puede aplicarse de manera general y sin tener en cuenta el contexto en el cual se origina la nueva petición, pues tal y como ocurre en este evento, cuando se ha expedido un acto administrativo anual de liquidación que no fue controvertido ni en sede gubernativa ni judicial, puede asumirse que esta ausencia de controversia obedeció a la seguridad que el beneficiario tenía de que su derecho había sido bien liquidado. Pero si ejecutoriado este acto surge en beneficio del administrado una expectativa legítima de incremento porcentual en la base liquidatoria de su cesantía anual, es decir, un hecho nuevo producto de decisiones judiciales de anulación de normas, que resulta aplicable a su situación y lo faculta para solicitar a la administración la respectiva reliquidación." Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, proceso 25000-23-25-000-2005-05159-01(0230-08), sentencia del 4 de agosto de 2010.*

La reliquidación del auxilio de cesantía concedida a los funcionarios de la Cancillería es producto de la anulación de unas normas que en su momento se consideraron legalmente vigentes y posteriormente la Corte Constitucional anuló y es claro el Consejo de Estado al afirmar, que así la liquidación de cesantías esté ejecutoriada, cuando surge una nueva expectativa como consecuencia de una decisión judicial, puede el empleado solicitar su reliquidación.

Es decir, la reliquidación de las cesantías de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, no fue consecuencia de la no notificación del acto administrativo que las liquidó y traslado al Fondo Nacional del Ahorro, sino que se debió a que con la declaratoria de inexequibilidad del artículo 57 del Decreto 10 de 1992, mediante Sentencia C-535-05 del 24 de mayo de 2005 de la Corte Constitucional, surgió un beneficio para los servidores.

En este orden de ideas nunca puede existir culpa grave y mucho menos dolo en la actuación de los funcionarios que actuaron en la liquidación de la cesantía de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a la normatividad vigente.

Ahora bien, establecido la legalidad de las actuaciones de mi poderdante, la ausencia de daño patrimonial y que la reliquidación del auxilio de cesantía es consecuencia legítima de unas decisiones judiciales, recordemos otra vez, que la cesantía es una prestación unitaria causada durante todo el tiempo que dure la relación laboral y se obtiene en forma definitiva solamente por el retiro del servicio del empleado público. La cesantía definitiva solamente debe pagarse al momento de la desvinculación laboral, sobre el particular la jurisprudencia se ha manifestado de la siguiente manera:

> *"**La cesantía no es una prestación periódica a pesar de que su liquidación se haga anualmente; es prestación unitaria y cuando como en este caso se obtiene en forma definitiva por retiro del servicio,** el acto que la reconoce pone fin a la situación si queda en firme. **La cesantía debe pagarse al empleado al momento de su desvinculación laboral y excepcionalmente antes de ésta, cuando se den las causales específicas de pago parcial.** El acto de liquidación por tanto es demandable ante lo contencioso administrativo, observando las normas que en materia de caducidad de la acción señalan un terminó de 4 meses contados a partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso (inciso 2°. Artículo 136 del C.C.A.) ".Consejo de Estado, Sección II, Subsección "A", Expediente No 25000232500020030452301 (0808-07) de noviembre 11 de 2009*

Es muy importante precisar que la cesantía es una prestación unitaria, por lo tanto se obtiene en forma definitiva en el momento del retiro del servicio del empleado, la liquidación anual no rompe el principio de unidad de esta prestación social. La Ley y la jurisprudencia han determinado que ni siquiera el pago parcial puede ser causal de rompimiento del principio de unidad, menos se puede pensar que una simple liquidación anual de cesantía sin pago pueda tener carácter de cesantía definitiva.

Al desaparecer del ordenamiento jurídico las normas que establecían el sistema especial de liquidación de la cesantía de los funcionarios de la planta del Ministerio de Relaciones Exteriores, se permitió a los citados funcionarios reclamar legalmente la diferencia.

En este orden de ideas la conducta de los funcionarios de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores no ha generado ningún daño antijurídico ni incurrieron en culpa grave, o dolo, por cuanto conducta realizada no tuvo la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio.

Al respecto se pronunció el Consejo de Estado, en sentencia 25000-23-25-000-2005-05159-01(0230-08), del 4 de agosto de 2010, sobre los efectos en el auxilio de cesantía cuando se anula una norma, señalando lo siguiente:

> *" Es decir que, **existiendo un hecho nuevo que genera una expectativa legítima de mejoramiento de un derecho laboral económico, el administrado una vez agotada la vía gubernativa queda facultado para acudir a la jurisdicción en acción de nulidad y***

restablecimiento del derecho para que sea la jurisdicción de lo contencioso administrativo la que decida sobre la viabilidad de acceder o no a su pretensión de reliquidación, tal y como ocurrió en este evento.

En este orden de ideas concluye la Sala que, la declaratoria de nulidad de los artículos 7 del Decreto 50/98; 7 del Decreto 38/99 y 8 del Decreto 2729/2001 no afectó los salarios de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, porque en ellos se consideró que no se había contemplado un sobresueldo del 30%, sino que este porcentaje hacía parte del salario, es decir, éste último no se redujo.

Ahora, frente a los efectos propios de las nulidades en reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha precisado que los fallos de nulidad producen efectos "extunc", es decir, desde el momento en que se profirió, el acto o la norma anulada, esto es, que por tener efectos retroactivos las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban, antes de la expedición del acto o antes de la vigencia de la norma anulada, como si no hubiera existido."

Establecida claramente la situación fáctica, en particular con el carácter unitario de la prestación social, debemos detenernos a analizar el concepto de culpa.

El Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores en varias oportunidades ha conceptuado en casos similares al que nos ocupa en los que los pagos de prestaciones sociales se realizaron con base en el salario equivalente, considerando que no existe merito jurídico para iniciar Acción de Repetición contra los funcionarios de la Cancillería que actuaron en estos casos, porque no hay prueba de que hayan incurrido en dolo o culpa grave. Basta citar las reclamaciones presentadas por los funcionarios demandantes doctor FABIO EMEL PEDRAZA PEREZ y doctor GUILLERMO ORJUELA BERMEO en las que el Comité de Conciliación al estudiar la procedencia de la Acción de Repetición señaló:

"La Oficina Jurídica con soporte en el presente estudio jurídico, recomienda a los miembros del Comité de Conciliación que en el caso del pago de la condena judicial del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho- Radicado N° 2006-06302-01, no hay mérito jurídico para iniciar Acción de Repetición contra funcionario o ex funcionario alguno del Ministerio de Relaciones Exteriores, ***porque no existe prueba ni siquiera sumaria del dolo o culpa grave en la actuación administrativa para iniciar la Acción de Repetición, pues como se dijo en precedencia, el Director del Talento Humano y la Secretaria General de la época, emitieron los actos administrativos bajo principio de razonabilidad e interpretación de las normas aplicables*** *(Decreto 10 de 1992 y Decreto 274 de 2000)."* (Acta N° 170 del 20 de junio de 2011)

En el asunto que nos ocupa, no se señala por qué los actos de mi poderdante, igualmente realizados bajo el principio de razonabilidad e interpretación de las normas aplicables, se convierten en dolo o culpa grave.

Al respecto debemos definir en qué consiste la culpa grave. El Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, define la "culpa grave o lata", como:

"El descuido o desprecio absoluto en la adopción de las precauciones más elementales para evitar un mal o daño; que en el Derecho romano se caracterizaba por la negligencia en que no incurriría el administrador más torpe; como interrumpir una prescripción estando presente, dejar el dinero al alcance de extraños, romper un documento sin haberlo leído, no hacer ninguna reparación en los edificios necesitados de ellas, ni las labores que las cosechas precisen. Esta especie de culpa se aproxima bastante al dolo" (Subrayado fuera de texto). Es decir casi que se debe advertir que la culpa grave, como sublime torpeza, es encontrar que la conducta desplegada carece de cualquier clase de precaución."

Por su parte el artículo 63 del Código Civil señala:

"Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo", respecto al dolo la misma

norma dispone "El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro".

En resumidas cuentas, la acción de repetición procede cuando el servidor público, actuando con intención o de manera absolutamente descuidada, genera un daño que debe reparar el Estado.

Se concluye pues, que no puede haber culpa grave o dolo en quienes ***emitieron los actos administrativos bajo principio de razonabilidad e interpretación de las normas aplicables*** *(Decreto 10 de 1992 y Decreto 274 de 2000)*, *como indicó el* Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores en el acta 170 del 20 de junio de 2011.

Los administrados debemos soportar la carga de las actuaciones de las autoridades, pero estas tienen que ser proporcionales y estar acordes con el ordenamiento vigente. No cualquier pago da lugar a una acción de repetición, el comité de conciliación tiene que establecer la procedencia de la acción, a través del análisis de la conducta sometida a su estudio, pues de lo contrario incurre en abuso del derecho.

Los demandados en estas temerarias acciones, sufren graves perjuicios. Además de los honorarios profesionales y de los desplazamientos, el desgaste que representa atender la multitud de demandas que de manera ligera han sido presentadas por el Ministerio, en las que el comité ni siquiera ha determinado contra quien debe ser dirigida. Es totalmente inadmisible que los argumentos con los que se niega una conciliación, a renglón seguido en la misma acta, se desconozcan para iniciar una acción de repetición.

En el asunto que nos ocupa, hay unos puntos sobre los que hay total claridad:

- Mi poderdante mientras fue Director de Talento Humano liquidó el auxilio anual de cesantía de los servidores de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, con base en unas normas que fueron declaradas inexequibles con posterioridad a su retiro.

- Realizar la liquidación anual de cesantías de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, con base en el salario del cargo equivalente en la planta interna, el comité de conciliación consideró que no constituía dolo o culpa grave, pues los actos se emitieron bajo el principio de razonabilidad e interpretación de las normas aplicables.

- Que mediante la sentencia C-535 de 2005 se declararon inexequibles las normas con base en las cuales mi poderdante liquidó anualmente el auxilio de cesantía, no tuvo efecto retroactivo.

- Igualmente hay claridad tanto en la sentencia como en el concepto que el contratista apoderado emite para negar una conciliación, en el sentido que **EL AUXILIO DE CESANTIA ES UNA PRESTACION SOCIAL UNITARIA QUE NO SE CONSOLIDA SINO A LA FINALIZACION DEL VINCULO LABORAL Y A QUE LAS AUTORIDADES JUDICIALES CONSIDERARON QUE SE DEBIA "INAPLICAR" EL ARTICULO 57 DEL DECRETO 10 DE 1992.**

- También es claro que el auxilio de cesantía no es una prestación periódica sino unitaria, que solo se concreta al *momento de culminar la relación laboral*, pues es el argumento que invoca para conceptuar sobre la improcedencia de unas

conciliaciones, como consta en la misma acta que el actor presente como prueba y cuya parte pertinente me permito transcribir:

"De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho de este estudio jurídico, como apoderado(a) del Ministerio de Relaciones Exteriores me permito recomendar a los miembros del Comité de Conciliación del Ministerio que NO SE CONCILIE la reclamación de reliquidación de las cesantías dla señora MARTHA LUCIA GONZALEZ RODRIGUEZ quien trabajo en planta externa en los periodos comprendidos entre el 8 de septiembre de 1988 hasta el 22 de junio de 2000 habida cuenta que frente a la reliquidación de los aportes a las cesantías operó el fenómeno de la prescripción trienal, en razón a que el titular del derecho no lo ejerció dentro de los plazos que la ley otorga, ***es decir tres (3) años contados a partir de la desvinculación de la entidad, lo que traduce en la pérdida del derecho a reclamar lo pretendido"*** *(punto 3.8 del folios21 y 22 del acta aportada en la demanda).*

En cuanto al concepto de culpa grave, es evidente que la conducta de mi poderdante no se enmarca en ese concepto, pues como se había señalado por el comité de conciliación en el acta 170 del 20 de junio de 2011, al estudiar situaciones iguales a la contemplada en la presente demanda, no hay culpa o dolo del ".. ***Director del Talento Humano y la Secretaria General de la época, emitieron los actos administrativos bajo principio de razonabilidad e interpretación de las normas aplicables*** *(Decreto 10 de 1992 y Decreto 274 de 2000)."*

Para que proceda la acción de repetición, no basta simplemente que exista un daño. Es un daño que tiene que ser antijurídico, es decir, contrario a derecho que sea consecuencia de una grosera violación de una obligación legal, pero que además la haya realizado con culpa grave o dolo. En el asunto que nos ocupa, estos requisitos brillan por su ausencia.

Como se ha dicho hasta la saciedad, mi poderdante liquidó anualmente el auxilio de cesantía de los empleados de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con la normatividad vigente al momento de su liquidación, normatividad que posteriormente la Corte Constitucional declaró inexequible sin efecto retroactivo, pero que la jurisdicción Contencioso Administrativa ordenó inaplicar y reliquidar las liquidaciones realizadas, que no habían prescrito por tratarse de una prestación unitaria que se consolida a la terminación de la relación laboral.

- No se ha establecido por el Comité de Conciliación, ni en la conciliación prejudicial realizada dentro del requisito de procedibilidad de un eventual proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ni en el presente proceso que la obligación de Notificar a los funcionarios estaba en cabeza de mi Poderdante.

- No se ha establecido que el hecho generador del pago de la reliquidación del auxilio de cesantía, sea LA NO NOTIFICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS de liquidación parcial de la Cesantía, sino, el NO pago de todos los factores salariales devengados por los funcionarios de la planta externa del Ministerio, por disposición legal.

En conclusión, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de manera arbitraria y causando enorme perjuicio a mi poderdante, a través de su contratista instaura una temeraria acción de repetición, sin haber siquiera analizado de manera individual la conducta de los demandados, contrariando no solo la jurisprudencia vigente, sino los mismos antecedentes del comité.

EXCEPCIONES

INEXISTENCIA DE DOLO O CULPA GRAVE

La acción de repetición contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, procede cuando el servidor actuó con "dolo o culpa grave" que define Cabanellas como:

> *"El descuido o desprecio absoluto en la adopción de las precauciones más elementales para evitar un mal o daño; que en el Derecho romano se caracterizaba por la negligencia en que no incurriría el administrador más torpe; como interrumpir una prescripción estando presente, dejar el dinero al alcance de extraños, romper un documento sin haberlo leído, no hacer ninguna reparación en los edificios necesitados de ellas, ni las labores que las cosechas precisen.* ***Esta especie de culpa se aproxima bastante al dolo****" (Subrayado fuera de texto). Es decir casi que se debe advertir que la culpa grave, como sublime torpeza, es encontrar que la conducta desplegada carece de cualquier clase de precaución.*

El artículo 63 del Código Civil define la culpa grave en los siguientes términos:

> *"Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo", respecto al dolo la misma norma dispone "El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro".*

En resumidas cuentas, la acción de repetición procede cuando el servidor público, actuando con intención o de manera absolutamente descuidada, genera un daño que debe reparar el Estado.

Sobre este punto y habiendo aclarado en qué consiste el dolo o la culpa grave, al tenor de lo establecido en la ley y la doctrina, me remitiré a lo conceptuado por el comité de conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores al analizar la responsabilidad por el pago de prestaciones sociales con base en el salario equivalente, concepto que hoy inexplicablemente el actor desconoce:

> *"La Oficina Jurídica con soporte en el presente estudio jurídico, recomienda a los miembros del Comité de Conciliación que en el caso del pago de la condena judicial del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho- Radicado N° 2006-06302-01, no hay mérito jurídico para iniciar Acción de Repetición contra funcionario o ex funcionario alguno del Ministerio de Relaciones Exteriores,* ***porque no existe prueba ni siquiera sumaria del dolo o culpa grave en la actuación administrativa para iniciar la Acción de Repetición, pues como se dijo en precedencia, el Director del Talento Humano y la Secretaria General de la época, emitieron los actos administrativos bajo principio de razonabilidad e interpretación de las normas aplicables*** *(Decreto 10 de 1992 y Decreto 274 de 2000)."(Acta N° 170 del 20 de junio de 2011)*

Ahora bien, en el asunto que nos ocupa, no dijo el Comité de Conciliación, cómo una conducta realizada **bajo principio de razonabilidad e interpretación de las normas aplicables** se transformó en dolo o culpa grave, cuando se trata de los aquí demandados.

En consecuencia, como el comité de conciliación JAMAS indicó y menos analizó cual fue la culpa grave o el dolo en que incurrió mi poderdante, no puede válidamente adelantarse la actuación, pues es requisito indispensable para que se proceda una acción de repetición QUE EL COMITÉ DE CONCILIACION determine la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa desplegada por el servidor público contra

quien se inicia la acción, evaluación que en el asunto que nos ocupa brilla por su ausencia.

AUSENCIA DE ESTUDIO POR PARTE DEL COMITÉ DE CONCILIACION DE LA CONDUCTA DE LOS DEMANDADOS

Se configura esta excepción como consecuencia de la actuación irregular del actor, quien atribuyéndose facultades que no le corresponden, en abierta contradicción de lo dispuesto por el comité de conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores que dispuso estudiar INDIVIDUALMENTE la conducta de quienes debían notificar la liquidación anual del auxilio de cesantía de los empleados de la planta externa, demanda de manera solidaria a algunos de los que desempeñaron los cargos de Director de Talento Humano y Coordinadores del Grupo de Nóminas, o sus equivalentes.

En efecto, por exigir la Ley 678 de 2001 para efectos de la iniciación de una acción de repetición la presencia de dolo o culpa grave, es requisito necesario que haya un juicio de valor por parte de la autoridad que tiene atribuida la facultad de incoar la acción de repetición –el comité de conciliación-, para que de manera individual se analice la conducta de cada uno de los servidores a quienes se les atribuye la conducta dolosa o gravemente culposa y una vez determinada la específica conducta, iniciar de manera INDIVIDUAL la acción respectiva si a ello hubiere lugar. Para que el funcionario o exfuncionario demandado pueda desvirtuar los hechos en que se basa la presunción de su responsabilidad.

A pesar de que en el caso que nos ocupa, en la RECOMENDACIÖN, se señala que " ... *la necesidad de analizar e individualizar cuáles son los funcionarios de la Entidad que incurrieron presuntamente en el error de falta o indebida notificación de los actos administrativos que liquidaban cesantías...."* Se pasa por hecho esta recomendación pues en ningún momento se determina cual era la función que estaba en cabeza de mi Poderdante.

Por lo que debemos solicitar al demandante que por favor nos indique dónde estableció el comité de conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores, que función estaba en cabeza de mi Poderdante, la norma que obligaba a mi poderdante y a ninguna otra persona a notificar la liquidación del auxilio de cesantía que origina esta acción?, así como dónde está el análisis realizado por el comité para establecer la culpa grave o el dolo de la conducta?.

Sin este análisis el Ministerio dirige su demanda contra varias personas por el sólo hecho de haber ocupado un cargo y sin determinar exactamente qué le censura a cada uno de ellos, pretende que todos respondan por hechos acontecidos, antes y después de que ejercieron el cargo.

Es totalmente violatorio del derecho de defensa, que a una persona la hagan responsable de presuntamente *"en el error de falta o indebida notificación"* de un acto administrativo y no se determine el acto específico que debía notificar, ni la condición de tiempo en el que debía realizarlo. Pero esta irregularidad palidece frente al no establecimiento de quien debía cumplir la actuación censurada, el director de talento humano? El coordinador de nómina?, cuál de ellos? No lo determina la demanda, porque no existe el análisis individual de la conducta de cada uno de los demandados como indica la ley.

Pero más grave aún, si aceptáramos en gracia de discusión, que la función de notificar el acto que liquidó las cesantías debían cumplirla simultáneamente los que desempeñaban los cargos de Director de Talento Humano y Coordinadores de Nómina, ¿cuál de los muchos demandados tenía que hacerlo? ¡No lo dice el actor! El demanda a quienes quiere, sin analizar la conducta de los demandados, diciendo que ellos deben pagar una suma de dinero pero sin indicar, por qué, en qué proporción o por qué son solo ellos y no todos los que desempeñaron el cargo.

Finalmente, qué norma obliga a mi mandante a responder por pagos realizados años anteriores o posteriores a su vinculación al Ministerio de Relaciones Exteriores?

El comité de conciliación, no estudió la situación individualizada de mi mandante, para señalar en qué consistía el dolo o la culpa grave que diera lugar a la acción de repetición, limitándose a delegar lo indelegable, en los apoderados de la entidad quienes adicionalmente se extralimitan al demandarlos conjuntamente, en contravía de la expresa instrucción del comité.

En consecuencia, como no existe ese análisis por parte del comité de conciliación, no puede prosperar la acción pues no se ha estudiado la conducta individual de cada uno de los vinculados para poder establecer si verdaderamente hubo culpa grave o dolo, pues como ha sostenido reiteradamente el H. Consejo de Estado, no cualquier pago da lugar a acción de repetición.

AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN EL MARCO DE LA ACCION DE REPETICION

Presenta su demanda el actor solicitando a la Justicia Contenciosa Administrativa, declarar responsables a la totalidad de los demandados por la totalidad de la suma cancelada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia de la Conciliación Extrajudicial realizada dentro del cumplimiento del requisito de procebilidad de un eventual proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO en que se solicita la decretoria de nulidad de un oficio que niega la reliquidación de la cesantía, de un funcionario durante el tiempo que prestó sus servicios en la planta externa de dicho Ministerio, olvida el comité de conciliación, que en el error de *falta o indebida notificación* de un acto administrativo que no determinan, no pueden incurrir al tiempo varios funcionarios en el mismo error, como lo pretende el Ministerio, por ser precisamente la determinación del funcionario a cargo de quien está la obligación o función incumplida, requisito indispensable para la determinación de la responsabilidad.

No termina allí la irregularidad. Sin invocar fundamento legal alguno y olvidando lo dispuesto por el artículo 1568 del Código Civil, de manera inexplicable el actor decide que mi patrocinado es patrimonialmente responsable por las conductas supuestamente dolosas o gravemente culposas de los demás demandados por conductas acaecidas con anterioridad o posterioridad a su vinculación al Ministerio.

Tan incoherente es la demanda, que el actor radica en cabeza de cada uno de los demandados la obligación de notificar la liquidación y traslado al Fondo Nacional del Ahorro que anualmente se hizo del auxilio de cesantías de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestaron su servicio en la planta externa, pero a pesar de considerar que era una obligación individual derivada del ejercicio de un cargo, dirige la demanda contra varios que ni siquiera trabajaron en la misma época para hacerlos solidariamente responsables del pago por hechos acaecidos cuando ni

siquiera trabajaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y contra personas que desempeñaron diferentes cargos durante el mismo periodo.

La ley establece que la solidaridad debe "*estar expresamente declarada en todos los casos en que no lo dispone la ley*". En consecuencia, como el demandante no indica en qué norma se fundamenta para establecer la solidaridad, ni hay ningún acto en que los demandados acepten asumir solidariamente una obligación, no puede prosperar la demanda.

El comité no sabía quiénes eran los encargados de notificar las cesantías, iniciándose la acción contra personas respecto de las cuales el comité **expresamente no estudió su proceder para adelantarla.**

NO ASIGNACION DE LA FUNCION DE NOTIFICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION ANUAL DE CESANTIAS A MI MANDANTE

Al observar los manuales de funciones y los certificados donde constan las funciones asignadas a mi poderdante, en ninguno se encuentra expresamente delegada la función de notificar la liquidación del auxilio de cesantía a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Falencia, que el Ministerio solamente subsana hasta el año 2010, mediante Resolución N°4255 del 30 de septiembre de 2010, en que asigno la función de:

> *"Revisar y notificar los actos administrativos de liquidación del auxilio anual de cesantía de los funcionarios del servicio activo y retirado del Ministerio, de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia",* al Grupo de Nomina y prestaciones Sociales.

Es absolutamente claro que antes del 30 de septiembre de 2010 esta función no estaba asignada a ningún funcionario, situación de pleno conocimiento de la demandante que hoy quiere endilgar a quienes como mi poderdante, ocuparon diferentes cargos que no tenían asignada esta función.

Lo anterior quiere decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores delegó la función de notificar los actos administrativos de liquidación del auxilio de cesantía, **mucho tiempo después** de haber sido condenado en varias oportunidades a reliquidar el auxilio de cesantía de los funcionarios de la planta externa, tomando como salario base de reliquidación el sueldo realmente devengado en divisa.

Por lo que con la presente acción, el Ministerio, se lleva de tajo, su realidad administrativa laboral y lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Nacional, a los servidores públicos solo les está, permitido hacer lo que la Constitución y la Ley les ordene, so pena de incurrir en omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones:

> *"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones."*

En este orden de ideas, no se puede exigir a mi mandante el cumplimiento de una obligación que no le está expresamente asignada al cargo que desempeña y mucho menos, hacerlo responsable por **pagos acaecidos mucho antes de que se vinculara a la entidad** y no ocasionados por falta de la notificación de los actos administrativos de liquidación anual de cesantías, si no al cumplimiento de obligaciones a su cargo, no prescritas y exigidas por sus titulares.

En conclusión, como se establece con el plenario arrimado con la demanda, la función de notificar la liquidación anual del auxilio de cesantía NO ESTABA ASIGNADA A NINGÙN CARGO EN PARTICULAR, y que sólo hasta el año 2010, cuando mi poderdante ya no laboraba en la Entidad, el Ministerio subsana su falencia, determinando que esta función la realizaría el grupo de nómina y prestaciones sociales, lo que evidencia la temeridad de la demanda dirigida contra algunos de los que desempeñaron el cargo de Director de Talento "o quien haga sus veces" y vincular en la misma demanda a algunas de las personas que desempeñaron cargos de Coordinador del Grupo interno de Nómina y Prestaciones y de jefe de la División de Capacitación de Bienestar y Prestaciones Sociales.

CONDENA A LA DEMANDANTE POR CAUSAS DIFERENTES A LA FALTA DE NOTIFICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION ANUAL DE CESANTIAS

La Entidad Demandante, pasa por alto, la normatividad para la liquidación de las prestaciones sociales de los empleados del Servicio Exterior, el artículo 76 del Decreto 2016 de 1968, derogado por el Decreto Ley 10 de 1992, disponía:

> *"Las prestaciones sociales de los empleados del Servicio Exterior se liquidarán y pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del presente estatuto y salvo lo previsto en el artículo 66."*

Así mismo el Decreto Ley 10 de 1992 en su artículo 57 señaló:

> *"Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores."*

El Decreto Ley 10 de 1992, fue derogado por el Decreto 274 de 2000 que en su artículo 66 preceptuaba:

> *"Las prestaciones sociales de los funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular se liquidarán y se pagarán con base en la asignación básica mensual y en los conceptos laborales legalmente reconocidos como factores de salario, que le correspondieren en planta interna."*

También omitió que los funcionarios de la Dirección de Talento Humano, en cumplimiento de las normas vigentes sobre la materia, liquidaron y reportaron en sus oportunidades legales al Fondo Nacional de Ahorro, el valor del auxilio de la cesantía parcial de los funcionarios de la planta externa, tomando como ingreso base de liquidación el salario del cargo equivalente en la planta interna, en cumplimiento a la normatividad vigente en la época.

El artículo 57 del Decreto 10 de 1992, fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-535-05 del 24 de mayo de 2005, y es en virtud de este pronunciamiento que nace el derecho a solicitar la reliquidación del auxilio de cesantía, así como la obligación de pago de la diferencia del auxilio de cesantía a los funcionarios que prestaron sus servicios en la planta externa.

En ningún momento el pago obedeció a la falta de notificación de los actos administrativos de liquidación anual de cesantías, como se afirma por el abogado

contratista del Ministerio de Relaciones Exteriores si no al pago de una obligación a cargo de la Entidad Demandante en su calidad de Empleador.

En conclusión, la reliquidación de las cesantías de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, no fue consecuencia de la no notificación del acto administrativo que las liquidó y traslado al Fondo Nacional del Ahorro, sino que ésta, se debió a que con la declaratoria de inexequibilidad del artículo 57 del Decreto 10 de 1992, surgió un beneficio para los servidores, extraño a lo preceptuado en la materia, durante la vinculación de mi representado.

No hay que olvidar que el Honorable Consejo de Estado ha señalado que, aun después de estar notificado y ejecutoriado un acto, si sobreviene una expectativa legitima de incremento en el salario base de liquidación de su cesantía anual, **como consecuencia de una decisión judicial de anulación de las normas vigentes sobre la materia el funcionario puede solicitar la correspondiente reliquidación de su cesantía**:

> *"Este criterio, sin embargo, no puede aplicarse de manera general y sin tener en cuenta el contexto en el cual se origina la nueva petición, pues tal y como ocurre en este evento, cuando se ha expedido un acto administrativo anual de liquidación que no fue controvertido ni en sede gubernativa ni judicial, puede asumirse que esta ausencia de controversia obedeció a la seguridad que el beneficiario tenía de que su derecho había sido bien liquidado. Pero si ejecutoriado este acto surge en beneficio del administrado una expectativa legítima de incremento porcentual en la base liquidatoria de su cesantía anual, es decir, un hecho nuevo producto de decisiones judiciales de anulación de normas, que resulta aplicable a su situación y lo faculta para solicitar a la administración la respectiva reliquidación." Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, proceso**25000-23-25-000-2005-05159-01(0230-08),** *sentencia* ***del 4 de agosto de 2010, Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE.***

Nótese que la respuesta negativa por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores al derecho de petición formulado por la señora CORREA MORENO en el 2012, a pesar de haberse ya, modificado la normativa sobre la forma de liquidación de las prestaciones de los funcionarios de la planta externa, es el acto generador del eventual PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO que dio origen a la conciliación, base del pago realizado al Actor por el que pretenden responda mi Poderdante.

Solicito se ordene vincular al funcionario que profirieron el oficio en el que la Entidad Demandante le niega la señora CORREA MORENO la reliquidación de sus cesantías, por cuanto las mismas fueron liquidadas conforme a la normatividad vigente

Para lo que solicito se conmine a la Parte actora para que con destino al proceso de los nombres de los funcionario (s) que profirieron el citado oficio.

AUSENCIA DE DAÑO

No hay fundamento legal para la presente acción incoada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en contra mi representado, por cuanto, como es de conocimiento de la Parte Actora, la reliquidación del auxilio de cesantía, obligación a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores en su calidad de Empleador, es elevada por la señora ANGELA MARIA CORREA MORENO, con base en una decisión judicial de anulación de las normas vigentes sobre la materia y no como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de mi Poderdante que hubiera ocasionado daño o perjuicio al señor ANGELA MARIA CORREA MORENO y el Estado hubiera sido condenado a su reparación patrimonial.

Al respecto el H. Consejo de Estado ha reiterado que:

" para que una entidad pública pueda ejercer la acción de repetición, deben concurrir y reunirse los presupuestos y requisitos a saber: a) Que una entidad pública haya sido condenada en sentencia proferida por juez competente a reparar los daños antijurídicos causados a un particular, o resulte vinculada a la indemnización del daño en virtud de una conciliación u otra forma de solución de un conflicto; b) Que la entidad haya pagado totalmente a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria o en la conciliación o en otra forma de solución de un conflicto; y c) Que la condena o la conciliación se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas. Los dos primeros corresponden a los elementos objetivos para impetrar la acción y el último al elemento subjetivo que determina la responsabilidad del agente. "(Fallo 34816 de 2011)

El actor además de desconocer que en la Conciliación realizada, se trata del pago de una obligación a cargo del Ministerio, de derechos no prescritos y exigibles por sus funcionarios de la planta externa, por corresponder a factores salariales, efectivamente devengados y no considerados en las liquidaciones parciales realizadas, desconoce también que mi representado, no tuvo ninguna conducta dolosa o gravemente culposa y que todas las liquidaciones de cesantía realizadas durante el periodo que este, fue Director de Talento Humanos, se ajustaron a la normatividad vigente.

El Ministerio también desconoce que una vez cambió la normatividad vigente sobre la liquidación de la Cesantía de los funcionarios del servicio exterior debió realizar los ajustes pertinentes so pena de incurrir en " ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ".

También inexplicablemente el actor pasa por alto la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, que señaló:

"Este criterio, sin embargo, no puede aplicarse de manera general y sin tener en cuenta el contexto en el cual se origina la nueva petición, pues tal y como ocurre en este evento, cuando se ha expedido un acto administrativo anual de liquidación que no fue controvertido ni en sede gubernativa ni judicial, puede asumirse que esta ausencia de controversia obedeció a la seguridad que el beneficiario tenía de que su derecho había sido bien liquidado. Pero si ejecutoriado este acto surge en beneficio del administrado una expectativa legítima de incremento porcentual en la base liquidatoria de su cesantía anual, es decir, un hecho nuevo producto de decisiones judiciales de anulación de normas, que resulta aplicable a su situación y lo faculta para solicitar a la administración la respectiva reliquidación."

Por lo que en conclusión, la reliquidación del auxilio de cesantía concedida a los funcionarios de la Cancillería es producto del cumplimiento de una obligación a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores en su calidad de Empleador que no puede burlar el cumplimiento de obligaciones no prescritas y exigibles, como consecuencia de la anulación de unas normas que en su momento, se consideraron legalmente vigentes y se aplicaron, pero posteriormente anuló la Corte Constitucional. Lo que generó, una nueva situación, que le permite al funcionario solicitar su reliquidación, porque la vigencia y aplicabilidad del artículo 57 del Decreto 10 de 1992, se lo impedía y no puede en consecuencia, predicarse en ningún momento que es producto de la no notificación del acto administrativo que las liquidó y traslado al Fondo Nacional del Ahorro, desconociendo groseramente la realidad jurídica imperante para el momento de los hechos.

En este proceso tampoco puede hablarse de daño o perjuicio, pues como indicó el Consejo de Estado proferida dentro del proceso instaurado contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por la señora Fabio Emel Pedraza :

*"....., **pero resulta que en el presente asunto, ni siquiera se ha causado la cesantía, porque el demandante no se ha retirado del servicio** y, siempre ha estado en el Fondo Nacional del Ahorro, entidad que, simplemente, paga los intereses que la ley le ha señalado.*

De manera que, ***tampoco existe perjuicios, porque no se le han pagado las cesantías,*** *simplemente debe abonarse a la cuenta las diferencias reclamadas junto con los intereses moratorios que se condenan en este proceso….."*(Destacado fuera de texto)

Con la anterior transcripción, no sólo se desvirtúa, la existencia del daño, si no la falaz y temeraria afirmación del contratista para poder tratar de soportar la presente acción

Si en repetidas ocasiones el Comité de Conciliación ha conceptuado que en el proceso de reliquidación de las cesantías de los funcionarios de la planta externa, no se ha causado lesión alguna a los intereses del Estado, ni se ha afectado el patrimonio del Ministerio, no se entiende cómo un abogado contratista y el mismo Comité de Conciliación pueda concluir, para efectos de sustentar la presente demanda, todo lo contrario, desconociendo la jurisprudencia, las normas vigentes, no solo sobre la forma de liquidar las prestaciones de los funcionarios del servicio exterior, sino el manual de funciones de su planta de personal y groseramente pasa por alto, que la reliquidación es producto de la anulación de unas normas que desde su expedición estaban viciadas de nulidad.

Llama la atención que en el presente proceso no se hace referencia, a los funcionarios que profirieron los oficios en los que le niegan al señor CORREA MORENO la reliquidación de sus cesantías, y la relación de causalidad entre estos oficios y el pago realizado.

La Parte Actora, en el libelo de la demanda confiesa: a) que el Ministerio negó la Reliquidación de la Cesantía, b) que la señora CORREA MORENO pretendía mediante proceso de nulidad y restablecimiento de derecho, se declarara nulo este oficio, c) que la Conciliación fue realizada dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y d) Que la re liquidación se negó, por haberse realizado la liquidación del auxilio de la cesantía, durante el periodo solicitado, conforme a la normatividad vigente.

EXCEPCION GENERICA

Propongo la excepción genérica que, según el artículo 282 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 187, del Código Contencioso Administrativo, se refiere a declarar cualquier hecho exceptivo que resultare probado en el curso del proceso o en cualquier otra circunstancia, en virtud de las cuales la ley considera que la obligación para mi representado no existió o la declara extinguida, o bien no se puede proferir decisión de fondo por hechos tales como la caducidad de la acción, o una inepta demanda, entre otros a pesar que no hayan sido formuladas expresamente en este escrito.

PRUEBAS

Solicito que se decreten, practiquen y tengan como tales las siguientes:

DOCUMENTALES obrantes a folios

1. Acta Aprobación Conciliación Judicial
2. Acta del Comité
3. Certificación Funciones de Mi Poderdante
4. Resolución 5393 del 13 de diciembre de 2010

INFORME:

Solicito al Despacho de acuerdo a lo previsto en los artículos 211 del CPACA y 275 del Código General del Proceso solicito al señor Juez que requiera al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES para que presente informe sobre los siguientes Hechos

1. El nombre de la persona y las fechas en que mi Poderdante fue remplazado en su cargo durante la incapacidad laboral en el año 2003 y su periodo de vacaciones disfrutadas en el año 2004 así como la razón por la que no fue vinculado al presente proceso.

2. Las funciones de la Secretaria General del Ministerio, en especial las consagradas en el artículo 21 del Decreto 1925 del 2000 en relación con "*Dirigir las actividades de seguridad industrial, la de administración de personal, las relaciones laborales y la planta de personal del Ministerio, de acuerdo con las políticas del Ministerio y las normas legales vigentes establecidas sobre estas materias*",

3. El nombre de los funcionarios que profirieron el oficio DTH del 24 de enero de 2012 en que le negaron la reliquidación a la señora CORREA MORENO b) la razón por la cual no la vincularon al presente proceso, c) fecha en que cambió la forma de liquidar el auxilio cesantía de los funcionarios de la planta externa de la Cancillería, d) fecha de la sentencia de la primera condena al Ministerio por reliquidación del auxilio de cesantía de los funcionarios de la planta externa del Ministerio con el salario realmente devengado y cuantas sentencias de condena le habían sido notificadas a la fecha del citado oficio.

4. Si a los funcionarios de la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores les notificaban las liquidaciones anuales del auxilio de cesantía b) en cabeza de quien o en qué cargo estaba asignada esta obligación c) cuantos procesos de reliquidación han iniciado estos funcionarios por la NO notificación de su Cesantía e) Si los funcionarios de la planta interna del Ministerio a los que no se les han notificado las liquidaciones anuales del auxilio de cesantía, pueden solicitar la reliquidación de este auxilio por la razón aducida por los funcionarios de la planta externa y que generó la condena al Ministerio y a la presente acción.

5. Los nombres de todos quienes desempeñaron de planta o por encargo los cargos de **SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS, * DIRECTORES DE TALENTO, * COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE NOMINAS Y PRESTACIONES * JEFE DE DIVISION DE CAPACITACION DE BIENESTAR SOCIAL Y PRESTACIONES** durante el **PERIODO RELIQUIDACION CESANTIA** comprendido entre los años 1990 a 2003 a) la razón por la que no fueron vinculados al proceso b) porque no tenían en su cabeza la función de notificar las liquidaciones de las cesantías parciales, consignadas al Fondo Nacional del Ahorro incluidas las doceavas. c) cuando y como deben liquidarse y reportarse al Fondo Nacional del Ahorro las doceavas.

6. Se sirva certificar a) cuantas notificaciones de las liquidaciones anuales del auxilio de cesantía se han realizado a los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde el años 1990 a 2003 b) a que funcionarios de la planta externa, se les ha realizado dichas notificación y en que años. Anexando copia de dichos actos.

7. Se sirva certificar cuantos procesos, han iniciado contra LA NACION – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES por concepto de reliquidación de aportes pensionales de los funcionarios de la planta externa de cancillería b) Cuantas conciliaciones han realizado c) Si causa de estas reclamaciones es que

se realice con el salario realmente devengado en la planta externa. d) Si es la misma causa aducida en las solicitudes de reliquidación de la cesantía e) Quien estaba encargado de realizar estas liquidaciones y notificarlas al Fondo de Pensiones f) Cuantas acciones de repetición han iniciado por estos pagos e) en caso de no haberse iniciado ninguno, cual es la razón para No haberlo hecho y f) Si los funcionarios que han iniciado solicitud de reliquidación de aportes pensionales han iniciado los de reliquidación del auxilio de cesantía, si es así, informar si es por la misma causa.

8. Si, de acuerdo con la Resolución No. 316 del 7 de febrero de 1997, " por la cual se modifica, amplia y precisa el Manual Descriptivo de Funciones y Requisitos a Nivel de Cargo de la Planta de Personal del Servicio Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores y se especifica claramente las funciones que debe cumplir cada funcionario en la Entidad" , en las funciones del cargo Jefe De la División de Capacitación, Bienestar Social y Prestaciones En la descripción de las Funciones Específicas se señaló:
..... 5. Coordinar con el Fondo Nacional del Ahorro todo lo concerniente a cesantías, créditos, adjudicación de vivienda e informes.

   Y al AREA NOMINA EXTERNA se le adjudica la siguiente función:

   ..... 4. Colaborar en el Área de Nómina Interna para realizar las autoliquidaciones para las diferentes Empresas Promotoras de Salud (EPS), para la Aseguradora de Riesgos Profesionales y los Fondos de Pensiones, diligenciando los respectivos funcionarios en las partes correspondientes.

   AREA BIENESTAR SOCIAL

   AREA PRESTACIONES SOCIALES
   .... 2. Elaborar y enviar los reportes anuales de cesantías de los funcionarios en servicio activo y retirado con destino al Fondo Nacional del Ahorro.
   ....4. Elaborar las liquidaciones anuales, definitivas y avances de cesantías y los certificados con destino al Fondo Nacional del Ahorro

   GRUPO DE NOMINA Y PRESTACIONES
   ....6. Elaborar y enviar los reportes anuales de cesantía de los funcionarios en servicio activo y retirados con destino al Fondo Nacional del Ahorro o la entidad que haga sus veces.

Con el objeto de demostrar los hechos base de la defensa y de las Excepciones propuestas solicitó al Señor Juez se requiera al Ministerio de Relaciones Exteriores para que remita con destino al presente proceso los siguientes documentos que desde ya afirmo, reposan en esa Entidad

1. Copia del Oficio del 1º de marzo de 2002, mediante el cual el Director General del Presupuesto Público, da respuesta al oficio S.G.E. 2631 suscrito por la Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicándole que con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 65 y 66 del decreto 274 de 2000, las prestaciones sociales de los servidores de la Planta Externa deben liquidarse con base en las equivalencias del Decreto 10 de 1992, evidenciando que mi poderdante no podía haber liquidado el auxilio de cesantía de la forma en que se hizo.

2. Copia de la Resolución No. 4255 del 30 de septiembre de 2010, del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la cual se asigna al Grupo de Nómina y Prestaciones Sociales la función de "notificar la liquidación anual de cesantías" evidenciando que antes del año 2010 esa función no estaba asignada a ningún funcionario en particular y menos en cabeza de mi poderdante. Adjunto copia del derecho de petición presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores con destino al proceso.

3. Copia de las actas No. 169 y 170 del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores, en las que se consideró que *"no existe prueba ni siquiera sumaria de dolo o culpa grave"* del Director de Talento Humano y la Secretaria General que negaron la reliquidaciòn de la liquidación anual de cesantía de los servidores que prestaron sus servicios en la planta externa, quienes *"emitieron los actos administrativos bajo principios de razonabilidad e interpretación de las normas aplicables (Decreto 10 de 1992 y 274 de 2000)"*

4. Copia del oficio, DITH No 0217 de 21 de 4 marzo de 2013 con 5 folios, donde se certifican las funciones cumplidas por mi poderdante, y se acredita que entre las mismas no está la de notificar liquidaciones anuales de cesantía, como temerariamente pretende el actor

5. Oficio 12 de febrero de 2014 en que da respuesta al radicado E- CGC 14-006626

6. Oficio 12 de febrero de 2014 en que da respuesta al radicado E- CGC 14-006631

7. Oficio S- GALJI – 15- 051869 del 27 de mayo del 2015 suscrito por la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales (E).

8. La Resolución No. 316 del 7 de febrero de 1997, " por la cual se modifica, amplia y precisa el Manual Descriptivo de Funciones y Requisitos a Nivel de Cargo de la Planta de Personal del Servicio Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores y se especifica claramente las funciones que debe cumplir cada funcionario en la Entidad"

PRETENSIONES

Que se desestimen por infundadas las pretensiones incoadas y se condene en costas a la entidad demandante por la temeridad de su acción.

NOTIFICACIONES

Mi poderdante y la suscrita, las recibiremos en la Secretaría de su despacho o en la carrera 22 A No. 151-63 Apto 201 de Bogotá.

Correo electrónico: berthaisuarez@gmail.com

Señor Juez,

BERTHA ISABEL SUAREZ GIRALDO
C.C. 31`399.567 de Cartago (Valle)
T.P. 31.724 del C.S. de la Judicatura

491

000003

2016 MAR 20 PM 2 05

Doctora
ANA MARIA GARCÍA CRUZ
JUZGADO SESENTA Y UNO (61) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN TERCERA
E. S. D.

MEDIO DE CONTROL:	**REPETICIÓN**
ACCIONANTE:	**NACIÓN – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
EXPEDIENTE:	**CLARA INÉS VARGAS Y OTROS**
RADICADO:	**EXPEDIENTE : 11001333672220140010900**

CLARA INÉS VARGAS SILVA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía No. 41.564.755 de Bogotá D.C., manifiesto respetuosamente que confiero poder especial, amplio y suficiente al Doctor **ERNESTO HURTADO MONTILLA** mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.686.799 de Bogotá, abogado titulado con Tarjeta Profesional 99.449 del Consejo Superior de la Judicatura, para que asuma mi representación y realice todos los actos necesarios para proteger mis intereses en el proceso de la referencia.

El apoderado queda ampliamente facultado para contestar la demanda, presentar alegatos de conclusión, interponer los recursos ordinarios y extraordinarios, conciliar, sustituir, reasumir y realizar todas las gestiones necesarias para el desarrollo de su gestión.

Comedidamente solicito, reconocerle personería al apoderado en los términos y para los efectos del poder conferido.

Del Señor Juez,

Clara Inés Vargas Silva
CLARA INÉS VARGAS SILVA
C.C. No. 41.564.755 de Bogotá D.C.

Acepto:

ERNESTO HURTADO MONTILLA
C.C. No. 79.686.799 de Bogotá D.C.
T.P. No. 99.499 del C.S. de la J

PRESENTACIÓN PERSONAL

Este memorial fue presentado personalmente ante el suscrito Notario 32 del Círculo de Bogotá por:

VARGAS SILVA CLARA INES

Identificado con: **C.C. 41564755**

T. Profesional No.

quien declara que reconoce como cierto su contenido y como suya la firma puesta en el.

Bogotá D.C. **30/03/2016**

a las ***11:15:29 a.m.***

lk0plz00oiio9ikp

www.notariaenlinea.com

RYDLE1WNFARCIT1K

CLA

Firma

JOHN FREDY OTALORA GALEANO
NOTARIO 32 (E) BOGOTA D.C.

LA PRESENTE AUTENTICACION CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA SER FIRMADA POR EL NOTARIO

DILIGENCIA DE AUTENTICACION

NOTARIA 12
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

JIM

www.notariaenlinea.com

PTO66J0J0ZQJEH0YT

Compareció:

HURTADO MONTILLA ERNESTO

Con: **C.C. 79686799**

y **T.P. 99448**

quien hace presentación personal del documento y reconoce que la firma puesta en él es suya y que el contenido del mismo es cierto. En constancia firma.

Bogota D.C. 14/04/2016 11:39:19 a.m.

RECONOCIMIENTO

Firma Declarante

Huella Dactilar

MARIO GARZON GUEVARA
NOTARIO 12 DE BOGOTA (E)

Hurtado Montilla
abogados

Calle 97 A No. 8-10 Of. 502
Tel: (571) 6421599 - 6421606
ehm@hurtadomontilla.com
Bogotá D.C., Colombia

Señores
JUZGADO SESENTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
E. S. D.

MEDIO DE CONTROL:	**REPETICIÓN**
DEMANDANTE:	**NACIÓN – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
DEMANDADO:	**CLARA INÉS VARGAS DE LOZADA Y OTROS**
RADICADO:	110013336722 – **2014 – 00109** – 00

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
2015 MAY 4 AM 9:47
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS
OFICINA DE APOYO

CONTESTACIÓN DE DEMANDA

ERNESTO HURTADO MONTILLA, Abogado en ejercicio, mayor de edad, y domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 79.686.799 de Bogotá D.C. y portador de la tarjeta profesional No. 99.449 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado judicial especial de la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA,** mayor de edad y domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 41'564.755, encontrándome dentro de la oportunidad procesal pertinente, procedo a contestar la demanda en medio de control **REPETICIÓN**, presentada por la **NACIÓN – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**, en contra de mi representada de la manera que sigue:

I.- EN CUANTO A LOS HECHOS:

PRIMERO: ES CIERTO, en efecto, el artículo 23 del Decreto 10 de 1992 y el artículo 35 del Decreto 274 de 2000 consagran las normas relativas a la alternación de los funcionarios de carrera diplomática y consular.

No obstante, debe ponerse de presente como las anteriores normas jurídicas son expedidas con posterioridad al 17 de febrero de 1991 y al cinco de julio de 1991, fecha hasta la cual, de acuerdo a la certificación de noviembre 25 de 2013 y a la demanda respectivamente, la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA,** desempeñó el cargo de Asesor, Código 1020, grado 01 de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos.

SEGUNDO: Este hecho al componerse de varias afirmaciones lo contesto de la siguiente manera:

NO ES CIERTO que lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2126 de 1992, artículo 23 del Decreto 1295 de 2000, artículo 23 del Decreto 2105 de 2001 y el artículo 25 del Decreto 110 de 2004 sean normas aplicables frente a la señora **CLARA INÉS VARGAS SILVA,** ya que como bien lo expone la entidad actora en la primera página de la demanda y en la certificación emitida por el Director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores el 25 de noviembre de 2013, el periodo por el cual se demanda a mi representada, se encuentra comprendido entre el **29 DE JUNIO DE 1990 Y 17 DE FEBRERO DE 1991**, en efecto la demanda exponen:

*"**1) CLARA INÉS VARGAS DE LOZADA:** Jefe de la Sección de Personal – desde el 1 de Julio [sic] de 1990 hasta el 5 de Julio [sic] de 1991." (Subrayado ajeno al texto)*

De la misma manera, la certificación allegada con la demanda expresa:

"Que la doctora VARGAS SILVA desempeñó los siguientes cargos y funciones:

Mediante Decreto No. 802 del 17 de abril de 1990, se le nombró en comisión en el cargo de Asesor, código 1020, grado 01, de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores. ***Tomo posesión el 29 de junio de 1990 y lo desempeñó hasta el 17 de febrero de 1991.*** *" (Negrillas ajenas al texto)*

NO ES CIERTO que de conformidad con el artículo 30 del Decreto 3118 de 1968, la señora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** tuviera como función la de notificar personalmente a los funcionarios el auxilio de cesantía, ya que en momento alguno la norma citada dispone que el cargo ocupado por mi representada tuviera dicha función, se trata pues de una norma de contenido general, que de manera alguna atribuye a mi representada la función de notificación de actos administrativos. En efecto la norma dice:

> ***"Artículo 30º.- Notificación y recursos.*** *Las liquidaciones del auxilio de cesantía de empleados públicos y trabajadores oficiales, de que tratan los artículos 22, 25, 27 y 28 se notificarán a los interesados, quienes si las encuentran correctas deberán suscribirlas en señal de asentimiento.*
> *(...)"*[1]

Lo anterior asume mayor importancia al considerar que la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA no** suscribió acto administrativo alguno relacionado con la liquidación de cesantías de servidores públicos que desempañaran funciones en la Planta Externa de la parte actora, tal como lo manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Oficio S-GNPS-15-076065 de agosto 11 de 2015:

"2. En relación al punto 2: Le informo que una vez revisadas las historias laborales de los funcionarios que laboraron en el servicio exterior entre el 1° de julio de 1990 y el 28 de febrero de 1991, no se encontró registro de copia de las liquidaciones de cesantías suscritas por Usted en dicho periodo."[2]

En el mismo sentido, **NO ES CIERTO** que el artículo 44 del Decreto 01 de 1984 dispusiera que la señora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** en virtud del cargo que ocupó entre el 29 de junio de 1990 y el 17 de febrero de 1991 debía notificar los actos a través de los cuales se liquidaba el auxilio de cesantías, por el contrario, se trata de una norma de carácter general que en momento alguno, dispone de manera directa que dicha función sea asignada a mi representada en virtud del cargo que ocupaba.

Por lo tanto, de las normas citadas por la actora no puede afirmarse que mi representada hubiera tenido como función la de notificar el acto administrativo a través del cual se liquidó el auxilio de la cesantía causado en el periodo de 1990 (29 de junio) a 1991 (17 de febrero);

---

1 *"**Artículo 28º.- Liquidación año de retiro.** En caso de retiro del empleado o trabajador, el respectivo Ministerio, departamento administrativo, superintendencia, establecimientos públicos o empresa industrial y comercial del Estado, liquidará la cesantía que corresponda al empleado o trabajador por el tiempo servido en el año de retiro."*

2 Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio S-GNPS-15-076065 de agosto 11 de 2015, Pág. 2.

por lo que las consideraciones en que se basan los hechos no son ciertas y obedecen únicamente a una interpretación ligera y arbitraria de las normas en cita.

Finalmente, se debe subrayar que la Doctora **CLARA INES VARGAS SILVA nunca ocupó los cargos de Subsecretaria de Recursos Humanos, ni de Directora General de Desarrollo de Talento Humano y mucho menos Directora de Talento Humano**, pues el cargo que ocupó fue el de en comisión en el cargo de Asesor, código 1020, grado 01, de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo que ejerció entre el 1 de julio de 1990 y el 17 de febrero de 1991; y adicionalmente mediante Resolución No. 1504 del 4 de julio de 1991, se le nombró en comisión en el cargo de asesor, código 1020, grado 01, en la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos, siendo asignada como Jefe de Oficina Jurídica de la Cancillería.

TERCERO: NO ME CONSTA que la señora **ÁNGELA MARÍA CORREA MORENO** fue vinculada a la carrera diplomática y consular, así mismo, **NO ME CONSTA** que se desempeñó entre los años 1990 a 2003 en la planta externa del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.**

CUARTO: NO ME CONSTA que el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** expidió el oficio DITH 4744 del 24 de enero de 2012, así mismo, **NO ME CONSTA** el contenido del mismo. Sin embargo, la sola afirmación de la demandante afirmando que *"le fueron liquidadas conforme a la normatividad vigente."* Pone de presente que no existe aquí un daño antijurídico que pueda repetir la demandante.

QUINTO: ES CIERTO, que la señora **ÁNGELA MARÍA CORREA MORENO** convocó a audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, con el objetivo de agotar el requisito de procedibilidad de la eventual demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el objetivo de solicitar una reliquidación del auxilio de cesantías con base en el salario realmente devengado.

La pretensión de la convocante se fundamentó en la sentencia C – 535 de 2005, la cual declaró como inexequible el artículo 57 del Decreto Extraordinario 10 de 1992, sentencia de constitucionalidad que supuso un cambio jurisprudencial en la liquidación de las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que la norma mencionada, en concepto de la Corte Constitucional, vulneraba el derecho a la igualdad y transgredía el artículo 58 de la Constitución Política, al no respetar la realidad laboral, es decir, no reconocía para la liquidación de prestaciones sociales, como las cesantías, el salario realmente devengado.

En el mismo sentido, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca manifestó sobre el particular consideró:

"Sin embargo, el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, fue declarado inexequible por la Honorable Corte Constitucional, mediante sentencia c – 535 del 24 de mayo de 2005, por las siguientes razones:

(...)

De lo anterior, se observa que la Corte Constitucional en varias oportunidades, al resolver diversas acciones de tutela interpuesta por ex funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quienes se les había liquidado los aportes del sistema de pensiones sobre un ingreso base que no corresponde al que realmente devengaron cuando se desempeñaban como funcionarios públicos

en el servicio exterior, ha concluido que la liquidación de las prestaciones sociales de quienes hacen parte del cuerpo diplomático en el exterior, debe hacerse tomando como base el salario devengado y nunca un salario inferior, que es ficticio, pues no corresponde realmente al cargo desempeñado y a las responsabilidades derivadas del mismo, y porque con ello resultan vulnerados los derechos fundamentales de igualdad, seguridad social y mínimo vital y el principio de primacía de la realidad laboral sobre las formalidades." [3]

Obsérvese que la Sentencia prenombrada data del año 2005, esto es, una fecha muy posterior a los periodos de tiempo por los que se vincula a mi representada, no siendo por tanto exigible a la Doctora **CLARA INES VARGAS SILVA**, en el caso que se verificará que desplegó alguna actuación en los hechos relacionados con este asunto, que profetizará el cambio jurisprudencial que ocurriría. Obsérvese también que las pretensiones conciliadas se dirigían en contra del oficio DITH 4744 del 24 de enero de 2012, en el que mi representada no tuvo ninguna intervención.

SEXTO: ES CIERTO que el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** propuso formula de conciliación para el pago de la suma de dinero derivada de la reliquidación de las cesantías de la señora **ÁNGELA MARÍA CORREA MORENO,** por el periodo comprendido entre los años 1990 a 2003.

En este punto de la contestación de demanda, es necesario resaltar la falta de legitimación en la causa de la señora **CLARA INÉS VARGAS SILVA,** ya que como se observa, las cesantías objeto de reclamación por parte de la señora **ÁNGELA MARÍA CORREA MORENO,** en momento alguno se causaron o pagaron en el periodo durante el cual, según el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,** mi representada tendría la obligación de notificar los actos administrativos que liquidaban el auxilio de cesantías.

Así mismo, se subraya que tal y como lo expone el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la erogación patrimonial a cargo de la entidad demandante es producto de un cambio normativo derivado de la posición jurisprudencial relacionada con la liquidación de las prestaciones sociales, efectuada por la H. Corte Constitucional en la sentencia C – 535 de 2005, en efecto consideró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo siguiente al aprobar el acuerdo de conciliación extrajudicial:

"Ahora bien, es cierto como alega la entidad demandada, que la sentencia de constitucionalidad tiene efectos hacía el futuro como dispone el artículo 45 de la ley Estatutaria de Administración de Justicia (L. 270 de 1996), sin embargo, la motivación de la sentencia C – 535 del 24 de mayo de 2005, es clara en advertir que se ha otorgado un tratamiento desigual.

Concretamente la Corte señaló:

(...)

Conforme a lo anterior, en vigencia de la norma que consagraba el tratamiento desigual que la Corte reprueba a quienes se les aplicó, pues se les otorgó un tratamiento injustificado.

Es así, como esta corporación se ha pronunciado sobre los efectos del fallo de la Corte Constitucional anotado anteriormente y por otra parte, específicamente sobre las cesantías de los

---

3 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F" en Descongestión, Sentencia del 20 de febrero de 2013, Rad. 25000-23-25-000-2012-01377-00. Pág. 10 a 14.

funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en lo siguiente:

(...)

Conforme a lo anterior, los efectos de la sentencias de constitucionalidad son ex tunc, es decir hacía el futuro, pero no es menos cierto, que en este caso el tratamiento que se le daba a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto a la liquidación de sus cesantías era arbitrario, por lo tanto dicha norma es inaplicable durante el tiempo en que se produjeron sus efectos jurídicos y más aún cuando por vía de Tutela se había protegido los derechos fundamentales de las personas que habían laborado el Ministerio de Relaciones Exteriores, antes de la declaratoria de inexequibilidad de las normas referidas anteriormente y que se encontraban en situaciones de hecho idénticas al caso en estudio.

Para finalizar, es preciso señalar lo expuesto por el Honorable Consejo de Estado en sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil once (2011), SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN 'A', Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN, Radicación número 25000-23-25-000-2005-04144-01 (1644-08) en lo que al caso concreto se refiere:

'(...) El Decreto 274 de 2000 que derogó el Decreto 10 de 1992, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-292 del 16 de marzo de 2001, por cuanto consideró que la facultad de regular el régimen prestacional de los funcionarios de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, no estaba dentro de las potestades otorgadas extraordinariamente por el legislador. Con fundamento en el anterior recuento, entre otras cosas, se puede inferir que, efectivamente, la liquidación de las prestaciones contaba con regulaciones especiales que desaparecieron del ordenamiento jurídico, quedando como premisa que la liquidación de las cesantías de los funcionarios que prestaban sus servicios en el exterior debe efectuarse con base en el salario realmente devengado, porque liquidar sus prestaciones, entre estas la cesantía, con base en una equivalencia, como lo declaró la Corte Constitucional implicaría dar un tratamiento diferenciado e injustificado, contrario al mandato de igualdad en la formulación del derecho y que, resulta lesivo a los "derechos fundamentales como los de seguridad social y mínimo vital.". Pero además del tratamiento injustificado, por desconocimiento del mandato de igualdad en la formulación del derecho, también se atenta contra el principio de primacía de la realidad frente a las formas que debe imperar en las relaciones laborales, pues lo cierto es que las prestaciones sociales, en especial las cesantías deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no es su realidad.

(...)

Dado que en el sub examine el A quo omitió dar aplicación a las normas anteriormente relacionadas es del caso ordenar el reconocimiento a favor del trabajador de una suma mayor de la que le hubiere sido liquidada por la respectiva entidad y por lo tanto se dispondrá el reconocimiento de intereses moratorios a favor del actor sobre la diferencia, en un porcentaje del 2o/o mensual desde la fecha en que la suma respectiva se hubiere causado hasta aquella en que se le acredite. Empero, no obstante la anterior circunstancia, la Sala encuentra que el hecho de que se ordene el reconocimiento de los intereses moratorios previstos en el artículo 14 del Decreto 162 de 1969, excluye, per sé, la aplicación de la indexación. Lo antes dicho porque al condenar al pago de intereses moratorios implícitamente se está actualizando el valor de la condena y no existe razón para actualizar una condena que de suyo, ya está más que actualizada (...)'

Por lo anterior, es claro que el derecho solicitado por la actora tiene vocación de prosperidad, en las condiciones planteadas por el Honorable Consejo de Estado, y por lo tanto no solo tiene derecho a que se le paguen sus cesantías de conformidad con lo realmente devengado cuando se encontraba desempeñándose en la planta externa, sino que tiene derecho al pago de los interés [sic] moratorios en un monto del 2% y excluye por tanto la aplicación de indexación alguna."[4]

SÉPTIMO: ES CIERTO que el objeto de la conciliación celebrada ante la Procuraduría 84 Judicial I para Asuntos Administrativos fue aprobada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuerpo colegiado que claramente puso de presente la causa de la erogación patrimonial que hoy reclama el Ministerio al considerar:

"Es así, como esta corporación se ha pronunciado sobre los efectos del fallo de la Corte Constitucional anotado anteriormente y por otra parte, específicamente sobre las cesantías de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en lo siguiente:

(...)

Conforme a lo anterior, los efectos de la sentencias de constitucionalidad son ex tunc, es decir hacía el futuro, pero no es menos cierto, que en este caso el tratamiento que se le daba a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto a la liquidación de sus cesantías era arbitrario, por lo tanto dicha norma es inaplicable durante el tiempo en que se produjeron sus efectos jurídicos y más aún cuando por vía de Tutela se había protegido los derechos fundamentales de las personas que habían laborado el Ministerio de Relaciones Exteriores, antes de la declaratoria de inexequibilidad de las normas referidas anteriormente y que se encontraban en situaciones de hecho idénticas al caso en estudio.

Para finalizar, es preciso señalar lo expuesto por el Honorable Consejo de Estado en sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil once (2011), SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN 'A', Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN, Radicación número 25000-23-25-000-2005-04144-01 (1644-08) en lo que al caso concreto se refiere:

'(...) El Decreto 274 de 2000 que derogó el Decreto 10 de 1992, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-292 del 16 de marzo de 2001, por cuanto consideró que la facultad de regular el régimen prestacional de los funcionarios de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, no estaba dentro de las potestades otorgadas extraordinariamente por el legislador. Con fundamento en el anterior recuento, entre otras cosas, se puede inferir que, efectivamente, la liquidación de las prestaciones contaba con regulaciones especiales que desaparecieron del ordenamiento jurídico, quedando como premisa que la liquidación de las cesantías de los funcionarios que prestaban sus servicios en el exterior debe efectuarse con base en el salario realmente devengado, porque liquidar sus prestaciones, entre estas la cesantía, con base en una equivalencia, como lo declaró la Corte Constitucional implicaría dar un tratamiento diferenciado e injustificado, contrario al mandato de igualdad en la formulación del derecho y que, resulta lesivo a los "derechos fundamentales como los de seguridad social y mínimo vital.". Pero además del tratamiento injustificado, por desconocimiento del mandato de igualdad en la formulación del derecho, también se atenta contra el principio de primacía de la realidad frente a las formas que debe imperar en las relaciones laborales, pues lo cierto es que las prestaciones

---

[4] Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F" en Descongestión, Sentencia del 20 de febrero de 2013, Rad. 25000-23-25-000-2012-01377-00. Pág. 10 a 17.

sociales, en especial las cesantías deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no es su realidad.

(...)

Dado que en el sub examine el A quo omitió dar aplicación a las normas anteriormente relacionadas es del caso ordenar el reconocimiento a favor del trabajador de una suma mayor de la que le hubiere sido liquidada por la respectiva entidad y por lo tanto se dispondrá el reconocimiento de intereses moratorios a favor del actor sobre la diferencia, en un porcentaje del 2o/o mensual desde la fecha en que la suma respectiva se hubiere causado hasta aquella en que se le acredite. Empero, no obstante la anterior circunstancia, la Sala encuentra que el hecho de que se ordene el reconocimiento de los intereses moratorios previstos en el artículo 14 del Decreto 162 de 1969, excluye, per sé, la aplicación de la indexación. Lo antes dicho porque al condenar al pago de intereses moratorios implícitamente se está actualizando el valor de la condena y no existe razón para actualizar una condena que de suyo, ya está más que actualizada (...)'

Por lo anterior, es claro que el derecho solicitado por la actora tiene vocación de prosperidad, en las condiciones planteadas por el Honorable Consejo de Estado, y por lo tanto no solo tiene derecho a que se le paguen sus cesantías de conformidad con lo realmente devengado cuando se encontraba desempeñándose en la planta externa, sino que tiene derecho al pago de los interés [sic] moratorios en un monto del 2% y excluye por tanto la aplicación de indexación alguna."[5]

OCTAVO: NO ME CONSTA que el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** en cumplimiento de lo acordado en la audiencia de conciliación pagó un total de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($133'148.563.oo)** a favor de la señora **ÁNGELA MARÍA CORREA MORENO** el día 14 de mayo de 2013 al Fondo Nacional del Ahorro.

NOVENO: Este hecho se compone de varias afirmaciones las cuales contesto de la siguiente manera:

NO ME CONSTA que de acuerdo al Acta No. 229 del 22 de julio de 2013 , el Comité Técnico de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores decidieron de manera unánime que se debe iniciar medio de control de repetición en contra de la señora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** y otras personas.

NO ES CIERTO, que la señora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** tuviera la obligación de notificar los actos administrativos a través de los cuales se liquidó el auxilio de cesantía, tal como lo manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Oficio S-GNPS-15-076065 de agosto 11 de 2015:

"2. En relación al punto 2: Le informo que una vez revisadas las historias laborales de los funcionarios que laboraron en el servicio exterior entre el 1° de julio de 1990 y el 28 de febrero de 1991, no se encontró registro de copia de las liquidaciones de cesantías suscritas por Usted en dicho periodo."[6]

---

[5] Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F" en Descongestión, Sentencia del 20 de febrero de 2013, Rad. 25000-23-25-000-2012-01377-00. Pág. 10 a 17.

[6] Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio S-GNPS-15-076065 de agosto 11 de 2015, Pág. 2.

Adicionalmente, sus funciones, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 33 de 1990[7] serían las siguientes:

> *"**ARTÍCULO 73. DEL GRUPO DE PRESTACIONES.** Son funciones del Grupo de Prestaciones:*
>
> *a) Coordinar con las entidades de seguridad social la adecuada asistencia médica, odontológica y hospitalaria a los funcionarios del Ministerio;*
> *b) Adelantar las gestiones necesarias para el trámite de los auxilios por enfermedad profesional, maternidad, cesantías, pensión por jubilación o retiro por vejez, etc.;*
> ***c) Atender la liquidación de cesantías parciales o definitivas, horas extras, dominicales y festivos, vacaciones, reconocimientos; elaborar los correspondientes proyectos de resolución, preparar y presentar las novedades de personal de la División Delegada del Presupuesto para el pago de bonificaciones y primas de navidad y servicios;***
> *d) Preparar las certificaciones que la División de Personal deba suministrar al Fondo Nacional de Ahorro y coordinar con dicha entidad lo relacionado con aportes, reportes y pago de cesantías;*
> *e) Coordinar con el Fondo Nacional de Ahorro, programas y préstamos para vivienda." (Negrillas ajenas al texto)*

Como se observa, la señora, **CLARA INÉS VARGAS SILVA,** en momento alguno tuvo la función de notificación de los actos administrativos, pues las funciones arriba indicadas primero se atribuían en general al Grupo de Prestaciones, y no en particular al cargo de cargo de Asesor, código 1020, grado 01, de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue el cargo que ocupó la demandada entre el 1 de julio de 1990 y el 17 de febrero de 1991. Obsérvese además que las funciones que enuncia el artículo en mención sólo se centraban en la liquidación de las cesantías y la elaboración de los proyectos de actos administrativos relacionados con esta prestación social.

Por el contrario, dicha función, se encontraba a cargo del grupo de notificaciones, tal como se puede observar, en el artículo 76 ibídem:

> *"**ARTÍCULO 76. DEL GRUPO DE NUMERACIÓN Y NOTIFICACIONES.** Son funciones de Grupo de Numeración y Notificaciones: a) Numerar, registrar y archivar las providencias que se expidan; **b) Notificar a los funcionarios y a las dependencias correspondientes, los actos administrativos que se expidan.**" (Negrillas ajenas al texto)*

DÉCIMO: NO ES UN HECHO, es la mención de una competencia atribuida por el Decreto 1716 de 2009.

---

7 *"por la cual se modifica la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y se dictan otras disposiciones."*

Hurtado Montilla
abogados

II. EN CUANTO A LAS PRETENSIONES

Respecto de las pretensiones consignadas en el petitum de la demanda, me opongo a todas y cada una de ellas por cuanto, como se demostrará en el proceso, ninguna responsabilidad le cabe a mi representada respecto de los hechos objeto del proceso, en tanto la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** no incurrió en culpa grave o dolo que determinara la condena a la entidad demandante, o la erogación patrimonial, pues en entre sus funciones no se encontraba aquella relacionada con la notificación de los actos administrativos que liquidaban las cesantías; así mismo, el aparente daño sufrido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en momento alguno se deriva de la omisión de las funciones de mi representada, por el contrario es consecuencia de un cambio de la doctrina constitucional en lo que respecta a las prestaciones sociales, en especial el auxilio de cesantía, de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Como si lo anterior fuera poco la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** solamente ocupó el cargo de cargo de Asesor en comisión, código 1020, grado 01, de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y no ninguno de los que se señala en el hecho Segundo de la demanda como lo son Subsecretaria de Recursos Humanos, ni de Directora General de Desarrollo de Talento Humano y mucho menos Directora de Talento Humano.

Carecen, por tanto, de sustento fáctico y jurídico las pretensiones que la parte actora incoa en contra de la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA**.

Lo cual expondré a continuación con base en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho argumentos en que se fundan las excepciones.

III. EXCEPCIONES

1. ***FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL POR PASIVA – LA DOCTORA CLARA INÉS VARGAS NO EJERCIÓ JAMÁS LOS CARGOS DE SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, NI DE DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO Y MUCHO MENOS DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, Y POR TANTO NO PARTICIPÓ EN LOS HECHOS QUE DIERON LUGAR A LA CONDENA OBJETO DE REPETICIÓN.***

El H. Consejo de Estado recientemente ha señalado que se presenta falta de legitimación en la causa material:

"De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores[8].

---

[8] A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que *"... si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—"*. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.

En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable respecto de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, respecto de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe o no relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra[9]. De manera ilustrativa, así lo ha explicado la Sala:

> *'«La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Ejemplo:*
>
> *'- A, Administración, lesiona a B. A y B, están legitimados materialmente; pero si*
>
> *'- A demanda a C, sólo estará legitimado materialmente A; además si D demanda a B, sólo estará legitimado materialmente B, lesionado. Si D demanda a C, ninguno está legitimado materialmente.*
>
> *'Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y sólo están legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio origen a la formulación de la demanda»[10].'"[11]*

De manera que la falta en la legitimación en la causa material por pasiva, cuando el demandado no tiene el título de autor o participe en el hecho dañino que ha conllevado a la imposición de la condena al Estado, es decir, que en el caso que nos ocupa, para que exista legitimación en la causa material de la señora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** se encuentra en la obligación de aportar plena prueba que demuestre que mi representada tenía la obligación de notificar los actos administrativos por los cuales se liquidaron los auxilios de cesantía

---

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación número: 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452). En similar sentido y complementando lo dicho en el texto, se ha afirmado lo siguiente: "*La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo -no el procesal-; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante*". Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006); Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación número: 66001-23-31-000-1996-03263-01(15352).

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del quince (15) de junio de dos mil (2000); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación número: 10171.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección "A" C.P. Hernán Andrade Rincón, Sentencia del 10 de febrero de 2016, Rad. 36326.

del funcionario, o al menos demostrar, que suscribió los actos administrativos a través de los cuales se liquidó el auxilio en mención.

No obstante, la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** **NO** suscribió acto administrativo alguno relacionado con la liquidación de cesantías de servidores públicos que desempañaran funciones en la Planta Externa del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,** tal como lo manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Oficio S-GNPS-15-076065 de agosto 11 de 2015:

"2. En relación al punto 2: Le informo que una vez revisadas las historias laborales de los funcionarios que laboraron en el servicio exterior entre el 1° de julio de 1990 y el 28 de febrero de 1991, no se encontró registro de copia de las liquidaciones de cesantías suscritas por Usted en dicho periodo."[12]

Por consiguiente, es claro que ante la ausencia de suscripción de acto administrativo que liquidara el auxilio de cesantías, la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** no participó o causo el daño que el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** repite en el presente asunto.

Ahora, se debe subrayar que la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA nunca ocupó los cargos de Subsecretaria de Recursos Humanos, ni de Directora General de Desarrollo de Talento Humano y mucho menos Directora de Talento Humano, pues el cargo que ocupó fue el de en comisión en el cargo de Asesor, código 1020, grado 01, de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, cargo que ejerció entre el 1 de julio de 1990 y el 17 de febrero de 1991;** y adicionalmente mediante Resolución No. 1504 del 4 de julio de 1991, se le nombró en comisión en el cargo de asesor, código 1020, grado 01, en la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos, siendo asignada como Jefe de Oficina Jurídica de la Cancillería.

Por lo tanto, en momento alguno desempeñó cargo alguno relacionado con la liquidación o notificación de los actos administrativos, tal como se demuestra con la certificación de funciones allegada con la demanda.

En efecto, en la Resolución No. 1400 de junio 29 de 1988, que, pese a no ser aportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, si fue citada en la certificación de funciones de noviembre 25 de 2013 que acompaña a la demanda y que cita textualmente las funciones de la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA**, así:

"De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1400 del 29 de junio de 1988, 'por la cual se establece el Manual de Funciones y requisitos de los diferentes empleos de la Planta de Personal Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores', las funciones del cargo de Asesor, código 1020, grado 01, en la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, eran las descritas a continuación:

1. *Dirigir, planear, controlar y evaluar las actividades asignadas a la Sección en los artículos 13 y 32 el Decreto 2017 de 1968*[13]*, en especial:*

2. *Prestar asesoría en asuntos de su competencia a los funcionarios directivos.*

---

[12] Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio S-GNPS-15-076065 de agosto 11 de 2015, Pág. 2.

[13] Es de anotar, que el Decreto 2017 de 1986, fue derogado expresamente por el artículo 115 de la Ley 33 de 1990.

3. *Dirigir, supervisar y coordinar todas las actividades de la Sección de Personal, colaborando con la Subsecretaría de Asuntos Administrativos especialmente en la elaboración del anteproyecto anual de Presupuesto y en la fijación de normas y procedimientos que busquen una optimización en la Administración del recurso humano.*

4. *Coordinar co0n las entidades correspondientes (DASC-ESAP, SENA, etc.) los planes y programas en materia de capacitación y selección de personal.*

5. *Ordenar la elaboración, revisar y dar el Vo.Bo. a proyectos de Decretos y Resoluciones relacionados con: nombramientos, comisiones, vacaciones, reconocimiento de vacaciones en dinero, horas extras y días feriados, licencias, traslados, insubsistencias, sanciones disciplinarias ingresos a la Carrera Diplomática y Consular de la República, etc.*

6. *Expedir según disposiciones vigentes las certificaciones solicitadas por juzgados, Procuraduría, Cajanal, funcionarios, etc.*

7. *Expedir las certificaciones con destino al INCOMEX, Dirección General de Aduanas e INTRA para la nacionalización y venta de vehículos importados por parte de los funcionarios a los que se refiere el Decreto número 2399 de 1986, así como tramitar toda la correspondencia relacionada con consultas de este tipo.*

8. *Velar para que los procesos disciplinarios que se deban seguir a los funcionarios se desarrollen de acuerdo con las normas vigentes.*

9. *Suscribir la correspondencia que salga de la Sección de Personal.*

10. *Vigilar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la asistencia y horario de trabajo de los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores.*

11. *Velar por el mantenimiento actualizado de las hojas de vida de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.*

12. *Coordinar el estudio y aprobar la ejecución de los programas de Bienestar Social para los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.*

13. *Actuar como Secretario de las Comisiones de Personal del Ministerio y de la Carrera Diplomática y Consular.*

14. *Atender a los funcionarios y al público en general cuando así lo soliciten.*

15. *Comunicar a los interesados y a las dependencias correspondientes las diferentes novedades de personal.*

16. *Dirigir la elaboración y actualización del inventario de la Sección.*

17. *Colaborar con el subsecretariado Asistente de Asuntos Administrativos en la elaboración de la memoria al Congreso en lo pertinente a la Sección.*

18. *Autorizar el transporte del equipaje de que trata el Artículo 8°, del Decreto 2144 de 1986.*

19. Las demás que le sean asignadas por el Jefe inmediato según la naturaleza del cargo."

De manera, que como bien puede observarse, la Resolución No. 1400 del 29 de junio de 1988 en momento alguno asignó como función a la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** la notificación de los actos administrativos que liquidaron las cesantías de los funcionarios.

Finalmente, tampoco es posible demostrar la legitimación en la causa material de la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** de las normas citadas por el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** como se observará a continuación:

En efecto, **el artículo 03 de la Ley 33 de 1990 determina las funciones del cargo de la División de Personal, el cual no fue el que ocupó CLARA INÉS VARGAS SILVA, pues ella se desempeñó como Asesora código 1020, grado 01 de la sección de personal de la Subsecretaria de asuntos administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores.** Dice la norma en cita, además:

"ARTÍCULO 70. DE LA DIVISIÓN DE PERSONAL. <Derogada por el Artículo 46 de la Ley 11 de 1991> Son funciones de la División de Personal:

a) Atender el manejo y la tramitación de los aspectos relacionados con la expedición de certificados, el registro y control, capacitación, archivo, prestaciones, comunicaciones y demás asuntos relacionados con la administración de personal al servicio del Ministerio;
b) Dirigir y coordinar los programas de trabajo de las Secciones de Registro y Control y de Bienestar Social y preparar la correspondencia de la División;
c) Coordinar con las dependencias del Ministerio y con las entidades respectivas, los asuntos relacionados con la capacitación, elaboración del Presupuesto, Sistema Integral de la Información de los empleados oficiales, selección, sistemas de evaluación, prestaciones sociales, bienestar social y correcta aplicación del régimen disciplinario;
d) Dirigir la elaboración de las resoluciones correspondientes a novedades de personal."

En idéntico sentido el artículo 73 de la Ley 33 de 1990 dispone:

"ARTÍCULO 73. DEL GRUPO DE PRESTACIONES. Son funciones del Grupo de Prestaciones:

a) Coordinar con las entidades de seguridad social la adecuada asistencia médica, odontológica y hospitalaria a los funcionarios del Ministerio;
b) Adelantar las gestiones necesarias para el trámite de los auxilios por enfermedad profesional, maternidad, cesantías, pensión por jubilación o retiro por vejez, etc.;
c) Atender la liquidación de cesantías parciales o definitivas, horas extras, dominicales y festivos, vacaciones, reconocimientos; elaborar los correspondientes proyectos de resolución, preparar y presentar las novedades de personal de la División Delegada del Presupuesto para el pago de bonificaciones y primas de navidad y servicios;
d) Preparar las certificaciones que la División de Personal deba suministrar al Fondo Nacional de Ahorro y coordinar con dicha entidad lo relacionado con aportes, reportes y pago de cesantías;
e) Coordinar con el Fondo Nacional de Ahorro, programas y préstamos para

vivienda." (Negrillas ajenas al texto)

Así mismo, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 3118 de 1968, no es posible extraer que la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** tuviera como función notificar personalmente a los funcionarios el auxilio de cesantía, ya que en momento alguno la norma citada dispone que el cargo ocupado por mi representada tuviera dicha función, se trata pues de una norma de contenido general, que de manera alguna atribuye a mi representada la función de notificación de actos administrativos. En efecto la norma dice:

> *"**Artículo 30º.- Notificación y recursos.** Las liquidaciones del auxilio de cesantía de empleados públicos y trabajadores oficiales, de que tratan los artículos 22, 25, 27 y 28 se notificarán a los interesados, quienes si las encuentran correctas deberán suscribirlas en señal de asentimiento.*
> *(...)"*[14]

En el mismo sentido, el artículo 44 del Decreto 01 de 1984 en momento alguno disponía que la señora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** en virtud del cargo que ocupó entre el 29 de junio de 1990 y el 17 de febrero de 1991 debía notificar los actos a través de los cuales se liquidaba el auxilio de cesantías, por el contrario, nuevamente se trata de una norma de carácter general que, en momento alguno, dispone de manera directa que dicha función sea asignada a mi representada en virtud del cargo que ocupaba.

Como bien se puede observar, entre las funciones otorgadas por el legislador en las normas anteriores, en momento alguno se encuentra aquella relacionada con la notificación de los actos administrativos que liquidan el auxilio de cesantía.

En consecuencia, ante la ausencia de prueba que demuestre que la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** causó o participó en el hecho dañino por el cual ha sido condenado el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,** la falta de legitimación en la causa material por pasiva de la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** es clara en el presente asunto, lo cual conlleva a un fracaso total de las pretensiones.

2. *LA DOCTORA CLARA INÉS VARGAS DE SILVA NO INCURRIÓ EN CULPA GRAVE O DOLO QUE PERMITA SU CONDENA EN EL PRESENTE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN.*

El Artículo 90 de la Constitución Nacional exige como elemento subjetivo que el agente del Estado hubiese actuado con dolo o culpa grave, en efecto la Constitución consagra:

> *"**ARTICULO 90.** El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.*
>
> *En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, **que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,** aquél deberá repetir contra éste." (Resaltado ajenos al texto)*

---

14 *"**Artículo 28º.- Liquidación año de retiro.** En caso de retiro del empleado o trabajador, el respectivo Ministerio, departamento administrativo, superintendencia, establecimientos públicos o empresa industrial y comercial del Estado, liquidará la cesantía que corresponda al empleado o trabajador por el tiempo servido en el año de retiro."*

De la misma manera, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo exige, igualmente, este elemento subjetivo:

> *"**ARTÍCULO 142. REPETICIÓN.** Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que **sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa** del servidor o ex servidor público **o del particular en ejercicio de funciones públicas,** la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.*
> *(...)" (Resaltado ajeno al texto)*

En el presente asunto, el título de imputación predicado es el de culpa grave, el cual es definido por la Ley 678 de 2001 de la siguiente manera en el artículo sexto:

> *"**ARTÍCULO 6o. CULPA GRAVE.** La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley **o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.***
>
> *Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:*
>
> *1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.*
> *2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.*
> *3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.*
> *4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal."(Negrilla ajena al texto)*

Por su lado, el H. Consejo de Estado ha definido la culpa grave de la siguiente manera:

"La culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del C. Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita. Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones."[15]

En el caso que nos ocupa, se puede observar como brilla por la ausencia una culpa grave por parte de mi representada, quien de manera alguna omitió funciones relacionadas con su cargo y las cuales se encuentran expresamente limitadas.

En efecto, el artículo 03 de la Ley 33 de 1990 determina las funciones del cargo de la División de Personal, el cual no fue el que ocupó **CLARA INÉS VARGAS SILVA,** pues ella se desempeñó como Asesora código 1020, grado 01 de la sección de personal de la Subsecretaria de asuntos administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dice la norma en cita además:

---

[15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección "C", C.P. Olga Melida Valle de la Hoz, Sentencia de marzo tres de 2014. Rad. 27648.

*"**ARTÍCULO 70. DE LA DIVISIÓN DE PERSONAL.** <Derogada por el Artículo 46 de la Ley 11 de 1991> Son funciones de la División de Personal:*

a) Atender el manejo y la tramitación de los aspectos relacionados con la expedición de certificados, el registro y control, capacitación, archivo, prestaciones, comunicaciones y demás asuntos relacionados con la administración de personal al servicio del Ministerio;
b) Dirigir y coordinar los programas de trabajo de las Secciones de Registro y Control y de Bienestar Social y preparar la correspondencia de la División;
c) Coordinar con las dependencias del Ministerio y con las entidades respectivas, los asuntos relacionados con la capacitación, elaboración del Presupuesto, Sistema Integral de la Información de los empleados oficiales, selección, sistemas de evaluación, prestaciones sociales, bienestar social y correcta aplicación del régimen disciplinario;
d) Dirigir la elaboración de las resoluciones correspondientes a novedades de personal."

En idéntico sentido el artículo 73 de la Ley 33 de 1990 dispone:

*"**ARTÍCULO 73. DEL GRUPO DE PRESTACIONES.** Son funciones del Grupo de Prestaciones:*

a) Coordinar con las entidades de seguridad social la adecuada asistencia médica, odontológica y hospitalaria a los funcionarios del Ministerio;
b) Adelantar las gestiones necesarias para el trámite de los auxilios por enfermedad profesional, maternidad, cesantías, pensión por jubilación o retiro por vejez, etc.;
c) Atender la liquidación de cesantías parciales o definitivas, horas extras, dominicales y festivos, vacaciones, reconocimientos; elaborar los correspondientes proyectos de resolución, preparar y presentar las novedades de personal de la División Delegada del Presupuesto para el pago de bonificaciones y primas de navidad y servicios;
d) Preparar las certificaciones que la División de Personal deba suministrar al Fondo Nacional de Ahorro y coordinar con dicha entidad lo relacionado con aportes, reportes y pago de cesantías;
e) Coordinar con el Fondo Nacional de Ahorro, programas y préstamos para vivienda." (Negrillas ajenas al texto)

Como bien se puede observar, entre las funciones otorgadas por el legislador en las normas anteriores, en momento alguno se encuentra aquella relacionada con la notificación de los actos administrativos que liquidan el auxilio de cesantía.

Situación reiterada en la Resolución No. 1400 de junio 29 de 1988, que pese a no ser aportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, si fue citada en la certificación de noviembre 25 de 2013 que acompaña a la demanda; en efecto, en la certificación en cita se precisa textualmente las funciones de la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA**, así:

"De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1400 del 29 de junio de 1988, 'por la cual se establece el Manual de Funciones y requisitos de los diferentes empleos de la Planta de Personal Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores', las funciones del cargo de Asesor, código 1020,

grado 01, en la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, eran las descritas a continuación:

20. *Dirigir, planear, controlar y evaluar las actividades asignadas a la Sección en los artículos 13 y 32 el Decreto 2017 de 1968[16], en especial:*

21. *Prestar asesoría en asuntos de su competencia a los funcionarios directivos.*

22. *Dirigir, supervisar y coordinar todas las actividades de la Sección de Personal, colaborando con la Subsecretaría de Asuntos Administrativos especialmente en la elaboración del anteproyecto anual de Presupuesto y en la fijación de normas y procedimientos que busquen una optimización en la Administración del recurso humano.*

23. *Coordinar co0n las entidades correspondientes (DASC-ESAP, SENA, etc.) los planes y programas en materia de capacitación y selección de personal.*

24. *Ordenar la elaboración, revisar y dar el Vo.Bo. a proyectos de Decretos y Resoluciones relacionados con: nombramientos, comisiones, vacaciones, reconocimiento de vacaciones en dinero, horas extras y días feriados, licencias, traslados, insubsistencias, sanciones disciplinarias ingresos a la Carrera Diplomática y Consular de la República, etc.*

25. *Expedir según disposiciones vigentes las certificaciones solicitadas por juzgados, Procuraduría, Cajanal, funcionarios, etc.*

26. *Expedir las certificaciones con destino al INCOMEX, Dirección General de Aduanas e INTRA para la nacionalización y venta de vehículos importados por parte de los funcionarios a los que se refiere el Decreto número 2399 de 1986, así como tramitar toda la correspondencia relacionada con consultas de este tipo.*

27. *Velar para que los procesos disciplinarios que se deban seguir a los funcionarios se desarrollen de acuerdo con las normas vigentes.*

28. *Suscribir la correspondencia que salga de la Sección de Personal.*

29. *Vigilar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la asistencia y horario de trabajo de los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores.*

30. *Velar por el mantenimiento actualizado de las hojas de vida de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.*

31. *Coordinar el estudio y aprobar la ejecución de los programas de Bienestar Social para los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.*

32. *Actuar como Secretario de las Comisiones de Personal del Ministerio y de la Carrera Diplomática y Consular.*

33. *Atender a los funcionarios y al público en general cuando así lo soliciten.*

---

16 Es de anotar, que el Decreto 2017 de 1986, fue derogado expresamente por el artículo 115 de la Ley 33 de 1990.

34. *Comunicar a los interesados y a las dependencias correspondientes las diferentes novedades de personal.*

35. *Dirigir la elaboración y actualización del inventario de la Sección.*

36. *Colaborar con el subsecretariado Asistente de Asuntos Administrativos en la elaboración de la memoria al Congreso en lo pertinente a la Sección.*

37. *Autorizar el transporte del equipaje de que trata el Artículo 8°, del Decreto 2144 de 1986.*

38. *Las demás que le sean asignadas por el Jefe inmediato según la naturaleza del cargo."*

No obstante, en el proceso con radicado 2014 – 00036 que se adelanta ante el Juzgado Veintidós Administrativo de Descongestión, Medio de Control Repetición, y en el cual se debaten hechos similares a los del presente asunto, el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** aportó certificación de primero de abril de 2013 expresando que de conformidad con la Resolución No. 1400 de junio 29 de 1988, las funciones de la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** eran las siguientes:

"De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1400 del 29 de junio de 1988, 'por la cual se establece el Manual de Funciones y requisitos de los diferentes empleos de la Planta de Personal Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores', las funciones del cargo de Asesor, código 1020, grado 01, en la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, eran las descritas a continuación:

1. *Dirigir el trámite de las diferentes solicitudes del servicio exterior.*

2. *Actuar como Secretario de la Comisión de Muebles e inmuebles.*

3. *Cumplir con las instrucciones que imparta el Director del Fondo Rotatorio y velar por su cabal cumplimiento.*

4. *Firmar las resoluciones y órdenes de compra que en su calidad de ordenador de gastos suscriba el Director del Fondo Rotatorio.*

5. *Responder por la Administración de las oficinas del Fondo Rotatorio en ausencia del Director del Fondo.*

6. *Solicitar a la División Delegada de Presupuesto ante el Fondo Rotatorio las imputaciones para los gastos autorizados y otros trámites relacionados con el presupuesto.*

7. *Las demás que le sean asignadas por el Jefe Inmediato, de acuerdo con la naturaleza del cargo."*

Como bien, se puede observar, las funciones enunciadas en el certificado de abril primero de 2013, no sólo son muy diferentes a aquellas enunciadas en el certificado aportado en el presente asunto, a la vez, ni siquiera, se relacionan con la liquidación de las cesantías, y mucho menos, con la de notificar el acto administrativo que las liquidaba. Situación la cual pone de presente que no existe claridad de las funciones que debía desempeñar la Doctora Clara Inés Vargas Silva y mucho

menos que entre sus funciones se encontraba la de notificar los actos administrativos que liquidaban el auxilio de cesantías.

De manera, que como bien puede observarse, la Resolución No. 1400 del 29 de junio de 1988 en momento alguno asignó como función a mi representada la notificación de los actos administrativos que liquidaron las cesantías de los funcionarios.

Por el contrario, dicha función, se encontraba a cargo del grupo de notificaciones, tal como se puede observar, en el artículo 76 de la Ley 36 de 1990:

> *"ARTÍCULO 76. DEL GRUPO DE NUMERACIÓN Y NOTIFICACIONES. Son funciones de Grupo de Numeración y Notificaciones: a) Numerar, registrar y archivar las providencias que se expidan;* ***b) Notificar a los funcionarios y a las dependencias correspondientes, los actos administrativos que se expidan.*** *" (Negrillas ajenas al texto)*

Ahora bien, prueba de la inexistencia de la mediación de una culpa grave, se encuentra en la calificación realizada a la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** frente al desempeño de sus funciones en el lapso de tiempo comprendido entre el primero de julio de 1990 y febrero 17 de 1991. Calificación que afirma frente al cumplimiento del deber como *"Es funcionaria que cumple con el deber a entera satisfacción."*[17]

De la misma manera, afirma frente a la preparación profesional de la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** lo siguiente:

"k).- Preparación profesional: Profesionalmente ha demostrado su competencia y el constante afán de superación."[18]

Así mismo, el concepto analítico global del periodo comprendido entre julio primero de 1990 y febrero 17 de 1991 consideró frente al desempeño de las funciones de la Doctora **CLARA INÉS VARGAS**, lo siguiente:

"Tengo el mejor concepto de la calificada, como persona particular y como funcionaria, habiendo demostrado profesionalmente su competencia y la utilidad de sus aportes a la institución."[19]

Así, es claro que las funciones que desempeñó la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** fueron calificadas como satisfactorias, resaltando el compromiso y la diligencia en el desempeño de sus funciones.

De manera, que ante la inexistencia de incumplimiento de funciones por parte de la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** no es posible determinar que esta actúo con culpa grave, ya que el daño no tiene relación alguna con sus funciones, requisito *sine qua non* de la responsabilidad en el medio de control de repetición, criterio que comparte el H. Consejo de Estado al considerar:

"En consideración a lo anterior, la Sala ha explicado que para determinar la responsabilidad personal de los agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el

---

17 Ministerio de Relaciones Exteriores, Calificación de marzo 31 de 1993, Pág. 2.

18 Ministerio de Relaciones Exteriores, Calificación de marzo 31 de 1993, Pág. 4.

19 Ministerio de Relaciones Exteriores, Calificación de marzo 31 de 1993, Pág. 4.

análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta, necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave."[20]

Por consiguiente, en el presente asunto, no es posible afirmar que se presentan los requisitos necesarios, para la procedencia de las pretensiones de repetición incoadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

3. INEXISTENCIA DE FUNDAMENTO DE RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A LA DOCTORA CLARA INÉS VARGAS SILVA.

El medio de control que nos ocupa, se encuentra definido en el inciso primero del artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de la siguiente manera:

> *"**Artículo 142. Repetición.** Cuando el Estado haya debido hacer un **reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación** u otra forma de terminación de conflictos que **sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor** o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra **estos por lo pagado.***
> *(...)" (Negrillas ajenas al texto)*

Debido a lo anterior, es claro que el éxito del presente medio de control de repetición depende del cumplimiento de los siguientes requisitos:

i. La calidad de servidor público del demandado.
ii. Existencia de una condena judicial a cargo de la entidad demandante.
iii. La calificación de gravemente culposa de la conducta del servidor público.
iv. El pago realizado a las personas beneficiarias de la condena judicial declarada.

El anterior criterio, ha sido compartido por el H. Consejo de Estado al referirse a la acción de repetición consagrada en la Ley 678 de 2001:

"Las normas vigentes para la época de los hechos (arts. 90 de la C. P. y 77, 78 y 86 del Decreto 01 de 1984) exigen para la prosperidad de la acción de repetición los siguientes elementos, los cuales han sido explicados por la Sala en varias oportunidades: (i) la calidad de agente del Estado y la conducta desplegada, determinante de la condena; (ii) la existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública; (iii) el pago realizado por parte de ésta; y (iv) la calificación de dolosa o gravemente culposa del agente estatal."[21]

De acuerdo a lo concluido en el punto anterior, en el caso que nos ocupa, es claro, que ante la inexistencia de una culpa grave de la conducta desplegada por la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** el medio de control de repetición se encuentra llamado al fracaso; aún más al tener en cuenta que la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** en momento alguno suscribió acto administrativo a través del cual se liquidara el aporte social de cesantías y por consiguiente en momento alguno debía notificar esa clase de actos.

---

[20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Sentencia de abril 7 de 2011. Rad. 19256.

[21] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Sentencia de marzo 8 de 2007, Rad. 25749.

En efecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Oficio S-GNPS-15-076065 de agosto 11 de 2015 manifestó frente a la entredicha función:

"2. En relación al punto 2: Le informo que una vez revisadas las historias laborales de los funcionarios que laboraron en el servicio exterior entre el 1° de julio de 1990 y el 28 de febrero de 1991, no se encontró registro de copia de las liquidaciones de cesantías suscritas por Usted en dicho periodo."[22]

No puede pasarse por alto, que el medio de control de repetición se encuentra íntimamente relacionado con la responsabilidad de los servidores o agentes del Estado que ante el incumplimiento con culpa grave de sus funciones, deben asumir el pago de la condena a la cual fue sometido el Estado.

Debido a lo anterior, la culpa grave es el elemento subjetivo del medio del control, y sin la prueba de éste, no puede prosperar la pretensión. Criterio que comparte el H. Consejo de Estado al considerar:

*"**Sobre el actuar doloso o gravemente culposo del agente estatal,** segundo requisito previsto por la Constitución Política frente a la acción de repetición, está relacionado directamente con la responsabilidad del agente estatal, esto es, con el resultado de un juicio subjetivo sobre su conducta -positiva o negativa-, como fuente del daño antijurídico por el cual resultó condenado el Estado. Bajo este entendimiento, prescribe la norma Constitucional que la prosperidad de la acción de repetición se fundamenta en el actuar doloso o gravemente culposo del agente estatal, por tanto, si en el resultado del juicio subjetivo de responsabilidad no se determina que la conducta se realizó bajo estos criterios, el Estado no tiene derecho a la reparación de su patrimonio."*[23]
(Subrayado ajeno al texto)

Por consiguiente en el caso que nos ocupa, el medio de control se encuentra llamado al fracaso, debido a la ausencia de uno de sus requisitos como lo es, la inexistencia de culpa grave en la conducta de la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA**, quien en momento alguno omitió la función de notificar el acto administrativo en el que se liquidó el auxilio de cesantía causado en el periodo comprendido entre 1990 y 1991.

4. *AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD - LA CAUSA DEL DAÑO NO ES OTRO QUE EL CAMBIO DE UNA POSICIÓN DE LA DOCTRINA PROBABLE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.*

En el presente asunto, el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** afirma que el daño objeto de repetición encuentra su causa en la omisión de la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** de notificar el acto administrativo que liquidó las cesantías causadas en el periodo comprendido entre 1990 y 1991.

No obstante, y **bien vistas las cosas, es claro que la erogación patrimonial que se pretende repetir tuvo su causa y origen en un cambio de la doctrina probable de la Corte Constitucional, la**

---

22 Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio S-GNPS-15-076065 de agosto 11 de 2015, Pág. 2.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercero, C.P. Enrique Gil Botero, Sentencia de noviembre 13 de 2008, Rad. 16335.

cual, a partir de la Sentencia C – 535 de 2005 determinó que la cesantías de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores debían liquidarse con el salario realmente devengado, y no con un valor equivalente del cargo de la planta interna; en efecto, la Corte Constitucional consideró:

"Para la Corte, como se ha visto, ese tratamiento no está justificado pues implica un desconocimiento del mandato de igualdad en la formulación del derecho y del principio de primacía de la realidad en las relaciones laborales, principios de acuerdo con los cuales la pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le corresponde. Esta concepción, desde luego, no se opone a que, frente a prestaciones como la pensión de jubilación, la cotización y liquidación se realice respetando los límites máximos impuestos por la ley pues el respeto de tales límites asegura el equilibrio financiero del sistema de seguridad social en pensiones."[24] *(Negrillas ajenas al texto)*

Como bien se puede observar, la H. Corte Constitucional, consideró que el artículo 57 del Decreto 10 de 1992 era inexequible por vulnerar el derecho a la igualdad, al dar un trato diferente e injustificado a los empleados de la plata externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, liquidando y pagando las cesantías de estos empleados con base en un salario ficticio y diferente al realmente devengado por éstos.

Cambio de posición de la doctrina constitucional, que fue puesta de presente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien aceptó el acuerdo objeto de conciliación.

En efecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al aprobar el acuerdo de conciliación, manifestó lo siguiente frente a la constitucionalidad del artículo 57 del Decreto 10 de 1992 y sus efectos:

"Sin embargo, el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, fue declarado inexequible por la Honorable Corte Constitucional, mediante sentencia c – 535 del 24 de mayo de 2005, por las siguientes razones:

(...)

De lo anterior, se observa que la Corte Constitucional en varias oportunidades, al resolver diversas acciones de tutela interpuesta por ex funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quienes se les había liquidado los aportes del sistema de pensiones sobre un ingreso base que no corresponde al que realmente devengaron cuando se desempeñaban como funcionarios públicos en el servicio exterior, ha concluido que la liquidación de las prestaciones sociales de quienes hacen parte del cuerpo diplomático en el exterior, debe hacerse tomando como base el salario devengado y nunca un salario inferior, que es ficticio, pues no corresponde realmente al cargo desempeñado y a las responsabilidades derivadas del mismo, y porque con ello resultan vulnerados los derechos fundamentales de igualdad, seguridad social y mínimo vital y el principio de primacía de la realidad laboral sobre las formalidades."[25]

---

[24] Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Sentencia C – 535 de 2005.

[25] Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F" en Descongestión, Sentencia del 20 de febrero de 2013, Rad. 25000-23-25-000-2012-01377-00. Pág. 10 a 14.

Así mismo, particularmente manifestó sobre los efectos de la sentencia de C – 535 de 2005, lo siguiente:

"Ahora bien, es cierto como alega la entidad demandada, que la sentencia de constitucionalidad tiene efectos hacía el futuro como dispone el artículo 45 de la ley Estatutaria de Administración de Justicia (L. 270 de 1996), sin embargo, la motivación de la sentencia C – 535 del 24 de mayo de 2005, es clara en advertir que se ha otorgado un tratamiento desigual.

Concretamente la Corte señaló:

(...)

Conforme a lo anterior, en vigencia de la norma que consagraba el tratamiento desigual que la Corte reprueba a quienes se les aplicó, pues se les otorgó un tratamiento injustificado.

Es así, como esta corporación se ha pronunciado sobre los efectos del fallo de la Corte Constitucional anotado anteriormente y por otra parte, específicamente sobre las cesantías de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en lo siguiente:

(...)

Conforme a lo anterior, los efectos de la sentencias de constitucionalidad son ex tunc, es decir hacía el futuro, pero no es menos cierto, que en este caso el tratamiento que se le daba a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto a la liquidación de sus cesantías era arbitrario, por lo tanto dicha norma es inaplicable durante el tiempo en que se produjeron sus efectos jurídicos y más aún cuando por vía de Tutela se había protegido los derechos fundamentales de las personas que habían laborado el Ministerio de Relaciones Exteriores, antes de la declaratoria de inexequibilidad de las normas referidas anteriormente y que se encontraban en situaciones de hecho idénticas al caso en estudio.

Para finalizar, es preciso señalar lo expuesto por el Honorable Consejo de Estado en sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil once (2011), SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN 'A', Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN, Radicación número 25000-23-25-000-2005-04144-01 (1644-08) en lo que al caso concreto se refiere:

'(...) El Decreto 274 de 2000 que derogó el Decreto 10 de 1992, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-292 del 16 de marzo de 2001, por cuanto consideró que la facultad de regular el régimen prestacional de los funcionarios de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, no estaba dentro de las potestades otorgadas extraordinariamente por el legislador. Con fundamento en el anterior recuento, entre otras cosas, se puede inferir que, efectivamente, la liquidación de las prestaciones contaba con regulaciones especiales que desaparecieron del ordenamiento jurídico, quedando como premisa que la liquidación de las cesantías de los funcionarios que prestaban sus servicios en el exterior debe efectuarse con base en el salario realmente devengado, porque liquidar sus prestaciones, entre estas la cesantía, con base en una equivalencia, como lo declaró la Corte Constitucional implicaría dar un tratamiento diferenciado e injustificado, contrario al mandato de igualdad en la formulación del derecho y que, resulta lesivo a los "derechos fundamentales como los de seguridad social y mínimo vital.". Pero además del tratamiento injustificado, por desconocimiento del mandato de igualdad en la formulación del derecho, también se atenta contra el principio de primacía de la realidad frente a

las formas que debe imperar en las relaciones laborales, pues lo cierto es que las prestaciones sociales, en especial las cesantías deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no es su realidad.

(...)

Dado que en el sub examine el A quo omitió dar aplicación a las normas anteriormente relacionadas es del caso ordenar el reconocimiento a favor del trabajador de una suma mayor de la que le hubiere sido liquidada por la respectiva entidad y por lo tanto se dispondrá el reconocimiento de intereses moratorios a favor del actor sobre la diferencia, en un porcentaje del 2o/o mensual desde la fecha en que la suma respectiva se hubiere causado hasta aquella en que se le acredite. Empero, no obstante la anterior circunstancia, la Sala encuentra que el hecho de que se ordene el reconocimiento de los intereses moratorios previstos en el artículo 14 del Decreto 162 de 1969, excluye, per sé, la aplicación de la indexación. Lo antes dicho porque al condenar al pago de intereses moratorios implícitamente se está actualizando el valor de la condena y no existe razón para actualizar una condena que de suyo, ya está más que actualizada (...)'

Por lo anterior, es claro que el derecho solicitado por la actora tiene vocación de prosperidad, en las condiciones planteadas por el Honorable Consejo de Estado, y por lo tanto no solo tiene derecho a que se le paguen sus cesantías de conformidad con lo realmente devengado cuando se encontraba desempeñándose en la planta externa, sino que tiene derecho al pago de los interés [sic] moratorios en un monto del 2% y excluye por tanto la aplicación de indexación alguna."[26]

De lo anterior, se debe resaltar que el pago de la reliquidación de las cesantías, **NUNCA** se deriva de una conducta desplegada con culpa grave o dolo por la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA**; por el contrario, es clara al determinar que es el cambio normativo generado por la sentencia C – 535 de 2005, al declarar la inexequibilidad del artículo 57 del Decreto 10 de 1992, cambio normativo derivado de la inexequibilidad de la norma que es evidentemente la causa de la obligación de reliquidar y pagar las cesantías de **ÁNGELA MARÍA CORREA MORENO.**

Lo que es más, la propia entidad demandante pone de presente en comunicado de prensa el actuar de sus funcionarios fue ajustado a derecho y que las reliquidaciones que se venían dando obedecían a una sentencia de inconstitucionalidad. En efecto el Ministerio de Relaciones Exteriores al emitir comunicado de prensa el 14 de marzo de 2014 expreso lo siguiente:

"Respecto a los informes de prensa divulgados en los últimos días, sobre la liquidación de prestaciones sociales de personas vinculadas en el servicio exterior de la Cancillería, antes de 2005, informamos que:

- *<u>El Ministerio de Relaciones Exteriores liquidaba los aportes pensionales y el auxilio de cesantías con base en la normatividad vigente sobre la materia</u> como lo establecía el Artículo 76 del Decreto ley 2016 de 1968, decreto que fue derogado por el Decreto- ley 10 de 1992, el cual disponía en el artículo 57º :*

  'Artículo 57º. Las prestaciones sociales de los funcionarios y del servicio exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones exteriores.'

---

26 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F" en Descongestión, Sentencia del 20 de febrero de 2013, Rad. 25000-23-25-000-2012-01377-00. Pág. 10 a 17.

- ***La Corte Constitucional en sentencia C-535 de 2005 declaró inexequible el artículo 57 del Decreto- ley 10 de 1992, y ordenó realizar el pago de los aportes pensionales y del auxilio de cesantías de conformidad con el salario devengado por el funcionario en planta externa en la moneda de pago.***"[27] (Subrayado fuera de texto).

De manera que en el presente asunto, no es posible afirmar que la causa del daño es la omisión de notificar el acto administrativo que liquidó las cesantías causadas entre el año 1990 y 1991, omisión por demás no atribuible a la Dra. **CLARA INÉS VARGAS**, si no por el contrario, el cambio normativo generado por la Sentencia de la Corte Constitucional C – 535 de 2005, a través de la cual se declaró inexequible la norma que consagraba la forma en la cual se debían liquidar las cesantías de los empleados de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fundamento en la vulneración del derecho a la igualdad que dicha norma suponía en criterio de la Corte.

Por consiguiente, en el presente asunto, las pretensiones se encuentran llamadas al fracaso, ya que no existe un nexo de causalidad entre la aparente omisión de funciones y el daño sufrido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues en este elemento descansa la obligación de indemnización que la entidad actora, pretende, criterio que comparte el Honorable Consejo de Estado al expresar:

"El elemento de responsabilidad 'nexo causal' se entiende como la relación necesaria y eficiente entre la conducta imputada y probada o presumida, según el caso, con el daño demostrado o presumido. La jurisprudencia y la doctrina indican que ***para poder atribuir un resultado a una persona como producto de su acción o de su omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a ésta por una relación de causa a efecto, no simplemente desde el punto de vista fáctico sino del jurídico.***"[28] *(Negrilla fuera de Texto)*

En el mismo sentido, ninguna imputación normativa cabe en contra de mi representada, pues como lo entiende el Honorable Consejo de Estado, *"... las* ***imputaciones jurídicas*** *aluden a la fuente normativa de deberes y de obligaciones - constitucionales, legales, administrativas, convencionales o contractuales - en las cuales se plasma el derecho de reclamación."*[29]

Imputaciones jurídicas las cuales son inexistentes, pues como se anotó anteriormente la Doctora Clara Inés Vargas de Lozada en momento alguno, incurrió en culpa grave o dolo, ya que nunca omitió las funciones a ella asignadas por el legislador, así como por la Resolución No. 1400 de junio 29 de 1988.

Así, en el caso que nos ocupa, se observa que no existe relación de imputación ninguna entre el daño causado y la conducta desplegada por mi representada, **faltando por entero el elemento del nexo de causalidad o de imputación** sin cuya concurrencia la responsabilidad no puede configurarse.

---

27 http://www.cancilleria.gov.co/en/comunicado-prensa-del-ministerio-relaciones-exteriores-sobre-la-liquidacion-prestaciones-sociales

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Dra. María Elena Giraldo, Sentencia del 11 de noviembre de 2002, Rad. 13818.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 25 de julio de 2002, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad.13744.

Así lo explica el profesor Fernando de Trazegnies, al expresar, *"La relación de responsabilidad extracontractual descansa, entonces, en una relación de causalidad. Por consiguiente, para que exista responsabilidad extracontractual se requiere que exista un nexo causal entre la víctima y el autor del hecho dañino."*[30] En el caso que nos ocupa esa relación de causalidad es inexistente.

Por lo tanto, ante la ausencia de nexo de causalidad, las pretensiones se encuentran llamadas al fracaso.

5. ***AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD – MI REPRESENTADA NO PARTICIPÓ DE LA LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS Y TAMPOCO TENÍA LA OBLIGACIÓN LEGAL NI CONTRACTUAL DE NOTIFIICAR LOS MISMOS.***

En el presente asunto, de acuerdo a la lógica empleada en la demanda, la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** al ocupar el cargo de Asesor, código 1020, grado 01 de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos se habría encontrado en el deber de liquidar el auxilio de cesantía de los funcionarios de la planta externa del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** y por tanto, según la curiosa interpretación que hace la actora de normas de carácter general, tendría la función de notificar dichos actos administrativos a los funcionarios respectivos.

Lo anterior, tal como lo manifestó el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** en el hecho segundo de la demanda, el cual expresa:

*"**SEGUNDO.** En virtud de lo dispuesto por los artículos 29 de la Constitución Política, **30 del Decreto 3118 de 1968,** 44 y siguientes del Decreto Ley 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, 32 del Decreto 2126 de 1992, 23 del Decreto 1295 de 2000, el artículo 23 del Decreto 2105 de 2001 y 25 del Decreto 110 de 2004, **el Subsecretario de Recursos Humanos** o posteriormente el Director General de Desarrollo del Talento humano o seguidamente el Director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, o quien haga sus veces, en calidad de jefe de la dependencia competente, **tenía la obligación legal de liquidar y notificar personalmente el auxilio de cesantías a todos los funcionarios del Ministerio,** independientemente si estos prestan sus servicios en planta interna o en el exterior." (Negrilla y subrayado ajenos al texto)*

Así mismo, consideró el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** en los fundamentos de la demanda, que el nexo causal en el presente asunto se fundamenta en lo siguiente:

*"En cuanto al nexo causal dentro de la acción de repetición se define como aquel vínculo o línea inteligible que vincula el hecho generador ejemplificado **con la ausencia de notificación del acto de liquidación de cesantías** con el detrimento patrimonial materializado en la sentencia o acuerdo conciliatorio.*

*Como resultado de la anterior afirmación, **resulta evidente la incidencia de la no notificación en los fallos judiciales proferidos en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores,** o en las conciliaciones extrajudiciales, dentro delas cuales se ha obrado con fundamento en los precedentes judiciales con el fin de evitar el incremento del daño patrimonial que ocasionaría una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción Contenciosa." (Resaltado ajeno al texto)*

---

30 Fernando de Trazegnies, LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, Tomo I, Quinta Edición, Editorial Temis, Bogotá, 1999, Pág. 187.

De lo anterior, en el presente asunto se concluye, que de acuerdo a lo expresado por el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,** el presunto nexo causal, sería la omisión del deber de notificar personalmente el acto administrativo suscrito por la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** y a través del cual liquidó el auxilio de cesantías de la señora **ÁNGELA MARÍA CORREA MORENO; por lo que habría** infringido de esta manera, el artículo 30 del Decreto 3118 de 1968 que dispone:

> *"**Artículo 30º.- Notificación y recursos.** Las liquidaciones del auxilio de cesantía de empleados público y trabajadores oficiales, de que tratan los artículos 22, 25, 27 y 28 se notificarán a los interesados, quienes si las encuentran correctas deberán suscribirlas en señal de asentimiento.*
> *(...)"*

Ahora bien, en el caso que nos ocupa la ausencia de nexo de causalidad, se evidencia en la inexistencia de acto administrativo suscrito por la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** y a través del cual se liquidara el auxilio de cesantía de la señora **ÁNGELA MARÍA CORREA MORENO,** ya que la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** en momento alguno suscribió acto administrativos de esta naturaleza y por tanto, tampoco le correspondía notificarlos a los funcionarios interesados.

Prueba de lo anterior se encuentra en el Oficio S-GNPS-15-076065 de agosto 11 de 2015, en donde el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** manifestó lo siguiente:

*"2. En relación al punto 2: Le informo que una vez revisadas las historias laborales de los funcionarios que laboraron en el servicio exterior entre el 1° de julio de 1990 y el 28 de febrero de 1991, **no se encontró registro de copia de las liquidaciones de cesantías suscritas por Usted** en dicho periodo."*[31] *(Negrillas ajenas al texto)*

En el mismo sentido, ninguna imputación normativa cabe en contra de mi representada, pues como lo entiende el Honorable Consejo de Estado, *"... las **imputaciones jurídicas** aluden a la fuente normativa de deberes y de obligaciones - constitucionales, legales, administrativas, convencionales o contractuales - en las cuales se plasma el derecho de reclamación."*[32]

Por consiguiente, ante la inexistencia de actos administrativos suscritos por la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA,** es claro que no tenía el deber de notificarlos y por tanto, el nexo de causalidad invocado por el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** desaparece al no fundamentarse más que en la afirmación realizada en la demanda y al carecer de prueba que lo demuestre.
Así, en el caso que nos ocupa, no existe relación de imputación ninguna entre el daño causado y la conducta desplegada por mi representada, **faltando por entero el elemento del nexo de causalidad o de imputación** sin cuya concurrencia la responsabilidad no puede configurarse.

Así lo explica el profesor Fernando de Trazegnies, al expresar, *"La relación de responsabilidad extracontractual descansa, entonces, en una relación de causalidad. Por consiguiente, para que exista responsabilidad extracontractual se requiere que exista un nexo causal entre la víctima y el autor del hecho dañino."*[33] En el caso que nos ocupa esa relación de causalidad es inexistente.

---

[31] Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio S-GNPS-15-076065 de agosto 11 de 2015, Pág. 2.

[32] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 25 de julio de 2002, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad.13744.

[33] Fernando de Trazegnies, LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, Tomo I, Quinta Edición, Editorial Temis, Bogotá, 1999, Pág. 187.

En consecuencia, en el presente asunto, ante la inexistencia de nexo de causalidad, las pretensiones de la demanda se encuentran llamadas al fracaso frente a la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA.**

6. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD - LA CAUSA DETERMINANTE DEL DAÑO CUYA REPARACIÓN SE DEMANDA RADICA EN EL DESACATO DE LO ORDENADO EN SENTENCIAS DE TUTELA EN ESPECIAL LA T – 083 DE 2004 – CULPA DE LA VICTIMA.

La ausencia de nexo de causalidad en el presente asunto se concreta en el persistente desacato por parte de la entidad demandante a lo ordenado en diferentes sentencias proferidas por la H. Corte Constitucional, y las cuales constituyen una doctrina probable que el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** estaba obligada a cumplir.

En efecto, la H. Corte Constitucional profirió, incluso antes de proferir la Sentencia C – 535 de 2005 declarando la inexequibilidad del artículo 57 del Decreto 10 de 1992, una serie de sentencias de tutela, en las cuales claramente ordenaba al Ministerio de Relaciones Exteriores a liquidar las prestaciones sociales y seguridad social teniendo en cuenta el salario realmente devengado por el empleado y no otro diferente.

En efecto, en Sentencia T – 1016 de agosto nueve de 2000, la H. Corte Constitucional consideró al respecto:

*"El señor Pedro Felipe Valencia López reclamó por escrito, mediante el ejercicio del derecho de petición, al **Ministerio de Relaciones Exteriores** y este no varió su comportamiento cuando ha debido hacerlo. De manera que la violación a los derechos fundamentales se ha dado, en su origen, en el referido Ministerio. El Estado ha debido responder por escrito a los reclamos de esa persona en forma justa y razonada. Si la reclamación no prosperó cuando ha debido prosperar, si antes de la reclamación ya se había remitido información equivocada y abiertamente inconstitucional, la orden para la protección de los derechos fundamentales conculcados no puede ser otra que la de **exigirle al Ministerio de Relaciones Exteriores que envíe nuevamente a los Seguros Sociales la base que legalmente corresponde para la pensión de vejez del señor Valencia López, a saber: los salarios que él devengo en su cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en el Japón, haciendo como es lógico la conversión de los yenes a moneda colombiana para que este nuevo elemento de juicio sea tenido en cuenta por los Seguros Sociales en una correcta liquidación de la pensión de vejez del solicitante.***

*Por otro aspecto, **como los aportes remitidos por el Ministerio de Relaciones al ISS correspondieron a un salario menor no devengado por el señor Valencia, el ISS tiene derecho a que se le remitan los aportes bien liquidados, según el salario real (no el de la equivalencia)** y esta obligación es tanto del empleador como del trabajador, para lo cual el ISS indicará cuál es la suma que se le adeuda. Cuando principie a operar el reajuste pensional, el I.S.S. podrá descontar de la mesada las sumas que no se cancelaron por aporte, hasta cuando se cubra la totalidad de lo debido."*[34] *(Resaltado ajeno al texto)*

Sin embargo, la anterior sentencia, no es un fallo aislado, por el contrario, la H. Corte Constitucional, reiteró esta posición en sentencia T – 534 de 2001, considerando sobre esta inconstitucional práctica

---

[34] Corte Constitucional, M.P. Alejandro Martínez Caballero, Sentencia T – 1016 de 2000.

de liquidar las prestaciones sociales con base en un salario que realmente no devengaba el funcionario, lo siguiente:

*"**Sobre el particular la Corte ha desarrollado una línea jurisprudencial según la cual la cotización de las pensiones debe realizarse teniendo en cuenta la asignación correspondiente al cargo efectivamente desempeñado y no la correspondiente a un cargo diferente** pues de lo contrario se incurre en prácticas discriminatorias pues a trabajadores que han recibido una asignación mayor se les reconocen prestaciones económicas en montos correspondientes a trabajadores de asignaciones menores.*

*Y en relación con servidores públicos del servicio exterior, la Corte ha indicado que un artículo de un decreto que reglamentó el anterior régimen de la carrera diplomática no es el aplicable para computar la mesada pensional (Artículo 57 del Decreto 10 de 1992), mucho más si permite la liquidación de prestaciones económicas con base en asignaciones inferiores a las recibidas. **Precisamente por ello ha inferido que, aún en caso de estar vigente, esa norma admite la excepción de inconstitucionalidad por desconocer el derecho de igualdad y la universalidad como principios de la seguridad social.**"*[35] *(Resaltado ajeno al texto)*

No obstante, y a pesar de los múltiples pronunciamientos de la H. Corte Constitucional, el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** conocedora ya de la inconstitucionalidad del artículo 57 del Decreto 10 de 1992, continuó liquidando los aportes de cesantías de los funcionarios de la planta externa, teniendo como base un salario que realmente no devengaban estos funcionarios, es decir, continuaban vulnerando el derecho a la igualdad y de no discriminación garantizado en varias ocasiones por sentencias en acción de tutela.

El desacato del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,** no sólo fue frente a los anteriores pronunciamientos de la H. Corte Constitucional en los acápites considerativos de las sentencias, también desconoció una orden expresa de la H. Corte Constitucional en la cual, prevenían expresamente al **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** con el carácter vinculante de la imperante aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.

En efecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T – 083 de 2004, resolvió lo siguiente:

*"**CUARTO.** Teniendo en cuenta que existe una línea jurisprudencial consolidada, en el sentido de sostener que la liquidación de aportes para pensión de quienes hicieron parte del cuerpo diplomático en el exterior debe hacerse tomando como base el salario realmente devengado y nunca un salario inferior, se **PREVIENE al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre sus efectos vinculantes, para que la precitada doctrina sea observada y aplicada en casos semejantes.**"*[36] *(Resaltado ajeno al texto)*

Por lo tanto, el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** desde el 9 de agosto de 2000 conocía de la inconstitucionalidad del artículo 57 del Decreto 10 de 1992 y en consecuencia, tenía pleno conocimiento de la obligación de liquidar los aportes de cesantías de los empleados de la planta externa de la entidad con base en el salario realmente devengado y no otro diferente, ya que así se lo había ordenado la H. Corte Constitucional en diferentes tutelas, en las que ordenaba al **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a esta norma.

---

35 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Sentencia T – 534 de 2001.

36 Corte Constitucional, M.P. Rodrigo Escobar Gil, Sentencia T – 083 de 2004.

Sin embargo, a pesar de lo ordenado en fallos de tutela de la H. Corte Constitucional, el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** en oficio DITH 4744 del 24 de enero de **2012** negó la reliquidación de las cesantías correspondientes a los años que ejercicio funciones en la planta externa.

Nótese como el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,** en el presente asunto, no sólo omitió aplicar la excepción de inconstitucionalidad que le ordenaba la H. Corte Constitucional en los fallos de tutela proferidos entre el año 2000 y 2005; a la vez, desconoció abiertamente la declaración de inexequibilidad del artículo 57 del Decreto 10 de 1992 en sentencia C – 535 de 2005.

Debido a lo anterior es absolutamente claro que el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** a pesar de conocer su deber de inaplicar el artículo 57 del Decreto 10 de 1992 en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, permitió que se causaran intereses moratorios desde el 9 de agosto de 2000, responsabilidad que se agrava al tener en cuenta, que en el año 2013 negó la reliquidación de las cesantías a pesar de conocer la inexequibilidad de la norma desde el año 2005.

En consecuencia, los intereses causados desde el nueve de agosto de 2000 en adelante son imputables de manera exclusiva al **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** y no a la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA.**

Por consiguiente, en el presente asunto las pretensiones están llamadas al fracaso, ya que no existe un nexo de causalidad entre la conducta de mi representada y el daño sufrido por el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**, pues en este elemento descansa la obligación de indemnización que la entidad actora, pretende, criterio que comparte el Honorable Consejo de Estado al expresar:

"El elemento de responsabilidad 'nexo causal' se entiende como la relación necesaria y eficiente entre la conducta imputada y probada o presumida, según el caso, con el daño demostrado o presumido. La jurisprudencia y la doctrina indican que ***para poder atribuir un resultado a una persona como producto de su acción o de su omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a ésta por una relación de causa a efecto, no simplemente desde el punto de vista fáctico sino del jurídico.***"[37] *(Negrilla fuera de Texto)*

En el mismo sentido, ninguna imputación normativa cabe en contra de mi representada, pues como lo entiende el Honorable Consejo de Estado, *"... las* ***imputaciones jurídicas*** *aluden a la fuente normativa de deberes y de obligaciones - constitucionales, legales, administrativas, convencionales o contractuales - en las cuales se plasma el derecho de reclamación."*[38]

Imputaciones jurídicas que aquí son inexistentes, pues como se anotó anteriormente la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** en momento alguno incurrió en culpa grave, ya que nunca tuvo la obligación de notificar acto administrativo alguno.

---

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Dra. María Elena Giraldo, Sentencia del 11 de noviembre de 2002, Rad. 13818.

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 25 de julio de 2002, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad.13744.

Así, se observa que no existe relación de imputación ninguna entre el daño causado y la conducta desplegada por mi representada, **faltando por entero el elemento del nexo de causalidad o de imputación** sin cuya concurrencia la responsabilidad no puede configurarse.

Así lo explica el profesor Fernando de Trazegnies, al expresar, *"La relación de responsabilidad extracontractual descansa, entonces, en una relación de causalidad. Por consiguiente, para que exista responsabilidad extracontractual se requiere que exista un nexo causal entre la víctima y el autor del hecho dañino."*[39] En el caso que nos ocupa esa relación de causalidad es inexistente.

Por lo tanto, ante la ausencia de nexo de causalidad, las pretensiones se encuentran llamadas al fracaso.

7. ***AUSENCIA DE FUNDAMENTO DE RESPONSABILIDAD LA DEMANDA DESCONOCE LA EXISTENCIA DEL OBSTÁCULO NORMATIVO QUE IMPEDÍA LA PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE LIQUIDABAN EL AUXILIO DE CESANTÍAS.***

La demanda plantea la tesis según la cual la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** al ocupar el cargo de Asesor, código 1020, grado 01 de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos se habría encontrado en el deber de liquidar el auxilio de cesantía de los funcionarios de la planta externa del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** y habría tenido la función de notificar dichos actos administrativos a los funcionarios respectivos.

Lo anterior, tal como lo manifestó el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** en el hecho segundo de la demanda, el cual expresa:

*"**SEGUNDO.** En virtud de lo dispuesto por los artículos 29 de la Constitución Política, **30 del Decreto 3118 de 1968,** 44 y siguientes del Decreto Ley 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, 32 del Decreto 2126 de 1992, 23 del Decreto 1295 de 2000, el artículo 23 del Decreto 2105 de 2001 y 25 del Decreto 110 de 2004, **el Subsecretario de Recursos Humanos** o posteriormente el Director General de Desarrollo del Talento humano o seguidamente el Director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, o quien haga sus veces, en calidad de jefe de la dependencia competente, **tenía la obligación legal de liquidar y notificar personalmente el auxilio de cesantías a todos los funcionarios del Ministerio,** independientemente si estos prestan sus servicios en planta interna o en el exterior." (Negrilla y subrayado ajenos al texto)*

Así mismo, consideró el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** en los fundamentos de la demanda, que el nexo causal en el presente asunto se fundamenta en lo siguiente:

*"En cuanto al nexo causal dentro de la acción de repetición se define como aquel vínculo o línea inteligible que vincula el hecho generador ejemplificado **con la ausencia de notificación del acto de liquidación de cesantías** con el detrimento patrimonial materializado en la sentencia o acuerdo conciliatorio.*

*Como resultado de la anterior afirmación, **resulta evidente la incidencia de la no notificación en los fallos judiciales proferidos en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores,** o en las conciliaciones extrajudiciales, dentro delas cuales se ha obrado con fundamento en los precedentes*

---

39 Fernando de Trazegnies, LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, Tomo I, Quinta Edición, Editorial Temis, Bogotá, 1999, Pág. 187.

judiciales con el fin de evitar el incremento del daño patrimonial que ocasionaría una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción Contenciosa." (Resaltado ajeno al texto)

De lo anterior, en el presente asunto se concluye, que de acuerdo a lo expresado por el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,** se demanda a mi representada porque habría incurrido en la omisión del deber de notificar personalmente el acto administrativo suscrito por la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** y a través del cual liquidó el auxilio de cesantías de la señora **ÁNGELA MARÍA CORREA MORENO;** infringiendo supuestamente el artículo 30 del Decreto 3118 de 1968 que dispone:

> *"**Artículo 30º.- Notificación y recursos.** Las liquidaciones del auxilio de cesantía de empleados público y trabajadores oficiales, de que tratan los artículos 22, 25, 27 y 28 se notificarán a los interesados, quienes si las encuentran correctas deberán suscribirlas en señal de asentimiento.*
> *(...)".*

Sobre el particular habrá de reiterarse que **NO EXISTE NINGUNA NORMA QUE ATRIBUYERA A MI REPRESENTADA LA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS DE LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS EN COMENTO,** pero además, debe anotarse que el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, DESCONOCIÓ LA EXISTENCIA DE LO CONSIDERADO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO, FRENTE A LA PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD ANTE LA EXISTENCIA DE OBSTÁCULOS NORMATIVOS.**

En efecto, durante la vigencia del artículo 57 del Decreto 10 de 1992, los empleados de la planta externa no tenían argumento alguno que permitiera inferir que el auxilio de las cesantías a las que tenían derecho podían ser objeto de reclamación, sin embargo, a partir de la Sentencia C – 535 de 2005, tal situación se modificó y es a partir de esta fecha, es decir, desde el año 2005, que se comienzan a computar los términos de prescripción de la obligación legal de pagar debidamente el auxilio de las cesantías.

Sin embargo, por el periodo que el artículo 57 del Decreto 10 de 1992 estuvo vigente, privaron a los funcionarios de la planta externa de presentar cualquier clase de reclamación, ya sea judicial o no, ya que no podían reclamar por una obligación inexigible al **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,** criterio que comparte el H. Consejo de Estado al considerar:

> *"Sin embargo, **mientras estuvieron vigentes,** los parágrafos de los artículos 28 de los decretos 25 de 1993 y 65 de 1994, y el parágrafo del artículo 29 del Decreto 133 de 1995 **mantuvieron privado de este derecho al personal en retiro, que, por tanto, no podía reclamarlo a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares o, por mejor decir, la obligación de esta entidad no era entonces exigible.** En consecuencia, **mal podía hacerse correr la prescripción contra quien no podía exigir su derecho,** y al decidirlo así la Subsección falladora aplicó indebidamente el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990."*[40] *(Resaltado ajeno al texto)*

Situación particular que asume mayor importancia al tener en cuenta que el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** conocía claramente esta posición, ya que en sentencia de noviembre cuatro de 2010, y en la cual justamente intervino como demandada, el H. Consejo de Estado aclaró frente a la prescripción de las obligaciones laborales con la mediación de los obstáculos normativos:

---

[40] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, Sentencia de diciembre tres de 2002, Rad. S-764.

"Pero además, partiendo de la base de que el problema jurídico que se presenta aquí corresponde a la forma de liquidación de las cesantías en donde la entidad lo hizo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 del Decreto 10 de 1992,[41] que ordena 'las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones equivalentes en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores', norma que, como ya se indicó, fue declarada inexequible mediante sentencia C-535 de 2005.

Conforme a lo antes indicado ***se precisa que existía un obstáculo de orden legal que no permitía liquidar las prestaciones de los empleados del servicio exterior,*** *con base en lo que devengaban sino sólo de acuerdo con lo valores equivalentes a los de la planta interna, de manera que se puede decir, como ya lo ha precisado esta Sala,* ***que el derecho a devengar la cesantía liquidada con base en lo devengado en el servicio exterior, sólo surgió, con certeza, a partir de la expedición de las sentencia referida, pues antes, es evidente que la entidad pública se abstenía de liquidarla.***

A partir de la remoción del obstáculo normativo cuya sentencia fue proferida el 24 de mayo de 2005, el demandante estaba legitimado para pedir el reconocimiento de su derecho, por ende, no es procedente declarar la ineptitud sustantiva de la demanda, *conforme lo pidió la entidad recurrente en el recurso de alzada."[42] (Resaltado ajeno al texto)*

Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, la demandante incurre en un claro argumento temerario para incoar sus pretensiones: considerar que una supuesta falta al deber de notificar el acto de liquidación de cesantías habría sido la causa por la cual se genera el daño, cuando en realidad, y así lo sabe con certeza la entidad demandante, es indiferente si los actos administrativos fueron o notificados oportunamente a los destinatarios, ya que ante la existencia del obstáculo de orden legal los funcionarios dela planta externa, y en especial la señora **ÁNGELA MARÍA CORREA MORENO** no se encontraban legitimados para presentar reclamación alguna ante el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, pues esa posibilidad solamente nació a la vida jurídica una vez declarada la inconstitucionalidad de las normas en las que se basaba la liquidación a debatir.**

En consecuencia, ante la imposibilidad de prescripción de la obligación de pagar el auxilio de cesantías, en el presente asunto, se rompe el fundamento de responsabilidad alegado en la demanda, y por tanto las pretensiones se encuentran llamadas al fracaso.

8. INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO.

Para sustentar la presente excepción, se debe traer a colación nuevamente, el error en el que incurre el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,** al afirmar que el daño sufrido es consecuencia de la omisión de notificar los actos administrativos que liquidaron el auxilio de cesantías.

En efecto, como se anotó en líneas anteriores, de conformidad con la doctrina probable del H. Consejo de Estado, la señora **ÁNGELA MARÍA CORREA MORENO** no podía realizar reclamación alguna frente a la liquidación de las cesantías, debido a un obstáculo normativo, como lo es la

---

[41] El Decreto 1181 de 1999 y Decreto 274 de 2000, precisaban que la liquidación de las prestaciones sociales se haría en términos similares.

[42] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Sentencia de noviembre cuatro de 2010, Rad. 1496-09.

presunción de legalidad que cobijaba el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, la cual sólo fue desvirtuada en sentencia C – 535 de 2005 proferida por la H. Corte Constitucional.

Debido al anterior obstáculo normativo, en el presente asunto, las obligaciones relacionadas con el pago del auxilio de cesantías no prescribían durante la vigencia del artículo 57 del Decreto 10 de 1992, y el término sólo podría computarse a partir del 24 de mayo de 2005, fecha en la cual, la H. Corte Constitucional profirió la Sentencia C – 535 de 2004 declarando inexequible la norma aludida.

Así las cosas, ante la imposibilidad de prescripción antes de la fecha indicada, la obligación del pago del auxilio de cesantías, **conservaba su exigibilidad** y por lo tanto, el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** se encontraba en la obligación de pagar a la señora **ÁNGELA MARÍA CORREA MORENO** la reliquidación del auxilio de cesantías, teniendo como base, el salario realmente devengado y no otro diferente.

En efecto, el deudor de una obligación, no puede afirmar que el cumplimiento de la prestación es un perjuicio, aún más, cuando la fuente de la obligación es la ley, ya que el artículo 27 del Decreto 3118 de 1968 es la norma que impone la obligación al **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** de pagar el auxilio de cesantías, en efecto, la norma dispone:

> *"**Artículo 27º.- Liquidaciones anuales.** Cada año calendario contado a partir del 1 de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.*
> *(...)"*

Ahora bien, tanto el H. Consejo de Estado como la doctrina especializada, ha considerado que es objeto de indemnización el daño antijurídico, el cual ha sido definido por el primero de la siguiente manera:

"Según se ha visto, condición necesaria para que desencadene la reparación es que el daño sea antijurídico, calificación que se obtiene de constatar que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño de 'causales de justificación.'."[43]

Por lo tanto, debido a que la obligación de pago del auxilio cesantías con base en el salario realmente devengado por la señora **ÁNGELA MARÍA CORREO MORENO,** era una obligación exigible, el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** al cumplir su obligación en calidad de deudor no puede manifestar que sufrió un perjuicio y por consiguiente, de afirmar la existencia de un daño, este no podrá calificarse como antijurídico, ya que en virtud del artículo 27 del Decreto 3118 de 1968 se encontraba en el deber de soportarlo.

En consecuencia, ante la ausencia del requisito esencial de toda acción de responsabilidad, las pretensiones se encuentran llamadas a no prosperar.

---

[43] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, sentencia de octubre 21 de 1999, Rad. 10948-11643.

9. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD

El Ministerio de Relaciones Exteriores equivocadamente considera, que entre la Doctora Clara Inés Vargas de Lozada y los restantes demandados existe una solidaridad como consecuencia del daño sufrido por dicha entidad.

Sin embargo, tal apreciación es un enorme desatino y carece por completo de soporte jurídico, ya que la solidaridad entre dos personas, tiene como fuente las siguientes:

- **Legal:**

Es decir, por aquella señala en la ley, tal como sucede en virtud del artículo 2344 del Código Civil que prescribe que *"Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355."*

Situación la cual no se presenta en el presente asunto, ya que la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** tan sólo desempeñó el cargo de Asesor, código 1020 grado 01 durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de julio de 1990 y 17 de febrero de 1991, no ejerciendo nunca como Subsecretaria de Recursos Humanos, ni de Directora General de Desarrollo de Talento Humano y mucho menos Directora de Talento Humano tal como demuestra la certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que fue anexada con la demanda:

"Mediante Decreto No. 802 del 17 de abril de 1990, se le nombró en comisión en el cargo de Asesor, código 1020, grado 01, de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tomó posesión el 29 de junio de 1990 y lo desempeñó hasta el 17 de febrero de 1991."

Por consiguiente no se puede presentar una solidaridad entre las entidades demandas en virtud de la ley.

- **Convencional:**

Esta solidaridad exige que debe ser pactada ya que surge en virtud del contrato, y en ningún momento se presume salvo, en negocios mercantiles.

Por consiguiente, ante la inexistencia de un contrato, es obvio que la solidaridad que pretende el Ministerio de Relaciones Exteriores es inexistente e inviable.

- **Testamentaria:**

Esta fuente de la solidaridad, no exige mayor explicación, por cuanto en el caso concreto, no media testamento o sucesión alguna para configurarla.

Por lo tanto, **NO EXISTE SOLIDARIDAD ENTRE LA DOCTORA CLARA INÉS VARGAS SILVA Y LOS RESTANTES DEMANDADOS EN EL PRESENTE ASUNTO.**

10. GENÉRICA.

Solicito a la señora Juez se reconozca de manera oficiosa cualquier hecho exceptivo que resulte probado dentro del proceso y que enerve las pretensiones de la parte actora.

V.- PETICIÓN

Se reconozca la prosperidad de las excepciones propuestas y se denieguen las suplicas de la demanda; en consecuencia se condene en costas, agencias en derecho y demás gastos procesales al demandante.

VI.- PRUEBAS

Solicito se tenga como pruebas a favor de la parte demandada las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES:

1. Oficio S-GNPS-15-076065 de agosto 11 de 2015 expedido por el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.** Por medio del cual se demuestra que la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** no suscribió liquidaciones de cesantías o actos administrativos que la liquidarán en el periodo comprendido entre el primero de julio de 1990 y el 28 de febrero de 1991.
2. Calificación de funciones de marzo 31 de 1993 de la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA.** Por medio de la cual se demuestra que la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** fue calificada con calificación satisfactoria en el periodo comprendido entre el primero de julio de 1990 y 17 de febrero de 1991.
3. Oficio S-GALJI-16-025638 de marzo 15 de 2016 expedido por el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.** Por medio de la cual se demuestra que el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** no expide copia auténtica de las Actas del Comité de Conciliación por gozar de reserva legal conforme al literal "c" del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014.
4. Certificación de funciones de la Doctora Clara Inés Vargas Silva emitida el primero de abril de 2013 (Folio 71 y 72) aportada ante el Juzgado Veintidós Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá con la demanda en el proceso con radicado 110013336722 – 2014 – 00036 – 00, medio de control Repetición, obrando como demandante la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y la señora Clara Inés Vargas Silva y otros como demandados. Por medio de la cual se demuestra que el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** ha expedido dos certificaciones diferentes de las funciones desempeñadas por la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** sin que se encuentre la obligación o función de notificar o expedir actos administrativos relacionados con la liquidación del auxilio de cesantías de los funcionarios de la planta externa del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.**
5. Certificación de funciones de la Doctora Clara Inés Vargas Silva emitida el primero de abril de 2013 (Folio 56 y 57) aportada ante el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Oralidad del circuito de Bogotá con la demanda en el proceso con radicado 110013336034 – 2014 – 00018 – 00, medio de control Repetición, obrando como demandante la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y la señora Clara Inés Vargas Silva y otros como demandados. Por medio de la cual se demuestra que el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** ha expedido dos certificaciones diferentes de las funciones desempeñadas por la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** sin que se encuentre la obligación o función de notificar o expedir actos

administrativos relacionados con la liquidación del auxilio de cesantías de los funcionarios de la planta externa del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.**

6. Certificación de funciones de la Doctora Clara Inés Vargas Silva emitida el primero de abril de 2013 (Folio 116 y 117) aportada ante el Juzgado Veintidós Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá con la demanda en el proceso con radicado 110013336722 – 2014 – 00009 – 00, medio de control Repetición, obrando como demandante la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y la señora Clara Inés Vargas Silva y otros como demandados. Por medio de la cual se demuestra que el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** ha expedido dos certificaciones diferentes de las funciones desempeñadas por la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** sin que se encuentre la obligación o función de notificar o expedir actos administrativos relacionados con la liquidación del auxilio de cesantías de los funcionarios de la planta externa del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.**

TESTIMONIALES:

Solicito se fije fecha y hora para la recepción del testimonio de la señora **ALEJANDRA VALENCIA GARTNER** en calidad de Presidente del Comité Técnico de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien puede ser ubicada en el Ministerio de Relaciones Exteriores ubicado en la Calle 10 No. 5 – 51 de la ciudad de Bogotá D.C. La testigo declarará sobre los hechos de la demanda y su contestación, y en particular sobre cuáles fueron las razones por las cuales el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad demandante decidió iniciar la presente acción de repetición en contra de los demandados y por qué no se ejerció la acción en contra del funcionario que denegó la solicitud de reliquidación que da lugar a este proceso mediante oficio DITH 4744 del 24 de enero de 2012; así mismo indicará cual fue la posición del Comité sobre el aspecto subjetivo que exige le presente medio de control en la conducta del demandado.

OFICIOS:

- Solicito se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores, representada legalmente por la Ministra **MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUELLAR**, o quien haga sus veces, ubicado en la Calle 10 No. 5 – 51 de la ciudad de Bogotá D.C., para que se sirva suministrar en copia auténtica con destino a este proceso las liquidaciones del auxilio de cesantías de la señora **ANA CECILIA MANRIQUE DE LA VEGA** suscrita por la Doctora **CLARA INÉS VARGAS SILVA** en el periodo comprendido entre el primero de julio de 1990 y el 28 de febrero de 1991.

- Solicito se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores, representada legalmente por la Ministra **MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUELLAR**, o quien haga sus veces, ubicado en la Calle 10 No. 5 – 51 de la ciudad de Bogotá D.C., para que se sirva suministrar en copia auténtica con destino a este proceso de los siguientes documentos:

  - Resolución No. 1400 de junio 29 de 1988 y *"por la cual se establece el Manual de Funciones y requisitos de los diferentes empleos de la Planta de Personal Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores".*

  - Comunicado de prensa de marzo 14 de 2014 y el cual se titula de la siguiente manera:

"Comunicado de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la liquidación de prestaciones sociales de personas vinculadas en el servicio exterior de la Cancillería, antes de 2005"

- Solicito se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores, representada legalmente por la Ministra **MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUELLAR**, o quien haga sus veces, ubicado en la Calle 10 No. 5 – 51 de la ciudad de Bogotá D.C., para que se sirva certificar lo siguiente:

  - Nombre del funcionario o funcionarios que suscribían la correspondencia de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos desde el cinco de julio de 1991.

  - Nombre del funcionario o funcionarios que suscribían la correspondencia de la Oficina Jurídica en el periodo comprendido entre el cinco de julio de 1991 y 31 de diciembre de 1993.

- Solicito se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores, representada legalmente por la Ministra **MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUELLAR**, o quien haga sus veces, ubicado en la Calle 10 No. 5 – 51 de la ciudad de Bogotá D.C., para que se sirva certificar lo siguiente:

  - Informar y remitir copia de cada una de las sentencias y conciliaciones judiciales proferidas y celebradas con anterioridad a la Sentencia C – 535 de 2005 y que se relacionen con la liquidación y pago del auxilio de cesantías de funcionarios que desempeñaron cargos en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

- Solicito se oficie al Juzgado Veintidós Administrativo de Descongestión del Circuito Bogotá D.C., ubicado en la Calle 12 N0. 9 – 45 Complejo Judicial El Virrey de la ciudad de Bogotá D.C., para que se sirva remitir en copia auténtica el siguiente documento:

  - Certificación de funciones de la Doctora Clara Inés Vargas Silva emitida el primero de abril de 2013 (Folio 71 y 72) aportada con la demanda en el proceso con radicado 110013336722 – 2014 – 00036 – 00, medio de control Repetición, obrando como demandante la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y la señora Clara Inés Vargas Silva y otros como demandados.

- Solicito se oficie al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Bogotá D.C., ubicado en la Carrera séptima No. 13 – 27 Piso 8 de la ciudad de Bogotá D.C., para que se sirva remitir en copia auténtica el siguiente documento:

  - Certificación de funciones de la Doctora Clara Inés Vargas Silva emitida el primero de abril de 2013 (Folio 56 y 57) aportada con la demanda en el proceso con radicado 110013336034 – 2014 – 00018 – 00, medio de control Repetición, obrando como demandante la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y la señora Clara Inés Vargas Silva y otros como demandados.

Hurtado Montilla
abogados

- Solicito se oficie al Juzgado Veintidós Administrativo de Descongestión del Circuito Bogotá D.C., ubicado en la Calle 12 N0. 9 – 45 Complejo Judicial El Virrey de la ciudad de Bogotá D.C., para que se sirva remitir en copia auténtica el siguiente documento:

  - Certificación de funciones de la Doctora Clara Inés Vargas Silva emitida el primero de abril de 2013 (Folio 116 y 117) aportada con la demanda en el proceso con radicado 110013336722 – 2014 – 00009 – 00, medio de control Repetición, obrando como demandante la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y la señora Clara Inés Vargas Silva y otros como demandados.

VII.- ANEXOS

1. Lo citado en el acápite de pruebas.

IX.- NOTIFICACIONES

La Doctora Clara Inés Vargas de Lozada recibirá en la Calle 77 No. 9 – 40 apartamento 201 de la ciudad de Bogotá D.C.; dirección electrónica: clarainesvargas96@gmail.com

Por mi parte las recibiré en la Calle 97 A No. 8 – 10 Oficina 502 de Bogotá D.C., o en la Secretaría de su Despacho; dirección electrónica: ehm@hurtadomontilla.com

Señora Juez,

ERNESTO HURTADO MONTILLA
C.C. No. 79.686.799 de Bogotá
T.P. No. 99.449 del C. S. De la J.

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CANCILLERÍA

S-GNPS-15-076065

Bogotá, D.C., 11 de Agosto de 2015

Señora
CLARA INES VARVAS SILVA
Clarainesvargas96@gmail.com
Calle 77C No. 9 – 40, Apto. 201
Bogotá D.C.

Asunto: Derecho de Petición de Documentos del 17 de junio de 2015

Respetada Señora:

Dando alcance al oficio DITH del 7 de julio de 2015, mediante el cual se le solicitó prórroga hasta el 25 de agosto del presente año para emitir respuesta al punto 1 y 2 de la petición citada en el asunto, de manera atenta me permito informarle lo siguiente:

1. En relación al punto 1: Le informo que de acuerdo con la Resolución No. 3610 del 12 de junio de 2015, para efecto de expedirle las fotocopias, usted debe consignar en la cuenta No. 0060703019 del Banco Citibank, a nombre del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el valor de ciento treinta y nueve (139) fotocopias, a razón de ciento sesenta pesos m/cte., ($160), por cada una, es decir, un total de veintidós mil doscientos cuarenta pesos m/cte., ($22.240).

   Una vez efectuada la consignación, es necesario hacer entrega de la misma a la Tesorería del Fondo Rotatorio del Ministerio, ubicada en la carrera 6 No. 9-46, Oficina 403, en la ciudad de Bogotá D.C., para que expida el correspondiente recibo de caja, el cual debe entregar en esta Dirección, con el fin de que se remitan las fotocopias requeridas.

   De conformidad con lo anterior, los términos del derecho de petición impetrado por usted quedan suspendidos hasta tanto no se haga el respectivo pago del valor de las copias solicitadas.

2. En relación al punto 2: Le informo que una vez revisadas las historias laborales de los funcionarios que laboraron en el servicio exterior entre el 1° de julio de 1990 y el 28 de febrero de 1991, no se encontró registro de copia de las liquidaciones de cesantías suscritas por Usted en dicho periodo.

Firmado Digitalmente por: 2015/08/11

Cordialmente,

ROCIO GUZMAN MONTOYA
Directora de Talento Humano

Anexos: .
Copia(s) Electronica(s): ""/.
Copia(s) Física(s): .
ALIZ LORENA PASTAS MIMALCHI / ERLY PATRICIA GARCIA VELANDIA /
0225.0564.0000 - Historia laboral - planta de personal - historia laboral

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA: Marzo 31 de 1993

NOMBRE Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: CLARA INES VARGAS DE LOSADA

PROFESION:

CATEGORIA EN EL ESCALAFON:

CARGO ACTUAL :

DEPENDENCIA EN LA QUE TRABAJA:

LAPSO EVALUADO: JULIO 1o DE 1990 - FEBRERO 17 DE 1991.

INDICADORES: S = SATISFACTORIO

I = INSUFICIENTE

a).-Adaptabilidad :--Es persona que se adapta con facilidad a la responsabilidad que se le asigne.

.-Sociabilidad :-Tiene el sentido de compañerismo y sabe escuchar inquietudes de sus colaboradores.

S	I

b).-Condiciones para:

Dirigir:-Dada su preparacionn profesional y experiencia, tiene las condiciones de dirección

-Supervisar:-Mantiene un control estricto de las tareas encomendadas a sus subalternos.

HOJA DE VIDA
FOLIO No. 246

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

-Calificar Personal :-Tiene un criterio de justicia y equidad para calificar.

S	I
X	

c).-Conducta:-Nuhca se ha tenido observación respecto a su conducta personal.

S	I
X	

d).- Criterio:-~~Por su profesionalidad y experiencia~~ sus criterios son tenidos en cuenta.

- Discreción:-~~Siempre ha encontrado~~ discreción en todas sus actuaciones y la debida reserva de los asuntos encomendados.

S	I
X	

e).-Cumplimiento del Deber:-Es funcionaria que cumple con el deber a entera satisfacción.

S	I
X	

HOJA DE VIDA
FOLIO 145

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

f)-.Cumplimiento de Compromisos particulares:--No he tenido observación respecto a este punto.

X S	I

g).-Capacidad de exposición verbal:--Se desenvuelve con facilidad en sus posiciones orales, empleando la lógica cartesiana en sus razonamientos.

X S	I

h).- Iniciativa: Es persona que aporta iniciativas útiles para la institución

X S	I

i).- Lealtad: Siempre ha mantenido lealtad para con la institución y sus superiores.

-Espiritu de Cooperación:-En las tareas de equipo, siempre ha demostrado un gran espiritu de cooperación.

-Compañerismo: Nunca tuve queja de sus colaboradores.

X S	I

HOJA DE VIDA
FOLIO No. 1149

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

j).- Organización: Es persona que tiene el don de la organización de los asuntos que trata.

S	I
X	

k).- Preparación Profesional: Profesionalmente ha demostrado su competencia el constante afán de superación.

S	I
X	

CONCEPTO ANALITICO GLOBAL
SOBRE EL FUNCIONARIO

Tengo el mejor concepto de la calificada, como persona particular y como funcionaria, habiendo demostrado profesionalmente su competencia y la utilidad de sus aportes a la institución,

En mi concepto y con base en los factores aquí desarrollados considero que la evaluación es:

S	I
X	

ALVARO ROCHA LALINDE EMBAJADOR.

NOMBRE FIRMA Y CARGO DEL CALIFICADOR

HOJA DE VIDA
FOLIO No. 1643

537

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CANCILLERÍA

S-GALJI-16-025638

Bogotá, D.C., 15 de Marzo de 2016

Señora
Clara Inés Vargas Silva
Calle 77 No. 9 – 40, apto. 201.
clarainesvargas96@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta petición de copias auténticas del Acta No. 235 de 21 de octubre de 2013

Respetada señora:

En atención a su petición presentada el 3 de marzo de 2016, en la cual solicita dos copias auténticas del Acta No. 235 del 21 de octubre de 2013 del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores, a continuación se brinda respuesta íntegra a su solicitud en los siguientes términos:

El artículo 74 de la Constitución Política de Colombia dispone que *"todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley."*

No obstante lo anterior, la Ley 1712 de 2014, establece excepciones al derecho de información, previstas en el artículo 4, en los siguientes términos:

> *"En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática.*
>
> *(...)"* (Subraya fuera del texto)

Así las cosas, se debe atender a los límites establecidos en la Constitución y la Ley para acceder a la información pública, los cuales estarán acordes con los principios de una sociedad democrática.

De acuerdo con lo anterior, es preciso manifestarle que el documento solicitado, goza de reserva legal, por las razones que a continuación se exponen:

a. Reserva legal: secreto profesional

Dentro de las restricciones que puede establecer la ley, conforme con el mandato constitucional, el literal c del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 "*por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*", reconoce la restricción de suministrar información respaldada por el secreto profesional al disponer:

> *"Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Es toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos:*
>
> *(...)*
>
> *c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011."* (Subraya fuera del texto).

En ese sentido, la Corte Constitucional ha definido el secreto profesional como *"la información reservada o confidencial que se conoce por el ejercicio determinada profesión o actividad"*[1] y en sentencia No. T-073A/96, del 22 de septiembre de 1966, M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, se refirió al deber de reserva propio del secreto profesional en los siguientes términos:

> *"Se trata de algo más que de la simple discreción, pues el secreto implica un deber de reserva plena y total. Como deber, supone un vínculo jurídico, un lazo interpersonal en torno a un objeto corporal o incorporal del que se comparte el conocimiento. La reserva significa ocultar al vulgo y dejar para sí el objeto conocido, con el fin de no alterar la intimidad de la persona. Se reserva para la privacidad o exclusividad, con un doble fin: primero, para no dejar indefensa a la persona, al despojarla de la introspección necesaria para vivir dignamente, con su privacidad natural. Y segundo, por la honra, buen nombre y buena fama del depositante del secreto, que deben quedar incólumes. Se habla de reserva, lo cual indica que el conocimiento se guarda para algo específico, que debe ser utilizado en la confidencialidad y exclusividad propias del oficio. Se viola el secreto cuando se divulga, no necesariamente cuando se revela ante quienes también deben, jurídicamente hablando, compartir la reserva."*

[1] Sentencia Corte Constitucional. Sentencia C-301/12.

Frente a la reserva legal que cobija el secreto profesional, se resalta que en las sesiones de Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio se ventilan los estudios jurídicos de los abogados de la Entidad, los cuales guardan el secreto profesional de éstos con el Ministerio, de manera que tales reposan en el Acta solicitada.

Cabe anotar, que el secreto profesional no se restringe al ámbito estrictamente jurídico, ya que se relaciona con toda profesión, en la cual se tiene una relación de confianza entre las partes y se pueda obtener información confidencial que se conoce por el profesional en virtud de su actividad.

De manera que, el secreto profesional también se subsume dentro del conocimiento que detenta cada uno de los miembros del Comité de Conciliación sobre los procesos de la Entidad y que son expuestos en las sesiones, junto con su opinión jurídica, en el caso de los miembros que son abogados, u opinión financiera, para aquellos que son economistas o financieros, o de cualquier otra naturaleza según su profesión.

b. Reserva legal: proceso deliberativo de los servidores públicos

Es preciso traer a colación, lo dispuesto en el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, que prevé la reserva legal de cara a los documentos que contengan procesos deliberativos de los funcionarios públicos, lo anterior atendiendo a la salvaguarda de los intereses públicos que se pueden ver afectados, así:

> *"Es toda aquella información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal o constitucional:*
> *(...)*
> *Parágrafo.* ***Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos."*** (Negrilla fuera del texto).

Sobre el particular se precisa que, al ser los miembros que integran el Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores funcionario públicos, se configura la primera condición prevista en el parágrafo antes descrito.

De igual modo, y en atención a la segunda exigencia establecida en la norma objeto de estudio, se tiene que, tales servidores públicos previo a la adopción de cualquier decisión de los casos ante ellos ventilados deben surtir un proceso deliberatorio a fin de contar con las herramientas necesarias a fin de decidir lo pertinente, es claro que éste proceso, implica expresar sus opiniones, puntos de vista y análisis, los cuales se consignan en las respectivas actas.

Todo el proceso deliberativo que se surte al interior del Comité de Conciliación se documenta de forma fidedigna en las Actas que elevan de cada sesión, gozando estos documentos de reserva legal en virtud de la Ley 1712 de 2014.

Por lo anterior, si bien el acceso a la información es un derecho consagrado constitucional y legalmente, lo cierto es también que, el mismo no es absoluto y como tal encuentra sus límites en la misma Constitución y la Ley, de manera que, su ejercicio puede ser restringido dependiendo de la información de que trate.

En este sentido, la mencionada Ley 1712, limita suministrar información o documentos que violen el secreto profesional y que contengan las opiniones o puntos de vista dentro de procesos deliberativos de funcionarios públicos, razón por la cual esta Entidad se abstiene de brindar los documentos solicitados.

Firmado Digitalmente por: 2016/03/16

Cordialmente,

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
Secretario General

ANGELICA MARIA CORREA GONZALEZ / ANDRES LEONARDO MENDOZA PAREDES / CLAUDIA LILIANA PERDOMO ESTRADA
0330.0671.0000 - Procesos jurisdicción nacional - procesos jurisdicción contencioso administrativa - acciones de repetición

2014-36

91
71

PROSPERIDAD PARA TODOS

Cancillería
Ministerio de Relaciones Exteriores

DITH No. 0235

EL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CERTIFICA:

Que revisada la historia laboral de la doctora CLARA INÉS VARGAS SILVA, identificada con cédula de ciudadanía número 41.564.755, se pudo constatar que prestó sus servicios en este Ministerio desde el 17 de enero de 1977 hasta el 30 de diciembre de 2011.

Que la doctora VARGAS SILVA desempeñó el siguiente cargo y funciones:

Mediante Decreto No. 802 del 17 de abril de 1990, se le nombró en el cargo de Asesor, código 1020, grado 01, de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tomó posesión el 29 de junio de 1990 y lo desempeñó hasta el 4 de julio de 1991.

De acuerdo con la Resolución No. 1400 del 29 de junio de 1988, por medio de la cual se estableció el Manual de Funciones y requisitos de los diferentes empleos de la Planta de Personal Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, las funciones del cargo de Asesor, código 1020, grado 01, de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, eran las descritas a continuación:

1. Dirigir el trámite de las diferentes solicitudes del servicio exterior.
2. Actuar como Secretario de la Comisión de Muebles e Inmuebles.
3. Cumplir con las instrucciones que imparta el Director del Fondo Rotatorio y velar por su cabal cumplimiento.
4. Firmar las resoluciones y órdenes de compra que en su calidad de ordenador de gastos suscriba el Director del Fondo Rotatorio.

Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos
Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Mario Fidel Suárez
PBX 3814000 – Fax 3814747
www.cancilleria.gov.co – contactenos@cancilleria.gov.co
Bogotá D.C., Colombia Sur América

PROSPERIDAD PARA TODOS

Cancillería
Ministerio de Relaciones Exteriores

5. Responder por la Administración de las oficinas del Fondo Rotatorio en ausencia del Director del Fondo.

6. Solicitar a la División Delegada de Presupuesto ante el Fondo Rotatorio las imputaciones para los gastos autorizados y otros trámites relacionados con el presupuesto.

7. Las demás que le sean asignadas por el Jefe Inmediato, de acuerdo con la naturaleza del cargo.

La presente certificación se expide con destino a la Oficina Asesora Jurídica interna al primer (1º) día del mes de abril del año dos mil trece (2013).

ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO

JAGR / LEOT

Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos
Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Mario Fidel Suárez
PBX 3814000 – Fax 3814747
www.cancilleria.gov.co – contactenos@cancilleria.gov.co
Bogotá D.C., Colombia Sur América

2014-18

542

PROSPERIDAD PARA TODOS

DITH No. 0235

EL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CERTIFICA:

Que revisada la historia laboral de la doctora CLARA INÉS VARGAS SILVA, identificada con cédula de ciudadanía número 41.564.755, se pudo constatar que prestó sus servicios en este Ministerio desde el 17 de enero de 1977 hasta el 30 de diciembre de 2011.

Que la doctora VARGAS SILVA desempeñó el siguiente cargo y funciones:

Mediante Decreto No. 802 del 17 de abril de 1990, se le nombró en el cargo de Asesor, código 1020, grado 01, de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tomó posesión el 29 de junio de 1990 y lo desempeñó hasta el 4 de julio de 1991.

De acuerdo con la Resolución No. 1400 del 29 de junio de 1988, por medio de la cual se estableció el Manual de Funciones y requisitos de los diferentes empleos de la Planta de Personal Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, las funciones del cargo de Asesor, código 1020, grado 01, de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, eran las descritas a continuación:

1. Dirigir el trámite de las diferentes solicitudes del servicio exterior.

2. Actuar como Secretario de la Comisión de Muebles e Inmuebles.

3. Cumplir con las instrucciones que imparta el Director del Fondo Rotatorio y velar por su cabal cumplimiento.

4. Firmar las resoluciones y órdenes de compra que en su calidad de ordenador de gastos suscriba el Director del Fondo Rotatorio.

Cancillería
Ministerio de Relaciones Exteriores

PROSPERIDAD PARA TODOS

5. Responder por la Administración de las oficinas del Fondo Rotatorio en ausencia del Director del Fondo.

6. Solicitar a la División Delegada de Presupuesto ante el Fondo Rotatorio las imputaciones para los gastos autorizados y otros trámites relacionados con el presupuesto.

7. Las demás que le sean asignadas por el Jefe Inmediato, de acuerdo con la naturaleza del cargo.

La presente certificación se expide con destino a la Oficina Asesora Jurídica Interna al primer (1º) día del mes de abril del año dos mil trece (2013).

ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO

JAGR / LEOT

2014-9

544

PROSPERIDAD PARA TODOS

Cancillería
Ministerio de Relaciones Exteriores

DITH No. 0235

EL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CERTIFICA:

Que revisada la historia laboral de la doctora CLARA INÉS VARGAS SILVA, identificada con cédula de ciudadanía número 41.564.755, se pudo constatar que prestó sus servicios en este Ministerio desde el 17 de enero de 1977 hasta el 30 de diciembre de 2011.

Que la doctora VARGAS SILVA desempeñó el siguiente cargo y funciones:

Mediante Decreto No. 802 del 17 de abril de 1990, se le nombró en el cargo de Asesor, código 1020, grado 01, de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tomó posesión el 29 de junio de 1990 y lo desempeñó hasta el 4 de julio de 1991.

De acuerdo con la Resolución No. 1400 del 29 de junio de 1988, por medio de la cual se estableció el Manual de Funciones y requisitos de los diferentes empleos de la Planta de Personal Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, las funciones del cargo de Asesor, código 1020, grado 01, de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, eran las descritas a continuación:

1. Dirigir el trámite de las diferentes solicitudes del servicio exterior.

2. Actuar como Secretario de la Comisión de Muebles e Inmuebles.

3. Cumplir con las instrucciones que imparta el Director del Fondo Rotatorio y velar por su cabal cumplimiento.

4. Firmar las resoluciones y órdenes de compra que en su calidad de ordenador de gastos suscriba el Director del Fondo Rotatorio.

Cancillería
Ministerio de Relaciones Exteriores

PROSPERIDAD PARA TODOS

5. Responder por la Administración de las oficinas del Fondo Rotatorio en ausencia del Director del Fondo.

6. Solicitar a la División Delegada de Presupuesto ante el Fondo Rotatorio las imputaciones para los gastos autorizados y otros trámites relacionados con el presupuesto.

7. Las demás que le sean asignadas por el Jefe Inmediato, de acuerdo con la naturaleza del cargo.

La presente certificación se expide con destino a la Oficina Asesora Jurídica Interna al primer (1º) día del mes de abril del año dos mil trece (2013).

ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO

JAGR / LEOT

Franklyn Liévano Fernández [1]
DOCTOR EN DERECHO

OFICINA DE APOYO
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS
2016 JUN 5 PM 4 05
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA

Señor Juez
JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - Sección Tercera
E. S. D.

Proceso : Ordinario

Naturaleza : **Repetición**

Asunto : ***Contestación de demanda***

Radicado : **No. 110013336722-2014-00109-00**

Demandante : **LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**

Demandados : CLARA INES VARGAS SILVA *y otros*
-Hernando Leyva Varón, Hilda Stella Caballero Ramírez, Aura Patricia Pardo Moreno, Luis Miguel Domínguez García, Leonor Barreto Diaz, **JUAN ANTONIO LIÉVANO RANGEL**, María Hortensia Colmenares Facinni , Rodrigo Suarez Giraldo ,María del Pilar Rubio Talero, Patricia Rojas Rubio,Ituca Helena Marrugo Pérez, Edith Andrade Páez, y Miriam Consuelo Ramírez Vargas-,

FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ, mayor y vecino de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la ciudad en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501 teléfono 7027824, con correo electrónico: cilinof@hotmail.com, obrando conforme al Poder Especial adjunto, en nombre y representación del Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL**, mayor y vecino de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.162.395, con domicilio en la ciudad de Bogotá, respetuosamente **me notifico por conducta concluyente**[1] y doy ***contestación*** en oportunidad, como sigue, a la demanda que dentro de este proceso se le formula:

I. En cuanto a las PRETENSIONES

ME OPONGO a todas y cada una de ellas, conforme a las excepciones y las razones de la defensa que en lo fáctico, así como en lo jurídico, expondré a continuación:

A la ***PRIMERA***: Porque es engañosa la hipótesis de asumir como fundamento de la acción, que no se hubiere generado el pago realizado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, si el Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** le hubiere

[1] Art. 330 del C.P.C.

personalmente *notificado* las liquidaciones anuales, año por año, de sus cesantías de los períodos de sus servicios en el exterior, desde **1990 hasta el año 2003** pues al **Acuerdo Conciliatorio del 29 de marzo de 2012 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F",** se llegó en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005,** que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, originándose así la obligación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de reajustar la liquidación de las cesantías de los funcionarios que prestaron sus servicios en el exterior con base en los salarios reales y no sobre sumas inferiores de otros cargos en los que el funcionario no se desempeñó, dando lugar a lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores en tal virtud pagó.

Además es falsa la afirmación en virtud de la cual se impidió que operará la prescripción trienal los derechos laborales, por la omisión de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** toda vez que dicho término prescriptivo sólo puede computarse a partir del *retiro definitivo* del empleado.

A la ***SEGUNDA***: *"(...) Que se condene a..."*, entre otros, a mi representada al *pago y reparación* de la suma de **$133.148.564** que el Ministerio pagó en virtud del **Acuerdo Conciliatorio celebrado ante la Procuraduría 84 Judicial I**, reseñado en el proceso, puesto que la acción de repetición a voces del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, tiene por objeto la recuperación de lo pagado por el estado **exclusivamente** por concepto de un ***reconocimiento indemnizatorio***, que aquí, no existe (¡) porque dicha suma, el Ministerio de Relaciones Exteriores los pagó, en este caso a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** por reajuste de **CESANTÍAS**, en virtud de la relación laboral habida entre los mismos en los periodos de sus servicios en el exterior que reseña la demanda y lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005.

En efecto, cabe distinguir que lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en virtud del **Acuerdo Conciliatorio** tiene su causa en el restablecimiento del derecho subjetivo del mismo, amparado en una norma jurídica cual es la Ley 6ª de 1945 que establece el derecho a las cesantías y en lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005, que es lo que aquí se ha traído al proceso, en apoyo de la acción de repetición, cuando ésta ha de tener su apoyo en una sentencia o conciliación previa respecto a un reconocimiento indemnizatorio, que se diga, como aquí se expone, producido por la acción u omisión de los agentes del Estado (art. 140 CPACA), de donde es imperativo echar de menos el presupuesto *objetivo* para la acción de repetición, consistente en una sentencia o conciliación de un reconocimiento indemnizatorio, por su naturaleza antijurídico. Esto es lo opuesto integral y absolutamente al presupuesto esgrimido por la demandante como pie de la acción.

A la ***TERCERA***: Que se *declare* que el Acuerdo Conciliatorio aprobado por el **Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"** existe una

obligación clara, expresa y actualmente exigible, que presta mérito ejecutivo, con remisión al artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, para efectos del cobro *coactivo* de una obligación, conforme a las prescripciones del artículo 488 del CPC sobre títulos ejecutivos (Actual 422 C.G.P), dicha pretensión difiere del medio de control de repetición, el cual busca la declaratoria de responsabilidad de un servidor o ex servidor público, quien debido a su conducta dolosa o gravemente culposa conllevó a que el Estado se viera en la obligación de reconocer una suma de dinero. Ahora bien, el **Acuerdo Conciliatorio** reúne en sí mismo los requisitos del título ejecutivo, con lo cual presta mérito ejecutivo únicamente en favor del beneficiario del pago, esto es, del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

A la ***CUARTA***: Sobre la pretensión del pago de intereses, no existe causa legítima para derivarlos, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraba en el deber legal de liquidar y pagar las cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, dada la relación laboral habida entre los mismos.

A la ***QUINTA:*** En cuanto a la pretensión de condena en costas a mi representada, puesto que ha de ser la NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, quien debe salir al pago a favor del mismo, por ser esta acción un ostensible abuso del derecho a litigar.

II. Sobre los HECHOS

Al hecho ***PRIMERO***: No es un hecho. Se trata de la cita de una normativa legal y al respecto me remito a la vigencia de las mismas en el tiempo.

Al hecho ***SEGUNDO***: Distingo entre la cita que se hace de normas legales, de una parte, y la interpretación interesada que se hace de las mismas para el señalamiento de obligaciones funcionales de mi representado el Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL**entre las cuales la que se le endilga del deber de *"(...) liquidar y notificar personalmente el auxilio de cesantías..."*, pues el funcionario que desempeña las funciones en planta interna no puede hacerlo coetáneamente en la planta externa, como lo reseña la demanda.

Al hecho ***TERCERO***: No me consta. No obstante que se pruebe, pues el periodo en el cual mi representado fungió como *Subsecretario de Recursos Humanos* ninguna relación tuvo respecto de los funcionarios que, como la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, prestaron sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al hecho ***CUARTO***: No me consta. Mi representado ha sido completamente ajeno al trámite de petición de reliquidación de cesantías ejercido por **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.** No obstante, es menester advertir desde ya la inconsecuencia del Ministerio al negar la pretensión de reliquidación de cesantías mediante el derecho de

petición radicado para conciliar posteriormente y de manera inconsecuente el pago de las diferencias de las cesantías originadas en el exterior.

Al hecho ***QUINTO***: No es un hecho atribuible a mí representado, el doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL,** pues como se ha indicado, no tenía el deber de notificar personalmente los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el exterior.

Al hecho ***SEXTO***: No me consta y deberá probarse. El trámite de audiencia de conciliación extrajudicial fue entre la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, con quien fuera su empleador, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adviértase que el Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo la oportunidad de reliquidar las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia C-535-2005, optó por denegar las peticiones formuladas por el peticionario para posteriormente y de manera inconsecuente, aceptarlas en Audiencia de Conciliación.

Al hecho **SÉPTIMO:** No me consta y deberá probarse. El trámite de conciliación surtido fue exclusivamente entre empleador y empleado y ninguna participación tuvo mi representado, el doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL.**

Al hecho ***OCTAVO***: No me consta el trámite de pago que enuncia el Ministerio. Cualquier actuación surtida se dio en virtud de la relación laboral habida entre estos.

Al hecho ***NOVENO:*** No obstante la multiplicidad de hechos, difiero, pues dentro de las funciones que atribuye el artículo 19 del Decreto 1716 de 2009, a los Comités de Conciliación NO le es dada la facultad o competencia para determinar la culpa grave o dolo en las actuaciones de alguno de sus funcionarios y menos aún decidir *"(...) en forma unánime...* como se hizo, en cuanto a la responsabilidad que se le endilga, dice que tenía mi representado, el Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL**.

Además, La función de notificar los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el *exterior* no se encuentra establecida de manera alguna en el Manual Descriptivo de Funciones y Requisitos (Resolución 0033 de 1994), ni en el Decreto 2126 de 1992.

Al hecho **DECIMO**: No es un hecho. Me atengo a la normatividad legal y su vigencia en el tiempo, pero sí es del caso señalar que los Comités de Conciliación son órganos consultivos y de asistencia, que si bien tiene la facultad de decidir cuando deba instaurarse una acción de repetición, no la tienen para hacerlo en relación con la declaratoria de responsabilidad administrativa y disciplinaria de los funcionarios de las entidades y eventual sobre el grado de culpa o dolo en la conducta de algún funcionario. En este caso del Ministerio de Relaciones Exteriores.

II. RAZONES DE LA DEFENSA

a) El **Acuerdo Conciliatorio** celebrado a instancias de la **Procuraduría 84 Judicial I** para Asuntos Administrativos tuvo por objeto el reconocimiento y pago de las diferencias del auxilio de cesantías que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como **empleador,** debía a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por diferencias en la liquidación de dicha prestación, practicada sobre sumas inferiores a los salarios reales que el mismo devengó desde **1990 hasta el año 2003** cuando ha laborado para el mismo en el exterior.

Pago que tuvo como fundamento legal, el vínculo laboral existente entre el Ministerio y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, generador de dicha prestación conforme a lo establecido en la Ley 6 de 1945, artículo 17 y lo declarado por la Corte Constitucional en la Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y mucho antes, en la Sentencia T-1016 de 2000, que evidencian la condición *inconstitucional* de las prácticas anteriores que al respecto tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores.

b) Se pretende, inmerso irregularmente bajo este medio de control judicial, que se avance en un juicio de declaratoria y condena de condena por la ***responsabilidad*** que se les endilga a mi representado, el Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** por haber supuestamente omitido el deber –si lo tenía-, de notificar personalmente las liquidaciones *anuales* del auxilio de cesantías desde **1990 hasta el año 2003** desconociéndose que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental al debido proceso, garantiza que ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa***.

Para el caso, el anterior Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 184, que rigió hasta el 1º de julio de 2012, cuando entró en vigencia la ley 1437 de 2011. Así como la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, conforme a la cual: *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...."* (Artículo 5º).

c) Tanto por lo establecido por el anterior Código Contencioso Administrativo C.C.A., preexistente a la conducta que se le endilga a mi representado el Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** la acción para la eventual responsabilidad, en ese caso *conexa* con la entidad, caducó conforme al artículo 136 del C.C.A, dos años después de la presunta omisión del deber, si lo tenía. A la vez prescribió, cinco (5) años después la disciplinaria (art. 34 ley 200 de 1995), transcurrido como lo han sido **más de trece (13) años**, contados a partir de la última presunta omisión que se les imputa y se retrotrae a la liquidación anual de cesantías del año **2003**.

d) La demanda, como está visto, no tiene como materia la restitución de lo pagado por un reconocimiento *indemnizatorio* -que no lo ha habido-, sino la recuperación para el

Ministerio de lo que debía y pagó por ajuste de cesantías generadas en la vinculación laboral que establece la Ley 6 de 1945 y de conformidad con los términos fijados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y excluyen también, cualquier supuesto de la afectación del Ministerio de Relaciones Exteriores como empleador de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por un "daño antijurídico".

e) El Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** no fue convocado, ni citado como tercero, ni oído a ningún título, que le permitiera que le permitiera ejercer su derecho de contradicción, aportación y discusión de pruebas y defensa dentro del proceso de **Conciliación surtido en la Procuraduría 84 Judicial I el 29 de marzo de 2012.** Tampoco ante el Comité de Conciliación y Defensa del Ministerio de Relaciones, que se pronunció y decidió que se entablara la acción por supuestamente haber incurrido aquél en la omisión del presunto deber de notificar personalmente las cesantías de esta última desde **1990 hasta el año 2003** sin ninguna facultad, el Comité, para hacerlo en lugar de la autoridad disciplinaria correspondiente y sin las garantías del debido proceso

f) Colíguese de todo lo anteriormente expuesto, que no resulta legítimo el empleo de este medio de control judicial sobre la materia propuesta (art. 169 -núm. 3°-, Ley 1437 de 2011).

IV. De las EXCEPCIONES

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

A. EXCEPCIONES PREVIAS

1. Falta de competencia

Conforme lo establece el **artículo 7º** de la **Ley 678 de 2001**, de la acción de repetición conocerá de acuerdo con las reglas de competencia, el **juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial** contra el Estado y, si la reparación patrimonial impuesta al mismo tiene origen en una **conciliación** o cualquier otra forma establecida en la ley para la solución de conflictos, es competente el **juez o tribunal que haya aprobado el respectivo acuerdo**.

En este caso, el pago que se pretende repetir, proviene del **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012** y aprobado por el **Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"**. En consecuencia, El Tribunal Administrativo de Cundinamarca es el **competente** para conocer de esta acción.

En efecto, según la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, la competencia en razón al factor de ***conexión*** es prevalente por ser especial y en este

caso se trata de la consagrada por la ley 678 en su artículo 7º respecto de la acción de repetición. No obstante, lo establecido aun siendo posterior, por el artículo 155 del C.P.A.C.A. en razón a la cuantía.

Dijo, pues, el Consejo de Estado:

> *"Para efectos de la competencia en acciones de repetición el artículo 7º de la Ley 678, establece como premisas: la preexistencia de una sentencia condenatoria al Estado y por ende el trámite de un proceso previo ante la jurisdicción de lo contencioso; sin embargo en hipótesis distintas, es decir, cuando no existe un proceso previo y la reparación se hubiese originado en una conciliación u otra forma autorizada por la ley, conocerán el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo. Cuando no medie aprobación judicial conocerá el jue que ejerza jurisdicción en el territorio donde se celebró el acuerdo. De igual forma existen otros eventos por fuera de los presupuestos del artículo 7º, es decir sin condena previa en la jurisdicción contenciosa, tales como: condenas en la jurisdicción ordinaria en materia laboral a favor de trabajadores oficiales, condenas al Estado Colombiano en tribunales de arbitramento, o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc.; casos en los cuales se aplicarán plenamente las reglas de competencia previstas en el Código Contencioso Administrativo (...)" (Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación 11001-03-15-000-2007-00433(c) Consejero Ponente: MAURICIO TORRESCUERVO, once (11) de diciembre de dos mil siete (2007)*

Precisamente, el Doctor **JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ**, en su obra "El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo" de Ediciones Doctrina y Ley LTDA 2014, resume así el tema:

> *"La incompatibilidad entre la conexidad y la cuantía ya fue resuelta por la sala plena del Consejo de Estado, dando prelación a la conexidad para determinar el juez natural de la repetición.*
>
> *No se desconoce que el nuevo código es posterior, pero en materia de aplicación de las reglas de hermenéutica jurídica, el artículo 5 de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad de la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.*
>
> *De lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, por lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario al de una norma anterior resulta ésta derogada, pues deberá tenerse en cuenta criterio de la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3 de la Ley 153 de 1887 y 5 de la Ley 57 del mismo año.*

Por último, no puede perderse de vista, que el legislador en el momento establecer los fueros de competencia para cada uno de los medios de control, no realizó ninguna precisión frente al medio de control de repetición, teniendo en cuenta que, la competencia ya estaba prevista en la Ley 678 de 2001.

Se quiere significar con lo anterior, que toda vez que el, C.P.A.C.A. no derogó de manera expresa la competencia establecida en la Ley 678 de 2001, esta disposición se encuentra vigente y teniendo en cuenta la especialidad de esta norma respecto de la acción de repetición, se debe aplicar la conexidad a fin de establecer el juez natural de la pretensión de repetición y no el factor cuantía". (pag. 170)

2. Caducidad de la acción declarativa de responsabilidad

El **artículo 29 de la Constitución Política** garantiza el derecho fundamental del *debido proceso*.

En tal virtud nadie puede ser juzgado ni condenado sino conforme a las leyes preexistentes a la conducta que se les imputa.

En este caso, se pretende la declaratoria de responsabilidad y subsiguiente condena a el Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** por supuestamente haber omitido el deber –que no tenía, de notificar personalmente y no lo hiciera, a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** las liquidaciones anuales de sus cesantías en los períodos en los que éste prestó sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores ***en el exterior*** y se remontan desde **1990 hasta el año 2003**

Más aún, abarca lo que se pretende repetir, lo pagado a dicho exfuncionario en los períodos de **1990 hasta el año 2003** períodos éstos, -todos- durante los cuales rigió el Código Contencioso Administrativo promulgado por el **Decreto Ley 01 de 1984,** que lo fue hasta el **1º de julio de 2012**, con la entrada en vigencia, el 2 de julio del mismo año, de la Ley 1437 de 2011, *"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".*

En este orden, la acción de responsabilidad de los funcionarios por los eventuales daños antijurídicos causados por culpa grave o dolosa en el desempeño de sus funciones (artículos 77 C.C.A.) en conexidad con la entidad (art. 78 C.C.A.), **caducó** a los **dos (2) años** de la presunta *omisión* (art. 136 ibídem)

Y sea del caso prevenir que otra es, por supuesto, la *caducidad* de la acción en cuanto a la *condena* sobre repetir lo pagado, que corre a partir del pago (Ley 1437 de 2011,

art. 142) la cual, legal y constitucionalmente puede arrastrar la primera, si bien cabe lógicamente derivar de la responsabilidad la *condena* no así lo contrario, cuando aquélla no ha emanado del juicio previo y correspondiente, con las plenas garantías del *debido proceso* y dentro de la oportunidad fijada en la ley preexistente a la conducta imputada.

3. Inepta demanda

a) Por indebida acumulación de *pretensiones*

Se pretende bajo una misma cuerda, por el medio de control de repetición, que al Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** se la declare administrativamente responsable y se la condene a reembolsar al Ministerio de Relaciones Exteriores lo que éste, en cumplimiento de la **Sentencia C-535 de 2005**, pagó a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** por ajuste de cesantías de los períodos que esta laboró en el exterior, **desde 1990 hasta el año 2003** cuando aquél se desempeñó como *Subsecretario de Recursos Humanos* entre el **10 de marzo de 1997 al 2 de mayo de 1999** regía el Decreto Ley 01 de 1984 por el cual se expidió el anterior Código de lo Contencioso Administrativo, vigente hasta el 1º de julio de 2012, al que precedió la Ley 13 de 1984, subrogado por el Decreto Ley 2400 de 1998 y regía también, en materia disciplinaria, la Ley 25 de 1974 -Orgánica de la Procuraduría General- y su Decreto Reglamentario 3404 de 1983, parcialmente modificada y adicionada por la misma Ley 13 de 1984 y el mismo Decreto Ley 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, de manera que a la luz de lo establecido por el artículo 29 de la Constitución Política al Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** no cabe enjuiciarla bajo el actual CPACA que rige en cuanto a la repetición y, en consecuencia no procede la acumulación, pues a voces del art. 165 del CPACA se exige que tanto lo relativo a la declaratoria de responsabilidad como la condena a reembolsar lo pagado, puedan enjuiciarse bajo la misma normativa.

De acuerdo al artículo 29 de la Constitución, ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y como está visto, las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que supuestamente el Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** no le notificó personalmente cuando esta fungía como *Subsecretario de Recursos Humanos* **desde el 10 de marzo de 1997 al 2 de mayo de 1999,** se remonta a los años de **1997, 1998, 1999** y no pueden juzgarse sino a la luz de las normas preexistentes a dichas presuntas omisiones en los años de **1997- Hace 19 años, 1998- Hace 18 años, 1999- Hace 17 años,** entre otras cosas, caducadas y prescritas pues según la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, vigente para la época de las conductas que al Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** se endilgan, *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...."* (Artículo 5º).

Así, pues, la presunta responsabilidad que se le endilga al Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** no es susceptible de enjuiciarse ***sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y no por este medio de control, sin campo alguno para pronunciarse legítimamente sobre una disposición de orden constitucional como la impartida en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005** que dio lugar al pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores le hizo en virtud del Acuerdo Conciliatorio celebrado.

De otra parte, según lo expuesto por el artículo 136 del C.C.A. preexistente a la conducta que se le endilga al Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** la acción para derivar una eventual responsabilidad suya en el pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso hizo, caducó dos años después de la presunta omisión que se le endilga y también prescribió a los cinco (5) años la acción disciplinaria propia para definirla (art. 34 ley 200 de 1995), cuando han transcurrido desde entonces **no menos de trece (13) años y hasta veinticuatro años (24).**

Además, es infundada y falaz la afirmación que de haberse notificado aquéllas liquidaciones anuales de cesantías, que en el proceso ni siquiera se conocen, hubiera prescrito la acción o caducado el derecho de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** puesto que la posibilidad de demandar nace desde el momento en que la Administración, al **retiro del servidor** no hace entrega de la suma correspondiente a este concepto, es decir omite el cumplimiento de su obligación.[2]

B. EXCEPCIONES DE FONDO

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

a. *Ineptitud sustantiva de la demanda;*
b. *Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad.*
c. *Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición;*
d. *Ilegitimidad de personería por pasiva;*
e. *Inexistencia de nexo causal;*
f. *Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación;*
g. *Inexistencia de daño antijurídico;*
h. *Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso;*
i. *Falta de legitimación en la causa por pasiva;*
j. *Abuso del derecho; e,*
k. *Ilegitimidad del derecho sustantivo.*

[2] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de septiembre de 2011 radicado interno (2005-2009).

EXPOSICIÓN DE LAS EXCEPCIONES DE FONDO

a. ***Ineptitud sustantiva de la demanda***

Derivada ésta del desconocimiento de las garantías constitucionales del derecho fundamental al *debido proceso*[3] a NO *"(...) ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (...) y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio..."*, pues fuerza distinguir en el proceso lo que atañe a la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial del demandado, el Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** como se pretende y lo que concierne a la eventual condena a retribuir lo pagado.

A lo primero, indiscutiblemente corresponde la aplicación de las normas preexistentes a la supuesta conducta omisiva de los implicados, del deber –si lo tenían-, de notificar personalmente a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** ***año por año***[4], *las liquidaciones anuales* de sus cesantías, causadas en los años de **1990-** Hace 26 años, **1991-** Hace 25 años **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años-, durante los cuales laboró al servicio del Ministerio de Relaciones en **el exterior,** pues rigió desde el **1º de marzo de 1984**[5] hasta el **1º de julio de 2012**[6], el Decreto Ley 01 de 1984 que reformó el Código Contencioso Administrativo[7] anterior.

Ahora bien, a efectos de derivar la responsabilidad que correspondiera a los funcionarios aquí implicados para la época en que supuestamente omitieron el deber, -si lo tenían-, de notificar personalmente las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** causadas en los años de **1990**- Hace 26 años-, **1991-** Hace 25 años-, **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años-, el **artículo 78** del Decreto Ley 01 de 1984, vigente en esos años, permitió que fueran demandados, en conexidad con la entidad pública, los funcionarios responsables de culpa grave o dolo en ejercicio de sus funciones, que le fueren generados a terceros (art. 77 *ibídem*), conforme a las reglas generales de los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, de ser así, fuera la misma la sentencia que dispusiera que el funcionario responsable satisficiera los perjuicios ocasionados a la Entidad,

---

[3] Art. 29 C.P.
[4] Decreto 3118 de 1968 *"Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantías de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, reorganizado por la Ley 432 de 1998"*.
[5] Diario Oficial 36.439 del 10 de enero de 1984.
[6] Fecha de entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 "por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
[7] Ley 167 de 1941

repitiendo contra el mismo lo pagado, para lo cual el término para hacerlo era de "***(2) dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa...***" establecido para las acciones de su género.

En cuanto a lo segundo, aspecto propio de la ritualidad de los procesos, es claro, que al tipo de acción incoada ha de dársele el trámite del medio de control judicial de repetición, sin que por ello pueda legitimarse a accionar, como se proponen, frente a los demandados en procura de una declaratoria de responsabilidad que caducó y sustrae al juez de proveer legítimamente al respecto, hoy décadas después de acontecido el supuesto incumplimiento del deber, si lo tenía, que a los demandados se les endilga, que en ese tiempo no cumplieron, válido, el demandante, que hoy el término para el medio de control de repetición caduca a *partir del pago,* y baste ésa consideración para traer ahora a este juicio a los demandados quebrantándoles todas las garantías constitucionales al debido proceso.

De ahí que, la demanda adolezca de la actitud sustantiva para derivar una condena en contra de los demandados, habiendo caducado como está visto cualquier acción encaminada a la declaratoria de la responsabilidad administrativa y patrimonial de los demandados por hechos que se remontan, como ya ha quedado visto, entre **trece (13) y veintiséis (26) años atrás**, enmarcados dentro de un ordenamiento legal preexistente y también, por supuesto, más favorable[8].

Descendiendo a la demanda, ésta se apoya en una sentencia en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores fue condenado a restablecer los derechos que por su parte le vulneró a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** con el reconocimiento y pago que le había hecho de las cesantías causadas a su favor durante los períodos de sus servicios al mismo **en el exterior**, en los años en que desempeñó el cargo referido del Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** basándose en sumas inferiores a los salarios reales que el ex funcionario devengó, debiendo en consecuencia, re-liquidarle dicha prestación, conforme a lo ordenado en la Sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto Legislativo 10 de 1992, que el Ministerio siguió aplicando, no obstante su derogatoria con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993[9] y posteriormente la Ley 797 de 2003, de ninguna manera vinculante con los demandados, quienes son totalmente ajenos a las prácticas entronizadas en ese orden por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de donde se deriva el pago que por concepto de reliquidación de dichas cesantías, debió atender y **no del reconocimiento de una indemnización ocasionado por un daño antijurídico** que fuera imputable como se formula, a los demandados.

Es claro entonces, que no existe sentencia alguna de condena al pago a una indemnización que vincule a los demandados o que lo hubiese vinculado, conforme a las previsiones de los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984, ni pueda hacerlo ahora, lo cual conduce a la imposibilidad jurídica de despachar la demanda dada y, en consecuencia, la ineptitud sustantiva de la misma.

---

[8] Art. 53 C.P.
[9] T-1016 de 2000, Sentencia C-173 de 2004

b. *Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad*

Siguiendo al tratadista *Bonnard,* quien participando de las mismas ideas de Deguit en materia de responsabilidad administrativa, lo que se advierte es una "falta de la administración" y la jurisprudencia ha advertido de *la responsabilidad* basada en una irregularidad de la actividad administrativa. Así, *"(...) Se ha deducido que la responsabilidad del patrimonio público surge cuando el daño resulta de una mala organización o de un funcionamiento defectuoso del servicio, y es, sin que sea necesario que en esa mala organización o defectuoso funcionamiento haya culpa de parte de un agente administrativo. Esto es lo que constituye la llamada culpa del servicio público, así denominada para indicar "que no hay culpa individualizada de un agente administrativo", sino solamente una irregularidad de origen anónimo y de aspecto objetivo en la organización y en el funcionamiento del servicio."*[10]

Y, como aquí se advierte la falta de la notificación personal de las liquidaciones anuales de cesantías a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores **en el exterior**, no fue, -está visto- un hecho aislado, sino que corresponde a una condición propia de un defectuoso servicio público de la entidad a falta de una regulación y apremios del orden de conformación y asignación de actividades puntuales, cuya omisión no cabe, pues, imputar individualmente a uno u otro funcionario con remisión a normas generales, sino que es más bien producto anónimo del funcionamiento de la Entidad, generador cuando menos de un ***error communis facit ius***[11] o, que hace derecho

Por otra parte, cabe señalar que de tiempo atrás la jurisprudencia ha establecido los requisitos para dar aplicación a la "doctrina del error común creador de derechos" o teoría de la apariencia[12], a saber:

1. *"Debe existir una situación que realmente sea contraria a la normatividad, pero oculta, es decir, (...) ajena en su etiología y desarrollo a quien eventualmente resultare perjudicado con la apariencia de juridicidad (...)*
2. *Que esa situación de apariencia de legalidad esté respaldada en hechos, situaciones o documentos cuyo vicio no sea posible advertir con diligencia y cuidado.*
3. *Que la conducta de quien resultó perjudicado con la situación de aparente legalidad esté respaldada por una buena fe del particular (...)*
4. *Que la situación no esté regulada expresamente por una ley imperativa que imponga soluciones diferentes a las que resultarían de la aplicación de la doctrina".*

[10] SARRIA B, Eustorgio y Mauricio. *Derecho Administrativo*. Editorial Pluma. Págs. 245 y 246
[11] Conc. artículo 8°. Ley 153 de 1887
[12] Al respecto se puede consultar la Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 3 de agosto de 1983, M.P. Dr. Jorge Salcedo Segura.

c. <u>Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición</u>

El Artículo 90 de la Constitución Nacional establece que:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este."

Adviértase la inexistencia de una condena o conciliación al Estado en la que conste la indemnización por la ocurrencia de un ***daño antijurídico,*** producto de la conducta dolosa o gravemente culposa imputable a mí representada, el doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL**.

Lo que ha traído el Ministerio como fundamento para sustentar la pretensión de repetición es una Conciliación que obliga a la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores a pagar a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las diferencias de cesantías originadas durante el tiempo en que aquel prestó sus servicios en el exterior, atendiendo lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 535-2005.

Así las cosas, el **Acuerdo Conciliatorio** tiene como fundamento el cumplimiento de una Sentencia de la Corte Constitucional - no de la ocurrencia de un daño antijurídico - elemento necesario para que se pueda predicar la procedencia de la acción de repetición. Asimismo, el pago efectuado corresponde al reajuste de cesantías que el Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** durante el tiempo en que esta prestó sus servicios en el exterior. De allí que tampoco pueda derivarse que el pago efectuado por el Ministerio haya sido en calidad de indemnización, como bien lo exige el Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.

Por otra parte, la **Ley 678 de 2001** *"Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.",* estableció la **acción de repetición** con el fin de restituir al Estado lo pagado, exclusivamente, a título de una indemnización, como *reparación* –directa- del **daño antijurídico** irrogado por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes, o de un acuerdo conciliatorio u otra forma de terminación de un conflicto de responsabilidad civil contra una entidad pública.

Adviértase que cuando los hechos que generan la pretensión de repetición ocurren con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2001, se debe establecer la normatividad sustancial y material aplicable al caso en concreto. Al respecto ha indicado en Consejo de Estado que:

"En cuanto a las normas sustanciales, se tiene que las normas aplicables para dilucidar si el demandado actuó con culpa grave o dolo, serán las vigentes al tiempo en que tuvo lugar la conducta del agente estatal. En tal sentido, **las presunciones de dolo y culpa grave que traen los arts. 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 no pueden ser aplicables a casos concretos donde los hechos que generaron la repetición se dieron con anterioridad al 4 de agosto de 2001.**"[13]

Por su parte, establece el **artículo 142** de la **Ley 1437 de 2011**:

> ***Ley 1437 de 2011. Artículo 142.***
> ***"Repetición.*** *Cuando el Estado haya debido hacer un* ***reconocimiento indemnizatorio*** *con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.*
>
> *La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.*
>
> *Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño." (Negrillas fuera de texto)*

Como aquí está visto la demanda aquí incoada tiene como base lo pagado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de la diferencia de cesantías surgida por efecto de los servicios que prestó dicha entidad **en el exterior,** devengando realmente sumas inferiores a las que realmente devengó y el Ministerio le liquidó cuando prestó sus servicios desde **1990 hasta el año 2003** en cumplimiento a lo dispuesto en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el día 29 de marzo de 2012**, no es vinculante con los demandados ni podría serlo, pues no fueron llamados al mismo con fines de repetición ni citados como terceros ni en ninguna otra condición que les permitiera haber sido **oídos** y ejercido su legítimo derecho de *contradicción,* petición y discusión de pruebas para su defensa, como lo garantiza el debido proceso que consagra el **artículo 29** de la Constitución Política.

Por eso, tal acuerdo no les es oponible, por lo que constitucional y legalmente es posible derivar en su contra la declaratoria de responsabilidad e imposición de la condena que se procura.

d. *<u>Ilegitimidad de personería por pasiva</u>*

[13] Sentencia Consejo de Estado, Expediente 25000232600020030030001 (28.448) del 31 de agosto de 2006.

Aun cuando se demanda, entre otros, al Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** por supuestamente haber omitido el deber – si lo tenía- de notificar las liquidaciones anuales de cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** en los periodos entre el **10 de marzo de 1997 al 2 de mayo de 1999,** cuando aquélla se desempeñó *como Subsecretario de Recursos Humanos* la acción de repetición se encamina a obtener indistintamente del mismo el pago que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES hizo a aquélla, de la suma de **$133.148.564** por el reajuste anual de sus cesantías liquidadas como inicialmente lo fueron, sobre sumas inferiores a los salarios reales que devengó durante los periodos de sus servicios en el exterior y corresponden a los años de **1990-** Hace 26 años-, **1991**- Hace 25 años-, **1992**- Hace 24 años-, **1993**- Hace 23 años-, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años**, 1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años, cuando el Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** ninguna vinculación, ni relación funcional, administrativa ni causal tuvo al frente de las liquidaciones anuales de cesantías que el MINISTERIO le liquidó a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Luego no existe legitimación en la causa por pasiva entre el MINISTERIO y el doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** para que aquel demande indistintamente, sin relación de proporcionalidad ni de racionabilidad alguna, lo comprendido en la totalidad de lo pagado que se pretende repetir, lo generado por todo el tiempo reliquidado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.**

e. ***Inexistencia de nexo causal***

La *causa* generadora del pago, vertida en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012,** que obligó al Ministerio de Relaciones Exteriores a reliquidar las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en los períodos de sus servicios en el exterior, conforme a los salarios reales que entonces devengó y no sobre las sumas inferiores que en esa época el Ministerio le liquidó, tiene su origen en la Ley 6ª de 1945 -art. 17- en razón de la vinculación de naturaleza laboral, de carácter legal y reglamentaria, que compromete exclusivamente, como empleador, al Ministerio de Relaciones Exteriores y lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**. En ningún caso por causa de la demandada, el Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL**.

En cumplimiento de la Sentencia C- 535-2005, que declaró inexequible el Artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, y ordenó liquidar las cesantías de los funcionarios que laboraron en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores teniendo en cuenta en el Ingreso Base de Liquidación la suma total de los salarios reales devengados durante los periodos laborados en el exterior, se llegó al **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012,** que corresponde a lo que el Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de *reajuste de cesantías* según lo establecido en la Sentencia C- 535- 2005.

Así, aquello en lo que funda la pretensión de repetición el Ministerio atinente a la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaron las cesantías, para efectos de que pudiese operar el fenómeno de la prescripción trienal de las acciones laborales es completamente inane habidas las siguientes consideraciones:

Primero: Siendo la cesantía una prestación de carácter unitario, el término para iniciar el cómputo de la prescripción trienal de la acción laboral solo puede ser al momento de la finalización de la relación laboral que coincide con el momento a partir del cual se hace exigible el derecho por parte del trabajador. Así lo ha entendido el Consejo de Estado al establecer que: "[...] se concluye que **mientras esté vigente el contrato de trabajo, no se puede hablar de prescripción de la cesantía como derecho social.**"[14]

Habida cuenta de lo anterior, mal puede hablarse de prescripción de las cesantías contada a partir de la notificación ***anual*** de dicha prestación, pues ninguna de ellas es independiente de las demás. Son partes de un todo que conforman una prestación unitaria.

Al ser una prestación social de *carácter unitario* cuya exigibilidad solo se produce a partir de la finalización de la relación laboral, resulta inane la notificación anual de dichos actos administrativos para el cómputo de la prescripción trienal. De tal forma que con notificación o sin ella, la causa generadora del pago no es la supuesta omisión de la notificación anual de los actos administrativos de liquidación. Esta se genera en el cumplimiento de la Sentencia C- 535- 2005 de la Corte Constitucional.

Segundo: Fue a partir del 24 de mayo de 2005 con la Sentencia C- 535-2005 de la Corte Constitucional que se conoció e hizo exigible para el Ministerio de Relaciones Exteriores la obligación de liquidar y pagar el reajuste de las cesantías en los términos de dicho fallo y el derecho correlativo de los funcionarios a reclamar su efectividad.

Así, el término de inicio para el cómputo de la prescripción trienal es la fecha de expedición de la sentencia de la Corte Constitucional; fecha a partir de la cual se hizo exigible la obligación. No antes, que es lo que predica la demanda pretendiendo inferir responsabilidad en cabeza del Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** por supuestamente haber omitido la notificación anual de los actos administrativos de liquidación de las cesantías.

La verdadera causa del pago es la Sentencia C- 535- 2005 del 24 de mayo de 2005 que declaró inexequible el Artículo 10 del Decreto Ley 10 de 1992, que establecía el pago de las cesantías de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando laboraban en el exterior, con base en las asignaciones salariales de cargos equivalentes en la planta interna. Teniendo en cuenta que los efectos de las sentencias de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro, a menos que la Corte resuelva lo contrario, en los términos del Artículo 45 de la Ley 270 de 1996, la eventualidad del

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "B", sentencia del 22 de enero de 2015, Radicado interno (4346-13)

término prescriptivo trienal encaminado al reajuste de las cesantías es la fecha de expedición de la Sentencia.

Así lo ha entendido el Consejo de Estado en varias providencias al manifestar que:

"[...] Conforme a lo antes indicado se precisa que existía un obstáculo de orden legal que no permitía liquidar las prestaciones de los empleados del servicio exterior, con base en lo que devengaban sino sólo de acuerdo con los valores equivalentes a los de la planta interna, de manera que se puede decir, como ya lo ha precisado esta Sala, que el derecho a devengar la cesantía liquidada con base en lo devengado en el servicio exterior, sólo surgió, con certeza, a partir de la expedición de las sentencia referida, pues antes, es evidente que la entidad pública se abstenía de liquidarla.

A partir de la remoción del obstáculo normativo cuya sentencia fue proferida el 24 de mayo de 2005, el demandante estaba legitimado para pedir el reconocimiento de su derecho, por ende, no es procedente declarar la ineptitud sustantiva de la demanda, conforme lo pidió la entidad recurrente en el recurso de alzada.[15]"

Por su parte, indicó en Sentencia del 6 de julio de 2011, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren:

"[...] Además, con el pronunciamiento de inconstitucionalidad efectuado por la Corte Constitucional en sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, efectuado el 24 de mayo de 2005, la parte demandante quedó legitimada para reclamar la reliquidación de sus prestaciones, en especial de sus cesantías, porque la vigencia y aplicabilidad del aludido artículo, impedía su reconocimiento.

El fallo recurrido amerita ser confirmado porque pese a que la sentencia de la Corte Constitucional C-535 de 2005, fue proferida luego de que se causaron las respectiva anualidades en las que el demandante prestó sus servicios en el exterior, y ésta tiene efectos hacia el futuro, lo cierto es que, por las razones arriba expresadas, es procedente declarar la denominada excepción de inconstitucionalidad para darle prevalencia a la interpretación constitucional y así, **en aplicación de los principios de primacía de la realidad frente a las formas y favorabilidad evitar que una norma que es inconstitucional desde sus orígenes produzca efectos en los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestaron sus servicios en el exterior**."

Estas sentencias encuentran su fundamento en que la fecha a partir de la cual se hizo exigible el derecho a la reliquidación de la cesantía por parte de los funcionarios que laboraban en el exterior, es el 24 de mayo de 2005; fecha de expedición de la Sentencia C-535 de 2005. Esto es así teniendo en cuenta que solo con la promulgación de la Sentencia de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del

[15] Sentencia Consejo de Estado del 4 de noviembre de 2010, M.P: Víctor Hernando Alvarado Ardila, Exp. No. 1496-2009,

Artículo 57 del Decreto extraordinario 10 de 1992, se declaró el derecho de los funcionarios que laboraron en la planta exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de exigir la reliquidación de sus cesantías con base en el salario realmente devengado. En este punto fuerza distinguir *la exigibilidad de la cesantía misma que, dada su naturaleza, se da al momento de desvinculación del trabajador* y la *exigibilidad de la reliquidación del auxilio de cesantía que sólo puede computarse a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005.*

Por su parte, son varios los pronunciamientos judiciales proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los que ha interpretado que los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que no hayan exigido la reliquidación de sus cesantías dentro del término de tres años contados a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005, aplica la excepción previa de prescripción extintiva de los derechos laborales.

En relación con lo anterior, los procesos judiciales en los que se ha aplicado esta posición son:

1- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-01180-00. Demandante: Martha Angélica Marín Colorado-Demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

2- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-01182-00. Demandante: Sofía Salgado de Goméz-Demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

3- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-0018500.

Mediante auto del 22 de octubre de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C- 535 de 2005.

En síntesis, el argumento esbozado en la demanda en virtud del cual se generó un daño antijurídico por la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaban

el auxilio de cesantía, impidiendo así que operara la prescripción trienal de los derechos, carece de todo sustento jurídico y se constituye en un abuso del derecho de acción por parte de la Cancillería. Además, es de mala fe buscar repetir lo pagado a **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** por haberse cumplido la Sentencia C-535-2005, que reiteró que la pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le corresponde.

f. ***Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación***

De otra parte, de conformidad con lo establecido en el **artículo 19 del Decreto 1716 de 2009**, el *Comité de Conciliación* del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** no es el competente para decidir que la conducta del Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** sea *gravemente culposa* por los hechos u omisiones que se le endilgan. Dicha *competencia* es privativa del Superior disciplinario[16] y con observancia del *debido proceso* que descansa en la garantía constitucional a ser *oída* y ejercer la *defensa* que, en ese orden, no se dio.

En tal sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado[17] en respuesta a la consulta formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto de los estudios que deben realizar los comités de conciliación de las entidades públicas para determinar la procedencia de la acción de repetición, advirtió lo siguiente:

> *"El alcance de los estudios y evaluaciones que debe realizar el comité de conciliación para determinar la procedencia de la acción de repetición, está dado por los requisitos fijados en la normatividad vigente, (...). En desarrollo de dichos estudios, el comité de conciliación* ***no puede invadir la competencia atribuida a la jurisdicción de lo contencioso administrativo****, al cuestionar los argumentos que sirvieron de fundamento al fallador"* (Resalto).

Por lo anterior, concluye el Alto Tribunal que los estudios que debe realizar el comité *"(...) deben dirigirse a demostrar los presupuestos fácticos en que se basa la presunción a favor del Estado"*[18].

g. ***Inexistencia de daño antijurídico***

El pago realizado, que se pretende repetir en contra del Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** consiste en el reconocimiento, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la diferencia a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, siendo aquél su empleador, generada en la incompleta liquidación de sus

[16] Ley 734 de 2002 –Código Disciplinario Único-
[17] Rad. No. 1634. C.P. Dra Gloria Duque Hernández.
[18] Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 1634 de 2005.

cesantías, realizada sobre sumas inferiores a los salarios realmente devengados por el mismo cuando prestó sus servicios a dicha entidad en el exterior, en el período del Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** y otros más cuyo producto se encuentra incluido en el total demandado y tienen por única y son el producto exclusivo de una prestación de naturaleza laboral, nacida del vínculo legal y reglamentario habido entonces entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que establece la Ley 6ª de 1945, y obedece para el caso a lo ordenado en la Corte Constitucional en la sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.

En tal orden, el **Acuerdo Conciliatorio**, versó sobre la reliquidación de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, ordenando al Ministerio a dicho pago en cumplimiento de la Sentencia C-535-2005.

De ahí pues, que no pueda válidamente predicarse la existencia de un pago constitutivo de **"daño antijurídico",** como sí por el contrario, lo fue de una prestación legal de carácter laboral, legítima como quiera que estaba basada en la Ley 6ª de 1945, en el *trabajo* que merece la especial protección del Estado (art. 25 de la Constitución Política) y en la *cosa juzgada* constitucional emanada de la sentencia C-535 de 2005.

h. ***Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso***

El **Acuerdo Conciliatorio** que trae el Ministerio de Relaciones Exteriores como base de la acción de repetición, no es constitutivo de condena alguna de la responsabilidad del Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** ni podría hacerlo so pena de violación del debido proceso, puesto que al trámite judicial, no fue éste convocado, ni citado u oído de manera que hubiera podido ejercer su derecho de contradicción, de oportunidad de pruebas y defensa sobre en orden a determinar la existencia y el grado de una eventual responsabilidad *conexa* a la del Ministerio de Relaciones Exteriores la cual, además, ya habría caducado conforme a las normas preexistentes a la presunta ocurrencia de la omisión al deber que aquí se le endilga remontándose a trece (13) y más años atrás, de donde siguiese necesariamente la improsperidad de una condena en su contra.

i. ***Falta de legitimación en la causa por pasiva***

El Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** no tenía la función que se le endilga de notificar personalmente las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en el exterior.

De una parte porque dicha función no se encuentra específica ni determinada en el **Decreto No. 2126 de 1992,** ni en la **Resolución 033 del 11 de enero de 1994 (Manual Descriptivo de Funciones),** vigentes para la época en que mi representado se desempeñó como *Subsecretario de Recursos Humanos.*

Por otra parte, a mi representado se le llama a responder en repetición respecto de las liquidaciones anuales de cesantías por unos periodos **anteriores** y ***posteriores*** a su desempeño como *como Subsecretario de Recursos Humanos.* Así, **anteriores** desde 1990 hasta el 9 de marzo de 1997; ***posterior*** desde el 3 de mayo de 1999 hasta el año 2003, conforme el periodo que la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** prestó sus servicios en el exterior.

Además de lo anterior, durante los periodos desde 1990 hasta el año 2003 correspondiente a las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, éste se encontraba y permanecía en el exterior, circunstancia que constituye un imponderable fuera de la órbita del desarrollo de las tareas habituales del Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** quien se encontrara en la *planta interna* del Ministerio de Relaciones Exteriores entre el **10 de marzo de 1997 al 2 de mayo de 1999,** lo que permite asumir que a quien habría correspondido notificar personalmente los respectivos actos administrativos, si los hubo, de liquidación anual de cesantías, fue a quienes desempeñaron funciones Consulares[19]. Entre ellas las de carácter administrativo, como fuera la de dar a conocer a los Funcionarios de la Misión, los actos administrativos de carácter particular de interés del propio Ministerio.

j. ***Abuso del Derecho*** -Temeridad o mala fe por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores-

Se demanda aquí, entre otros, al Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** por haberse desempeñado en el Ministerio de Relaciones Exteriores como *Subsecretario de Recursos Humanos* del **10 de marzo de 1997 al 2 de mayo de 1999** y a quien se le endilga haber faltado al deber que no tenía, de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, correspondientes al lapso comprendido desde 1990 hasta el año 2003, pues como a simple vista se puede apreciar el periodo comprendido desde el 3 de mayo de 1999 hasta el año 2003, es **posterior** a su designación como *Subsecretario de Recursos Humanos*

Lo mismo que sucede, infiriéndose la falta de buena fe debida en sus actuaciones por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, y abuso de su derecho a demandar en **87 procesos** más, de iguales presupuestos, por las liquidaciones anuales de las cesantías generadas a favor de Ignacio Enrique Ruiz Perea, Lilia Stella Cepeda Ulloa, Zaida Patricia Cristancho Guerrero, Gladys Cecilia Acosta Vidal, Luis Guillermo Becerra Torres, JUAN ANTONIO LIEVANO RANGELFernando Alzate Donoso ,Enrique Antonio Celis Durán, Ana Cecilia Pulido Guerrero, Francia Rodríguez Romero, María del Pilar Gómez Valderrama, Armando González Cortés, Eduardo Alonso Rodríguez, Myriam Duarte Bernal, Consuelo del Socorro Tirado, Reinaldo Vélez Londoño, José Fernando Cendales, Eduardo Casas Acosta, María Nelly Tascón Maya, María Eugenia Beltrán de Chaparro, Miguel Camilo Ruiz Blanco, Esperanza Castro Duque, Raúl Arturo Rincón, Martha Osorio Villamizar, Divia Desideria Cepeda, Felicia Mercedes Valera, Blanca

[19] Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, artículo 5°

Marina Villacrees, Nydia Inés Aguirre Acevedo, Janneth Victoria Truque P, Adda Isabel Borda Medina, Edgardo Alfredo Llorente Méndez, Luis German Estrada, Henry Javier Arcos, María Helena Londoño, Patricia Klein, María Victoria Eugenia Senior Pava, Julia Inés Mora López, Maria Cristina Guerrero López, Margarita Eliana Manjarrez Herrera, René Correa Rodríguez, Gladys Mireya Paéz Herrera, Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez, Alberto Bula Bohórquez, María Helena Pastrana Pastrana, María Inés Herreño Pinto, María Smith Rueda Centeno, Juan Norberto Colorado Correa, Amparo Flórez López, Álvaro Sandoval Bernal, Alicia Alejandra Alfaro Castillo, Pablo Antonio Rebolledo Schools, Alejandro Borda Rojas, Carlos Rodríguez Bocanegra, Miguel Ángel Rodríguez Melo, Edwin Ostos Alfonso, Mauricio González López, Jaime Girón Duarte, Nacianceno López Restrepo, Rafael Juan Carlos Espinosa, Santiago Salcedo, Mery Cecilia Hurtado, Flor Ángela Martínez, Alberto Barrantes Ullos, Juan José Quintana A, Carlos Arturo Forero, Olga Cielo Molina de la Villa, Hernán Vargas Martín, Álvaro Enrique Ayala Meléndez, Carmen Estavana Zapateiro B, Fernando Salavarrieta García, Marcela Ordóñez Fernández, Gilberto Poveda Rodríguez, Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi ,Alfonso de Jesús Vélez Rivas, Fabio Emel Pedraza Pérez, Ana del Socorro Bornacelli Guerrero, Marcela Rodríguez Velandia, Alvaro Eugenio Márquez Sarmiento, Javier Darío Higuera Ángel, Carlos Arturo Morales López, Daniel Ávila Camacho, José Antonio Solarte Gómez, Blanca Stella Barrero Barrero, María Consuelo Porras, Concepción Concha Agudelo.

i. ***Ilegitimidad del derecho sustantivo***

Existe Ilegitimidad del uso del derecho sustantivo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por cuanto lo que se pretende es el REEMBOLSO de una prestación social como lo es el **auxilio de cesantías**, cuyo PAGO emana de la OBLIGACION LEGAL de aquélla, producto del VINCULO LABORAL con la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Aquello que la causa en que se fundan las pretensiones del actor, devienen del supuesto deber de haber notificado o no las liquidaciones, es un sofisma para distraer la atención del verdadero derecho sustantivo que es aquélla -las cesantías- y no éste, porque con razón o sin ella, el derecho a dicha prestación, existe, en virtud de lo dispuesto por la **Ley 50 de 1990** y por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**.

Dada la *materia*, de acuerdo a la cuantía cuyo valor pretende que se le reembolse por los funcionarios o ex funcionarios demandados, pues se trata de una prestación social de carácter laboral, nacida del vínculo de trabajo que existió entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y aquélla a quien se realizó el pago, en el cual el Ministerio es, por el contrario, deudor de la obligación, conforme al artículo 249 del C.S.T., que establece el auxilio de cesantía, y lo dispuesto en la Sentencia de Constitucionalidad C-535 de 2005, toda vez que la causa de lo pagado, es producto de dicho fallo que le impuso a dicha entidad, la obligación de liquidar tales prestaciones con base en el salario realmente devengado por la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**,

durante los periodos de sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior desde 1990 hasta el año 2003, y para cuyo cumplimiento no puede predicarse la existencia como engañosamente se formula, de una indemnización, que diera lugar al daño antijurídico.

V. FUNDAMENTACIÓN DE LA DEFENSA

a. Fáctica

Lo que da origen a lo pagado, cuyo monto se pretende *repetir*, corresponde al **derecho** de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** al reconocimiento y pago de las diferencias a su favor por concepto de ***cesantías*** desde 1990 hasta el año 2003 de acuerdo con los salarios que en esos períodos realmente devengó[20]

No es, pues, racional, ni lógico y sí sofístico, afirmar como lo expone la demanda, que obedezca al deber que en el período del 10 de marzo de 1997 al 2 de mayo de 1999, el Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** habría tenido y ***omitiera*** *"(...) en su condición de Subsecretario de Recursos Humanos..."*, de notificar *personalmente* a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, sus ***cesantías*** anuales desde 1990 hasta el año 2003 e impedido así, con *culpa grave,* que no ocurriera el fenómeno *prescriptivo* trienal de las acciones laborales y de caducidad de las propias ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que le hubieran permitido al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES eludir el reconocimiento y pago de dicha prestación conforme a los salarios reales que en esos períodos la misma devengó, incrementándose su valor, que es lo que al Ministerio le resulta *antijurídico* y asume como el *daño* que alega le irrogó *pagar* lo que, inclusive despojado de las acciones llamadas a hacer efectivo el cobro de lo debido, persiste jurídicamente como una *obligación natural* que encuentra en su naturaleza la causa legítima del pago, que, en consecuencia, no cabe *repetir*.

De manera que del Catálogo de Funciones mencionados genéricamente no se desprende la prueba que permita afirmarse, como lo expresa la demanda, que el Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** tuviera el deber de *notificar personalmente* las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** con destino al Fondo Nacional del Ahorro **desde 1990 hasta el año 2003** tampoco era esa la *práctica común* adoptada al respecto como política general por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por eso, *repetir* lo pagado generaría más bien, un *enriquecimiento sin causa* en cabeza de **LA NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**, a la vez que le irrogaría un injusto *empobrecimiento* al Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL**

[20] Sentencia C-535 de 2005

por cierto, el extremo débil de la relación laboral que se le opone para sustentar la acción.

b. Jurídica

La Ley 6 de 1945, establece la obligación del empleador, en este caso el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, de reconocer y pagar al trabajador el auxilio de **cesantía**, un mes de salario por año de servicio, o proporcionalmente a su fracción, debiéndose tener por *salario* todo emolumento que este reciba ordinariamente en desarrollo de su vinculación laboral.

Ahora bien, la Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005 en materia de cesantías de los funcionarios y ex funcionarios que prestaron servicios al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en el exterior, sobre las mismas consideraciones que antes en materia de *pensiones* sirvieron de sustento a la Sentencia C-173 del 02 de marzo de 2004, definió que dicha prestación debe corresponder a los salarios realmente devengados y que una disposición como la que contenía el Decreto 10 de 1992 (art. 57[21]) y retomó el Decreto Ley 274 de 2000 (art. 66[22]), que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 derogó, no debieron aplicarse y sí, haber acudido la Entidad a la *excepción de inconstitucionalidad,* lo que no se hizo y vino a remediar el Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012 y aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F". En tal virtud, lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de sus ***cesantías*** anuales en el periodo comprendido desde **1990 hasta el año 2003**, no es de carácter indemnizatorio, por lo que no le ocasiona legítimamente a LA NACION -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- un detrimento patrimonial, presupuesto inescindible de la acción de repetición.

De otra parte, si como está visto durante varios años, desde 1990 hasta el año 2003 todos los quince (15) ex funcionarios aquí y en otros procesos[23] también demandados, siempre hicieron u omitieron lo mismo como lo afirma la demanda, lógico es colegir que esa fue sistemáticamente la política establecida sobre la materia por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y no la manifestación independiente y autónoma del Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** por la que deba responder patrimonial ni administrativamente, pues habríase dado *culpa* de la propia Entidad que la exime al respecto y cuanto más, un ***error communis facit ius***[24] o, que hace derecho.

---

[21] Declarado Inexequible Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.
[22] Declarado Inexequible Sentencia C-292 de 2001.
[23] Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B", Radicados **2014-00835-00** y **2014-00841-00**, J. 4° Administrativo de Descongestión Radicados **2014-00004-00** y **2013-00440-00**, J. 8° Administrativo del Circuito Radicado **2013-00622-00**, J. 9° Administrativo del Circuito, Radicados **2014-00026-00, 2014-00065-00, 2014-00260-00** y **2014-00605-00**, J. 31 Administrativo del Circuito Radicados **2014-00092-00, 2014-00111-00, 2013-00244-00, 2014-00286-00, 2014-00479-00, 2014-00304-00** y **2014-00387-00**, J. 35 Administrativo del Circuito Radicados **2013-00056-00, 2014-00467-00, 2014-00467-00, 2014-00152-00** y **2014-00399-00**, J. 37 Administrativo del Circuito Radicados **2013-00087-00, 2013-00115-00, 2013-00123-00, 2013-00303-00, 2013-00304-00, 2013-00479-00** y **2013-00480-00**, entre muchos otros.
[24] Conc. artículo 8°. Ley 153 de 1887

Por lo anterior, en este caso no puede afirmarse que se hayan configurado los elementos para considerar probada la culpa grave del Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** conforme lo prevé el artículo 6º de la Ley 678 de 2001 y, en tal sentido, se trae a colación lo expuesto por el H. Consejo de Estado respecto a la carga de la prueba en la acción de repetición (denominada pretensión con la Ley 1437 de 2011):

> *"Es claro que el solo desconocimiento de la norma por el operador jurídico encargado de aplicarla a través de actos administrativos (...) no implica de plano una responsabilidad a título de imputación de culpa grave o dolo, puesto que, en estos casos, existe un margen de error admisible en condiciones normales y más aún extraordinarias cuando se trata de la interpretación y ejecución de las normas jurídicas o de la percepción de la realidad atendiendo las circunstancias específicas del caso, toda vez que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de la función pública se trata de una labor humana, que implica la posibilidad de yerros en las actuaciones. Como en el sub exámine no son procedentes las presunciones de dolo y culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001, por la echa de ocurrencia de los hechos, dichos conceptos requieren de una carga probatoria mayor por parte de la entidad pública en cuanto que debe desplegar una actividad prolífica tendiente a demostrar y acreditar el dolo y la culpa grave..."*[25].

Por otra parte, los servidores públicos tienen un régimen de responsabilidad subjetivo y, en consecuencia, el título de imputación, sea dolo o culpa grave, debe estar plenamente demostrado dentro del proceso en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, pues el mismo no se presume en estos casos. En otras palabras, no basta simplemente citar uno de los presupuestos de la ley para que se configure la pretensión de repetición, debe acreditarse en debida forma la actuación dolosa o gravemente culposa del agente demandado.

Ahora bien, se advierte que existen serias y graves deficiencias respecto de las pruebas que ordenan a la entidad pública al pago de las diferencias de cesantías a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** que, en este caso, corresponde al **Auto de aprobación de la conciliación proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"**, ya que tal documentos debieron ser aportados con la demanda en originales según lo dispone el Art. 245 del C.G.P: "[...] *Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en donde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.*

En un asunto similar al que nos ocupa, la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó:

> *"Por tanto, las copias aportadas por la entidad demandante carecen de valor probatorio, porque, en tratándose de copias de documento público (...), para que puedan ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial,*

[25]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Rad. 11001032600020030001901, Número interno 24953, C.P. Dra. Ruth Stella Correa.

deben reunir las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra la diligencia de autenticación.

En ese orden de ideas, se concluye que no está demostrado dentro del proceso el primero de los hechos generadores de la acción de repetición, cual es la existencia de una sentencia (o providencia) que condene al Estado a reparar patrimonialmente un daño antijurídico, ***situación que por sí sola implica que se deben negar las pretensiones de la demanda, en tanto ello tiene incidencia en la acreditación de los otros requisitos (...)"***[26] (Resalto).

De esta manera, se reitera lo establecido en el Artículo 173 del Código General del Proceso que establece el deber por parte de los jueces de *abstenerse de ordenar la práctica de pruebas* que directamente, o por medio del derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que la solicite.

VI. PRUEBAS

Ruego al Señor Juez, decretar y tener como pruebas de mi parte, las siguientes:

VI.1 Documental

a) **Aporto** poder original con que actúo.

b) **Se oficie**

1. A la Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso y con base en sus *archivos*, se informe sobre los documentos, si los hubiere, que sirvieron de soporte para la erogación del *gasto*, por concepto de las **cesantías** anuales **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde 1990 hasta el año 2003;

2. Al Fondo Nacional del Ahorro FNA, para que con destino al proceso, se informe sobre los documentos remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, soportando los depósitos efectuados por el mismo a favor de **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde 1990 hasta el año 2003;

3. A la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se informe y remita copia de las resoluciones por medio de las cuales el Ministro de Relaciones Exteriores delegó, como ordenadores del gasto, entre otros, lo que es hoy la Dirección Administrativa y Financiera, el *pago* al Fondo Nacional del Ahorro de los depósitos de cesantías anuales del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde 1990 hasta el año 2003

[26] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sent. del 28 de febrero de 2011, Rad. 34.816. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

4. A la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se dé cuenta, individualizándolos de los demás funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quienes, como en este caso al Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** se ha demandado o dispuesto demandar en acción de repetición, por supuestamente haber omitido *notificar personalmente,* las cesantías anuales depositadas al Fondo Nacional del Ahorro, indicando los cargos y periodos por los que en cada caso se les llama a responder;

5. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se remita copia de las liquidaciones, **año por año**, de las cesantías de **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde 1990 hasta el año 2003 y particularmente en el periodo ***desde el 10 de marzo de 1997 al 2 de mayo de 1999,*** como dice la demanda, conciliadas por un total de **$133.148.564** cuyo monto se pretende repetir sin razón de proporcionalidad alguna, entre otros, en contra del Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL**.

Procura esta prueba establecer que los hechos u omisiones, en relación con el deber que se dice *supuestamente* tenía el Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** de notificar a **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** las cesantías por el periodo desde 1990 hasta el año 2003 habría sido cuanto más, una política sistemática y generalizada del Ministerio de Relaciones Exteriores, generadora, como tal, de un *error communis facit ius*, imputable a la *propia culpa* de la entidad.

6. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores o a quien en su defecto, corresponda, (art. 21 CPACA) a fin de que con destino al proceso de cuenta del lugar donde el Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** se desempeñaba al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior, en los años desde **1990 hasta el año 2003** a los que corresponden el pago que se le hizo de las cesantías, por cuya cancelación se pretende repetir y se diga qué condiciones de traslado, si se encontraba en el exterior, tenían los demandados para notificarle personalmente allí las liquidaciones anuales de dicha prestación durante tales periodos, a que alude la demanda.

Con esta prueba pretendo demostrar la imposibilidad real que los demandados, y en este caso, el Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** tenía para haber cumplido el deber que supuestamente tenían de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de las liquidaciones anuales de cesantías, encontrándose el mismo en el exterior, con mayor razón si esa era una condición extendida en todo el mundo, donde tenían asiento las distintas Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia.

7. A los siguientes Despachos Judiciales, para que a mi costa, y a fin de que por sus respectivas Secretarías se certifique la existencia de tales procesos instaurados por el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** en acciones de repetición, por la misma causa del que en este caso nos ocupa:

Pago realizado a:	Despacho Judicial	Radicado Proceso
Ignacio Enrique Ruiz	Consejo de Estado-Sección III-Sub B	2014-00043-00
Lilia Stella Cepeda Ulloa	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	2014-00835-00
Zaida Patricia Cristancho Guerrero	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	2014-00841-00
JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL	J. 4° Admtivo de Descongestión	2014-00004-00
Fernando Alzate Donoso	J. 4° Admtivo de Descongestión	2013-00440-00
Enrique Antonio Celis Durán	J. 8° Administrativo del Circuito	2013-00622-00
Ana Cecilia Pulido Guerrero	J. 9° Administrativo del Circuito	2014-00026-00
Francia Rodríguez Romero	J. 9° Administrativo del Circuito	2014-00065-00
María del Pilar Gómez Valderrama	J. 9° Administrativo del Circuito	2014-00260-00
Armando González Cortés	J. 9° Administrativo del Circuito	2014-00605-00
Eduardo Casas Acosta	J. 16 Administrativo del Circuito	2013-00599-00
María Nelly Tascón Maya	J. 18 Administrativo del Circuito	2013-00511-00
María Eugenia Beltrán de Chaparro	J. 19 Administrativo del Circuito	2013-00128-00
Miguel Camilo Ruiz Blanco	J. 19 Admtivo Descongestión Cto	2014-00200-00
Janeth Victoria Truque Rivera	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	2014-00188-00
Raul Arturo Rincón Ardila	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	2014-00037-00
Henry Javier Arcos Muñoz	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	2014-00391-00
Nidia Inés Aguirre Acevedo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	2014-00084-00
María Inés Aldana Nieto	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	2014-00036-00
Anyul Molina Suarez	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	2014-00211-00
Mauricio Baquero Pardo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	2014-00268-00
Álvaro Eugenio Márquez Sarmiento	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	2014-00183-00
Marcela Rodríguez Velandia	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	2014-00238-00
Cruz Elena Mosquera Monteros	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	2014-00009-00
María Victoria Eugenia Senior Pava	J. 23 Administrativo del Circuito	2013-00392-00
Margarita Eliana Manjarrez Herrera	J. 26 Administrativo del Circuito	2013-00535-00
René Correa Rodríguez	J. 27 Administrativo del Circuito	2013-00211-00
Gladys Mireya Paéz Herrera	J. 27 Administrativo del Circuito	2014-00314-00
Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez	J. 30 Administrativo del Circuito	2013-00597-00
Alberto Bula Bohórquez	J. 30 Administrativo del Circuito	2014-00071-00
María Helena Pastrana Pastrana	J. 31 Administrativo del Circuito	2014-00092-00
María Inés Herreño Pinto	J. 31 Administrativo del Circuito	2014-00111-00
María Smith Rueda Centeno	J. 31 Administrativo del Circuito	2013-00244-00
Juan Norberto Colorado Correa	J. 31 Administrativo del Circuito	2014-00286-00
Amparo Flórez López	J. 31 Administrativo del Circuito	2014-00479-00
Álvaro Sandoval Bernal	J. 31 Administrativo del Circuito	2014-00304-00
Alicia Alejandra Alfaro Castillo	J. 31 Administrativo del Circuito	2014-00387-00
Pablo Antonio Rebolledo Schools	J. 32 Administrativo del Circuito	2014-00118-00
Alejandro Borda Rojas	J. 32 Administrativo del Circuito	2013-00389-00
Hector Montoya Añez	J. 32 Administrativo del Circuito	2014-00153-00
Carlos Rodríguez Bocanegra	J. 33 Administrativo del Circuito	2013-00316-00
Miguel Ángel Rodríguez Melo	J. 33 Administrativo del Circuito	2013-00317-00

Edwin Ostos Alfonso	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00383-00**
Mauricio González López	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00384-00**
Jaime Girón Duarte	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00430-00**
Nacianceno López Restrepo	J. 34 Administrativo del Circuito	**2013-00279-00**
Álvaro Enrique Ayala Meléndez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2013-00056-00**
Carmen Estavana Zapateiro B.	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00467-00**
Fernando Salavarrieta García	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00152-00**
Marcela Ordóñez Fernández	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**
Gilberto Poveda Rodríguez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00399-00**
Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi	J. 36 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**
Alfonso de Jesús Vélez Rivas	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00087-00**
Fabio Emel Pedraza Pérez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00115-00**
Ana del Socorro Bornacelli Guerrero	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00123-00**
Javier Darío Higuera Ángel	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00303-00**
Carlos Arturo Morales López	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00304-00**
Daniel Ávila Camacho	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00479-00**
José Antonio Solarte Gómez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00480-00**
Diego Felipe Cadena Montenegro	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00271-00**
Amalia Rodriguez Fuque	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00290-00**
Victoria Eugenia Olga Pauwles T.	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00268-00**
Blanca Stella Barrero Barrero	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00106-00**
María Consuelo Porras	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00117-00**
Concepción Concha Agudelo	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00446-00**

VI. 2 <u>Testimonios</u>

a) Respetuosamente solicito que se llame a declarar en audiencia en la fecha y hora que para tales efectos señale el Despacho, sobre los hechos y omisiones que sean de su conocimiento, en relación con el diligenciamiento, liquidaciones y pago al Fondo Nacional de Ahorro FNA, en materia de liquidaciones anuales de *cesantías*, al Señor **ABELARDO RAMÍREZ GASCA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19'054.598 de Bogotá, con domicilio en la Carrera 14 No. 109 – 79 Apartamento 301, Edificio Caminos del Parque, en Bogotá.

b) Así mismo, con el fin de que deponga sobre la ejecución presupuestal en materia de cesantías anuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y del traslado de las mismas al FNA, con ocasión del desempeño que tuvo a su cargo la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Doctora **ARAMINTA BELTRÁN URREGO**, Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No. 9-03, en Bogotá.

c) A quienes fungieron como miembros del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores para que depongan en relación con las razones que tuvieron en

consideración para llevarlos a determinar que hubo *culpa grave*, y demandar en repetición al Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** cuando se desempeñó como *Subsecretario de Recursos Humanos* del Ministerio de Relaciones Exteriores en los periodos reseñados en la demanda, (Acta No. 229 del 22 de julio de 2013), consistente en haber omitido el deber que *supuestamente* tenía, según la demanda, de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las liquidaciones anuales de las cesantías por valor de **$133.148.564** para cuyos efectos se le citará en el día y hora que señale su despacho, a través de la Dirección del Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No.9-03, en Bogotá y son:

1. Doctor EDWIN OSTOS ALFONSO, Director de Asuntos Jurídicos Internacionales (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

2. Doctor ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO, Director de Talento Humano; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

3. Doctora CLAUDIA LILIANA PERDOMO ESTRADA, Jefe Oficina Asesora Jurídica Interna (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

4. Doctora MARTHA RUBY CUÉLLAR CALDERÓN, Coordinadora Grupo Interno de Gestión; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

5. Doctora LUZ ANDREA CORREDOR ARTEAGA, Abogada Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

6. Doctora HELGA VELASQUEZ AFANADOR, Abogada Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

7. Doctor JORGE ENRIQUE BARRIOS SUÁREZ, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

8. Doctor HUGO ARMANDO GRANJA ARCE, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

9. Doctor ANDRES LEONARDO MENDOZA PAREDES, Secretario Técnico (E) del Comité de Conciliación; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

VII. COSTAS

Sean a cargo de la demandante, LA NACION –MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- incluyendo *agencias en derecho*, toda vez que es manifiesta la falta de buena fe de dicha entidad al demandar en repetición a varios exfuncionarios, cuando no se cumplen a cabalidad todos los presupuestos establecidos de manera expresa por la Ley 678 de 2001 para el ejercicio de dicho medio de control, ya que en ningún caso existió una condena al Ministerio a reconocer una indemnización, sino que se le ordena efectuar la reliquidación de las cesantías, que es una prestación social de naturaleza laboral, en favor de un trabajadora por no habérsele incluido todos los factores salariales devengados en la planta externa, lo cual fue una política de dicho ministerio y no la decisión unilateral de los ahora demandados.

VIII. NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones, junto con mi representado el Doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL** en la Secretaría de su Despacho; en mi oficina de la Carrera 15 No. 86A- 57 of. 501, teléfono 7027824, en Bogotá; y, a través de mi correo electrónico: cilinof@hotmail.com.

Señor Juez

Franklyn Liévano Fernández
C.C. No. 19.154.294 de Bogotá
T.P. No. 12.667 del C.S.J.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
El documento fue presentado personalmente por Franklyn Liévano Fernández
Quien se identificó C C No. 19'154'294
T P No. 12-667 Bogotá D C 05 MAY 2016
Responsable Centro de Servicios VHPP

578 33

Señor Juez
JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - Sección Tercera
E. S. D.

Proceso : Ordinario

Acción : **Repetición**

Radicado : **No. 110013336722-2014-00109-00**

Demandante : **LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**

Demandados : *CLARA INÈS VARGAS SILVA y otros*

JUAN ANTONIO LIÉVANO RANGEL, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17'162.395 de Bogotá, con domicilio en la ciudad, a usted respetuosamente manifiesto que por medio de este escrito confiero **Poder Especial**, amplio y suficiente al Doctor **FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ**, mayor y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501 teléfono 7027824, en la ciudad y correo electrónico: cilinof@hotmail.com, para que en mi nombre concurra y me represente en este proceso hasta su terminación.

Mi apoderado dispondrá en el ejercicio de su gestión, de todas las facultades generales de ley, así como de las especiales de recibir, desistir, conciliar, transigir, sustituir y reasumir.

Ruego al Señor Juez reconocer y tener a mi apoderado en los términos de este escrito.

Del Señor Juez,

JUAN ANTONIO LIÉVANO RANGEL
C.C. No. 17'162.395 de Bogotá

Acepto el poder conferido,

FRANKLYN LIÉVANO FERNÁNDEZ
C.C. No. 19'154.294 de Bogotá
T.P. No. 12.667 de C.S.J.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

NOTARÍA CUARENTA Y DOS (42)
CÍRCULO DE BOGOTÁ - COLOMBIA

JUAN CARLOS VARGAS JARAMILLO,
NOTARIO TITULAR

CERTIFICA:

Que **LIEVANO RANGEL JUAN ANTONIO**
quien se identificó con: **C.C. 17162395**

manifestó que reconoce expresamente el contenido de este documento y que la firma que en él aparece es la suya.

En constancia, firma nuevamente.

Bogotá D.C. **28/03/2016**

ww32cre2fsc2sw3

www.notariaenlinea.com
PIJTL3LCUNE33X55T

NLN

Juan Carlos Vargas Jaramillo
Notario 42

Juan Carlos Vargas Jaramillo
Notario 42

CNP. 0081

EL SUSCRITO COORDINADOR DE NOMINA Y PRESTACIONES
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

C E R T I F I C A :

Que el doctor **JUAN ANTONIO LIEVANO RANGEL**, identificado con cédula de ciudadanía 17.162.395 expedida en Bogotá, ha desempeñado en este Ministerio los siguientes cargos:

Mediante Resolución 326 de marzo 11 de 1974, se le nombró interinamente en el cargo de Segundo Secretario 20 de la Sección de Servicios Generales de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos. Tomó posesión el 1° de abril de 1974.

Mediante Resolución 513 de abril 30 de 1975, se le trasladó al cargo de Segundo Secretario 20 de la Sección de Negocios Generales, de la División de Asuntos Consulares. Tomó posesión el 6 de mayo de 1975.

Mediante Decreto 2704 de noviembre 28 de 1977, se le nombró Segundo Secretario de la Embajada de Colombia ante el gobierno del Perú, encargado de las Funciones Consulares en Lima. Tomó posesión el 1° de febrero de 1978.

Mediante Decreto 2744 de diciembre 15 de 1978, se le nombró Primer Secretario de la Embajada de Colombia ante el gobierno de Perú, encargada de las Funciones Consulares en Lima. Tomó posesión el 20 de diciembre de 1978.

Mediante Decreto 2643 de octubre 7 de 1980, se le nombró Asesor, Código 1020, Grado 01 de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos. Tomó posesión el 9 de diciembre de 1980.

Mediante Decreto 1302 de junio 17 de 1981, se le nombró Primer Secretario de la Embajada de Colombia ante el gobierno de Guatemala, encargado de las Funciones Consulares en Guatemala. Tomó posesión el 16 de septiembre de 1981.

Mediante Resolución 1797 de agosto 23 de 1984, se le nombró Profesional Universitario, Código 3020, Grado 06 de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos. Tomó posesión el 1° de noviembre de 1984.

Mediante Decreto 322 de febrero 19 de 1988, se le nombró en el cargo de Consejero de Relaciones Exteriores, Código 2091, Grado 05 de la Sección de Privilegios e Inmunidades de la Dirección General del Protocolo. Tomó posesión el 29 de febrero de 1988.

Mediante Decreto 0104 de enero 11 de 1989, se le inscribió dentro del escalafón de la Carrera Diplomática y Consular en la categoría de Ministro Consejero.

Mediante Decreto1399 de junio 27 de 1989, se le nombró en comisión en el cargo de Subdirector, Código 2030, Grado 09 de la Dirección General del Protocolo. Tomó posesión el 10 de julio de 1989.

Mediante Decreto 2459 de octubre 30 de 1991, se le nombró Cónsul de Primera Clase, Grado Ocupacional 3EX, en el Consulado General de Colombia en Miami – Estados Unidos de América. Tomó posesión el 1° de enero de 1992.

Mediante decreto 1162 de julio 10 de 1992, se le ascendió dentro del escalafón de la Carrera Diplomática y Consular a la categoría de Ministro Plenipotenciario.

Mediante Decreto 585 de marzo 22 de 1996, se le trasladó a la planta interna en el cargo de Ministro Plenipotenciario, Código 0074, Grado 18. Tomó posesión el 3 de junio de 1996.

Mediante Resolución 2625 de agosto 30 de 1996, se le nombró en comisión en el cargo de Jefe de División, Código 2040, Grado 19 de la División de Pasaportes. Tomó posesión el 6 de septiembre de 1996.

Mediante Decreto 1632 de septiembre 10 de 1996, se le ascendió dentro del escalafón de la Carrera Diplomática y Consular a la categoría de Embajador.

Mediante Resolución 0618 de marzo 6 de 1997, se le nombró en comisión en el cargo de Subsecretario de Relaciones Exteriores, Código 0044, Grado 18 de la Subsecretaría de Recursos Humanos. Tomó posesión el 10 de marzo de 1997.

Mediante Decreto 646 de abril 13 de 1999, se le trasladó al cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Grado Ocupacional 7EX, de Colombia ante el gobierno de la República de Trinidad y Tobago. Tomó posesión el 3 de mayo de 1999.

Mediante Decreto 373 de febrero 17 de 2003, se le trasladó al cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Grado Ocupacional 7Ex, de Colombia ante el gobierno de Honduras. Tomó posesión el 7 de abril de 2003 y lo desempeñó hasta el 15 de agosto de 2005.

Que el doctor Liévano Rangel ha cotizado los aportes de ley por concepto del Sistema General de Seguridad Social a CAJANAL. (Nit.8999990103).

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de enero de dos mil seis (2006).

OVIDIO HELI GONZALEZ
Coordinador de Nómina y Prestaciones

Proyectó: Rocio Yunis V.

582

Franklyn Liévano Fernández [1]
DOCTOR EN DERECHO

Señor Juez
JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - Sección Tercera
E. S. D.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
2016 MAY 5 PM 4 05
OFICINA DE APOYO JUZGADOS ADMINISTRATIVOS
Hilda caba
000003

Proceso : Ordinario

Naturaleza : **Repetición**

Asunto : ***Contestación de demanda***

Radicado : **No. 110013336722-2014-00109-00**

Demandante : **LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**

Demandados : CLARA INES VARGAS SILVA *y otros*
-Hernando Leyva Varón, **HILDA STELLA CABALLERO RAMÍREZ**, Aura Patricia Pardo Moreno, Luis Miguel Domínguez García, Leonor Barreto Diaz, Juan Antonio Liévano Rangel, María Hortensia Colmenares Facinni , Rodrigo Suarez Giraldo ,María del Pilar Rubio Talero, Patricia Rojas Rubio,Ituca Helena Marrugo Pérez, Edith Andrade Páez, y Miriam Consuelo Ramírez Vargas-,

FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ, mayor y vecino de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la ciudad en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501 teléfono 7027824, con correo electrónico: cilinof@hotmail.com, obrando conforme al Poder Especial adjunto, en nombre y representación de la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ**, mayor y vecina de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 21.223.165 de Villavicencio, con domicilio en la ciudad de Bogotá, respetuosamente **me notifico por conducta concluyente**[1] y doy ***contestación*** en oportunidad, como sigue, a la demanda que dentro de este proceso se le formula:

I. En cuanto a las PRETENSIONES

ME OPONGO a todas y cada una de ellas, conforme a las excepciones y las razones de la defensa que en lo fáctico, así como en lo jurídico, expondré a continuación:

[1] Art. 330 del C.P.C.

A la ***PRIMERA***: Porque es engañosa la hipótesis de asumir como fundamento de la acción, que no se hubiere generado el pago realizado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, si la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** le hubiere personalmente *notificado* las liquidaciones anuales, año por año, de sus cesantías de los períodos de sus servicios en el exterior, desde **1990 hasta el año 2003** pues al **Acuerdo Conciliatorio del 29 de marzo de 2012 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F",** se llegó en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005,** que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, originándose así la obligación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de reajustar la liquidación de las cesantías de los funcionarios que prestaron sus servicios en el exterior con base en los salarios reales y no sobre sumas inferiores de otros cargos en los que el funcionario no se desempeñó, dando lugar a lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores en tal virtud pagó.

Además es falsa la afirmación en virtud de la cual se impidió que operará la prescripción trienal los derechos laborales, por la omisión de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** toda vez que dicho término prescriptivo sólo puede computarse a partir del *retiro definitivo* del empleado.

A la ***SEGUNDA***: *"(...) Que se condene a..."*, entre otros, a mi representada al *pago y reparación* de la suma de **$133.148.564** que el Ministerio pagó en virtud del **Acuerdo Conciliatorio celebrado ante la Procuraduría 84 Judicial I**, reseñado en el proceso, puesto que la acción de repetición a voces del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, tiene por objeto la recuperación de lo pagado por el estado **exclusivamente** por concepto de un ***reconocimiento indemnizatorio***, que aquí, no existe (¡) porque dicha suma, el Ministerio de Relaciones Exteriores los pagó, en este caso a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** por reajuste de **CESANTÍAS**, en virtud de la relación laboral habida entre los mismos en los periodos de sus servicios en el exterior que reseña la demanda y lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005.

En efecto, cabe distinguir que lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en virtud del **Acuerdo Conciliatorio** tiene su causa en el restablecimiento del derecho subjetivo del mismo, amparado en una norma jurídica cual es la Ley 6ª de 1945 que establece el derecho a las cesantías y en lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005, que es lo que aquí se ha traído al proceso, en apoyo de la acción de repetición, cuando ésta ha de tener su apoyo en una sentencia o conciliación previa respecto a un reconocimiento indemnizatorio, que se diga, como aquí se expone, producido por la acción u omisión de los agentes del Estado (art. 140 CPACA), de donde es imperativo echar de menos el presupuesto *objetivo* para la acción de repetición, consistente en una sentencia o conciliación de un reconocimiento indemnizatorio, por su naturaleza antijurídico. Esto es lo opuesto

integral y absolutamente al presupuesto esgrimido por la demandante como pie de la acción.

A la ***TERCERA***: Que se *declare* que el Acuerdo Conciliatorio aprobado por el **Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"** existe una *obligación clara, expresa y actualmente exigible, que presta mérito ejecutivo,* con remisión al artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, para efectos del cobro *coactivo* de una obligación, conforme a las prescripciones del artículo 488 del CPC sobre títulos ejecutivos (Actual 422 C.G.P), dicha pretensión difiere del medio de control de repetición, el cual busca la declaratoria de responsabilidad de un servidor o ex servidor público, quien debido a su conducta dolosa o gravemente culposa conllevó a que el Estado se viera en la obligación de reconocer una suma de dinero. Ahora bien, el **Acuerdo Conciliatorio** reúne en sí mismo los requisitos del título ejecutivo, con lo cual presta mérito ejecutivo únicamente en favor del beneficiario del pago, esto es, del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

A la ***CUARTA***: Sobre la pretensión del pago de intereses, no existe causa legítima para derivarlos, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraba en el deber legal de liquidar y pagar las cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, dada la relación laboral habida entre los mismos.

A la ***QUINTA:*** En cuanto a la pretensión de condena en costas a mi representada, puesto que ha de ser la NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, quien debe salir al pago a favor del mismo, por ser esta acción un ostensible abuso del derecho a litigar.

II. Sobre los HECHOS

Al hecho ***PRIMERO***: No es un hecho. Se trata de la cita de una normativa legal y al respecto me remito a la vigencia de las mismas en el tiempo.

Al hecho ***SEGUNDO***: Distingo entre la cita que se hace de normas legales, de una parte, y la interpretación interesada que se hace de las mismas para el señalamiento de obligaciones funcionales de mi representada la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ**entre las cuales la que se le endilga del deber de *"(...) liquidar y notificar personalmente el auxilio de cesantías..."*, pues el funcionario que desempeña las funciones en planta interna no puede hacerlo coetáneamente en la planta externa, como lo reseña la demanda.

Al hecho ***TERCERO***: No me consta. No obstante que se pruebe, pues el periodo en el cual mi representada fungió como *Jefe del Área de Recursos Humanos* ninguna relación tuvo respecto de los funcionarios que, como la Señora **ANGELA MARÍA CORREA**

MORENO, prestaron sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al hecho ***CUARTO***: No me consta. Mi representada ha sido completamente ajena al trámite de petición de reliquidación de cesantías ejercido por **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.** No obstante, es menester advertir desde ya la inconsecuencia del Ministerio al negar la pretensión de reliquidación de cesantías mediante el derecho de petición radicado para conciliar posteriormente y de manera inconsecuente el pago de las diferencias de las cesantías originadas en el exterior.

Al hecho ***QUINTO***: No es un hecho atribuible a mi representada, la doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ,** pues como se ha indicado, no tenía el deber de notificar personalmente los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el exterior.

Al hecho ***SEXTO***: No me consta y deberá probarse. El trámite de audiencia de conciliación extrajudicial fue entre la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, con quien fuera su empleador, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adviértase que el Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo la oportunidad de reliquidar las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia C-535-2005, optó por denegar las peticiones formuladas por el peticionario para posteriormente y de manera inconsecuente, aceptarlas en Audiencia de Conciliación.

Al hecho **SÉPTIMO:** No me consta y deberá probarse. El trámite de conciliación surtido fue exclusivamente entre empleador y empleado y ninguna participación tuvo mi representada, la doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ.**

Al hecho ***OCTAVO***: No me consta el trámite de pago que enuncia el Ministerio. Cualquier actuación surtida se dio en virtud de la relación laboral habida entre estos.

Al hecho ***NOVENO:*** No obstante la multiplicidad de hechos, difiero, pues dentro de las funciones que atribuye el artículo 19 del Decreto 1716 de 2009, a los Comités de Conciliación NO le es dada la facultad o competencia para determinar la culpa grave o dolo en las actuaciones de alguno de sus funcionarios y menos aún decidir *"(...) en forma unánime...* como se hizo, en cuanto a la responsabilidad que se le endilga, dice que tenía mi representada, la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ**.

Además, La función de notificar los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el *exterior* no se encuentra establecida de manera alguna en el Manual Descriptivo de Funciones y Requisitos (Resolución 0033 de 1994), ni en el Decreto 2126 de 1992.

Al hecho **DECIMO**: No es un hecho. Me atengo a la normatividad legal y su vigencia en el tiempo, pero sí es del caso señalar que los Comités de Conciliación son órganos consultivos y de asistencia, que si bien tiene la facultad de decidir cuando deba instaurarse una acción de repetición, no la tienen para hacerlo en relación con la declaratoria de responsabilidad administrativa y disciplinaria de los funcionarios de las entidades y eventual sobre el grado de culpa o dolo en la conducta de algún funcionario. En este caso del Ministerio de Relaciones Exteriores.

II. RAZONES DE LA DEFENSA

a) El **Acuerdo Conciliatorio** celebrado a instancias de la **Procuraduría 84 Judicial I** para Asuntos Administrativos tuvo por objeto el reconocimiento y pago de las diferencias del auxilio de cesantías que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como **empleador,** debía a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por diferencias en la liquidación de dicha prestación, practicada sobre sumas inferiores a los salarios reales que el mismo devengó desde **1990 hasta el año 2003** cuando ha laborado para el mismo en el exterior.

Pago que tuvo como fundamento legal, el vínculo laboral existente entre el Ministerio y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, generador de dicha prestación conforme a lo establecido en la Ley 6 de 1945, artículo 17 y lo declarado por la Corte Constitucional en la Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y mucho antes, en la Sentencia T-1016 de 2000, que evidencian la condición *inconstitucional* de las prácticas anteriores que al respecto tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores.

b) Se pretende, inmerso irregularmente bajo este medio de control judicial, que se avance en un juicio de declaratoria y condena de condena por la ***responsabilidad*** que se les endilga a mi representada, la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** por haber supuestamente omitido el deber –si lo tenía-, de notificar personalmente las liquidaciones *anuales* del auxilio de cesantías desde **1990 hasta el año 2003** desconociéndose que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental al debido proceso, garantiza que ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa***.

Para el caso, el anterior Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 184, que rigió hasta el 1° de julio de 2012, cuando entró en vigencia la ley 1437 de 2011. Así como la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, conforme a la cual: *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...."* (Artículo 5º).

c) Tanto por lo establecido por el anterior Código Contencioso Administrativo C.C.A., preexistente a la conducta que se le endilga a mi representada la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** la acción para la eventual responsabilidad, en ese caso *conexa* con la entidad, caducó conforme al artículo 136 del C.C.A, dos años después de la presunta omisión del deber, si lo tenía. A la vez prescribió, cinco (5) años después la disciplinaria (art. 34 ley 200 de 1995), transcurrido como lo han sido **más de trece (13) años**, contados a partir de la última presunta omisión que se les imputa y se retrotrae a la liquidación anual de cesantías del año **2003**.

d) La demanda, como está visto, no tiene como materia la restitución de lo pagado por un reconocimiento *indemnizatorio* -que no lo ha habido-, sino la recuperación para el Ministerio de lo que debía y pagó por ajuste de cesantías generadas en la vinculación laboral que establece la Ley 6 de 1945 y de conformidad con los términos fijados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y excluyen también, cualquier supuesto de la afectación del Ministerio de Relaciones Exteriores como empleador de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por un "daño antijurídico".

e) La Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** no fue convocada, ni citada como tercero, ni oída a ningún título, que le permitiera que le permitiera ejercer su derecho de contradicción, aportación y discusión de pruebas y defensa dentro del proceso de **Conciliación surtido en la Procuraduría 84 Judicial I el 29 de marzo de 2012.** Tampoco ante el Comité de Conciliación y Defensa del Ministerio de Relaciones, que se pronunció y decidió que se entablara la acción por supuestamente haber incurrido aquél en la omisión del presunto deber de notificar personalmente las cesantías de esta última desde **1990 hasta el año 2003** sin ninguna facultad, el Comité, para hacerlo en lugar de la autoridad disciplinaria correspondiente y sin las garantías del debido proceso

f) Colíguese de todo lo anteriormente expuesto, que no resulta legítimo el empleo de este medio de control judicial sobre la materia propuesta (art. 169 -núm. 3°-, Ley 1437 de 2011).

IV. De las EXCEPCIONES

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

A. EXCEPCIONES PREVIAS

1. Falta de competencia

Conforme lo establece el **artículo 7º** de la **Ley 678 de 2001**, de la acción de repetición conocerá de acuerdo con las reglas de competencia, el **juez o tribunal ante el que se**

tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado y, si la reparación patrimonial impuesta al mismo tiene origen en una **conciliación** o cualquier otra forma establecida en la ley para la solución de conflictos, es competente el **juez o tribunal que haya aprobado el respectivo acuerdo**.

En este caso, el pago que se pretende repetir, proviene del **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012** y aprobado por el **Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"**. En consecuencia, El Tribunal Administrativo de Cundinamarca es el **competente** para conocer de esta acción.

En efecto, según la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, la competencia en razón al factor de ***conexión*** es prevalente por ser especial y en este caso se trata de la consagrada por la ley 678 en su artículo 7° respecto de la acción de repetición. No obstante, lo establecido aun siendo posterior, por el artículo 155 del C.P.A.C.A. en razón a la cuantía.

Dijo, pues, el Consejo de Estado:

> *"Para efectos de la competencia en acciones de repetición el artículo 7° de la Ley 678, establece como premisas: la preexistencia de una sentencia condenatoria al Estado y por ende el trámite de un proceso previo ante la jurisdicción de lo contencioso; sin embargo en hipótesis distintas, es decir, cuando no existe un proceso previo y la reparación se hubiese originado en una conciliación u otra forma autorizada por la ley, conocerán el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo. Cuando no medie aprobación judicial conocerá el jue que ejerza jurisdicción en el territorio donde se celebró el acuerdo. De igual forma existen otros eventos por fuera de los presupuestos del artículo 7°, es decir sin condena previa en la jurisdicción contenciosa, tales como: condenas en la jurisdicción ordinaria en materia laboral a favor de trabajadores oficiales, condenas al Estado Colombiano en tribunales de arbitramento, o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc.; casos en los cuales se aplicarán plenamente las reglas de competencia previstas en el Código Contencioso Administrativo (...)" (Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación 11001-03-15-000-2007-00433(c) Consejero Ponente: MAURICIO TORRESCUERVO, once (11) de diciembre de dos mil siete (2007)*

Precisamente, el Doctor **JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ**, en su obra "El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo" de Ediciones Doctrina y Ley LTDA 2014, resume así el tema:

> *"La incompatibilidad entre la conexidad y la cuantía ya fue resuelta por la sala plena del Consejo de Estado, dando prelación a la conexidad para determinar el juez natural de la repetición.*

No se desconoce que el nuevo código es posterior, pero en materia de aplicación de las reglas de hermenéutica jurídica, el artículo 5 de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad de la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.

De lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, por lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario al de una norma anterior resulta ésta derogada, pues deberá tenerse en cuenta criterio de la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3 de la Ley 153 de 1887 y 5 de la Ley 57 del mismo año.

Por último, no puede perderse de vista, que el legislador en el momento establecer los fueros de competencia para cada uno de los medios de control, no realizó ninguna precisión frente al medio de control de repetición, teniendo en cuenta que, la competencia ya estaba prevista en la Ley 678 de 2001.

Se quiere significar con lo anterior, que toda vez que el, C.P.A.C.A. no derogó de manera expresa la competencia establecida en la Ley 678 de 2001, esta disposición se encuentra vigente y teniendo en cuenta la especialidad de esta norma respecto de la acción de repetición, se debe aplicar la conexidad a fin de establecer el juez natural de la pretensión de repetición y no el factor cuantía". (pag. 170)

2. Caducidad de la acción declarativa de responsabilidad

El **artículo 29 de la Constitución Política** garantiza el derecho fundamental del *debido proceso*.

En tal virtud nadie puede ser juzgado ni condenado sino conforme a las leyes preexistentes a la conducta que se les imputa.

En este caso, se pretende la declaratoria de responsabilidad y subsiguiente condena a la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** por supuestamente haber omitido el deber –que no tenía, de notificar personalmente y no lo hiciera, a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** las liquidaciones anuales de sus cesantías en los períodos en los que éste prestó sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores ***en el exterior*** y se remontan desde **1990 hasta el año 2003**

Más aún, abarca lo que se pretende repetir, lo pagado a dicho exfuncionario en los períodos de **1990 hasta el año 2003** períodos éstos, -todos- durante los cuales rigió el Código Contencioso Administrativo promulgado por el **Decreto Ley 01 de 1984,** que lo fue hasta el **1º de julio de 2012**, con la entrada en vigencia, el 2 de julio del mismo año, de la Ley 1437 de 2011, *"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".*

En este orden, la acción de responsabilidad de los funcionarios por los eventuales daños antijurídicos causados por culpa grave o dolosa en el desempeño de sus funciones (artículos 77 C.C.A.) en conexidad con la entidad (art. 78 C.C.A.), **caducó** a los **dos (2) años** de la presunta *omisión* (art. 136 ibídem)

Y sea del caso prevenir que otra es, por supuesto, la *caducidad* de la acción en cuanto a la *condena* sobre repetir lo pagado, que corre a partir del pago (Ley 1437 de 2011, art. 142) la cual, legal y constitucionalmente puede arrastrar la primera, si bien cabe lógicamente derivar de la responsabilidad la *condena* no así lo contrario, cuando aquélla no ha emanado del juicio previo y correspondiente, con las plenas garantías del *debido proceso* y dentro de la oportunidad fijada en la ley preexistente a la conducta imputada.

3. Inepta demanda

a) Por indebida acumulación de *pretensiones*

Se pretende bajo una misma cuerda, por el medio de control de repetición, que a la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** se la declare administrativamente responsable y se la condene a reembolsar al Ministerio de Relaciones Exteriores lo que éste, en cumplimiento de la **Sentencia C-535 de 2005**, pagó a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** por ajuste de cesantías de los períodos que esta laboró en el exterior, **desde 1990 hasta el año 2003** cuando aquélla se desempeñó como *Jefe del Área de Recursos Humanos* entre el **6 de febrero de 1992 al 8 de diciembre de 1992** regía el Decreto Ley 01 de 1984 por el cual se expidió el anterior Código de lo Contencioso Administrativo, vigente hasta el 1º de julio de 2012, al que precedió la Ley 13 de 1984, subrogado por el Decreto Ley 2400 de 1998 y regía también, en materia disciplinaria, la Ley 25 de 1974 -Orgánica de la Procuraduría General- y su Decreto Reglamentario 3404 de 1983, parcialmente modificada y adicionada por la misma Ley 13 de 1984 y el mismo Decreto Ley 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, de manera que a la luz de lo establecido por el artículo 29 de la Constitución Política a la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** no cabe enjuiciarla bajo el actual CPACA que rige en cuanto a la repetición y, en consecuencia no procede la acumulación, pues a voces del art. 165 del CPACA se exige que tanto lo relativo a la declaratoria de

responsabilidad como la condena a reembolsar lo pagado, puedan enjuiciarse bajo la misma normativa.

De acuerdo al artículo 29 de la Constitución, ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y como está visto, las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que supuestamente la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** no le notificó personalmente cuando esta fungía como **como** *Jefe del Área de Recursos Humanos* **desde el 6 de febrero de 1992 hasta el 8 de diciembre de 1992,** se remonta al año de **1991** y no pueden juzgarse sino a la luz de las normas preexistentes a dichas presuntas omisiones en el año de **1991- Hace 25 años,** entre otras cosas, caducadas y prescritas pues según la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, vigente para la época de las conductas que a la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** se endilgan, *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...."* (Artículo 5º).

Así, pues, la presunta responsabilidad que se le endilga a la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** no es susceptible de enjuiciarse ***sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y no por este medio de control, sin campo alguno para pronunciarse legítimamente sobre una disposición de orden constitucional como la impartida en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005** que dio lugar al pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores le hizo en virtud del Acuerdo Conciliatorio celebrado.

De otra parte, según lo expuesto por el artículo 136 del C.C.A. preexistente a la conducta que se le endilga a la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** la acción para derivar una eventual responsabilidad suya en el pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso hizo, caducó dos años después de la presunta omisión que se le endilga y también prescribió a los cinco (5) años la acción disciplinaria propia para definirla (art. 34 ley 200 de 1995), cuando han transcurrido desde entonces **no menos de trece (13) años y hasta veinticuatro años (24).**

Además, es infundada y falaz la afirmación de que de haberse notificado aquéllas liquidaciones anuales de cesantías, que en el proceso ni siquiera se conocen, hubiera prescrito la acción o caducado el derecho de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** puesto que la posibilidad de demandar nace desde el momento en que la Administración, al **retiro del servidor** no hace entrega de la suma correspondiente a este concepto, es decir omite el cumplimiento de su obligación.[2]

[2] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de septiembre de 2011 radicado interno (2005-2009).

B. EXCEPCIONES DE FONDO

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

a. *Ineptitud sustantiva de la demanda;*
b. *Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad.*
c. *Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición;*
d. *Ilegitimidad de personería por pasiva;*
e. *Inexistencia de nexo causal;*
f. *Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación;*
g. *Inexistencia de daño antijurídico;*
h. *Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso;*
i. *Falta de legitimación en la causa por pasiva;*
j. *Abuso del derecho; e,*
k. *Ilegitimidad del derecho sustantivo.*

EXPOSICIÓN DE LAS EXCEPCIONES DE FONDO

a. ***Ineptitud sustantiva de la demanda***

Derivada ésta del desconocimiento de las garantías constitucionales del derecho fundamental al *debido proceso*[3] a NO *"(...) ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (...) y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio..."*, pues fuerza distinguir en el proceso lo que atañe a la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial del demandado, la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** como se pretende y lo que concierne a la eventual condena a retribuir lo pagado.

A lo primero, indiscutiblemente corresponde la aplicación de las normas preexistentes a la supuesta conducta omisiva de los implicados, del deber –si lo tenían-, de notificar personalmente a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** ***año por año***[4], *las liquidaciones anuales* de sus cesantías, causadas en los años de **1990-** Hace 26 años,

[3] Art. 29 C.P.
[4] Decreto 3118 de 1968 *"Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantías de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, reorganizado por la Ley 432 de 1998".*

1991- Hace 25 años **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años-, durante los cuales laboró al servicio del Ministerio de Relaciones en **el exterior,** pues rigió desde el **1º de marzo de 1984**[5] hasta el **1º de julio de 2012**[6], el Decreto Ley 01 de 1984 que reformó el Código Contencioso Administrativo[7] anterior.

Ahora bien, a efectos de derivar la responsabilidad que correspondiera a los funcionarios aquí implicados para la época en que supuestamente omitieron el deber, -si lo tenían-, de notificar personalmente las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** causadas en los años de **1990**- Hace 26 años-, **1991-** Hace 25 años-, **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años-, el **artículo 78** del Decreto Ley 01 de 1984, vigente en esos años, permitió que fueran demandados, en conexidad con la entidad pública, los funcionarios responsables de culpa grave o dolo en ejercicio de sus funciones, que le fueren generados a terceros (art. 77 *ibídem*), conforme a las reglas generales de los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, de ser así, fuera la misma la sentencia que dispusiera que el funcionario responsable satisficiera los perjuicios ocasionados a la Entidad, repitiendo contra el mismo lo pagado, para lo cual el término para hacerlo era de "***(2) dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa...***" establecido para las acciones de su género.

En cuanto a lo segundo, aspecto propio de la ritualidad de los procesos, es claro, que al tipo de acción incoada ha de dársele el trámite del medio de control judicial de repetición, sin que por ello pueda legitimarse a accionar, como se proponen, frente a los demandados en procura de una declaratoria de responsabilidad que caducó y sustrae al juez de proveer legítimamente al respecto, hoy décadas después de acontecido el supuesto incumplimiento del deber, si lo tenía, que a los demandados se les endilga, que en ese tiempo no cumplieron, válido, el demandante, que hoy el término para el medio de control de repetición caduca a *partir del pago,* y baste ésa consideración para traer ahora a este juicio a los demandados quebrantándoles todas las garantías constitucionales al debido proceso.

De ahí que, la demanda adolezca de la actitud sustantiva para derivar una condena en contra de los demandados, habiendo caducado como está visto cualquier acción encaminada a la declaratoria de la responsabilidad administrativa y patrimonial de los demandados por hechos que se remontan, como ya ha quedado visto, entre **trece (13)**

[5] Diario Oficial 36.439 del 10 de enero de 1984.
[6] Fecha de entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 "por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
[7] Ley 167 de 1941

y veintiséis (26) años atrás, enmarcados dentro de un ordenamiento legal preexistente y también, por supuesto, más favorable[8].

Descendiendo a la demanda, ésta se apoya en una sentencia en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores fue condenado a restablecer los derechos que por su parte le vulneró a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** con el reconocimiento y pago que le había hecho de las cesantías causadas a su favor durante los períodos de sus servicios al mismo **en el exterior**, en los años en que desempeñó el cargo referido de la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** basándose en sumas inferiores a los salarios reales que el ex funcionario devengó, debiendo en consecuencia, re-liquidarle dicha prestación, conforme a lo ordenado en la Sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto Legislativo 10 de 1992, que el Ministerio siguió aplicando, no obstante su derogatoria con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993[9] y posteriormente la Ley 797 de 2003, de ninguna manera vinculante con los demandados, quienes son totalmente ajenos a las prácticas entronizadas en ese orden por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de donde se deriva el pago que por concepto de reliquidación de dichas cesantías, debió atender y **no del reconocimiento de una indemnización ocasionado por un daño antijurídico** que fuera imputable como se formula, a los demandados.

Es claro entonces, que no existe sentencia alguna de condena al pago a una indemnización que vincule a los demandados o que lo hubiese vinculado, conforme a las previsiones de los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984, ni pueda hacerlo ahora, lo cual conduce a la imposibilidad jurídica de despachar la demanda dada y, en consecuencia, la ineptitud sustantiva de la misma.

b. *Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad*

Siguiendo al tratadista *Bonnard,* quien participando de las mismas ideas de Deguit en materia de responsabilidad administrativa, lo que se advierte es una "falta de la administración" y la jurisprudencia ha advertido de *la responsabilidad* basada en una irregularidad de la actividad administrativa. Así, *"(...) Se ha deducido que la responsabilidad del patrimonio público surge cuando el daño resulta de una mala organización o de un funcionamiento defectuoso del servicio, y es, sin que sea necesario que en esa mala organización o defectuoso funcionamiento haya culpa de parte de un agente administrativo. Esto es lo que constituye la llamada culpa del servicio público, así denominada para indicar "que no hay culpa individualizada de un agente administrativo", sino solamente una irregularidad de origen anónimo y de aspecto objetivo en la organización y en el funcionamiento del servicio."*[10]

---

[8] Art. 53 C.P.
[9] T-1016 de 2000, Sentencia C-173 de 2004
[10] SARRIA B, Eustorgio y Mauricio. *Derecho Administrativo.* Editorial Pluma. Págs. 245 y 246

Y, como aquí se advierte la falta de la notificación personal de las liquidaciones anuales de cesantías a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores **en el exterior**, no fue, -está visto- un hecho aislado, sino que corresponde a una condición propia de un defectuoso servicio público de la entidad a falta de una regulación y apremios del orden de conformación y asignación de actividades puntuales, cuya omisión no cabe, pues, imputar individualmente a uno u otro funcionario con remisión a normas generales, sino que es más bien producto anónimo del funcionamiento de la Entidad, generador cuando menos de un ***error communis facit ius***[11] o, que hace derecho

Por otra parte, cabe señalar que de tiempo atrás la jurisprudencia ha establecido los requisitos para dar aplicación a la "doctrina del error común creador de derechos" o teoría de la apariencia[12], a saber:

1. *"Debe existir una situación que realmente sea contraria a la normatividad, pero oculta, es decir, (...) ajena en su etiología y desarrollo a quien eventualmente resultare perjudicado con la apariencia de juridicidad (...)*
2. *Que esa situación de apariencia de legalidad esté respaldada en hechos, situaciones o documentos cuyo vicio no sea posible advertir con diligencia y cuidado.*
3. *Que la conducta de quien resultó perjudicado con la situación de aparente legalidad esté respaldada por una buena fe del particular (...)*
4. *Que la situación no esté regulada expresamente por una ley imperativa que imponga soluciones diferentes a las que resultarían de la aplicación de la doctrina".*

c. Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición

El Artículo 90 de la Constitución Nacional establece que:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este."

Adviértase la inexistencia de una condena o conciliación al Estado en la que conste la indemnización por la ocurrencia de un ***daño antijurídico,*** producto de la conducta

[11] Conc. artículo 8°. Ley 153 de 1887
[12] Al respecto se puede consultar la Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 3 de agosto de 1983, M.P. Dr. Jorge Salcedo Segura.

dolosa o gravemente culposa imputable a mí representada, la doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ**.

Lo que ha traído el Ministerio como fundamento para sustentar la pretensión de repetición es una Conciliación que obliga a la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores a pagar a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las diferencias de cesantías originadas durante el tiempo en que aquel prestó sus servicios en el exterior, atendiendo lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 535-2005.

Así las cosas, el **Acuerdo Conciliatorio** tiene como fundamento el cumplimiento de una Sentencia de la Corte Constitucional - no de la ocurrencia de un daño antijurídico - elemento necesario para que se pueda predicar la procedencia de la acción de repetición. Asimismo, el pago efectuado corresponde al reajuste de cesantías que el Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, durante el tiempo en que esta prestó sus servicios en el exterior. De allí que tampoco pueda derivarse que el pago efectuado por el Ministerio haya sido en calidad de indemnización, como bien lo exige el Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.

Por otra parte, la **Ley 678 de 2001** *"Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición."*, estableció la **acción de repetición** con el fin de restituir al Estado lo pagado, exclusivamente, a título de una indemnización, como *reparación* –directa- del **daño antijurídico** irrogado por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes, o de un acuerdo conciliatorio u otra forma de terminación de un conflicto de responsabilidad civil contra una entidad pública.

Adviértase que cuando los hechos que generan la pretensión de repetición ocurren con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2001, se debe establecer la normatividad sustancial y material aplicable al caso en concreto. Al respecto ha indicado en Consejo de Estado que:

"En cuanto a las normas sustanciales, se tiene que las normas aplicables para dilucidar si el demandado actuó con culpa grave o dolo, serán las vigentes al tiempo en que tuvo lugar la conducta del agente estatal. En tal sentido, **las presunciones de dolo y culpa grave que traen los arts. 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 no pueden ser aplicables a casos concretos donde los hechos que generaron la repetición se dieron con anterioridad al 4 de agosto de 2001.**"[13]

Por su parte, establece el **artículo 142** de la **Ley 1437 de 2011**:

---

[13] Sentencia Consejo de Estado, Expediente 25000232600020030030001 (28.448) del 31 de agosto de 2006.

Ley 1437 de 2011. Artículo 142.
"Repetición. *Cuando el Estado haya debido hacer un* ***reconocimiento indemnizatorio*** *con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.*

La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.

Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño." (Negrillas fuera de texto)

Como aquí está visto la demanda aquí incoada tiene como base lo pagado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de la diferencia de cesantías surgida por efecto de los servicios que prestó dicha entidad **en el exterior,** devengando realmente sumas inferiores a las que realmente devengó y el Ministerio le liquidó cuando prestó sus servicios desde **1990 hasta el año 2003** en cumplimiento a lo dispuesto en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el día 29 de marzo de 2012**, no es vinculante con los demandados ni podría serlo, pues no fueron llamados al mismo con fines de repetición ni citados como terceros ni en ninguna otra condición que les permitiera haber sido **oídos** y ejercido su legítimo derecho de *contradicción,* petición y discusión de pruebas para su defensa, como lo garantiza el debido proceso que consagra el **artículo 29** de la Constitución Política.

Por eso, tal acuerdo no les es oponible, por lo que constitucional y legalmente es posible derivar en su contra la declaratoria de responsabilidad e imposición de la condena que se procura.

d. *<u>Ilegitimidad de personería por pasiva</u>*

Aun cuando se demanda, entre otros, a la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** por supuestamente haber omitido el deber – si lo tenía- de notificar las liquidaciones anuales de cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** en los periodos entre el **6 de febrero de 1992 al 8 de diciembre de 1992,** cuando aquélla se desempeñó *como Jefe del Área de Recursos Humanos* la acción de repetición se encamina a obtener indistintamente del mismo el pago que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES hizo a aquélla, de la suma de **$133.148.564** por el reajuste anual de sus cesantías liquidadas como inicialmente lo fueron, sobre sumas inferiores a los salarios reales que devengó durante los periodos de sus servicios en el exterior y corresponden a los años de **1990-** Hace 26 años-, **1991**- Hace 25 años-, **1992-**

Hace 24 años-, **1993**- Hace 23 años-, **1994**- Hace 22 años, **1995**-hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997**- Hace 19 años, **1998**- Hace 18 años, **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años, cuando la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** ninguna vinculación, ni relación funcional, administrativa ni causal tuvo al frente de las liquidaciones anuales de cesantías que el MINISTERIO le liquidó a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Luego no existe legitimación en la causa por pasiva entre el MINISTERIO y la doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** para que aquel demande indistintamente, sin relación de proporcionalidad ni de racionabilidad alguna, lo comprendido en la totalidad de lo pagado que se pretende repetir, lo generado por todo el tiempo reliquidado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.**

e. ***Inexistencia de nexo causal***

La *causa* generadora del pago, vertida en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012,** que obligó al Ministerio de Relaciones Exteriores a reliquidar las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en los períodos de sus servicios en el exterior, conforme a los salarios reales que entonces devengó y no sobre las sumas inferiores que en esa época el Ministerio le liquidó, tiene su origen en la Ley 6ª de 1945 -art. 17- en razón de la vinculación de naturaleza laboral, de carácter legal y reglamentaria, que compromete exclusivamente, como empleador, al Ministerio de Relaciones Exteriores y lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**. En ningún caso por causa de la demandada, la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ**.

En cumplimiento de la Sentencia C- 535-2005, que declaró inexequible el Artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, y ordenó liquidar las cesantías de los funcionarios que laboraron en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores teniendo en cuenta en el Ingreso Base de Liquidación la suma total de los salarios reales devengados durante los periodos laborados en el exterior, se llegó al **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012,** que corresponde a lo que el Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de *reajuste de cesantías* según lo establecido en la Sentencia C- 535- 2005.

Así, aquello en lo que funda la pretensión de repetición el Ministerio atinente a la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaron las cesantías, para efectos de que pudiese operar el fenómeno de la prescripción trienal de las acciones laborales es completamente inane habidas las siguientes consideraciones:

Primero: Siendo la cesantía una prestación de carácter unitario, el término para iniciar el cómputo de la prescripción trienal de la acción laboral solo puede ser al momento de

la finalización de la relación laboral que coincide con el momento a partir del cual se hace exigible el derecho por parte del trabajador. Así lo ha entendido el Consejo de Estado al establecer que: "[...] se concluye que **mientras esté vigente el contrato de trabajo, no se puede hablar de prescripción de la cesantía como derecho social.**"[14]

Habida cuenta de lo anterior, mal puede hablarse de prescripción de las cesantías contada a partir de la notificación ***anual*** de dicha prestación, pues ninguna de ellas es independiente de las demás. Son partes de un todo que conforman una prestación unitaria.

Al ser una prestación social de *carácter unitario* cuya exigibilidad solo se produce a partir de la finalización de la relación laboral, resulta inane la notificación anual de dichos actos administrativos para el cómputo de la prescripción trienal. De tal forma que con notificación o sin ella, la causa generadora del pago no es la supuesta omisión de la notificación anual de los actos administrativos de liquidación. Esta se genera en el cumplimiento de la Sentencia C- 535- 2005 de la Corte Constitucional.

Segundo: Fue a partir del 24 de mayo de 2005 con la Sentencia C- 535-2005 de la Corte Constitucional que se conoció e hizo exigible para el Ministerio de Relaciones Exteriores la obligación de liquidar y pagar el reajuste de las cesantías en los términos de dicho fallo y el derecho correlativo de los funcionarios a reclamar su efectividad.

Así, el término de inicio para el cómputo de la prescripción trienal es la fecha de expedición de la sentencia de la Corte Constitucional; fecha a partir de la cual se hizo exigible la obligación. No antes, que es lo que predica la demanda pretendiendo inferir responsabilidad en cabeza de la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** por supuestamente haber omitido la notificación anual de los actos administrativos de liquidación de las cesantías.

La verdadera causa del pago es la Sentencia C- 535- 2005 del 24 de mayo de 2005 que declaró inexequible el Artículo 10 del Decreto Ley 10 de 1992, que establecía el pago de las cesantías de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando laboraban en el exterior, con base en las asignaciones salariales de cargos equivalentes en la planta interna. Teniendo en cuenta que los efectos de las sentencias de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro, a menos que la Corte resuelva lo contrario, en los términos del Artículo 45 de la Ley 270 de 1996, la eventualidad del término prescriptivo trienal encaminado al reajuste de las cesantías es la fecha de expedición de la Sentencia.

Así lo ha entendido el Consejo de Estado en varias providencias al manifestar que:

"[...] Conforme a lo antes indicado se precisa que existía un obstáculo de orden legal que no permitía liquidar las prestaciones de los empleados del servicio exterior, con

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "B", sentencia del 22 de enero de 2015, Radicado interno (4346-13)

base en lo que devengaban sino sólo de acuerdo con los valores equivalentes a los de la planta interna, de manera que se puede decir, como ya lo ha precisado esta Sala, que el derecho a devengar la cesantía liquidada con base en lo devengado en el servicio exterior, sólo surgió, con certeza, a partir de la expedición de las sentencia referida, pues antes, es evidente que la entidad pública se abstenía de liquidarla.

A partir de la remoción del obstáculo normativo cuya sentencia fue proferida el 24 de mayo de 2005, el demandante estaba legitimado para pedir el reconocimiento de su derecho, por ende, no es procedente declarar la ineptitud sustantiva de la demanda, conforme lo pidió la entidad recurrente en el recurso de alzada.[15]"

Por su parte, indicó en Sentencia del 6 de julio de 2011, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren:

"[...] Además, con el pronunciamiento de inconstitucionalidad efectuado por la Corte Constitucional en sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, efectuado el 24 de mayo de 2005, la parte demandante quedó legitimada para reclamar la reliquidación de sus prestaciones, en especial de sus cesantías, porque la vigencia y aplicabilidad del aludido artículo, impedía su reconocimiento.

El fallo recurrido amerita ser confirmado porque pese a que la sentencia de la Corte Constitucional C-535 de 2005, fue proferida luego de que se causaron las respectiva anualidades en las que el demandante prestó sus servicios en el exterior, y ésta tiene efectos hacia el futuro, lo cierto es que, por las razones arriba expresadas, es procedente declarar la denominada excepción de inconstitucionalidad para darle prevalencia a la interpretación constitucional y así, **en aplicación de los principios de primacía de la realidad frente a las formas y favorabilidad evitar que una norma que es inconstitucional desde sus orígenes produzca efectos en los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestaron sus servicios en el exterior.**"

Estas sentencias encuentran su fundamento en que la fecha a partir de la cual se hizo exigible el derecho a la reliquidación de la cesantía por parte de los funcionarios que laboraban en el exterior, es el 24 de mayo de 2005; fecha de expedición de la Sentencia C-535 de 2005. Esto es así teniendo en cuenta que solo con la promulgación de la Sentencia de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del Artículo 57 del Decreto extraordinario 10 de 1992, se declaró el derecho de los funcionarios que laboraron en la planta exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de exigir la reliquidación de sus cesantías con base en el salario realmente devengado. En este punto fuerza distinguir *la exigibilidad de la cesantía misma que, dada su*

[15] Sentencia Consejo de Estado del 4 de noviembre de 2010, M.P: Víctor Hernando Alvarado Ardila, Exp. No. 1496-2009,

naturaleza, se da al momento de desvinculación del trabajador y la *exigibilidad de la reliquidación del auxilio de cesantía que sólo puede computarse a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005.*

Por su parte, son varios los pronunciamientos judiciales proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los que ha interpretado que los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que no hayan exigido la reliquidación de sus cesantías dentro del término de tres años contados a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005, aplica la excepción previa de prescripción extintiva de los derechos laborales.

En relación con lo anterior, los procesos judiciales en los que se ha aplicado esta posición son:

1- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-01180-00. Demandante: Martha Angélica Marín Colorado- Demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

2- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-01182-00. Demandante: Sofía Salgado de Goméz- Demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

3- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-0018500.

Mediante auto del 22 de octubre de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C- 535 de 2005.

En síntesis, el argumento esbozado en la demanda en virtud del cual se generó un daño antijurídico por la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaban el auxilio de cesantía, impidiendo así que operara la prescripción trienal de los derechos, carece de todo sustento jurídico y se constituye en un abuso del derecho de acción por

parte de la Cancillería. Además, es de mala fe buscar repetir lo pagado a **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** por haberse cumplido la Sentencia C-535-2005, que reiteró que la pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le corresponde.

f. ***Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación***

De otra parte, de conformidad con lo establecido en el **artículo 19 del Decreto 1716 de 2009**, el *Comité de Conciliación* del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** no es el competente para decidir que la conducta de la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** sea *gravemente culposa* por los hechos u omisiones que se le endilgan. Dicha *competencia* es privativa del Superior disciplinario[16] y con observancia del *debido proceso* que descansa en la garantía constitucional a ser *oída* y ejercer la *defensa* que, en ese orden, no se dio.

En tal sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado[17] en respuesta a la consulta formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto de los estudios que deben realizar los comités de conciliación de las entidades públicas para determinar la procedencia de la acción de repetición, advirtió lo siguiente:

> *"El alcance de los estudios y evaluaciones que debe realizar el comité de conciliación para determinar la procedencia de la acción de repetición, está dado por los requisitos fijados en la normatividad vigente, (...). En desarrollo de dichos estudios, el comité de conciliación* ***no puede invadir la competencia atribuida a la jurisdicción de lo contencioso administrativo****, al cuestionar los argumentos que sirvieron de fundamento al fallador"* (Resalto).

Por lo anterior, concluye el Alto Tribunal que los estudios que debe realizar el comité *"(...) deben dirigirse a demostrar los presupuestos fácticos en que se basa la presunción a favor del Estado"*[18].

g. ***Inexistencia de daño antijurídico***

El pago realizado, que se pretende repetir en contra de la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** consiste en el reconocimiento, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la diferencia a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, siendo aquél su empleador, generada en la incompleta liquidación de sus cesantías,

---

[16] Ley 734 de 2002 –Código Disciplinario Único-
[17] Rad. No. 1634. C.P. Dra Gloria Duque Hernández.
[18] Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 1634 de 2005.

realizada sobre sumas inferiores a los salarios realmente devengados por el mismo cuando prestó sus servicios a dicha entidad en el exterior, en el período de la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** y otros más cuyo producto se encuentra incluido en el total demandado y tienen por única y son el producto exclusivo de una prestación de naturaleza laboral, nacida del vínculo legal y reglamentario habido entonces entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que establece la Ley 6ª de 1945, y obedece para el caso a lo ordenado en la Corte Constitucional en la sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.

En tal orden, el **Acuerdo Conciliatorio**, versó sobre la reliquidación de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, ordenando al Ministerio a dicho pago en cumplimiento de la Sentencia C-535-2005.

De ahí pues, que no pueda válidamente predicarse la existencia de un pago constitutivo de **"daño antijurídico",** como sí por el contrario, lo fue de una prestación legal de carácter laboral, legítima como quiera que estaba basada en la Ley 6ª de 1945, en el *trabajo* que merece la especial protección del Estado (art. 25 de la Constitución Política) y en la *cosa juzgada* constitucional emanada de la sentencia C-535 de 2005.

h. ***Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso***

El **Acuerdo Conciliatorio** que trae el Ministerio de Relaciones Exteriores como base de la acción de repetición, no es constitutivo de condena alguna de la responsabilidad de la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** ni podría hacerlo so pena de violación del debido proceso, puesto que al trámite judicial, no fue éste convocado, ni citado u oído de manera que hubiera podido ejercer su derecho de contradicción, de oportunidad de pruebas y defensa sobre en orden a determinar la existencia y el grado de una eventual responsabilidad *conexa* a la del Ministerio de Relaciones Exteriores la cual, además, ya habría caducado conforme a las normas preexistentes a la presunta ocurrencia de la omisión al deber que aquí se le endilga remontándose a trece (13) y más años atrás, de donde siguiese necesariamente la improsperidad de una condena en su contra.

i. ***Falta de legitimación en la causa por pasiva***

La Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** no tenía la función que se le endilga de notificar personalmente las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en el exterior.

De una parte porque dicha función no se encuentra específica ni determinada en el **Decreto No. 2126 de 1992,** ni en la **Resolución 033 del 11 de enero de 1994 (Manual**

Descriptivo de Funciones), vigentes para la época en que mi representada se desempeñó como *Jefe del área de Recursos Humanos*

Por otra parte, a mi representada se le llama a responder en repetición respecto de las liquidaciones anuales de cesantías por unos periodos **anteriores** y ***posteriores*** a su desempeño como *como Jefe del área de Recursos Humanos* Así, **anteriores** desde 1990 hasta el 5 de febrero de 1992; ***posterior*** desde el 8 de diciembre de 1992 hasta el año 2003, conforme el periodo que la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** prestó sus servicios en el exterior.

Además de lo anterior, durante los periodos desde 1990 hasta el año 2003 correspondiente a las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, éste se encontraba y permanecía en el exterior, circunstancia que constituye un imponderable fuera de la órbita del desarrollo de las tareas habituales de la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** quien se encontrara en la *planta interna* del Ministerio de Relaciones Exteriores entre el **6 de febrero de 1992 al 8 de diciembre de 1992,** lo que permite asumir que a quien habría correspondido notificar personalmente los respectivos actos administrativos, si los hubo, de liquidación anual de cesantías, fue a quienes desempeñaron funciones Consulares[19]. Entre ellas las de carácter administrativo, como fuera la de dar a conocer a los Funcionarios de la Misión, los actos administrativos de carácter particular de interés del propio Ministerio.

j. ***Abuso del Derecho*** -Temeridad o mala fe por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores-

Se demanda aquí, entre otros, a la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** por haberse desempeñado en el Ministerio de Relaciones Exteriores como *Jefe del Área de Recursos Humanos* del **6 de febrero de 1992 al 8 de diciembre de 1992** y a quien se le endilga haber faltado al deber que no tenía, de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, correspondientes al lapso comprendido desde 1990 hasta el año 2003, pues como a simple vista se puede apreciar el periodo comprendido desde el 22 de mayo de 1996 hasta el año 2003, es **posterior** a su designación como *Jefe del área de Recursos Humanos*

Lo mismo que sucede, infiriéndose la falta de buena fe debida en sus actuaciones por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, y abuso de su derecho a demandar en **87 procesos** más, de iguales presupuestos, por las liquidaciones anuales de las cesantías generadas a favor de Ignacio Enrique Ruiz Perea, Lilia Stella Cepeda Ulloa, Zaida Patricia Cristancho Guerrero, Gladys Cecilia Acosta Vidal, Luis Guillermo Becerra Torres, HILDA CABALLERO DE RAMIREZFernando Alzate Donoso ,Enrique Antonio

[19] Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, artículo 5°

Celis Durán, Ana Cecilia Pulido Guerrero, Francia Rodríguez Romero, María del Pilar Gómez Valderrama, Armando González Cortés, Eduardo Alonso Rodríguez, Myriam Duarte Bernal, Consuelo del Socorro Tirado, Reinaldo Vélez Londoño, José Fernando Cendales, Eduardo Casas Acosta, María Nelly Tascón Maya, María Eugenia Beltrán de Chaparro, Miguel Camilo Ruiz Blanco, Esperanza Castro Duque, Raúl Arturo Rincón, Martha Osorio Villamizar, Divia Desideria Cepeda, Felicia Mercedes Valera, Blanca Marina Villacrees, Nydia Inés Aguirre Acevedo, Janneth Victoria Truque P, Adda Isabel Borda Medina, Edgardo Alfredo Llorente Méndez, Luis German Estrada, Henry Javier Arcos, María Helena Londoño, Patricia Klein, María Victoria Eugenia Senior Pava, Julia Inés Mora López, Maria Cristina Guerrero López, Margarita Eliana Manjarrez Herrera, René Correa Rodríguez, Gladys Mireya Paéz Herrera, Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez, Alberto Bula Bohórquez, María Helena Pastrana Pastrana, María Inés Herreño Pinto, María Smith Rueda Centeno, Juan Norberto Colorado Correa, Amparo Flórez López, Álvaro Sandoval Bernal, Alicia Alejandra Alfaro Castillo, Pablo Antonio Rebolledo Schools, Alejandro Borda Rojas, Carlos Rodríguez Bocanegra, Miguel Ángel Rodríguez Melo, Edwin Ostos Alfonso, Mauricio González López, Jaime Girón Duarte, Nacianceno López Restrepo, Rafael Juan Carlos Espinosa, Santiago Salcedo, Mery Cecilia Hurtado, Flor Ángela Martínez, Alberto Barrantes Ullos, Juan José Quintana A, Carlos Arturo Forero, Olga Cielo Molina de la Villa, Hernán Vargas Martín, Álvaro Enrique Ayala Meléndez, Carmen Estavana Zapateiro B, Fernando Salavarrieta García, Marcela Ordóñez Fernández, Gilberto Poveda Rodríguez, Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi ,Alfonso de Jesús Vélez Rivas, Fabio Emel Pedraza Pérez, Ana del Socorro Bornacelli Guerrero, Marcela Rodríguez Velandia, Alvaro Eugenio Márquez Sarmiento, Javier Darío Higuera Ángel, Carlos Arturo Morales López, Daniel Ávila Camacho, José Antonio Solarte Gómez, Blanca Stella Barrero Barrero, María Consuelo Porras, Concepción Concha Agudelo.

i. ***Ilegitimidad del derecho sustantivo***

Existe Ilegitimidad del uso del derecho sustantivo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por cuanto lo que se pretende es el REEMBOLSO de una prestación social como lo es el **auxilio de cesantías**, cuyo PAGO emana de la OBLIGACION LEGAL de aquélla, producto del VINCULO LABORAL con la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Aquello que la causa en que se fundan las pretensiones del actor, devienen del supuesto deber de haber notificado o no las liquidaciones, es un sofisma para distraer la atención del verdadero derecho sustantivo que es aquélla -las cesantías- y no éste, porque con razón o sin ella, el derecho a dicha prestación, existe, en virtud de lo dispuesto por la **Ley 50 de 1990** y por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**.

Dada la *materia*, de acuerdo a la cuantía cuyo valor pretende que se le reembolse por los funcionarios o ex funcionarios demandados, pues se trata de una prestación social de carácter laboral, nacida del vínculo de trabajo que existió entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y aquélla a quien se realizó el pago, en el cual el Ministerio es, por el contrario, deudor de la obligación, conforme al artículo 249 del C.S.T., que establece el auxilio de cesantía, y lo dispuesto en la Sentencia de Constitucionalidad C-535 de 2005, toda vez que la causa de lo pagado, es producto de dicho fallo que le impuso a dicha entidad, la obligación de liquidar tales prestaciones con base en el salario realmente devengado por la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, durante los periodos de sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior desde 1990 hasta el año 2003, y para cuyo cumplimiento no puede predicarse la existencia como engañosamente se formula, de una indemnización, que diera lugar al daño antijurídico.

V. FUNDAMENTACIÓN DE LA DEFENSA

a. Fáctica

Lo que da origen a lo pagado, cuyo monto se pretende *repetir*, corresponde al **derecho** de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** al reconocimiento y pago de las diferencias a su favor por concepto de ***cesantías*** desde 1990 hasta el año 2003 de acuerdo con los salarios que en esos períodos realmente devengó[20]

No es, pues, racional, ni lógico y sí sofístico, afirmar como lo expone la demanda, que obedezca al deber que en el período del **6 de febrero de 1992 hasta el 8 de diciembre de 1992,** la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** habría tenido y ***omitiera*** *"(...) en su condición de Jefe del Área de Recursos Humanos..."*, de notificar *personalmente* a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, sus ***cesantías*** anuales desde 1990 hasta el año 2003 e impedido así, con *culpa grave,* que no ocurriera el fenómeno *prescriptivo* trienal de las acciones laborales y de caducidad de las propias ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que le hubieran permitido al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES eludir el reconocimiento y pago de dicha prestación conforme a los salarios reales que en esos períodos la misma devengó, incrementándose su valor, que es lo que al Ministerio le resulta *antijurídico* y asume como el *daño* que alega le irrogó *pagar* lo que, inclusive despojado de las acciones llamadas a hacer efectivo el cobro de lo debido, persiste jurídicamente como una *obligación natural* que encuentra en su naturaleza la causa legítima del pago, que, en consecuencia, no cabe *repetir*.

[20] Sentencia C-535 de 2005

De manera que del Catálogo de Funciones mencionados genéricamente no se desprende la prueba que permita afirmarse, como lo expresa la demanda, que la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** tuviera el deber de *notificar personalmente* las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** con destino al Fondo Nacional del Ahorro **desde 1990 hasta el año 2003** tampoco era esa la *práctica común* adoptada al respecto como política general por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por eso, *repetir* lo pagado generaría más bien, un *enriquecimiento sin causa* en cabeza de **LA NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**, a la vez que le irrogaría un injusto *empobrecimiento* a la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** por cierto, el extremo débil de la relación laboral que se le opone para sustentar la acción.

b. Jurídica

La Ley 6 de 1945, establece la obligación del empleador, en este caso el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, de reconocer y pagar al trabajador el auxilio de **cesantía**, un mes de salario por año de servicio, o proporcionalmente a su fracción, debiéndose tener por *salario* todo emolumento que este reciba ordinariamente en desarrollo de su vinculación laboral.

Ahora bien, la Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005 en materia de cesantías de los funcionarios y ex funcionarios que prestaron servicios al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en el exterior, sobre las mismas consideraciones que antes en materia de *pensiones* sirvieron de sustento a la Sentencia C-173 del 02 de marzo de 2004, definió que dicha prestación debe corresponder a los salarios realmente devengados y que una disposición como la que contenía el Decreto 10 de 1992 (art. 57[21]) y retomó el Decreto Ley 274 de 2000 (art. 66[22]), que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 derogó, no debieron aplicarse y sí, haber acudido la Entidad a la *excepción de inconstitucionalidad,* lo que no se hizo y vino a remediar el Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012 y aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F". En tal virtud, lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de sus ***cesantías*** anuales en el periodo comprendido desde **1990 hasta el año 2003**, no es de carácter indemnizatorio, por lo que no le ocasiona legítimamente a LA NACION -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- un detrimento patrimonial, presupuesto inescindible de la acción de repetición.

[21] Declarado Inexequible Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.
[22] Declarado Inexequible Sentencia C-292 de 2001.

De otra parte, si como está visto durante varios años, desde 1990 hasta el año 2003 todos los quince (15) ex funcionarios aquí y en otros procesos[23] también demandados, siempre hicieron u omitieron lo mismo como lo afirma la demanda, lógico es colegir que esa fue sistemáticamente la política establecida sobre la materia por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y no la manifestación independiente y autónoma de la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** por la que deba responder patrimonial ni administrativamente, pues habríase dado *culpa* de la propia Entidad que la exime al respecto y cuanto más, un ***error communis facit ius***[24] o, que hace derecho.

Por lo anterior, en este caso no puede afirmarse que se hayan configurado los elementos para considerar probada la culpa grave de la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** conforme lo prevé el artículo 6º de la Ley 678 de 2001 y, en tal sentido, se trae a colación lo expuesto por el H. Consejo de Estado respecto a la carga de la prueba en la acción de repetición (denominada pretensión con la Ley 1437 de 2011):

> *"Es claro que el solo desconocimiento de la norma por el operador jurídico encargado de aplicarla a través de actos administrativos (...) no implica de plano una responsabilidad a título de imputación de culpa grave o dolo, puesto que, en estos casos, existe un margen de error admisible en condiciones normales y más aún extraordinarias cuando se trata de la interpretación y ejecución de las normas jurídicas o de la percepción de la realidad atendiendo las circunstancias específicas del caso, toda vez que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de la función pública se trata de una labor humana, que implica la posibilidad de yerros en las actuaciones. Como en el sub exámine no son procedentes las presunciones de dolo y culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001, por la echa de ocurrencia de los hechos, dichos conceptos requieren de una carga probatoria mayor por parte de la entidad pública en cuanto que debe desplegar una actividad prolífica tendiente a demostrar y acreditar el dolo y la culpa grave..."*[25].

Por otra parte, los servidores públicos tienen un régimen de responsabilidad subjetivo y, en consecuencia, el título de imputación, sea dolo o culpa grave, debe estar plenamente demostrado dentro del proceso en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, pues el mismo no se presume en estos casos. En otras palabras, no basta simplemente citar uno de los presupuestos de la ley para que se configure la pretensión de repetición, debe acreditarse en debida forma la actuación dolosa o gravemente culposa del agente demandado.

---

[23] Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B", Radicados **2014-00835-00** y **2014-00841-00**, J. 4° Administrativo de Descongestión Radicados **2014-00004-00** y **2013-00440-00**, J. 8° Administrativo del Circuito Radicado **2013-00622-00**, J. 9° Administrativo del Circuito, Radicados **2014-00026-00**, **2014-00065-00**, **2014-00260-00** y **2014-00605-00**, J. 31 Administrativo del Circuito Radicados **2014-00092-00**, **2014-00111-00**, **2013-00244-00**, **2014-00286-00**, **2014-00479-00**, **2014-00304-00** y **2014-00387-00**, J. 35 Administrativo del Circuito Radicados **2013-00056-00**, **2014-00467-00**, **2014-00467-00**, **2014-00152-00** y **2014-00399-00**, J. 37 Administrativo del Circuito Radicados **2013-00087-00**, **2013-00115-00**, **2013-00123-00**, **2013-00303-00**, **2013-00304-00**, **2013-00479-00** y **2013-00480-00**, entre muchos otros.

[24] Conc. artículo 8°. Ley 153 de 1887

[25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Rad. 11001032600020030001901, Número interno 24953, C.P. Dra. Ruth Stella Correa.

Ahora bien, se advierte que existen serias y graves deficiencias respecto de las pruebas que ordenan a la entidad pública al pago de las diferencias de cesantías a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** que, en este caso, corresponde al **Auto de aprobación de la conciliación proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"**, ya que tal documentos debió ser aportados con la demanda en originales según lo dispone el Art. 245 del C.G.P: "[...] *Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en donde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.*

En un asunto similar al que nos ocupa, la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó:

> *"Por tanto, las copias aportadas por la entidad demandante carecen de valor probatorio, porque, en tratándose de copias de documento público (...), para que puedan ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial, deben reunir las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra la diligencia de autenticación.*
>
> *En ese orden de ideas, se concluye que no está demostrado dentro del proceso el primero de los hechos generadores de la acción de repetición, cual es la existencia de una sentencia (o providencia) que condene al Estado a reparar patrimonialmente un daño antijurídico,* ***situación que por sí sola implica que se deben negar las pretensiones de la demanda, en tanto ello tiene incidencia en la acreditación de los otros requisitos (...)"***[26] (Resalto).

De esta manera, se reitera lo establecido en el Artículo 173 del Código General del Proceso que establece el deber por parte de los jueces de *abstenerse de ordenar la práctica de pruebas* que directamente, o por medio del derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que la solicite.

VI. PRUEBAS

Ruego al Señor Juez, decretar y tener como pruebas de mi parte, las siguientes:

VI.1 Documental

a) **Aporto** poder original con que actúo.

b) **Se oficie**

---

[26] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sent. del 28 de febrero de 2011, Rad. 34.816. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

1. A la Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso y con base en sus *archivos*, se informe sobre los documentos, si los hubiere, que sirvieron de soporte para la erogación del *gasto*, por concepto de las **cesantías** anuales **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde 1990 hasta el año 2003;

2. Al Fondo Nacional del Ahorro FNA, para que con destino al proceso, se informe sobre los documentos remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, soportando los depósitos efectuados por el mismo a favor de **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde 1990 hasta el año 2003;

3. A la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se informe y remita copia de las resoluciones por medio de las cuales el Ministro de Relaciones Exteriores delegó, como ordenadores del gasto, entre otros, lo que es hoy la Dirección Administrativa y Financiera, el *pago* al Fondo Nacional del Ahorro de los depósitos de cesantías anuales del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde 1990 hasta el año 2003

4. A la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se dé cuenta, individualizándolos de los demás funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quienes, como en este caso a la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** se ha demandado o dispuesto demandar en acción de repetición, por supuestamente haber omitido *notificar personalmente,* las cesantías anuales depositadas al Fondo Nacional del Ahorro, indicando los cargos y periodos por los que en cada caso se les llama a responder;

5. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se remita copia de las liquidaciones, **año por año**, de las cesantías de **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde 1990 hasta el año 2003 y particularmente en el periodo ***desde el 6 de febrero de 1992 hasta el 8 de diciembre de 1992,*** como dice la demanda, conciliadas por un total de **$133.148.564** cuyo monto se pretende repetir sin razón de proporcionalidad alguna, entre otros, en contra de la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ**.

Procura esta prueba establecer que los hechos u omisiones, en relación con el deber que se dice *supuestamente* tenía la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** de notificar a **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** las cesantías por el periodo desde 1990 hasta el año 2003 habría sido cuanto más, una política sistemática y generalizada del Ministerio de Relaciones Exteriores, generadora, como tal, de un *error communis facit ius*, imputable a la *propia culpa* de la entidad.

6. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores o a quien en su defecto, corresponda, (art. 21 CPACA) a fin de que con destino al proceso de cuenta del lugar donde el Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** se desempeñaba al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior, en los años desde **1990 hasta el año 2003** a los que corresponden el pago que se le hizo de las cesantías, por cuya cancelación se pretende repetir y se diga qué condiciones de traslado, si se encontraba en el exterior, tenían los demandados para notificarle personalmente allí las liquidaciones anuales de dicha prestación durante tales periodos, a que alude la demanda.

Con esta prueba pretendo demostrar la imposibilidad real que los demandados, y en este caso, la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** tenía para haber cumplido el deber que supuestamente tenían de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de las liquidaciones anuales de cesantías, encontrándose el mismo en el exterior, con mayor razón si esa era una condición extendida en todo el mundo, donde tenían asiento las distintas Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia.

7. A los siguientes Despachos Judiciales, para que a mi costa, y a fin de que por sus respectivas Secretarías se certifique la existencia de tales procesos instaurados por el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** en acciones de repetición, por la misma causa del que en este caso nos ocupa:

Pago realizado a:	Despacho Judicial	Radicado Proceso
Ignacio Enrique Ruiz	Consejo de Estado-Sección III-Sub B	**2014-00043-00**
Lilia Stella Cepeda Ulloa	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	**2014-00835-00**
Zaida Patricia Cristancho Guerrero	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	**2014-00841-00**
HILDA CABALLERO DE RAMIREZ	J. 4° Admtivo de Descongestión	**2014-00004-00**
Fernando Alzate Donoso	J. 4° Admtivo de Descongestión	**2013-00440-00**
Enrique Antonio Celis Durán	J. 8° Administrativo del Circuito	**2013-00622-00**
Ana Cecilia Pulido Guerrero	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00026-00**
Francia Rodríguez Romero	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00065-00**
María del Pilar Gómez Valderrama	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00260-00**
Armando González Cortés	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00605-00**
Eduardo Casas Acosta	J. 16 Administrativo del Circuito	**2013-00599-00**
María Nelly Tascón Maya	J. 18 Administrativo del Circuito	**2013-00511-00**
María Eugenia Beltrán de Chaparro	J. 19 Administrativo del Circuito	**2013-00128-00**
Miguel Camilo Ruiz Blanco	J. 19 Admtivo Descongestión Cto	**2014-00200-00**
Janeth Victoria Truque Rivera	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00188-00**
Raul Arturo Rincón Ardila	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00037-00**
Henry Javier Arcos Muñoz	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00391-00**
Nidia Inés Aguirre Acevedo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00084-00**

María Inés Aldana Nieto	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00036-00**
Anyul Molina Suarez	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00211-00**
Mauricio Baquero Pardo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00268-00**
Álvaro Eugenio Márquez Sarmiento	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00183-00**
Marcela Rodríguez Velandia	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00238-00**
Cruz Elena Mosquera Monteros	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00009-00**
María Victoria Eugenia Senior Pava	J. 23 Administrativo del Circuito	**2013-00392-00**
Margarita Eliana Manjarrez Herrera	J. 26 Administrativo del Circuito	**2013-00535-00**
René Correa Rodríguez	J. 27 Administrativo del Circuito	**2013-00211-00**
Gladys Mireya Paéz Herrera	J. 27 Administrativo del Circuito	**2014-00314-00**
Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez	J. 30 Administrativo del Circuito	**2013-00597-00**
Alberto Bula Bohórquez	J. 30 Administrativo del Circuito	**2014-00071-00**
María Helena Pastrana Pastrana	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00092-00**
María Inés Herreño Pinto	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00111-00**
María Smith Rueda Centeno	J. 31 Administrativo del Circuito	**2013-00244-00**
Juan Norberto Colorado Correa	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00286-00**
Amparo Flórez López	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00479-00**
Álvaro Sandoval Bernal	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00304-00**
Alicia Alejandra Alfaro Castillo	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00387-00**
Pablo Antonio Rebolledo Schools	J. 32 Administrativo del Circuito	**2014-00118-00**
Alejandro Borda Rojas	J. 32 Administrativo del Circuito	**2013-00389-00**
Hector Montoya Añez	J. 32 Administrativo del Circuito	**2014-00153-00**
Carlos Rodríguez Bocanegra	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00316-00**
Miguel Ángel Rodríguez Melo	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00317-00**
Edwin Ostos Alfonso	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00383-00**
Mauricio González López	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00384-00**
Jaime Girón Duarte	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00430-00**
Nacianceno López Restrepo	J. 34 Administrativo del Circuito	**2013-00279-00**
Álvaro Enrique Ayala Meléndez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2013-00056-00**
Carmen Estavana Zapateiro B.	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00467-00**
Fernando Salavarrieta García	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00152-00**
Marcela Ordóñez Fernández	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**
Gilberto Poveda Rodríguez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00399-00**
Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi	J. 36 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**
Alfonso de Jesús Vélez Rivas	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00087-00**
Fabio Emel Pedraza Pérez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00115-00**
Ana del Socorro Bornacelli Guerrero	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00123-00**
Javier Darío Higuera Ángel	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00303-00**
Carlos Arturo Morales López	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00304-00**
Daniel Ávila Camacho	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00479-00**
José Antonio Solarte Gómez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00480-00**
Diego Felipe Cadena Montenegro	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00271-00**
Amalia Rodriguez Fuque	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00290-00**

Victoria Eugenia Olga Pauwles T.	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00268-00**
Blanca Stella Barrero Barrero	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00106-00**
María Consuelo Porras	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00117-00**
Concepción Concha Agudelo	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00446-00**

VI. 2 Testimonios

a) Respetuosamente solicito que se llame a declarar en audiencia en la fecha y hora que para tales efectos señale el Despacho, sobre los hechos y omisiones que sean de su conocimiento, en relación con el diligenciamiento, liquidaciones y pago al Fondo Nacional de Ahorro FNA, en materia de liquidaciones anuales de *cesantías*, al Señor **ABELARDO RAMÍREZ GASCA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19'054.598 de Bogotá, con domicilio en la Carrera 14 No. 109 – 79 Apartamento 301, Edificio Caminos del Parque, en Bogotá.

b) Así mismo, con el fin de que deponga sobre la ejecución presupuestal en materia de cesantías anuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y del traslado de las mismas al FNA, con ocasión del desempeño que tuvo a su cargo la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Doctora **ARAMINTA BELTRÁN URREGO**, Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No. 9-03, en Bogotá.

c) A quienes fungieron como miembros del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores para que depongan en relación con las razones que tuvieron en consideración para llevarlos a determinar que hubo *culpa grave*, y demandar en repetición a la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** cuando se desempeñó como *Jefe del Área de Recursos Humanos* del Ministerio de Relaciones Exteriores en los periodos reseñados en la demanda, (Acta No. 229 del 22 de julio de 2013), consistente en haber omitido el deber que *supuestamente* tenía, según la demanda, de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las liquidaciones anuales de las cesantías por valor de **$133.148.564** para cuyos efectos se le citará en el día y hora que señale su despacho, a través de la Dirección del Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No.9-03, en Bogotá y son:

1. Doctor EDWIN OSTOS ALFONSO, Director de Asuntos Jurídicos Internacionales (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

2. Doctor ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO, Director de Talento Humano; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

3. Doctora CLAUDIA LILIANA PERDOMO ESTRADA, Jefe Oficina Asesora Jurídica Interna (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

4. Doctora MARTHA RUBY CUÉLLAR CALDERÓN, Coordinadora Grupo Interno de Gestión; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

5. Doctora LUZ ANDREA CORREDOR ARTEAGA, Abogada Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

6. Doctora HELGA VELASQUEZ AFANADOR, Abogada Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

7. Doctor JORGE ENRIQUE BARRIOS SUÁREZ, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

8. Doctor HUGO ARMANDO GRANJA ARCE, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

9. Doctor ANDRES LEONARDO MENDOZA PAREDES, Secretario Técnico (E) del Comité de Conciliación; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

VII. COSTAS

Sean a cargo de la demandante, LA NACION –MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- incluyendo *agencias en derecho*, toda vez que es manifiesta la falta de buena fe de dicha entidad al demandar en repetición a varios exfuncionarios, cuando no se cumplen a cabalidad todos los presupuestos establecidos de manera expresa por la Ley 678 de 2001 para el ejercicio de dicho medio de control, ya que en ningún caso existió una condena al Ministerio a reconocer una indemnización, sino que se le ordena efectuar la reliquidación de las cesantías, que es una prestación social de naturaleza laboral, en favor de un trabajadora por no habérsele incluido todos los factores salariales

devengados en la planta externa, lo cual fue una política de dicho ministerio y no la decisión unilateral de los ahora demandados.

VIII. NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones, junto con mi representada la Doctora **HILDA CABALLERO DE RAMIREZ** en la Secretaría de su Despacho; en mi oficina de la Carrera 15 No. 86A- 57 of. 501, teléfono 7027824, en Bogotá; y, a través de mi correo electrónico: cilinof@hotmail.com.

Señor Juez

Franklyn Liévano Fernández
C.C. No. 19.154.294 de Bogotá
T.P. No. 12.667 del C.S.J.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
El documento fue presentado personalmente por Franklyn Liévano Fernández
Quien se identificó C.C. No. 19'154'294
T.P. No. 12.667 Bogotá D.C. 05 MAY 2016
Responsable Centro de Servicios _____ VHPP

35
116

Señor Juez
JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ - Sección Tercera
E. S. D.

Proceso : Ordinario
Acción : **Repetición**
Radicado : **No. 110013336034-2015-00109-00**

Demandante : **LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**

Demandados : *MYRIAM CONSUELO RAMÍREZ VARGAS y otros*

HILDA STELLA CABALLERO DE RAMÍREZ , mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 21'223.165 de Villavicencio, con domicilio en la ciudad, a usted respetuosamente manifiesto que por medio de este escrito confiero **Poder Especial**, amplio y suficiente al Doctor **FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ**, mayor y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501 teléfono 7027824, en la ciudad y correo electrónico: cilinof@hotmail.com, para que en mi nombre concurra, se **notifique** del *auto* admisorio de la demanda y me represente en este proceso hasta su terminación.

Mi apoderado dispondrá en el ejercicio de su gestión, de todas las facultades generales de ley, así como de las especiales de recibir, desistir, conciliar, transigir, sustituir y reasumir.

Ruego al Señor Juez reconocer y tener a mi apoderado en los términos de este escrito.

Del Señor Juez,

HILDA STELLA CABALLERO DE RAMÍREZ
C.C. No. 21'223.165 de Villavicencio

Acepto el poder conferido,

FRANKLYN LIEVANO FERNÁNDEZ
C.C. No. 19'154.294 de Bogotá
T.P. No. 12.667 de C.S.J.

Notaria 45

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

Este memorial fué presentado personalmente ante el Suscrito Notario por:

CABALLERO DE RAMIREZ HILDA STELLA

Identificado con: **C.C. 21223165**

T.P. de Abogado No. ... del C.S.J.

quien declaró que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y qué el contenido del mismo es cierto.

Bogotá D.C. **01/04/2016** a las ***04:13:02 p.m.***

2z22wz3xazas2az3



Huella

FIRMA

2

AMPARO FONSECA MEJIA
NOTARIA 45 (E) BOGOTA D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
AMPARO FONSECA MEJIA
NOTARIA CABECERA
NOTARIA 45 BOGOTA D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

36
617

CP. 1021

EL SUSCRITO JEFE DE LA DIVISION DE CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

C E R T I F I C A :

Que la doctora **HILDA STELLA CABALLERO DE RAMÍREZ** identificado con cédula de ciudadanía 21'223.165 expedida en Villavicencio, desempeñó los siguientes cargos:

Asesor Código 1020 Grado 04 de la Secretaría General y se le asignaron las funciones de Jefe del Area de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos. Tomó posesión el 10 de febrero de 1992.

Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores Código 0035 Grado 16 (Encargada). Tomó posesión el 13 de octubre de 1992.

Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores Código 0035 Grado 16 (Encargada). Tomó posesión el 26 de octubre de 1992.

Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores Código 0035 Grado 16 (Encargada). Tomó posesión el 9 de diciembre de 1992.

Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores Código 0035 Grado 16. Tomó posesión el 8 de febrero de 1993.

Por Decreto 690 del 12 de abril de 1993 fue incorporada en el cargo de Secretaria General Código 0035 Grado 20. Tomó posesión el 13 de abril de 1993.

Cónsul General de Colombia Grado Ocupacional 4EX en Chicago, Estados Unidos de América. Tomó posesión el 23 de agosto de 1994.

Que la doctora Caballero prestó sus servicios a este Ministerio hasta el 31 de octubre de 1995.

La presente certificación se expide a solicitud de la interesada, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).

MIGUEL M. ARIAS SANABRIA.
Jefe de la División de Capacitación, Bienestar Social y
Prestaciones Sociales

Exacto jefe de la División de Recursos Humanos que es fiel copia de la vista

mmc.

618.

Franklyn Liévano Fernández [1]
DOCTOR EN DERECHO

Edith Andrade

Señor Juez
JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - Sección Tercera
E. S. D.

OFICINA DE APOYO JUZGADOS ADMINISTRATIVOS
2016 MAY 5 PM 4 05
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
000000

Proceso : Ordinario

Naturaleza : **Repetición**

Asunto : ***Contestación de demanda***

Radicado : **No. 110013336722-2014-00109-00**

Demandante : **LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**

Demandados : CLARA INES VARGAS SILVA *y otros*
-Hernando Leyva Varón, Hilda Stella Caballero Ramírez, Aura Patricia Pardo Moreno, Luis Miguel Domínguez García, Leonor Barreto Díaz, Juan Antonio Liévano Rangel, María Hortensia Colmenares Facinni, Rodrigo Suarez Giraldo ,María del Pilar Rubio Talero, Patricia Rojas Rubio, Ituca Helena Marrugo Pérez, **EDITH ANDRADE PÁEZ,** y Miriam Consuelo Ramírez Vargas-,

FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ, mayor y vecino de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la ciudad en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501 teléfono 7027824, con correo electrónico: cilinof@hotmail.com, obrando como apoderado de la Doctora **EDITH ANDRADE PÁEZ**, mayor y de la misma vecindad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 41'747.996 de Bogotá, con domicilio temporal en La Paz, Bolivia, en nombre y representación de la misma, respetuosamente doy ***Contestación*** en oportunidad, como sigue, a la demanda que dentro de este proceso se le formula:

I. En cuanto a las PRETENSIONES

ME OPONGO a todas y cada una de ellas, conforme a las excepciones y las razones de la defensa que en lo fáctico, así como en lo jurídico, expondré a continuación:

A la ***PRIMERA***: Porque es engañosa la hipótesis de asumir como fundamento de la acción, que no se hubiere generado el pago realizado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, si la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** le hubiere personalmente

notificado las liquidaciones anuales, año por año, de sus cesantías de los períodos de sus servicios en el exterior, desde **1990 hasta el año 2003** pues al **Acuerdo Conciliatorio del 29 de marzo de 2012 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F",** se llegó en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005,** que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, originándose así la obligación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de reajustar la liquidación de las cesantías de los funcionarios que prestaron sus servicios en el exterior con base en los salarios reales y no sobre sumas inferiores de otros cargos en los que el funcionario no se desempeñó, dando lugar a lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores en tal virtud pagó.

Además es falsa la afirmación en virtud de la cual se impidió que operará la prescripción trienal los derechos laborales, por la omisión de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** toda vez que dicho término prescriptivo sólo puede computarse a partir del *retiro definitivo* del empleado.

A la ***SEGUNDA***: *"(...) Que se condene a..."*, entre otros, a mi representada al *pago y reparación* de la suma de **$133.148.564** que el Ministerio pagó en virtud del **Acuerdo Conciliatorio celebrado ante la Procuraduría 84 Judicial I**, reseñado en el proceso, puesto que la acción de repetición a voces del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, tiene por objeto la recuperación de lo pagado por el estado **exclusivamente** por concepto de un ***reconocimiento indemnizatorio***, que aquí, no existe (¡) porque dicha suma, el Ministerio de Relaciones Exteriores los pagó, en este caso a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** por reajuste de **CESANTÍAS**, en virtud de la relación laboral habida entre los mismos en los periodos de sus servicios en el exterior que reseña la demanda y lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005.

En efecto, cabe distinguir que lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en virtud del **Acuerdo Conciliatorio** tiene su causa en el restablecimiento del derecho subjetivo del mismo, amparado en una norma jurídica cual es la Ley 6ª de 1945 que establece el derecho a las cesantías y en lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005, que es lo que aquí se ha traído al proceso, en apoyo de la acción de repetición, cuando ésta ha de tener su apoyo en una sentencia o conciliación previa respecto a un reconocimiento indemnizatorio, que se diga, como aquí se expone, producido por la acción u omisión de los agentes del Estado (art. 140 CPACA), de donde es imperativo echar de menos el presupuesto *objetivo* para la acción de repetición, consistente en una sentencia o conciliación de un reconocimiento indemnizatorio, por su naturaleza antijurídico. Esto es lo opuesto integral y absolutamente al presupuesto esgrimido por la demandante como pie de la acción.

A la ***TERCERA***: Que se *declare* que el Acuerdo Conciliatorio aprobado por el **Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"** existe una *obligación clara, expresa y actualmente exigible, que presta mérito ejecutivo,* con remisión al artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, para efectos del cobro *coactivo* de una obligación, conforme a las prescripciones del artículo 488 del CPC sobre títulos ejecutivos (Actual 422 C.G.P), dicha pretensión difiere del medio de control de repetición, el cual busca la declaratoria de responsabilidad de un servidor o ex servidor público, quien debido a su conducta dolosa o gravemente culposa conllevó a que el Estado se viera en la obligación de reconocer una suma de dinero. Ahora bien, el **Acuerdo Conciliatorio** reúne en sí mismo los requisitos del título ejecutivo, con lo cual presta mérito ejecutivo únicamente en favor del beneficiario del pago, esto es, del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

A la ***CUARTA***: Sobre la pretensión del pago de intereses, no existe causa legítima para derivarlos, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraba en el deber legal de liquidar y pagar las cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, dada la relación laboral habida entre los mismos.

A la ***QUINTA:*** En cuanto a la pretensión de condena en costas a mi representada, puesto que ha de ser la NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, quien debe salir al pago a favor del mismo, por ser esta acción un ostensible abuso del derecho a litigar.

II. Sobre los HECHOS

Al hecho ***PRIMERO***: No es un hecho. Se trata de la cita de una normativa legal y al respecto me remito a la vigencia de las mismas en el tiempo.

Al hecho ***SEGUNDO***: Distingo entre la cita que se hace de normas legales, de una parte, y la interpretación interesada que se hace de las mismas para el señalamiento de obligaciones funcionales de mi representada la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ**entre las cuales la que se le endilga del deber de *"(...) liquidar y notificar personalmente el auxilio de cesantías..."*, pues el funcionario que desempeña las funciones en planta interna no puede hacerlo coetáneamente en la planta externa, como lo reseña la demanda.

Al hecho ***TERCERO***: No me consta. No obstante que se pruebe, pues el periodo en el cual mi representada fungió como *Jefe de Bienestar Social* ninguna relación tuvo respecto de los funcionarios que, como la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, prestaron sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al hecho ***CUARTO***: No me consta. Mi representada ha sido completamente ajena al trámite de petición de reliquidación de cesantías ejercido por **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.** No obstante, es menester advertir desde ya la inconsecuencia del Ministerio al negar la pretensión de reliquidación de cesantías mediante el derecho de petición radicado para conciliar posteriormente y de manera inconsecuente el pago de las diferencias de las cesantías originadas en el exterior.

Al hecho ***QUINTO***: No es un hecho atribuible a mi representada, la doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ,** pues como se ha indicado, no tenía el deber de notificar personalmente los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el exterior.

Al hecho ***SEXTO***: No me consta y deberá probarse. El trámite de audiencia de conciliación extrajudicial fue entre la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, con quien fuera su empleador, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adviértase que el Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo la oportunidad de reliquidar las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia C-535-2005, optó por denegar las peticiones formuladas por el peticionario para posteriormente y de manera inconsecuente, aceptarlas en Audiencia de Conciliación.

Al hecho **SÉPTIMO:** No me consta y deberá probarse. El trámite de conciliación surtido fue exclusivamente entre empleador y empleado y ninguna participación tuvo mi representada, la doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ.**

Al hecho ***OCTAVO***: No me consta el trámite de pago que enuncia el Ministerio. Cualquier actuación surtida se dio en virtud de la relación laboral habida entre estos.

Al hecho ***NOVENO:*** No obstante la multiplicidad de hechos, difiero, pues dentro de las funciones que atribuye el artículo 19 del Decreto 1716 de 2009, a los Comités de Conciliación NO le es dada la facultad o competencia para determinar la culpa grave o dolo en las actuaciones de alguno de sus funcionarios y menos aún decidir *"(...) en forma unánime...* como se hizo, en cuanto a la responsabilidad que se le endilga, dice que tenía mi representada, la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ.**

Además, La función de notificar los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el *exterior* no se encuentra establecida de manera alguna en el Manual Descriptivo de Funciones y Requisitos (Resolución 0033 de 1994), ni en el Decreto 2126 de 1992.

Al hecho **DECIMO**: No es un hecho. Me atengo a la normatividad legal y su vigencia en el tiempo, pero sí es del caso señalar que los Comités de Conciliación son órganos

consultivos y de asistencia, que si bien tiene la facultad de decidir cuando deba instaurarse una acción de repetición, no la tienen para hacerlo en relación con la declaratoria de responsabilidad administrativa y disciplinaria de los funcionarios de las entidades y eventual sobre el grado de culpa o dolo en la conducta de algún funcionario. En este caso del Ministerio de Relaciones Exteriores.

II. RAZONES DE LA DEFENSA

a) El **Acuerdo Conciliatorio** celebrado a instancias de la **Procuraduría 84 Judicial I** para Asuntos Administrativos tuvo por objeto el reconocimiento y pago de las diferencias del auxilio de cesantías que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como **empleador,** debía a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por diferencias en la liquidación de dicha prestación, practicada sobre sumas inferiores a los salarios reales que el mismo devengó desde **1990 hasta el año 2003** cuando ha laborado para el mismo en el exterior.

Pago que tuvo como fundamento legal, el vínculo laboral existente entre el Ministerio y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, generador de dicha prestación conforme a lo establecido en la Ley 6 de 1945, artículo 17 y lo declarado por la Corte Constitucional en la Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y mucho antes, en la Sentencia T-1016 de 2000, que evidencian la condición *inconstitucional* de las prácticas anteriores que al respecto tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores.

b) Se pretende, inmerso irregularmente bajo este medio de control judicial, que se avance en un juicio de declaratoria y condena de condena por la ***responsabilidad*** que se les endilga a mi representada, la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** por haber supuestamente omitido el deber –si lo tenía-, de notificar personalmente las liquidaciones *anuales* del auxilio de cesantías desde **1990 hasta el año 2003** desconociéndose que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental al debido proceso, garantiza que ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa***.

Para el caso, el anterior Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 184, que rigió hasta el 1º de julio de 2012, cuando entró en vigencia la ley 1437 de 2011. Así como la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, conforme a la cual: *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...."* (Artículo 5º).

c) Tanto por lo establecido por el anterior Código Contencioso Administrativo C.C.A., preexistente a la conducta que se le endilga a mi representada la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** la acción para la eventual responsabilidad, en ese caso *conexa* con

la entidad, caducó conforme al artículo 136 del C.C.A, dos años después de la presunta omisión del deber, si lo tenía. A la vez prescribió, cinco (5) años después la disciplinaria (art. 34 ley 200 de 1995), transcurrido como lo han sido **más de trece (13) años**, contados a partir de la última presunta omisión que se les imputa y se retrotrae a la liquidación anual de cesantías del año **2003**.

d) La demanda, como está visto, no tiene como materia la restitución de lo pagado por un reconocimiento *indemnizatorio* -que no lo ha habido-, sino la recuperación para el Ministerio de lo que debía y pagó por ajuste de cesantías generadas en la vinculación laboral que establece la Ley 6 de 1945 y de conformidad con los términos fijados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y excluyen también, cualquier supuesto de la afectación del Ministerio de Relaciones Exteriores como empleador de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por un "daño antijurídico".

e) La Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** no fue convocada, ni citada como tercero, ni oída a ningún título, que le permitiera que le permitiera ejercer su derecho de contradicción, aportación y discusión de pruebas y defensa dentro del proceso de **Conciliación surtido en la Procuraduría 84 Judicial I el 29 de marzo de 2012.** Tampoco ante el Comité de Conciliación y Defensa del Ministerio de Relaciones, que se pronunció y decidió que se entablara la acción por supuestamente haber incurrido aquél en la omisión del presunto deber de notificar personalmente las cesantías de esta última desde **1990 hasta el año 2003** sin ninguna facultad, el Comité, para hacerlo en lugar de la autoridad disciplinaria correspondiente y sin las garantías del debido proceso

f) Colíguese de todo lo anteriormente expuesto, que no resulta legítimo el empleo de este medio de control judicial sobre la materia propuesta (art. 169 -núm. 3°-, Ley 1437 de 2011).

IV. De las EXCEPCIONES

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

A. EXCEPCIONES PREVIAS

1. Falta de competencia

Conforme lo establece el **artículo 7º** de la **Ley 678 de 2001**, de la acción de repetición conocerá de acuerdo con las reglas de competencia, el **juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial** contra el Estado y, si la reparación patrimonial impuesta al mismo tiene origen en una

conciliación o cualquier otra forma establecida en la ley para la solución de conflictos, es competente el **juez o tribunal que haya aprobado el respectivo acuerdo**.

En este caso, el pago que se pretende repetir, proviene del **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012** y aprobado por el **Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"**. En consecuencia, El Tribunal Administrativo de Cundinamarca es el **competente** para conocer de esta acción.

En efecto, según la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, la competencia en razón al factor de ***conexión*** es prevalente por ser especial y en este caso se trata de la consagrada por la ley 678 en su artículo 7° respecto de la acción de repetición. No obstante, lo establecido aun siendo posterior, por el artículo 155 del C.P.A.C.A. en razón a la cuantía.

Dijo, pues, el Consejo de Estado:

> *"Para efectos de la competencia en acciones de repetición el artículo 7° de la Ley 678, establece como premisas: la preexistencia de una sentencia condenatoria al Estado y por ende el trámite de un proceso previo ante la jurisdicción de lo contencioso; sin embargo en hipótesis distintas, es decir, cuando no existe un proceso previo y la reparación se hubiese originado en una conciliación u otra forma autorizada por la ley, conocerán el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo. Cuando no medie aprobación judicial conocerá el jue que ejerza jurisdicción en el territorio donde se celebró el acuerdo. De igual forma existen otros eventos por fuera de los presupuestos del artículo 7°, es decir sin condena previa en la jurisdicción contenciosa, tales como: condenas en la jurisdicción ordinaria en materia laboral a favor de trabajadores oficiales, condenas al Estado Colombiano en tribunales de arbitramento, o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc.; casos en los cuales se aplicarán plenamente las reglas de competencia previstas en el Código Contencioso Administrativo (...)" (Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación 11001-03-15-000-2007-00433(c) Consejero Ponente: MAURICIO TORRESCUERVO, once (11) de diciembre de dos mil siete (2007)*

Precisamente, el Doctor **JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ**, en su obra "El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo" de Ediciones Doctrina y Ley LTDA 2014, resume así el tema:

> *"La incompatibilidad entre la conexidad y la cuantía ya fue resuelta por la sala plena del Consejo de Estado, dando prelación a la conexidad para determinar el juez natural de la repetición.*
>
> *No se desconoce que el nuevo código es posterior, pero en materia de aplicación de las reglas de hermenéutica jurídica, el artículo 5 de la Ley 57*

de 1887 estableció con claridad de la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.

De lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, por lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario al de una norma anterior resulta ésta derogada, pues deberá tenerse en cuenta criterio de la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3 de la Ley 153 de 1887 y 5 de la Ley 57 del mismo año.

Por último, no puede perderse de vista, que el legislador en el momento establecer los fueros de competencia para cada uno de los medios de control, no realizó ninguna precisión frente al medio de control de repetición, teniendo en cuenta que, la competencia ya estaba prevista en la Ley 678 de 2001.

Se quiere significar con lo anterior, que toda vez que el, C.P.A.C.A. no derogó de manera expresa la competencia establecida en la Ley 678 de 2001, esta disposición se encuentra vigente y teniendo en cuenta la especialidad de esta norma respecto de la acción de repetición, se debe aplicar la conexidad a fin de establecer el juez natural de la pretensión de repetición y no el factor cuantía". (pag. 170)

2. Caducidad de la acción declarativa de responsabilidad

El **artículo 29 de la Constitución Política** garantiza el derecho fundamental del *debido proceso.*

En tal virtud nadie puede ser juzgado ni condenado sino conforme a las leyes preexistentes a la conducta que se les imputa.

En este caso, se pretende la declaratoria de responsabilidad y subsiguiente condena a la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** por supuestamente haber omitido el deber –que no tenía, de notificar personalmente y no lo hiciera, a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** las liquidaciones anuales de sus cesantías en los períodos en los que éste prestó sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores ***en el exterior*** y se remontan desde **1990 hasta el año 2003**

Más aún, abarca lo que se pretende repetir, lo pagado a dicho exfuncionario en los períodos de **1990 hasta el año 2003** períodos éstos, -todos- durante los cuales rigió el Código Contencioso Administrativo promulgado por el **Decreto Ley 01 de 1984,** que lo

fue hasta el **1º de julio de 2012**, con la entrada en vigencia, el 2 de julio del mismo año, de la Ley 1437 de 2011, *"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".*

En este orden, la acción de responsabilidad de los funcionarios por los eventuales daños antijurídicos causados por culpa grave o dolosa en el desempeño de sus funciones (artículos 77 C.C.A.) en conexidad con la entidad (art. 78 C.C.A.), **caducó** a los **dos (2) años** de la presunta *omisión* (art. 136 ibídem)

Y sea del caso prevenir que otra es, por supuesto, la *caducidad* de la acción en cuanto a la *condena* sobre repetir lo pagado, que corre a partir del pago (Ley 1437 de 2011, art. 142) la cual, legal y constitucionalmente puede arrastrar la primera, si bien cabe lógicamente derivar de la responsabilidad la *condena* no así lo contrario, cuando aquélla no ha emanado del juicio previo y correspondiente, con las plenas garantías del *debido proceso* y dentro de la oportunidad fijada en la ley preexistente a la conducta imputada.

3. Inepta demanda

a) Por indebida acumulación de *pretensiones*

Se pretende bajo una misma cuerda, por el medio de control de repetición, que a la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** se la declare administrativamente responsable y se la condene a reembolsar al Ministerio de Relaciones Exteriores lo que éste, en cumplimiento de la **Sentencia C-535 de 2005**, pagó a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** por ajuste de cesantías de los períodos que esta laboró en el exterior, **desde 1990 hasta el año 2003** cuando aquélla se desempeñó como *Jefe de Bienestar Social* entre el **21 de septiembre de 1992 hasta el 11 de abril de 1993** regía el Decreto Ley 01 de 1984 por el cual se expidió el anterior Código de lo Contencioso Administrativo, vigente hasta el 1º de julio de 2012, al que precedió la Ley 13 de 1984, subrogado por el Decreto Ley 2400 de 1998 y regía también, en materia disciplinaria, la Ley 25 de 1974 -Orgánica de la Procuraduría General- y su Decreto Reglamentario 3404 de 1983, parcialmente modificada y adicionada por la misma Ley 13 de 1984 y el mismo Decreto Ley 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, de manera que a la luz de lo establecido por el artículo 29 de la Constitución Política a la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** no cabe enjuiciarla bajo el actual CPACA que rige en cuanto a la repetición y, en consecuencia no procede la acumulación, pues a voces del art. 165 del CPACA se exige que tanto lo relativo a la declaratoria de responsabilidad como la condena a reembolsar lo pagado, puedan enjuiciarse bajo la misma normativa.

De acuerdo al artículo 29 de la Constitución, ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y como está visto, las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que supuestamente la Doctora **EDITH**

ANDRADE PAÉZ no le notificó personalmente cuando esta fungía como **como** *Jefe de Bienestar Social* **desde el 21 de septiembre de 1992 hasta el 11 de abril de 1993,** se remonta al año de **1991** y no pueden juzgarse sino a la luz de las normas preexistentes a dichas presuntas omisiones en el año de **1991- Hace 25 años,** entre otras cosas, caducadas y prescritas pues según la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, vigente para la época de las conductas que a la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** se endilgan, *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...."* (Artículo 5º).

Así, pues, la presunta responsabilidad que se le endilga a la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** no es susceptible de enjuiciarse ***sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y no por este medio de control, sin campo alguno para pronunciarse legítimamente sobre una disposición de orden constitucional como la impartida en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005** que dio lugar al pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores le hizo en virtud del Acuerdo Conciliatorio celebrado.

De otra parte, según lo expuesto por el artículo 136 del C.C.A. preexistente a la conducta que se le endilga a la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** la acción para derivar una eventual responsabilidad suya en el pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso hizo, caducó dos años después de la presunta omisión que se le endilga y también prescribió a los cinco (5) años la acción disciplinaria propia para definirla (art. 34 ley 200 de 1995), cuando han transcurrido desde entonces **no menos de trece (13) años y hasta veinticuatro años (24).**

Además, es infundada y falaz la afirmación de que de haberse notificado aquéllas liquidaciones anuales de cesantías, que en el proceso ni siquiera se conocen, hubiera prescrito la acción o caducado el derecho de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** puesto que la posibilidad de demandar nace desde el momento en que la Administración, al **retiro del servidor** no hace entrega de la suma correspondiente a este concepto, es decir omite el cumplimiento de su obligación.[1]

B. EXCEPCIONES DE FONDO

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

a. *Ineptitud sustantiva de la demanda;*

[1] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de septiembre de 2011 radicado interno (2005-2009).

b. *Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad.*
c. *Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición;*
d. *Ilegitimidad de personería por pasiva;*
e. *Inexistencia de nexo causal;*
f. *Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación;*
g. *Inexistencia de daño antijurídico;*
h. *Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso;*
i. *Falta de legitimación en la causa por pasiva;*
j. *Abuso del derecho; e,*
k. *Ilegitimidad del derecho sustantivo.*

EXPOSICIÓN DE LAS EXCEPCIONES DE FONDO

a. ***Ineptitud sustantiva de la demanda***

Derivada ésta del desconocimiento de las garantías constitucionales del derecho fundamental al *debido proceso*[2] a NO *"(...) ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (...) y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio..."*, pues fuerza distinguir en el proceso lo que atañe a la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial del demandado, la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** como se pretende y lo que concierne a la eventual condena a retribuir lo pagado.

A lo primero, indiscutiblemente corresponde la aplicación de las normas preexistentes a la supuesta conducta omisiva de los implicados, del deber –si lo tenían-, de notificar personalmente a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** ***año por año***[3], *las liquidaciones anuales* de sus cesantías, causadas en los años de **1990-** Hace 26 años, **1991-** Hace 25 años **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años-, durante los cuales laboró al servicio del Ministerio de Relaciones en **el exterior,** pues rigió desde el **1º de marzo de 1984**[4] hasta el **1º de julio de 2012**[5], el Decreto Ley 01 de 1984 que reformó el Código Contencioso Administrativo[6] anterior.

---

[2] Art. 29 C.P.
[3] Decreto 3118 de 1968 *"Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantías de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, reorganizado por la Ley 432 de 1998"*.
[4] Diario Oficial 36.439 del 10 de enero de 1984.
[5] Fecha de entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 "por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
[6] Ley 167 de 1941

Ahora bien, a efectos de derivar la responsabilidad que correspondiera a los funcionarios aquí implicados para la época en que supuestamente omitieron el deber, -si lo tenían-, de notificar personalmente las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** causadas en los años de **1990**- Hace 26 años-, **1991-** Hace 25 años-, **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años-, el **artículo 78** del Decreto Ley 01 de 1984, vigente en esos años, permitió que fueran demandados, en conexidad con la entidad pública, los funcionarios responsables de culpa grave o dolo en ejercicio de sus funciones, que le fueren generados a terceros (art. 77 *ibídem*), conforme a las reglas generales de los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, de ser así, fuera la misma la sentencia que dispusiera que el funcionario responsable satisficiera los perjuicios ocasionados a la Entidad, repitiendo contra el mismo lo pagado, para lo cual el término para hacerlo era de "***(2) dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa...***" establecido para las acciones de su género.

En cuanto a lo segundo, aspecto propio de la ritualidad de los procesos, es claro, que al tipo de acción incoada ha de dársele el trámite del medio de control judicial de repetición, sin que por ello pueda legitimarse a accionar, como se proponen, frente a los demandados en procura de una declaratoria de responsabilidad que caducó y sustrae al juez de proveer legítimamente al respecto, hoy décadas después de acontecido el supuesto incumplimiento del deber, si lo tenía, que a los demandados se les endilga, que en ese tiempo no cumplieron, válido, el demandante, que hoy el término para el medio de control de repetición caduca a *partir del pago,* y baste ésa consideración para traer ahora a este juicio a los demandados quebrantándoles todas las garantías constitucionales al debido proceso.

De ahí que, la demanda adolezca de la actitud sustantiva para derivar una condena en contra de los demandados, habiendo caducado como está visto cualquier acción encaminada a la declaratoria de la responsabilidad administrativa y patrimonial de los demandados por hechos que se remontan, como ya ha quedado visto, entre **trece (13) y veintiséis (26) años atrás**, enmarcados dentro de un ordenamiento legal preexistente y también, por supuesto, más favorable[7].

Descendiendo a la demanda, ésta se apoya en una sentencia en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores fue condenado a restablecer los derechos que por su parte le vulneró a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** con el reconocimiento y pago que le había hecho de las cesantías causadas a su favor durante los períodos de sus servicios al mismo **en el exterior**, en los años en que desempeñó el cargo referido de la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** basándose en sumas inferiores a los salarios reales que el ex funcionario devengó, debiendo en consecuencia, re-liquidarle dicha

[7] Art. 53 C.P.

prestación, conforme a lo ordenado en la Sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto Legislativo 10 de 1992, que el Ministerio siguió aplicando, no obstante su derogatoria con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993[8] y posteriormente la Ley 797 de 2003, de ninguna manera vinculante con los demandados, quienes son totalmente ajenos a las prácticas entronizadas en ese orden por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de donde se deriva el pago que por concepto de reliquidación de dichas cesantías, debió atender y **no del reconocimiento de una indemnización ocasionado por un daño antijurídico** que fuera imputable como se formula, a los demandados.

Es claro entonces, que no existe sentencia alguna de condena al pago a una indemnización que vincule a los demandados o que lo hubiese vinculado, conforme a las previsiones de los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984, ni pueda hacerlo ahora, lo cual conduce a la imposibilidad jurídica de despachar la demanda dada y, en consecuencia, la ineptitud sustantiva de la misma.

b. ***Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad***

Siguiendo al tratadista *Bonnard,* quien participando de las mismas ideas de Deguit en materia de responsabilidad administrativa, lo que se advierte es una "falta de la administración" y la jurisprudencia ha advertido de *la responsabilidad* basada en una irregularidad de la actividad administrativa. Así, *"(...) Se ha deducido que la responsabilidad del patrimonio público surge cuando el daño resulta de una mala organización o de un funcionamiento defectuoso del servicio, y es, sin que sea necesario que en esa mala organización o defectuoso funcionamiento haya culpa de parte de un agente administrativo. Esto es lo que constituye la llamada culpa del servicio público, así denominada para indicar "que no hay culpa individualizada de un agente administrativo", sino solamente una irregularidad de origen anónimo y de aspecto objetivo en la organización y en el funcionamiento del servicio."*[9]

Y, como aquí se advierte la falta de la notificación personal de las liquidaciones anuales de cesantías a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores **en el exterior**, no fue, -está visto- un hecho aislado, sino que corresponde a una condición propia de un defectuoso servicio público de la entidad a falta de una regulación y apremios del orden de conformación y asignación de actividades puntuales, cuya omisión no cabe, pues, imputar individualmente a uno u otro funcionario con remisión a normas generales, sino que es más bien producto anónimo del funcionamiento de la Entidad, generador cuando menos de un ***error communis facit ius***[10] o, que hace derecho

[8] T-1016 de 2000, Sentencia C-173 de 2004
[9] SARRIA B, Eustorgio y Mauricio. *Derecho Administrativo*. Editorial Pluma. Págs. 245 y 246
[10] Conc. artículo 8°. Ley 153 de 1887

Por otra parte, cabe señalar que de tiempo atrás la jurisprudencia ha establecido los requisitos para dar aplicación a la "doctrina del error común creador de derechos" o teoría de la apariencia[11], a saber:

1. *"Debe existir una situación que realmente sea contraria a la normatividad, pero oculta, es decir, (...) ajena en su etiología y desarrollo a quien eventualmente resultare perjudicado con la apariencia de juridicidad (...)*
2. *Que esa situación de apariencia de legalidad esté respaldada en hechos, situaciones o documentos cuyo vicio no sea posible advertir con diligencia y cuidado.*
3. *Que la conducta de quien resultó perjudicado con la situación de aparente legalidad esté respaldada por una buena fe del particular (...)*
4. *Que la situación no esté regulada expresamente por una ley imperativa que imponga soluciones diferentes a las que resultarían de la aplicación de la doctrina".*

c. <u>Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición</u>

El Artículo 90 de la Constitución Nacional establece que:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este."

Adviértase la inexistencia de una condena o conciliación al Estado en la que conste la indemnización por la ocurrencia de un ***daño antijurídico,*** producto de la conducta dolosa o gravemente culposa imputable a mí representada, la doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ**.

Lo que ha traído el Ministerio como fundamento para sustentar la pretensión de repetición es una Conciliación que obliga a la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores a pagar a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las diferencias de cesantías originadas durante el tiempo en que aquel prestó sus servicios en el exterior, atendiendo lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 535-2005.

Así las cosas, el **Acuerdo Conciliatorio** tiene como fundamento el cumplimiento de una Sentencia de la Corte Constitucional - no de la ocurrencia de un daño antijurídico - elemento necesario para que se pueda predicar la procedencia de la acción de

[11] Al respecto se puede consultar la Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 3 de agosto de 1983, M.P. Dr. Jorge Salcedo Segura.

repetición. Asimismo, el pago efectuado corresponde al reajuste de cesantías que el Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** durante el tiempo en que esta prestó sus servicios en el exterior. De allí que tampoco pueda derivarse que el pago efectuado por el Ministerio haya sido en calidad de indemnización, como bien lo exige el Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.

Por otra parte, la **Ley 678 de 2001** *"Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.",* estableció la **acción de repetición** con el fin de restituir al Estado lo pagado, exclusivamente, a título de una indemnización, como *reparación* –directa- del **daño antijurídico** irrogado por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes, o de un acuerdo conciliatorio u otra forma de terminación de un conflicto de responsabilidad civil contra una entidad pública.

Adviértase que cuando los hechos que generan la pretensión de repetición ocurren con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2001, se debe establecer la normatividad sustancial y material aplicable al caso en concreto. Al respecto ha indicado en Consejo de Estado que:

"En cuanto a las normas sustanciales, se tiene que las normas aplicables para dilucidar si el demandado actuó con culpa grave o dolo, serán las vigentes al tiempo en que tuvo lugar la conducta del agente estatal. En tal sentido, **las presunciones de dolo y culpa grave que traen los arts. 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 no pueden ser aplicables a casos concretos donde los hechos que generaron la repetición se dieron con anterioridad al 4 de agosto de 2001.**"[12]

Por su parte, establece el **artículo 142** de la **Ley 1437 de 2011**:

> ***Ley 1437 de 2011. Artículo 142.***
> ***"Repetición.*** *Cuando el Estado haya debido hacer un* ***reconocimiento indemnizatorio*** *con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.*
>
> *La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.*
>
> *Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño." (Negrillas fuera de texto)*

[12] Sentencia Consejo de Estado, Expediente 25000232600020030030001 (28.448) del 31 de agosto de 2006.

Como aquí está visto la demanda aquí incoada tiene como base lo pagado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de la diferencia de cesantías surgida por efecto de los servicios que prestó dicha entidad **en el exterior,** devengando realmente sumas inferiores a las que realmente devengó y el Ministerio le liquidó cuando prestó sus servicios desde **1990 hasta el año 2003** en cumplimiento a lo dispuesto en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el día 29 de marzo de 2012**, no es vinculante con los demandados ni podría serlo, pues no fueron llamados al mismo con fines de repetición ni citados como terceros ni en ninguna otra condición que les permitiera haber sido **oídos** y ejercido su legítimo derecho de *contradicción,* petición y discusión de pruebas para su defensa, como lo garantiza el debido proceso que consagra el **artículo 29** de la Constitución Política.

Por eso, tal acuerdo no les es oponible, por lo que constitucional y legalmente es posible derivar en su contra la declaratoria de responsabilidad e imposición de la condena que se procura.

d. *Ilegitimidad de personería por pasiva*

Aun cuando se demanda, entre otros, a la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** por supuestamente haber omitido el deber – si lo tenía- de notificar las liquidaciones anuales de cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** en los periodos entre el **21 de septiembre de 1992 hasta el 11 de abril de 1993,** cuando aquélla se desempeñó *como Jefe de Bienestar Social* la acción de repetición se encamina a obtener indistintamente del mismo el pago que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES hizo a aquélla, de la suma de **$133.148.564** por el reajuste anual de sus cesantías liquidadas como inicialmente lo fueron, sobre sumas inferiores a los salarios reales que devengó durante los periodos de sus servicios en el exterior y corresponden a los años de **1990-** Hace 26 años-, **1991**- Hace 25 años-, **1992**- Hace 24 años-, **1993**- Hace 23 años-, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años**, 1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años, cuando la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** ninguna vinculación, ni relación funcional, administrativa ni causal tuvo al frente de las liquidaciones anuales de cesantías que el MINISTERIO le liquidó a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Luego no existe legitimación en la causa por pasiva entre el MINISTERIO y la doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** para que aquel demande indistintamente, sin relación de proporcionalidad ni de racionabilidad alguna, lo comprendido en la totalidad de lo pagado que se pretende repetir, lo generado por todo el tiempo reliquidado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.**

e. ***Inexistencia de nexo causal***

La *causa* generadora del pago, vertida en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012,** que obligó al Ministerio de Relaciones Exteriores a reliquidar las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en los períodos de sus servicios en el exterior, conforme a los salarios reales que entonces devengó y no sobre las sumas inferiores que en esa época el Ministerio le liquidó, tiene su origen en la Ley 6ª de 1945 -art. 17- en razón de la vinculación de naturaleza laboral, de carácter legal y reglamentaria, que compromete exclusivamente, como empleador, al Ministerio de Relaciones Exteriores y lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**. En ningún caso por causa de la demandada, la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ**.

En cumplimiento de la Sentencia C- 535-2005, que declaró inexequible el Artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, y ordenó liquidar las cesantías de los funcionarios que laboraron en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores teniendo en cuenta en el Ingreso Base de Liquidación la suma total de los salarios reales devengados durante los periodos laborados en el exterior, se llegó al **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012,** que corresponde a lo que el Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de *reajuste de cesantías* según lo establecido en la Sentencia C- 535- 2005.

Así, aquello en lo que funda la pretensión de repetición el Ministerio atinente a la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaron las cesantías, para efectos de que pudiese operar el fenómeno de la prescripción trienal de las acciones laborales es completamente inane habidas las siguientes consideraciones:

Primero: Siendo la cesantía una prestación de carácter unitario, el término para iniciar el cómputo de la prescripción trienal de la acción laboral solo puede ser al momento de la finalización de la relación laboral que coincide con el momento a partir del cual se hace exigible el derecho por parte del trabajador. Así lo ha entendido el Consejo de Estado al establecer que: "[...] se concluye que **mientras esté vigente el contrato de trabajo, no se puede hablar de prescripción de la cesantía como derecho social**."[13]

Habida cuenta de lo anterior, mal puede hablarse de prescripción de las cesantías contada a partir de la notificación ***anual*** de dicha prestación, pues ninguna de ellas es independiente de las demás. Son partes de un todo que conforman una prestación unitaria.

Al ser una prestación social de *carácter unitario* cuya exigibilidad solo se produce a partir de la finalización de la relación laboral, resulta inane la notificación anual de dichos actos administrativos para el cómputo de la prescripción trienal. De tal forma que con notificación o sin ella, la causa generadora del pago no es la supuesta omisión de la

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "B", sentencia del 22 de enero de 2015, Radicado interno (4346-13)

notificación anual de los actos administrativos de liquidación. Esta se genera en el cumplimiento de la Sentencia C- 535- 2005 de la Corte Constitucional.

Segundo: Fue a partir del 24 de mayo de 2005 con la Sentencia C- 535-2005 de la Corte Constitucional que se conoció e hizo exigible para el Ministerio de Relaciones Exteriores la obligación de liquidar y pagar el reajuste de las cesantías en los términos de dicho fallo y el derecho correlativo de los funcionarios a reclamar su efectividad.

Así, el término de inicio para el cómputo de la prescripción trienal es la fecha de expedición de la sentencia de la Corte Constitucional; fecha a partir de la cual se hizo exigible la obligación. No antes, que es lo que predica la demanda pretendiendo inferir responsabilidad en cabeza de la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** por supuestamente haber omitido la notificación anual de los actos administrativos de liquidación de las cesantías.

La verdadera causa del pago es la Sentencia C- 535- 2005 del 24 de mayo de 2005 que declaró inexequible el Artículo 10 del Decreto Ley 10 de 1992, que establecía el pago de las cesantías de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando laboraban en el exterior, con base en las asignaciones salariales de cargos equivalentes en la planta interna. Teniendo en cuenta que los efectos de las sentencias de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro, a menos que la Corte resuelva lo contrario, en los términos del Artículo 45 de la Ley 270 de 1996, la eventualidad del término prescriptivo trienal encaminado al reajuste de las cesantías es la fecha de expedición de la Sentencia.

Así lo ha entendido el Consejo de Estado en varias providencias al manifestar que:

"[...] Conforme a lo antes indicado se precisa que existía un obstáculo de orden legal que no permitía liquidar las prestaciones de los empleados del servicio exterior, con base en lo que devengaban sino sólo de acuerdo con los valores equivalentes a los de la planta interna, de manera que se puede decir, como ya lo ha precisado esta Sala, que el derecho a devengar la cesantía liquidada con base en lo devengado en el servicio exterior, sólo surgió, con certeza, a partir de la expedición de las sentencia referida, pues antes, es evidente que la entidad pública se abstenía de liquidarla.

A partir de la remoción del obstáculo normativo cuya sentencia fue proferida el 24 de mayo de 2005, el demandante estaba legitimado para pedir el reconocimiento de su derecho, por ende, no es procedente declarar la ineptitud sustantiva de la demanda, conforme lo pidió la entidad recurrente en el recurso de alzada.[14]"

Por su parte, indicó en Sentencia del 6 de julio de 2011, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren:

[14] Sentencia Consejo de Estado del 4 de noviembre de 2010, M.P: Víctor Hernando Alvarado Ardila, Exp. No. 1496-2009,

"[...] Además, con el pronunciamiento de inconstitucionalidad efectuado por la Corte Constitucional en sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, efectuado el 24 de mayo de 2005, la parte demandante quedó legitimada para reclamar la reliquidación de sus prestaciones, en especial de sus cesantías, porque la vigencia y aplicabilidad del aludido artículo, impedía su reconocimiento.

El fallo recurrido amerita ser confirmado porque pese a que la sentencia de la Corte Constitucional C-535 de 2005, fue proferida luego de que se causaron las respectiva anualidades en las que el demandante prestó sus servicios en el exterior, y ésta tiene efectos hacia el futuro, lo cierto es que, por las razones arriba expresadas, es procedente declarar la denominada excepción de inconstitucionalidad para darle prevalencia a la interpretación constitucional y así, **en aplicación de los principios de primacía de la realidad frente a las formas y favorabilidad evitar que una norma que es inconstitucional desde sus orígenes produzca efectos en los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestaron sus servicios en el exterior**."

Estas sentencias encuentran su fundamento en que la fecha a partir de la cual se hizo exigible el derecho a la reliquidación de la cesantía por parte de los funcionarios que laboraban en el exterior, es el 24 de mayo de 2005; fecha de expedición de la Sentencia C-535 de 2005. Esto es así teniendo en cuenta que solo con la promulgación de la Sentencia de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del Artículo 57 del Decreto extraordinario 10 de 1992, se declaró el derecho de los funcionarios que laboraron en la planta exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de exigir la reliquidación de sus cesantías con base en el salario realmente devengado. En este punto fuerza distinguir *la exigibilidad de la cesantía misma que, dada su naturaleza, se da al momento de desvinculación del trabajador* y la *exigibilidad de la reliquidación del auxilio de cesantía que sólo puede computarse a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005.*

Por su parte, son varios los pronunciamientos judiciales proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los que ha interpretado que los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que no hayan exigido la reliquidación de sus cesantías dentro del término de tres años contados a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005, aplica la excepción previa de prescripción extintiva de los derechos laborales.

En relación con lo anterior, los procesos judiciales en los que se ha aplicado esta posición son:

1- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad

No 25000-23-42-000-2012-01180-00. Demandante: Martha Angélica Marín Colorado- Demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

2- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-01182-00. Demandante: Sofía Salgado de Goméz- Demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

3- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-0018500.

Mediante auto del 22 de octubre de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C- 535 de 2005.

En síntesis, el argumento esbozado en la demanda en virtud del cual se generó un daño antijurídico por la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaban el auxilio de cesantía, impidiendo así que operara la prescripción trienal de los derechos, carece de todo sustento jurídico y se constituye en un abuso del derecho de acción por parte de la Cancillería. Además, es de mala fe buscar repetir lo pagado a **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** por haberse cumplido la Sentencia C-535-2005, que reiteró que la pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le corresponde.

f. ***Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación***

De otra parte, de conformidad con lo establecido en el **artículo 19 del Decreto 1716 de 2009**, el *Comité de Conciliación* del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** no es el competente para decidir que la conducta de la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** sea *gravemente culposa* por los hechos u omisiones que se le endilgan. Dicha *competencia* es privativa del Superior disciplinario[15] y con observancia del *debido*

[15] Ley 734 de 2002 –Código Disciplinario Único-

proceso que descansa en la garantía constitucional a ser *oída* y ejercer la *defensa* que, en ese orden, no se dio.

En tal sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado[16] en respuesta a la consulta formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto de los estudios que deben realizar los comités de conciliación de las entidades públicas para determinar la procedencia de la acción de repetición, advirtió lo siguiente:

> *"El alcance de los estudios y evaluaciones que debe realizar el comité de conciliación para determinar la procedencia de la acción de repetición, está dado por los requisitos fijados en la normatividad vigente, (...). En desarrollo de dichos estudios, el comité de conciliación* ***no puede invadir la competencia atribuida a la jurisdicción de lo contencioso administrativo****, al cuestionar los argumentos que sirvieron de fundamento al fallador"* (Resalto).

Por lo anterior, concluye el Alto Tribunal que los estudios que debe realizar el comité *"(...) deben dirigirse a demostrar los presupuestos fácticos en que se basa la presunción a favor del Estado"*[17].

g. *Inexistencia de daño antijurídico*

El pago realizado, que se pretende repetir en contra de la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** consiste en el reconocimiento, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la diferencia a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, siendo aquél su empleador, generada en la incompleta liquidación de sus cesantías, realizada sobre sumas inferiores a los salarios realmente devengados por el mismo cuando prestó sus servicios a dicha entidad en el exterior, en el período de la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** y otros más cuyo producto se encuentra incluido en el total demandado y tienen por única y son el producto exclusivo de una prestación de naturaleza laboral, nacida del vínculo legal y reglamentario habido entonces entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que establece la Ley 6ª de 1945, y obedece para el caso a lo ordenado en la Corte Constitucional en la sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.

En tal orden, el **Acuerdo Conciliatorio**, versó sobre la reliquidación de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, ordenando al Ministerio a dicho pago en cumplimiento de la Sentencia C-535-2005.

De ahí pues, que no pueda válidamente predicarse la existencia de un pago constitutivo de **"daño antijurídico"**, como sí por el contrario, lo fue de una prestación legal de carácter laboral, legítima como quiera que estaba basada en la Ley 6ª de 1945, en el

[16] Rad. No. 1634. C.P. Dra Gloria Duque Hernández.
[17] Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 1634 de 2005.

trabajo que merece la especial protección del Estado (art. 25 de la Constitución Política) y en la *cosa juzgada* constitucional emanada de la sentencia C-535 de 2005.

h. ***Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso***

El **Acuerdo Conciliatorio** que trae el Ministerio de Relaciones Exteriores como base de la acción de repetición, no es constitutivo de condena alguna de la responsabilidad de la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** ni podría hacerlo so pena de violación del debido proceso, puesto que al trámite judicial, no fue éste convocado, ni citado u oído de manera que hubiera podido ejercer su derecho de contradicción, de oportunidad de pruebas y defensa sobre en orden a determinar la existencia y el grado de una eventual responsabilidad *conexa* a la del Ministerio de Relaciones Exteriores la cual, además, ya habría caducado conforme a las normas preexistentes a la presunta ocurrencia de la omisión al deber que aquí se le endilga remontándose a trece (13) y más años atrás, de donde siguiese necesariamente la improsperidad de una condena en su contra.

i. ***Falta de legitimación en la causa por pasiva***

La Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** no tenía la función que se le endilga de notificar personalmente las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en el exterior.

De una parte porque dicha función no se encuentra específica ni determinada en el **Decreto No. 2126 de 1992,** ni en la **Resolución 2153 del 25 de agosto de 1992,** vigentes para la época en que mi representada se desempeñó como *Jefe del área de Recursos Humanos.*

Por otra parte, a mi representada se le llama a responder en repetición respecto de las liquidaciones anuales de cesantías por unos periodos **anteriores** y ***posteriores*** a su desempeño como *como Jefe de Bienestar Social.* Así, **anteriores** desde 1990 hasta el 20 de septiembre de 1992; ***posterior*** desde el 12 de abril de 1993 hasta el año 2003, conforme el periodo que la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** prestó sus servicios en el exterior.

Además de lo anterior, durante los periodos desde 1990 hasta el año 2003 correspondiente a las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, éste se encontraba y permanecía en el exterior, circunstancia que constituye un imponderable fuera de la órbita del desarrollo de las tareas habituales de la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** quien se encontrara en la *planta interna* del Ministerio de Relaciones Exteriores entre el **21 de septiembre de 1992 hasta el 11 de abril de 1993,** lo que permite asumir que a quien habría correspondido notificar personalmente los respectivos actos administrativos, si los hubo, de liquidación anual de cesantías, fue a quienes desempeñaron funciones

Consulares[18]. Entre ellas las de carácter administrativo, como fuera la de dar a conocer a los Funcionarios de la Misión, los actos administrativos de carácter particular de interés del propio Ministerio.

j. ***Abuso del Derecho*** -Temeridad o mala fe por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores-

Se demanda aquí, entre otros, a la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** por haberse desempeñado en el Ministerio de Relaciones Exteriores como *Jefe de Bienestar Social* del **21 de septiembre de 1992 hasta el 11 de abril de 1993** y a quien se le endilga haber faltado al deber que no tenía, de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, correspondientes al lapso comprendido desde 1990 hasta el año 2003, pues como a simple vista se puede apreciar el periodo comprendido desde el 12 de abril de 1993 hasta el año 2003, es **posterior** a su designación como *Jefe del área de Recursos Humanos*

Lo mismo que sucede, infiriéndose la falta de buena fe debida en sus actuaciones por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, y abuso de su derecho a demandar en **87 procesos** más, de iguales presupuestos, por las liquidaciones anuales de las cesantías generadas a favor de Ignacio Enrique Ruiz Perea, Lilia Stella Cepeda Ulloa, Zaida Patricia Cristancho Guerrero, Gladys Cecilia Acosta Vidal, Luis Guillermo Becerra Torres, EDITH ANDRADE PAÉZFernando Alzate Donoso ,Enrique Antonio Celis Durán, Ana Cecilia Pulido Guerrero, Francia Rodríguez Romero, María del Pilar Gómez Valderrama, Armando González Cortés, Eduardo Alonso Rodríguez, Myriam Duarte Bernal, Consuelo del Socorro Tirado, Reinaldo Vélez Londoño, José Fernando Cendales, Eduardo Casas Acosta, María Nelly Tascón Maya, María Eugenia Beltrán de Chaparro, Miguel Camilo Ruiz Blanco, Esperanza Castro Duque, Raúl Arturo Rincón, Martha Osorio Villamizar, Divia Desideria Cepeda, Felicia Mercedes Valera, Blanca Marina Villacrees, Nydia Inés Aguirre Acevedo, Janneth Victoria Truque P, Adda Isabel Borda Medina, Edgardo Alfredo Llorente Méndez, Luis German Estrada, Henry Javier Arcos, María Helena Londoño, Patricia Klein, María Victoria Eugenia Senior Pava, Julia Inés Mora López, Maria Cristina Guerrero López, Margarita Eliana Manjarrez Herrera, René Correa Rodríguez, Gladys Mireya Paéz Herrera, Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez, Alberto Bula Bohórquez, María Helena Pastrana Pastrana, María Inés Herreño Pinto, María Smith Rueda Centeno, Juan Norberto Colorado Correa, Amparo Flórez López, Álvaro Sandoval Bernal, Alicia Alejandra Alfaro Castillo, Pablo Antonio Rebolledo Schools, Alejandro Borda Rojas, Carlos Rodríguez Bocanegra, Miguel Ángel Rodríguez Melo, Edwin Ostos Alfonso, Mauricio González López, Jaime Girón Duarte, Nacianceno López Restrepo, Rafael Juan Carlos Espinosa, Santiago Salcedo, Mery Cecilia Hurtado, Flor Ángela Martínez, Alberto Barrantes Ullos, Juan José Quintana A, Carlos Arturo Forero, Olga Cielo Molina de la Villa, Hernán Vargas Martín, Álvaro Enrique Ayala Meléndez, Carmen Estavana Zapateiro B, Fernando Salavarrieta García, Marcela Ordóñez Fernández, Gilberto Poveda Rodríguez, Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi

[18] Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, artículo 5°

,Alfonso de Jesús Vélez Rivas, Fabio Emel Pedraza Pérez, Ana del Socorro Bornacelli Guerrero, Marcela Rodríguez Velandia, Alvaro Eugenio Márquez Sarmiento, Javier Darío Higuera Ángel, Carlos Arturo Morales López, Daniel Ávila Camacho, José Antonio Solarte Gómez, Blanca Stella Barrero Barrero, María Consuelo Porras, Concepción Concha Agudelo.

i. ***Ilegitimidad del derecho sustantivo***

Existe Ilegitimidad del uso del derecho sustantivo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por cuanto lo que se pretende es el REEMBOLSO de una prestación social como lo es el **auxilio de cesantías**, cuyo PAGO emana de la OBLIGACION LEGAL de aquélla, producto del VINCULO LABORAL con la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Aquello que la causa en que se fundan las pretensiones del actor, devienen del supuesto deber de haber notificado o no las liquidaciones, es un sofisma para distraer la atención del verdadero derecho sustantivo que es aquélla -las cesantías- y no éste, porque con razón o sin ella, el derecho a dicha prestación, existe, en virtud de lo dispuesto por la **Ley 50 de 1990** y por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**.

Dada la *materia*, de acuerdo a la cuantía cuyo valor pretende que se le reembolse por los funcionarios o ex funcionarios demandados, pues se trata de una prestación social de carácter laboral, nacida del vínculo de trabajo que existió entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y aquélla a quien se realizó el pago, en el cual el Ministerio es, por el contrario, deudor de la obligación, conforme al artículo 249 del C.S.T., que establece el auxilio de cesantía, y lo dispuesto en la Sentencia de Constitucionalidad C-535 de 2005, toda vez que la causa de lo pagado, es producto de dicho fallo que le impuso a dicha entidad, la obligación de liquidar tales prestaciones con base en el salario realmente devengado por la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, durante los periodos de sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior desde 1990 hasta el año 2003, y para cuyo cumplimiento no puede predicarse la existencia como engañosamente se formula, de una indemnización, que diera lugar al daño antijurídico.

V. FUNDAMENTACIÓN DE LA DEFENSA

a. Fáctica

Lo que da origen a lo pagado, cuyo monto se pretende *repetir*, corresponde al **derecho** de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** al reconocimiento y pago de las

diferencias a su favor por concepto de ***cesantías*** desde 1990 hasta el año 2003 de acuerdo con los salarios que en esos períodos realmente devengó[19]

No es, pues, racional, ni lógico y sí sofístico, afirmar como lo expone la demanda, que obedezca al deber que en el período del **21 de septiembre de 1992 hasta el 11 de abril de 1993,** la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** habría tenido y ***omitiera*** *"(...) en su condición de Jefe del Área de Recursos Humanos..."*, de notificar *personalmente* a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, sus ***cesantías*** anuales desde 1990 hasta el año 2003 e impedido así, con *culpa grave,* que no ocurriera el fenómeno *prescriptivo* trienal de las acciones laborales y de caducidad de las propias ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que le hubieran permitido al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES eludir el reconocimiento y pago de dicha prestación conforme a los salarios reales que en esos períodos la misma devengó, incrementándose su valor, que es lo que al Ministerio le resulta *antijurídico* y asume como el *daño* que alega le irrogó *pagar* lo que, inclusive despojado de las acciones llamadas a hacer efectivo el cobro de lo debido, persiste jurídicamente como una *obligación natural* que encuentra en su naturaleza la causa legítima del pago, que, en consecuencia, no cabe *repetir*.

De manera que del Catálogo de Funciones mencionados genéricamente no se desprende la prueba que permita afirmarse, como lo expresa la demanda, que la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** tuviera el deber de *notificar personalmente* las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** con destino al Fondo Nacional del Ahorro **desde 1990 hasta el año 2003** tampoco era esa la *práctica común* adoptada al respecto como política general por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por eso, *repetir* lo pagado generaría más bien, un *enriquecimiento sin causa* en cabeza de **LA NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**, a la vez que le irrogaría un injusto *empobrecimiento* a la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** por cierto, el extremo débil de la relación laboral que se le opone para sustentar la acción.

b. Jurídica

La Ley 6 de 1945, establece la obligación del empleador, en este caso el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, de reconocer y pagar al trabajador el auxilio de **cesantía**, un mes de salario por año de servicio, o proporcionalmente a su fracción, debiéndose tener por *salario* todo emolumento que este reciba ordinariamente en desarrollo de su vinculación laboral.

Ahora bien, la Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005 en materia de cesantías de los funcionarios y ex funcionarios que prestaron servicios al MINISTERIO DE

[19] Sentencia C-535 de 2005

RELACIONES EXTERIORES en el exterior, sobre las mismas consideraciones que antes en materia de *pensiones* sirvieron de sustento a la Sentencia C-173 del 02 de marzo de 2004, definió que dicha prestación debe corresponder a los salarios realmente devengados y que una disposición como la que contenía el Decreto 10 de 1992 (art. 57[20]) y retomó el Decreto Ley 274 de 2000 (art. 66[21]), que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 derogó, no debieron aplicarse y sí, haber acudido la Entidad a la *excepción de inconstitucionalidad,* lo que no se hizo y vino a remediar el Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012 y aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F". En tal virtud, lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de sus ***cesantías*** anuales en el periodo comprendido desde **1990 hasta el año 2003**, no es de carácter indemnizatorio, por lo que no le ocasiona legítimamente a LA NACION -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- un detrimento patrimonial, presupuesto inescindible de la acción de repetición.

De otra parte, si como está visto durante varios años, desde 1990 hasta el año 2003 todos los quince (15) ex funcionarios aquí y en otros procesos[22] también demandados, siempre hicieron u omitieron lo mismo como lo afirma la demanda, lógico es colegir que esa fue sistemáticamente la política establecida sobre la materia por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y no la manifestación independiente y autónoma de la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** por la que deba responder patrimonial ni administrativamente, pues habríase dado *culpa* de la propia Entidad que la exime al respecto y cuanto más, un ***error communis facit ius***[23] o, que hace derecho.

Por lo anterior, en este caso no puede afirmarse que se hayan configurado los elementos para considerar probada la culpa grave de la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** conforme lo prevé el artículo 6º de la Ley 678 de 2001 y, en tal sentido, se trae a colación lo expuesto por el H. Consejo de Estado respecto a la carga de la prueba en la acción de repetición (denominada pretensión con la Ley 1437 de 2011):

> *"Es claro que el solo desconocimiento de la norma por el operador jurídico encargado de aplicarla a través de actos administrativos (...) no implica de plano una responsabilidad a título de imputación de culpa grave o dolo, puesto que, en estos casos, existe un margen de error admisible en condiciones normales y más aún extraordinarias cuando se trata de la interpretación y ejecución de las normas jurídicas o de la percepción de la realidad atendiendo las circunstancias específicas del caso, toda vez que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de la función pública se trata de*

---

[20] Declarado Inexequible Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.
[21] Declarado Inexequible Sentencia C-292 de 2001.
[22] Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B", Radicados **2014-00835-00** y **2014-00841-00**, J. 4° Administrativo de Descongestión Radicados **2014-00004-00** y **2013-00440-00**, J. 8° Administrativo del Circuito Radicado **2013-00622-00**, J. 9° Administrativo del Circuito, Radicados **2014-00026-00**, **2014-00065-00**, **2014-00260-00** y **2014-00605-00**, J. 31 Administrativo del Circuito Radicados **2014-00092-00**, **2014-00111-00**, **2013-00244-00**, **2014-00286-00**, **2014-00479-00**, **2014-00304-00** y **2014-00387-00**, J. 35 Administrativo del Circuito Radicados **2013-00056-00**, **2014-00467-00**, **2014-00467-00**, **2014-00152-00** y **2014-00399-00**, J. 37 Administrativo del Circuito Radicados **2013-00087-00**, **2013-00115-00**, **2013-00123-00**, **2013-00303-00**, **2013-00304-00**, **2013-00479-00** y **2013-00480-00**, entre muchos otros.
[23] Conc. artículo 8°. Ley 153 de 1887

una labor humana, que implica la posibilidad de yerros en las actuaciones. Como en el sub exámine no son procedentes las presunciones de dolo y culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001, por la echa de ocurrencia de los hechos, dichos conceptos requieren de una carga probatoria mayor por parte de la entidad pública en cuanto que debe desplegar una actividad prolífica tendiente a demostrar y acreditar el dolo y la culpa grave..."[24].

Por otra parte, los servidores públicos tienen un régimen de responsabilidad subjetivo y, en consecuencia, el título de imputación, sea dolo o culpa grave, debe estar plenamente demostrado dentro del proceso en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, pues el mismo no se presume en estos casos. En otras palabras, no basta simplemente citar uno de los presupuestos de la ley para que se configure la pretensión de repetición, debe acreditarse en debida forma la actuación dolosa o gravemente culposa del agente demandado.

Ahora bien, se advierte que existen serias y graves deficiencias respecto de las pruebas que ordenan a la entidad pública al pago de las diferencias de cesantías a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** que, en este caso, corresponde al **Auto de aprobación de la conciliación proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"**, ya que tal documentos debió ser aportados con la demanda en originales según lo dispone el Art. 245 del C.G.P: "[...] *Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en donde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.*

En un asunto similar al que nos ocupa, la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó:

"Por tanto, las copias aportadas por la entidad demandante carecen de valor probatorio, porque, en tratándose de copias de documento público (...), para que puedan ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial, deben reunir las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra la diligencia de autenticación.

En ese orden de ideas, se concluye que no está demostrado dentro del proceso el primero de los hechos generadores de la acción de repetición, cual es la existencia de una sentencia (o providencia) que condene al Estado a reparar patrimonialmente un daño antijurídico, ***situación que por sí sola implica que se deben negar las pretensiones de la demanda, en tanto ello tiene incidencia en la acreditación de los otros requisitos (...)"***[25] (Resalto).

De esta manera, se reitera lo establecido en el Artículo 173 del Código General del Proceso que establece el deber por parte de los jueces de *abstenerse de ordenar la*

[24]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Rad. 11001032600020030001901, Número interno 24953, C.P. Dra. Ruth Stella Correa.
[25] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sent. del 28 de febrero de 2011, Rad. 34.816. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

práctica de pruebas que directamente, o por medio del derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que la solicite.

VI. PRUEBAS

Ruego al Señor Juez, decretar y tener como pruebas de mi parte, las siguientes:

VI.1 Documental

a) **Aporto** poder original con que actúo.

b) **Se oficie**

1. A la Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso y con base en sus *archivos*, se informe sobre los documentos, si los hubiere, que sirvieron de soporte para la erogación del *gasto*, por concepto de las **cesantías** anuales **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde 1990 hasta el año 2003;

2. Al Fondo Nacional del Ahorro FNA, para que con destino al proceso, se informe sobre los documentos remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, soportando los depósitos efectuados por el mismo a favor de **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde 1990 hasta el año 2003;

3. A la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se informe y remita copia de las resoluciones por medio de las cuales el Ministro de Relaciones Exteriores delegó, como ordenadores del gasto, entre otros, lo que es hoy la Dirección Administrativa y Financiera, el *pago* al Fondo Nacional del Ahorro de los depósitos de cesantías anuales del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde 1990 hasta el año 2003

4. A la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se dé cuenta, individualizándolos de los demás funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quienes, como en este caso a la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** se ha demandado o dispuesto demandar en acción de repetición, por supuestamente haber omitido *notificar personalmente,* las cesantías anuales depositadas al Fondo Nacional del Ahorro, indicando los cargos y periodos por los que en cada caso se les llama a responder;

5. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se remita copia de las liquidaciones, **año por año**, de las cesantías de **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde 1990 hasta el año 2003 y

particularmente en el periodo ***desde el 21 de septiembre de 1992 hasta el 11 de abril de 1993,*** como dice la demanda, conciliadas por un total de **$133.148.564** cuyo monto se pretende repetir sin razón de proporcionalidad alguna, entre otros, en contra de la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ**.

Procura esta prueba establecer que los hechos u omisiones, en relación con el deber que se dice *supuestamente* tenía la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** de notificar a **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** las cesantías por el periodo desde 1990 hasta el año 2003 habría sido cuanto más, una política sistemática y generalizada del Ministerio de Relaciones Exteriores, generadora, como tal, de un *error communis facit ius*, imputable a la *propia culpa* de la entidad.

6. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores o a quien en su defecto, corresponda, (art. 21 CPACA) a fin de que con destino al proceso de cuenta del lugar donde el Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** se desempeñaba al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior, en los años desde **1990 hasta el año 2003** a los que corresponden el pago que se le hizo de las cesantías, por cuya cancelación se pretende repetir y se diga qué condiciones de traslado, si se encontraba en el exterior, tenían los demandados para notificarle personalmente allí las liquidaciones anuales de dicha prestación durante tales periodos, a que alude la demanda.

Con esta prueba pretendo demostrar la imposibilidad real que los demandados, y en este caso, la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** tenía para haber cumplido el deber que supuestamente tenían de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de las liquidaciones anuales de cesantías, encontrándose el mismo en el exterior, con mayor razón si esa era una condición extendida en todo el mundo, donde tenían asiento las distintas Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia.

7. A los siguientes Despachos Judiciales, para que a mi costa, y a fin de que por sus respectivas Secretarías se certifique la existencia de tales procesos instaurados por el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** en acciones de repetición, por la misma causa del que en este caso nos ocupa:

Pago realizado a:	Despacho Judicial	Radicado Proceso
Ignacio Enrique Ruiz	Consejo de Estado-Sección III-Sub B	**2014-00043-00**
Lilia Stella Cepeda Ulloa	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	**2014-00835-00**
Zaida Patricia Cristancho Guerrero	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	**2014-00841-00**
EDITH ANDRADE PAÉZ	J. 4° Admtivo de Descongestión	**2014-00004-00**
Fernando Alzate Donoso	J. 4° Admtivo de Descongestión	**2013-00440-00**
Enrique Antonio Celis Durán	J. 8° Administrativo del Circuito	**2013-00622-00**
Ana Cecilia Pulido Guerrero	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00026-00**
Francia Rodríguez Romero	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00065-00**

María del Pilar Gómez Valderrama	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00260-00**
Armando González Cortés	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00605-00**
Eduardo Casas Acosta	J. 16 Administrativo del Circuito	**2013-00599-00**
María Nelly Tascón Maya	J. 18 Administrativo del Circuito	**2013-00511-00**
María Eugenia Beltrán de Chaparro	J. 19 Administrativo del Circuito	**2013-00128-00**
Miguel Camilo Ruiz Blanco	J. 19 Admtivo Descongestión Cto	**2014-00200-00**
Janeth Victoria Truque Rivera	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00188-00**
Raul Arturo Rincón Ardila	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00037-00**
Henry Javier Arcos Muñoz	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00391-00**
Nidia Inés Aguirre Acevedo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00084-00**
María Inés Aldana Nieto	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00036-00**
Anyul Molina Suarez	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00211-00**
Mauricio Baquero Pardo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00268-00**
Álvaro Eugenio Márquez Sarmiento	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00183-00**
Marcela Rodríguez Velandia	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00238-00**
Cruz Elena Mosquera Monteros	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00009-00**
María Victoria Eugenia Senior Pava	J. 23 Administrativo del Circuito	**2013-00392-00**
Margarita Eliana Manjarrez Herrera	J. 26 Administrativo del Circuito	**2013-00535-00**
René Correa Rodríguez	J. 27 Administrativo del Circuito	**2013-00211-00**
Gladys Mireya Paéz Herrera	J. 27 Administrativo del Circuito	**2014-00314-00**
Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez	J. 30 Administrativo del Circuito	**2013-00597-00**
Alberto Bula Bohórquez	J. 30 Administrativo del Circuito	**2014-00071-00**
María Helena Pastrana Pastrana	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00092-00**
María Inés Herreño Pinto	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00111-00**
María Smith Rueda Centeno	J. 31 Administrativo del Circuito	**2013-00244-00**
Juan Norberto Colorado Correa	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00286-00**
Amparo Flórez López	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00479-00**
Álvaro Sandoval Bernal	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00304-00**
Alicia Alejandra Alfaro Castillo	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00387-00**
Pablo Antonio Rebolledo Schools	J. 32 Administrativo del Circuito	**2014-00118-00**
Alejandro Borda Rojas	J. 32 Administrativo del Circuito	**2013-00389-00**
Hector Montoya Añez	J. 32 Administrativo del Circuito	**2014-00153-00**
Carlos Rodríguez Bocanegra	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00316-00**
Miguel Ángel Rodríguez Melo	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00317-00**
Edwin Ostos Alfonso	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00383-00**
Mauricio González López	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00384-00**
Jaime Girón Duarte	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00430-00**
Nacianceno López Restrepo	J. 34 Administrativo del Circuito	**2013-00279-00**
Álvaro Enrique Ayala Meléndez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2013-00056-00**
Carmen Estavana Zapateiro B.	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00467-00**
Fernando Salavarrieta García	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00152-00**
Marcela Ordóñez Fernández	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**
Gilberto Poveda Rodríguez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00399-00**
Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi	J. 36 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**

Alfonso de Jesús Vélez Rivas	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00087-00**
Fabio Emel Pedraza Pérez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00115-00**
Ana del Socorro Bornacelli Guerrero	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00123-00**
Javier Darío Higuera Ángel	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00303-00**
Carlos Arturo Morales López	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00304-00**
Daniel Ávila Camacho	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00479-00**
José Antonio Solarte Gómez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00480-00**
Diego Felipe Cadena Montenegro	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00271-00**
Amalia Rodriguez Fuque	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00290-00**
Victoria Eugenia Olga Pauwles T.	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00268-00**
Blanca Stella Barrero Barrero	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00106-00**
María Consuelo Porras	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00117-00**
Concepción Concha Agudelo	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00446-00**

VI. 2 Testimonios

a) Respetuosamente solicito que se llame a declarar en audiencia en la fecha y hora que para tales efectos señale el Despacho, sobre los hechos y omisiones que sean de su conocimiento, en relación con el diligenciamiento, liquidaciones y pago al Fondo Nacional de Ahorro FNA, en materia de liquidaciones anuales de *cesantías*, al Señor **ABELARDO RAMÍREZ GASCA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19'054.598 de Bogotá, con domicilio en la Carrera 14 No. 109 – 79 Apartamento 301, Edificio Caminos del Parque, en Bogotá.

b) Así mismo, con el fin de que deponga sobre la ejecución presupuestal en materia de cesantías anuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y del traslado de las mismas al FNA, con ocasión del desempeño que tuvo a su cargo la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Doctora **ARAMINTA BELTRÁN URREGO**, Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No. 9-03, en Bogotá.

c) A quienes fungieron como miembros del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores para que depongan en relación con las razones que tuvieron en consideración para llevarlos a determinar que hubo *culpa grave*, y demandar en repetición a la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** cuando se desempeñó como *Jefe de Bienestar Social* del Ministerio de Relaciones Exteriores en los periodos reseñados en la demanda, (Acta No. 229 del 22 de julio de 2013), consistente en haber omitido el deber que *supuestamente* tenía, según la demanda, de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las liquidaciones anuales de las cesantías por valor de **$133.148.564** para cuyos efectos se le citará en el día y hora que señale su despacho, a través de la Dirección del Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de

Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No.9-03, en Bogotá y son:

1. Doctor EDWIN OSTOS ALFONSO, Director de Asuntos Jurídicos Internacionales (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

2. Doctor ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO, Director de Talento Humano; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

3. Doctora CLAUDIA LILIANA PERDOMO ESTRADA, Jefe Oficina Asesora Jurídica Interna (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

4. Doctora MARTHA RUBY CUÉLLAR CALDERÓN, Coordinadora Grupo Interno de Gestión; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

5. Doctora LUZ ANDREA CORREDOR ARTEAGA, Abogada Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

6. Doctora HELGA VELASQUEZ AFANADOR, Abogada Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

7. Doctor JORGE ENRIQUE BARRIOS SUÁREZ, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

8. Doctor HUGO ARMANDO GRANJA ARCE, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

9. Doctor ANDRES LEONARDO MENDOZA PAREDES, Secretario Técnico (E) del Comité de Conciliación; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

VII. COSTAS

Sean a cargo de la demandante, LA NACION –MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- incluyendo *agencias en derecho*, toda vez que es manifiesta la falta de

buena fe de dicha entidad al demandar en repetición a varios exfuncionarios, cuando no se cumplen a cabalidad todos los presupuestos establecidos de manera expresa por la Ley 678 de 2001 para el ejercicio de dicho medio de control, ya que en ningún caso existió una condena al Ministerio a reconocer una indemnización, sino que se le ordena efectuar la reliquidación de las cesantías, que es una prestación social de naturaleza laboral, en favor de un trabajadora por no habérsele incluido todos los factores salariales devengados en la planta externa, lo cual fue una política de dicho ministerio y no la decisión unilateral de los ahora demandados.

VIII. NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones, junto con mi representada la Doctora **EDITH ANDRADE PAÉZ** en la Secretaría de su Despacho; en mi oficina de la Carrera 15 No. 86A- 57 of. 501, teléfono 7027824, en Bogotá; y, a través de mi correo electrónico: cilinof@hotmail.com.

Señor Juez

Franklyn Liévano Fernández
C.C. No. 19.154.294 de Bogotá
T.P. No. 12.667 del C.S.J.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
El documento fue presentado personalmente por Franklyn Liévano Fernández
Quien se identificó C C No. 19'154'294
T P No. 12662 Bogotá D C. 12 MAY 2016
Responsable Centro de Servicios VHPP

651
34

Señor Juez
JUZGADO SESENTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA, D.C.
Sección Tercera
E. S. D.

Proceso : Ordinario

Naturaleza : **Repetición**

Radicado : **No. 11001333672220140010900**

Demandante : **LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**

Demandados : *CLARA INÈS VARGAS DE LOZADA y otros*

EDITH ANDRADE PÁEZ, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 41'747.996 de Bogotá, con domicilio temporal en la Paz, Bolivia, a usted respetuosamente manifiesto que por medio de este escrito confiero **Poder Especial**, amplio y suficiente al Doctor **FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ**, mayor y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501, teléfono 7027824, en la ciudad y correo electrónico: cilinof@hotmail.com, para que en mi nombre concurra, se **notifique** del *auto* admisorio de la demanda y me represente en este proceso hasta su terminación.

Mi apoderado dispondrá en el ejercicio de su gestión, de todas las facultades generales de ley, así como de las especiales de recibir, desistir, conciliar, transigir, sustituir y reasumir.

Ruego al Señor Juez reconocer y tener a mi apoderado en los términos de este escrito.

Del Señor Juez,

EDITH ANDRADE PÁEZ
C.C. No.41'747.996 de Bogotá

Acepto el poder conferido,

FRANKLYN LIÉVANO FERNÁNDEZ
C.C. No. 19'154.294 de Bogotá
T.P. No. 12.667 de C.S.J.

CONSULADO DE COLOMBIA
LA PAZ - BOLIVIA
RECONOCIMIENTO DE FIRMA
REC. DE FIRMA EN DOCUMENTO PRIVADO

En la ciudad de LA PAZ el 29 marzo 2016 08:02 PM compareció ante el cónsul: EDITH ANDRADE PAEZ identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 41747996, BOGOTA, quien manifestó que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas y que asume el contenido del mismo. Con destino a: AUTORIDADES COLOMBIANAS.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, no asume responsabilidad por el contenido del documento.

CONSULADO DE COLOMBIA
LA PAZ

Juan Manuel Vega Heredia
CONSUL DE COLOMBIA

Firma del Interesado

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA
JUAN MANUEL VEGA HEREDIA
ENCARGADO DE FUNCIONES CONSULARES
Firmado Digitalmente

D2-ÍNDICE DERECHO

Derechos	USD 23,00
FONDO ROTATORIO	USD 12,00
TIMBRE	USD 11,00

Fecha de Expedición: 29 marzo 2016

Impresión No.: 1

La autenticidad de este documento puede ser verificada en:
http://verificacion.cancilleria.gov.co
Código de Verificación.FDQDZD15241395

PROSPERIDAD PARA TODOS

Cancillería
Ministerio de Relaciones Exteriores

DITH No. 0774

EL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CERTIFICA:

Que revisada la historia laboral de la doctora EDITH ANDRADE PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 41.747.996, se pudo constatar que ingresó al servicio de este Ministerio el 16 de julio de 1980 y actualmente desempeña el cargo de Ministro Plenipotenciario, código 0074, grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia en el Gobierno de Guatemala.

Que los cargos desempeñados en la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores por parte de la doctora ANDRADE PAEZ, son los descritos a continuación:

Mediante Resolución No. 1328 BIS del 3 de junio de 1980, se nombró en el cargo de Ayudante de Oficina, código 5155, grado 07, de la Sección de Registro y Despacho de Correspondencia de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos. Tomó posesión el 16 de julio de 1980 y lo desempeñó hasta el 29 de enero de 1981.

Mediante Resolución No. 149 del 29 de enero de 1981, se promovió al cargo de Secretario, código 5140 – grado 10 de la División de Fronteras. Tomó posesión el 30 de enero de 1981 y lo desempeñó hasta el 30 de junio de 1982.

Mediante Resolución No. 1572 del 30 de junio de 1982, se trasladó al cargo de Secretario, código 5140 – grado 10 de la Sección de Servicios Generales de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos. Tomó posesión el 1º de julio de 1982 y lo desempeñó hasta el 30 de noviembre de 1983.

Mediante Resolución No. 2675 del 30 de noviembre de 1983, se incorporó al cargo de Auxiliar Administrativo, código 5120, grado 11, de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos. Tomó posesión el 1º de diciembre de 1983 y lo desempeñó hasta el 3 de diciembre de 1984.

Mediante Resolución No. 2672 del 30 de noviembre de 1984, se nombró en el cargo de Secretario Ejecutivo, código 5040 – grado 13 de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos. Tomó posesión el 4 de diciembre de 1984 y lo desempeñó hasta el 30 de marzo de 1987.

Mediante Resolución No. 0490 del 19 de marzo de 1987, se ascendió al cargo de Profesional Universitario, código 3020 – grado 04 de la Sección de Personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos. Tomó posesión el 31 de marzo de 1987 y lo desempeñó hasta el 21 de agosto de 1988.

Mediante Decreto No. 584 del 4 de abril de 1988, se nombró en el cargo de Vicecónsul, Grado Ocupacional 1 EX, en el Consulado General de Colombia en Toronto – Canadá. Tomó posesión el 22 de agosto de 1988 y lo desempeñó hasta el 3 de agosto de 1992.

Mediante Decreto No. 790 del 20 de mayo de 1992, se nombró en el cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, código 3056, grado 06. Tomó posesión el 4 de agosto de 1992 y lo desempeñó hasta el 27 de abril de 1993.

Mediante Resolución No. 0967 del 21 de abril de 1993, se incorporó en el cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, código 3056, grado 06. Tomó posesión el 28 de abril de 1993 y lo desempeñó hasta el 3 de enero de 1995.

Mediante Decreto No. 2269 del 6 de octubre de 1994, se nombró en el cargo de Primer Secretario, Grado Ocupacional 3 EX, en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de España. Tomó posesión el 4 de enero de 1995 y lo desempeñó hasta el 10 de abril de 1997.

Mediante Decreto No. 202 del 30 de enero de 1997, se trasladó al cargo de Primer Secretario, Grado Ocupacional 3 EX, en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Ecuador. Tomó posesión el 11 de abril de 1997 y lo desempeñó hasta el 10 de enero de 2000.

Mediante Decreto No. 095 del 13 de enero de 1999, se trasladó al cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 3055, grado 16, de la planta global. Tomó posesión el 11 de enero de 2000 y lo desempeñó hasta el 31 de enero de 2001.

Mediante Resolución No. 0308 del 31 de enero de 2001, se comisionó al cargo de Asesor, código 1020, grado 04, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tomó posesión el 1° de febrero de 2001 y lo desempeñó hasta el 29 de noviembre de 2001.

Mediante Resolución No. 5357 del 29 de noviembre de 2001, se incorporó al cargo de Asesor, código 1020, grado 04, de la planta global del Ministerio de Relaciones

Cancillería
Ministerio de Relaciones Exteriores

PROSPERIDAD PARA TODOS

Exteriores. Tomó posesión el 30 de noviembre de 2001 y lo desempeñó hasta el 31 de julio de 2003.

Mediante Decreto No. 1373 del 28 de mayo de 2003, se trasladó al cargo de Consejero, Grado Ocupacional 4 EX, en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Brasil. Tomó posesión el 1º de agosto de 2003 y lo desempeñó hasta el 10 de febrero de 2008.

Mediante Decreto No. 4589 del 27 de noviembre de 2007, se trasladó al cargo de Ministro Consejero, código 2142, grado 18, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tomó posesión el 11 de febrero de 2008 y lo desempeñó hasta el 17 de septiembre de 2009.

Mediante Resolución No. 4028 del 16 de septiembre de 2009, se incorporó al cargo de Ministro Consejero, código 1014, grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Primera Dirección Geográfica de América. Tomó posesión el 18 de septiembre de 2009 y lo desempeñó hasta el 5 de febrero de 2012.

Mediante Decreto No. 4520 del 29 de noviembre 2011, se trasladó al cargo de Ministro Consejero, código 1014, grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Guatemala. Tomó posesión el 6 de febrero de 2012 y lo desempeñó hasta el 1º de mayo de 2012.

Mediante Decreto No. 0757 del 16 de abril de 2012, se trasladó al cargo de Ministro Plenipotenciario, código 0074, grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Guatemala. Tomó posesión el 2 de mayo de 2012 y lo desempeña actualmente.

La presente certificación se expide a solicitud de la interesada a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil trece (2013).

ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO

JAGR / NDS / LECT

Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos
Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez
PBX 3814000 – Fax 3814747
www.cancilleria.gov.co – contactenos@cancilleria.gov.co
Bogotá D.C., Colombia Sur América

655

Franklyn Liévano Fernández [1]

DOCTOR EN DERECHO

Señor Juez
JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - Sección Tercera
E. S. D.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2016 MAR 5 PM 4:00 OFICINA DE APOYO JUZGADOS ADMINISTRATIVOS

Proceso	:	Ordinario
Naturaleza	:	**Repetición**
Asunto	:	***Contestación de demanda***
Radicado	:	**No. 110013336722-2014-00109-00**
Demandante	:	**LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**
Demandados	:	CLARA INES VARGAS SILVA *y otros* -Hernando Leyva Varón, Hilda Stella Caballero Ramírez, Aura Patricia Pardo Moreno, Luis Miguel Domínguez García, Leonor Barreto Diaz, Juan Antonio Liévano Rangel, María Hortensia Colmenares Facinni , **OVIDIO HELI GONZÀLEZ**, Rodrigo Suarez Giraldo ,María del Pilar Rubio Talero, Patricia Rojas Rubio,Ituca Helena Marrugo Pérez, Edith Andrade Páez, y Miriam Consuelo Ramírez Vargas-,

FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ, mayor y vecino de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la ciudad en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501 teléfono 7027824, con correo electrónico: cilinof@hotmail.com, obrando conforme al Poder Especial adjunto, en nombre y representación del Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ**, mayor y vecino de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.312.754, con domicilio en la ciudad de Bogotá, respetuosamente **me notifico por conducta concluyente**[1] y doy ***contestación*** en oportunidad, como sigue, a la demanda que dentro de este proceso se le formula:

I. En cuanto a las PRETENSIONES

ME OPONGO a todas y cada una de ellas, conforme a las excepciones y las razones de la defensa que en lo fáctico, así como en lo jurídico, expondré a continuación:

[1] Art. 330 del C.P.C.

A la ***PRIMERA***: Porque es engañosa la hipótesis de asumir como fundamento de la acción, que no se hubiere generado el pago realizado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, si el Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** le hubiere personalmente *notificado* las liquidaciones anuales, año por año, de sus cesantías de los períodos de sus servicios en el exterior, desde **1990 hasta el año 2003** pues al **Acuerdo Conciliatorio del 29 de marzo de 2012 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"**, se llegó en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005,** que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, originándose así la obligación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de reajustar la liquidación de las cesantías de los funcionarios que prestaron sus servicios en el exterior con base en los salarios reales y no sobre sumas inferiores de otros cargos en los que el funcionario no se desempeñó, dando lugar a lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores en tal virtud pagó.

Además es falsa la afirmación en virtud de la cual se impidió que operará la prescripción trienal los derechos laborales, por la omisión de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** toda vez que dicho término prescriptivo sólo puede computarse a partir del *retiro definitivo* del empleado.

A la ***SEGUNDA***: *"(...) Que se condene a..."*, entre otros, a mi representada al *pago y reparación* de la suma de **$133.148.564** que el Ministerio pagó en virtud del **Acuerdo Conciliatorio celebrado ante la Procuraduría 84 Judicial I**, reseñado en el proceso, puesto que la acción de repetición a voces del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, tiene por objeto la recuperación de lo pagado por el estado **exclusivamente** por concepto de un ***reconocimiento indemnizatorio***, que aquí, no existe (¡) porque dicha suma, el Ministerio de Relaciones Exteriores los pagó, en este caso a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** por reajuste de **CESANTÍAS**, en virtud de la relación laboral habida entre los mismos en los periodos de sus servicios en el exterior que reseña la demanda y lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005.

En efecto, cabe distinguir que lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en virtud del **Acuerdo Conciliatorio** tiene su causa en el restablecimiento del derecho subjetivo del mismo, amparado en una norma jurídica cual es la Ley 6ª de 1945 que establece el derecho a las cesantías y en lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005, que es lo que aquí se ha traído al proceso, en apoyo de la acción de repetición, cuando ésta ha de tener su apoyo en una sentencia o conciliación previa respecto a un reconocimiento indemnizatorio, que se diga, como aquí se expone, producido por la acción u omisión de los agentes del Estado (art. 140 CPACA), de donde es imperativo echar de menos el presupuesto *objetivo* para la acción de repetición, consistente en una sentencia o conciliación de un reconocimiento indemnizatorio, por su naturaleza antijurídico. Esto es lo opuesto

integral y absolutamente al presupuesto esgrimido por la demandante como pie de la acción.

A la ***TERCERA***: Que se *declare* que el Acuerdo Conciliatorio aprobado por el **Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"** existe una *obligación clara, expresa y actualmente exigible, que presta mérito ejecutivo,* con remisión al artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, para efectos del cobro *coactivo* de una obligación, conforme a las prescripciones del artículo 488 del CPC sobre títulos ejecutivos (Actual 422 C.G.P), dicha pretensión difiere del medio de control de repetición, el cual busca la declaratoria de responsabilidad de un servidor o ex servidor público, quien debido a su conducta dolosa o gravemente culposa conllevó a que el Estado se viera en la obligación de reconocer una suma de dinero. Ahora bien, el **Acuerdo Conciliatorio** reúne en sí mismo los requisitos del título ejecutivo, con lo cual presta mérito ejecutivo únicamente en favor del beneficiario del pago, esto es, del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

A la ***CUARTA***: Sobre la pretensión del pago de intereses, no existe causa legítima para derivarlos, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraba en el deber legal de liquidar y pagar las cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, dada la relación laboral habida entre los mismos.

A la ***QUINTA:*** En cuanto a la pretensión de condena en costas a mi representada, puesto que ha de ser la NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, quien debe salir al pago a favor del mismo, por ser esta acción un ostensible abuso del derecho a litigar.

II. Sobre los HECHOS

Al hecho ***PRIMERO***: No es un hecho. Se trata de la cita de una normativa legal y al respecto me remito a la vigencia de las mismas en el tiempo.

Al hecho ***SEGUNDO***: Distingo entre la cita que se hace de normas legales, de una parte, y la interpretación interesada que se hace de las mismas para el señalamiento de obligaciones funcionales de mi representado el Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ**entre las cuales la que se le endilga del deber de *"(...) liquidar y notificar personalmente el auxilio de cesantías..."*, pues el funcionario que desempeña las funciones en planta interna no puede hacerlo coetáneamente en la planta externa, como lo reseña la demanda.

Al hecho ***TERCERO***: No me consta. No obstante que se pruebe, pues el periodo en el cual mi representado fungió como *Coordinador de Prestaciones Sociales- Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales* ninguna relación tuvo respecto de los funcionarios que, como la Señora **ANGELA MARÍA CORREA**

MORENO, prestaron sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al hecho ***CUARTO***: No me consta. Mi representado ha sido completamente ajeno al trámite de petición de reliquidación de cesantías ejercido por **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.** No obstante, es menester advertir desde ya la inconsecuencia del Ministerio al negar la pretensión de reliquidación de cesantías mediante el derecho de petición radicado para conciliar posteriormente y de manera inconsecuente el pago de las diferencias de las cesantías originadas en el exterior.

Al hecho ***QUINTO***: No es un hecho atribuible a mí representado, el doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ,** pues como se ha indicado, no tenía el deber de notificar personalmente los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el exterior.

Al hecho ***SEXTO***: No me consta y deberá probarse. El trámite de audiencia de conciliación extrajudicial fue entre la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, con quien fuera su empleador, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adviértase que el Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo la oportunidad de reliquidar las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia C-535-2005, optó por denegar las peticiones formuladas por el peticionario para posteriormente y de manera inconsecuente, aceptarlas en Audiencia de Conciliación.

Al hecho **SÉPTIMO:** No me consta y deberá probarse. El trámite de conciliación surtido fue exclusivamente entre empleador y empleado y ninguna participación tuvo mi representado, el doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ.**

Al hecho ***OCTAVO***: No me consta el trámite de pago que enuncia el Ministerio. Cualquier actuación surtida se dio en virtud de la relación laboral habida entre estos.

Al hecho ***NOVENO:*** No obstante la multiplicidad de hechos, difiero, pues dentro de las funciones que atribuye el artículo 19 del Decreto 1716 de 2009, a los Comités de Conciliación NO le es dada la facultad o competencia para determinar la culpa grave o dolo en las actuaciones de alguno de sus funcionarios y menos aún decidir *"(...) en forma unánime...* como se hizo, en cuanto a la responsabilidad que se le endilga, dice que tenía mi representado, el Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ**.

Además, La función de notificar los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el *exterior* no se encuentra establecida de manera alguna en el Manual Descriptivo de Funciones y Requisitos (Resolución 0033 de 1994), ni en el Decreto 2126 de 1992.

Al hecho **DECIMO**: No es un hecho. Me atengo a la normatividad legal y su vigencia en el tiempo, pero sí es del caso señalar que los Comités de Conciliación son órganos consultivos y de asistencia, que si bien tiene la facultad de decidir cuando deba instaurarse una acción de repetición, no la tienen para hacerlo en relación con la

declaratoria de responsabilidad administrativa y disciplinaria de los funcionarios de las entidades y eventual sobre el grado de culpa o dolo en la conducta de algún funcionario. En este caso del Ministerio de Relaciones Exteriores.

II. RAZONES DE LA DEFENSA

a) El **Acuerdo Conciliatorio** celebrado a instancias de la **Procuraduría 84 Judicial I** para Asuntos Administrativos tuvo por objeto el reconocimiento y pago de las diferencias del auxilio de cesantías que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como **empleador,** debía a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por diferencias en la liquidación de dicha prestación, practicada sobre sumas inferiores a los salarios reales que el mismo devengó desde **1990 hasta el año 2003** cuando ha laborado para el mismo en el exterior.

Pago que tuvo como fundamento legal, el vínculo laboral existente entre el Ministerio y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, generador de dicha prestación conforme a lo establecido en la Ley 6 de 1945, artículo 17 y lo declarado por la Corte Constitucional en la Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y mucho antes, en la Sentencia T-1016 de 2000, que evidencian la condición *inconstitucional* de las prácticas anteriores que al respecto tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores.

b) Se pretende, inmerso irregularmente bajo este medio de control judicial, que se avance en un juicio de declaratoria y condena de condena por la ***responsabilidad*** que se les endilga a mi representado, el Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** por haber supuestamente omitido el deber –si lo tenía-, de notificar personalmente las liquidaciones *anuales* del auxilio de cesantías desde **1990 hasta el año 2003** desconociéndose que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental al debido proceso, garantiza que ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa***.

Para el caso, el anterior Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 184, que rigió hasta el 1º de julio de 2012, cuando entró en vigencia la ley 1437 de 2011. Así como la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, conforme a la cual: *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...."* (Artículo 5º).

c) Tanto por lo establecido por el anterior Código Contencioso Administrativo C.C.A., preexistente a la conducta que se le endilga a mi representado el Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** la acción para la eventual responsabilidad, en ese caso *conexa* con la entidad, caducó conforme al artículo 136 del C.C.A, dos años después de la presunta omisión del deber, si lo tenía. A la vez prescribió, cinco (5) años después la disciplinaria (art. 34 ley 200 de 1995), transcurrido como lo han sido **más de trece (13) años,**

contados a partir de la última presunta omisión que se les imputa y se retrotrae a la liquidación anual de cesantías del año **2003**.

d) La demanda, como está visto, no tiene como materia la restitución de lo pagado por un reconocimiento *indemnizatorio* -que no lo ha habido-, sino la recuperación para el Ministerio de lo que debía y pagó por ajuste de cesantías generadas en la vinculación laboral que establece la Ley 6 de 1945 y de conformidad con los términos fijados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y excluyen también, cualquier supuesto de la afectación del Ministerio de Relaciones Exteriores como empleador de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por un "daño antijurídico".

e) El Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** no fue convocado, ni citado como tercero, ni oído a ningún título, que le permitiera que le permitiera ejercer su derecho de contradicción, aportación y discusión de pruebas y defensa dentro del proceso de **Conciliación surtido en la Procuraduría 84 Judicial I el 29 de marzo de 2012.** Tampoco ante el Comité de Conciliación y Defensa del Ministerio de Relaciones, que se pronunció y decidió que se entablara la acción por supuestamente haber incurrido aquél en la omisión del presunto deber de notificar personalmente las cesantías de esta última desde **1990 hasta el año 2003** sin ninguna facultad, el Comité, para hacerlo en lugar de la autoridad disciplinaria correspondiente y sin las garantías del debido proceso

f) Colíguese de todo lo anteriormente expuesto, que no resulta legítimo el empleo de este medio de control judicial sobre la materia propuesta (art. 169 -núm. 3°-, Ley 1437 de 2011).

IV. De las EXCEPCIONES

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

A. EXCEPCIONES PREVIAS

1. Falta de competencia

Conforme lo establece el **artículo 7º** de la **Ley 678 de 2001**, de la acción de repetición conocerá de acuerdo con las reglas de competencia, el **juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial** contra el Estado y, si la reparación patrimonial impuesta al mismo tiene origen en una **conciliación** o cualquier otra forma establecida en la ley para la solución de conflictos, es competente el **juez o tribunal que haya aprobado el respectivo acuerdo**.

En este caso, el pago que se pretende repetir, proviene del **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012** y aprobado por el **Tribunal Administrativo de**

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F". En consecuencia, El Tribunal Administrativo de Cundinamarca es el **competente** para conocer de esta acción.

En efecto, según la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, la competencia en razón al factor de ***conexión*** es prevalente por ser especial y en este caso se trata de la consagrada por la ley 678 en su artículo 7º respecto de la acción de repetición. No obstante, lo establecido aun siendo posterior, por el artículo 155 del C.P.A.C.A. en razón a la cuantía.

Dijo, pues, el Consejo de Estado:

> *"Para efectos de la competencia en acciones de repetición el artículo 7º de la Ley 678, establece como premisas: la preexistencia de una sentencia condenatoria al Estado y por ende el trámite de un proceso previo ante la jurisdicción de lo contencioso; sin embargo en hipótesis distintas, es decir, cuando no existe un proceso previo y la reparación se hubiese originado en una conciliación u otra forma autorizada por la ley, conocerán el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo. Cuando no medie aprobación judicial conocerá el jue que ejerza jurisdicción en el territorio donde se celebró el acuerdo. De igual forma existen otros eventos por fuera de los presupuestos del artículo 7º, es decir sin condena previa en la jurisdicción contenciosa, tales como: condenas en la jurisdicción ordinaria en materia laboral a favor de trabajadores oficiales, condenas al Estado Colombiano en tribunales de arbitramento, o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc.; casos en los cuales se aplicarán plenamente las reglas de competencia previstas en el Código Contencioso Administrativo (...)" (Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación 11001-03-15-000-2007-00433(c) Consejero Ponente: MAURICIO TORRESCUERVO, once (11) de diciembre de dos mil siete (2007)*

Precisamente, el Doctor **JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ**, en su obra "El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo" de Ediciones Doctrina y Ley LTDA 2014, resume así el tema:

> *"La incompatibilidad entre la conexidad y la cuantía ya fue resuelta por la sala plena del Consejo de Estado, dando prelación a la conexidad para determinar el juez natural de la repetición.*
>
> *No se desconoce que el nuevo código es posterior, pero en materia de aplicación de las reglas de hermenéutica jurídica, el artículo 5 de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad de la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.*
>
> *De lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor*

especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, por lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario al de una norma anterior resulta ésta derogada, pues deberá tenerse en cuenta criterio de la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3 de la Ley 153 de 1887 y 5 de la Ley 57 del mismo año.

Por último, no puede perderse de vista, que el legislador en el momento establecer los fueros de competencia para cada uno de los medios de control, no realizó ninguna precisión frente al medio de control de repetición, teniendo en cuenta que, la competencia ya estaba prevista en la Ley 678 de 2001.

Se quiere significar con lo anterior, que toda vez que el, C.P.A.C.A. no derogó de manera expresa la competencia establecida en la Ley 678 de 2001, esta disposición se encuentra vigente y teniendo en cuenta la especialidad de esta norma respecto de la acción de repetición, se debe aplicar la conexidad a fin de establecer el juez natural de la pretensión de repetición y no el factor cuantía". (pag. 170)

2. Caducidad de la acción declarativa de responsabilidad

El **artículo 29 de la Constitución Política** garantiza el derecho fundamental del *debido proceso*.

En tal virtud nadie puede ser juzgado ni condenado sino conforme a las leyes preexistentes a la conducta que se les imputa.

En este caso, se pretende la declaratoria de responsabilidad y subsiguiente condena a el Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** por supuestamente haber omitido el deber –que no tenía, de notificar personalmente y no lo hiciera, a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** las liquidaciones anuales de sus cesantías en los períodos en los que éste prestó sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores ***en el exterior*** y se remontan desde **1990 hasta el año 2003**

Más aún, abarca lo que se pretende repetir, lo pagado a dicho exfuncionario en los períodos de **1990 hasta el año 2003** períodos éstos, -todos- durante los cuales rigió el Código Contencioso Administrativo promulgado por el **Decreto Ley 01 de 1984,** que lo fue hasta el **1º de julio de 2012**, con la entrada en vigencia, el 2 de julio del mismo año, de la Ley 1437 de 2011, *"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".*

En este orden, la acción de responsabilidad de los funcionarios por los eventuales daños antijurídicos causados por culpa grave o dolosa en el desempeño de sus funciones (artículos 77 C.C.A.) en conexidad con la entidad (art. 78 C.C.A.), **caducó** a los **dos (2) años** de la presunta *omisión* (art. 136 ibídem)

Y sea del caso prevenir que otra es, por supuesto, la *caducidad* de la acción en cuanto a la *condena* sobre repetir lo pagado, que corre a partir del pago (Ley 1437 de 2011, art. 142) la cual, legal y constitucionalmente puede arrastrar la primera, si bien cabe lógicamente derivar de la responsabilidad la *condena* no así lo contrario, cuando aquélla no ha emanado del juicio previo y correspondiente, con las plenas garantías del *debido proceso* y dentro de la oportunidad fijada en la ley preexistente a la conducta imputada.

3. Inepta demanda

a) Por indebida acumulación de *pretensiones*

Se pretende bajo una misma cuerda, por el medio de control de repetición, que al Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** se la declare administrativamente responsable y se la condene a reembolsar al Ministerio de Relaciones Exteriores lo que éste, en cumplimiento de la **Sentencia C-535 de 2005**, pagó a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** por ajuste de cesantías de los períodos que esta laboró en el exterior, **desde 1990 hasta el año 2003** cuando aquél se desempeñó como *Coordinador de Prestaciones Sociales - Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales* entre el **desde el 7 de febrero de 1994, 3 de enero de 1994, 2 de febrero de 1998** regía el Decreto Ley 01 de 1984 por el cual se expidió el anterior Código de lo Contencioso Administrativo, vigente hasta el 1º de julio de 2012, al que precedió la Ley 13 de 1984, subrogado por el Decreto Ley 2400 de 1998 y regía también, en materia disciplinaria, la Ley 25 de 1974 -Orgánica de la Procuraduría General- y su Decreto Reglamentario 3404 de 1983, parcialmente modificada y adicionada por la misma Ley 13 de 1984 y el mismo Decreto Ley 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, de manera que a la luz de lo establecido por el artículo 29 de la Constitución Política al Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** no cabe enjuiciarla bajo el actual CPACA que rige en cuanto a la repetición y, en consecuencia no procede la acumulación, pues a voces del art. 165 del CPACA se exige que tanto lo relativo a la declaratoria de responsabilidad como la condena a reembolsar lo pagado, puedan enjuiciarse bajo la misma normativa.

De acuerdo al artículo 29 de la Constitución, ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y como está visto, las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que supuestamente el Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** no le notificó personalmente cuando esta fungía como *Coordinador de Prestaciones Sociales- Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales* **desde el 7 de febrero de 1994, 3 de enero de 1994, 2 de**

febrero de 1998, se remonta a los años de **1993, 1994,1997** y no pueden juzgarse sino a la luz de las normas preexistentes a dichas presuntas omisiones en los años de **1993**- hace 23 años-, **1994-** Hace 22 años, **1998- Hace 18 años,** entre otras cosas, caducadas y prescritas pues según la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, vigente para la época de las conductas que al Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** se endilgan, *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...."* (Artículo 5º).

Así, pues, la presunta responsabilidad que se le endilga al Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** no es susceptible de enjuiciarse ***sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y no por este medio de control, sin campo alguno para pronunciarse legítimamente sobre una disposición de orden constitucional como la impartida en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005** que dio lugar al pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores le hizo en virtud del Acuerdo Conciliatorio celebrado.

De otra parte, según lo expuesto por el artículo 136 del C.C.A. preexistente a la conducta que se le endilga al Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** la acción para derivar una eventual responsabilidad suya en el pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso hizo, caducó dos años después de la presunta omisión que se le endilga y también prescribió a los cinco (5) años la acción disciplinaria propia para definirla (art. 34 ley 200 de 1995), cuando han transcurrido desde entonces **no menos de trece (13) años y hasta veinticuatro años (24).**

Además, es infundada y falaz la afirmación que de haberse notificado aquéllas liquidaciones anuales de cesantías, que en el proceso ni siquiera se conocen, hubiera prescrito la acción o caducado el derecho de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** puesto que la posibilidad de demandar nace desde el momento en que la Administración, al **retiro del servidor** no hace entrega de la suma correspondiente a este concepto, es decir omite el cumplimiento de su obligación.[2]

B. EXCEPCIONES DE FONDO

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

a. *Ineptitud sustantiva de la demanda;*

---

[2] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de septiembre de 2011 radicado interno (2005-2009).

b. *Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad.*
c. *Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición;*
d. *Ilegitimidad de personería por pasiva;*
e. *Inexistencia de nexo causal;*
f. *Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación;*
g. *Inexistencia de daño antijurídico;*
h. *Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso;*
i. *Falta de legitimación en la causa por pasiva;*
j. *Abuso del derecho; e,*
k. *Ilegitimidad del derecho sustantivo.*

EXPOSICIÓN DE LAS EXCEPCIONES DE FONDO

a. ***Ineptitud sustantiva de la demanda***

Derivada ésta del desconocimiento de las garantías constitucionales del derecho fundamental al *debido proceso*[3] a NO *"(...) ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (...) y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio..."*, pues fuerza distinguir en el proceso lo que atañe a la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial del demandado, el Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** como se pretende y lo que concierne a la eventual condena a retribuir lo pagado.

A lo primero, indiscutiblemente corresponde la aplicación de las normas preexistentes a la supuesta conducta omisiva de los implicados, del deber –si lo tenían-, de notificar personalmente a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** ***año por año***[4], *las liquidaciones anuales* de sus cesantías, causadas en los años de **1990-** Hace 26 años, **1991-** Hace 25 años **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años-, durante los cuales laboró al servicio del Ministerio de Relaciones en **el exterior,** pues rigió desde el **1º de marzo de 1984**[5] hasta el **1º de julio de 2012**[6], el Decreto Ley 01 de 1984 que reformó el Código Contencioso Administrativo[7] anterior.

---

[3] Art. 29 C.P.
[4] Decreto 3118 de 1968 *"Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantías de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, reorganizado por la Ley 432 de 1998"*.
[5] Diario Oficial 36.439 del 10 de enero de 1984.
[6] Fecha de entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 "por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
[7] Ley 167 de 1941

Ahora bien, a efectos de derivar la responsabilidad que correspondiera a los funcionarios aquí implicados para la época en que supuestamente omitieron el deber, -si lo tenían-, de notificar personalmente las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** causadas en los años de **1990**- Hace 26 años-, **1991-** Hace 25 años-, **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994-** Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años-, el **artículo 78** del Decreto Ley 01 de 1984, vigente en esos años, permitió que fueran demandados, en conexidad con la entidad pública, los funcionarios responsables de culpa grave o dolo en ejercicio de sus funciones, que le fueren generados a terceros (art. 77 *ibídem*), conforme a las reglas generales de los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, de ser así, fuera la misma la sentencia que dispusiera que el funcionario responsable satisficiera los perjuicios ocasionados a la Entidad, repitiendo contra el mismo lo pagado, para lo cual el término para hacerlo era de "***(2) dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa...***" establecido para las acciones de su género.

En cuanto a lo segundo, aspecto propio de la ritualidad de los procesos, es claro, que al tipo de acción incoada ha de dársele el trámite del medio de control judicial de repetición, sin que por ello pueda legitimarse a accionar, como se proponen, frente a los demandados en procura de una declaratoria de responsabilidad que caducó y sustrae al juez de proveer legítimamente al respecto, hoy décadas después de acontecido el supuesto incumplimiento del deber, si lo tenía, que a los demandados se les endilga, que en ese tiempo no cumplieron, válido, el demandante, que hoy el término para el medio de control de repetición caduca a *partir del pago,* y baste ésa consideración para traer ahora a este juicio a los demandados quebrantándoles todas las garantías constitucionales al debido proceso.

De ahí que, la demanda adolezca de la actitud sustantiva para derivar una condena en contra de los demandados, habiendo caducado como está visto cualquier acción encaminada a la declaratoria de la responsabilidad administrativa y patrimonial de los demandados por hechos que se remontan, como ya ha quedado visto, entre **trece (13) y veintiséis (26) años atrás**, enmarcados dentro de un ordenamiento legal preexistente y también, por supuesto, más favorable[8].

Descendiendo a la demanda, ésta se apoya en una sentencia en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores fue condenado a restablecer los derechos que por su parte le vulneró a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** con el reconocimiento y pago que le había hecho de las cesantías causadas a su favor durante los períodos de sus servicios al mismo **en el exterior**, en los años en que desempeñó el cargo referido del Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** basándose en sumas inferiores a los salarios reales que el ex funcionario devengó, debiendo en consecuencia, re-liquidarle dicha prestación, conforme a lo ordenado en la Sentencia C-535 de 2005, que declaró

[8] Art. 53 C.P.

inexequible el artículo 57 del Decreto Legislativo 10 de 1992, que el Ministerio siguió aplicando, no obstante su derogatoria con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993[9] y posteriormente la Ley 797 de 2003, de ninguna manera vinculante con los demandados, quienes son totalmente ajenos a las prácticas entronizadas en ese orden por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de donde se deriva el pago que por concepto de reliquidación de dichas cesantías, debió atender y **no del reconocimiento de una indemnización ocasionado por un daño antijurídico** que fuera imputable como se formula, a los demandados.

Es claro entonces, que no existe sentencia alguna de condena al pago a una indemnización que vincule a los demandados o que lo hubiese vinculado, conforme a las previsiones de los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984, ni pueda hacerlo ahora, lo cual conduce a la imposibilidad jurídica de despachar la demanda dada y, en consecuencia, la ineptitud sustantiva de la misma.

b. *Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad*

Siguiendo al tratadista *Bonnard,* quien participando de las mismas ideas de Deguit en materia de responsabilidad administrativa, lo que se advierte es una "falta de la administración" y la jurisprudencia ha advertido de *la responsabilidad* basada en una irregularidad de la actividad administrativa. Así, *"(...) Se ha deducido que la responsabilidad del patrimonio público surge cuando el daño resulta de una mala organización o de un funcionamiento defectuoso del servicio, y es, sin que sea necesario que en esa mala organización o defectuoso funcionamiento haya culpa de parte de un agente administrativo. Esto es lo que constituye la llamada culpa del servicio público, así denominada para indicar "que no hay culpa individualizada de un agente administrativo", sino solamente una irregularidad de origen anónimo y de aspecto objetivo en la organización y en el funcionamiento del servicio."*[10]

Y, como aquí se advierte la falta de la notificación personal de las liquidaciones anuales de cesantías a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores **en el exterior**, no fue, -está visto- un hecho aislado, sino que corresponde a una condición propia de un defectuoso servicio público de la entidad a falta de una regulación y apremios del orden de conformación y asignación de actividades puntuales, cuya omisión no cabe, pues, imputar individualmente a uno u otro funcionario con remisión a normas generales, sino que es más bien producto anónimo del funcionamiento de la Entidad, generador cuando menos de un ***error communis facit ius***[11] o, que hace derecho

---

[9] T-1016 de 2000, Sentencia C-173 de 2004
[10] SARRIA B, Eustorgio y Mauricio. *Derecho Administrativo.* Editorial Pluma. Págs. 245 y 246
[11] Conc. artículo 8°. Ley 153 de 1887

Por otra parte, cabe señalar que de tiempo atrás la jurisprudencia ha establecido los requisitos para dar aplicación a la "doctrina del error común creador de derechos" o teoría de la apariencia[12], a saber:

1. *"Debe existir una situación que realmente sea contraria a la normatividad, pero oculta, es decir, (...) ajena en su etiología y desarrollo a quien eventualmente resultare perjudicado con la apariencia de juridicidad (...)*
2. *Que esa situación de apariencia de legalidad esté respaldada en hechos, situaciones o documentos cuyo vicio no sea posible advertir con diligencia y cuidado.*
3. *Que la conducta de quien resultó perjudicado con la situación de aparente legalidad esté respaldada por una buena fe del particular (...)*
4. *Que la situación no esté regulada expresamente por una ley imperativa que imponga soluciones diferentes a las que resultarían de la aplicación de la doctrina".*

c. <u>Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición</u>

El Artículo 90 de la Constitución Nacional establece que:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este."

Adviértase la inexistencia de una condena o conciliación al Estado en la que conste la indemnización por la ocurrencia de un ***daño antijurídico,*** producto de la conducta dolosa o gravemente culposa imputable a mí representada, el doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ**.

Lo que ha traído el Ministerio como fundamento para sustentar la pretensión de repetición es una Conciliación que obliga a la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores a pagar a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las diferencias de cesantías originadas durante el tiempo en que aquel prestó sus servicios en el exterior, atendiendo lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 535-2005.

Así las cosas, el **Acuerdo Conciliatorio** tiene como fundamento el cumplimiento de una Sentencia de la Corte Constitucional - no de la ocurrencia de un daño antijurídico - elemento necesario para que se pueda predicar la procedencia de la acción de repetición. Asimismo, el pago efectuado corresponde al reajuste de cesantías que el

[12] Al respecto se puede consultar la Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 3 de agosto de 1983, M.P. Dr. Jorge Salcedo Segura.

Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** durante el tiempo en que esta prestó sus servicios en el exterior. De allí que tampoco pueda derivarse que el pago efectuado por el Ministerio haya sido en calidad de indemnización, como bien lo exige el Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.

Por otra parte, la **Ley 678 de 2001** *"Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.",* estableció la **acción de repetición** con el fin de restituir al Estado lo pagado, exclusivamente, a título de una indemnización, como *reparación* –directa- del **daño antijurídico** irrogado por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes, o de un acuerdo conciliatorio u otra forma de terminación de un conflicto de responsabilidad civil contra una entidad pública.

Adviértase que cuando los hechos que generan la pretensión de repetición ocurren con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2001, se debe establecer la normatividad sustancial y material aplicable al caso en concreto. Al respecto ha indicado en Consejo de Estado que:

"En cuanto a las normas sustanciales, se tiene que las normas aplicables para dilucidar si el demandado actuó con culpa grave o dolo, serán las vigentes al tiempo en que tuvo lugar la conducta del agente estatal. En tal sentido, **las presunciones de dolo y culpa grave que traen los arts. 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 no pueden ser aplicables a casos concretos donde los hechos que generaron la repetición se dieron con anterioridad al 4 de agosto de 2001.**"[13]

Por su parte, establece el **artículo 142** de la **Ley 1437 de 2011**:

> ***Ley 1437 de 2011. Artículo 142.***
> ***"Repetición.*** *Cuando el Estado haya debido hacer un* ***reconocimiento indemnizatorio*** *con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.*
>
> *La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.*
>
> *Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño." (Negrillas fuera de texto)*

---

[13] Sentencia Consejo de Estado, Expediente 25000232600020030030001 (28.448) del 31 de agosto de 2006.

Como aquí está visto la demanda aquí incoada tiene como base lo pagado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de la diferencia de cesantías surgida por efecto de los servicios que prestó dicha entidad **en el exterior,** devengando realmente sumas inferiores a las que realmente devengó y el Ministerio le liquidó cuando prestó sus servicios desde **1990 hasta el año 2003** en cumplimiento a lo dispuesto en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el día 29 de marzo de 2012**, no es vinculante con los demandados ni podría serlo, pues no fueron llamados al mismo con fines de repetición ni citados como terceros ni en ninguna otra condición que les permitiera haber sido **oídos** y ejercido su legítimo derecho de *contradicción,* petición y discusión de pruebas para su defensa, como lo garantiza el debido proceso que consagra el **artículo 29** de la Constitución Política.

Por eso, tal acuerdo no les es oponible, por lo que constitucional y legalmente es posible derivar en su contra la declaratoria de responsabilidad e imposición de la condena que se procura.

d. *Ilegitimidad de personería por pasiva*

Aun cuando se demanda, entre otros, al Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** por supuestamente haber omitido el deber – si lo tenía- de notificar las liquidaciones anuales de cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** en los periodos entre desde el 7 de febrero de 1994, 3 de enero de 1994, 2 de febrero de 1998, cuando aquélla se desempeñó *como Coordinador de Prestaciones Sociales- Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales* la acción de repetición se encamina a obtener indistintamente del mismo el pago que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES hizo a aquélla, de la suma de **$133.148.564** por el reajuste anual de sus cesantías liquidadas como inicialmente lo fueron, sobre sumas inferiores a los salarios reales que devengó durante los periodos de sus servicios en el exterior y corresponden a los años de **1990-** Hace 26 años-, **1991**- Hace 25 años-, **1992**- Hace 24 años-, **1993**- Hace 23 años-, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996-** hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años, **1999** -hace 17 años-, **2000-** hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años, cuando el Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** ninguna vinculación, ni relación funcional, administrativa ni causal tuvo al frente de las liquidaciones anuales de cesantías que el MINISTERIO le liquidó a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Luego no existe legitimación en la causa por pasiva entre el MINISTERIO y el doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** para que aquel demande indistintamente, sin relación de proporcionalidad ni de racionabilidad alguna, lo comprendido en la totalidad de lo pagado que se pretende repetir, lo generado por todo el tiempo reliquidado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.**

e. *Inexistencia de nexo causal*

La *causa* generadora del pago, vertida en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012,** que obligó al Ministerio de Relaciones Exteriores a reliquidar las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en los períodos de sus servicios en el exterior, conforme a los salarios reales que entonces devengó y no sobre las sumas inferiores que en esa época el Ministerio le liquidó, tiene su origen en la Ley 6ª de 1945 -art. 17- en razón de la vinculación de naturaleza laboral, de carácter legal y reglamentaria, que compromete exclusivamente, como empleador, al Ministerio de Relaciones Exteriores y lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**. En ningún caso por causa de la demandada, el Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ**.

En cumplimiento de la Sentencia C- 535-2005, que declaró inexequible el Artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, y ordenó liquidar las cesantías de los funcionarios que laboraron en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores teniendo en cuenta en el Ingreso Base de Liquidación la suma total de los salarios reales devengados durante los periodos laborados en el exterior, se llegó al **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012,** que corresponde a lo que el Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de *reajuste de cesantías* según lo establecido en la Sentencia C- 535- 2005.

Así, aquello en lo que funda la pretensión de repetición el Ministerio atinente a la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaron las cesantías, para efectos de que pudiese operar el fenómeno de la prescripción trienal de las acciones laborales es completamente inane habidas las siguientes consideraciones:

Primero: Siendo la cesantía una prestación de carácter unitario, el término para iniciar el cómputo de la prescripción trienal de la acción laboral solo puede ser al momento de la finalización de la relación laboral que coincide con el momento a partir del cual se hace exigible el derecho por parte del trabajador. Así lo ha entendido el Consejo de Estado al establecer que: "[...] se concluye que **mientras esté vigente el contrato de trabajo, no se puede hablar de prescripción de la cesantía como derecho social.**"[14]

Habida cuenta de lo anterior, mal puede hablarse de prescripción de las cesantías contada a partir de la notificación ***anual*** de dicha prestación, pues ninguna de ellas es independiente de las demás. Son partes de un todo que conforman una prestación unitaria.

Al ser una prestación social de *carácter unitario* cuya exigibilidad solo se produce a partir de la finalización de la relación laboral, resulta inane la notificación anual de dichos actos administrativos para el cómputo de la prescripción trienal. De tal forma que con notificación o sin ella, la causa generadora del pago no es la supuesta omisión de la notificación anual de los actos administrativos de liquidación. Esta se genera en el cumplimiento de la Sentencia C- 535- 2005 de la Corte Constitucional.

---

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "B", sentencia del 22 de enero de 2015, Radicado interno (4346-13)

Segundo: Fue a partir del 24 de mayo de 2005 con la Sentencia C- 535-2005 de la Corte Constitucional que se conoció e hizo exigible para el Ministerio de Relaciones Exteriores la obligación de liquidar y pagar el reajuste de las cesantías en los términos de dicho fallo y el derecho correlativo de los funcionarios a reclamar su efectividad.

Así, el término de inicio para el cómputo de la prescripción trienal es la fecha de expedición de la sentencia de la Corte Constitucional; fecha a partir de la cual se hizo exigible la obligación. No antes, que es lo que predica la demanda pretendiendo inferir responsabilidad en cabeza del Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** por supuestamente haber omitido la notificación anual de los actos administrativos de liquidación de las cesantías.

La verdadera causa del pago es la Sentencia C- 535- 2005 del 24 de mayo de 2005 que declaró inexequible el Artículo 10 del Decreto Ley 10 de 1992, que establecía el pago de las cesantías de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando laboraban en el exterior, con base en las asignaciones salariales de cargos equivalentes en la planta interna. Teniendo en cuenta que los efectos de las sentencias de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro, a menos que la Corte resuelva lo contrario, en los términos del Artículo 45 de la Ley 270 de 1996, la eventualidad del término prescriptivo trienal encaminado al reajuste de las cesantías es la fecha de expedición de la Sentencia.

Así lo ha entendido el Consejo de Estado en varias providencias al manifestar que:

"[...] Conforme a lo antes indicado se precisa que existía un obstáculo de orden legal que no permitía liquidar las prestaciones de los empleados del servicio exterior, con base en lo que devengaban sino sólo de acuerdo con los valores equivalentes a los de la planta interna, de manera que se puede decir, como ya lo ha precisado esta Sala, que el derecho a devengar la cesantía liquidada con base en lo devengado en el servicio exterior, sólo surgió, con certeza, a partir de la expedición de las sentencia referida, pues antes, es evidente que la entidad pública se abstenía de liquidarla.

A partir de la remoción del obstáculo normativo cuya sentencia fue proferida el 24 de mayo de 2005, el demandante estaba legitimado para pedir el reconocimiento de su derecho, por ende, no es procedente declarar la ineptitud sustantiva de la demanda, conforme lo pidió la entidad recurrente en el recurso de alzada.[15]"

Por su parte, indicó en Sentencia del 6 de julio de 2011, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren:

"[...] Además, con el pronunciamiento de inconstitucionalidad efectuado por la Corte Constitucional en sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, efectuado el 24 de mayo de 2005, la parte demandante quedó

---

[15] Sentencia Consejo de Estado del 4 de noviembre de 2010, M.P: Víctor Hernando Alvarado Ardila, Exp. No. 1496-2009,

legitimada para reclamar la reliquidación de sus prestaciones, en especial de sus cesantías, porque la vigencia y aplicabilidad del aludido artículo, impedía su reconocimiento.

El fallo recurrido amerita ser confirmado porque pese a que la sentencia de la Corte Constitucional C-535 de 2005, fue proferida luego de que se causaron las respectiva anualidades en las que el demandante prestó sus servicios en el exterior, y ésta tiene efectos hacia el futuro, lo cierto es que, por las razones arriba expresadas, es procedente declarar la denominada excepción de inconstitucionalidad para darle prevalencia a la interpretación constitucional y así, **en aplicación de los principios de primacía de la realidad frente a las formas y favorabilidad evitar que una norma que es inconstitucional desde sus orígenes produzca efectos en los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestaron sus servicios en el exterior**."

Estas sentencias encuentran su fundamento en que la fecha a partir de la cual se hizo exigible el derecho a la reliquidación de la cesantía por parte de los funcionarios que laboraban en el exterior, es el 24 de mayo de 2005; fecha de expedición de la Sentencia C-535 de 2005. Esto es así teniendo en cuenta que solo con la promulgación de la Sentencia de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del Artículo 57 del Decreto extraordinario 10 de 1992, se declaró el derecho de los funcionarios que laboraron en la planta exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de exigir la reliquidación de sus cesantías con base en el salario realmente devengado. En este punto fuerza distinguir *la exigibilidad de la cesantía misma que, dada su naturaleza, se da al momento de desvinculación del trabajador* y la *exigibilidad de la reliquidación del auxilio de cesantía que sólo puede computarse a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005.*

Por su parte, son varios los pronunciamientos judiciales proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los que ha interpretado que los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que no hayan exigido la reliquidación de sus cesantías dentro del término de tres años contados a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005, aplica la excepción previa de prescripción extintiva de los derechos laborales.

En relación con lo anterior, los procesos judiciales en los que se ha aplicado esta posición son:

1- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-01180-00. Demandante: Martha Angélica Marín Colorado- Demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los

derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

2- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-01182-00. Demandante: Sofía Salgado de Goméz- Demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

3- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-0018500.

Mediante auto del 22 de octubre de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C- 535 de 2005.

En síntesis, el argumento esbozado en la demanda en virtud del cual se generó un daño antijurídico por la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaban el auxilio de cesantía, impidiendo así que operara la prescripción trienal de los derechos, carece de todo sustento jurídico y se constituye en un abuso del derecho de acción por parte de la Cancillería. Además, es de mala fe buscar repetir lo pagado a **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** por haberse cumplido la Sentencia C-535-2005, que reiteró que la pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le corresponde.

f. ***Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación***

De otra parte, de conformidad con lo establecido en el **artículo 19 del Decreto 1716 de 2009**, el *Comité de Conciliación* del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** no es el competente para decidir que la conducta del Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** sea *gravemente culposa* por los hechos u omisiones que se le endilgan. Dicha *competencia* es privativa del Superior disciplinario[16] y con observancia del *debido proceso* que descansa en la garantía constitucional a ser *oída* y ejercer la *defensa* que, en ese orden, no se dio.

[16] Ley 734 de 2002 –Código Disciplinario Único-

En tal sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado[17] en respuesta a la consulta formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto de los estudios que deben realizar los comités de conciliación de las entidades públicas para determinar la procedencia de la acción de repetición, advirtió lo siguiente:

> *"El alcance de los estudios y evaluaciones que debe realizar el comité de conciliación para determinar la procedencia de la acción de repetición, está dado por los requisitos fijados en la normatividad vigente, (...). En desarrollo de dichos estudios, el comité de conciliación* ***no puede invadir la competencia atribuida a la jurisdicción de lo contencioso administrativo****, al cuestionar los argumentos que sirvieron de fundamento al fallador"* (Resalto).

Por lo anterior, concluye el Alto Tribunal que los estudios que debe realizar el comité *"(...) deben dirigirse a demostrar los presupuestos fácticos en que se basa la presunción a favor del Estado"*[18].

g. *Inexistencia de daño antijurídico*

El pago realizado, que se pretende repetir en contra del Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** consiste en el reconocimiento, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la diferencia a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, siendo aquél su empleador, generada en la incompleta liquidación de sus cesantías, realizada sobre sumas inferiores a los salarios realmente devengados por el mismo cuando prestó sus servicios a dicha entidad en el exterior, en el período del Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** y otros más cuyo producto se encuentra incluido en el total demandado y tienen por única y son el producto exclusivo de una prestación de naturaleza laboral, nacida del vínculo legal y reglamentario habido entonces entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que establece la Ley 6ª de 1945, y obedece para el caso a lo ordenado en la Corte Constitucional en la sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.

En tal orden, el **Acuerdo Conciliatorio**, versó sobre la reliquidación de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, ordenando al Ministerio a dicho pago en cumplimiento de la Sentencia C-535-2005.

De ahí pues, que no pueda válidamente predicarse la existencia de un pago constitutivo de **"daño antijurídico"**, como sí por el contrario, lo fue de una prestación legal de carácter laboral, legítima como quiera que estaba basada en la Ley 6ª de 1945, en el *trabajo* que merece la especial protección del Estado (art. 25 de la Constitución Política) y en la *cosa juzgada* constitucional emanada de la sentencia C-535 de 2005.

---

[17] Rad. No. 1634. C.P. Dra Gloria Duque Hernández.
[18] Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 1634 de 2005.

h. ***Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso***

El **Acuerdo Conciliatorio** que trae el Ministerio de Relaciones Exteriores como base de la acción de repetición, no es constitutivo de condena alguna de la responsabilidad del Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** ni podría hacerlo so pena de violación del debido proceso, puesto que al trámite judicial, no fue éste convocado, ni citado u oído de manera que hubiera podido ejercer su derecho de contradicción, de oportunidad de pruebas y defensa sobre en orden a determinar la existencia y el grado de una eventual responsabilidad *conexa* a la del Ministerio de Relaciones Exteriores la cual, además, ya habría caducado conforme a las normas preexistentes a la presunta ocurrencia de la omisión al deber que aquí se le endilga remontándose a trece (13) y más años atrás, de donde siguiese necesariamente la improsperidad de una condena en su contra.

i. ***Falta de legitimación en la causa por pasiva***

El Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** no tenía la función que se le endilga de notificar personalmente las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en el exterior.

De una parte porque dicha función no se encuentra específica ni determinada en el **Decreto No. 2126 de 1992,** ni en el **Manual Descriptivo de Funciones,** vigente para la época en que mi representado se desempeñó como *Coordinador de Prestaciones Sociales - Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones.*

Por otra parte, a mi representado se le llama a responder en repetición respecto de las liquidaciones anuales de cesantías por unos periodos **anteriores** y ***posteriores*** a su desempeño como *como Coordinador de Prestaciones Sociales - Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones.* Así, **anteriores** desde 1990 hasta el 2 de enero de 1994; ***posterior*** desde el 2 de febrero de 1998 hasta el año 2003, conforme el periodo que la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** prestó sus servicios en el exterior.

Además de lo anterior, durante los periodos desde 1990 hasta el año 2003 correspondiente a las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, éste se encontraba y permanecía en el exterior, circunstancia que constituye un imponderable fuera de la órbita del desarrollo de las tareas habituales del Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** quien se encontrara en la *planta interna* del Ministerio de Relaciones Exteriores entre desde el 7 de febrero de 1994, 3 de enero de 1994, 2 de febrero de 1998, lo que permite asumir que a quien habría correspondido notificar personalmente los respectivos actos administrativos, si los hubo, de liquidación anual de cesantías, fue a quienes desempeñaron funciones Consulares[19]. Entre ellas las de carácter administrativo, como fuera la de dar a conocer

[19] Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, artículo 5°

a los Funcionarios de la Misión, los actos administrativos de carácter particular de interés del propio Ministerio.

j. ***Abuso del Derecho*** -Temeridad o mala fe por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores-

Se demanda aquí, entre otros, al Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** por haberse desempeñado en el Ministerio de Relaciones Exteriores como *Coordinador de Prestaciones Sociales - Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales* del **desde el 7 de febrero de 1994, 3 de enero de 1994, 2 de febrero de 1998** y a quien se le endilga haber faltado al deber que no tenía, de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, correspondientes al lapso comprendido desde 1990 hasta el año 2003, pues como a simple vista se puede apreciar el periodo comprendido desde el 3 de mayo de 1999 hasta el año 2003,es **posterior** a su designación como *Coordinador de Prestaciones Sociales- Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones*

Lo mismo que sucede, infiriéndose la falta de buena fe debida en sus actuaciones por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, y abuso de su derecho a demandar en **87 procesos** más, de iguales presupuestos, por las liquidaciones anuales de las cesantías generadas a favor de Ignacio Enrique Ruiz Perea, Lilia Stella Cepeda Ulloa, Zaida Patricia Cristancho Guerrero, Gladys Cecilia Acosta Vidal, Luis Guillermo Becerra Torres, OVIDIO HELÍ GONZÁLEZFernando Alzate Donoso ,Enrique Antonio Celis Durán, Ana Cecilia Pulido Guerrero, Francia Rodríguez Romero, María del Pilar Gómez Valderrama, Armando González Cortés, Eduardo Alonso Rodríguez, Myriam Duarte Bernal, Consuelo del Socorro Tirado, Reinaldo Vélez Londoño, José Fernando Cendales, Eduardo Casas Acosta, María Nelly Tascón Maya, María Eugenia Beltrán de Chaparro, Miguel Camilo Ruiz Blanco, Esperanza Castro Duque, Raúl Arturo Rincón, Martha Osorio Villamizar, Divia Desideria Cepeda, Felicia Mercedes Valera, Blanca Marina Villacrees, Nydia Inés Aguirre Acevedo, Janneth Victoria Truque P, Adda Isabel Borda Medina, Edgardo Alfredo Llorente Méndez, Luis German Estrada, Henry Javier Arcos, María Helena Londoño, Patricia Klein, María Victoria Eugenia Senior Pava, Julia Inés Mora López, Maria Cristina Guerrero López, Margarita Eliana Manjarrez Herrera, René Correa Rodríguez, Gladys Mireya Paéz Herrera, Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez, Alberto Bula Bohórquez, María Helena Pastrana Pastrana, María Inés Herreño Pinto, María Smith Rueda Centeno, Juan Norberto Colorado Correa, Amparo Flórez López, Álvaro Sandoval Bernal, Alicia Alejandra Alfaro Castillo, Pablo Antonio Rebolledo Schools, Alejandro Borda Rojas, Carlos Rodríguez Bocanegra, Miguel Ángel Rodríguez Melo, Edwin Ostos Alfonso, Mauricio González López, Jaime Girón Duarte, Nacianceno López Restrepo, Rafael Juan Carlos Espinosa, Santiago Salcedo, Mery Cecilia Hurtado, Flor Ángela Martínez, Alberto Barrantes Ullos, Juan José Quintana A, Carlos Arturo Forero, Olga Cielo Molina de la Villa, Hernán Vargas Martín, Álvaro Enrique Ayala Meléndez, Carmen Estavana Zapateiro B, Fernando Salavarrieta García, Marcela Ordóñez Fernández, Gilberto Poveda Rodríguez, Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi

,Alfonso de Jesús Vélez Rivas, Fabio Emel Pedraza Pérez, Ana del Socorro Bornacelli Guerrero, Marcela Rodríguez Velandia, Alvaro Eugenio Márquez Sarmiento, Javier Darío Higuera Ángel, Carlos Arturo Morales López, Daniel Ávila Camacho, José Antonio Solarte Gómez, Blanca Stella Barrero Barrero, María Consuelo Porras, Concepción Concha Agudelo.

i. ***Ilegitimidad del derecho sustantivo***

Existe Ilegitimidad del uso del derecho sustantivo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por cuanto lo que se pretende es el REEMBOLSO de una prestación social como lo es el **auxilio de cesantías**, cuyo PAGO emana de la OBLIGACION LEGAL de aquélla, producto del VINCULO LABORAL con la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Aquello que la causa en que se fundan las pretensiones del actor, devienen del supuesto deber de haber notificado o no las liquidaciones, es un sofisma para distraer la atención del verdadero derecho sustantivo que es aquélla -las cesantías- y no éste, porque con razón o sin ella, el derecho a dicha prestación, existe, en virtud de lo dispuesto por la **Ley 50 de 1990** y por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**.

Dada la *materia*, de acuerdo a la cuantía cuyo valor pretende que se le reembolse por los funcionarios o ex funcionarios demandados, pues se trata de una prestación social de carácter laboral, nacida del vínculo de trabajo que existió entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y aquélla a quien se realizó el pago, en el cual el Ministerio es, por el contrario, deudor de la obligación, conforme al artículo 249 del C.S.T., que establece el auxilio de cesantía, y lo dispuesto en la Sentencia de Constitucionalidad C-535 de 2005, toda vez que la causa de lo pagado, es producto de dicho fallo que le impuso a dicha entidad, la obligación de liquidar tales prestaciones con base en el salario realmente devengado por la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, durante los periodos de sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior desde 1990 hasta el año 2003, y para cuyo cumplimiento no puede predicarse la existencia como engañosamente se formula, de una indemnización, que diera lugar al daño antijurídico.

V. FUNDAMENTACIÓN DE LA DEFENSA

a. Fáctica

Lo que da origen a lo pagado, cuyo monto se pretende *repetir*, corresponde al **derecho** de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** al reconocimiento y pago de las

diferencias a su favor por concepto de ***cesantías*** desde 1990 hasta el año 2003 de acuerdo con los salarios que en esos períodos realmente devengó[20]

No es, pues, racional, ni lógico y sí sofístico, afirmar como lo expone la demanda, que obedezca al deber que en el período desde el 7 de febrero de 1994, 3 de enero de 1994, 2 de febrero de 1998, el Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** habría tenido y ***omitiera*** *"(...) en su condición de Coordinador de Prestaciones Sociales- Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones...",* de notificar *personalmente* a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, sus ***cesantías*** anuales desde 1990 hasta el año 2003 e impedido así, con *culpa grave,* que no ocurriera el fenómeno *prescriptivo* trienal de las acciones laborales y de caducidad de las propias ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que le hubieran permitido al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES eludir el reconocimiento y pago de dicha prestación conforme a los salarios reales que en esos períodos la misma devengó, incrementándose su valor, que es lo que al Ministerio le resulta *antijurídico* y asume como el *daño* que alega le irrogó *pagar* lo que, inclusive despojado de las acciones llamadas a hacer efectivo el cobro de lo debido, persiste jurídicamente como una *obligación natural* que encuentra en su naturaleza la causa legítima del pago, que, en consecuencia, no cabe *repetir.*

De manera que del Catálogo de Funciones mencionados genéricamente no se desprende la prueba que permita afirmarse, como lo expresa la demanda, que el Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** tuviera el deber de *notificar personalmente* las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** con destino al Fondo Nacional del Ahorro **desde 1990 hasta el año 2003** tampoco era esa la *práctica común* adoptada al respecto como política general por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por eso, *repetir* lo pagado generaría más bien, un *enriquecimiento sin causa* en cabeza de **LA NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**, a la vez que le irrogaría un injusto *empobrecimiento* al Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** por cierto, el extremo débil de la relación laboral que se le opone para sustentar la acción.

b. Jurídica

La Ley 6 de 1945, establece la obligación del empleador, en este caso el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, de reconocer y pagar al trabajador el auxilio de **cesantía**, un mes de salario por año de servicio, o proporcionalmente a su fracción, debiéndose tener por *salario* todo emolumento que este reciba ordinariamente en desarrollo de su vinculación laboral.

Ahora bien, la Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005 en materia de cesantías de los funcionarios y ex funcionarios que prestaron servicios al MINISTERIO DE

---

[20] Sentencia C-535 de 2005

RELACIONES EXTERIORES en el exterior, sobre las mismas consideraciones que antes en materia de *pensiones* sirvieron de sustento a la Sentencia C-173 del 02 de marzo de 2004, definió que dicha prestación debe corresponder a los salarios realmente devengados y que una disposición como la que contenía el Decreto 10 de 1992 (art. 57[21]) y retomó el Decreto Ley 274 de 2000 (art. 66[22]), que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 derogó, no debieron aplicarse y sí, haber acudido la Entidad a la *excepción de inconstitucionalidad,* lo que no se hizo y vino a remediar el Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012 y aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F". En tal virtud, lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de sus ***cesantías*** anuales en el periodo comprendido desde **1990 hasta el año 2003**, no es de carácter indemnizatorio, por lo que no le ocasiona legítimamente a LA NACION -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- un detrimento patrimonial, presupuesto inescindible de la acción de repetición.

De otra parte, si como está visto durante varios años, desde 1990 hasta el año 2003 todos los quince (15) ex funcionarios aquí y en otros procesos[23] también demandados, siempre hicieron u omitieron lo mismo como lo afirma la demanda, lógico es colegir que esa fue sistemáticamente la política establecida sobre la materia por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y no la manifestación independiente y autónoma del Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** por la que deba responder patrimonial ni administrativamente, pues habríase dado *culpa* de la propia Entidad que la exime al respecto y cuanto más, un ***error communis facit ius***[24] o, que hace derecho.

Por lo anterior, en este caso no puede afirmarse que se hayan configurado los elementos para considerar probada la culpa grave del Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** conforme lo prevé el artículo 6° de la Ley 678 de 2001 y, en tal sentido, se trae a colación lo expuesto por el H. Consejo de Estado respecto a la carga de la prueba en la acción de repetición (denominada pretensión con la Ley 1437 de 2011):

> *"Es claro que el solo desconocimiento de la norma por el operador jurídico encargado de aplicarla a través de actos administrativos (...) no implica de plano una responsabilidad a título de imputación de culpa grave o dolo, puesto que, en estos casos, existe un margen de error admisible en condiciones normales y más aún extraordinarias cuando se trata de la interpretación y ejecución de las normas jurídicas o de la percepción de la realidad atendiendo las circunstancias específicas del caso, toda vez que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de la función pública se trata de una labor humana, que implica la posibilidad de yerros en las actuaciones. Como en el*

---

[21] Declarado Inexequible Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.
[22] Declarado Inexequible Sentencia C-292 de 2001.
[23] Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B", Radicados **2014-00835-00** y **2014-00841-00**, J. 4° Administrativo de Descongestión Radicados **2014-00004-00** y **2013-00440-00**, J. 8° Administrativo del Circuito Radicado **2013-00622-00**, J. 9° Administrativo del Circuito, Radicados **2014-00026-00**, **2014-00065-00**, **2014-00260-00** y **2014-00605-00**, J. 31 Administrativo del Circuito Radicados **2014-00092-00**, **2014-00111-00**, **2013-00244-00**, **2014-00286-00**, **2014-00479-00**, **2014-00304-00** y **2014-00387-00**, J. 35 Administrativo del Circuito Radicados **2013-00056-00**, **2014-00467-00**, **2014-00467-00**, **2014-00152-00** y **2014-00399-00**, J. 37 Administrativo del Circuito Radicados **2013-00087-00**, **2013-00115-00**, **2013-00123-00**, **2013-00303-00**, **2013-00304-00**, **2013-00479-00** y **2013-00480-00**, entre muchos otros.
[24] Conc. artículo 8°. Ley 153 de 1887

sub exámine no son procedentes las presunciones de dolo y culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001, por la echa de ocurrencia de los hechos, dichos conceptos requieren de una carga probatoria mayor por parte de la entidad pública en cuanto que debe desplegar una actividad prolífica tendiente a demostrar y acreditar el dolo y la culpa grave..."[25].

Por otra parte, los servidores públicos tienen un régimen de responsabilidad subjetivo y, en consecuencia, el título de imputación, sea dolo o culpa grave, debe estar plenamente demostrado dentro del proceso en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, pues el mismo no se presume en estos casos. En otras palabras, no basta simplemente citar uno de los presupuestos de la ley para que se configure la pretensión de repetición, debe acreditarse en debida forma la actuación dolosa o gravemente culposa del agente demandado.

Ahora bien, se advierte que existen serias y graves deficiencias respecto de las pruebas que ordenan a la entidad pública al pago de las diferencias de cesantías a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** que, en este caso, corresponde al **Auto de aprobación de la conciliación proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"**, ya que tal documentos debieron ser aportados con la demanda en originales según lo dispone el Art. 245 del C.G.P: "[...] *Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en donde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.*

En un asunto similar al que nos ocupa, la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó:

"Por tanto, las copias aportadas por la entidad demandante carecen de valor probatorio, porque, en tratándose de copias de documento público (...), para que puedan ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial, deben reunir las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra la diligencia de autenticación.

En ese orden de ideas, se concluye que no está demostrado dentro del proceso el primero de los hechos generadores de la acción de repetición, cual es la existencia de una sentencia (o providencia) que condene al Estado a reparar patrimonialmente un daño antijurídico, ***situación que por sí sola implica que se deben negar las pretensiones de la demanda, en tanto ello tiene incidencia en la acreditación de los otros requisitos (...)"***[26] (Resalto).

De esta manera, se reitera lo establecido en el Artículo 173 del Código General del Proceso que establece el deber por parte de los jueces de *abstenerse de ordenar la*

---

[25]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Rad. 11001032600020030001901, Número interno 24953, C.P. Dra. Ruth Stella Correa.

[26] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sent. del 28 de febrero de 2011, Rad. 34.816. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

práctica de pruebas que directamente, o por medio del derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que la solicite.

VI. PRUEBAS

Ruego al Señor Juez, decretar y tener como pruebas de mi parte, las siguientes:

VI.1 Documental

a) **Aporto** poder original con que actúo.

b) **Se oficie**

1. A la Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso y con base en sus *archivos*, se informe sobre los documentos, si los hubiere, que sirvieron de soporte para la erogación del *gasto*, por concepto de las **cesantías** anuales **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde 1990 hasta el año 2003;

2. Al Fondo Nacional del Ahorro FNA, para que con destino al proceso, se informe sobre los documentos remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, soportando los depósitos efectuados por el mismo a favor de **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde 1990 hasta el año 2003;

3. A la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se informe y remita copia de las resoluciones por medio de las cuales el Ministro de Relaciones Exteriores delegó, como ordenadores del gasto, entre otros, lo que es hoy la Dirección Administrativa y Financiera, el *pago* al Fondo Nacional del Ahorro de los depósitos de cesantías anuales del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde 1990 hasta el año 2003

4. A la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se dé cuenta, individualizándolos de los demás funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quienes, como en este caso al Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** se ha demandado o dispuesto demandar en acción de repetición, por supuestamente haber omitido *notificar personalmente,* las cesantías anuales depositadas al Fondo Nacional del Ahorro, indicando los cargos y periodos por los que en cada caso se les llama a responder;

5. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se remita copia de las liquidaciones, **año por año**, de las cesantías de **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde 1990 hasta el año 2003 y particularmente en el periodo ***desde el 7 de febrero de 1994, 3 de enero de 1994, 2***

de febrero de 1998, como dice la demanda, conciliadas por un total de **$133.148.564** cuyo monto se pretende repetir sin razón de proporcionalidad alguna, entre otros, en contra del Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ**.

Procura esta prueba establecer que los hechos u omisiones, en relación con el deber que se dice *supuestamente* tenía el Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** de notificar a **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** las cesantías por el periodo desde 1990 hasta el año 2003 habría sido cuanto más, una política sistemática y generalizada del Ministerio de Relaciones Exteriores, generadora, como tal, de un *error communis facit ius*, imputable a la *propia culpa* de la entidad.

6. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores o a quien en su defecto, corresponda, (art. 21 CPACA) a fin de que con destino al proceso de cuenta del lugar donde el Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** se desempeñaba al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior, en los años desde **1990 hasta el año 2003** a los que corresponden el pago que se le hizo de las cesantías, por cuya cancelación se pretende repetir y se diga qué condiciones de traslado, si se encontraba en el exterior, tenían los demandados para notificarle personalmente allí las liquidaciones anuales de dicha prestación durante tales periodos, a que alude la demanda.

Con esta prueba pretendo demostrar la imposibilidad real que los demandados, y en este caso, el Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** tenía para haber cumplido el deber que supuestamente tenían de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de las liquidaciones anuales de cesantías, encontrándose el mismo en el exterior, con mayor razón si esa era una condición extendida en todo el mundo, donde tenían asiento las distintas Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia.

7. A los siguientes Despachos Judiciales, para que a mi costa, y a fin de que por sus respectivas Secretarías se certifique la existencia de tales procesos instaurados por el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** en acciones de repetición, por la misma causa del que en este caso nos ocupa:

Pago realizado a:	Despacho Judicial	Radicado Proceso
Ignacio Enrique Ruiz	Consejo de Estado-Sección III-Sub B	**2014-00043-00**
Lilia Stella Cepeda Ulloa	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	**2014-00835-00**
Zaida Patricia Cristancho Guerrero	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	**2014-00841-00**
OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ	J. 4° Admtivo de Descongestión	**2014-00004-00**
Fernando Alzate Donoso	J. 4° Admtivo de Descongestión	**2013-00440-00**
Enrique Antonio Celis Durán	J. 8° Administrativo del Circuito	**2013-00622-00**
Ana Cecilia Pulido Guerrero	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00026-00**
Francia Rodríguez Romero	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00065-00**
María del Pilar Gómez Valderrama	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00260-00**
Armando González Cortés	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00605-00**

Eduardo Casas Acosta	J. 16 Administrativo del Circuito	**2013-00599-00**
María Nelly Tascón Maya	J. 18 Administrativo del Circuito	**2013-00511-00**
María Eugenia Beltrán de Chaparro	J. 19 Administrativo del Circuito	**2013-00128-00**
Miguel Camilo Ruiz Blanco	J. 19 Admtivo Descongestión Cto	**2014-00200-00**
Janeth Victoria Truque Rivera	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00188-00**
Raul Arturo Rincón Ardila	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00037-00**
Henry Javier Arcos Muñoz	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00391-00**
Nidia Inés Aguirre Acevedo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00084-00**
María Inés Aldana Nieto	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00036-00**
Anyul Molina Suarez	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00211-00**
Mauricio Baquero Pardo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00268-00**
Álvaro Eugenio Márquez Sarmiento	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00183-00**
Marcela Rodríguez Velandia	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00238-00**
Cruz Elena Mosquera Monteros	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00009-00**
María Victoria Eugenia Senior Pava	J. 23 Administrativo del Circuito	**2013-00392-00**
Margarita Eliana Manjarrez Herrera	J. 26 Administrativo del Circuito	**2013-00535-00**
René Correa Rodríguez	J. 27 Administrativo del Circuito	**2013-00211-00**
Gladys Mireya Paéz Herrera	J. 27 Administrativo del Circuito	**2014-00314-00**
Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez	J. 30 Administrativo del Circuito	**2013-00597-00**
Alberto Bula Bohórquez	J. 30 Administrativo del Circuito	**2014-00071-00**
María Helena Pastrana Pastrana	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00092-00**
María Inés Herreño Pinto	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00111-00**
María Smith Rueda Centeno	J. 31 Administrativo del Circuito	**2013-00244-00**
Juan Norberto Colorado Correa	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00286-00**
Amparo Flórez López	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00479-00**
Álvaro Sandoval Bernal	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00304-00**
Alicia Alejandra Alfaro Castillo	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00387-00**
Pablo Antonio Rebolledo Schools	J. 32 Administrativo del Circuito	**2014-00118-00**
Alejandro Borda Rojas	J. 32 Administrativo del Circuito	**2013-00389-00**
Hector Montoya Añez	J. 32 Administrativo del Circuito	**2014-00153-00**
Carlos Rodríguez Bocanegra	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00316-00**
Miguel Ángel Rodríguez Melo	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00317-00**
Edwin Ostos Alfonso	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00383-00**
Mauricio González López	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00384-00**
Jaime Girón Duarte	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00430-00**
Nacianceno López Restrepo	J. 34 Administrativo del Circuito	**2013-00279-00**
Álvaro Enrique Ayala Meléndez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2013-00056-00**
Carmen Estavana Zapateiro B.	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00467-00**
Fernando Salavarrieta García	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00152-00**
Marcela Ordóñez Fernández	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**
Gilberto Poveda Rodríguez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00399-00**
Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi	J. 36 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**
Alfonso de Jesús Vélez Rivas	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00087-00**
Fabio Emel Pedraza Pérez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00115-00**

Ana del Socorro Bornacelli Guerrero	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00123-00**
Javier Darío Higuera Ángel	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00303-00**
Carlos Arturo Morales López	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00304-00**
Daniel Ávila Camacho	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00479-00**
José Antonio Solarte Gómez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00480-00**
Diego Felipe Cadena Montenegro	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00271-00**
Amalia Rodriguez Fuque	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00290-00**
Victoria Eugenia Olga Pauwles T.	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00268-00**
Blanca Stella Barrero Barrero	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00106-00**
María Consuelo Porras	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00117-00**
Concepción Concha Agudelo	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00446-00**

VI. 2 Testimonios

a) Respetuosamente solicito que se llame a declarar en audiencia en la fecha y hora que para tales efectos señale el Despacho, sobre los hechos y omisiones que sean de su conocimiento, en relación con el diligenciamiento, liquidaciones y pago al Fondo Nacional de Ahorro FNA, en materia de liquidaciones anuales de *cesantías*, al Señor **ABELARDO RAMÍREZ GASCA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19'054.598 de Bogotá, con domicilio en la Carrera 14 No. 109 – 79 Apartamento 301, Edificio Caminos del Parque, en Bogotá.

b) Así mismo, con el fin de que deponga sobre la ejecución presupuestal en materia de cesantías anuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y del traslado de las mismas al FNA, con ocasión del desempeño que tuvo a su cargo la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Doctora **ARAMINTA BELTRÁN URREGO**, Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No. 9-03, en Bogotá.

c) A quienes fungieron como miembros del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores para que depongan en relación con las razones que tuvieron en consideración para llevarlos a determinar que hubo *culpa grave*, y demandar en repetición al Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** cuando se desempeñó como *Coordinador de Prestaciones Sociales- Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales* del Ministerio de Relaciones Exteriores en los periodos reseñados en la demanda, (Acta No. 229 del 22 de julio de 2013), consistente en haber omitido el deber que *supuestamente* tenía, según la demanda, de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las liquidaciones anuales de las cesantías por valor de **$133.148.564** para cuyos efectos se le citará en el día y hora que señale su despacho, a través de la Dirección del Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No.9-03, en Bogotá y son:

1. Doctor EDWIN OSTOS ALFONSO, Director de Asuntos Jurídicos Internacionales (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

2. Doctor ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO, Director de Talento Humano; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

3. Doctora CLAUDIA LILIANA PERDOMO ESTRADA, Jefe Oficina Asesora Jurídica Interna (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

4. Doctora MARTHA RUBY CUÉLLAR CALDERÓN, Coordinadora Grupo Interno de Gestión; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

5. Doctora LUZ ANDREA CORREDOR ARTEAGA, Abogada Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

6. Doctora HELGA VELASQUEZ AFANADOR, Abogada Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

7. Doctor JORGE ENRIQUE BARRIOS SUÁREZ, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

8. Doctor HUGO ARMANDO GRANJA ARCE, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

9. Doctor ANDRES LEONARDO MENDOZA PAREDES, Secretario Técnico (E) del Comité de Conciliación; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

VII. COSTAS

Sean a cargo de la demandante, LA NACION –MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- incluyendo *agencias en derecho*, toda vez que es manifiesta la falta de buena fe de dicha entidad al demandar en repetición a varios exfuncionarios, cuando

no se cumplen a cabalidad todos los presupuestos establecidos de manera expresa por la Ley 678 de 2001 para el ejercicio de dicho medio de control, ya que en ningún caso existió una condena al Ministerio a reconocer una indemnización, sino que se le ordena efectuar la reliquidación de las cesantías, que es una prestación social de naturaleza laboral, en favor de un trabajadora por no habérsele incluido todos los factores salariales devengados en la planta externa, lo cual fue una política de dicho ministerio y no la decisión unilateral de los ahora demandados.

VIII. NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones, junto con mi representado el Doctor **OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ** en la Secretaría de su Despacho; en mi oficina de la Carrera 15 No. 86A- 57 of. 501, teléfono 7027824, en Bogotá; y, a través de mi correo electrónico: cilinof@hotmail.com.

Señor Juez

Franklyn Liévano Fernández
C.C. No. 19.154.294 de Bogotá
T.P. No. 12.667 del C.S.J.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ
DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL
El documento fue presentado personalmente por Franklyn Liévano Fernández
Quien se identificó C.C. No. 19'154.294
T.P. No. 12-667 Bogotá D.C. 05 MAY 2016
Responsable Centro de Servicios _____ VHPP

688-34

Señor Juez
JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - Sección Tercera
E. S. D.

Proceso : Ordinario

Naturaleza : **Repetición**

Asunto : ***Contestación de demanda***

Radicado : **No. 110013336722-2014-00109-00**

Demandante : **LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**

Demandados : CLARA INÉS VARGAS DE LOSADA *y otros*

OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'312.754 de Bogotá, con domicilio en la Calle 25 No. 69-51 Apartamento 1004, Interior 2, en la ciudad, a usted respetuosamente manifiesto que por medio de este escrito confiero **Poder Especial**, amplio y suficiente al Doctor **FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ**, mayor y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501 teléfono 7027824, en la ciudad y correo electrónico: cilinof@hotmail.com, para que en mi nombre concurra, se **notifique** del *auto* admisorio de la demanda y me represente en este proceso hasta su terminación.

Mi apoderado dispondrá en el ejercicio de su gestión, de todas las facultades generales de ley, así como de las especiales de recibir, desistir, conciliar, transigir, sustituir y reasumir.

Ruego al Señor Juez reconocer y tener a mi apoderado en los términos de este escrito.

Del Señor Juez,

OVIDIO HELÍ GONZÁLEZ
C.C. No. 19'312.754 de Bogotá

Acepto el poder conferido,

FRANKLYN LIEVANO FERNÁNDEZ
C.C. No. 19'154.294 de Bogotá

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

NOTARÍA CUARENTA Y DOS (42)
CÍRCULO DE BOGOTÁ - COLOMBIA

NOHORA EMILCE AGUILAR BECERRA,
NOTARIA ENCARGADA

CERTIFICA:

Que **GONZALEZ OVIDIO HELI**

quien se identificó con: **C.C. 19312754**

manifestó que reconoce expresamente el contenido de este documento y que la firma que en él aparece es la suya.

En constancia, firma nuevamente.

Bogotá D.C. **01/04/2016**

57h5nj6yt5tynt5m

www.notariaenlinea.com
13DJITK6HL911D46

NLN

Nohora Emilce Aguilar Becerra
Notaria Encargada

689

Franklyn Liévano Fernández [1]
DOCTOR EN DERECHO

Leonor Barreto

Señor Juez
JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - Sección Tercera
E. S. D.

Proceso : Ordinario

Naturaleza : **Repetición**

Asunto : ***Contestación de demanda***

Radicado : **No. 110013336722-2014-00109-00**

Demandante : **LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**

Demandados : CLARA INES VARGAS SILVA *y otros*
-Hernando Leyva Varón, Hilda Stella Caballero Ramírez, Aura Patricia Pardo Moreno, Luis Miguel Domínguez García, **LEONOR BARRETO DIAZ**, Juan Antonio Liévano Rangel, María Hortensia Colmenares Facinni , Rodrigo Suarez Giraldo, María del Pilar Rubio Talero, Patricia Rojas Rubio,Ituca Helena Marrugo Pérez, Edith Andrade Páez, y Miriam Consuelo Ramírez Vargas-,

JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO ORAL
2016 MAY 05 09
CONSECUTIVO

FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ, mayor y vecino de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la ciudad en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501 teléfono 7027824, con correo electrónico: cilinof@hotmail.com, obrando conforme al Poder Especial adjunto, en nombre y representación de la Doctora **LEONOR BARRETO DÍAZ**, mayor y vecina de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 41'491.499 de Bogotá, con domicilio en el *exterior* en New Jersey, Estados Unidos, respetuosamente **me notifico por conducta concluyente**[1] y doy ***contestación*** en oportunidad, como sigue, a la demanda que dentro de este proceso se le formula:

I. En cuanto a las PRETENSIONES

ME OPONGO a todas y cada una de ellas, conforme a las excepciones y las razones de la defensa que en lo fáctico, así como en lo jurídico, expondré a continuación:

A la ***PRIMERA***: Porque es engañosa la hipótesis de asumir como fundamento de la acción, que no se hubiere generado el pago realizado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, si la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** le hubiere personalmente

[1] Art. 330 del C.P.C.

notificado las liquidaciones anuales, año por año, de sus cesantías de los períodos de sus servicios en el exterior, desde 1990 hasta el año 2003 pues al **Acuerdo Conciliatorio del 29 de marzo de 2012 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F",** se llegó en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005,** que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, originándose así la obligación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de reajustar la liquidación de las cesantías de los funcionarios que prestaron sus servicios en el exterior con base en los salarios reales y no sobre sumas inferiores de otros cargos en los que el funcionario no se desempeñó, dando lugar a lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores en tal virtud pagó.

Además es falsa la afirmación en virtud de la cual se impidió que operará la prescripción trienal los derechos laborales, por la omisión de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** toda vez que dicho término prescriptivo sólo puede computarse a partir del *retiro definitivo* del empleado.

A la ***SEGUNDA***: *"(...) Que se condene a..."*, entre otros, a mi representada al *pago y reparación* de la suma de **$133.148.564** que el Ministerio pagó en virtud del **Acuerdo Conciliatorio celebrado ante la Procuraduría 84 Judicial I**, reseñado en el proceso, puesto que la acción de repetición a voces del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, tiene por objeto la recuperación de lo pagado por el estado **exclusivamente** por concepto de un ***reconocimiento indemnizatorio***, que aquí, no existe (¡) porque dicha suma, el Ministerio de Relaciones Exteriores los pagó, en este caso a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** por reajuste de **CESANTÍAS**, en virtud de la relación laboral habida entre los mismos en los periodos de sus servicios en el exterior que reseña la demanda y lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005.

En efecto, cabe distinguir que lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en virtud del **Acuerdo Conciliatorio** tiene su causa en el restablecimiento del derecho subjetivo del mismo, amparado en una norma jurídica cual es la Ley 6ª de 1945 que establece el derecho a las cesantías y en lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005, que es lo que aquí se ha traído al proceso, en apoyo de la acción de repetición, cuando ésta ha de tener su apoyo en una sentencia o conciliación previa respecto a un reconocimiento indemnizatorio, que se diga, como aquí se expone, producido por la acción u omisión de los agentes del Estado (art. 140 CPACA), de donde es imperativo echar de menos el presupuesto *objetivo* para la acción de repetición, consistente en una sentencia o conciliación de un reconocimiento indemnizatorio, por su naturaleza antijurídico. Esto es lo opuesto integral y absolutamente al presupuesto esgrimido por la demandante como pie de la acción.

A la ***TERCERA***: Que se *declare* que el Acuerdo Conciliatorio aprobado por el **Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"** existe una

obligación clara, expresa y actualmente exigible, que presta mérito ejecutivo, con remisión al artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, para efectos del cobro *coactivo* de una obligación, conforme a las prescripciones del artículo 488 del CPC sobre títulos ejecutivos (Actual 422 C.G.P), dicha pretensión difiere del medio de control de repetición, el cual busca la declaratoria de responsabilidad de un servidor o ex servidor público, quien debido a su conducta dolosa o gravemente culposa conllevó a que el Estado se viera en la obligación de reconocer una suma de dinero. Ahora bien, el **Acuerdo Conciliatorio** reúne en sí mismo los requisitos del título ejecutivo, con lo cual presta mérito ejecutivo únicamente en favor del beneficiario del pago, esto es, del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

A la ***CUARTA***: Sobre la pretensión del pago de intereses, no existe causa legítima para derivarlos, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraba en el deber legal de liquidar y pagar las cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, dada la relación laboral habida entre los mismos.

A la ***QUINTA:*** En cuanto a la pretensión de condena en costas a mi representada, puesto que ha de ser la NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, quien debe salir al pago a favor del mismo, por ser esta acción un ostensible abuso del derecho a litigar.

II. Sobre los HECHOS

Al hecho ***PRIMERO***: No es un hecho. Se trata de la cita de una normativa legal y al respecto me remito a la vigencia de las mismas en el tiempo.

Al hecho ***SEGUNDO***: Distingo entre la cita que se hace de normas legales, de una parte, y la interpretación interesada que se hace de las mismas para el señalamiento de obligaciones funcionales de mi representada la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** entre las cuales la que se le endilga del deber de *"(...) liquidar y notificar personalmente el auxilio de cesantías..."*, pues el funcionario que desempeña las funciones en planta interna no puede hacerlo coetáneamente en la planta externa, como lo reseña la demanda.

Al hecho ***TERCERO***: No me consta. No obstante que se pruebe, pues el periodo en el cual mi representada fungió como *Subsecretaria de Recursos Humanos y como Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales* ninguna relación tuvo respecto de los funcionarios que, como la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, prestaron sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al hecho ***CUARTO***: No me consta. Mi representada ha sido completamente ajena al trámite de petición de reliquidación de cesantías ejercido por **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.** No obstante, es menester advertir desde ya la inconsecuencia del Ministerio al negar la pretensión de reliquidación de cesantías mediante el derecho de

petición radicado para conciliar posteriormente y de manera inconsecuente el pago de las diferencias de las cesantías originadas en el exterior.

Al hecho ***QUINTO***: No es un hecho atribuible a mi representada, la doctora **LEONOR BARRETO DIAZ,** pues como se ha indicado, no tenía el deber de notificar personalmente los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el exterior.

Al hecho ***SEXTO***: No me consta y deberá probarse. El trámite de audiencia de conciliación extrajudicial fue entre la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, con quien fuera su empleador, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adviértase que el Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo la oportunidad de reliquidar las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia C-535-2005, optó por denegar las peticiones formuladas por el peticionario para posteriormente y de manera inconsecuente, aceptarlas en Audiencia de Conciliación.

Al hecho **SÉPTIMO:** No me consta y deberá probarse. El trámite de conciliación surtido fue exclusivamente entre empleador y empleado y ninguna participación tuvo mi representada, la doctora **LEONOR BARRETO DIAZ.**

Al hecho ***OCTAVO***: No me consta el trámite de pago que enuncia el Ministerio. Cualquier actuación surtida se dio en virtud de la relación laboral habida entre estos.

Al hecho ***NOVENO:*** No obstante la multiplicidad de hechos, difiero, pues dentro de las funciones que atribuye el artículo 19 del Decreto 1716 de 2009, a los Comités de Conciliación NO le es dada la facultad o competencia para determinar la culpa grave o dolo en las actuaciones de alguno de sus funcionarios y menos aún decidir *"(...) en forma unánime...* como se hizo, en cuanto a la responsabilidad que se le endilga, dice que tenía mi representada, la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ.**

Además, La función de notificar los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el *exterior* no se encuentra establecida de manera alguna en el Manual Descriptivo de Funciones y Requisitos (Resolución 0033 de 1994), ni en el Decreto 2126 de 1992.

Al hecho **DECIMO**: No es un hecho. Me atengo a la normatividad legal y su vigencia en el tiempo, pero sí es del caso señalar que los Comités de Conciliación son órganos consultivos y de asistencia, que si bien tiene la facultad de decidir cuando deba instaurarse una acción de repetición, no la tienen para hacerlo en relación con la declaratoria de responsabilidad administrativa y disciplinaria de los funcionarios de las entidades y eventual sobre el grado de culpa o dolo en la conducta de algún funcionario. En este caso del Ministerio de Relaciones Exteriores.

II. RAZONES DE LA DEFENSA

a) El **Acuerdo Conciliatorio** celebrado a instancias de la **Procuraduría 84 Judicial I** para Asuntos Administrativos tuvo por objeto el reconocimiento y pago de las diferencias del auxilio de cesantías que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como **empleador,** debía a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por diferencias en la liquidación de dicha prestación, practicada sobre sumas inferiores a los salarios reales que el mismo devengó desde **1990 hasta el año 2003** cuando ha laborado para el mismo en el exterior.

Pago que tuvo como fundamento legal, el vínculo laboral existente entre el Ministerio y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, generador de dicha prestación conforme a lo establecido en la Ley 6 de 1945, artículo 17 y lo declarado por la Corte Constitucional en la Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y mucho antes, en la Sentencia T-1016 de 2000, que evidencian la condición *inconstitucional* de las prácticas anteriores que al respecto tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores.

b) Se pretende, inmerso irregularmente bajo este medio de control judicial, que se avance en un juicio de declaratoria y condena de condena por la ***responsabilidad*** que se les endilga a mi representada, la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** por haber supuestamente omitido el deber –si lo tenía-, de notificar personalmente las liquidaciones *anuales* del auxilio de cesantías desde **1990 hasta el año 2003** desconociéndose que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental al debido proceso, garantiza que ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa***.

Para el caso, el anterior Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 184, que rigió hasta el 1º de julio de 2012, cuando entró en vigencia la ley 1437 de 2011. Así como la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, conforme a la cual: *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...."* (Artículo 5º).

c) Tanto por lo establecido por el anterior Código Contencioso Administrativo C.C.A., preexistente a la conducta que se le endilga a mi representada la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** la acción para la eventual responsabilidad, en ese caso *conexa* con la entidad, caducó conforme al artículo 136 del C.C.A, dos años después de la presunta omisión del deber, si lo tenía. A la vez prescribió, cinco (5) años después la disciplinaria (art. 34 ley 200 de 1995), transcurrido como lo han sido **más de trece (13) años**, contados a partir de la última presunta omisión que se les imputa y se retrotrae a la liquidación anual de cesantías del año **2003**.

d) La demanda, como está visto, no tiene como materia la restitución de lo pagado por un reconocimiento *indemnizatorio* -que no lo ha habido-, sino la recuperación para el

Ministerio de lo que debía y pagó por ajuste de cesantías generadas en la vinculación laboral que establece la Ley 6 de 1945 y de conformidad con los términos fijados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y excluyen también, cualquier supuesto de la afectación del Ministerio de Relaciones Exteriores como empleador de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por un "daño antijurídico".

e) La Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** no fue convocada, ni citada como tercero, ni oída a ningún título, que le permitiera que le permitiera ejercer su derecho de contradicción, aportación y discusión de pruebas y defensa dentro del proceso de **Conciliación surtido en la Procuraduría 84 Judicial I el 29 de marzo de 2012.** Tampoco ante el Comité de Conciliación y Defensa del Ministerio de Relaciones, que se pronunció y decidió que se entablara la acción por supuestamente haber incurrido aquél en la omisión del presunto deber de notificar personalmente las cesantías de esta última desde **1990 hasta el año 2003** sin ninguna facultad, el Comité, para hacerlo en lugar de la autoridad disciplinaria correspondiente y sin las garantías del debido proceso

f) Colíguese de todo lo anteriormente expuesto, que no resulta legítimo el empleo de este medio de control judicial sobre la materia propuesta (art. 169 -núm. 3°-, Ley 1437 de 2011).

IV. De las EXCEPCIONES

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

A. EXCEPCIONES PREVIAS

1. Falta de competencia

Conforme lo establece el **artículo 7º** de la **Ley 678 de 2001**, de la acción de repetición conocerá de acuerdo con las reglas de competencia, el **juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial** contra el Estado y, si la reparación patrimonial impuesta al mismo tiene origen en una **conciliación** o cualquier otra forma establecida en la ley para la solución de conflictos, es competente el **juez o tribunal que haya aprobado el respectivo acuerdo**.

En este caso, el pago que se pretende repetir, proviene del **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012** y aprobado por el **Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"**. En consecuencia, El Tribunal Administrativo de Cundinamarca es el **competente** para conocer de esta acción.

En efecto, según la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, la competencia en razón al factor de ***conexión*** es prevalente por ser especial y en este

caso se trata de la consagrada por la ley 678 en su artículo 7° respecto de la acción de repetición. No obstante, lo establecido aun siendo posterior, por el artículo 155 del C.P.A.C.A. en razón a la cuantía.

Dijo, pues, el Consejo de Estado:

> *"Para efectos de la competencia en acciones de repetición el artículo 7° de la Ley 678, establece como premisas: la preexistencia de una sentencia condenatoria al Estado y por ende el trámite de un proceso previo ante la jurisdicción de lo contencioso; sin embargo en hipótesis distintas, es decir, cuando no existe un proceso previo y la reparación se hubiese originado en una conciliación u otra forma autorizada por la ley, conocerán el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo. Cuando no medie aprobación judicial conocerá el jue que ejerza jurisdicción en el territorio donde se celebró el acuerdo. De igual forma existen otros eventos por fuera de los presupuestos del artículo 7°, es decir sin condena previa en la jurisdicción contenciosa, tales como: condenas en la jurisdicción ordinaria en materia laboral a favor de trabajadores oficiales, condenas al Estado Colombiano en tribunales de arbitramento, o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc.; casos en los cuales se aplicarán plenamente las reglas de competencia previstas en el Código Contencioso Administrativo (...)" (Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación 11001-03-15-000-2007-00433(c) Consejero Ponente: MAURICIO TORRESCUERVO, once (11) de diciembre de dos mil siete (2007)*

Precisamente, el Doctor **JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ**, en su obra "El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo" de Ediciones Doctrina y Ley LTDA 2014, resume así el tema:

> *"La incompatibilidad entre la conexidad y la cuantía ya fue resuelta por la sala plena del Consejo de Estado, dando prelación a la conexidad para determinar el juez natural de la repetición.*
>
> *No se desconoce que el nuevo código es posterior, pero en materia de aplicación de las reglas de hermenéutica jurídica, el artículo 5 de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad de la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.*
>
> *De lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, por lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario al de una norma anterior resulta ésta derogada, pues deberá tenerse en cuenta criterio de la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3 de la Ley 153 de 1887 y 5 de la Ley 57 del mismo año.*

Por último, no puede perderse de vista, que el legislador en el momento establecer los fueros de competencia para cada uno de los medios de control, no realizó ninguna precisión frente al medio de control de repetición, teniendo en cuenta que, la competencia ya estaba prevista en la Ley 678 de 2001.

Se quiere significar con lo anterior, que toda vez que el, C.P.A.C.A. no derogó de manera expresa la competencia establecida en la Ley 678 de 2001, esta disposición se encuentra vigente y teniendo en cuenta la especialidad de esta norma respecto de la acción de repetición, se debe aplicar la conexidad a fin de establecer el juez natural de la pretensión de repetición y no el factor cuantía". (pag. 170)

2. Caducidad de la acción declarativa de responsabilidad

El **artículo 29 de la Constitución Política** garantiza el derecho fundamental del *debido proceso*.

En tal virtud nadie puede ser juzgado ni condenado sino conforme a las leyes preexistentes a la conducta que se les imputa.

En este caso, se pretende la declaratoria de responsabilidad y subsiguiente condena a la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** por supuestamente haber omitido el deber –que no tenía, de notificar personalmente y no lo hiciera, a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** las liquidaciones anuales de sus cesantías en los períodos en los que éste prestó sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores ***en el exterior*** y se remontan desde **1990 hasta el año 2003**

Más aún, abarca lo que se pretende repetir, lo pagado a dicho exfuncionario en los períodos de **1990 hasta el año 2003** períodos éstos, -todos- durante los cuales rigió el Código Contencioso Administrativo promulgado por el **Decreto Ley 01 de 1984,** que lo fue hasta el **1º de julio de 2012**, con la entrada en vigencia, el 2 de julio del mismo año, de la Ley 1437 de 2011, "*Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".*

En este orden, la acción de responsabilidad de los funcionarios por los eventuales daños antijurídicos causados por culpa grave o dolosa en el desempeño de sus funciones (artículos 77 C.C.A.) en conexidad con la entidad (art. 78 C.C.A.), **caducó** a los **dos (2) años** de la presunta *omisión* (art. 136 ibídem)

Y sea del caso prevenir que otra es, por supuesto, la *caducidad* de la acción en cuanto a la *condena* sobre repetir lo pagado, que corre a partir del pago (Ley 1437 de 2011,

art. 142) la cual, legal y constitucionalmente puede arrastrar la primera, si bien cabe lógicamente derivar de la responsabilidad la *condena* no así lo contrario, cuando aquélla no ha emanado del juicio previo y correspondiente, con las plenas garantías del *debido proceso* y dentro de la oportunidad fijada en la ley preexistente a la conducta imputada.

3. Inepta demanda

a) Por indebida acumulación de *pretensiones*

Se pretende bajo una misma cuerda, por el medio de control de repetición, que a la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** se la declare administrativamente responsable y se la condene a reembolsar al Ministerio de Relaciones Exteriores lo que éste, en cumplimiento de la **Sentencia C-535 de 2005**, pagó a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** por ajuste de cesantías de los períodos que esta laboró en el exterior, **desde 1990 hasta el año 2003** cuando aquélla se desempeñó como *Subsecretaria de Recursos Humanos y como Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales* entre el **12 de diciembre de 1995 al 6 de mayo de 1996- 9 de diciembre de 1996 al 9 de marzo de 1997- 22 de mayo de 1996 al 22 de agosto de 1997** regía el Decreto Ley 01 de 1984 por el cual se expidió el anterior Código de lo Contencioso Administrativo, vigente hasta el 1º de julio de 2012, al que precedió la Ley 13 de 1984, subrogado por el Decreto Ley 2400 de 1998 y regía también, en materia disciplinaria, la Ley 25 de 1974 -Orgánica de la Procuraduría General- y su Decreto Reglamentario 3404 de 1983, parcialmente modificada y adicionada por la misma Ley 13 de 1984 y el mismo Decreto Ley 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, de manera que a la luz de lo establecido por el artículo 29 de la Constitución Política a la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** no cabe enjuiciarla bajo el actual CPACA que rige en cuanto a la repetición y, en consecuencia no procede la acumulación, pues a voces del art. 165 del CPACA se exige que tanto lo relativo a la declaratoria de responsabilidad como la condena a reembolsar lo pagado, puedan enjuiciarse bajo la misma normativa.

De acuerdo al artículo 29 de la Constitución, ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y como está visto, las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que supuestamente la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** no le notificó personalmente cuando esta fungía como **Subsecretaria de Recursos Humanos y como** *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales* **desde el 12 de diciembre de 1995 al 6 de mayo de 1996- 9 de diciembre de 1996- 9 de marzo de 1997 y del 22 de mayo de 1996 al 22 de agosto 1997.** se remonta a los años **de 1994,1995 y 1996** y no pueden juzgarse sino a la luz de las normas preexistentes a dichas presuntas omisiones en el año de **1994- Hace 22 años, 1995- Hace 21 años, 1996- Hace 20 años** entre otras cosas, caducadas y prescritas pues según la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, vigente para la época de las conductas que a la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** se endilgan, *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza*

transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...." (Artículo 5º).

Así, pues, la presunta responsabilidad que se le endilga a la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** no es susceptible de enjuiciarse ***sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y no por este medio de control, sin campo alguno para pronunciarse legítimamente sobre una disposición de orden constitucional como la impartida en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005** que dio lugar al pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores le hizo en virtud del Acuerdo Conciliatorio celebrado.

De otra parte, según lo expuesto por el artículo 136 del C.C.A. preexistente a la conducta que se le endilga a la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** la acción para derivar una eventual responsabilidad suya en el pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso hizo, caducó dos años después de la presunta omisión que se le endilga y también prescribió a los cinco (5) años la acción disciplinaria propia para definirla (art. 34 ley 200 de 1995), cuando han transcurrido desde entonces **no menos de trece (13) años y hasta veinticuatro años (24).**

Además, es infundada y falaz la afirmación de que de haberse notificado aquéllas liquidaciones anuales de cesantías, que en el proceso ni siquiera se conocen, hubiera prescrito la acción o caducado el derecho de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** puesto que la posibilidad de demandar nace desde el momento en que la Administración, al **retiro del servidor** no hace entrega de la suma correspondiente a este concepto, es decir omite el cumplimiento de su obligación.[2]

B. EXCEPCIONES DE FONDO

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

a. *Ineptitud sustantiva de la demanda;*
b. *Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad.*
c. *Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición;*
d. *Ilegitimidad de personería por pasiva;*
e. *Inexistencia de nexo causal;*
f. *Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación;*
g. *Inexistencia de daño antijurídico;*
h. *Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso;*

[2] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de septiembre de 2011 radicado interno (2005-2009).

i. *Falta de legitimación en la causa por pasiva;*
j. *Abuso del derecho; e,*
k. *Ilegitimidad del derecho sustantivo.*

EXPOSICIÓN DE LAS EXCEPCIONES DE FONDO

a. ***Ineptitud sustantiva de la demanda***

Derivada ésta del desconocimiento de las garantías constitucionales del derecho fundamental al *debido proceso*[3] a NO *"(...) ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (...) y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio..."*, pues fuerza distinguir en el proceso lo que atañe a la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial del demandado, la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** como se pretende y lo que concierne a la eventual condena a retribuir lo pagado.

A lo primero, indiscutiblemente corresponde la aplicación de las normas preexistentes a la supuesta conducta omisiva de los implicados, del deber –si lo tenían-, de notificar personalmente a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** ***año por año***[4], *las liquidaciones anuales* de sus cesantías, causadas en los años **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años-, durante los cuales laboró al servicio del Ministerio de Relaciones en **el exterior,** pues rigió desde el **1º de marzo de 1984**[5] hasta el **1º de julio de 2012**[6], el Decreto Ley 01 de 1984 que reformó el Código Contencioso Administrativo[7] anterior.

Ahora bien, a efectos de derivar la responsabilidad que correspondiera a los funcionarios aquí implicados para la época en que supuestamente omitieron el deber, -si lo tenían-, de notificar personalmente las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** causadas en los años de **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años-, el **artículo 78** del Decreto Ley 01 de 1984, vigente en esos años, permitió que fueran demandados, en conexidad con la entidad pública, los funcionarios responsables de culpa grave o dolo en ejercicio de sus

---

[3] Art. 29 C.P.
[4] Decreto 3118 de 1968 *"Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantías de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, reorganizado por la Ley 432 de 1998"*.
[5] Diario Oficial 36.439 del 10 de enero de 1984.
[6] Fecha de entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 "por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
[7] Ley 167 de 1941

funciones, que le fueren generados a terceros (art. 77 *ibídem*), conforme a las reglas generales de los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, de ser así, fuera la misma la sentencia que dispusiera que el funcionario responsable satisficiera los perjuicios ocasionados a la Entidad, repitiendo contra el mismo lo pagado, para lo cual el término para hacerlo era de "***(2) dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa...***" establecido para las acciones de su género.

En cuanto a lo segundo, aspecto propio de la ritualidad de los procesos, es claro, que al tipo de acción incoada ha de dársele el trámite del medio de control judicial de repetición, sin que por ello pueda legitimarse a accionar, como se proponen, frente a los demandados en procura de una declaratoria de responsabilidad que caducó y sustrae al juez de proveer legítimamente al respecto, hoy décadas después de acontecido el supuesto incumplimiento del deber, si lo tenía, que a los demandados se les endilga, que en ese tiempo no cumplieron, válido, el demandante, que hoy el término para el medio de control de repetición caduca a *partir del pago,* y baste ésa consideración para traer ahora a este juicio a los demandados quebrantándoles todas las garantías constitucionales al debido proceso.

De ahí que, la demanda adolezca de la actitud sustantiva para derivar una condena en contra de los demandados, habiendo caducado como está visto cualquier acción encaminada a la declaratoria de la responsabilidad administrativa y patrimonial de los demandados por hechos que se remontan, como ya ha quedado visto, entre **trece (13) y veintiséis (26) años atrás**, enmarcados dentro de un ordenamiento legal preexistente y también, por supuesto, más favorable[8].

Descendiendo a la demanda, ésta se apoya en una sentencia en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores fue condenado a restablecer los derechos que por su parte le vulneró a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** con el reconocimiento y pago que le había hecho de las cesantías causadas a su favor durante los períodos de sus servicios al mismo **en el exterior**, en los años en que desempeñó el cargo referido de la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** basándose en sumas inferiores a los salarios reales que el ex funcionario devengó, debiendo en consecuencia, re-liquidarle dicha prestación, conforme a lo ordenado en la Sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto Legislativo 10 de 1992, que el Ministerio siguió aplicando, no obstante su derogatoria con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993[9] y posteriormente la Ley 797 de 2003, de ninguna manera vinculante con los demandados, quienes son totalmente ajenos a las prácticas entronizadas en ese orden por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de donde se deriva el pago que por concepto de reliquidación de dichas cesantías, debió atender y **no del reconocimiento de una indemnización ocasionado por un daño antijurídico** que fuera imputable como se formula, a los demandados.

[8] Art. 53 C.P.
[9] T-1016 de 2000, Sentencia C-173 de 2004

Es claro entonces, que no existe sentencia alguna de condena al pago a una indemnización que vincule a los demandados o que lo hubiese vinculado, conforme a las previsiones de los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984, ni pueda hacerlo ahora, lo cual conduce a la imposibilidad jurídica de despachar la demanda dada y, en consecuencia, la ineptitud sustantiva de la misma.

b. *Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad*

Siguiendo al tratadista *Bonnard,* quien participando de las mismas ideas de Deguit en materia de responsabilidad administrativa, lo que se advierte es una "falta de la administración" y la jurisprudencia ha advertido de *la responsabilidad* basada en una irregularidad de la actividad administrativa. Así, *"(...) Se ha deducido que la responsabilidad del patrimonio público surge cuando el daño resulta de una mala organización o de un funcionamiento defectuoso del servicio, y es, sin que sea necesario que en esa mala organización o defectuoso funcionamiento haya culpa de parte de un agente administrativo. Esto es lo que constituye la llamada culpa del servicio público, así denominada para indicar "que no hay culpa individualizada de un agente administrativo", sino solamente una irregularidad de origen anónimo y de aspecto objetivo en la organización y en el funcionamiento del servicio."*[10]

Y, como aquí se advierte la falta de la notificación personal de las liquidaciones anuales de cesantías a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores **en el exterior**, no fue, -está visto- un hecho aislado, sino que corresponde a una condición propia de un defectuoso servicio público de la entidad a falta de una regulación y apremios del orden de conformación y asignación de actividades puntuales, cuya omisión no cabe, pues, imputar individualmente a uno u otro funcionario con remisión a normas generales, sino que es más bien producto anónimo del funcionamiento de la Entidad, generador cuando menos de un ***error communis facit ius***[11] o, que hace derecho

Por otra parte, cabe señalar que de tiempo atrás la jurisprudencia ha establecido los requisitos para dar aplicación a la "doctrina del error común creador de derechos" o teoría de la apariencia[12], a saber:

1. *"Debe existir una situación que realmente sea contraria a la normatividad, pero oculta, es decir, (...) ajena en su etiología y desarrollo a quien eventualmente resultare perjudicado con la apariencia de juridicidad (...)*
2. *Que esa situación de apariencia de legalidad esté respaldada en hechos, situaciones o documentos cuyo vicio no sea posible advertir con diligencia y cuidado.*

[10] SARRIA B, Eustorgio y Mauricio. *Derecho Administrativo*. Editorial Pluma. Págs. 245 y 246
[11] Conc. artículo 8°. Ley 153 de 1887
[12] Al respecto se puede consultar la Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 3 de agosto de 1983, M.P. Dr. Jorge Salcedo Segura.

3. *Que la conducta de quien resultó perjudicado con la situación de aparente legalidad esté respaldada por una buena fe del particular (...)*
4. *Que la situación no esté regulada expresamente por una ley imperativa que imponga soluciones diferentes a las que resultarían de la aplicación de la doctrina".*

c. <u>Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición</u>

El Artículo 90 de la Constitución Nacional establece que:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este."

Adviértase la inexistencia de una condena o conciliación al Estado en la que conste la indemnización por la ocurrencia de un ***daño antijurídico,*** producto de la conducta dolosa o gravemente culposa imputable a mí representada, la doctora **LEONOR BARRETO DIAZ**.

Lo que ha traído el Ministerio como fundamento para sustentar la pretensión de repetición es una Conciliación que obliga a la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores a pagar a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las diferencias de cesantías originadas durante el tiempo en que aquel prestó sus servicios en el exterior, atendiendo lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 535-2005.

Así las cosas, el **Acuerdo Conciliatorio** tiene como fundamento el cumplimiento de una Sentencia de la Corte Constitucional - no de la ocurrencia de un daño antijurídico - elemento necesario para que se pueda predicar la procedencia de la acción de repetición. Asimismo, el pago efectuado corresponde al reajuste de cesantías que el Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** durante el tiempo en que esta prestó sus servicios en el exterior. De allí que tampoco pueda derivarse que el pago efectuado por el Ministerio haya sido en calidad de indemnización, como bien lo exige el Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.

Por otra parte, la **Ley 678 de 2001** *"Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.",* estableció la **acción de repetición** con el fin de restituir al Estado lo pagado, exclusivamente, a título de una indemnización, como *reparación* –directa- del **daño antijurídico** irrogado por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes, o de un acuerdo conciliatorio u otra forma de terminación de un conflicto de responsabilidad civil contra una entidad pública.

Adviértase que cuando los hechos que generan la pretensión de repetición ocurren con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2001, se debe establecer la normatividad sustancial y material aplicable al caso en concreto. Al respecto ha indicado en Consejo de Estado que:

"En cuanto a las normas sustanciales, se tiene que las normas aplicables para dilucidar si el demandado actuó con culpa grave o dolo, serán las vigentes al tiempo en que tuvo lugar la conducta del agente estatal. En tal sentido, **las presunciones de dolo y culpa grave que traen los arts. 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 no pueden ser aplicables a casos concretos donde los hechos que generaron la repetición se dieron con anterioridad al 4 de agosto de 2001.**"[13]

Por su parte, establece el **artículo 142** de la **Ley 1437 de 2011**:

> ***Ley 1437 de 2011. Artículo 142.***
> ***"Repetición.*** *Cuando el Estado haya debido hacer un* ***reconocimiento indemnizatorio*** *con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.*
>
> *La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.*
>
> *Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño." (Negrillas fuera de texto)*

Como aquí está visto la demanda aquí incoada tiene como base lo pagado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de la diferencia de cesantías surgida por efecto de los servicios que prestó dicha entidad **en el exterior,** devengando realmente sumas inferiores a las que realmente devengó y el Ministerio le liquidó cuando prestó sus servicios desde **1990 hasta el año 2003** en cumplimiento a lo dispuesto en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el día 29 de marzo de 2012**, no es vinculante con los demandados ni podría serlo, pues no fueron llamados al mismo con fines de repetición ni citados como terceros ni en ninguna otra condición que les permitiera haber sido **oídos** y ejercido su legítimo derecho de *contradicción,* petición y discusión de pruebas para su defensa, como lo garantiza el debido proceso que consagra el **artículo 29** de la Constitución Política.

Por eso, tal acuerdo no les es oponible, por lo que constitucional y legalmente es posible derivar en su contra la declaratoria de responsabilidad e imposición de la condena que se procura.

---

[13] Sentencia Consejo de Estado, Expediente 25000232600020030030001 (28.448) del 31 de agosto de 2006.

d. ***Ilegitimidad de personería por pasiva***

Aun cuando se demanda, entre otros, a la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** por supuestamente haber omitido el deber – si lo tenía- de notificar las liquidaciones anuales de cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** en los periodos entre el **12 de diciembre de 1995 al 6 de mayo de 1996 - 9 de diciembre de 1996- 9 de marzo de 1997- 22 de mayo de 1996 al 22 de agosto de 1997,** cuando aquélla se desempeñó *como Subsecretaria de Recursos Humanos y como Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales* la acción de repetición se encamina a obtener indistintamente del mismo el pago que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES hizo a aquélla, de la suma de **$133.148.564** por el reajuste anual de sus cesantías liquidadas como inicialmente lo fueron, sobre sumas inferiores a los salarios reales que devengó durante los periodos de sus servicios en el exterior y corresponden a los años de **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996-**hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años**, 1999** -hace 17 años-, **2000-**hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años cuando la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** ninguna vinculación, ni relación funcional, administrativa ni causal tuvo al frente de las liquidaciones anuales de cesantías que el MINISTERIO le liquidó a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Luego no existe legitimación en la causa por pasiva entre el MINISTERIO y la doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** para que aquel demande indistintamente, sin relación de proporcionalidad ni de racionabilidad alguna, lo comprendido en la totalidad de lo pagado que se pretende repetir, lo generado por todo el tiempo reliquidado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.**

e. ***Inexistencia de nexo causal***

La *causa* generadora del pago, vertida en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012,** que obligó al Ministerio de Relaciones Exteriores a reliquidar las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en los períodos de sus servicios en el exterior, conforme a los salarios reales que entonces devengó y no sobre las sumas inferiores que en esa época el Ministerio le liquidó, tiene su origen en la Ley 6ª de 1945 -art. 17- en razón de la vinculación de naturaleza laboral, de carácter legal y reglamentaria, que compromete exclusivamente, como empleador, al Ministerio de Relaciones Exteriores y lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**. En ningún caso por causa de la demandada, la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ**.

En cumplimiento de la Sentencia C- 535-2005, que declaró inexequible el Artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, y ordenó liquidar las cesantías de los funcionarios que laboraron en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores teniendo en cuenta en el Ingreso Base de Liquidación la suma total de los salarios reales

devengados durante los periodos laborados en el exterior, se llegó al **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012,** que corresponde a lo que el Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de *reajuste de cesantías* según lo establecido en la Sentencia C- 535- 2005.

Así, aquello en lo que funda la pretensión de repetición el Ministerio atinente a la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaron las cesantías, para efectos de que pudiese operar el fenómeno de la prescripción trienal de las acciones laborales es completamente inane habidas las siguientes consideraciones:

Primero: Siendo la cesantía una prestación de carácter unitario, el término para iniciar el cómputo de la prescripción trienal de la acción laboral solo puede ser al momento de la finalización de la relación laboral que coincide con el momento a partir del cual se hace exigible el derecho por parte del trabajador. Así lo ha entendido el Consejo de Estado al establecer que: "[...] se concluye que **mientras esté vigente el contrato de trabajo, no se puede hablar de prescripción de la cesantía como derecho social**."[14]

Habida cuenta de lo anterior, mal puede hablarse de prescripción de las cesantías contada a partir de la notificación ***anual*** de dicha prestación, pues ninguna de ellas es independiente de las demás. Son partes de un todo que conforman una prestación unitaria.

Al ser una prestación social de *carácter unitario* cuya exigibilidad solo se produce a partir de la finalización de la relación laboral, resulta inane la notificación anual de dichos actos administrativos para el cómputo de la prescripción trienal. De tal forma que con notificación o sin ella, la causa generadora del pago no es la supuesta omisión de la notificación anual de los actos administrativos de liquidación. Esta se genera en el cumplimiento de la Sentencia C- 535- 2005 de la Corte Constitucional.

Segundo: Fue a partir del 24 de mayo de 2005 con la Sentencia C- 535-2005 de la Corte Constitucional que se conoció e hizo exigible para el Ministerio de Relaciones Exteriores la obligación de liquidar y pagar el reajuste de las cesantías en los términos de dicho fallo y el derecho correlativo de los funcionarios a reclamar su efectividad.

Así, el término de inicio para el cómputo de la prescripción trienal es la fecha de expedición de la sentencia de la Corte Constitucional; fecha a partir de la cual se hizo exigible la obligación. No antes, que es lo que predica la demanda pretendiendo inferir responsabilidad en cabeza de la Doctora **LEONOR BARRETO** por supuestamente haber omitido la notificación anual de los actos administrativos de liquidación de las cesantías.

La verdadera causa del pago es la Sentencia C- 535- 2005 del 24 de mayo de 2005 que declaró inexequible el Artículo 10 del Decreto Ley 10 de 1992, que establecía el pago de las cesantías de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando laboraban en el exterior, con base en las asignaciones salariales de cargos equivalentes

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "B", sentencia del 22 de enero de 2015, Radicado interno (4346-13)

en la planta interna. Teniendo en cuenta que los efectos de las sentencias de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro, a menos que la Corte resuelva lo contrario, en los términos del Artículo 45 de la Ley 270 de 1996, la eventualidad del término prescriptivo trienal encaminado al reajuste de las cesantías es la fecha de expedición de la Sentencia.

Así lo ha entendido el Consejo de Estado en varias providencias al manifestar que:

"[...] Conforme a lo antes indicado se precisa que existía un obstáculo de orden legal que no permitía liquidar las prestaciones de los empleados del servicio exterior, con base en lo que devengaban sino sólo de acuerdo con los valores equivalentes a los de la planta interna, de manera que se puede decir, como ya lo ha precisado esta Sala, que el derecho a devengar la cesantía liquidada con base en lo devengado en el servicio exterior, sólo surgió, con certeza, a partir de la expedición de las sentencia referida, pues antes, es evidente que la entidad pública se abstenía de liquidarla.

A partir de la remoción del obstáculo normativo cuya sentencia fue proferida el 24 de mayo de 2005, el demandante estaba legitimado para pedir el reconocimiento de su derecho, por ende, no es procedente declarar la ineptitud sustantiva de la demanda, conforme lo pidió la entidad recurrente en el recurso de alzada.[15]"

Por su parte, indicó en Sentencia del 6 de julio de 2011, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren:

"[...] Además, con el pronunciamiento de inconstitucionalidad efectuado por la Corte Constitucional en sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, efectuado el 24 de mayo de 2005, la parte demandante quedó legitimada para reclamar la reliquidación de sus prestaciones, en especial de sus cesantías, porque la vigencia y aplicabilidad del aludido artículo, impedía su reconocimiento.

El fallo recurrido amerita ser confirmado porque pese a que la sentencia de la Corte Constitucional C-535 de 2005, fue proferida luego de que se causaron las respectiva anualidades en las que el demandante prestó sus servicios en el exterior, y ésta tiene efectos hacia el futuro, lo cierto es que, por las razones arriba expresadas, es procedente declarar la denominada excepción de inconstitucionalidad para darle prevalencia a la interpretación constitucional y así, **en aplicación de los principios de primacía de la realidad frente a las formas y favorabilidad evitar que una norma que es inconstitucional desde sus orígenes produzca efectos en los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestaron sus servicios en el exterior.**"

Estas sentencias encuentran su fundamento en que la fecha a partir de la cual se hizo exigible el derecho a la reliquidación de la cesantía por parte de los funcionarios que

[15] Sentencia Consejo de Estado del 4 de noviembre de 2010, M.P: Víctor Hernando Alvarado Ardila, Exp. No. 1496-2009,

laboraban en el exterior, es el 24 de mayo de 2005; fecha de expedición de la Sentencia C-535 de 2005. Esto es así teniendo en cuenta que solo con la promulgación de la Sentencia de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del Artículo 57 del Decreto extraordinario 10 de 1992, se declaró el derecho de los funcionarios que laboraron en la planta exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de exigir la reliquidación de sus cesantías con base en el salario realmente devengado. En este punto fuerza distinguir *la exigibilidad de la cesantía misma que, dada su naturaleza, se da al momento de desvinculación del trabajador* y la *exigibilidad de la reliquidación del auxilio de cesantía que sólo puede computarse a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005.*

Por su parte, son varios los pronunciamientos judiciales proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los que ha interpretado que los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que no hayan exigido la reliquidación de sus cesantías dentro del término de tres años contados a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005, aplica la excepción previa de prescripción extintiva de los derechos laborales.

En relación con lo anterior, los procesos judiciales en los que se ha aplicado esta posición son:

1- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-01180-00. Demandante: Martha Angélica Marín Colorado-Demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

2- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-01182-00. Demandante: Sofía Salgado de Goméz-Demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

3- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-0018500.

Mediante auto del 22 de octubre de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C- 535 de 2005.

En síntesis, el argumento esbozado en la demanda en virtud del cual se generó un daño antijurídico por la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaban el auxilio de cesantía, impidiendo así que operara la prescripción trienal de los derechos, carece de todo sustento jurídico y se constituye en un abuso del derecho de acción por parte de la Cancillería. Además, es de mala fe buscar repetir lo pagado a **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** por haberse cumplido la Sentencia C-535-2005, que reiteró que la pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le corresponde.

f. ***Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación***

De otra parte, de conformidad con lo establecido en el **artículo 19 del Decreto 1716 de 2009**, el *Comité de Conciliación* del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** no es el competente para decidir que la conducta de la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** sea *gravemente culposa* por los hechos u omisiones que se le endilgan. Dicha *competencia* es privativa del Superior disciplinario[16] y con observancia del *debido proceso* que descansa en la garantía constitucional a ser *oída* y ejercer la *defensa* que, en ese orden, no se dio.

En tal sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado[17] en respuesta a la consulta formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto de los estudios que deben realizar los comités de conciliación de las entidades públicas para determinar la procedencia de la acción de repetición, advirtió lo siguiente:

> *"El alcance de los estudios y evaluaciones que debe realizar el comité de conciliación para determinar la procedencia de la acción de repetición, está dado por los requisitos fijados en la normatividad vigente, (...). En desarrollo de dichos estudios, el comité de conciliación* ***no puede invadir la competencia atribuida a la jurisdicción de lo contencioso administrativo****, al cuestionar los argumentos que sirvieron de fundamento al fallador"* (Resalto).

Por lo anterior, concluye el Alto Tribunal que los estudios que debe realizar el comité *"(...) deben dirigirse a demostrar los presupuestos fácticos en que se basa la presunción a favor del Estado"*[18].

g. ***Inexistencia de daño antijurídico***

El pago realizado, que se pretende repetir en contra de la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** consiste en el reconocimiento, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores,

---

[16] Ley 734 de 2002 –Código Disciplinario Único-
[17] Rad. No. 1634. C.P. Dra Gloria Duque Hernández.
[18] Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 1634 de 2005.

de la diferencia a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, siendo aquél su empleador, generada en la incompleta liquidación de sus cesantías, realizada sobre sumas inferiores a los salarios realmente devengados por el mismo cuando prestó sus servicios a dicha entidad en el exterior, en el período de la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** y otros más cuyo producto se encuentra incluido en el total demandado y tienen por única y son el producto exclusivo de una prestación de naturaleza laboral, nacida del vínculo legal y reglamentario habido entonces entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que establece la Ley 6ª de 1945, y obedece para el caso a lo ordenado en la Corte Constitucional en la sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.

En tal orden, el **Acuerdo Conciliatorio**, versó sobre la reliquidación de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, ordenando al Ministerio a dicho pago en cumplimiento de la Sentencia C-535-2005.

De ahí pues, que no pueda válidamente predicarse la existencia de un pago constitutivo de **"daño antijurídico",** como sí por el contrario, lo fue de una prestación legal de carácter laboral, legítima como quiera que estaba basada en la Ley 6ª de 1945, en el *trabajo* que merece la especial protección del Estado (art. 25 de la Constitución Política) y en la *cosa juzgada* constitucional emanada de la sentencia C-535 de 2005.

h. ***Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso***

El **Acuerdo Conciliatorio** que trae el Ministerio de Relaciones Exteriores como base de la acción de repetición, no es constitutivo de condena alguna de la responsabilidad de la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** ni podría hacerlo so pena de violación del debido proceso, puesto que al trámite judicial, no fue éste convocado, ni citado u oído de manera que hubiera podido ejercer su derecho de contradicción, de oportunidad de pruebas y defensa sobre en orden a determinar la existencia y el grado de una eventual responsabilidad *conexa* a la del Ministerio de Relaciones Exteriores la cual, además, ya habría caducado conforme a las normas preexistentes a la presunta ocurrencia de la omisión al deber que aquí se le endilga remontándose a trece (13) y más años atrás, de donde siguiese necesariamente la improsperidad de una condena en su contra.

i. ***Falta de legitimación en la causa por pasiva***

La Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** no tenía la función que se le endilga de notificar personalmente las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en el exterior.

De una parte porque dicha función no se encuentra específica ni determinada en el **Decreto No. 2126 de 1992,** ni en la **Resolución 033 del 11 de enero de 1994 (Manual Descriptivo de Funciones),** vigentes para la época en que mi representada se desempeñó como *Subsecretaria de Recursos Humanos.*

Por otra parte, a mi representada se le llama a responder en repetición respecto de las liquidaciones anuales de cesantías por unos periodos **anteriores** y ***posteriores*** a su desempeño como *como Subsecretaria de Recursos Humanos y como Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales.* Así, **anteriores** desde 1990 hasta el 11 de diciembre de 1995 y del 7 de mayo de 1996 al 8 de diciembre de 1996; ***posterior*** desde el 23 de agosto de 1997 hasta el año 2003, conforme el periodo que la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** prestó sus servicios en el exterior.

Además de lo anterior, durante los periodos desde 1990 hasta el año 2003 correspondiente a las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, éste se encontraba y permanecía en el exterior, circunstancia que constituye un imponderable fuera de la órbita del desarrollo de las tareas habituales de la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** quien se encontrara en la *planta interna* del Ministerio de Relaciones Exteriores entre el **12 de diciembre de 1995 al 6 de mayo de 1996- 9 de diciembre de 1996 al 9 de marzo de 1997- 22 de mayo de 1996 al 22 de agosto de 1997,** lo que permite asumir que a quien habría correspondido notificar personalmente los respectivos actos administrativos, si los hubo, de liquidación anual de cesantías, fue a quienes desempeñaron funciones Consulares[19]. Entre ellas las de carácter administrativo, como fuera la de dar a conocer a los Funcionarios de la Misión, los actos administrativos de carácter particular de interés del propio Ministerio.

j. ***Abuso del Derecho*** -Temeridad o mala fe por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores-

Se demanda aquí, entre otros, a la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** por haberse desempeñado en el Ministerio de Relaciones Exteriores como *Subsecretaria de Recursos Humanos y como Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales* del **12 de diciembre de 1995 al 6 de mayo de 1996- 9 de diciembre de 1996 al 9 de marzo de 1997- 22 de mayo de 1996- 22 de agosto de 1997** y a quien se le endilga haber faltado al deber que no tenía, de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, correspondientes al lapso comprendido desde 1990 hasta el año 2003, pues como a simple vista se puede apreciar el periodo comprendido desde el 23 de agosto de 1997 hasta el año 2003, es **posterior** a su designación como *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales.*

Lo mismo que sucede, infiriéndose la falta de buena fe debida en sus actuaciones por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, y abuso de su derecho a demandar en **87 procesos** más, de iguales presupuestos, por las liquidaciones anuales de las cesantías generadas a favor de Ignacio Enrique Ruiz Perea, Lilia Stella Cepeda Ulloa, Zaida Patricia Cristancho Guerrero, Gladys Cecilia Acosta Vidal, Luis Guillermo Becerra Torres, LEONOR BARRETO DIAZFernando Alzate Donoso ,Enrique Antonio Celis

[19] Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, artículo 5°

Durán, Ana Cecilia Pulido Guerrero, Francia Rodríguez Romero, María del Pilar Gómez Valderrama, Armando González Cortés, Eduardo Alonso Rodríguez, Myriam Duarte Bernal, Consuelo del Socorro Tirado, Reinaldo Vélez Londoño, José Fernando Cendales, Eduardo Casas Acosta, María Nelly Tascón Maya, María Eugenia Beltrán de Chaparro, Miguel Camilo Ruiz Blanco, Esperanza Castro Duque, Raúl Arturo Rincón, Martha Osorio Villamizar, Divia Desideria Cepeda, Felicia Mercedes Valera, Blanca Marina Villacrees, Nydia Inés Aguirre Acevedo, Janneth Victoria Truque P, Adda Isabel Borda Medina, Edgardo Alfredo Llorente Méndez, Luis German Estrada, Henry Javier Arcos, María Helena Londoño, Patricia Klein, María Victoria Eugenia Senior Pava, Julia Inés Mora López, Maria Cristina Guerrero López, Margarita Eliana Manjarrez Herrera, René Correa Rodríguez, Gladys Mireya Paéz Herrera, Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez, Alberto Bula Bohórquez, María Helena Pastrana Pastrana, María Inés Herreño Pinto, María Smith Rueda Centeno, Juan Norberto Colorado Correa, Amparo Flórez López, Álvaro Sandoval Bernal, Alicia Alejandra Alfaro Castillo, Pablo Antonio Rebolledo Schools, Alejandro Borda Rojas, Carlos Rodríguez Bocanegra, Miguel Ángel Rodríguez Melo, Edwin Ostos Alfonso, Mauricio González López, Jaime Girón Duarte, Nacianceno López Restrepo, Rafael Juan Carlos Espinosa, Santiago Salcedo, Mery Cecilia Hurtado, Flor Ángela Martínez, Alberto Barrantes Ullos, Juan José Quintana A, Carlos Arturo Forero, Olga Cielo Molina de la Villa, Hernán Vargas Martín, Álvaro Enrique Ayala Meléndez, Carmen Estavana Zapateiro B, Fernando Salavarrieta García, Marcela Ordóñez Fernández, Gilberto Poveda Rodríguez, Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi ,Alfonso de Jesús Vélez Rivas, Fabio Emel Pedraza Pérez, Ana del Socorro Bornacelli Guerrero, Marcela Rodríguez Velandia, Alvaro Eugenio Márquez Sarmiento, Javier Darío Higuera Ángel, Carlos Arturo Morales López, Daniel Ávila Camacho, José Antonio Solarte Gómez, Blanca Stella Barrero Barrero, María Consuelo Porras, Concepción Concha Agudelo.

i. ***Ilegitimidad del derecho sustantivo***

Existe Ilegitimidad del uso del derecho sustantivo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por cuanto lo que se pretende es el REEMBOLSO de una prestación social como lo es el **auxilio de cesantías**, cuyo PAGO emana de la OBLIGACION LEGAL de aquélla, producto del VINCULO LABORAL con la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Aquello que la causa en que se fundan las pretensiones del actor, devienen del supuesto deber de haber notificado o no las liquidaciones, es un sofisma para distraer la atención del verdadero derecho sustantivo que es aquélla -las cesantías- y no éste, porque con razón o sin ella, el derecho a dicha prestación, existe, en virtud de lo dispuesto por la **Ley 50 de 1990** y por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**.

Dada la *materia*, de acuerdo a la cuantía cuyo valor pretende que se le reembolse por los funcionarios o ex funcionarios demandados, pues se trata de una prestación social de carácter laboral, nacida del vínculo de trabajo que existió entre el Ministerio de

Relaciones Exteriores y aquélla a quien se realizó el pago, en el cual el Ministerio es, por el contrario, deudor de la obligación, conforme al artículo 249 del C.S.T., que establece el auxilio de cesantía, y lo dispuesto en la Sentencia de Constitucionalidad C-535 de 2005, toda vez que la causa de lo pagado, es producto de dicho fallo que le impuso a dicha entidad, la obligación de liquidar tales prestaciones con base en el salario realmente devengado por la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, durante los periodos de sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior desde 1990 hasta el año 2003, y para cuyo cumplimiento no puede predicarse la existencia como engañosamente se formula, de una indemnización, que diera lugar al daño antijurídico.

V. FUNDAMENTACIÓN DE LA DEFENSA

a. Fáctica

Lo que da origen a lo pagado, cuyo monto se pretende *repetir*, corresponde al **derecho** de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** al reconocimiento y pago de las diferencias a su favor por concepto de ***cesantías*** desde 1990 hasta el año 2003 de acuerdo con los salarios que en esos períodos realmente devengó[20]

No es, pues, racional, ni lógico y sí sofístico, afirmar como lo expone la demanda, que obedezca al deber que en el período del **12 de diciembre de 1995 al 6 de mayo de 1996 - 9 de diciembre de 1996 al 9 de marzo de 1997- 22 de mayo de 1996 al 22 de agosto de 1997,** la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** habría tenido y ***omitiera*** *"(...) en su condición de Subsecretaria de Recursos Humanos - Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales ..."*, de notificar *personalmente* a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, sus ***cesantías*** anuales desde 1990 hasta el año 2003 e impedido así, con *culpa grave,* que no ocurriera el fenómeno *prescriptivo* trienal de las acciones laborales y de caducidad de las propias ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que le hubieran permitido al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES eludir el reconocimiento y pago de dicha prestación conforme a los salarios reales que en esos períodos la misma devengó, incrementándose su valor, que es lo que al Ministerio le resulta *antijurídico* y asume como el *daño* que alega le irrogó *pagar* lo que, inclusive despojado de las acciones llamadas a hacer efectivo el cobro de lo debido, persiste jurídicamente como una *obligación natural* que encuentra en su naturaleza la causa legítima del pago, que, en consecuencia, no cabe *repetir*.

De manera que del Catálogo de Funciones mencionados genéricamente no se desprende la prueba que permita afirmarse, como lo expresa la demanda, que la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** tuviera el deber de *notificar personalmente* las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA**

[20] Sentencia C-535 de 2005

MORENO con destino al Fondo Nacional del Ahorro **desde 1990 hasta el año 2003** tampoco era esa la *práctica común* adoptada al respecto como política general por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por eso, *repetir* lo pagado generaría más bien, un *enriquecimiento sin causa* en cabeza de **LA NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**, a la vez que le irrogaría un injusto *empobrecimiento* a la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** por cierto, el extremo débil de la relación laboral que se le opone para sustentar la acción.

b. Jurídica

La Ley 6 de 1945, establece la obligación del empleador, en este caso el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, de reconocer y pagar al trabajador el auxilio de **cesantía**, un mes de salario por año de servicio, o proporcionalmente a su fracción, debiéndose tener por *salario* todo emolumento que este reciba ordinariamente en desarrollo de su vinculación laboral.

Ahora bien, la Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005 en materia de cesantías de los funcionarios y ex funcionarios que prestaron servicios al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en el exterior, sobre las mismas consideraciones que antes en materia de *pensiones* sirvieron de sustento a la Sentencia C-173 del 02 de marzo de 2004, definió que dicha prestación debe corresponder a los salarios realmente devengados y que una disposición como la que contenía el Decreto 10 de 1992 (art. 57[21]) y retomó el Decreto Ley 274 de 2000 (art. 66[22]), que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 derogó, no debieron aplicarse y sí, haber acudido la Entidad a la *excepción de inconstitucionalidad,* lo que no se hizo y vino a remediar el Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012 y aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F". En tal virtud, lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de sus ***cesantías*** anuales en el periodo comprendido desde **1990 hasta el año 2003**, no es de carácter indemnizatorio, por lo que no le ocasiona legítimamente a LA NACION -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- un detrimento patrimonial, presupuesto inescindible de la acción de repetición.

De otra parte, si como está visto durante varios años, desde 1990 hasta el año 2003 todos los quince (15) ex funcionarios aquí y en otros procesos[23] también demandados, siempre hicieron u omitieron lo mismo como lo afirma la demanda, lógico es colegir que

---

[21] Declarado Inexequible Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.
[22] Declarado Inexequible Sentencia C-292 de 2001.
[23] Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B", Radicados **2014-00835-00** y **2014-00841-00**, J. 4° Administrativo de Descongestión Radicados **2014-00004-00** y **2013-00440-00**, J. 8° Administrativo del Circuito Radicado **2013-00622-00**, J. 9° Administrativo del Circuito, Radicados **2014-00026-00, 2014-00065-00, 2014-00260-00** y **2014-00605-00**, J. 31 Administrativo del Circuito Radicados **2014-00092-00, 2014-00111-00, 2013-00244-00, 2014-00286-00, 2014-00479-00, 2014-00304-00** y **2014-00387-00**, J. 35 Administrativo del Circuito Radicados **2013-00056-00, 2014-00467-00, 2014-00467-00, 2014-00152-00** y **2014-00399-00**, J. 37 Administrativo del Circuito Radicados **2013-00087-00, 2013-00115-00, 2013-00123-00, 2013-00303-00, 2013-00304-00, 2013-00479-00** y **2013-00480-00**, entre muchos otros.

esa fue sistemáticamente la política establecida sobre la materia por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y no la manifestación independiente y autónoma de la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** por la que deba responder patrimonial ni administrativamente, pues habríase dado *culpa* de la propia Entidad que la exime al respecto y cuanto más, un ***error communis facit ius***[24] o, que hace derecho.

Por lo anterior, en este caso no puede afirmarse que se hayan configurado los elementos para considerar probada la culpa grave de la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** conforme lo prevé el artículo 6º de la Ley 678 de 2001 y, en tal sentido, se trae a colación lo expuesto por el H. Consejo de Estado respecto a la carga de la prueba en la acción de repetición (denominada pretensión con la Ley 1437 de 2011):

> *"Es claro que el solo desconocimiento de la norma por el operador jurídico encargado de aplicarla a través de actos administrativos (...) no implica de plano una responsabilidad a título de imputación de culpa grave o dolo, puesto que, en estos casos, existe un margen de error admisible en condiciones normales y más aún extraordinarias cuando se trata de la interpretación y ejecución de las normas jurídicas o de la percepción de la realidad atendiendo las circunstancias específicas del caso, toda vez que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de la función pública se trata de una labor humana, que implica la posibilidad de yerros en las actuaciones. Como en el sub exámine no son procedentes las presunciones de dolo y culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001, por la echa de ocurrencia de los hechos, dichos conceptos requieren de una carga probatoria mayor por parte de la entidad pública en cuanto que debe desplegar una actividad prolífica tendiente a demostrar y acreditar el dolo y la culpa grave..."*[25].

Por otra parte, los servidores públicos tienen un régimen de responsabilidad subjetivo y, en consecuencia, el título de imputación, sea dolo o culpa grave, debe estar plenamente demostrado dentro del proceso en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, pues el mismo no se presume en estos casos. En otras palabras, no basta simplemente citar uno de los presupuestos de la ley para que se configure la pretensión de repetición, debe acreditarse en debida forma la actuación dolosa o gravemente culposa del agente demandado.

Ahora bien, se advierte que existen serias y graves deficiencias respecto de las pruebas que ordenan a la entidad pública al pago de las diferencias de cesantías a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** que, en este caso, corresponde al **Auto de aprobación de la conciliación proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"**, ya que tal documentos debió ser aportados con la demanda en originales según lo dispone el Art. 245 del C.G.P: "[...] *Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en donde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.*

---

[24] Conc. artículo 8°. Ley 153 de 1887
[25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Rad. 11001032600020030001901, Número interno 24953, C.P. Dra. Ruth Stella Correa.

En un asunto similar al que nos ocupa, la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó:

> *"Por tanto, las copias aportadas por la entidad demandante carecen de valor probatorio, porque, en tratándose de copias de documento público (...), para que puedan ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial, deben reunir las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra la diligencia de autenticación.*
>
> *En ese orden de ideas, se concluye que no está demostrado dentro del proceso el primero de los hechos generadores de la acción de repetición, cual es la existencia de una sentencia (o providencia) que condene al Estado a reparar patrimonialmente un daño antijurídico,* ***situación que por sí sola implica que se deben negar las pretensiones de la demanda, en tanto ello tiene incidencia en la acreditación de los otros requisitos (...)"***[26] (Resalto).

De esta manera, se reitera lo establecido en el Artículo 173 del Código General del Proceso que establece el deber por parte de los jueces de *abstenerse de ordenar la práctica de pruebas* que directamente, o por medio del derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que la solicite.

VI. PRUEBAS

Ruego al Señor Juez, decretar y tener como pruebas de mi parte, las siguientes:

VI.1 Documental

a) **Aporto** poder original con que actúo.

b) **Se oficie**

1. A la Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso y con base en sus *archivos*, se informe sobre los documentos, si los hubiere, que sirvieron de soporte para la erogación del *gasto*, por concepto de las **cesantías** anuales **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde 1990 hasta el año 2003;

2. Al Fondo Nacional del Ahorro FNA, para que con destino al proceso, se informe sobre los documentos remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, soportando los depósitos efectuados por el mismo a favor de **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde 1990 hasta el año 2003;

---

[26] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sent. del 28 de febrero de 2011, Rad. 34.816. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

3. A la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se informe y remita copia de las resoluciones por medio de las cuales el Ministro de Relaciones Exteriores delegó, como ordenadores del gasto, entre otros, lo que es hoy la Dirección Administrativa y Financiera, el *pago* al Fondo Nacional del Ahorro de los depósitos de cesantías anuales del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde 1990 hasta el año 2003

4. A la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se dé cuenta, individualizándolos de los demás funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quienes, como en este caso a la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** se ha demandado o dispuesto demandar en acción de repetición, por supuestamente haber omitido *notificar personalmente,* las cesantías anuales depositadas al Fondo Nacional del Ahorro, indicando los cargos y periodos por los que en cada caso se les llama a responder;

5. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se remita copia de las liquidaciones, **año por año**, de las cesantías de **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde 1990 hasta el año 2003 y particularmente en el periodo ***desde el 12 de diciembre de 1995 al 6 de mayo de 1996- 9 de diciembre de 1996- 9 de marzo de 1997- 22 de mayo de 1996 al 22 de agosto de 1997,*** como dice la demanda, conciliadas por un total de **$133.148.564** cuyo monto se pretende repetir sin razón de proporcionalidad alguna, entre otros, en contra de la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ.**

Procura esta prueba establecer que los hechos u omisiones, en relación con el deber que se dice *supuestamente* tenía la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** de notificar a **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** las cesantías por el periodo desde 1990 hasta el año 2003 habría sido cuanto más, una política sistemática y generalizada del Ministerio de Relaciones Exteriores, generadora, como tal, de un *error communis facit ius*, imputable a la *propia culpa* de la entidad.

6. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores o a quien en su defecto, corresponda, (art. 21 CPACA) a fin de que con destino al proceso de cuenta del lugar donde el Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** se desempeñaba al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior, en los años desde 1990 hasta el año 2003 a los que corresponden el pago que se le hizo de las cesantías, por cuya cancelación se pretende repetir y se diga qué condiciones de traslado, si se encontraba en el exterior, tenían los demandados para notificarle personalmente allí las liquidaciones anuales de dicha prestación durante tales periodos, a que alude la demanda.

Con esta prueba pretendo demostrar la imposibilidad real que los demandados, y en este caso, la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** tenía para haber cumplido el deber que supuestamente tenían de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de las liquidaciones anuales de cesantías, encontrándose el mismo en el exterior, con mayor razón si esa era una condición extendida en todo el

mundo, donde tenían asiento las distintas Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia.

7. A los siguientes Despachos Judiciales, para que a mi costa, y a fin de que por sus respectivas Secretarías se certifique la existencia de tales procesos instaurados por el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** en acciones de repetición, por la misma causa del que en este caso nos ocupa:

Pago realizado a:	Despacho Judicial	Radicado Proceso
Ignacio Enrique Ruiz	Consejo de Estado-Sección III-Sub B	**2014-00043-00**
Lilia Stella Cepeda Ulloa	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	**2014-00835-00**
Zaida Patricia Cristancho Guerrero	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	**2014-00841-00**
LEONOR BARRETO DIAZ	J. 4° Admtivo de Descongestión	**2014-00004-00**
Fernando Alzate Donoso	J. 4° Admtivo de Descongestión	**2013-00440-00**
Enrique Antonio Celis Durán	J. 8° Administrativo del Circuito	**2013-00622-00**
Ana Cecilia Pulido Guerrero	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00026-00**
Francia Rodríguez Romero	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00065-00**
María del Pilar Gómez Valderrama	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00260-00**
Armando González Cortés	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00605-00**
Eduardo Casas Acosta	J. 16 Administrativo del Circuito	**2013-00599-00**
María Nelly Tascón Maya	J. 18 Administrativo del Circuito	**2013-00511-00**
María Eugenia Beltrán de Chaparro	J. 19 Administrativo del Circuito	**2013-00128-00**
Miguel Camilo Ruiz Blanco	J. 19 Admtivo Descongestión Cto	**2014-00200-00**
Janeth Victoria Truque Rivera	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00188-00**
Raul Arturo Rincón Ardila	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00037-00**
Henry Javier Arcos Muñoz	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00391-00**
Nidia Inés Aguirre Acevedo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00084-00**
María Inés Aldana Nieto	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00036-00**
Anyul Molina Suarez	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00211-00**
Mauricio Baquero Pardo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00268-00**
Álvaro Eugenio Márquez Sarmiento	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00183-00**
Marcela Rodríguez Velandia	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00238-00**
Cruz Elena Mosquera Monteros	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00009-00**
María Victoria Eugenia Senior Pava	J. 23 Administrativo del Circuito	**2013-00392-00**
Margarita Eliana Manjarrez Herrera	J. 26 Administrativo del Circuito	**2013-00535-00**
René Correa Rodríguez	J. 27 Administrativo del Circuito	**2013-00211-00**
Gladys Mireya Paéz Herrera	J. 27 Administrativo del Circuito	**2014-00314-00**
Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez	J. 30 Administrativo del Circuito	**2013-00597-00**
Alberto Bula Bohórquez	J. 30 Administrativo del Circuito	**2014-00071-00**
María Helena Pastrana Pastrana	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00092-00**
María Inés Herreño Pinto	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00111-00**
María Smith Rueda Centeno	J. 31 Administrativo del Circuito	**2013-00244-00**
Juan Norberto Colorado Correa	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00286-00**
Amparo Flórez López	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00479-00**

Álvaro Sandoval Bernal	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00304-00**
Alicia Alejandra Alfaro Castillo	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00387-00**
Pablo Antonio Rebolledo Schools	J. 32 Administrativo del Circuito	**2014-00118-00**
Alejandro Borda Rojas	J. 32 Administrativo del Circuito	**2013-00389-00**
Hector Montoya Añez	J. 32 Administrativo del Circuito	**2014-00153-00**
Carlos Rodríguez Bocanegra	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00316-00**
Miguel Ángel Rodríguez Melo	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00317-00**
Edwin Ostos Alfonso	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00383-00**
Mauricio González López	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00384-00**
Jaime Girón Duarte	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00430-00**
Nacianceno López Restrepo	J. 34 Administrativo del Circuito	**2013-00279-00**
Álvaro Enrique Ayala Meléndez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2013-00056-00**
Carmen Estavana Zapateiro B.	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00467-00**
Fernando Salavarrieta García	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00152-00**
Marcela Ordóñez Fernández	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**
Gilberto Poveda Rodríguez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00399-00**
Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi	J. 36 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**
Alfonso de Jesús Vélez Rivas	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00087-00**
Fabio Emel Pedraza Pérez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00115-00**
Ana del Socorro Bornacelli Guerrero	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00123-00**
Javier Darío Higuera Ángel	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00303-00**
Carlos Arturo Morales López	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00304-00**
Daniel Ávila Camacho	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00479-00**
José Antonio Solarte Gómez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00480-00**
Diego Felipe Cadena Montenegro	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00271-00**
Amalia Rodriguez Fuque	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00290-00**
Victoria Eugenia Olga Pauwles T.	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00268-00**
Blanca Stella Barrero Barrero	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00106-00**
María Consuelo Porras	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00117-00**
Concepción Concha Agudelo	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00446-00**

VI. 2 Testimonios

a) Respetuosamente solicito que se llame a declarar en audiencia en la fecha y hora que para tales efectos señale el Despacho, sobre los hechos y omisiones que sean de su conocimiento, en relación con el diligenciamiento, liquidaciones y pago al Fondo Nacional de Ahorro FNA, en materia de liquidaciones anuales de *cesantías*, al Señor **ABELARDO RAMÍREZ GASCA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19'054.598 de Bogotá, con domicilio en la Carrera 14 No. 109 – 79 Apartamento 301, Edificio Caminos del Parque, en Bogotá.

b) Así mismo, con el fin de que deponga sobre la ejecución presupuestal en materia de cesantías anuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y del traslado de las mismas al FNA, con ocasión del desempeño que tuvo a su cargo la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Doctora

ARAMINTA BELTRÁN URREGO, Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No. 9-03, en Bogotá.

c) A quienes fungieron como miembros del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores para que depongan en relación con las razones que tuvieron en consideración para llevarlos a determinar que hubo *culpa grave*, y demandar en repetición a la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ** cuando se desempeñó como ***Subsecretaria de Recursos Humanos-*** *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales* del Ministerio de Relaciones Exteriores en los periodos reseñados en la demanda, (Acta No. 229 del 22 de julio de 2013), consistente en haber omitido el deber que *supuestamente* tenía, según la demanda, de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las liquidaciones anuales de las cesantías por valor de **$133.148.564** para cuyos efectos se le citará en el día y hora que señale su despacho, a través de la Dirección del Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No.9-03, en Bogotá y son:

1. Doctor EDWIN OSTOS ALFONSO, Director de Asuntos Jurídicos Internacionales (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

2. Doctor ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO, Director de Talento Humano; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

3. Doctora CLAUDIA LILIANA PERDOMO ESTRADA, Jefe Oficina Asesora Jurídica Interna (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

4. Doctora MARTHA RUBY CUÉLLAR CALDERÓN, Coordinadora Grupo Interno de Gestión; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

5. Doctora LUZ ANDREA CORREDOR ARTEAGA, Abogada Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

6. Doctora HELGA VELASQUEZ AFANADOR, Abogada Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

7. Doctor JORGE ENRIQUE BARRIOS SUÁREZ, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

8. Doctor HUGO ARMANDO GRANJA ARCE, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

9. Doctor ANDRES LEONARDO MENDOZA PAREDES, Secretario Técnico (E) del Comité de Conciliación; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

VII. COSTAS

Sean a cargo de la demandante, LA NACION –MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- incluyendo *agencias en derecho*, toda vez que es manifiesta la falta de buena fe de dicha entidad al demandar en repetición a varios exfuncionarios, cuando no se cumplen a cabalidad todos los presupuestos establecidos de manera expresa por la Ley 678 de 2001 para el ejercicio de dicho medio de control, ya que en ningún caso existió una condena al Ministerio a reconocer una indemnización, sino que se le ordena efectuar la reliquidación de las cesantías, que es una prestación social de naturaleza laboral, en favor de un trabajadora por no habérsele incluido todos los factores salariales devengados en la planta externa, lo cual fue una política de dicho ministerio y no la decisión unilateral de los ahora demandados.

VIII. NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones, junto con mi representada la Doctora **LEONOR BARRETO DIAZ**en la Secretaría de su Despacho; en mi oficina de la Carrera 15 No. 86A- 57 of. 501, teléfono 7027824, en Bogotá; y, a través de mi correo electrónico: cilinof@hotmail.com.

Señor Juez

Franklyn Liévano Fernández
C.C. No. 19.154.294 de Bogotá
T.P. No. 12.667 del C.S.J.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
El documento fue presentado personalmente por Franklyn Liévano Fernández
Quien se identificó C.C. No. 19154294
T.P. No. 12-667 Bogotá D.C. 05 MAY 2016
Responsable Centro de Servicios ..... VHPP

721 33

Señor Juez
JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Sección Tercera
E. S. D.

Proceso : Ordinario

Naturaleza : **Repetición**

Asunto : ***Poder***

Radicado : **No. 110013336722-2014-00109-00**

Demandante : **LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**

Demandados : CLARA INÉS VARGAS SILVA *y otros*

LEONOR BARRETO DÍAZ, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 41'491.499 de Bogotá, con domicilio en Nueva York, Estados Unidos y en tránsito por Bogotá, a usted respetuosamente manifiesto que por medio de este escrito confiero Poder Especial, amplio y suficiente al Doctor **FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ** mayor y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501, teléfono 7027824, en la ciudad y correo electrónico: cilinof@hotmail.com, para que en mi nombre concurra, se **notifique** del auto admisorio de la demanda y me represente en este proceso hasta su terminación.

Mi apoderado dispondrá en el ejercicio de su gestión, de todas las facultades generales de ley, así como de las especiales de recibir, desistir, conciliar, transigir, sustituir y reasumir.

Ruego al Señor Juez reconocer y tener a mi apoderado en los términos de este escrito.

Del Señor Juez,

LEONOR BARRETO DÍAZ
C.C. No. 41'491.499 de Bogotá

Acepto el poder conferido,

FRANKLYN LIÉVANO FERNÁNDEZ
C.C. No. 19'154.294 de Bogotá

NOTARÍA 31

ALFONSO CLAVIJO GONZALEZ
NIT: 19.114.508-9
CALLE 117 No. 6 A-19 BOGOTA, D.C.
PBX 6121690 Correo Electronico: notaria31bogota@gmail.com

NOTARÍA 31 NOTARÍA 31

DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL

NOTARÍA 31
ALFONSO CLAVIJO GONZALEZ

El anterior escrito dirigido a: Interesado. Fué presentado personalmente por:

BARRETO DIAZ LEONOR
Identificado con: C.C. 41491499
Bogota D.C. jueves, 07 de abril de 2016

x
FIRMA DECLARANTE

Huella Compareciente

EBUYJY7RKVFMZ34D

Verifique los datos impresos en este documento ingresando a www.notariaenlinea.com

feftefttdbdf3de4

JANNETH MOJICA CHACON NOTARIA 31 ENCARGADA

Lore

NOTARÍA 31 NOTARÍA 31

ESPACIO EN BLANCO

NOTARÍA 31

NOTARÍA 31
ALFONSO CLAVIJO GONZALEZ
NIT: 19.114.508-9
CALLE 117 No. 6 A-19 BOGOTA, D.C.
PBX 6121690 Correo Electronico: notaria31bogota@gmail.com

NOTARÍA 31 NOTARÍA 31

ESPACIO EN BLANCO

NOTARÍA 31

NOTARÍA 31 NOTARÍA 31

ESPACIO EN BLANCO

NOTARÍA 31

723

Franklyn Liévano Fernández [1]

DOCTOR EN DERECHO

Myriam Ramírez

Señor Juez
JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - Sección Tercera
E. S. D.

OFICINA DE APOYO JUZGADOS ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
2016 MAY 5 PM 4:27
000003

Proceso	:	Ordinario
Naturaleza	:	**Repetición**
Asunto	:	***Contestación de demanda***
Radicado	:	**No. 110013336722-2014-00109-00**
Demandante	:	**LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**
Demandados	:	CLARA INES VARGAS SILVA *y otros* -Hernando Leyva Varón, Hilda Stella Caballero Ramírez, Aura Patricia Pardo Moreno, Luis Miguel Domínguez García, Leonor Barreto Díaz, Juan Antonio Liévano Rangel, María Hortensia Colmenares Facinni , Rodrigo Suarez Giraldo ,María del Pilar Rubio Talero, Patricia Rojas Rubio, Ituca Helena Marrugo Pérez, Edith Andrade Páez, y **MIRIAM CONSUELO RAMÍREZ VARGAS**-,

FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ, mayor y vecino de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la ciudad en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501 teléfono 7027824, con correo electrónico: cilinof@hotmail.com, obrando conforme al Poder Especial adjunto, en nombre y representación de la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS**, mayor y vecina de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 41' 746.749 de Bogotá, con domicilio en la ciudad de Bogotá, respetuosamente **me notifico por conducta concluyente**[1] y doy ***contestación*** en oportunidad, como sigue, a la demanda que dentro de este proceso se le formula:

I. En cuanto a las PRETENSIONES

ME OPONGO a todas y cada una de ellas, conforme a las excepciones y las razones de la defensa que en lo fáctico, así como en lo jurídico, expondré a continuación:

A la ***PRIMERA***: Porque es engañosa la hipótesis de asumir como fundamento de la acción, que no se hubiere generado el pago realizado a la Señora **ANGELA MARÍA**

[1] Art. 330 del C.P.C.

CORREA MORENO, si la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** le hubiere personalmente *notificado* las liquidaciones anuales, año por año, de sus cesantías de los períodos de sus servicios en el exterior, desde **1990 hasta el año 2003** pues al **Acuerdo Conciliatorio del 29 de marzo de 2012 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"**, se llegó en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005,** que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, originándose así la obligación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de reajustar la liquidación de las cesantías de los funcionarios que prestaron sus servicios en el exterior con base en los salarios reales y no sobre sumas inferiores de otros cargos en los que el funcionario no se desempeñó, dando lugar a lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores en tal virtud pagó.

Además es falsa la afirmación en virtud de la cual se impidió que operará la prescripción trienal los derechos laborales, por la omisión de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** toda vez que dicho término prescriptivo sólo puede computarse a partir del *retiro definitivo* del empleado.

A la ***SEGUNDA***: *"(...) Que se condene a..."*, entre otros, a mi representada al *pago y reparación* de la suma de **$133.148.564** que el Ministerio pagó en virtud del **Acuerdo Conciliatorio celebrado ante la Procuraduría 84 Judicial I**, reseñado en el proceso, puesto que la acción de repetición a voces del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, tiene por objeto la recuperación de lo pagado por el estado **exclusivamente** por concepto de un ***reconocimiento indemnizatorio***, que aquí, no existe (¡) porque dicha suma, el Ministerio de Relaciones Exteriores los pagó, en este caso a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** por reajuste de **CESANTÍAS**, en virtud de la relación laboral habida entre los mismos en los periodos de sus servicios en el exterior que reseña la demanda y lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005.

En efecto, cabe distinguir que lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en virtud del **Acuerdo Conciliatorio** tiene su causa en el restablecimiento del derecho subjetivo del mismo, amparado en una norma jurídica cual es la Ley 6ª de 1945 que establece el derecho a las cesantías y en lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005, que es lo que aquí se ha traído al proceso, en apoyo de la acción de repetición, cuando ésta ha de tener su apoyo en una sentencia o conciliación previa respecto a un reconocimiento indemnizatorio, que se diga, como aquí se expone, producido por la acción u omisión de los agentes del Estado (art. 140 CPACA), de donde es imperativo echar de menos el presupuesto *objetivo* para la acción de repetición, consistente en una sentencia o conciliación de un reconocimiento indemnizatorio, por su naturaleza antijurídico. Esto es lo opuesto integral y absolutamente al presupuesto esgrimido por la demandante como pie de la acción.

A la ***TERCERA***: Que se *declare* que el Acuerdo Conciliatorio aprobado por el **Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"** existe una *obligación clara, expresa y actualmente exigible, que presta mérito ejecutivo,* con remisión al artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, para efectos del cobro *coactivo* de una obligación, conforme a las prescripciones del artículo 488 del CPC sobre títulos ejecutivos (Actual 422 C.G.P), dicha pretensión difiere del medio de control de repetición, el cual busca la declaratoria de responsabilidad de un servidor o ex servidor público, quien debido a su conducta dolosa o gravemente culposa conllevó a que el Estado se viera en la obligación de reconocer una suma de dinero. Ahora bien, el **Acuerdo Conciliatorio** reúne en sí mismo los requisitos del título ejecutivo, con lo cual presta mérito ejecutivo únicamente en favor del beneficiario del pago, esto es, del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

A la ***CUARTA***: Sobre la pretensión del pago de intereses, no existe causa legítima para derivarlos, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraba en el deber legal de liquidar y pagar las cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, dada la relación laboral habida entre los mismos.

A la ***QUINTA:*** En cuanto a la pretensión de condena en costas a mi representada, puesto que ha de ser la NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, quien debe salir al pago a favor del mismo, por ser esta acción un ostensible abuso del derecho a litigar.

II. Sobre los HECHOS

Al hecho ***PRIMERO***: No es un hecho. Se trata de la cita de una normativa legal y al respecto me remito a la vigencia de las mismas en el tiempo.

Al hecho ***SEGUNDO***: Distingo entre la cita que se hace de normas legales, de una parte, y la interpretación interesada que se hace de las mismas para el señalamiento de obligaciones funcionales de mi representada la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS**entre las cuales la que se le endilga del deber de *"(...) liquidar y notificar personalmente el auxilio de cesantías..."*, pues el funcionario que desempeña las funciones en planta interna no puede hacerlo coetáneamente en la planta externa, como lo reseña la demanda.

Al hecho ***TERCERO***: No me consta. No obstante que se pruebe, pues el periodo en el cual mi representada fungió como *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales* ninguna relación tuvo respecto de los funcionarios que, como la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, prestaron sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al hecho ***CUARTO***: No me consta. Mi representada ha sido completamente ajena al trámite de petición de reliquidación de cesantías ejercido por **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.** No obstante, es menester advertir desde ya la inconsecuencia del

Ministerio al negar la pretensión de reliquidación de cesantías mediante el derecho de petición radicado para conciliar posteriormente y de manera inconsecuente el pago de las diferencias de las cesantías originadas en el exterior.

Al hecho ***QUINTO***: No es un hecho atribuible a mi representada, la doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS,** pues como se ha indicado, no tenía el deber de notificar personalmente los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el exterior.

Al hecho ***SEXTO***: No me consta y deberá probarse. El trámite de audiencia de conciliación extrajudicial fue entre la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, con quien fuera su empleador, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adviértase que el Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo la oportunidad de reliquidar las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia C-535-2005, optó por denegar las peticiones formuladas por el peticionario para posteriormente y de manera inconsecuente, aceptarlas en Audiencia de Conciliación.

Al hecho **SÉPTIMO:** No me consta y deberá probarse. El trámite de conciliación surtido fue exclusivamente entre empleador y empleado y ninguna participación tuvo mi representada, la doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS.**

Al hecho ***OCTAVO***: No me consta el trámite de pago que enuncia el Ministerio. Cualquier actuación surtida se dio en virtud de la relación laboral habida entre estos.

Al hecho ***NOVENO:*** No obstante la multiplicidad de hechos, difiero, pues dentro de las funciones que atribuye el artículo 19 del Decreto 1716 de 2009, a los Comités de Conciliación NO le es dada la facultad o competencia para determinar la culpa grave o dolo en las actuaciones de alguno de sus funcionarios y menos aún decidir *"(...) en forma unánime...* como se hizo, en cuanto a la responsabilidad que se le endilga, dice que tenía mi representada, la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS**.

Además, La función de notificar los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el *exterior* no se encuentra establecida de manera alguna en el Manual Descriptivo de Funciones y Requisitos (Resolución 0033 de 1994), ni en el Decreto 2126 de 1992.

Al hecho **DECIMO**: No es un hecho. Me atengo a la normatividad legal y su vigencia en el tiempo, pero sí es del caso señalar que los Comités de Conciliación son órganos consultivos y de asistencia, que si bien tiene la facultad de decidir cuando deba instaurarse una acción de repetición, no la tienen para hacerlo en relación con la declaratoria de responsabilidad administrativa y disciplinaria de los funcionarios de las

entidades y eventual sobre el grado de culpa o dolo en la conducta de algún funcionario. En este caso del Ministerio de Relaciones Exteriores.

II. RAZONES DE LA DEFENSA

a) El **Acuerdo Conciliatorio** celebrado a instancias de la **Procuraduría 84 Judicial I** para Asuntos Administrativos tuvo por objeto el reconocimiento y pago de las diferencias del auxilio de cesantías que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como **empleador,** debía a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por diferencias en la liquidación de dicha prestación, practicada sobre sumas inferiores a los salarios reales que el mismo devengó desde **1990 hasta el año 2003** cuando ha laborado para el mismo en el exterior.

Pago que tuvo como fundamento legal, el vínculo laboral existente entre el Ministerio y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, generador de dicha prestación conforme a lo establecido en la Ley 6 de 1945, artículo 17 y lo declarado por la Corte Constitucional en la Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y mucho antes, en la Sentencia T-1016 de 2000, que evidencian la condición *inconstitucional* de las prácticas anteriores que al respecto tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores.

b) Se pretende, inmerso irregularmente bajo este medio de control judicial, que se avance en un juicio de declaratoria y condena de condena por la ***responsabilidad*** que se les endilga a mi representada, la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** por haber supuestamente omitido el deber –si lo tenía-, de notificar personalmente las liquidaciones *anuales* del auxilio de cesantías desde **1990 hasta el año 2003** desconociéndose que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental al debido proceso, garantiza que ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa***.

Para el caso, el anterior Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 184, que rigió hasta el 1º de julio de 2012, cuando entró en vigencia la ley 1437 de 2011. Así como la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, conforme a la cual: *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...."* (Artículo 5º).

c) Tanto por lo establecido por el anterior Código Contencioso Administrativo C.C.A., preexistente a la conducta que se le endilga a mi representada la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** la acción para la eventual responsabilidad, en ese caso *conexa* con la entidad, caducó conforme al artículo 136 del C.C.A, dos años después de la presunta omisión del deber, si lo tenía. A la vez prescribió, cinco (5) años después la disciplinaria (art. 34 ley 200 de 1995), transcurrido como lo han sido **más de trece (13) años**, contados a partir de la última presunta omisión que se les imputa y se retrotrae a la liquidación anual de cesantías del año **2003**.

d) La demanda, como está visto, no tiene como materia la restitución de lo pagado por un reconocimiento *indemnizatorio* -que no lo ha habido-, sino la recuperación para el Ministerio de lo que debía y pagó por ajuste de cesantías generadas en la vinculación laboral que establece la Ley 6 de 1945 y de conformidad con los términos fijados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y excluyen también, cualquier supuesto de la afectación del Ministerio de Relaciones Exteriores como empleador de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por un "daño antijurídico".

e) La Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** no fue convocada, ni citada como tercero, ni oída a ningún título, que le permitiera que le permitiera ejercer su derecho de contradicción, aportación y discusión de pruebas y defensa dentro del proceso de **Conciliación surtido en la Procuraduría 84 Judicial I el 29 de marzo de 2012.** Tampoco ante el Comité de Conciliación y Defensa del Ministerio de Relaciones, que se pronunció y decidió que se entablara la acción por supuestamente haber incurrido aquél en la omisión del presunto deber de notificar personalmente las cesantías de esta última desde **1990 hasta el año 2003** sin ninguna facultad, el Comité, para hacerlo en lugar de la autoridad disciplinaria correspondiente y sin las garantías del debido proceso

f) Colíguese de todo lo anteriormente expuesto, que no resulta legítimo el empleo de este medio de control judicial sobre la materia propuesta (art. 169 -núm. 3°-, Ley 1437 de 2011).

IV. De las EXCEPCIONES

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

A. EXCEPCIONES PREVIAS

1. Falta de competencia

Conforme lo establece el **artículo 7º** de la **Ley 678 de 2001**, de la acción de repetición conocerá de acuerdo con las reglas de competencia, el **juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial** contra el Estado y, si la reparación patrimonial impuesta al mismo tiene origen en una **conciliación** o cualquier otra forma establecida en la ley para la solución de conflictos, es competente el **juez o tribunal que haya aprobado el respectivo acuerdo**.

En este caso, el pago que se pretende repetir, proviene del **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012** y aprobado por el **Tribunal Administrativo de**

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F". En consecuencia, El Tribunal Administrativo de Cundinamarca es el **competente** para conocer de esta acción.

En efecto, según la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, la competencia en razón al factor de ***conexión*** es prevalente por ser especial y en este caso se trata de la consagrada por la ley 678 en su artículo 7° respecto de la acción de repetición. No obstante, lo establecido aun siendo posterior, por el artículo 155 del C.P.A.C.A. en razón a la cuantía.

Dijo, pues, el Consejo de Estado:

> *"Para efectos de la competencia en acciones de repetición el artículo 7° de la Ley 678, establece como premisas: la preexistencia de una sentencia condenatoria al Estado y por ende el trámite de un proceso previo ante la jurisdicción de lo contencioso; sin embargo en hipótesis distintas, es decir, cuando no existe un proceso previo y la reparación se hubiese originado en una conciliación u otra forma autorizada por la ley, conocerán el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo. Cuando no medie aprobación judicial conocerá el jue que ejerza jurisdicción en el territorio donde se celebró el acuerdo. De igual forma existen otros eventos por fuera de los presupuestos del artículo 7°, es decir sin condena previa en la jurisdicción contenciosa, tales como: condenas en la jurisdicción ordinaria en materia laboral a favor de trabajadores oficiales, condenas al Estado Colombiano en tribunales de arbitramento, o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc.; casos en los cuales se aplicarán plenamente las reglas de competencia previstas en el Código Contencioso Administrativo (...)" (Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación 11001-03-15-000-2007-00433(c) Consejero Ponente: MAURICIO TORRESCUERVO, once (11) de diciembre de dos mil siete (2007)*

Precisamente, el Doctor **JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ**, en su obra "El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo" de Ediciones Doctrina y Ley LTDA 2014, resume así el tema:

> *"La incompatibilidad entre la conexidad y la cuantía ya fue resuelta por la sala plena del Consejo de Estado, dando prelación a la conexidad para determinar el juez natural de la repetición.*
>
> *No se desconoce que el nuevo código es posterior, pero en materia de aplicación de las reglas de hermenéutica jurídica, el artículo 5 de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad de la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.*
>
> *De lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, por lo cual no siempre*

que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario al de una norma anterior resulta ésta derogada, pues deberá tenerse en cuenta criterio de la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3 de la Ley 153 de 1887 y 5 de la Ley 57 del mismo año.

Por último, no puede perderse de vista, que el legislador en el momento establecer los fueros de competencia para cada uno de los medios de control, no realizó ninguna precisión frente al medio de control de repetición, teniendo en cuenta que, la competencia ya estaba prevista en la Ley 678 de 2001.

Se quiere significar con lo anterior, que toda vez que el, C.P.A.C.A. no derogó de manera expresa la competencia establecida en la Ley 678 de 2001, esta disposición se encuentra vigente y teniendo en cuenta la especialidad de esta norma respecto de la acción de repetición, se debe aplicar la conexidad a fin de establecer el juez natural de la pretensión de repetición y no el factor cuantía". (pag. 170)

2. Caducidad de la acción declarativa de responsabilidad

El **artículo 29 de la Constitución Política** garantiza el derecho fundamental del *debido proceso*.

En tal virtud nadie puede ser juzgado ni condenado sino conforme a las leyes preexistentes a la conducta que se les imputa.

En este caso, se pretende la declaratoria de responsabilidad y subsiguiente condena a la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** por supuestamente haber omitido el deber –que no tenía, de notificar personalmente y no lo hiciera, a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** las liquidaciones anuales de sus cesantías en los períodos en los que éste prestó sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores ***en el exterior*** y se remontan desde **1990 hasta el año 2003**

Más aún, abarca lo que se pretende repetir, lo pagado a dicho exfuncionario en los períodos de **1990 hasta el año 2003** períodos éstos, -todos- durante los cuales rigió el Código Contencioso Administrativo promulgado por el **Decreto Ley 01 de 1984,** que lo fue hasta el **1º de julio de 2012,** con la entrada en vigencia, el 2 de julio del mismo año, de la Ley 1437 de 2011, *"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".*

En este orden, la acción de responsabilidad de los funcionarios por los eventuales daños antijurídicos causados por culpa grave o dolosa en el desempeño de sus

funciones (artículos 77 C.C.A.) en conexidad con la entidad (art. 78 C.C.A.), **caducó** a los **dos (2) años** de la presunta *omisión* (art. 136 ibídem)

Y sea del caso prevenir que otra es, por supuesto, la *caducidad* de la acción en cuanto a la *condena* sobre repetir lo pagado, que corre a partir del pago (Ley 1437 de 2011, art. 142) la cual, legal y constitucionalmente puede arrastrar la primera, si bien cabe lógicamente derivar de la responsabilidad la *condena* no así lo contrario, cuando aquélla no ha emanado del juicio previo y correspondiente, con las plenas garantías del *debido proceso* y dentro de la oportunidad fijada en la ley preexistente a la conducta imputada.

3. Inepta demanda

a) Por indebida acumulación de *pretensiones*

Se pretende bajo una misma cuerda, por el medio de control de repetición, que a la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** se la declare administrativamente responsable y se la condene a reembolsar al Ministerio de Relaciones Exteriores lo que éste, en cumplimiento de la **Sentencia C-535 de 2005**, pagó a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** por ajuste de cesantías de los períodos que esta laboró en el exterior, **desde 1990 hasta el año 2003** cuando aquélla se desempeñó como *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales* entre el **12 de diciembre de 1995 al 6 de mayo de 1996- 9 de diciembre de 1996 al 9 de marzo de 1997- 22 de mayo de 1996 al 22 de agosto de 1997** regía el Decreto Ley 01 de 1984 por el cual se expidió el anterior Código de lo Contencioso Administrativo, vigente hasta el 1º de julio de 2012, al que precedió la Ley 13 de 1984, subrogado por el Decreto Ley 2400 de 1998 y regía también, en materia disciplinaria, la Ley 25 de 1974 -Orgánica de la Procuraduría General- y su Decreto Reglamentario 3404 de 1983, parcialmente modificada y adicionada por la misma Ley 13 de 1984 y el mismo Decreto Ley 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, de manera que a la luz de lo establecido por el artículo 29 de la Constitución Política a la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS**no cabe enjuiciarla bajo el actual CPACA que rige en cuanto a la repetición y, en consecuencia no procede la acumulación, pues a voces del art. 165 del CPACA se exige que tanto lo relativo a la declaratoria de responsabilidad como la condena a reembolsar lo pagado, puedan enjuiciarse bajo la misma normativa.

De acuerdo al artículo 29 de la Constitución, ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y como está visto, las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que supuestamente la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS**no le notificó personalmente cuando esta fungía como **como** *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales* **desde el 12 de diciembre de 1995 al 6 de mayo de 1996- 9 de diciembre de 1996- 9 de marzo de 1997 y del 22 de mayo de 1996 al 22 de agosto 1997.** se remonta a los años **de 1994,1995 y 1996** y no pueden juzgarse sino a la luz de las normas preexistentes a dichas presuntas omisiones en el año de **1994- Hace 22 años, 1995-**

Hace 21 años, **1996- Hace 20 años** entre otras cosas, caducadas y prescritas pues según la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, vigente para la época de las conductas que a la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS**se endilgan, *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...."* (Artículo 5º).

Así, pues, la presunta responsabilidad que se le endilga a la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS**no es susceptible de enjuiciarse ***sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y no por este medio de control, sin campo alguno para pronunciarse legítimamente sobre una disposición de orden constitucional como la impartida en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005** que dio lugar al pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores le hizo en virtud del Acuerdo Conciliatorio celebrado.

De otra parte, según lo expuesto por el artículo 136 del C.C.A. preexistente a la conducta que se le endilga a la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS**la acción para derivar una eventual responsabilidad suya en el pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso hizo, caducó dos años después de la presunta omisión que se le endilga y también prescribió a los cinco (5) años la acción disciplinaria propia para definirla (art. 34 ley 200 de 1995), cuando han transcurrido desde entonces **no menos de trece (13) años y hasta veinticuatro años (24).**

Además, es infundada y falaz la afirmación de que de haberse notificado aquéllas liquidaciones anuales de cesantías, que en el proceso ni siquiera se conocen, hubiera prescrito la acción o caducado el derecho de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** puesto que la posibilidad de demandar nace desde el momento en que la Administración, al **retiro del servidor** no hace entrega de la suma correspondiente a este concepto, es decir omite el cumplimiento de su obligación.[2]

B. EXCEPCIONES DE FONDO

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

a. *Ineptitud sustantiva de la demanda;*
b. *Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad.*
c. *Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición*;
d. *Ilegitimidad de personería por pasiva;*
e. *Inexistencia de nexo causal;*

[2] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de septiembre de 2011 radicado interno (2005-2009).

f. *Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación;*
g. *Inexistencia de daño antijurídico;*
h. *Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso;*
i. *Falta de legitimación en la causa por pasiva;*
j. *Abuso del derecho; e,*
k. *Ilegitimidad del derecho sustantivo.*

EXPOSICIÓN DE LAS EXCEPCIONES DE FONDO

a. ***Ineptitud sustantiva de la demanda***

Derivada ésta del desconocimiento de las garantías constitucionales del derecho fundamental al *debido proceso*[3] a NO *"(...) ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (...) y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio..."*, pues fuerza distinguir en el proceso lo que atañe a la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial del demandado, la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS**como se pretende y lo que concierne a la eventual condena a retribuir lo pagado.

A lo primero, indiscutiblemente corresponde la aplicación de las normas preexistentes a la supuesta conducta omisiva de los implicados, del deber –si lo tenían-, de notificar personalmente a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO *año por año***[4], *las liquidaciones anuales* de sus cesantías, causadas en los años **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994-** Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996-**hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000-**hace 16 años, **2001-**hace 15 años-, **2002-**hace 14 años y **2003-**hace 13 años-, durante los cuales laboró al servicio del Ministerio de Relaciones en **el exterior,** pues rigió desde el **1º de marzo de 1984**[5] hasta el **1º de julio de 2012**[6], el Decreto Ley 01 de 1984 que reformó el Código Contencioso Administrativo[7] anterior.

Ahora bien, a efectos de derivar la responsabilidad que correspondiera a los funcionarios aquí implicados para la época en que supuestamente omitieron el deber, -si lo tenían-, de notificar personalmente las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** causadas en los años de **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994-** Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996-**hace 20 años-, **1997-** Hace 19

[3] Art. 29 C.P.
[4] Decreto 3118 de 1968 *"Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantías de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, reorganizado por la Ley 432 de 1998"*.
[5] Diario Oficial 36.439 del 10 de enero de 1984.
[6] Fecha de entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 "por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
[7] Ley 167 de 1941

años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años-, el **artículo 78** del Decreto Ley 01 de 1984, vigente en esos años, permitió que fueran demandados, en conexidad con la entidad pública, los funcionarios responsables de culpa grave o dolo en ejercicio de sus funciones, que le fueren generados a terceros (art. 77 *ibídem*), conforme a las reglas generales de los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, de ser así, fuera la misma la sentencia que dispusiera que el funcionario responsable satisficiera los perjuicios ocasionados a la Entidad, repitiendo contra el mismo lo pagado, para lo cual el término para hacerlo era de "***(2) dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa...***" establecido para las acciones de su género.

En cuanto a lo segundo, aspecto propio de la ritualidad de los procesos, es claro, que al tipo de acción incoada ha de dársele el trámite del medio de control judicial de repetición, sin que por ello pueda legitimarse a accionar, como se proponen, frente a los demandados en procura de una declaratoria de responsabilidad que caducó y sustrae al juez de proveer legítimamente al respecto, hoy décadas después de acontecido el supuesto incumplimiento del deber, si lo tenía, que a los demandados se les endilga, que en ese tiempo no cumplieron, válido, el demandante, que hoy el término para el medio de control de repetición caduca a *partir del pago,* y baste ésa consideración para traer ahora a este juicio a los demandados quebrantándoles todas las garantías constitucionales al debido proceso.

De ahí que, la demanda adolezca de la actitud sustantiva para derivar una condena en contra de los demandados, habiendo caducado como está visto cualquier acción encaminada a la declaratoria de la responsabilidad administrativa y patrimonial de los demandados por hechos que se remontan, como ya ha quedado visto, entre **trece (13) y veintiséis (26) años atrás**, enmarcados dentro de un ordenamiento legal preexistente y también, por supuesto, más favorable[8].

Descendiendo a la demanda, ésta se apoya en una sentencia en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores fue condenado a restablecer los derechos que por su parte le vulneró a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** con el reconocimiento y pago que le había hecho de las cesantías causadas a su favor durante los períodos de sus servicios al mismo **en el exterior**, en los años en que desempeñó el cargo referido de la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS**basándose en sumas inferiores a los salarios reales que el ex funcionario devengó, debiendo en consecuencia, re-liquidarle dicha prestación, conforme a lo ordenado en la Sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto Legislativo 10 de 1992, que el Ministerio siguió aplicando, no obstante su derogatoria con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993[9] y posteriormente la Ley 797 de 2003, de ninguna manera vinculante con los demandados, quienes son totalmente ajenos a las prácticas entronizadas en ese orden por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de donde se deriva el pago que por concepto de reliquidación de dichas cesantías, debió atender y

[8] Art. 53 C.P.
[9] T-1016 de 2000, Sentencia C-173 de 2004

no del reconocimiento de una indemnización ocasionado por un daño antijurídico que fuera imputable como se formula, a los demandados.

Es claro entonces, que no existe sentencia alguna de condena al pago a una indemnización que vincule a los demandados o que lo hubiese vinculado, conforme a las previsiones de los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984, ni pueda hacerlo ahora, lo cual conduce a la imposibilidad jurídica de despachar la demanda dada y, en consecuencia, la ineptitud sustantiva de la misma.

b. *Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad*

Siguiendo al tratadista *Bonnard,* quien participando de las mismas ideas de Deguit en materia de responsabilidad administrativa, lo que se advierte es una "falta de la administración" y la jurisprudencia ha advertido de *la responsabilidad* basada en una irregularidad de la actividad administrativa. Así, *"(...) Se ha deducido que la responsabilidad del patrimonio público surge cuando el daño resulta de una mala organización o de un funcionamiento defectuoso del servicio, y es, sin que sea necesario que en esa mala organización o defectuoso funcionamiento haya culpa de parte de un agente administrativo. Esto es lo que constituye la llamada culpa del servicio público, así denominada para indicar "que no hay culpa individualizada de un agente administrativo", sino solamente una irregularidad de origen anónimo y de aspecto objetivo en la organización y en el funcionamiento del servicio."*[10]

Y, como aquí se advierte la falta de la notificación personal de las liquidaciones anuales de cesantías a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores **en el exterior**, no fue, -está visto- un hecho aislado, sino que corresponde a una condición propia de un defectuoso servicio público de la entidad a falta de una regulación y apremios del orden de conformación y asignación de actividades puntuales, cuya omisión no cabe, pues, imputar individualmente a uno u otro funcionario con remisión a normas generales, sino que es más bien producto anónimo del funcionamiento de la Entidad, generador cuando menos de un ***error communis facit ius***[11] o, que hace derecho

Por otra parte, cabe señalar que de tiempo atrás la jurisprudencia ha establecido los requisitos para dar aplicación a la "doctrina del error común creador de derechos" o teoría de la apariencia[12], a saber:

1. *"Debe existir una situación que realmente sea contraria a la normatividad, pero oculta, es decir, (...) ajena en su etiología y desarrollo a quien eventualmente resultare perjudicado con la apariencia de juridicidad (...)*

[10] SARRIA B, Eustorgio y Mauricio. *Derecho Administrativo*. Editorial Pluma. Págs. 245 y 246
[11] Conc. artículo 8°. Ley 153 de 1887
[12] Al respecto se puede consultar la Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 3 de agosto de 1983, M.P. Dr. Jorge Salcedo Segura.

2. *Que esa situación de apariencia de legalidad esté respaldada en hechos, situaciones o documentos cuyo vicio no sea posible advertir con diligencia y cuidado.*
3. *Que la conducta de quien resultó perjudicado con la situación de aparente legalidad esté respaldada por una buena fe del particular (...)*
4. *Que la situación no esté regulada expresamente por una ley imperativa que imponga soluciones diferentes a las que resultarían de la aplicación de la doctrina".*

c. <u>Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición</u>

El Artículo 90 de la Constitución Nacional establece que:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este."

Adviértase la inexistencia de una condena o conciliación al Estado en la que conste la indemnización por la ocurrencia de un ***daño antijurídico,*** producto de la conducta dolosa o gravemente culposa imputable a mí representada, la doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS**.

Lo que ha traído el Ministerio como fundamento para sustentar la pretensión de repetición es una Conciliación que obliga a la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores a pagar a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las diferencias de cesantías originadas durante el tiempo en que aquel prestó sus servicios en el exterior, atendiendo lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 535-2005.

Así las cosas, el **Acuerdo Conciliatorio** tiene como fundamento el cumplimiento de una Sentencia de la Corte Constitucional - no de la ocurrencia de un daño antijurídico - elemento necesario para que se pueda predicar la procedencia de la acción de repetición. Asimismo, el pago efectuado corresponde al reajuste de cesantías que el Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** durante el tiempo en que esta prestó sus servicios en el exterior. De allí que tampoco pueda derivarse que el pago efectuado por el Ministerio haya sido en calidad de indemnización, como bien lo exige el Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.

Por otra parte, la **Ley 678 de 2001** *"Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.",* estableció la **acción de repetición** con el fin de restituir al Estado lo pagado, exclusivamente, a título de una indemnización, como *reparación* –directa- del **daño antijurídico** irrogado por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes, o de un acuerdo

conciliatorio u otra forma de terminación de un conflicto de responsabilidad civil contra una entidad pública.

Adviértase que cuando los hechos que generan la pretensión de repetición ocurren con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2001, se debe establecer la normatividad sustancial y material aplicable al caso en concreto. Al respecto ha indicado en Consejo de Estado que:

"En cuanto a las normas sustanciales, se tiene que las normas aplicables para dilucidar si el demandado actuó con culpa grave o dolo, serán las vigentes al tiempo en que tuvo lugar la conducta del agente estatal. En tal sentido, **las presunciones de dolo y culpa grave que traen los arts. 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 no pueden ser aplicables a casos concretos donde los hechos que generaron la repetición se dieron con anterioridad al 4 de agosto de 2001.**"[13]

Por su parte, establece el **artículo 142** de la **Ley 1437 de 2011**:

> ***Ley 1437 de 2011. Artículo 142.***
> ***"Repetición.*** *Cuando el Estado haya debido hacer un* ***reconocimiento indemnizatorio*** *con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.*
>
> *La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.*
>
> *Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño." (Negrillas fuera de texto)*

Como aquí está visto la demanda aquí incoada tiene como base lo pagado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de la diferencia de cesantías surgida por efecto de los servicios que prestó dicha entidad **en el exterior,** devengando realmente sumas inferiores a las que realmente devengó y el Ministerio le liquidó cuando prestó sus servicios desde **1990 hasta el año 2003** en cumplimiento a lo dispuesto en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el día 29 de marzo de 2012**, no es vinculante con los demandados ni podría serlo, pues no fueron llamados al mismo con fines de repetición ni citados como terceros ni en ninguna otra condición que les permitiera haber sido **oídos** y ejercido su legítimo derecho de *contradicción,* petición y discusión de pruebas para su defensa, como lo garantiza el debido proceso que consagra el **artículo 29** de la Constitución Política.

[13] Sentencia Consejo de Estado, Expediente 25000232600020030030001 (28.448) del 31 de agosto de 2006.

Por eso, tal acuerdo no les es oponible, por lo que constitucional y legalmente es posible derivar en su contra la declaratoria de responsabilidad e imposición de la condena que se procura.

d. *Ilegitimidad de personería por pasiva*

Aun cuando se demanda, entre otros, a la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** por supuestamente haber omitido el deber – si lo tenía- de notificar las liquidaciones anuales de cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** en los periodos entre el **12 de abril de 1993 hasta el 21 de mayo de 1996,** cuando aquélla se desempeñó *como Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales* la acción de repetición se encamina a obtener indistintamente del mismo el pago que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES hizo a aquélla, de la suma de **$133.148.564** por el reajuste anual de sus cesantías liquidadas como inicialmente lo fueron, sobre sumas inferiores a los salarios reales que devengó durante los periodos de sus servicios en el exterior y corresponden a los años de **1990-** Hace 26 años-, **1991**- Hace 25 años-, **1992**- Hace 24 años-, **1993**- Hace 23 años-, **1994**- Hace 22 años, **1995**-hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años, **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años, cuando la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** ninguna vinculación, ni relación funcional, administrativa ni causal tuvo al frente de las liquidaciones anuales de cesantías que el MINISTERIO le liquidó a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Luego no existe legitimación en la causa por pasiva entre el MINISTERIO y la doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** para que aquel demande indistintamente, sin relación de proporcionalidad ni de racionabilidad alguna, lo comprendido en la totalidad de lo pagado que se pretende repetir, lo generado por todo el tiempo reliquidado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.**

e. *Inexistencia de nexo causal*

La *causa* generadora del pago, vertida en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012,** que obligó al Ministerio de Relaciones Exteriores a reliquidar las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en los períodos de sus servicios en el exterior, conforme a los salarios reales que entonces devengó y no sobre las sumas inferiores que en esa época el Ministerio le liquidó, tiene su origen en la Ley 6ª de 1945 -art. 17- en razón de la vinculación de naturaleza laboral, de carácter legal y reglamentaria, que compromete exclusivamente, como empleador, al Ministerio de Relaciones Exteriores y lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**. En ningún caso por causa de la demandada, la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS**.

En cumplimiento de la Sentencia C- 535-2005, que declaró inexequible el Artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, y ordenó liquidar las cesantías de los funcionarios que laboraron en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores teniendo en cuenta en el Ingreso Base de Liquidación la suma total de los salarios reales devengados durante los periodos laborados en el exterior, se llegó al **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012,** que corresponde a lo que el Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de *reajuste de cesantías* según lo establecido en la Sentencia C- 535- 2005.

Así, aquello en lo que funda la pretensión de repetición el Ministerio atinente a la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaron las cesantías, para efectos de que pudiese operar el fenómeno de la prescripción trienal de las acciones laborales es completamente inane habidas las siguientes consideraciones:

Primero: Siendo la cesantía una prestación de carácter unitario, el término para iniciar el cómputo de la prescripción trienal de la acción laboral solo puede ser al momento de la finalización de la relación laboral que coincide con el momento a partir del cual se hace exigible el derecho por parte del trabajador. Así lo ha entendido el Consejo de Estado al establecer que: "[...] se concluye que **mientras esté vigente el contrato de trabajo, no se puede hablar de prescripción de la cesantía como derecho social.**"[14]

Habida cuenta de lo anterior, mal puede hablarse de prescripción de las cesantías contada a partir de la notificación ***anual*** de dicha prestación, pues ninguna de ellas es independiente de las demás. Son partes de un todo que conforman una prestación unitaria.

Al ser una prestación social de *carácter unitario* cuya exigibilidad solo se produce a partir de la finalización de la relación laboral, resulta inane la notificación anual de dichos actos administrativos para el cómputo de la prescripción trienal. De tal forma que con notificación o sin ella, la causa generadora del pago no es la supuesta omisión de la notificación anual de los actos administrativos de liquidación. Esta se genera en el cumplimiento de la Sentencia C- 535- 2005 de la Corte Constitucional.

Segundo: Fue a partir del 24 de mayo de 2005 con la Sentencia C- 535-2005 de la Corte Constitucional que se conoció e hizo exigible para el Ministerio de Relaciones Exteriores la obligación de liquidar y pagar el reajuste de las cesantías en los términos de dicho fallo y el derecho correlativo de los funcionarios a reclamar su efectividad.

Así, el término de inicio para el cómputo de la prescripción trienal es la fecha de expedición de la sentencia de la Corte Constitucional; fecha a partir de la cual se hizo exigible la obligación. No antes, que es lo que predica la demanda pretendiendo inferir responsabilidad en cabeza de la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** por supuestamente haber omitido la notificación anual de los actos administrativos de liquidación de las cesantías.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "B", sentencia del 22 de enero de 2015, Radicado interno (4346-13)

La verdadera causa del pago es la Sentencia C- 535- 2005 del 24 de mayo de 2005 que declaró inexequible el Artículo 10 del Decreto Ley 10 de 1992, que establecía el pago de las cesantías de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando laboraban en el exterior, con base en las asignaciones salariales de cargos equivalentes en la planta interna. Teniendo en cuenta que los efectos de las sentencias de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro, a menos que la Corte resuelva lo contrario, en los términos del Artículo 45 de la Ley 270 de 1996, la eventualidad del término prescriptivo trienal encaminado al reajuste de las cesantías es la fecha de expedición de la Sentencia.

Así lo ha entendido el Consejo de Estado en varias providencias al manifestar que:

"[...] Conforme a lo antes indicado se precisa que existía un obstáculo de orden legal que no permitía liquidar las prestaciones de los empleados del servicio exterior, con base en lo que devengaban sino sólo de acuerdo con los valores equivalentes a los de la planta interna, de manera que se puede decir, como ya lo ha precisado esta Sala, que el derecho a devengar la cesantía liquidada con base en lo devengado en el servicio exterior, sólo surgió, con certeza, a partir de la expedición de las sentencia referida, pues antes, es evidente que la entidad pública se abstenía de liquidarla.

A partir de la remoción del obstáculo normativo cuya sentencia fue proferida el 24 de mayo de 2005, el demandante estaba legitimado para pedir el reconocimiento de su derecho, por ende, no es procedente declarar la ineptitud sustantiva de la demanda, conforme lo pidió la entidad recurrente en el recurso de alzada.[15]"

Por su parte, indicó en Sentencia del 6 de julio de 2011, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren:

"[...] Además, con el pronunciamiento de inconstitucionalidad efectuado por la Corte Constitucional en sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, efectuado el 24 de mayo de 2005, la parte demandante quedó legitimada para reclamar la reliquidación de sus prestaciones, en especial de sus cesantías, porque la vigencia y aplicabilidad del aludido artículo, impedía su reconocimiento.

El fallo recurrido amerita ser confirmado porque pese a que la sentencia de la Corte Constitucional C-535 de 2005, fue proferida luego de que se causaron las respectiva anualidades en las que el demandante prestó sus servicios en el exterior, y ésta tiene efectos hacia el futuro, lo cierto es que, por las razones arriba expresadas, es procedente declarar la denominada excepción de inconstitucionalidad para darle prevalencia a la interpretación constitucional y así, **en aplicación de los principios de primacía de la realidad frente a las formas y favorabilidad evitar que una norma que es inconstitucional desde sus orígenes produzca efectos en los trabajadores**

[15] Sentencia Consejo de Estado del 4 de noviembre de 2010, M.P: Víctor Hernando Alvarado Ardila, Exp. No. 1496-2009,

del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestaron sus servicios en el exterior."

Estas sentencias encuentran su fundamento en que la fecha a partir de la cual se hizo exigible el derecho a la reliquidación de la cesantía por parte de los funcionarios que laboraban en el exterior, es el 24 de mayo de 2005; fecha de expedición de la Sentencia C-535 de 2005. Esto es así teniendo en cuenta que solo con la promulgación de la Sentencia de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del Artículo 57 del Decreto extraordinario 10 de 1992, se declaró el derecho de los funcionarios que laboraron en la planta exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de exigir la reliquidación de sus cesantías con base en el salario realmente devengado. En este punto fuerza distinguir *la exigibilidad de la cesantía misma que, dada su naturaleza, se da al momento de desvinculación del trabajador* y la *exigibilidad de la reliquidación del auxilio de cesantía que sólo puede computarse a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005.*

Por su parte, son varios los pronunciamientos judiciales proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los que ha interpretado que los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que no hayan exigido la reliquidación de sus cesantías dentro del término de tres años contados a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005, aplica la excepción previa de prescripción extintiva de los derechos laborales.

En relación con lo anterior, los procesos judiciales en los que se ha aplicado esta posición son:

1- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-01180-00. Demandante: Martha Angélica Marín Colorado- Demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

2- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-01182-00. Demandante: Sofía Salgado de Goméz- Demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

3- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-0018500.

Mediante auto del 22 de octubre de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C- 535 de 2005.

En síntesis, el argumento esbozado en la demanda en virtud del cual se generó un daño antijurídico por la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaban el auxilio de cesantía, impidiendo así que operara la prescripción trienal de los derechos, carece de todo sustento jurídico y se constituye en un abuso del derecho de acción por parte de la Cancillería. Además, es de mala fe buscar repetir lo pagado a **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** por haberse cumplido la Sentencia C-535-2005, que reiteró que la pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le corresponde.

f. *Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación*

De otra parte, de conformidad con lo establecido en el **artículo 19 del Decreto 1716 de 2009**, el *Comité de Conciliación* del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** no es el competente para decidir que la conducta de la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** sea *gravemente culposa* por los hechos u omisiones que se le endilgan. Dicha *competencia* es privativa del Superior disciplinario[16] y con observancia del *debido proceso* que descansa en la garantía constitucional a ser *oída* y ejercer la *defensa* que, en ese orden, no se dio.

En tal sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado[17] en respuesta a la consulta formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto de los estudios que deben realizar los comités de conciliación de las entidades públicas para determinar la procedencia de la acción de repetición, advirtió lo siguiente:

> *"El alcance de los estudios y evaluaciones que debe realizar el comité de conciliación para determinar la procedencia de la acción de repetición, está dado por los requisitos fijados en la normatividad vigente, (...). En desarrollo de dichos estudios, el comité de conciliación* ***no puede invadir la competencia atribuida a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,*** *al cuestionar los argumentos que sirvieron de fundamento al fallador"* (Resalto).

[16] Ley 734 de 2002 –Código Disciplinario Único-
[17] Rad. No. 1634. C.P. Dra Gloria Duque Hernández.

Por lo anterior, concluye el Alto Tribunal que los estudios que debe realizar el comité *"(...) deben dirigirse a demostrar los presupuestos fácticos en que se basa la presunción a favor del Estado"*[18].

g. *Inexistencia de daño antijurídico*

El pago realizado, que se pretende repetir en contra de la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** consiste en el reconocimiento, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la diferencia a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, siendo aquél su empleador, generada en la incompleta liquidación de sus cesantías, realizada sobre sumas inferiores a los salarios realmente devengados por el mismo cuando prestó sus servicios a dicha entidad en el exterior, en el período de la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** y otros más cuyo producto se encuentra incluido en el total demandado y tienen por única y son el producto exclusivo de una prestación de naturaleza laboral, nacida del vínculo legal y reglamentario habido entonces entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que establece la Ley 6ª de 1945, y obedece para el caso a lo ordenado en la Corte Constitucional en la sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.

En tal orden, el **Acuerdo Conciliatorio**, versó sobre la reliquidación de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, ordenando al Ministerio a dicho pago en cumplimiento de la Sentencia C-535-2005.

De ahí pues, que no pueda válidamente predicarse la existencia de un pago constitutivo de **"daño antijurídico"**, como sí por el contrario, lo fue de una prestación legal de carácter laboral, legítima como quiera que estaba basada en la Ley 6ª de 1945, en el *trabajo* que merece la especial protección del Estado (art. 25 de la Constitución Política) y en la *cosa juzgada* constitucional emanada de la sentencia C-535 de 2005.

h. *Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso*

El **Acuerdo Conciliatorio** que trae el Ministerio de Relaciones Exteriores como base de la acción de repetición, no es constitutivo de condena alguna de la responsabilidad de la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** ni podría hacerlo so pena de violación del debido proceso, puesto que al trámite judicial, no fue éste convocado, ni citado u oído de manera que hubiera podido ejercer su derecho de contradicción, de oportunidad de pruebas y defensa sobre en orden a determinar la existencia y el grado de una eventual responsabilidad *conexa* a la del Ministerio de Relaciones Exteriores la cual, además, ya habría caducado conforme a las normas preexistentes a la presunta ocurrencia de la omisión al deber que aquí se le endilga remontándose a trece (13) y

[18] Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 1634 de 2005.

más años atrás, de donde siguiese necesariamente la improsperidad de una condena en su contra.

i. ***Falta de legitimación en la causa por pasiva***

La Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** no tenía la función que se le endilga de notificar personalmente las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en el exterior.

De una parte porque dicha función no se encuentra específica ni determinada en el **Decreto No. 2126 de 1992,** ni en la **Resolución 033 del 11 de enero de 1994 (Manual Descriptivo de Funciones),** vigentes para la época en que mi representada se desempeñó como *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales.*

Por otra parte, a mi representada se le llama a responder en repetición respecto de las liquidaciones anuales de cesantías por unos periodos **anteriores** y ***posteriores*** a su desempeño como *como Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales.* Así, **anteriores** desde 1990 hasta el 11 de abril de 1993; ***posterior*** desde el 22 de mayo de 1996 hasta el año 2003, conforme el periodo que la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** prestó sus servicios en el exterior.

Además de lo anterior, durante los periodos desde 1990 hasta el año 2003 correspondiente a las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, éste se encontraba y permanecía en el exterior, circunstancia que constituye un imponderable fuera de la órbita del desarrollo de las tareas habituales de la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** quien se encontrara en la *planta interna* del Ministerio de Relaciones Exteriores entre el **12 de abril de 1993 hasta el 21 de mayo de 1996,** lo que permite asumir que a quien habría correspondido notificar personalmente los respectivos actos administrativos, si los hubo, de liquidación anual de cesantías, fue a quienes desempeñaron funciones Consulares[19]. Entre ellas las de carácter administrativo, como fuera la de dar a conocer a los Funcionarios de la Misión, los actos administrativos de carácter particular de interés del propio Ministerio.

j. ***Abuso del Derecho*** -Temeridad o mala fe por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores-

Se demanda aquí, entre otros, a la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** por haberse desempeñado en el Ministerio de Relaciones Exteriores como *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales* del **12 de abril de 1993 al 21 de mayo de 1996** y a quien se le endilga haber faltado al deber que no tenía, de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, correspondientes al lapso comprendido desde 1990 hasta el año 2003, pues como a simple vista se puede apreciar el periodo

[19] Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, artículo 5°

comprendido desde el 22 de mayo de 1996 hasta el año 2003, es **posterior** a su designación como *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales.*

Lo mismo que sucede, infiriéndose la falta de buena fe debida en sus actuaciones por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, y abuso de su derecho a demandar en **87 procesos** más, de iguales presupuestos, por las liquidaciones anuales de las cesantías generadas a favor de Ignacio Enrique Ruiz Perea, Lilia Stella Cepeda Ulloa, Zaida Patricia Cristancho Guerrero, Gladys Cecilia Acosta Vidal, Luis Guillermo Becerra Torres, MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGASFernando Alzate Donoso ,Enrique Antonio Celis Durán, Ana Cecilia Pulido Guerrero, Francia Rodríguez Romero, María del Pilar Gómez Valderrama, Armando González Cortés, Eduardo Alonso Rodríguez, Myriam Duarte Bernal, Consuelo del Socorro Tirado, Reinaldo Vélez Londoño, José Fernando Cendales, Eduardo Casas Acosta, María Nelly Tascón Maya, María Eugenia Beltrán de Chaparro, Miguel Camilo Ruiz Blanco, Esperanza Castro Duque, Raúl Arturo Rincón, Martha Osorio Villamizar, Divia Desideria Cepeda, Felicia Mercedes Valera, Blanca Marina Villacrees, Nydia Inés Aguirre Acevedo, Janneth Victoria Truque P, Adda Isabel Borda Medina, Edgardo Alfredo Llorente Méndez, Luis German Estrada, Henry Javier Arcos, María Helena Londoño, Patricia Klein, María Victoria Eugenia Senior Pava, Julia Inés Mora López, Maria Cristina Guerrero López, Margarita Eliana Manjarrez Herrera, René Correa Rodríguez, Gladys Mireya Paéz Herrera, Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez, Alberto Bula Bohórquez, María Helena Pastrana Pastrana, María Inés Herreño Pinto, María Smith Rueda Centeno, Juan Norberto Colorado Correa, Amparo Flórez López, Álvaro Sandoval Bernal, Alicia Alejandra Alfaro Castillo, Pablo Antonio Rebolledo Schools, Alejandro Borda Rojas, Carlos Rodríguez Bocanegra, Miguel Ángel Rodríguez Melo, Edwin Ostos Alfonso, Mauricio González López, Jaime Girón Duarte, Nacianceno López Restrepo, Rafael Juan Carlos Espinosa, Santiago Salcedo, Mery Cecilia Hurtado, Flor Ángela Martínez, Alberto Barrantes Ullos, Juan José Quintana A, Carlos Arturo Forero, Olga Cielo Molina de la Villa, Hernán Vargas Martín, Álvaro Enrique Ayala Meléndez, Carmen Estavana Zapateiro B, Fernando Salavarrieta García, Marcela Ordóñez Fernández, Gilberto Poveda Rodríguez, Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi ,Alfonso de Jesús Vélez Rivas, Fabio Emel Pedraza Pérez, Ana del Socorro Bornacelli Guerrero, Marcela Rodríguez Velandia, Alvaro Eugenio Márquez Sarmiento, Javier Darío Higuera Ángel, Carlos Arturo Morales López, Daniel Ávila Camacho, José Antonio Solarte Gómez, Blanca Stella Barrero Barrero, María Consuelo Porras, Concepción Concha Agudelo.

i. ***<u>Ilegitimidad del derecho sustantivo</u>***

Existe Ilegitimidad del uso del derecho sustantivo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por cuanto lo que se pretende es el REEMBOLSO de una prestación social como lo es el **auxilio de cesantías**, cuyo PAGO emana de la OBLIGACION LEGAL de aquélla, producto del VINCULO LABORAL con la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Aquello que la causa en que se fundan las pretensiones del actor, devienen del supuesto deber de haber notificado o no las liquidaciones, es un sofisma para distraer la atención del verdadero derecho sustantivo que es aquélla -las cesantías- y no éste, porque con razón o sin ella, el derecho a dicha prestación, existe, en virtud de lo dispuesto por la **Ley 50 de 1990** y por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**.

Dada la *materia*, de acuerdo a la cuantía cuyo valor pretende que se le reembolse por los funcionarios o ex funcionarios demandados, pues se trata de una prestación social de carácter laboral, nacida del vínculo de trabajo que existió entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y aquélla a quien se realizó el pago, en el cual el Ministerio es, por el contrario, deudor de la obligación, conforme al artículo 249 del C.S.T., que establece el auxilio de cesantía, y lo dispuesto en la Sentencia de Constitucionalidad C-535 de 2005, toda vez que la causa de lo pagado, es producto de dicho fallo que le impuso a dicha entidad, la obligación de liquidar tales prestaciones con base en el salario realmente devengado por la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, durante los periodos de sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior desde 1990 hasta el año 2003, y para cuyo cumplimiento no puede predicarse la existencia como engañosamente se formula, de una indemnización, que diera lugar al daño antijurídico.

V. FUNDAMENTACIÓN DE LA DEFENSA

a. Fáctica

Lo que da origen a lo pagado, cuyo monto se pretende *repetir*, corresponde al **derecho** de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** al reconocimiento y pago de las diferencias a su favor por concepto de ***cesantías*** desde 1990 hasta el año 2003 de acuerdo con los salarios que en esos períodos realmente devengó[20]

No es, pues, racional, ni lógico y sí sofístico, afirmar como lo expone la demanda, que obedezca al deber que en el período del **12 de abril de 1993 hast el 21 de mayo de 1996,** la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** habría tenido y ***omitiera*** *"(...) en su condición de Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales ...",* de notificar *personalmente* a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, sus ***cesantías*** anuales desde 1990 hasta el año 2003 e impedido así, con *culpa grave,* que no ocurriera el fenómeno *prescriptivo* trienal de las acciones laborales y de caducidad de las propias ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que le hubieran permitido al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES eludir el reconocimiento y pago de dicha prestación conforme a los salarios reales que en esos períodos la misma devengó, incrementándose su valor, que es lo que al Ministerio le resulta *antijurídico* y asume como el *daño* que alega le irrogó

[20] Sentencia C-535 de 2005

pagar lo que, inclusive despojado de las acciones llamadas a hacer efectivo el cobro de lo debido, persiste jurídicamente como una *obligación natural* que encuentra en su naturaleza la causa legítima del pago, que, en consecuencia, no cabe *repetir*.

De manera que del Catálogo de Funciones mencionados genéricamente no se desprende la prueba que permita afirmarse, como lo expresa la demanda, que la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** tuviera el deber de *notificar personalmente* las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** con destino al Fondo Nacional del Ahorro **desde 1990 hasta el año 2003** tampoco era esa la *práctica común* adoptada al respecto como política general por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por eso, *repetir* lo pagado generaría más bien, un *enriquecimiento sin causa* en cabeza de **LA NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**, a la vez que le irrogaría un injusto *empobrecimiento* a la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** por cierto, el extremo débil de la relación laboral que se le opone para sustentar la acción.

b. Jurídica

La Ley 6 de 1945, establece la obligación del empleador, en este caso el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, de reconocer y pagar al trabajador el auxilio de **cesantía**, un mes de salario por año de servicio, o proporcionalmente a su fracción, debiéndose tener por *salario* todo emolumento que este reciba ordinariamente en desarrollo de su vinculación laboral.

Ahora bien, la Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005 en materia de cesantías de los funcionarios y ex funcionarios que prestaron servicios al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en el exterior, sobre las mismas consideraciones que antes en materia de *pensiones* sirvieron de sustento a la Sentencia C-173 del 02 de marzo de 2004, definió que dicha prestación debe corresponder a los salarios realmente devengados y que una disposición como la que contenía el Decreto 10 de 1992 (art. 57[21]) y retomó el Decreto Ley 274 de 2000 (art. 66[22]), que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 derogó, no debieron aplicarse y sí, haber acudido la Entidad a la *excepción de inconstitucionalidad,* lo que no se hizo y vino a remediar el Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012 y aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F". En tal virtud, lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de sus ***cesantías*** anuales en el periodo comprendido desde **1990 hasta el año 2003**, no es de carácter indemnizatorio, por lo que no le ocasiona legítimamente a LA NACION -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- un detrimento patrimonial, presupuesto inescindible de la acción de repetición.

[21] Declarado Inexequible Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.
[22] Declarado Inexequible Sentencia C-292 de 2001.

De otra parte, si como está visto durante varios años, desde 1990 hasta el año 2003 todos los quince (15) ex funcionarios aquí y en otros procesos[23] también demandados, siempre hicieron u omitieron lo mismo como lo afirma la demanda, lógico es colegir que esa fue sistemáticamente la política establecida sobre la materia por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y no la manifestación independiente y autónoma de la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** por la que deba responder patrimonial ni administrativamente, pues habríase dado *culpa* de la propia Entidad que la exime al respecto y cuanto más, un ***error communis facit ius***[24] o, que hace derecho.

Por lo anterior, en este caso no puede afirmarse que se hayan configurado los elementos para considerar probada la culpa grave de la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** conforme lo prevé el artículo 6º de la Ley 678 de 2001 y, en tal sentido, se trae a colación lo expuesto por el H. Consejo de Estado respecto a la carga de la prueba en la acción de repetición (denominada pretensión con la Ley 1437 de 2011):

> *"Es claro que el solo desconocimiento de la norma por el operador jurídico encargado de aplicarla a través de actos administrativos (...) no implica de plano una responsabilidad a título de imputación de culpa grave o dolo, puesto que, en estos casos, existe un margen de error admisible en condiciones normales y más aún extraordinarias cuando se trata de la interpretación y ejecución de las normas jurídicas o de la percepción de la realidad atendiendo las circunstancias específicas del caso, toda vez que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de la función pública se trata de una labor humana, que implica la posibilidad de yerros en las actuaciones. Como en el sub exámine no son procedentes las presunciones de dolo y culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001, por la echa de ocurrencia de los hechos, dichos conceptos requieren de una carga probatoria mayor por parte de la entidad pública en cuanto que debe desplegar una actividad prolifica tendiente a demostrar y acreditar el dolo y la culpa grave..."*[25].

Por otra parte, los servidores públicos tienen un régimen de responsabilidad subjetivo y, en consecuencia, el título de imputación, sea dolo o culpa grave, debe estar plenamente demostrado dentro del proceso en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, pues el mismo no se presume en estos casos. En otras palabras, no basta simplemente citar uno de los presupuestos de la ley para que se configure la pretensión de repetición, debe acreditarse en debida forma la actuación dolosa o gravemente culposa del agente demandado.

---

[23] Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B", Radicados **2014-00835-00** y **2014-00841-00**, J. 4° Administrativo de Descongestión Radicados **2014-00004-00** y **2013-00440-00**, J. 8° Administrativo del Circuito Radicado **2013-00622-00**, J. 9° Administrativo del Circuito, Radicados **2014-00026-00, 2014-00065-00, 2014-00260-00** y **2014-00605-00**, J. 31 Administrativo del Circuito Radicados **2014-00092-00, 2014-00111-00, 2013-00244-00, 2014-00286-00, 2014-00479-00, 2014-00304-00** y **2014-00387-00**, J. 35 Administrativo del Circuito Radicados **2013-00056-00, 2014-00467-00, 2014-00467-00, 2014-00152-00** y **2014-00399-00**, J. 37 Administrativo del Circuito Radicados **2013-00087-00, 2013-00115-00, 2013-00123-00, 2013-00303-00, 2013-00304-00, 2013-00479-00** y **2013-00480-00**, entre muchos otros.

[24] Conc. artículo 8°. Ley 153 de 1887

[25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Rad. 11001032600020030001901, Número interno 24953, C.P. Dra. Ruth Stella Correa.

Ahora bien, se advierte que existen serias y graves deficiencias respecto de las pruebas que ordenan a la entidad pública al pago de las diferencias de cesantías a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** que, en este caso, corresponde al **Auto de aprobación de la conciliación proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"**, ya que tal documentos debió ser aportados con la demanda en originales según lo dispone el Art. 245 del C.G.P: "[...] *Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en donde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.*

En un asunto similar al que nos ocupa, la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó:

> *"Por tanto, las copias aportadas por la entidad demandante carecen de valor probatorio, porque, en tratándose de copias de documento público (...), para que puedan ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial, deben reunir las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra la diligencia de autenticación.*
>
> *En ese orden de ideas, se concluye que no está demostrado dentro del proceso el primero de los hechos generadores de la acción de repetición, cual es la existencia de una sentencia (o providencia) que condene al Estado a reparar patrimonialmente un daño antijurídico,* ***situación que por sí sola implica que se deben negar las pretensiones de la demanda, en tanto ello tiene incidencia en la acreditación de los otros requisitos (...)"***[26] (Resalto).

De esta manera, se reitera lo establecido en el Artículo 173 del Código General del Proceso que establece el deber por parte de los jueces de *abstenerse de ordenar la práctica de pruebas* que directamente, o por medio del derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que la solicite.

VI. PRUEBAS

Ruego al Señor Juez, decretar y tener como pruebas de mi parte, las siguientes:

VI.1 Documental

a) **Aporto** poder original con que actúo.

b) **Se oficie**

[26] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sent. del 28 de febrero de 2011, Rad. 34.816. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

1. A la Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso y con base en sus *archivos*, se informe sobre los documentos, si los hubiere, que sirvieron de soporte para la erogación del *gasto*, por concepto de las **cesantías** anuales **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde 1990 hasta el año 2003;

2. Al Fondo Nacional del Ahorro FNA, para que con destino al proceso, se informe sobre los documentos remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, soportando los depósitos efectuados por el mismo a favor de **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde 1990 hasta el año 2003;

3. A la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se informe y remita copia de las resoluciones por medio de las cuales el Ministro de Relaciones Exteriores delegó, como ordenadores del gasto, entre otros, lo que es hoy la Dirección Administrativa y Financiera, el *pago* al Fondo Nacional del Ahorro de los depósitos de cesantías anuales del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde 1990 hasta el año 2003

4. A la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se dé cuenta, individualizándolos de los demás funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quienes, como en este caso a la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** se ha demandado o dispuesto demandar en acción de repetición, por supuestamente haber omitido *notificar personalmente,* las cesantías anuales depositadas al Fondo Nacional del Ahorro, indicando los cargos y periodos por los que en cada caso se les llama a responder;

5. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se remita copia de las liquidaciones, **año por año**, de las cesantías de **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde 1990 hasta el año 2003 y particularmente en el periodo ***desde el 12 abril de 1993 hasta el 21 de mayo de 1996,*** como dice la demanda, conciliadas por un total de **$133.148.564** cuyo monto se pretende repetir sin razón de proporcionalidad alguna, entre otros, en contra de la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS**.

Procura esta prueba establecer que los hechos u omisiones, en relación con el deber que se dice *supuestamente* tenía la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** de notificar a **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** las cesantías por el periodo desde 1990 hasta el año 2003 habría sido cuanto más, una política sistemática y generalizada del Ministerio de Relaciones Exteriores, generadora, como tal, de un *error communis facit ius*, imputable a la *propia culpa* de la entidad.

6. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores o a quien en su defecto, corresponda, (art. 21 CPACA) a fin de que con destino al proceso de cuenta del lugar donde el Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** se desempeñaba al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior, en los

años desde 1990 hasta el año 2003 a los que corresponden el pago que se le hizo de las cesantías, por cuya cancelación se pretende repetir y se diga qué condiciones de traslado, si se encontraba en el exterior, tenían los demandados para notificarle personalmente allí las liquidaciones anuales de dicha prestación durante tales periodos, a que alude la demanda.

Con esta prueba pretendo demostrar la imposibilidad real que los demandados, y en este caso, la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** tenía para haber cumplido el deber que supuestamente tenían de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de las liquidaciones anuales de cesantías, encontrándose el mismo en el exterior, con mayor razón si esa era una condición extendida en todo el mundo, donde tenían asiento las distintas Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia.

7. A los siguientes Despachos Judiciales, para que a mi costa, y a fin de que por sus respectivas Secretarías se certifique la existencia de tales procesos instaurados por el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** en acciones de repetición, por la misma causa del que en este caso nos ocupa:

Pago realizado a:	Despacho Judicial	Radicado Proceso
Ignacio Enrique Ruiz	Consejo de Estado-Sección III-Sub B	**2014-00043-00**
Lilia Stella Cepeda Ulloa	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	**2014-00835-00**
Zaida Patricia Cristancho Guerrero	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	**2014-00841-00**
MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS	J. 4° Admtivo de Descongestión	**2014-00004-00**
Fernando Alzate Donoso	J. 4° Admtivo de Descongestión	**2013-00440-00**
Enrique Antonio Celis Durán	J. 8° Administrativo del Circuito	**2013-00622-00**
Ana Cecilia Pulido Guerrero	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00026-00**
Francia Rodríguez Romero	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00065-00**
María del Pilar Gómez Valderrama	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00260-00**
Armando González Cortés	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00605-00**
Eduardo Casas Acosta	J. 16 Administrativo del Circuito	**2013-00599-00**
María Nelly Tascón Maya	J. 18 Administrativo del Circuito	**2013-00511-00**
María Eugenia Beltrán de Chaparro	J. 19 Administrativo del Circuito	**2013-00128-00**
Miguel Camilo Ruiz Blanco	J. 19 Admtivo Descongestión Cto	**2014-00200-00**
Janeth Victoria Truque Rivera	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00188-00**
Raul Arturo Rincón Ardila	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00037-00**
Henry Javier Arcos Muñoz	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00391-00**
Nidia Inés Aguirre Acevedo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00084-00**
María Inés Aldana Nieto	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00036-00**
Anyul Molina Suarez	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00211-00**
Mauricio Baquero Pardo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00268-00**
Álvaro Eugenio Márquez Sarmiento	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00183-00**
Marcela Rodríguez Velandia	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00238-00**

Cruz Elena Mosquera Monteros	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00009-00**
María Victoria Eugenia Senior Pava	J. 23 Administrativo del Circuito	**2013-00392-00**
Margarita Eliana Manjarrez Herrera	J. 26 Administrativo del Circuito	**2013-00535-00**
René Correa Rodríguez	J. 27 Administrativo del Circuito	**2013-00211-00**
Gladys Mireya Paéz Herrera	J. 27 Administrativo del Circuito	**2014-00314-00**
Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez	J. 30 Administrativo del Circuito	**2013-00597-00**
Alberto Bula Bohórquez	J. 30 Administrativo del Circuito	**2014-00071-00**
María Helena Pastrana Pastrana	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00092-00**
María Inés Herreño Pinto	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00111-00**
María Smith Rueda Centeno	J. 31 Administrativo del Circuito	**2013-00244-00**
Juan Norberto Colorado Correa	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00286-00**
Amparo Flórez López	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00479-00**
Álvaro Sandoval Bernal	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00304-00**
Alicia Alejandra Alfaro Castillo	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00387-00**
Pablo Antonio Rebolledo Schools	J. 32 Administrativo del Circuito	**2014-00118-00**
Alejandro Borda Rojas	J. 32 Administrativo del Circuito	**2013-00389-00**
Hector Montoya Añez	J. 32 Administrativo del Circuito	**2014-00153-00**
Carlos Rodríguez Bocanegra	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00316-00**
Miguel Ángel Rodríguez Melo	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00317-00**
Edwin Ostos Alfonso	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00383-00**
Mauricio González López	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00384-00**
Jaime Girón Duarte	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00430-00**
Nacianceno López Restrepo	J. 34 Administrativo del Circuito	**2013-00279-00**
Álvaro Enrique Ayala Meléndez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2013-00056-00**
Carmen Estavana Zapateiro B.	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00467-00**
Fernando Salavarrieta García	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00152-00**
Marcela Ordóñez Fernández	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**
Gilberto Poveda Rodríguez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00399-00**
Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi	J. 36 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**
Alfonso de Jesús Vélez Rivas	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00087-00**
Fabio Emel Pedraza Pérez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00115-00**
Ana del Socorro Bornacelli Guerrero	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00123-00**
Javier Darío Higuera Ángel	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00303-00**
Carlos Arturo Morales López	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00304-00**
Daniel Ávila Camacho	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00479-00**
José Antonio Solarte Gómez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00480-00**
Diego Felipe Cadena Montenegro	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00271-00**
Amalia Rodriguez Fuque	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00290-00**
Victoria Eugenia Olga Pauwles T.	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00268-00**
Blanca Stella Barrero Barrero	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00106-00**
María Consuelo Porras	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00117-00**
Concepción Concha Agudelo	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00446-00**

VI. 2 Testimonios

a) Respetuosamente solicito que se llame a declarar en audiencia en la fecha y hora que para tales efectos señale el Despacho, sobre los hechos y omisiones que sean de su conocimiento, en relación con el diligenciamiento, liquidaciones y pago al Fondo Nacional de Ahorro FNA, en materia de liquidaciones anuales de *cesantías*, al Señor **ABELARDO RAMÍREZ GASCA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19'054.598 de Bogotá, con domicilio en la Carrera 14 No. 109 – 79 Apartamento 301, Edificio Caminos del Parque, en Bogotá.

b) Así mismo, con el fin de que deponga sobre la ejecución presupuestal en materia de cesantías anuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y del traslado de las mismas al FNA, con ocasión del desempeño que tuvo a su cargo la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Doctora **ARAMINTA BELTRÁN URREGO**, Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No. 9-03, en Bogotá.

c) A quienes fungieron como miembros del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores para que depongan en relación con las razones que tuvieron en consideración para llevarlos a determinar que hubo *culpa grave*, y demandar en repetición a la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** cuando se desempeñó como *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social Prestaciones Sociales* del Ministerio de Relaciones Exteriores en los periodos reseñados en la demanda, (Acta No. 229 del 22 de julio de 2013), consistente en haber omitido el deber que *supuestamente* tenía, según la demanda, de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las liquidaciones anuales de las cesantías por valor de **$133.148.564** para cuyos efectos se le citará en el día y hora que señale su despacho, a través de la Dirección del Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No.9-03, en Bogotá y son:

1. Doctor EDWIN OSTOS ALFONSO, Director de Asuntos Jurídicos Internacionales (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

2. Doctor ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO, Director de Talento Humano; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

3. Doctora CLAUDIA LILIANA PERDOMO ESTRADA, Jefe Oficina Asesora Jurídica Interna (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

4. Doctora MARTHA RUBY CUÉLLAR CALDERÓN, Coordinadora Grupo Interno de Gestión; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

5. Doctora LUZ ANDREA CORREDOR ARTEAGA, Abogada Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

6. Doctora HELGA VELASQUEZ AFANADOR, Abogada Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

7. Doctor JORGE ENRIQUE BARRIOS SUÁREZ, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

8. Doctor HUGO ARMANDO GRANJA ARCE, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

9. Doctor ANDRES LEONARDO MENDOZA PAREDES, Secretario Técnico (E) del Comité de Conciliación; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

VII. COSTAS

Sean a cargo de la demandante, LA NACION –MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- incluyendo *agencias en derecho*, toda vez que es manifiesta la falta de buena fe de dicha entidad al demandar en repetición a varios exfuncionarios, cuando no se cumplen a cabalidad todos los presupuestos establecidos de manera expresa por la Ley 678 de 2001 para el ejercicio de dicho medio de control, ya que en ningún caso existió una condena al Ministerio a reconocer una indemnización, sino que se le ordena efectuar la reliquidación de las cesantías, que es una prestación social de naturaleza laboral, en favor de un trabajadora por no habérsele incluido todos los factores salariales devengados en la planta externa, lo cual fue una política de dicho ministerio y no la decisión unilateral de los ahora demandados.

VIII. NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones, junto con mi representada la Doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS** en la Secretaría de su Despacho; en mi oficina de la Carrera 15 No. 86A- 57 of. 501, teléfono 7027824, en Bogotá; y, a través de mi correo electrónico: cilinof@hotmail.com.

Señor Juez

Franklyn Liévano Fernández

DOCTOR EN DERECHO

Franklyn Liévano Fernández
C.C. No. 19.154.294 de Bogotá
T.P. No. 12.667 del C.S.J.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

El documento fue presentado personalmente por Franklyn Liévano Fernández
Quien se identificó C C No. 19'154 294
T P No. 12'667 Bogotá D C. 05 MAY 2016
Responsable Centro de Servicios _____ VHPP

756 -34

Señor Juez
JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - Sección Tercera
E. S. D.

Proceso	:	Ordinario
Acción	:	**Repetición**
Radicado	:	**No. 110013336722-2014-00109-00**
Demandante	:	**LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**
Demandados	:	CLARA INES VARGAS SILVA *y otros*

MYRIAM CONSUELO RAMÍREZ VARGAS, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 41'746.749 de Bogotá, con domicilio en la ciudad, a usted respetuosamente manifiesto que por medio de este escrito confiero **Poder Especial**, amplio y suficiente al Doctor **FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ**, mayor y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501 teléfono 7027824, en la ciudad y correo electrónico: cilinof@hotmail.com, para que en mi nombre concurra, se **notifique** del *auto* admisorio de la demanda y me represente en este proceso hasta su terminación.

Mi apoderado dispondrá en el ejercicio de su gestión, de todas las facultades generales de ley, así como de las especiales de recibir, desistir, conciliar, transigir, sustituir y reasumir.

Ruego al Señor Juez reconocer y tener a mi apoderado en los términos de este escrito.

Del Señor Juez,

MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS
C.C. No. 41'746.749 de Bogotá

Acepto el poder conferido,

FRANKLYN LIÉVANO FERNÁNDEZ
C.C. No. 19'154.294 de Bogotá
T.P. No. 12.667 de C.S.J.

Notaría Segunda del Círculo de Cartagena
Diligencia de Presentacion Personal

Ante la suscrita Notaria Segunda del Circulo de Cartagena fue presentado personalmente este documento por:

MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS

Identificado con C.C. **41746749**

Cartagena:2016-03-29 15:52

atorres

-1933898452

Para verificar sus datos de autenticacion ingrese a la página Web www.notaria2cartagena.com en el link <EN LINEA> ingrese el número abajo del codigo de barras.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Eudenis Casas B.
NOTARIA SEGUNDA
CÍRCULO DE CARTAGENA

757 05

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección de Talento Humano
Grupo Interno de Nómina y Prestaciones

CNP. 0262

EL SUSCRITO COORDINADOR DE NOMINA Y PRESTACIONES
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

C E R T I F I C A :

Que revisada la hoja de vida de la doctora **MYRIAM CONSUELO RAMIREZ VARGAS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.746.749 de Bogotá, se pudo constatar que ha desempeñado en este Ministerio siguientes cargos:

Mediante Resolución 1744 del 19 de diciembre de 1978, se le nombró en el cargo de Técnico Administrativo (tercer secretario), Código 4065, Grado 07. Tomó posesión el 9 de enero de 1979.

Mediante Resolución 1328 Bis del 3 de junio de 1980, se le nombró en el cargo de Técnico Administrativo, Código 4065, Grado 07. Tomó posesión el 1° de julio de 1980.

Mediante Resolución 0246 del 9 de febrero de 1983, se le encargó del cargo de Profesional Universitario, Código 3020, Grado 06. Tomó posesión el 11 de febrero de 1983.

Mediante Resolución 1696 del 15 de julio de 1983, se le nombró en el cargo de Profesional Universitario, Código 3020, Grado 04. Tomó posesión el 1° de agosto de 1983.

Mediante Resolución 2675 del 30 de noviembre de 1983, se le nombró en el cargo de Profesional Universitario, Código 3020, Grado 04. Tomó posesión el 1° de diciembre de 1983.

Mediante Decreto 1382 del 13 de julio de 1988, se le nombró en el cargo de Vicecónsul Legalizador, Grado Ocupacional 1EX de la Sección de Embarques del Consulado General Central de Colombia en Nueva York, Estados Unidos de América. Tomó posesión el 30 de septiembre de 1988.

Mediante Decreto 1988 del 31 de agosto de 1989, se le nombró en el cargo de Cónsul de Segunda Clase, Grado Ocupacional 2EX, de la Sección de Embarques del Consulado General Central de Colombia en Nueva York, estados Unidos de América. Tomó posesión el 15 de septiembre de 1989.

Mediante Resolución 1909 del 30 de julio de 1992, se le nombró en el cargo de Asesor, Código 1020, Grado 02. Tomó posesión el 2 de diciembre de 1992.

Mediante Resolución 0834 del 12 de abril de 1993, se le nombró en el cargo de Jefe de División, Código 2040, Grado 19. Tomó posesión el 3 de mayo de 1993.

Mediante Decreto 0578 del 22 de marzo de 1996, se le nombró en el cargo de Segundo Secretario, Grado Ocupacional 2EX, en la Embajada de Colombia ante el gobierno de Costa Rica. Tomó posesión el 21 de mayo de 1996 y lo desempeñó hasta el 02 julio de 2000.

Cra. 5ª No.3-08 Teléfonos 3814000 Fax. 3814747 www.cancilleria.gov.co Bogotá, D.C.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección del Talento Humano
Grupo Interno de Nómina y Prestaciones

Mediante Resolución 4866 del 30 de octubre de 2001, se le nombró en el cargo de Auxiliar Administrativo 6PA (local), en el Consulado General de Colombia en Santiago de Chile. Tomó posesión el 14 de noviembre de 2001.

Mediante Resolución 3373 del 13 de septiembre de 2004, se le nombró en el cargo de Auxiliar Administrativo 11PA, en la Embajada de Colombia ante el gobierno de Chile. Tomó posesión el 15 de septiembre de 2004 y lo desempeñó hasta el 30 de marzo de 2008.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de febrero de dos mil diez (2010).

OVIDIO HELI GONZALEZ
Coordinador de Nomina y Prestaciones

Cra. 5ª No.9-03 Teléfonos 3814000 Fax. 3814747 www.cancilleria.gov.co Bogotá, D.C.

759

Franklyn Liévano Fernández [1]

DOCTOR EN DERECHO

Ituca Marrugo

Señor Juez
JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - Sección Tercera
E. S. D.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 2016 NOV 5 PM 4:38

OFICINA DE APOYO JUZGADOS ADMINISTRATIVOS

Proceso	:	Ordinario
Naturaleza	:	**Repetición**
Asunto	:	***Contestación de demanda***
Radicado	:	**No. 110013336722-2014-00109-00**
Demandante	:	**LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**
Demandados	:	CLARA INES VARGAS SILVA *y otros* -Hernando Leyva Varón, Hilda Stella Caballero Ramírez, Aura Patricia Pardo Moreno, Luis Miguel Domínguez García, Leonor Barreto Diaz, Juan Antonio Liévano Rangel, María Hortensia Colmenares Facinni , Rodrigo Suarez Giraldo ,María del Pilar Rubio Talero, Patricia Rojas Rubio, **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ**, Edith Andrade Páez, y Miriam Consuelo Ramírez Vargas-,

FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ, mayor y vecino de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la ciudad en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501 Teléfono 7027824, con correo electrónico: cilinof@hotmail.com, obrando en nombre y representación de la Señora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ**, mayor y de la misma vecindad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 33'213.748 de Mompós, Bolívar, con domicilio en Frankfurt, Alemania, conforme al *Poder General* que la misma le confirió a la Señora **FRANCIA HELENA MARRUGO DE SÁNCHEZ**, mayor y vecina de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.33'212.207 de Mompós, mediante **Escritura Pública No. 3979 del 27 de octubre de 2012** de la **Notaría 72 del Circulo de Bogotá**, de acuerdo al **Poder Especial** que la misma me confirió, en nombre y representación de la primera, respetuosamente **me notifico por conducta concluyente**[1] y doy ***contestación*** en oportunidad, como sigue, a la demanda que dentro de este proceso se le formula:

[1] Art. 301 del C.G.P.

I. En cuanto a las PRETENSIONES

ME OPONGO a todas y cada una de ellas, conforme a las excepciones y las razones de la defensa que en lo fáctico, así como en lo jurídico, expondré a continuación:

A la ***PRIMERA***: Porque es engañosa la hipótesis de asumir como fundamento de la acción, que no se hubiere generado el pago realizado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, si la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** le hubiere personalmente *notificado* las liquidaciones anuales, año por año, de sus cesantías de los períodos de sus servicios en el exterior, desde 1990 hasta el año 2003 pues al **Acuerdo Conciliatorio del 29 de marzo de 2012 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F",** se llegó en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005,** que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, originándose así la obligación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de reajustar la liquidación de las cesantías de los funcionarios que prestaron sus servicios en el exterior con base en los salarios reales y no sobre sumas inferiores de otros cargos en los que el funcionario no se desempeñó, dando lugar a lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores en tal virtud pagó.

Además es falsa la afirmación en virtud de la cual se impidió que operará la prescripción trienal los derechos laborales, por la omisión de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** toda vez que dicho término prescriptivo sólo puede computarse a partir del *retiro definitivo* del empleado.

A la ***SEGUNDA***: *"(...) Que se condene a..."*, entre otros, a mi representada al *pago y reparación* de la suma de **$133.148.564** que el Ministerio pagó en virtud del **Acuerdo Conciliatorio celebrado ante la Procuraduría 84 Judicial I**, reseñado en el proceso, puesto que la acción de repetición a voces del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, tiene por objeto la recuperación de lo pagado por el estado **exclusivamente** por concepto de un ***reconocimiento indemnizatorio***, que aquí, no existe (¡) porque dicha suma, el Ministerio de Relaciones Exteriores los pagó, en este caso a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** por reajuste de **CESANTÍAS**, en virtud de la relación laboral habida entre los mismos en los periodos de sus servicios en el exterior que reseña la demanda y lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005.

En efecto, cabe distinguir que lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en virtud del **Acuerdo Conciliatorio** tiene su causa en el restablecimiento del derecho subjetivo del mismo, amparado en una norma jurídica cual es la Ley 6ª de 1945 que establece el derecho a las cesantías y en lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005, que es lo que aquí se ha traído al proceso, en apoyo de la acción de repetición, cuando ésta ha de tener su apoyo en una sentencia o conciliación previa respecto a un reconocimiento indemnizatorio, que se

diga, como aquí se expone, producido por la acción u omisión de los agentes del Estado (art. 140 CPACA), de donde es imperativo echar de menos el presupuesto *objetivo* para la acción de repetición, consistente en una sentencia o conciliación de un reconocimiento indemnizatorio, por su naturaleza antijurídico. Esto es lo opuesto integral y absolutamente al presupuesto esgrimido por la demandante como pie de la acción.

A la ***TERCERA***: Que se *declare* que el **Acuerdo Conciliatorio** aprobado por el **Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"** existe una *obligación clara, expresa y actualmente exigible, que presta mérito ejecutivo,* con remisión al artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, para efectos del cobro *coactivo* de una obligación, conforme a las prescripciones del artículo 488 del CPC sobre títulos ejecutivos (Actual 422 C.G.P), dicha pretensión difiere del medio de control de repetición, el cual busca la declaratoria de responsabilidad de un servidor o ex servidor público, quien debido a su conducta dolosa o gravemente culposa conllevó a que el Estado se viera en la obligación de reconocer una suma de dinero. Ahora bien, el **Acuerdo Conciliatorio** reúne en sí mismo los requisitos del título ejecutivo, con lo cual presta mérito ejecutivo únicamente en favor del beneficiario del pago, esto es, del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

A la ***CUARTA***: Sobre la pretensión del pago de intereses, no existe causa legítima para derivarlos, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraba en el deber legal de liquidar y pagar las cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, dada la relación laboral habida entre los mismos.

A la ***QUINTA:*** En cuanto a la pretensión de condena en costas a mi representada, puesto que ha de ser la NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, quien debe salir al pago a favor del mismo, por ser esta acción un ostensible abuso del derecho a litigar.

II. Sobre los HECHOS

Al hecho ***PRIMERO***: No es un hecho. Se trata de la cita de una normativa legal y al respecto me remito a la vigencia de las mismas en el tiempo.

Al hecho ***SEGUNDO***: Distingo entre la cita que se hace de normas legales, de una parte, y la interpretación interesada que se hace de las mismas para el señalamiento de obligaciones funcionales de mi representada la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** entre las cuales la que se le endilga del deber de *"(...) liquidar y notificar personalmente el auxilio de cesantías..."*, pues el funcionario que desempeña las funciones en planta interna no puede hacerlo coetáneamente en la planta externa, como lo reseña la demanda.

Al hecho ***TERCERO***: No me consta. No obstante que se pruebe, pues el periodo en el cual mi representada fungió como *Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y*

Prestaciones, ninguna relación tuvo respecto de los funcionarios que, como la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, prestaron sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al hecho ***CUARTO***: No me consta. Mi representada ha sido completamente ajena al trámite de petición de reliquidación de cesantías ejercido por **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.** No obstante, es menester advertir desde ya la inconsecuencia del Ministerio al negar la pretensión de reliquidación de cesantías mediante el derecho de petición radicado para conciliar posteriormente, y de manera inconsecuente, el pago de las diferencias de las cesantías originadas en el exterior.

Al hecho ***QUINTO***: No es un hecho atribuible a mi representada, la doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ,** pues como se ha indicado, no tenía el deber de notificar personalmente los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el exterior.

Al hecho ***SEXTO***: No me consta y deberá probarse. El trámite de audiencia de conciliación extrajudicial fue entre la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, con quien fuera su empleador, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adviértase que el Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo la oportunidad de reliquidar las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia C-535-2005, optó por denegar las peticiones formuladas por el peticionario para posteriormente y de manera inconsecuente, aceptarlas en Audiencia de Conciliación.

Al hecho **SÉPTIMO:** No me consta y deberá probarse. El trámite de conciliación surtido fue exclusivamente entre empleador y empleado y ninguna participación tuvo mi representada, la doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ.**

Al hecho ***OCTAVO***: No me consta el trámite de pago que enuncia el Ministerio. Cualquier actuación surtida se dio en virtud de la relación laboral habida entre estos.

Al hecho ***NOVENO:*** No obstante la multiplicidad de hechos, difiero, pues dentro de las funciones que atribuye el artículo 19 del Decreto 1716 de 2009, a los Comités de Conciliación NO le es dada la facultad o competencia para determinar la culpa grave o dolo en las actuaciones de alguno de sus funcionarios y menos aún decidir *"(...) en forma unánime...* como se hizo, en cuanto a la responsabilidad que se le endilga, dice que tenía mi representada, la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ**.

Además, La función de notificar los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el *exterior* no se encuentra establecida de manera alguna en el Manual Descriptivo de Funciones y Requisitos (Resolución 0033 de 1994), ni en el Decreto 2126 de 1992.

Al hecho **DECIMO**: No es un hecho. Me atengo a la normatividad legal y su vigencia en el tiempo, pero sí es del caso señalar que los Comités de Conciliación son órganos consultivos y de asistencia, que si bien tiene la facultad de decidir cuando deba instaurarse una acción de repetición, no la tienen para hacerlo en relación con la

declaratoria de responsabilidad administrativa y disciplinaria de los funcionarios de las entidades y eventual sobre el grado de culpa o dolo en la conducta de algún funcionario. En este caso del Ministerio de Relaciones Exteriores.

II. RAZONES DE LA DEFENSA

a) El Acuerdo Conciliatorio celebrado a instancias de la Procuraduría 84 Judicial I para Asuntos Administrativos tuvo por objeto el reconocimiento y pago de las diferencias del auxilio de cesantías que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como **empleador,** debía a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por diferencias en la liquidación de dicha prestación, practicada sobre sumas inferiores a los salarios reales que el mismo devengó desde **1990 hasta el año 2003** cuando ha laborado para el mismo en el exterior.

Pago que tuvo como fundamento legal, el vínculo laboral existente entre el Ministerio y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, generador de dicha prestación conforme a lo establecido en la Ley 6 de 1945, artículo 17 y lo declarado por la Corte Constitucional en la Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y mucho antes, en la Sentencia T-1016 de 2000, que evidencian la condición *inconstitucional* de las prácticas anteriores que al respecto tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores.

b) Se pretende, inmerso irregularmente bajo este medio de control judicial, que se avance en un juicio de declaratoria y condena de condena por la ***responsabilidad*** que se les endilga a mi representada, la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** por haber supuestamente omitido el deber –si lo tenía-, de notificar personalmente las liquidaciones *anuales* del auxilio de cesantías desde **1990 hasta el año 2003** desconociéndose que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental al debido proceso, garantiza que ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa***.

Para el caso, el anterior Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 184, que rigió hasta el 1º de julio de 2012, cuando entró en vigencia la ley 1437 de 2011. Así como la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, conforme a la cual: *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...."* (Artículo 5º).

c) Tanto por lo establecido por el anterior Código Contencioso Administrativo C.C.A., preexistente a la conducta que se le endilga a mi representada la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** la acción para la eventual responsabilidad, en ese caso *conexa* con la entidad, caducó conforme al artículo 136 del C.C.A, dos años después de la presunta omisión del deber, si lo tenía. A la vez prescribió, cinco (5) años después la disciplinaria (art. 34 ley 200 de 1995), transcurrido como lo han sido **más de trece**

(13) años, contados a partir de la última presunta omisión que se les imputa y se retrotrae a la liquidación anual de cesantías del año **2003**.

d) La demanda, como está visto, no tiene como materia la restitución de lo pagado por un reconocimiento *indemnizatorio* -que no lo ha habido-, sino la recuperación para el Ministerio de lo que debía y pagó por ajuste de cesantías generadas en la vinculación laboral que establece la Ley 6 de 1945 y de conformidad con los términos fijados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y excluyen también, cualquier supuesto de la afectación del Ministerio de Relaciones Exteriores como empleador de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por un "daño antijurídico".

e) La Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** no fue convocada, ni citada como tercero, ni oída a ningún título, que le permitiera que le permitiera ejercer su derecho de contradicción, aportación y discusión de pruebas y defensa dentro del proceso de **Conciliación surtido en la Procuraduría 84 Judicial I el 29 de marzo de 2012.** Tampoco ante el Comité de Conciliación y Defensa del Ministerio de Relaciones, que se pronunció y decidió que se entablara la acción por supuestamente haber incurrido aquél en la omisión del presunto deber de notificar personalmente las cesantías de esta última desde **1990 hasta el año 2003** sin ninguna facultad, el Comité, para hacerlo en lugar de la autoridad disciplinaria correspondiente y sin las garantías del debido proceso

f) Colíguese de todo lo anteriormente expuesto, que no resulta legítimo el empleo de este medio de control judicial sobre la materia propuesta (art. 169 -núm. 3°-, Ley 1437 de 2011).

IV. De las EXCEPCIONES

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

A. EXCEPCIONES PREVIAS

1. Falta de competencia

Conforme lo establece el **artículo 7º** de la **Ley 678 de 2001**, de la acción de repetición conocerá de acuerdo con las reglas de competencia, el **juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial** contra el Estado y, si la reparación patrimonial impuesta al mismo tiene origen en una **conciliación** o cualquier otra forma establecida en la ley para la solución de conflictos, es competente el **juez o tribunal que haya aprobado el respectivo acuerdo**.

En este caso, el pago que se pretende repetir, proviene del **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012** y aprobado por el **Tribunal Administrativo de**

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F". En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es el **competente** para conocer de esta acción.

En efecto, según la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, la competencia en razón al factor de ***conexión*** es prevalente por ser especial y en este caso se trata de la consagrada por la ley 678 en su artículo 7º respecto de la acción de repetición. No obstante, lo establecido aun siendo posterior, por el artículo 155 del C.P.A.C.A. en razón a la cuantía.

Dijo, pues, el Consejo de Estado:

> *"Para efectos de la competencia en acciones de repetición el artículo 7º de la Ley 678, establece como premisas: la preexistencia de una sentencia condenatoria al Estado y por ende el trámite de un proceso previo ante la jurisdicción de lo contencioso; sin embargo en hipótesis distintas, es decir, cuando no existe un proceso previo y la reparación se hubiese originado en una conciliación u otra forma autorizada por la ley, conocerán el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo. Cuando no medie aprobación judicial conocerá el jue que ejerza jurisdicción en el territorio donde se celebró el acuerdo. De igual forma existen otros eventos por fuera de los presupuestos del artículo 7º, es decir sin condena previa en la jurisdicción contenciosa, tales como: condenas en la jurisdicción ordinaria en materia laboral a favor de trabajadores oficiales, condenas al Estado Colombiano en tribunales de arbitramento, o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc.; casos en los cuales se aplicarán plenamente las reglas de competencia previstas en el Código Contencioso Administrativo (...)" (Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación 11001-03-15-000-2007-00433(c) Consejero Ponente: MAURICIO TORRESCUERVO, once (11) de diciembre de dos mil siete (2007)*

Precisamente, el Doctor **JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ**, en su obra "El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo" de Ediciones Doctrina y Ley LTDA 2014, resume así el tema:

> *"La incompatibilidad entre la conexidad y la cuantía ya fue resuelta por la sala plena del Consejo de Estado, dando prelación a la conexidad para determinar el juez natural de la repetición.*
>
> *No se desconoce que el nuevo código es posterior, pero en materia de aplicación de las reglas de hermenéutica jurídica, el artículo 5 de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad de la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.*
>
> *De lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, por lo cual no siempre*

que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario al de una norma anterior resulta ésta derogada, pues deberá tenerse en cuenta criterio de la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3 de la Ley 153 de 1887 y 5 de la Ley 57 del mismo año.

Por último, no puede perderse de vista, que el legislador en el momento establecer los fueros de competencia para cada uno de los medios de control, no realizó ninguna precisión frente al medio de control de repetición, teniendo en cuenta que, la competencia ya estaba prevista en la Ley 678 de 2001.

Se quiere significar con lo anterior, que toda vez que el, C.P.A.C.A. no derogó de manera expresa la competencia establecida en la Ley 678 de 2001, esta disposición se encuentra vigente y teniendo en cuenta la especialidad de esta norma respecto de la acción de repetición, se debe aplicar la conexidad a fin de establecer el juez natural de la pretensión de repetición y no el factor cuantía". (pag. 170)

2. Caducidad de la acción declarativa de responsabilidad

El **artículo 29 de la Constitución Política** garantiza el derecho fundamental del *debido proceso*.

En tal virtud nadie puede ser juzgado ni condenado sino conforme a las leyes preexistentes a la conducta que se les imputa.

En este caso, se pretende la declaratoria de responsabilidad y subsiguiente condena a la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** por supuestamente haber omitido el deber –que no tenía, de notificar personalmente y no lo hiciera, a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** las liquidaciones anuales de sus cesantías en los períodos en los que éste prestó sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores ***en el exterior*** y se remontan desde **1990 hasta el año 2003**

Más aún, abarca lo que se pretende repetir, lo pagado a dicho exfuncionario en los períodos de **1990 hasta el año 2003** períodos éstos, -todos- durante los cuales rigió el Código Contencioso Administrativo promulgado por el **Decreto Ley 01 de 1984,** que lo fue hasta el **1º de julio de 2012**, con la entrada en vigencia, el 2 de julio del mismo año, de la Ley 1437 de 2011, *"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".*

En este orden, la acción de responsabilidad de los funcionarios por los eventuales daños antijurídicos causados por culpa grave o dolosa en el desempeño de sus

funciones (artículos 77 C.C.A.) en conexidad con la entidad (art. 78 C.C.A.), **caducó** a los **dos (2) años** de la presunta *omisión* (art. 136 ibídem)

Y sea del caso prevenir que otra es, por supuesto, la *caducidad* de la acción en cuanto a la *condena* sobre repetir lo pagado, que corre a partir del pago (Ley 1437 de 2011, art. 142) la cual, legal y constitucionalmente puede arrastrar la primera, si bien cabe lógicamente derivar de la responsabilidad la *condena* no así lo contrario, cuando aquélla no ha emanado del juicio previo y correspondiente, con las plenas garantías del *debido proceso* y dentro de la oportunidad fijada en la ley preexistente a la conducta imputada.

3. Inepta demanda

a) Por indebida acumulación de *pretensiones*

Se pretende bajo una misma cuerda, por el medio de control de repetición, que a la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** se la declare administrativamente responsable y se la condene a reembolsar al Ministerio de Relaciones Exteriores lo que éste, en cumplimiento de la **Sentencia C-535 de 2005**, pagó a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** por ajuste de cesantías de los períodos que esta laboró en el exterior, **desde 1990 hasta el año 2003** cuando aquélla se desempeñó como *Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones* entre el 14 de enero de 2003 hasta el 26 de enero de 2003regía el Decreto Ley 01 de 1984 por el cual se expidió el anterior Código de lo Contencioso Administrativo, vigente hasta el 1º de julio de 2012, al que precedió la Ley 13 de 1984, subrogado por el Decreto Ley 2400 de 1998 y regía también, en materia disciplinaria, la Ley 25 de 1974 -Orgánica de la Procuraduría General- y su Decreto Reglamentario 3404 de 1983, parcialmente modificada y adicionada por la misma Ley 13 de 1984 y el mismo Decreto Ley 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, de manera que a la luz de lo establecido por el artículo 29 de la Constitución Política a la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** no cabe enjuiciarla bajo el actual CPACA que rige en cuanto a la repetición y, en consecuencia no procede la acumulación, pues a voces del art. 165 del CPACA se exige que tanto lo relativo a la declaratoria de responsabilidad como la condena a reembolsar lo pagado, puedan enjuiciarse bajo la misma normativa.

De acuerdo al artículo 29 de la Constitución, ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y como está visto, las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que supuestamente la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** no le notificó personalmente cuando esta fungía como **Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones desde el 14 de enero de 2003 hasta el 26 de enero de 2003** se remonta al año **2002** y no pueden juzgarse sino a la luz de las normas preexistentes a dichas presuntas omisiones en el año de **2002- Hace 14 años** entre otras cosas, caducadas y prescritas pues según la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, vigente para la época de las conductas que a la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** se

endilgan, *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...."* (Artículo 5º).

Así, pues, la presunta responsabilidad que se le endilga a la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** no es susceptible de enjuiciarse ***sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y no por este medio de control, sin campo alguno para pronunciarse legítimamente sobre una disposición de orden constitucional como la impartida en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005** que dio lugar al pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores le hizo en virtud del Acuerdo Conciliatorio celebrado.

De otra parte, según lo expuesto por el artículo 136 del C.C.A. preexistente a la conducta que se le endilga a la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** la acción para derivar una eventual responsabilidad suya en el pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso hizo, caducó dos años después de la presunta omisión que se le endilga y también prescribió a los cinco (5) años la acción disciplinaria propia para definirla (art. 34 ley 200 de 1995), cuando han transcurrido desde entonces **no menos de trece (13) años y hasta veinticuatro años (24).**

Además, es infundada y falaz la afirmación de que de haberse notificado aquéllas liquidaciones anuales de cesantías, que en el proceso ni siquiera se conocen, hubiera prescrito la acción o caducado el derecho de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** puesto que la posibilidad de demandar nace desde el momento en que la Administración, al **retiro del servidor** no hace entrega de la suma correspondiente a este concepto, es decir omite el cumplimiento de su obligación.[2]

B. EXCEPCIONES DE FONDO

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

a. *Ineptitud sustantiva de la demanda;*
b. *Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad.*
c. *Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición;*
d. *Ilegitimidad de personería por pasiva;*
e. *Inexistencia de nexo causal;*
f. *Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación;*
g. *Inexistencia de daño antijurídico;*

[2] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de septiembre de 2011 radicado interno (2005-2009).

h. *Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso;*
i. *Falta de legitimación en la causa por pasiva;*
j. *Abuso del derecho; e,*
k. *Ilegitimidad del derecho sustantivo.*

EXPOSICIÓN DE LAS EXCEPCIONES DE FONDO

a. ***Ineptitud sustantiva de la demanda***

Derivada ésta del desconocimiento de las garantías constitucionales del derecho fundamental al *debido proceso*[3] a NO *"(...) ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (...) y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio..."*, pues fuerza distinguir en el proceso lo que atañe a la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial del demandado, la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** como se pretende y lo que concierne a la eventual condena a retribuir lo pagado.

A lo primero, indiscutiblemente corresponde la aplicación de las normas preexistentes a la supuesta conducta omisiva de los implicados, del deber –si lo tenían-, de notificar personalmente a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO *año por año***[4], *las liquidaciones anuales* de sus cesantías, causadas en los años **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años-, durante los cuales laboró al servicio del Ministerio de Relaciones en **el exterior,** pues rigió desde el **1º de marzo de 1984**[5] hasta el **1º de julio de 2012**[6], el Decreto Ley 01 de 1984 que reformó el Código Contencioso Administrativo[7] anterior.

Ahora bien, a efectos de derivar la responsabilidad que correspondiera a los funcionarios aquí implicados para la época en que supuestamente omitieron el deber, -si lo tenían-, de notificar personalmente las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** causadas en los años de **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años-, el **artículo 78** del Decreto Ley 01 de

---

[3] Art. 29 C.P.
[4] Decreto 3118 de 1968 *"Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantías de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, reorganizado por la Ley 432 de 1998"*.
[5] Diario Oficial 36.439 del 10 de enero de 1984.
[6] Fecha de entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 "por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
[7] Ley 167 de 1941

1984, vigente en esos años, permitió que fueran demandados, en conexidad con la entidad pública, los funcionarios responsables de culpa grave o dolo en ejercicio de sus funciones, que le fueren generados a terceros (art. 77 *ibídem*), conforme a las reglas generales de los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, de ser así, fuera la misma la sentencia que dispusiera que el funcionario responsable satisficiera los perjuicios ocasionados a la Entidad, repitiendo contra el mismo lo pagado, para lo cual el término para hacerlo era de "***(2) dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa...***" establecido para las acciones de su género.

En cuanto a lo segundo, aspecto propio de la ritualidad de los procesos, es claro, que al tipo de acción incoada ha de dársele el trámite del medio de control judicial de repetición, sin que por ello pueda legitimarse a accionar, como se proponen, frente a los demandados en procura de una declaratoria de responsabilidad que caducó y sustrae al juez de proveer legítimamente al respecto, hoy décadas después de acontecido el supuesto incumplimiento del deber, si lo tenía, que a los demandados se les endilga, que en ese tiempo no cumplieron, válido, el demandante, que hoy el término para el medio de control de repetición caduca a *partir del pago,* y baste ésa consideración para traer ahora a este juicio a los demandados quebrantándoles todas las garantías constitucionales al debido proceso.

De ahí que, la demanda adolezca de la actitud sustantiva para derivar una condena en contra de los demandados, habiendo caducado como está visto cualquier acción encaminada a la declaratoria de la responsabilidad administrativa y patrimonial de los demandados por hechos que se remontan, como ya ha quedado visto, entre **trece (13) y veintiséis (26) años atrás**, enmarcados dentro de un ordenamiento legal preexistente y también, por supuesto, más favorable[8].

Descendiendo a la demanda, ésta se apoya en una sentencia en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores fue condenado a restablecer los derechos que por su parte le vulneró a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** con el reconocimiento y pago que le había hecho de las cesantías causadas a su favor durante los períodos de sus servicios al mismo **en el exterior**, en los años en que desempeñó el cargo referido de la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** basándose en sumas inferiores a los salarios reales que el ex funcionario devengó, debiendo en consecuencia, re-liquidarle dicha prestación, conforme a lo ordenado en la Sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto Legislativo 10 de 1992, que el Ministerio siguió aplicando, no obstante su derogatoria con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993[9] y posteriormente la Ley 797 de 2003, de ninguna manera vinculante con los demandados, quienes son totalmente ajenos a las prácticas entronizadas en ese orden por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de donde se deriva el pago que por concepto de reliquidación de dichas cesantías, debió atender y **no del reconocimiento de una indemnización ocasionado por un daño antijurídico** que fuera imputable como se formula, a los demandados.

[8] Art. 53 C.P.
[9] T-1016 de 2000, Sentencia C-173 de 2004

Es claro entonces, que no existe sentencia alguna de condena al pago a una indemnización que vincule a los demandados o que lo hubiese vinculado, conforme a las previsiones de los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984, ni pueda hacerlo ahora, lo cual conduce a la imposibilidad jurídica de despachar la demanda dada y, en consecuencia, la ineptitud sustantiva de la misma.

b. *Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad*

Siguiendo al tratadista *Bonnard,* quien participando de las mismas ideas de Deguit en materia de responsabilidad administrativa, lo que se advierte es una "falta de la administración" y la jurisprudencia ha advertido de *la responsabilidad* basada en una irregularidad de la actividad administrativa. Así, *"(...) Se ha deducido que la responsabilidad del patrimonio público surge cuando el daño resulta de una mala organización o de un funcionamiento defectuoso del servicio, y es, sin que sea necesario que en esa mala organización o defectuoso funcionamiento haya culpa de parte de un agente administrativo. Esto es lo que constituye la llamada culpa del servicio público, así denominada para indicar "que no hay culpa individualizada de un agente administrativo", sino solamente una irregularidad de origen anónimo y de aspecto objetivo en la organización y en el funcionamiento del servicio."*[10]

Y, como aquí se advierte la falta de la notificación personal de las liquidaciones anuales de cesantías a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores **en el exterior**, no fue, -está visto- un hecho aislado, sino que corresponde a una condición propia de un defectuoso servicio público de la entidad a falta de una regulación y apremios del orden de conformación y asignación de actividades puntuales, cuya omisión no cabe, pues, imputar individualmente a uno u otro funcionario con remisión a normas generales, sino que es más bien producto anónimo del funcionamiento de la Entidad, generador cuando menos de un ***error communis facit ius***[11] o, que hace derecho

Por otra parte, cabe señalar que de tiempo atrás la jurisprudencia ha establecido los requisitos para dar aplicación a la "doctrina del error común creador de derechos" o teoría de la apariencia[12], a saber:

1. *"Debe existir una situación que realmente sea contraria a la normatividad, pero oculta, es decir, (...) ajena en su etiología y desarrollo a quien eventualmente resultare perjudicado con la apariencia de juridicidad (...)*
2. *Que esa situación de apariencia de legalidad esté respaldada en hechos, situaciones o documentos cuyo vicio no sea posible advertir con diligencia y cuidado.*

[10] SARRIA B, Eustorgio y Mauricio. *Derecho Administrativo*. Editorial Pluma. Págs. 245 y 246
[11] Conc. artículo 8°. Ley 153 de 1887
[12] Al respecto se puede consultar la Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 3 de agosto de 1983, M.P. Dr. Jorge Salcedo Segura.

3. *Que la conducta de quien resultó perjudicado con la situación de aparente legalidad esté respaldada por una buena fe del particular (...)*
4. *Que la situación no esté regulada expresamente por una ley imperativa que imponga soluciones diferentes a las que resultarían de la aplicación de la doctrina".*

c. <u>Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición</u>

El Artículo 90 de la Constitución Nacional establece que:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este."

Adviértase la inexistencia de una condena o conciliación al Estado en la que conste la indemnización por la ocurrencia de un ***daño antijurídico,*** producto de la conducta dolosa o gravemente culposa imputable a mí representada, la doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ.**

Lo que ha traído el Ministerio como fundamento para sustentar la pretensión de repetición es una Conciliación que obliga a la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores a pagar a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las diferencias de cesantías originadas durante el tiempo en que aquel prestó sus servicios en el exterior, atendiendo lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 535-2005.

Así las cosas, el **Acuerdo Conciliatorio** tiene como fundamento el cumplimiento de una Sentencia de la Corte Constitucional - no de la ocurrencia de un daño antijurídico - elemento necesario para que se pueda predicar la procedencia de la acción de repetición. Asimismo, el pago efectuado corresponde al reajuste de cesantías que el Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** durante el tiempo en que esta prestó sus servicios en el exterior. De allí que tampoco pueda derivarse que el pago efectuado por el Ministerio haya sido en calidad de indemnización, como bien lo exige el Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.

Por otra parte, la **Ley 678 de 2001** *"Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.",* estableció la **acción de repetición** con el fin de restituir al Estado lo pagado, exclusivamente, a título de una indemnización, como *reparación* –directa- del **daño antijurídico** irrogado por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes, o de un acuerdo conciliatorio u otra forma de terminación de un conflicto de responsabilidad civil contra una entidad pública.

Ahora bien, cuando los hechos que generan la pretensión de repetición ocurren con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2001, se debe establecer la normatividad sustancial y material aplicable al caso en concreto. Al respecto ha indicado en Consejo de Estado que:

"En cuanto a las normas sustanciales, se tiene que las normas aplicables para dilucidar si el demandado actuó con culpa grave o dolo, serán las vigentes al tiempo en que tuvo lugar la conducta del agente estatal. En tal sentido, **las presunciones de dolo y culpa grave que traen los arts. 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 no pueden ser aplicables a casos concretos donde los hechos que generaron la repetición se dieron con anterioridad al 4 de agosto de 2001.**"[13]

Por su parte, establece el **artículo 142** de la **Ley 1437 de 2011**:

> ***Ley 1437 de 2011. Artículo 142.***
> ***"Repetición.*** *Cuando el Estado haya debido hacer un* ***reconocimiento indemnizatorio*** *con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.*
>
> *La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.*
>
> *Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño." (Negrillas fuera de texto)*

Como aquí está visto la demanda aquí incoada tiene como base lo pagado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de la diferencia de cesantías surgida por efecto de los servicios que prestó dicha entidad **en el exterior,** devengando realmente sumas inferiores a las que realmente devengó y el Ministerio le liquidó cuando prestó sus servicios desde **1990 hasta el año 2003** en cumplimiento a lo dispuesto en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el día 29 de marzo de 2012**, no es vinculante con los demandados ni podría serlo, pues no fueron llamados al mismo con fines de repetición ni citados como terceros ni en ninguna otra condición que les permitiera haber sido **oídos** y ejercido su legítimo derecho de *contradicción,* petición y discusión de pruebas para su defensa, como lo garantiza el debido proceso que consagra el **artículo 29** de la Constitución Política.

Por eso, tal acuerdo no les es oponible, por lo que constitucional y legalmente es posible derivar en su contra la declaratoria de responsabilidad e imposición de la condena que se procura.

---

[13] Sentencia Consejo de Estado, Expediente 25000232600020030030001 (28.448) del 31 de agosto de 2006.

d. ***Ilegitimidad de personería por pasiva***

Aun cuando se demanda, entre otros, a la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** por supuestamente haber omitido el deber – si lo tenía- de notificar las liquidaciones anuales de cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** en el periodo entre el **14 de enero de 2003 hasta el 26 de enero de 2003** cuando aquélla se desempeñó *como Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones* la acción de repetición se encamina a obtener indistintamente del mismo el pago que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES hizo a aquélla, de la suma de **$133.148.564** por el reajuste anual de sus cesantías liquidadas como inicialmente lo fueron, sobre sumas inferiores a los salarios reales que devengó durante los periodos de sus servicios en el exterior y corresponden a los años de **1990-** Hace 26 años-, **1991-** Hace 25 años**-, 1992-** Hace 24 años-, **1993-** Hace 23 años-, **1994**- Hace 22 años, **1995-** hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años**, 1999** - hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**- hace 13 años cuando la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** ninguna vinculación, ni relación funcional, administrativa ni causal tuvo al frente de las liquidaciones anuales de cesantías que el MINISTERIO le liquidó a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Luego no existe legitimación en la causa por pasiva entre el MINISTERIO y la doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** para que aquel demande indistintamente, sin relación de proporcionalidad ni de racionabilidad alguna, lo comprendido en la totalidad de lo pagado que se pretende repetir, lo generado por todo el tiempo reliquidado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.**

e. ***Inexistencia de nexo causal***

La *causa* generadora del pago, vertida en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012,** que obligó al Ministerio de Relaciones Exteriores a reliquidar las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en los períodos de sus servicios en el exterior, conforme a los salarios reales que entonces devengó y no sobre las sumas inferiores que en esa época el Ministerio le liquidó, tiene su origen en la Ley 6ª de 1945 -art. 17- en razón de la vinculación de naturaleza laboral, de carácter legal y reglamentaria, que compromete exclusivamente, como empleador, al Ministerio de Relaciones Exteriores y lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**. En ningún caso por causa de la demandada, la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ**.

En cumplimiento de la Sentencia C- 535-2005, que declaró inexequible el Artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, y ordenó liquidar las cesantías de los funcionarios que laboraron en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores teniendo en cuenta en el Ingreso Base de Liquidación la suma total de los salarios reales devengados durante los periodos laborados en el exterior, se llegó al **Acuerdo**

Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012, que corresponde a lo que el Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de *reajuste de cesantías* según lo establecido en la Sentencia C- 535- 2005.

Así, aquello en lo que funda la pretensión de repetición el Ministerio atinente a la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaron las cesantías, para efectos de que pudiese operar el fenómeno de la prescripción trienal de las acciones laborales es completamente inane habidas las siguientes consideraciones:

Primero: Siendo la cesantía una prestación de carácter unitario, el término para iniciar el cómputo de la prescripción trienal de la acción laboral solo puede ser al momento de la finalización de la relación laboral que coincide con el momento a partir del cual se hace exigible el derecho por parte del trabajador. Así lo ha entendido el Consejo de Estado al establecer que: "[...] se concluye que **mientras esté vigente el contrato de trabajo, no se puede hablar de prescripción de la cesantía como derecho social**."[14]

Habida cuenta de lo anterior, mal puede hablarse de prescripción de las cesantías contada a partir de la notificación ***anual*** de dicha prestación, pues ninguna de ellas es independiente de las demás. Son partes de un todo que conforman una prestación unitaria.

Al ser una prestación social de *carácter unitario* cuya exigibilidad solo se produce a partir de la finalización de la relación laboral, resulta inane la notificación anual de dichos actos administrativos para el cómputo de la prescripción trienal. De tal forma que con notificación o sin ella, la causa generadora del pago no es la supuesta omisión de la notificación anual de los actos administrativos de liquidación. Esta se genera en el cumplimiento de la Sentencia C- 535- 2005 de la Corte Constitucional.

Segundo: Segundo Fue a partir del 24 de mayo de 2005 con la Sentencia C- 535-2005 de la Corte Constitucional que se conoció e hizo exigible para el Ministerio de Relaciones Exteriores la obligación de liquidar y pagar el reajuste de las cesantías en los términos de dicho fallo y el derecho correlativo de los funcionarios a reclamar su efectividad.

Así, el término de inicio para el cómputo de la prescripción trienal es la fecha de expedición de la sentencia de la Corte Constitucional; fecha a partir de la cual se hizo exigible la obligación. No antes, que es lo que predica la demanda pretendiendo inferir responsabilidad en cabeza de la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** por supuestamente haber omitido la notificación anual de los actos administrativos de liquidación de las cesantías.

La verdadera causa del pago es la Sentencia C- 535- 2005 del 24 de mayo de 2005 que declaró inexequible el Artículo 10 del Decreto Ley 10 de 1992, que establecía el pago de las cesantías de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando laboraban en el exterior, con base en las asignaciones salariales de cargos equivalentes

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "B", sentencia del 22 de enero de 2015, Radicado interno (4346-13)

en la planta interna. Teniendo en cuenta que los efectos de las sentencias de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro, a menos que la Corte resuelva lo contrario, en los términos del Artículo 45 de la Ley 270 de 1996, la eventualidad del término prescriptivo trienal encaminado al reajuste de las cesantías es la fecha de expedición de la Sentencia.

Así lo ha entendido el Consejo de Estado en varias providencias al manifestar que:

"[...] Conforme a lo antes indicado se precisa que existía un obstáculo de orden legal que no permitía liquidar las prestaciones de los empleados del servicio exterior, con base en lo que devengaban sino sólo de acuerdo con los valores equivalentes a los de la planta interna, de manera que se puede decir, como ya lo ha precisado esta Sala, que el derecho a devengar la cesantía liquidada con base en lo devengado en el servicio exterior, sólo surgió, con certeza, a partir de la expedición de las sentencia referida, pues antes, es evidente que la entidad pública se abstenía de liquidarla.

A partir de la remoción del obstáculo normativo cuya sentencia fue proferida el 24 de mayo de 2005, el demandante estaba legitimado para pedir el reconocimiento de su derecho, por ende, no es procedente declarar la ineptitud sustantiva de la demanda, conforme lo pidió la entidad recurrente en el recurso de alzada.[15]"

Por su parte, indicó en Sentencia del 6 de julio de 2011, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren:

"[...] Además, con el pronunciamiento de inconstitucionalidad efectuado por la Corte Constitucional en sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, efectuado el 24 de mayo de 2005, la parte demandante quedó legitimada para reclamar la reliquidación de sus prestaciones, en especial de sus cesantías, porque la vigencia y aplicabilidad del aludido artículo, impedía su reconocimiento.

El fallo recurrido amerita ser confirmado porque pese a que la sentencia de la Corte Constitucional C-535 de 2005, fue proferida luego de que se causaron las respectiva anualidades en las que el demandante prestó sus servicios en el exterior, y ésta tiene efectos hacia el futuro, lo cierto es que, por las razones arriba expresadas, es procedente declarar la denominada excepción de inconstitucionalidad para darle prevalencia a la interpretación constitucional y así, **en aplicación de los principios de primacía de la realidad frente a las formas y favorabilidad evitar que una norma que es inconstitucional desde sus orígenes produzca efectos en los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestaron sus servicios en el exterior.**"

Estas sentencias encuentran su fundamento en que la fecha a partir de la cual se hizo exigible el derecho a la reliquidación de la cesantía por parte de los funcionarios que

[15] Sentencia Consejo de Estado del 4 de noviembre de 2010, M.P: Víctor Hernando Alvarado Ardila, Exp. No. 1496-2009,

laboraban en el exterior, es el 24 de mayo de 2005; fecha de expedición de la Sentencia C-535 de 2005. Esto es así teniendo en cuenta que solo con la promulgación de la Sentencia de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del Artículo 57 del Decreto extraordinario 10 de 1992, se declaró el derecho de los funcionarios que laboraron en la planta exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de exigir la reliquidación de sus cesantías con base en el salario realmente devengado. En este punto fuerza distinguir *la exigibilidad de la cesantía misma que, dada su naturaleza, se da al momento de desvinculación del trabajador* y la *exigibilidad de la reliquidación del auxilio de cesantía que sólo puede computarse a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005.*

Por su parte, son varios los pronunciamientos judiciales proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los que ha interpretado que los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que no hayan exigido la reliquidación de sus cesantías dentro del término de tres años contados a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005, aplica la excepción previa de prescripción extintiva de los derechos laborales.

En relación con lo anterior, los procesos judiciales en los que se ha aplicado esta posición son:

1- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-01180-00. Demandante: Martha Angélica Marín Colorado-Demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

2- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-01182-00. Demandante: Sofía Salgado de Goméz-Demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

3- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-0018500.

Mediante auto del 22 de octubre de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C- 535 de 2005.

En síntesis, el argumento esbozado en la demanda en virtud del cual se generó un daño antijurídico por la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaban el auxilio de cesantía, impidiendo así que operara la prescripción trienal de los derechos, carece de todo sustento jurídico y se constituye en un abuso del derecho de acción por parte de la Cancillería. Además, es de mala fe buscar repetir lo pagado a **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** por haberse cumplido la Sentencia C-535-2005, que reiteró que la pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le corresponde.

f. ***Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación***

De otra parte, de conformidad con lo establecido en el **artículo 19 del Decreto 1716 de 2009**, el *Comité de Conciliación* del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** no es el competente para decidir que la conducta de la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** sea *gravemente culposa* por los hechos u omisiones que se le endilgan. Dicha *competencia* es privativa del Superior disciplinario[16] y con observancia del *debido proceso* que descansa en la garantía constitucional a ser *oída* y ejercer la *defensa* que, en ese orden, no se dio.

En tal sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado[17] en respuesta a la consulta formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto de los estudios que deben realizar los comités de conciliación de las entidades públicas para determinar la procedencia de la acción de repetición, advirtió lo siguiente:

> *"El alcance de los estudios y evaluaciones que debe realizar el comité de conciliación para determinar la procedencia de la acción de repetición, está dado por los requisitos fijados en la normatividad vigente, (...). En desarrollo de dichos estudios, el comité de conciliación* ***no puede invadir la competencia atribuida a la jurisdicción de lo contencioso administrativo****, al cuestionar los argumentos que sirvieron de fundamento al fallador"* (Resalto).

Por lo anterior, concluye el Alto Tribunal que los estudios que debe realizar el comité *"(...) deben dirigirse a demostrar los presupuestos fácticos en que se basa la presunción a favor del Estado"*[18].

g. ***Inexistencia de daño antijurídico***

El pago realizado, que se pretende repetir en contra de la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** consiste en el reconocimiento, por parte del Ministerio de

[16] Ley 734 de 2002 –Código Disciplinario Único-
[17] Rad. No. 1634. C.P. Dra Gloria Duque Hernández.
[18] Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 1634 de 2005.

Relaciones Exteriores, de la diferencia a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, siendo aquél su empleador, generada en la incompleta liquidación de sus cesantías, realizada sobre sumas inferiores a los salarios realmente devengados por el mismo cuando prestó sus servicios a dicha entidad en el exterior, en el período de la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** y otros más cuyo producto se encuentra incluido en el total demandado y tienen por única y son el producto exclusivo de una prestación de naturaleza laboral, nacida del vínculo legal y reglamentario habido entonces entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que establece la Ley 6ª de 1945, y obedece para el caso a lo ordenado en la Corte Constitucional en la sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.

En tal orden, el **Acuerdo Conciliatorio**, versó sobre la reliquidación de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, ordenando al Ministerio a dicho pago en cumplimiento de la Sentencia C-535-2005.

De ahí pues, que no pueda válidamente predicarse la existencia de un pago constitutivo de **"daño antijurídico"**, como sí por el contrario, lo fue de una prestación legal de carácter laboral, legítima como quiera que estaba basada en la Ley 6ª de 1945, en el *trabajo* que merece la especial protección del Estado (art. 25 de la Constitución Política) y en la *cosa juzgada* constitucional emanada de la sentencia C-535 de 2005.

h. ***Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso***

El **Acuerdo Conciliatorio** que trae el Ministerio de Relaciones Exteriores como base de la acción de repetición, no es constitutivo de condena alguna de la responsabilidad de la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** ni podría hacerlo so pena de violación del debido proceso, puesto que al trámite judicial, no fue éste convocado, ni citado u oído de manera que hubiera podido ejercer su derecho de contradicción, de oportunidad de pruebas y defensa sobre en orden a determinar la existencia y el grado de una eventual responsabilidad *conexa* a la del Ministerio de Relaciones Exteriores la cual, además, ya habría caducado conforme a las normas preexistentes a la presunta ocurrencia de la omisión al deber que aquí se le endilga remontándose a trece (13) y más años atrás, de donde siguiese necesariamente la improsperidad de una condena en su contra.

i. ***Falta de legitimación en la causa por pasiva***

La Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** no tenía la función que se le endilga de notificar personalmente las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en el exterior.

De una parte porque dicha función no se encuentra específica ni determinada en el **Decreto No. 2126 de 1992,** ni en la **Resolución 033 del 11 de enero de 1994 (Manual**

Descriptivo de Funciones), vigentes para la época en que mi representada se desempeñó como *Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones.*

Por otra parte, a mi representada se le llama a responder en repetición respecto de las liquidaciones anuales de cesantías por unos periodos **anteriores** y ***posteriores*** a su desempeño como *como Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones.* Así, **anteriores** desde 1990 hasta el 13 de enero de 2003; ***posterior*** desde el 26 de enero de 2003 en adelante, conforme el periodo que la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** prestó sus servicios en el exterior.

Además de lo anterior, durante los periodos desde 1990 hasta el año 2003 correspondiente a las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, éste se encontraba y permanecía en el exterior, circunstancia que constituye un imponderable fuera de la órbita del desarrollo de las tareas habituales de la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** quien se encontrara en la *planta interna* del Ministerio de Relaciones Exteriores entre el **14 de enero de 2003 hasta el 26 de enero de 2003,** lo que permite asumir que a quien habría correspondido notificar personalmente los respectivos actos administrativos, si los hubo, de liquidación anual de cesantías, fue a quienes desempeñaron funciones Consulares[19]. Entre ellas las de carácter administrativo, como fuera la de dar a conocer a los Funcionarios de la Misión, los actos administrativos de carácter particular de interés del propio Ministerio.

Valga la pena resaltar la temeridad del Ministerio al demandar a mi representada, la doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PEREZ**, con la pretensión principal de repetir la suma de **$133.148.563** por haberse desempeñado *Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones* durante un período de 14 días. Es evidente el abuso del derecho de acción por parte del Ministerio al pretender repetir la totalidad de lo pagado a **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** por concepto de reliquidación de sus cesantías durante el tiempo que laboro en el exterior.

j. ***Abuso del Derecho*** -Temeridad o mala fe por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores-

Se demanda aquí, entre otros, a la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** por haberse desempeñado en el Ministerio de Relaciones Exteriores como *Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones* del **14 de enero de 2003 hasta el 26 de enero de 2003** y a quien se le endilga haber faltado al deber que no tenía, de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, correspondientes al lapso comprendido desde 1990 hasta el año 2003, pues como a simple vista se puede apreciar el periodo comprendido desde 1990 hasta el 13 de enero de 2003 , es **anterior** a su designación como Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones.

[19] Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, artículo 5°

Lo mismo que sucede, infiriéndose la falta de buena fe debida en sus actuaciones por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, y abuso de su derecho a demandar en **87 procesos** más, de iguales presupuestos, por las liquidaciones anuales de las cesantías generadas a favor de Ignacio Enrique Ruiz Perea, Lilia Stella Cepeda Ulloa, Zaida Patricia Cristancho Guerrero, Gladys Cecilia Acosta Vidal, Luis Guillermo Becerra Torres, ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZFernando Alzate Donoso ,Enrique Antonio Celis Durán, Ana Cecilia Pulido Guerrero, Francia Rodríguez Romero, María del Pilar Gómez Valderrama, Armando González Cortés, Eduardo Alonso Rodríguez, Myriam Duarte Bernal, Consuelo del Socorro Tirado, Reinaldo Vélez Londoño, José Fernando Cendales, Eduardo Casas Acosta, María Nelly Tascón Maya, María Eugenia Beltrán de Chaparro, Miguel Camilo Ruiz Blanco, Esperanza Castro Duque, Raúl Arturo Rincón, Martha Osorio Villamizar, Divia Desideria Cepeda, Felicia Mercedes Valera, Blanca Marina Villacrees, Nydia Inés Aguirre Acevedo, Janneth Victoria Truque P, Adda Isabel Borda Medina, Edgardo Alfredo Llorente Méndez, Luis German Estrada, Henry Javier Arcos, María Helena Londoño, Patricia Klein, María Victoria Eugenia Senior Pava, Julia Inés Mora López, Maria Cristina Guerrero López, Margarita Eliana Manjarrez Herrera, René Correa Rodríguez, Gladys Mireya Paéz Herrera, Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez, Alberto Bula Bohórquez, María Helena Pastrana Pastrana, María Inés Herreño Pinto, María Smith Rueda Centeno, Juan Norberto Colorado Correa, Amparo Flórez López, Álvaro Sandoval Bernal, Alicia Alejandra Alfaro Castillo, Pablo Antonio Rebolledo Schools, Alejandro Borda Rojas, Carlos Rodríguez Bocanegra, Miguel Ángel Rodríguez Melo, Edwin Ostos Alfonso, Mauricio González López, Jaime Girón Duarte, Nacianceno López Restrepo, Rafael Juan Carlos Espinosa, Santiago Salcedo, Mery Cecilia Hurtado, Flor Ángela Martínez, Alberto Barrantes Ullos, Juan José Quintana A, Carlos Arturo Forero, Olga Cielo Molina de la Villa, Hernán Vargas Martín, Álvaro Enrique Ayala Meléndez, Carmen Estavana Zapateiro B, Fernando Salavarrieta García, Marcela Ordóñez Fernández, Gilberto Poveda Rodríguez, Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi ,Alfonso de Jesús Vélez Rivas, Fabio Emel Pedraza Pérez, Ana del Socorro Bornacelli Guerrero, Marcela Rodríguez Velandia, Alvaro Eugenio Márquez Sarmiento, Javier Darío Higuera Ángel, Carlos Arturo Morales López, Daniel Ávila Camacho, José Antonio Solarte Gómez, Blanca Stella Barrero Barrero, María Consuelo Porras, Concepción Concha Agudelo.

i. ***Ilegitimidad del derecho sustantivo***

Existe Ilegitimidad del uso del derecho sustantivo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por cuanto lo que se pretende es el REEMBOLSO de una prestación social como lo es el **auxilio de cesantías**, cuyo PAGO emana de la OBLIGACION LEGAL de aquélla, producto del VINCULO LABORAL con la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Aquello que la causa en que se fundan las pretensiones del actor, devienen del supuesto deber de haber notificado o no las liquidaciones, es un sofisma para distraer la atención del verdadero derecho sustantivo que es aquélla -las cesantías- y no éste, porque con razón o sin ella, el derecho a dicha prestación, existe, en virtud de lo

dispuesto por la **Ley 50 de 1990** y por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**.

Dada la *materia*, de acuerdo a la cuantía cuyo valor pretende que se le reembolse por los funcionarios o ex funcionarios demandados, pues se trata de una prestación social de carácter laboral, nacida del vínculo de trabajo que existió entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y aquélla a quien se realizó el pago, en el cual el Ministerio es, por el contrario, deudor de la obligación, conforme al artículo 249 del C.S.T., que establece el auxilio de cesantía, y lo dispuesto en la Sentencia de Constitucionalidad C-535 de 2005, toda vez que la causa de lo pagado, es producto de dicho fallo que le impuso a dicha entidad, la obligación de liquidar tales prestaciones con base en el salario realmente devengado por la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, durante los periodos de sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior desde 1990 hasta el año 2003, y para cuyo cumplimiento no puede predicarse la existencia como engañosamente se formula, de una indemnización, que diera lugar al daño antijurídico.

V. FUNDAMENTACIÓN DE LA DEFENSA

a. Fáctica

Lo que da origen a lo pagado, cuyo monto se pretende *repetir*, corresponde al **derecho** de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** al reconocimiento y pago de las diferencias a su favor por concepto de ***cesantías*** desde 1990 hasta el año 2003 de acuerdo con los salarios que en esos períodos realmente devengó[20]

No es, pues, racional, ni lógico y sí sofístico, afirmar como lo expone la demanda, que obedezca al deber que en el período del **14 de enero de 2003 hasta el 26 de enero de 2003** la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** habría tenido y ***omitiera*** *"(...) en su condición de Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones..."*, de notificar *personalmente* a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, sus ***cesantías*** anuales desde 1990 hasta el año 2003 e impedido así, con *culpa grave,* que no ocurriera el fenómeno *prescriptivo* trienal de las acciones laborales y de caducidad de las propias ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que le hubieran permitido al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES eludir el reconocimiento y pago de dicha prestación conforme a los salarios reales que en esos períodos la misma devengó, incrementándose su valor, que es lo que al Ministerio le resulta *antijurídico* y asume como el *daño* que alega le irrogó *pagar* lo que, inclusive despojado de las acciones llamadas a hacer efectivo el cobro de lo debido, persiste jurídicamente como una *obligación natural* que encuentra en su naturaleza la causa legítima del pago, que, en consecuencia, no cabe *repetir*.

[20] Sentencia C-535 de 2005

De manera que del Catálogo de Funciones mencionados genéricamente no se desprende la prueba que permita afirmarse, como lo expresa la demanda, que la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** tuviera el deber de *notificar personalmente* las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** con destino al Fondo Nacional del Ahorro **desde 1990 hasta el año 2003** tampoco era esa la *práctica común* adoptada al respecto como política general por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por eso, *repetir* lo pagado generaría más bien, un *enriquecimiento sin causa* en cabeza de **LA NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**, a la vez que le irrogaría un injusto *empobrecimiento* a la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** por cierto, el extremo débil de la relación laboral que se le opone para sustentar la acción.

b. Jurídica

La Ley 6 de 1945, establece la obligación del empleador, en este caso el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, de reconocer y pagar al trabajador el auxilio de **cesantía**, un mes de salario por año de servicio, o proporcionalmente a su fracción, debiéndose tener por *salario* todo emolumento que este reciba ordinariamente en desarrollo de su vinculación laboral.

Ahora bien, la Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005 en materia de cesantías de los funcionarios y ex funcionarios que prestaron servicios al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en el exterior, sobre las mismas consideraciones que antes en materia de *pensiones* sirvieron de sustento a la Sentencia C-173 del 02 de marzo de 2004, definió que dicha prestación debe corresponder a los salarios realmente devengados y que una disposición como la que contenía el Decreto 10 de 1992 (art. 57[21]) y retomó el Decreto Ley 274 de 2000 (art. 66[22]), que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 derogó, no debieron aplicarse y sí, haber acudido la Entidad a la *excepción de inconstitucionalidad,* lo que no se hizo y vino a remediar el Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012 y aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F". En tal virtud, lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de sus ***cesantías*** anuales en el periodo comprendido desde **1990 hasta el año 2003**, no es de carácter indemnizatorio, por lo que no le ocasiona legítimamente a LA NACION -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- un detrimento patrimonial, presupuesto inescindible de la acción de repetición.

De otra parte, si como está visto durante varios años, desde 1990 hasta el año 2003 todos los quince (15) ex funcionarios aquí y en otros procesos[23] también demandados,

[21] Declarado Inexequible Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.
[22] Declarado Inexequible Sentencia C-292 de 2001.
[23] Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B", Radicados **2014-00835-00** y **2014-00841-00**, J. 4° Administrativo de Descongestión Radicados **2014-00004-00** y **2013-00440-00**, J. 8° Administrativo del Circuito Radicado **2013-00622-00**, J. 9° Administrativo del Circuito, Radicados **2014-00026-00, 2014-**

siempre hicieron u omitieron lo mismo como lo afirma la demanda, lógico es colegir que esa fue sistemáticamente la política establecida sobre la materia por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y no la manifestación independiente y autónoma de la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** por la que deba responder patrimonial ni administrativamente, pues habríase dado *culpa* de la propia Entidad que la exime al respecto y cuanto más, un ***error communis facit ius***[24] o, que hace derecho.

Por lo anterior, en este caso no puede afirmarse que se hayan configurado los elementos para considerar probada la culpa grave de la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** conforme lo prevé el artículo 6º de la Ley 678 de 2001 y, en tal sentido, se trae a colación lo expuesto por el H. Consejo de Estado respecto a la carga de la prueba en la acción de repetición (denominada pretensión con la Ley 1437 de 2011):

> *"Es claro que el solo desconocimiento de la norma por el operador jurídico encargado de aplicarla a través de actos administrativos (...) no implica de plano una responsabilidad a título de imputación de culpa grave o dolo, puesto que, en estos casos, existe un margen de error admisible en condiciones normales y más aún extraordinarias cuando se trata de la interpretación y ejecución de las normas jurídicas o de la percepción de la realidad atendiendo las circunstancias específicas del caso, toda vez que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de la función pública se trata de una labor humana, que implica la posibilidad de yerros en las actuaciones. Como en el sub exámine no son procedentes las presunciones de dolo y culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001, por la echa de ocurrencia de los hechos, dichos conceptos requieren de una carga probatoria mayor por parte de la entidad pública en cuanto que debe desplegar una actividad prolífica tendiente a demostrar y acreditar el dolo y la culpa grave..."*[25].

Por otra parte, los servidores públicos tienen un régimen de responsabilidad subjetivo y, en consecuencia, el título de imputación, sea dolo o culpa grave, debe estar plenamente demostrado dentro del proceso en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, pues el mismo no se presume en estos casos. En otras palabras, no basta simplemente citar uno de los presupuestos de la ley para que se configure la pretensión de repetición, debe acreditarse en debida forma la actuación dolosa o gravemente culposa del agente demandado.

Ahora bien, se advierte que existen serias y graves deficiencias respecto de las pruebas que ordenan a la entidad pública al pago de las diferencias de cesantías a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** que, en este caso, corresponde al **Auto de aprobación de la conciliación proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"**, ya que tal documentos debió ser

---

00065-00, 2014-00260-00 y **2014-00605-00**, J. 31 Administrativo del Circuito Radicados **2014-00092-00, 2014-00111-00, 2013-00244-00, 2014-00286-00, 2014-00479-00, 2014-00304-00** y **2014-00387-00**, J. 35 Administrativo del Circuito Radicados **2013-00056-00, 2014-00467-00, 2014-00467-00, 2014-00152-00** y **2014-00399-00**, J. 37 Administrativo del Circuito Radicados **2013-00087-00, 2013-00115-00, 2013-00123-00, 2013-00303-00, 2013-00304-00, 2013-00479-00** y **2013-00480-00**, entre muchos otros.

[24] Conc. artículo 8°. Ley 153 de 1887

[25] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Rad. 11001032600020030001901, Número interno 24953, C.P. Dra. Ruth Stella Correa.

aportados con la demanda en originales según lo dispone el Art. 245 del C.G.P: "[...] *Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en donde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.*

En un asunto similar al que nos ocupa, la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó:

> *"Por tanto, las copias aportadas por la entidad demandante carecen de valor probatorio, porque, en tratándose de copias de documento público (...), para que puedan ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial, deben reunir las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra la diligencia de autenticación.*
>
> *En ese orden de ideas, se concluye que no está demostrado dentro del proceso el primero de los hechos generadores de la acción de repetición, cual es la existencia de una sentencia (o providencia) que condene al Estado a reparar patrimonialmente un daño antijurídico,* ***situación que por sí sola implica que se deben negar las pretensiones de la demanda, en tanto ello tiene incidencia en la acreditación de los otros requisitos (...)"***[26] (Resalto).

De esta manera, se reitera lo establecido en el Artículo 173 del Código General del Proceso que establece el deber por parte de los jueces de *abstenerse de ordenar la práctica de pruebas* que directamente, o por medio del derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que la solicite.

VI. PRUEBAS

Ruego al Señor Juez, decretar y tener como pruebas de mi parte, las siguientes:

VI.1 Documental

a) **Aporto** poder original con que actúo.

b) **Se oficie**

1. A la Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso y con base en sus *archivos*, se informe sobre los documentos, si los hubiere, que sirvieron de soporte para la erogación del *gasto*, por concepto de las **cesantías** anuales del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde julio de 1992 a diciembre de 1996- octubre 1999 a diciembre de 2003;

---

[26] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sent. del 28 de febrero de 2011, Rad. 34.816. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

2. Al Fondo Nacional del Ahorro FNA, para que con destino al proceso, se informe sobre los documentos remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, soportando los depósitos efectuados por el mismo a favor del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde julio de 1992 a diciembre de 1996- octubre 1999 a diciembre de 2003;

3. A la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se informe y remita copia de las resoluciones por medio de las cuales el Ministro de Relaciones Exteriores delegó, como ordenadores del gasto, entre otros, lo que es hoy la Dirección Administrativa y Financiera, el *pago* al Fondo Nacional del Ahorro de los depósitos de cesantías anuales del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde 1990 hasta el año 2003

4. A la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se dé cuenta, individualizándolos de los demás funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quienes, como en este caso a la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** se ha demandado o dispuesto demandar en acción de repetición, por supuestamente haber omitido *notificar personalmente,* las cesantías anuales depositadas al Fondo Nacional del Ahorro, indicando los cargos y periodos por los que en cada caso se les llama a responder;

5. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se remita copia de las liquidaciones, **año por año**, de las cesantías del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde 1990 hasta el año 2003 y particularmente en el periodo ***desde el 14 de enero de 2003 hasta el 26 de enero de 2003*** como dice la demanda, conciliadas por un total de **$133.148.564** cuyo monto se pretende repetir sin razón de proporcionalidad alguna, entre otros, en contra de la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ**.

Procura esta prueba establecer que los hechos u omisiones, en relación con el deber que se dice *supuestamente* tenía la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** de notificar al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** las cesantías por el periodo desde 1990 hasta el año 2003 habría sido cuanto más, una política sistemática y generalizada del Ministerio de Relaciones Exteriores, generadora, como tal, de un *error communis facit ius*, imputable a la *propia culpa* de la entidad.

6. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores o a quien en su defecto, corresponda, (art. 21 CPACA) a fin de que con destino al proceso de cuenta del lugar donde el Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** se desempeñaba al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior, en los años desde 1990 hasta el año 2003 a los que corresponden el pago que se le hizo de las cesantías, por cuya cancelación se pretende repetir y se diga qué condiciones de traslado, si se encontraba en el exterior, tenían los demandados para notificarle personalmente allí las liquidaciones anuales de dicha prestación durante tales periodos, a que alude la demanda.

Con esta prueba pretendo demostrar la imposibilidad real que los demandados, y en este caso, la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** tenía para haber cumplido el deber que supuestamente tenían de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de las liquidaciones anuales de cesantías, encontrándose el mismo en el exterior, con mayor razón si esa era una condición extendida en todo el mundo, donde tenían asiento las distintas Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia.

7. A los siguientes Despachos Judiciales, para que a mi costa, y a fin de que por sus respectivas Secretarías se certifique la existencia de tales procesos instaurados por el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** en acciones de repetición, por la misma causa del que en este caso nos ocupa:

Pago realizado a:	Despacho Judicial	Radicado Proceso
Ignacio Enrique Ruiz	Consejo de Estado-Sección III-Sub B	**2014-00043-00**
Lilia Stella Cepeda Ulloa	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	**2014-00835-00**
Zaida Patricia Cristancho Guerrero	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	**2014-00841-00**
ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ	J. 4° Admtivo de Descongestión	**2014-00004-00**
Fernando Alzate Donoso	J. 4° Admtivo de Descongestión	**2013-00440-00**
Enrique Antonio Celis Durán	J. 8° Administrativo del Circuito	**2013-00622-00**
Ana Cecilia Pulido Guerrero	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00026-00**
Francia Rodríguez Romero	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00065-00**
María del Pilar Gómez Valderrama	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00260-00**
Armando González Cortés	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00605-00**
Eduardo Casas Acosta	J. 16 Administrativo del Circuito	**2013-00599-00**
María Nelly Tascón Maya	J. 18 Administrativo del Circuito	**2013-00511-00**
María Eugenia Beltrán de Chaparro	J. 19 Administrativo del Circuito	**2013-00128-00**
Miguel Camilo Ruiz Blanco	J. 19 Admtivo Descongestión Cto	**2014-00200-00**
Janeth Victoria Truque Rivera	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00188-00**
Raul Arturo Rincón Ardila	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00037-00**
Henry Javier Arcos Muñoz	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00391-00**
Nidia Inés Aguirre Acevedo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00084-00**
María Inés Aldana Nieto	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00036-00**
Anyul Molina Suarez	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00211-00**
Mauricio Baquero Pardo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00268-00**
Álvaro Eugenio Márquez Sarmiento	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00183-00**
Marcela Rodríguez Velandia	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00238-00**
Cruz Elena Mosquera Monteros	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00009-00**
María Victoria Eugenia Senior Pava	J. 23 Administrativo del Circuito	**2013-00392-00**
Margarita Eliana Manjarrez Herrera	J. 26 Administrativo del Circuito	**2013-00535-00**
René Correa Rodríguez	J. 27 Administrativo del Circuito	**2013-00211-00**
Gladys Mireya Paéz Herrera	J. 27 Administrativo del Circuito	**2014-00314-00**
Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez	J. 30 Administrativo del Circuito	**2013-00597-00**
Alberto Bula Bohórquez	J. 30 Administrativo del Circuito	**2014-00071-00**

María Helena Pastrana Pastrana	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00092-00**
María Inés Herreño Pinto	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00111-00**
María Smith Rueda Centeno	J. 31 Administrativo del Circuito	**2013-00244-00**
Juan Norberto Colorado Correa	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00286-00**
Amparo Flórez López	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00479-00**
Álvaro Sandoval Bernal	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00304-00**
Alicia Alejandra Alfaro Castillo	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00387-00**
Pablo Antonio Rebolledo Schools	J. 32 Administrativo del Circuito	**2014-00118-00**
Alejandro Borda Rojas	J. 32 Administrativo del Circuito	**2013-00389-00**
Hector Montoya Añez	J. 32 Administrativo del Circuito	**2014-00153-00**
Carlos Rodríguez Bocanegra	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00316-00**
Miguel Ángel Rodríguez Melo	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00317-00**
Edwin Ostos Alfonso	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00383-00**
Mauricio González López	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00384-00**
Jaime Girón Duarte	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00430-00**
Nacianceno López Restrepo	J. 34 Administrativo del Circuito	**2013-00279-00**
Álvaro Enrique Ayala Meléndez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2013-00056-00**
Carmen Estavana Zapateiro B.	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00467-00**
Fernando Salavarrieta García	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00152-00**
Marcela Ordóñez Fernández	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**
Gilberto Poveda Rodríguez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00399-00**
Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi	J. 36 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**
Alfonso de Jesús Vélez Rivas	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00087-00**
Fabio Emel Pedraza Pérez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00115-00**
Ana del Socorro Bornacelli Guerrero	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00123-00**
Javier Darío Higuera Ángel	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00303-00**
Carlos Arturo Morales López	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00304-00**
Daniel Ávila Camacho	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00479-00**
José Antonio Solarte Gómez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00480-00**
Diego Felipe Cadena Montenegro	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00271-00**
Amalia Rodriguez Fuque	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00290-00**
Victoria Eugenia Olga Pauwles T.	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00268-00**
Blanca Stella Barrero Barrero	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00106-00**
María Consuelo Porras	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00117-00**
Concepción Concha Agudelo	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00446-00**

VI. 2 Testimonios

a) Respetuosamente solicito que se llame a declarar en audiencia en la fecha y hora que para tales efectos señale el Despacho, sobre los hechos y omisiones que sean de su conocimiento, en relación con el diligenciamiento, liquidaciones y pago al Fondo Nacional de Ahorro FNA, en materia de liquidaciones anuales de *cesantías*, al Señor **ABELARDO RAMÍREZ GASCA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19'054.598 de Bogotá, con domicilio en la Carrera 14 No. 109 – 79 Apartamento 301, Edificio Caminos del Parque, en Bogotá.

b) Así mismo, con el fin de que deponga sobre la ejecución presupuestal en materia de cesantías anuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y del traslado de las mismas al FNA, con ocasión del desempeño que tuvo a su cargo la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Doctora **ARAMINTA BELTRÁN URREGO**, Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No. 9-03, en Bogotá.

c) A quienes fungieron como miembros del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores para que depongan en relación con las razones que tuvieron en consideración para llevarlos a determinar que hubo *culpa grave*, y demandar en repetición a la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ** ñcuando se desempeñó como ***Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones*** del Ministerio de Relaciones Exteriores en los periodos reseñados en la demanda, (Acta No. 229 del 22 de julio de 2013), consistente en haber omitido el deber que *supuestamente* tenía, según la demanda, de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las liquidaciones anuales de las cesantías por valor de **$133.148.564** para cuyos efectos se le citará en el día y hora que señale su despacho, a través de la Dirección del Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No.9-03, en Bogotá y son:

1. Doctor EDWIN OSTOS ALFONSO, Director de Asuntos Jurídicos Internacionales (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

2. Doctor ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO, Director de Talento Humano; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

3. Doctora CLAUDIA LILIANA PERDOMO ESTRADA, Jefe Oficina Asesora Jurídica Interna (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

4. Doctora MARTHA RUBY CUÉLLAR CALDERÓN, Coordinadora Grupo Interno de Gestión; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

5. Doctora LUZ ANDREA CORREDOR ARTEAGA, Abogada Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

6. Doctora HELGA VELASQUEZ AFANADOR, Abogada Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

7. Doctor JORGE ENRIQUE BARRIOS SUÁREZ, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

8. Doctor HUGO ARMANDO GRANJA ARCE, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

9. Doctor ANDRES LEONARDO MENDOZA PAREDES, Secretario Técnico (E) del Comité de Conciliación; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

VII. COSTAS

Sean a cargo de la demandante, LA NACION –MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- incluyendo *agencias en derecho*, toda vez que es manifiesta la falta de buena fe de dicha entidad al demandar en repetición a varios exfuncionarios, cuando no se cumplen a cabalidad todos los presupuestos establecidos de manera expresa por la Ley 678 de 2001 para el ejercicio de dicho medio de control, ya que en ningún caso existió una condena al Ministerio a reconocer una indemnización, sino que se le ordena efectuar la reliquidación de las cesantías, que es una prestación social de naturaleza laboral, en favor de un trabajadora por no habérsele incluido todos los factores salariales devengados en la planta externa, lo cual fue una política de dicho ministerio y no la decisión unilateral de los ahora demandados.

VIII. NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones, junto con mi representada la Doctora **ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ**en la Secretaría de su Despacho; en mi oficina de la Carrera 15 No. 86A- 57 of. 501, teléfono 7027824, en Bogotá; y, a través de mi correo electrónico: cilinof@hotmail.com.

Señor Juez,

Franklyn Liévano Fernández
C.C. No. 19.154.294 de Bogotá
T.P. No. 12.667 del C.S.J.

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
El documento fue presentado personalmente por Franklyn Liévano Fernández
Quien se identificó C C No. 19'154 294
T P No. 12-667 Bogotá D C 05 MAY 2016
VHPP

791

Señor Juez
JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Sección Tercera
E. S. D.

Proceso : Ordinario

Naturaleza : **Repetición**

Asunto : ***Contestación de demanda***

Radicado : **No. 110013336722-2014-00109-00**

Demandante : **LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**

Demandados : CLARA INÉS VARGAS SILVA *y otros*

FRANCIA HELENA MARRUGO DE SÁNCHEZ, mayor y vecina de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 33'212.207 de Mompós, Bolívar, con domicilio en la ciudad, en ejercicio del **Poder General** *adjunto* que me otorgó la señora **ITUCA HELENA MARRUGO PEREZ**, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 33'213.748 de Mompós, Bolívar, mediante **Escritura Pública No. 3979 del 27 de octubre de 2012** de la **Notaría 72 del Circulo de Bogotá**, quien es mayor y con domicilio temporal en Frankfurt, Alemania, a usted respetuosamente manifiesto que por medio de este escrito confiero **Poder Especial**, amplio y suficiente al Doctor **FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ**, mayor y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501 teléfono 7027824, en la ciudad y correo electrónico: cilinof@hotmail.com, para que en nombre de mi representada concurra, se **notifique** del *auto* admisorio de la demanda y la represente en este proceso hasta su terminación.

Mi apoderado dispondrá en el ejercicio de su gestión, de todas las facultades generales de ley, así como de las especiales de recibir, desistir, conciliar, transigir, sustituir y reasumir.

Ruego al Señor Juez y tener a mi apoderado en los términos de este escrito.

Del Señor Juez,

Francia Helena Marrugo Pérez
FRANCIA HELENA MARRUGO DE SÁNCHEZ
C.C. No. 33'212.207 de Mompós

Acepto el poder conferido,

FRANKLYN LIÉVANO FERNÁNDEZ

NOTARÍA CATORCE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Autenticación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Bogotá D.C., 2016-04-06 10:01:39 Documento: hpo

El anterior escrito dirigido a: Juez

Ante JORGE LUIS BUELVAS HOYOS NOTARIO 14 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. compareció:

MARRUGO PEREZ FRANCIA HELENA

Identificado con C.C. 33212207

Quien declaró que las firmas de este documento son suyas, el contenido del mismo es cierto y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento. 25jrw9b

Firma compareciente

JORGE LUIS BUELVAS HOYOS

NOTARIO 14 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

34

742

Cancillería
Ministerio de Relaciones Exteriores

PROSPERIDAD PARA TODOS

DITH No. 0771

EL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CERTIFICA:

Que revisada la historia laboral de la doctora ITUCA HELENA MARRUGO PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 33.213.748, se pudo constatar que ha prestado sus servicios en este Ministerio en los siguientes períodos; desde el 15 de febrero de 1989 hasta el 13 de febrero de 2000 y desde el 17 de marzo de 2000 hasta la fecha. Actualmente desempeña el cargo de Auxiliar de Misión Diplomática, código 4850, grado 23, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito al Consulado General de Colombia en Frankfurt, Alemania.

Que los cargos desempeñados en la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores por parte de la doctora MARRUGO PÉREZ, son los descritos a continuación:

Mediante Resolución No. 174 del 31 de enero de 1989, se nombró en el cargo de Auxiliar Administrativo 1 PA (Local) en el Consulado de Colombia en Tabatinga-Brasil. Tomó posesión el 15 de febrero de 1989 y lo desempeñó hasta el 13 de febrero de 2000.

Mediante Resolución No. 662 del 21 de febrero de 2000, se nombró en el cargo de Profesional Universitario, código 3020, grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tomó posesión el 17 de marzo de 2000 y lo desempeñó hasta el 29 de noviembre de 2001.

Mediante Resolución No. 5358 del 29 de noviembre de 2001, se nombró en el cargo de Asesor 1020, grado 01, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tomó posesión el 30 de noviembre de 2001 y lo desempeñó hasta el 1º de febrero de 2004.

Mediante Resolución No. 0273 del 30 de enero de 2004, se incorporó al cargo de Asesor, código 1020, grado 01, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tomó posesión el 2 de febrero de 2004 y lo desempeñó hasta el 17 de septiembre de 2009.

Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos
Dirección correspondencia Carrera 5 No. 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez
PBX 3814000 – Fax 3814747
www.cancilleria.gov.co – contactenos@cancilleria.gov.co
Bogotá D.C., Colombia Sur América

35

743

Cancillería
Ministerio de Relaciones Exteriores

PROSPERIDAD PARA TODOS

Mediante Resolución No. 0506F del 25 de agosto de 2009, se comisionó entre el 1° y el 30 de septiembre de 2009, (30 días), para que se trasladará a la ciudad de San José – Costa Rica, con el fin de prestar apoyo en las labores de la Embajada de Colombia en ese país.

Mediante Resolución No. 4030 del 16 de septiembre de 2009, se nombró en el cargo de Asesor, código 1020, grado 04, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, asignada a la Dirección de Talento Humano. Tomó posesión el 18 de septiembre de 2009 y lo desempeñó hasta el 31 de octubre de 2012.

Mediante Resolución No. 0797F del 25 de septiembre de 2009, se prorrogó entre el 1° y el 30 de octubre de 2009 (30 días) la comisión autorizada mediante Resolución número 0506F del 25 de agosto de 2009, para que permaneciera en la ciudad de San José – Costa Rica, con el fin de que prestara apoyo en las funciones de la Embajada de Colombia en esa ciudad.

Mediante Resolución No. 1066F del 26 de octubre de 2009, se prorrogó entre el 31 de octubre y el 29 de noviembre de 2009 (30 días) la comisión conferida mediante Resolución número 0506F del 25 de agosto de 2009 y prorrogada mediante Resolución número 0797F del 25 de septiembre de 2009, para que permaneciera en la ciudad de San José – Costa Rica, con el fin de que prestara apoyo en las funciones de la Embajada de Colombia en esa ciudad.

Mediante Resolución No. 5112 del 27 de agosto de 2012, se nombró en el cargo de Auxiliar de Misión Diplomática, código 4850, grado 23, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito al Consulado General de Colombia en Frankfurt, Alemania. Tomó posesión el 1° de noviembre de 2012 y lo desempeña actualmente.

La presente certificación se expide a solicitud de la interesada a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del año dos mil trece (2013).

ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO

JAGR / MCMG / LEOT

Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos
Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez
PBX 3814000 – Fax 3814747
www.cancilleria.gov.co – contactenos@cancilleria.gov.co
Bogotá D.C., Colombia Sur América

794 36

NOTARIA SESENTA Y DOS (62) DE BOGOTA D.C

CARLOS ARTURO SERRATO GALEANO

Notario

No 135 / 2015

CERTIFICA:

Que mediante escritura pública número TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE (3979) de fecha VEINTISIETE (27) de OCTUBRE de 2012 de esta notaria, ITUCA HELENA MARRUGO PEREZ, identificada con cédula de ciudadania numero 33.213.748 expedida en MOMPOS , otorgo PODER GENERAL, con amplias facultades a FRANCIA HELENA MARRUGO DE SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadania numero 33.212.207 expedida en MOMPOS.

Que revisado el protocolo que contiene dicha escritura NO se encontró nota de REVOCACION o CANCELACION alguna, por lo tanto sigue VIGENTE HASTA LA FECHA en cuanto respecta a esta Notaria.

Para verificar el contenido fehaciente del citado poder, debe consultarse copia auténtica de la escritura.

Es certificado de vigencia de poder que expido a la fecha, a solicitud del INTERESADO, que manifiesta que:

a) El (la) o (los) poderdante se encuentra vivo (a) a la fecha.

b) Ni el (la) (los) poderdante, ni el (la) (los) apoderado se encuentra (n) en quiebra.

c) Ni el (la) (los) poderdante, ni el (la) (los) apoderado se encuentra (n) en interdicción.

La presente certificación se expide a los CUATRO (04) días del mes de MARZO del año dos mil QUINCE (2015), siendo la 03:30 PM con destino a: INTERESADO.

DERECHOS NOTARIALES 2.300 + IVA 368 = 2.668

Esta certificaciòn NO tiene validez si no coincide en su integridad con los nombres y cédulas y demas datos de la escritura pública que se cita, expedida en el correspondiente papel de seguridad.

Solicitado por : ITUCA HELENA MARRUGO PEREZ

CARLOS ARTURO SERRATO GALEANO

NOTARIO SESENTA Y DOS (62) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

Carrera 24 No. 53-26 Frente al parqueadero C.C. Galerias
Tel: 2489296 - Cel: 3208183419- E-mail: notaria62bogota@hotmail.com.
Bogotá D.C. ELABORADO POR: LUIS JAVIER HERNANDEZ

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escritura pública, certificados y documentos notariales
Cal2825501

NOTARIA SESENTA Y DOS (62) DE BOGOTA D.C

CARLOS ARTURO SERRATO GALEANO

Notario

No 135 / 2015

CERTIFICA:

Que mediante escritura pública número TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE (3979) de fecha VEINTISIETE (27) de OCTUBRE de 2012 de esta notaría, ITUCA HELENA MARRUGO PEREZ, identificada con cédula de ciudadania número 33.213.748 expedida en MOMPOS. , otorgò PODER GENERAL, con amplias facultades a FRANCIA HELENA MARRUGO DE SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 33.212.207 expedida en MOMPOS.----------

Que revisado el protocolo que contiene dicha escritura NO se encontró nota de REVOCACION o CANCELACION alguna, por lo tanto sigue VIGENTE HASTA LA FECHA, en cuanto respecta a esta Notaría.----------

Para verificar el contenido fehaciente del citado poder, debe consultarse copia auténtica de la escritura.----------

Es certificado de vigencia de poder que expido a la fecha, a solicitud del INTERESADO, que manifiesta que :

a) El (la) o (los) poderdante se encuentra vivo (a) a la fecha.----------

b) Ni el (la) (los) poderdante, ni el (la) (los) apoderado se encuentra (n) en quiebra.----------

c) Ni el (la) (los) poderdante, ni el (la) (los) apoderado se encuentra (n) en interdicción.----------

La presente certificación se expide a los CUATRO (04) días del mes de MARZO del año dos mil QUINCE (2015), siendo la 03:30 PM con destino a: INTERESADO.----------

DERECHOS NOTARIALES 2.300 + IVA 368 = 2.668----------

Esta certificaciòn NO tiene validez si no coincide en su integridad con los nombres y cèdulas y demàs datos de la escritura pùblica que se cita, expedida en el correspondiente papel de seguridad.----------

Solicitado por : ITUCA HELENA MARRUGO PEREZ

CARLOS ARTURO SERRATO GALEANO

NOTARIO SESENTA Y DOS (62) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C

Carrera 24 No. 53-26 Frente al parqueadero C.C. Galerias
Tel: 2489296 - Cel: 3208183419- E-mail: notaria62bogota@hotmail.com.
Bogotá D.C. ELABORADO POR: LUIS JAVIER HERNANDEZ

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos notariales
Ca102825501
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos notariales
Ca102825501
C-cadena s.a. NIT. 890.900.943-0

796 38

NOTARIA SESENTA Y DOS (62) DE BOGOTA D.C

CARLOS ARTURO SERRATO GALEANO

Notario

No 616 / 2014

CERTIFICA:

Que mediante escritura pública número **TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE (3979)** de fecha **VEINTISIETE (27)** de **OCTUBRE** de **2012** de esta notaría, **ITUCA HELENA MARRUGO PEREZ**, identificada con cédula de ciudadania número **33.213.748** expedida en **MOMPOS.** , otorgó **PODER GENERAL**, con amplias facultades a **FRANCIA HELENA MARRUGO DE SANCHEZ**, identificada con cédula de ciudadanía número **33.212.207** expedida en **MOMPOS.**----------

Que revisado el protocolo que contiene dicha escritura **NO** se encontró nota de **REVOCACION** o **CANCELACION** alguna, por lo tanto sigue **VIGENTE HASTA LA FECHA**, en cuanto respecta a esta Notaría.----------

Para verificar el contenido fehaciente del citado poder, debe consultarse copia auténtica de la escritura.----------

Es certificado de vigencia de poder que expido a la fecha, a solicitud del **INTERESADO**, que manifiesta que :

a) El (la) o (los) poderdante se encuentra vivo (a) a la fecha.----------

b) Ni el (la) (los) poderdante, ni el (la) (los) apoderado se encuentra (n) en quiebra.----------

c) Ni el (la) (los) poderdante, ni el (la) (los) apoderado se encuentra (n) en interdicción.----------

La presente certificación se expide a los VEINTISEIS (26) días del mes de AGOSTO del año dos mil CATORCE (2014), siendo la 12:55 PM con destino a: INTERESADO.----------

DERECHOS NOTARIALES 2.200 + IVA 352 = 2.552----------

Esta certificaciòn **NO** tiene validez si no coincide en su integridad con los nombres y cèdulas y demàs datos de la escritura pùblica que se cita, expedida en el correspondiente papel de seguridad.----------

Solicitado por : ITUCA HELENA MARRUGO PEREZ,

REPUBLICA DE COLOMBIA
Carlos Arturo Serrato Galeano
NOTARIO 62 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

CARLOS ARTURO SERRATO GALEANO

NOTARIO SESENTA Y DOS (62) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

DOCUMENTO CONTROLADO
DORA VELOSA C.C. 52.561.007

Carrera 24 No. 53-26 frente al parqueadero C.C. Galerias
Tel: 2489296 - Cel: 3208183419- E-mail: notaria62bogota@hotmail.com.
Bogotá D.C. ELABORADO POR: LUIS JAVIER HERNANDEZ

REGISTRO Y CONTROL
JAVIER HERNANDEZ DUARTE
C.C. 79.683.309

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
CA080247016
cadena s.a. Nit. 890900340

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

República de Colombia

Aa000046225

Nº 3979

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 3979 ----------

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE ----------

FECHA: VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE ----------

DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012) DE LA NOTARÍA SESENTA Y DOS (62) DE BOGOTÁ D.C.----------

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.----------

FORMATO DE CALIFICACIÓN: ----------

PODERDANTE:	**IDENTIFICACIÓN**
ITUCA HELENA MARRUGO PEREZ	**C.C. 33.213.748**
APODERADA:	**IDENTIFICACIÓN**
FRANCIA HELENA MARRUGO DE SANCHEZ	**C.C. 33.212.207**

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, en la Notaría Sesenta y Dos (62) del Círculo de Bogotá, D.C., cuyo Notario **TITULAR** es el Doctor **CARLOS ARTURO SERRATO GALEANO,** en esta fecha se otorga la escritura pública que consigna los siguientes términos: ----------

COMPARECIÓ: **ITUCA HELENA MARRUGO PEREZ,** mayor de edad, de nacionalidad colombiana, con domicilio en Bogotá, D.C., quien se identificó con la cédula de ciudadanía número 33.213.748 expedida en Mompos, de estado civil soltera sin union marital de hecho, obrando en nombre propio y dijo: Que por el presente instrumento público confiere **PODER GENERAL,** amplio y suficiente a **FRANCIA HELENA MARRUGO DE SANCHEZ,** mayor de edad, de nacionalidad colombiana, vecina y domiciliada en Bogotá, D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 33.212.207 expedida en Mompos, de estado civil casada con sociedad conygal vigente, para que lo(la) represente en los siguientes actos relacionados con sus bienes, derechos y obligaciones a saber: ----------

PRIMERO: PARA ADMINISTRAR: Para que administre sus bien(es), recaude su(s) producto(s) y celebre toda clase de contrato(s) relativos a la administración de él(ellos).----------

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

CA050247049

CARLOS ARTURO SERRATO GALEANO NOTARIO SESENTA Y DOS CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

Cadena S.A. NIt.890.900.5340

SEGUNDO: PARA COBRAR: Para que exija, cobre o perciba cualesquiera cantidades de dinero o de otras especies que se le adeude(n), expida el(los) recibo(s) y haga(n) la(las) cancelación(es) correspondiente(s).----------

TERCERO: PARA ENAJENAR Y/O COMPRAR: Para que enajene(n) y compre a título oneroso su(s) bien(es), sea(n) muebles o inmuebles y que tenga(n) adquirido(s) ya, o los adquiera(n) en lo sucesivo, y cancele(n) la afectación a vivienda familiar, respecto a los siguientes inmuebles: ----------

1 – APARTAMENTO No. 205, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 162 No. 36 – 88 DE LA CIUDAD DE BOGOTA, identificado con folio de matrícula inmobiliaria numero **50N- 20021099**, y cédula catastral numero 162 36 15 10.----------

2 - GARAJE No. 13, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 162 No. 36 – 88 DE LA CIUDAD DE BOGOTA, identificado con folio de matrícula inmobiliaria numero **50N- 20021077**, y cédula catastral numero 162 36 15 54 ----------

3 – AUTOMOVIL – PLACA: RBZ479 – CHEVROLET – AVEO. SERVICIO: PARTICULAR – MODELO: 2011 ----------

CUARTO: PARA TRANSIGIR: Para que transija(n) el(los) pleito(s), deuda(s) o diferencia(s) que ocurra(n) relativo(s) a su(s) derecho(s) y a su(s) obligación(es).----

QUINTO: PARA COMPROMETER: Para que someta a la decisión de Tribunales de Arbitramento constituidos de acuerdo con la ley, el(los) pleitos, deuda(s) o diferencia(s) relativos a sus derechos y obligaciones y para que lo(a) represente en la sustitución del juicio o juicios arbitrales correspondientes.----------

SEXTO: PARA TOMAR Y DAR DINERO A INTERESES: Para que tome para el(la) poderdante o dé por cuenta de él(ella) dinero en mutuo y estipule la tasa de interés, ya sea a plazo fijo o en forma de crédito flotante.----------

SÉPTIMO: PARA REPRESENTACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE SOCIEDADES: Para que represente al(la) poderdante en la(s) sociedad(es) en que sea accionista; lleve su voz y emita su voto en la(s) respectiva(s) asamblea(s) o junta(s) de socios y/o para que pague los instalamentos y reciba el(los) dividendo(s) que le

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública – No tiene costo para el usuario

corresponde(n).----------

OCTAVO: PARA CONSTITUIR SOCIEDADES: Para que celebre contratos de sociedad(es), sean colectivas, en comandita, o anónimas, de carácter comercial o civil, o de sociedad accidental, o de cuentas de participación, o de limitadas y aporte a ellas cualquiera clase de bien(es) del(la) poderdante, con las facultades necesarias para estipular el monto del capital social, la(s) puesta(s) de el(los) socio(s), el modo de administrar y liquidar tales sociedades, etc.----------

NOVENO: PARA CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE Y DE AHORROS: Para que se celebre(n) contrato(s) de cuenta corriente, con la facultad expresa de estipular las tasas de interés del débito y del crédito.----------

DÉCIMO: PARA GIRAR, ENDOSAR, ETC., LETRAS DE CAMBIO, LIBRANZA, CHEQUES Y VALES A LA ORDEN: Para que gire, ordene girar, endose, proteste, acepte, avalúe y afiance letras de cambio; para que gire, endose cheques, y para que suscriba, reciba y afiance vales o pagarés a la orden.----------

DÉCIMO PRIMERO: PARA PLEITOS: Para que represente al(la) poderdante ante cualquier corporación, funcionario(s) o empleado(s) de orden judicial o del administrativo en cualquiera de las partes, sea para iniciar o seguir tales juicios, actuaciones, actos, diligencias o gestiones. Además, para que dé los poderes necesarios a abogados y a personas calificadas para los menesteres especiales; y de ser el caso, para que concilie o transija dichos pleitos.----------

DÉCIMO SEGUNDO: Para que desista de el(los) juicio(s), gestión(es) o declaración(es) en que intervenga(n) en nombre del(la) poderdante, de el(los) recurso(s) que en él(ellos) interponga(n) y de la(s) articulación(es) o incidente(s) que promueva(n). Para que se pueda(n) notificarse(n) personalmente en cualquier trámite en proceso judicial.----------

DÉCIMO TERCERO: PARA HACER NEGOCIOS PROPIOS CON DINERO O BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL(LA) PODERDANTE: Para que intervenga en negocios propios, y toda clase de bienes del(la) poderdante y para que asegure con la fianza

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Cadena S.A. NIT.8903053549 30-07-2012 1081Spfefas2004111

Cadena S.A. NIT.8903053549

personal o prendaria del(la) poderdante, la(s) obligación(es) que en su propio nombre contraiga el(la) apoderado(a).----------

DÉCIMO CUARTO: PARA PRESENTAR DECLARACIONES DE RENTA: Para que presente ante la Administración de Impuestos Nacionales la declaración de Renta.-----

DÉCIMO QUINTO: PARA PAGO POR TASAS O CONTRIBUCIONES: Para pagar ante cualquier organismo ya sea del Orden Nacional, Departamental o Municipal, las tasas o contribuciones que por cualquier concepto se generen.----------

DÉCIMO SEXTO: PARA TRAMITAR, RECIBIR DINEROS: Para que tramite, reciba dineros derivados de seguros de vida que sea beneficiario(a) por la muerte del(la) otorgante y de las entidades financieras, bancarias o comerciales.----------

DÉCIMO SÉPTIMO: PARA DELEGAR Y SUSTITUIR: Para que delegue total o parcialmente este PODER y revoque delegación(es).----------

DÉCIO OCTAVO: Para que en mi nombre y representación actúe por sí o para que otorgue poder a abogado(s), que me represente(n) en cualquier sucesión y/o liquidación de sociedad conyugal en la que tenga derecho, en la cual y de manera anticipada manifiesto que acepto la herencia con beneficio de inventario, con amplias facultades para hacer las manifestaciones de ley.----------

DÉCIMO NOVENO: A pesar de la anterior enumeración de facultades, que es meramente ejemplificativa mi apoderado(a) tendrá los más amplios poderes para representarme en todos los actos y asuntos que requiera el correcto y jurídico manejo de mis negocios, sin que quede excluida ninguna acción, gestión, actividad o declaración de voluntad en beneficio de mis intereses.----------

VIGÉSIMO: Para los efectos establecidos en el presente poder, el(la) poderdante manifiesta que faculta de manera expresa al(la) apoderado(a) o mandatario(a) para que adquiera o compre para sí los bienes en cabeza de aquel(la). Lo anterior en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2170 del Código Civil.----------

VIGÉSIMO PRIMERO: Para adquirir bienes inmuebles y suscribir las respectivas escrituras públicas en las cuales lo(a) autoriza expresamente para que bajo la

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

gravedad del juramento manifieste si afecta o no a vivienda familiar el (los) inmueble (s) que adquiere, de conformidad con las circunstancias de adquisición y de acuerdo a los parámetros de la norma, por ello faculto a mi apoderado(a) para que efectúe esta declaración de la Ley 258/96, en la(s) respectiva(s) escritura(s) pública(s).----------

VIGÉSIMO SEGUNDO: Para administrar el(los) créditos del(la) poderdante, recibir los frutos civiles que produzcan éste(os), dar prórrogas, cobrarlos directamente o por la vía judicial, dar los poderes necesarios a los abogados para cumplir la facultad anterior y para cancelar las hipotecas.----------

VIGÉSIMO TERCERO: Administrar y dar en arrendamiento los bienes del(la) poderdante, recaudar sus productos y celebrar toda clase de contratos referentes a la administración que se le confía.----------

RESUMEN: Y en general, para que asuma la personería del(la) poderdante siempre que lo estime conveniente de manera que en ningún caso quede sin representación en cualquier acto o negocio jurídico que le ataña.----------

Presente **FRANCIA HELENA MARRUGO DE SANCHEZ** de condiciones civiles y personales ya dichas, y manifestó que acepta todas y cada una de las estipulaciones citadas en este público instrumento. ----------

LECTURA DE ESTE PODER: El(la) poderdante declara que ha leído personalmente la presente escritura y que ha confrontado todos los datos especiales que en ella aparecen, como fechas, cifras numéricas, números de cuentas, números de escrituras, de cédulas de ciudadanía y otros, razón por la cual exonera al notario de los posibles errores que sobre estos puntos aparezcan en el instrumento.----------

NOTA: En aplicación del principio de la autonomía que dentro del control de legalidad puede ejercer el notario, amparado en el art. 8º del decreto ley 960/70 y el art. 116 del decreto 2148/83, se advierte e informa a los comparecientes de este público instrumento, que con el fin de prevenir una suplantación en las personas, de

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Cadena S.A. NIt.8909039340 30-07-2012 1881d4ff8ee411ffp

Cadena S.A. NIt.8909039340

salvaguardar la eficacia jurídica de este acto y así producir la plena fe pública notarial, se ha implementado un sistema de control biométrico en el que queda consignada de forma electrónica su huella digital y la imagen fotográfica de su rostro, obligándose la notaría a no publicar o comercializar dichos datos y/o imágenes.----------

CONSTANCIAS NOTARIALES: (Artículo 9 Decreto Ley 960 de 1970). El(La) Notario(a) responde de la Regularidad formal del instrumento que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados. Tampoco responde de la capacidad o aptitud legal de estos para celebrar el acto o contrato respectivo. (Artículos 35 y 102 del Decreto Ley 960 de 1970): Se advirtió a los otorgantes de ésta escritura de la obligación que tienen de leer la totalidad de su texto, a fin de verificar la exactitud de todos los datos consignados en ella, con el fin de aclarar, modificar o corregir lo que les pareciere; la firma de la misma demuestra su aprobación total del texto. En consecuencia, el(la) Notario(a) no asume responsabilidad alguna por errores o inexactitudes establecidas con posterioridad a la firma de los otorgantes y del Notario. En tal caso, estos deben ser corregidos mediante el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por todos los que intervinieron en la inicial y sufragada por los mismos.----------

ADVERTENCIA: Se advierte a los otorgantes, que son responsables legalmente, en el evento que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales.----------

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: Leído el presente instrumento público por los otorgantes, lo firman en prueba de su asentimiento, junto con el suscrito Notario(a), quien en esta forma lo autoriza. La presente escritura pública se elaboró en las hojas de papel notarial números: Aa000046225 / Aa000046226 / Aa000046227 / Aa000046231 ----------

ENMENDADO: 4.250 "SI VALE" -

ENMENDADO: VEINTISIETE "si vale" -

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

República de Colombia

7 Nº 3979 A000046231

ESTA HOJA HACE PARTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 3979 ------

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE ----------

DE FECHA VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE -- DE DOS MIL DOCE (2012),

OTORGADA EN LA NOTARÍA SESENTA Y DOS (62) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. ----------

IVA $ 10.837 ----

DERECHOS NOTARIALES $ 45.320 -- ----------

SUPERINTENDENCIA $ 4.250 ----- ----------

FONDO NACIONAL NOTARIADO $ 4.250 ---- ----------

RESOLUCIÓN No. 11439 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2011. ----------

REVISADO TESTA

IDENTIFICÓ Y COMPROBÓ ANGELA MILENA GARZÓN URIOCHEZ C.C.1.012.370.547

REVISO Y APROBÓ SANDRA MILENA OLIVEROS LEYVA C.C. 28.559.772 - T.P. 94381

AUTORIZO

EL(LA) PODERDANTE:

IDENTIFICÓ Y COMPROBÓ DIGNA MARINA TULCA GOMEZ C.C. 1.030.569.870

ITUCA HELENA MARRUGO PEREZ

C.C. No. 33213748.

HUELLA INDICE DERECHO

TEL No. 4748159.

DIRECCIÓN: Kra 20 Nº53B-23

ESTADO CIVIL: Soltera Sin unión Marital de hecho

E-MAIL: ituca_jl@hotmail.com.

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Carlos Ariel Sánchez Torres
NOTARIO SESENTA Y DOS
CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Ca080247046

cadena s.a. Nit. 890.930.5340

30-07-2012 18015pdMFsoo1H

ESTA HOJA HACE PARTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 3979 ------

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE ----------

DE FECHA VEINTISIETE - (27) DE OCTUBRE - DE DOS MIL DOCE (2012),

OTORGADA EN LA NOTARÍA SESENTA Y DOS (62) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. ----------

EL(LA) APODERADO(A):

Francia Helena Marrugo Perez

FRANCIA HELENA MARRUGO DE SANCHEZ

C.C. No. 33212207

TEL No. 4748159

DIRECCIÓN: Carrera 20 Nº 6213-23 Apto 401

ESTADO CIVIL: Casada con sociedad conyugal vigente.

E-MAIL: framarpe1958@hotmail.com

HUELLA INDICE DERECHO

IDENTIFICADO Y COMPROBADO
FRANCIA MARRUGO DE SANCHEZ
C.C. 1.030.599.270

CARLOS ARTURO SERRATO GALEANO

NOTARIO SESENTA Y DOS (62) DE BOGOTÁ, D.C.

RAD- 4627 - LSR

NOTARIA 62
DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

ES COPIA
(FOTOCOPIA) DE LA ESCRITURA NUMERO
3979 DE FECHA 27 OCTUBRE
DEL AÑO 2012 TOMADA DE SU ORIGINAL
CON DESTINO AL ART. 1 DEL DECRETO 2148 DE
QUE SE EXPIDE EN BOGOTA, A LOS
EN 61 FOLIOS UTILES.
CON DESTINO A: Interesado

26 NOV. 2012

DOCUMENTO CONTROLADO 2

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública. No tiene costo para el usuario

REPUBLICA DE COLOMBIA
Carlos Arturo Serrato Galeano
NOTARIO 62 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

11,913

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría HACIENDA

010116

Nº 3979

801

Formulario No. 101011605670569

AÑO GRAVABLE 2002

Formulario para Declaración Sugerida del Impuesto Predial Unificado

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP AAA0113MMKG	2. DIRECCIÓN CL 162 36 88 GJ 13		
3. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050-20021077	4. CÉDULA CATASTRAL 162 36 15 54		5. ESTRATO 3

B. INFORMACIÓN SOBRE ÁREAS DEL PREDIO — C. CLASIFICACIÓN Y TARIFA

6. ÁREA DEL TERRENO (M2) 3.0	7. ÁREA CONSTRUIDA (M2) 10.4	8. DESTINO 09	9. TARIFA 4.00

D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL	11. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	
MARRUGO PEREZ ITUCA HELENA	TIPO C.C.	NÚMERO 33213748
	TIPO	NÚMERO

12. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 162 36 88 GJ 13 1143

FECHAS LÍMITES DE PAGO

		DD/MM/AAAA 1	DD/MM/AAAA 2	DD/MM/AAAA 3
		DESDE 01/ENE/2002	DESDE 27/ABR/2002	DESDE 22/JUN/2002
		HASTA 26/ABR/2002	HASTA 21/JUN/2002	HASTA 05/JUL/2002
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA				
13. AUTOAVALÚO (BASE GRAVABLE)	AA	2,870,000	2,870,000	2,870,000
14. IMPUESTO A CARGO	FU	11,000	11,000	11,000
15. SANCIONES	VS	0	0	0
F. SALDO A CARGO				
16. TOTAL SALDO A CARGO	HA	11,000	11,000	11,000
G. PAGO				
17. VALOR A PAGAR		11,000	11,000	11,000
18. Ddescuento por pronto pago	AD	1,000	1,000	0
19. INTERÉS DE MORA	IM	0	0	0
20. TOTAL A PAGAR	TP	9,000	10,000	11,000

FOTOCOPIA coincide con su ORIGINAL que he tenido a la vista
27 OCT. 2012
Carlos Arturo Serrato Galeano
NOTARIO SESENTA Y DOS
BOGOTÁ, D.C.

NOTARIA SESENTA Y DOS
CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

SIN PAGO VOLUNTARIO

1 (415)7707202600085(8020)0200210101160567056 9(3900)000000000 9000(96)20020426

2 (415)7707202600085(8020)0200210101160567056 9(3900)000000000 10000(96)20020621

3 (415)7707202600085(8020)0200210101160567056 9(3900)000000001 1000(96)20020705

CON PAGO VOLUNTARIO

4 (415)7707202600085(8020)0200210101160567056 9(3900)000000001 0000(96)20020426

5 (415)7707202600085(8020)0200210101160567056 9(3900)000000001 1000(96)20020621

6 (415)7707202600085(8020)0200210101160567056 9(3900)000000001 2000(96)20020705

H. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO (Ver anexo a color)

Aporto voluntariamente al desarrollo de Bogotá un 10% adicional. SI ☐ NO ☒ Mi aporte podrá destinarse a: Opción A Opción B Opción C

21. PAGO VOLUNTARIO (10% de renglón 14)	AV	1,000	1,000	1,000
22. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 20 + 21)	TA	10,000	11,000	12,000

I. FIRMA DEL DECLARANTE

FIRMA

NOMBRE Ituca Helena Marrugo Perez

C.C. ☒ C.E. ☐ NÚMERO 33213748.

TOTAL PAGO RECIBIDO $ 10'000.00

EFECTIVO $ 10'000.00

CARGO EN CUENTA NO.

Nº CHEQUE

FORMA DE PAGO NUEVA Banco Ganadero

CANTIDAD DE DOCUMENTOS:00

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA 1: 1931260100309

USER: COLMAY

SUC: 0152 CUENTA : 0000-0000000000

TERM: 2112 CLIENTE: PREDIAL Y VALORIZACION

PAGO DE SERVICIOS A RECAUDOS

HORA :10'02

BBVA BANCO GANADERO COLOMBIA

FECHA PAGO :15/05/2002

SELLO Y/O TIMBRE

Banco Ganadero
01 JUN 2002

- CONTRIBUYENTE -

Cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

12,043

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría HACIENDA

010116

Nº 3979

AÑO GRAVABLE 2002

Formulario para Declaración Sugerida del Impuesto Predial Unificado

Formulario No. 101011605670229

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	
AAA0113MKJZ	CL 162 36 88 AP 205	
3. MATRÍCULA INMOBILIARIA	4. CÉDULA CATASTRAL	5. ESTRATO
050-20021099	162 36 15 10	3

B. INFORMACIÓN SOBRE ÁREAS DEL PREDIO

6. ÁREA DEL TERRENO (M2)	7. ÁREA CONSTRUIDA (M2)
12.4	43.0

C. CLASIFICACIÓN Y TARIFA

8. DESTINO	9. TARIFA
09	4.00

D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL	11. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	
MURRUNGO PEREZ ITUCA HELENA	TIPO C.C.	NÚMERO 33213748
	TIPO	NÚMERO

12. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CL 162 36 88 AP 205 1143

FECHAS LÍMITES DE PAGO

		DD/MM/AAAA 1	DD/MM/AAAA 2	DD/MM/AAAA 3
		DESDE 01/ENE/2002 HASTA 26/ABR/2002	DESDE 27/ABR/2002 HASTA 21/JUN/2002	DESDE 22/JUN/2002 HASTA 05/JUL/2002
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA				
13. AUTOAVALÚO (BASE GRAVABLE)	AA	18,589,000	18,589,000	18,589,000
14. IMPUESTO A CARGO	FU	74,000	74,000	74,000
15. SANCIONES	VS	0	0	0
F. SALDO A CARGO				
16. TOTAL SALDO A CARGO		74,000	74,000	74,000
G. PAGO				
17. VALOR A PAGAR	VR	74,000	74,000	74,000
18. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	11,000	7,000	0
19. INTERÉS DE MORA		0	0	0
20. TOTAL A PAGAR	TP	63,000	67,000	74,000

Recibido y Dos de este Formulario. Favor constatar que coincida con el ORIGINAL. Vista. 17 OCT. 2012 Claudia Patricia Serrato Galeano RADICADOR SECRETARÍA DE HACIENDA BOGOTÁ D.C.

SIN PAGO VOLUNTARIO

1 (415)7707202600085(8020)020021010116056702 29(3900)000000000063000(96)20020426

2 (415)7707202600085(8020)020021010116056702 29(3900)000000000067000(96)20020621

3 (415)7707202600085(8020)020021010116056702 29(3900)000000000074000(96)20020705

CON PAGO VOLUNTARIO

4 (415)7707202600085(8020)020021010116056702 29(3900)000000000070000(96)20020426

5 (415)7707202600085(8020)020021010116056702 29(3900)000000000074000(96)20020621

6 (415)7707202600085(8020)020021010116056702 29(3900)000000000081000(96)20020705

H. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO (Ver anexo a color)

Aporte voluntariamente al desarrollo de Bogotá un 10% adicional. SI ☐ NO ☒ Mi aporte podrá destinarse a: Opción A Opción B Opción C

21. PAGO VOLUNTARIO (10% de renglón 14)	AV	7,000	7,000	7,000
22. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 20 + 21)	TA	70,000	74,000	81,000

I. FIRMA DEL DECLARANTE

FIRMA: Ituca H. Murrungo Perez.

NOMBRE: Ituca H. Murrungo Perez.

C.C. [X] C.E. [ ] NÚMERO 33213748.

BBVA Banco Ganadero BOGOTA DC DIR 1312601003090 8

BBVA Banco Ganadero 21 JUN 2002 126-PRINCIPAL RECIBIDO CON PAGO

SELLO Y/O TIMBRE

- CONTRIBUYENTE -

27/07/2014 1825983FE4BA6D

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Ca050247044

UCNC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO

COPIA NEGRA

COPIA NEGRA

Cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

Nº3979

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRANSITO No. 10000563209

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
RBZ479	CHEVROLET	AVEO	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.498	BEIGE MARRUECOS	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
AUTOMOVIL	SEDAN	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR: F15S33492241

REG: N — VIN: 9GATD51Y8BB012854

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 9GATD51Y8BB012854

REG:

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MARRUGO PEREZ ITUCA HELENA

IDENTIFICACIÓN: CC 33213748

NO ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO QUE REPOSA EN ESTA NOTARIA 62

NOTARIA SESENTA Y DOS DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACION DE IMPORTACION	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTA
032010000591946	E	28/06/2010	4

LIMITACION A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DAVIVIENDA S A

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
07/07/2010	07/07/2010	******

ORGANISMO DE TRANSITO

BOGOTA-CUNDINAMARCA

LT01000688400

NO ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO QUE REPOSA EN ESTA NOTARIA 62

Franklyn Liévano Fernández [1]
DOCTOR EN DERECHO

Señor Juez
JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - Sección Tercera
E. S. D.

Proceso : Ordinario

Naturaleza : **Repetición**

Asunto : ***Contestación de demanda***

Radicado : **No. 110013336722-2014-00109-00**

Demandante : **LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**

Demandados : CLARA INES VARGAS SILVA *y otros*
-Hernando Leyva Varón, Hilda Stella Caballero Ramírez, **AURA PATRICIA PARDO MORENO**, Luis Miguel Domínguez García, Leonor Barreto Díaz, Juan Antonio Liévano Rangel, María Hortensia Colmenares Facinni , Rodrigo Suarez Giraldo ,María del Pilar Rubio Talero, Patricia Rojas Rubio,Ituca Helena Marrugo Pérez, Edith Andrade Páez, y Miriam Consuelo Ramírez Vargas-,

FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ, mayor y vecino de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la ciudad en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501 Teléfono 7027824, con correo electrónico: cilinof@hotmail.com, en ejercicio del Poder Especial adjunto que me confirió la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 21.223.165 de Villavicencio, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en nombre y representación de la misma, respetuosamente **me notifico por conducta concluyente**[1] y doy ***contestación*** en oportunidad, como sigue, a la demanda que dentro de este proceso se le formula:

I. En cuanto a las PRETENSIONES

ME OPONGO a todas y cada una de ellas, conforme a las excepciones y las razones de la defensa que en lo fáctico, así como en lo jurídico, expondré a continuación:

A la ***PRIMERA***: Porque es engañosa la hipótesis de asumir como fundamento de la acción, que no se hubiere generado el pago realizado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, si la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** le hubiere personalmente *notificado* las liquidaciones anuales, año por año, de sus cesantías de

los períodos de sus servicios en el exterior, desde 1990 hasta el año 2003 pues a la **Sentencia del Consejo de Estado del 6 de julio de 2011, Sección Segunda, Subsección "A",** se llegó en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005,** que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, originándose así la obligación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de reajustar la liquidación de las cesantías de los funcionarios que prestaron sus servicios en el exterior con base en los salarios reales y no sobre sumas inferiores de otros cargos en los que el funcionario no se desempeñó, dando lugar a lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores en tal virtud pagó.

Además es falsa la afirmación en virtud de la cual se impidió que operará la prescripción trienal los derechos laborales, por la omisión de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** toda vez que dicho término prescriptivo sólo puede computarse a partir del *retiro definitivo* del empleado.

A la ***SEGUNDA***: *"(...) Que se condene a..."*, entre otros, a mi representada al *pago y reparación* de la suma de **$133.148.564** que el Ministerio pagó en virtud del **Acuerdo Conciliatorio celebrado ante la Procuraduría 84 Judicial I**, reseñado en el proceso, puesto que la acción de repetición a voces del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, tiene por objeto la recuperación de lo pagado por el estado **exclusivamente** por concepto de un ***reconocimiento indemnizatorio***, que aquí, no existe (¡) porque dicha suma, el Ministerio de Relaciones Exteriores los pagó, en este caso a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** por reajuste de **CESANTÍAS**, en virtud de la relación laboral habida entre los mismos en los periodos de sus servicios en el exterior que reseña la demanda y lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005.

En efecto, cabe distinguir que lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en virtud del **Acuerdo Conciliatorio** tiene su causa en el restablecimiento del derecho subjetivo del mismo, amparado en una norma jurídica cual es la Ley 6ª de 1945 que establece el derecho a las cesantías y en lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005, que es lo que aquí se ha traído al proceso, en apoyo de la acción de repetición, cuando ésta ha de tener su apoyo en una sentencia o conciliación previa respecto a un reconocimiento indemnizatorio, que se diga, como aquí se expone, producido por la acción u omisión de los agentes del Estado (art. 140 CPACA), de donde es imperativo echar de menos el presupuesto *objetivo* para la acción de repetición, consistente en una sentencia o conciliación de un reconocimiento indemnizatorio, por su naturaleza antijurídico. Esto es lo opuesto integral y absolutamente al presupuesto esgrimido por la demandante como pie de la acción.

A la ***TERCERA***: Que se *declare* que el Acuerdo Conciliatorio aprobado por el **Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "f"** existe una *obligación clara, expresa y actualmente exigible, que presta mérito ejecutivo,* con remisión al artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, para efectos del cobro *coactivo* de una obligación conforme a las prescripciones del artículo 488 del CPC sobre títulos

repetición, el cual busca la declaratoria de responsabilidad de un servidor o ex servidor público, quien debido a su conducta dolosa o gravemente culposa conllevó a que el Estado se viera en la obligación de reconocer una suma de dinero. Ahora bien, LA Sentencia del Consejo de Estado reúne en sí mismo los requisitos del título ejecutivo, con lo cual presta mérito ejecutivo únicamente en favor del beneficiario del pago, esto es, del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

A la ***CUARTA***: Sobre la pretensión del pago de intereses, no existe causa legítima para derivarlos, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraba en el deber legal de liquidar y pagar las cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, dada la relación laboral habida entre los mismos.

A la ***QUINTA:*** En cuanto a la pretensión de condena en costas a mi representada, puesto que ha de ser la NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, quien debe salir al pago a favor del mismo, por ser esta acción un ostensible abuso del derecho a litigar.

II. Sobre los HECHOS

Al hecho ***PRIMERO***: No es un hecho. Se trata de la cita de una normativa legal y al respecto me remito a la vigencia de las mismas en el tiempo.

Al hecho ***SEGUNDO***: Distingo entre la cita que se hace de normas legales, de una parte, y la interpretación interesada que se hace de las mismas para el señalamiento de obligaciones funcionales de mi representada la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** entre las cuales la que se le endilga del deber de *"(...) liquidar y notificar personalmente el auxilio de cesantías..."*, pues el funcionario que desempeña las funciones en planta interna no puede hacerlo coetáneamente en la planta externa, como lo reseña la demanda.

Al hecho ***TERCERO***: No me consta. No obstante que se pruebe, pues el periodo en el cual mi representada fungió como *Asesor con funciones de Jefe de Recursos Humanos,* ninguna relación tuvo respecto de los funcionarios que, como la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, prestaron sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al hecho ***CUARTO***: No me consta. Mi representada ha sido completamente ajena al trámite de petición de reliquidación de cesantías ejercido por **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.** No obstante, es menester advertir desde ya la inconsecuencia del Ministerio al negar la pretensión de reliquidación de cesantías mediante el derecho de petición radicado para conciliar posteriormente y de manera inconsecuente el pago de las diferencias de las cesantías originadas en el exterior.

Al hecho ***QUINTO***: No es un hecho atribuible a mi representada, la doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO,** pues como se ha indicado, no tenía el deber de notificar los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el exterior.

Al hecho ***SEXTO***: No me consta y deberá probarse. El trámite de audiencia de conciliación extrajudicial fue entre la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, con quien fuera su empleador, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adviértase que el Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo la oportunidad de reliquidar las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia C-535-2005, optó por denegar las peticiones formuladas por el peticionario para posteriormente y de manera inconsecuente, aceptarlas en Audiencia de Conciliación.

Al hecho **SÉPTIMO:** No me consta y deberá probarse. El trámite de conciliación surtido fue exclusivamente entre empleador y empleado y ninguna participación tuvo mi representada, la doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO.**

Al hecho ***OCTAVO***: No me consta el trámite de pago que enuncia el Ministerio. Cualquier actuación surtida se dio en virtud de la relación laboral habida entre estos.

Al hecho ***NOVENO:*** No obstante la multiplicidad de hechos, difiero, pues dentro de las funciones que atribuye el artículo 19 del Decreto 1716 de 2009, a los Comités de Conciliación NO le es dada la facultad o competencia para determinar la culpa grave o dolo en las actuaciones de alguno de sus funcionarios y menos aún decidir *"(...) en forma unánime...* como se hizo, en cuanto a la responsabilidad que se le endilga, dice que tenía mi representada, la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO**.

Además, La función de notificar los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el *exterior* no se encuentra establecida de manera alguna en el Manual Descriptivo de Funciones y Requisitos (Resolución 0033 de 1994), ni en el Decreto 2126 de 1992.

Al hecho **DECIMO**: No es un hecho. Me atengo a la normatividad legal y su vigencia en el tiempo, pero sí es del caso señalar que los Comités de Conciliación son órganos consultivos y de asistencia, que si bien tiene la facultad de decidir cuando deba instaurarse una acción de repetición, no la tienen para hacerlo en relación con la declaratoria de responsabilidad administrativa y disciplinaria de los funcionarios de las entidades y eventual sobre el grado de culpa o dolo en la conducta de algún funcionario. En este caso del Ministerio de Relaciones Exteriores.

II. RAZONES DE LA DEFENSA

a) El Acuerdo Conciliatorio celebrado a instancias de la Procuraduría 84 Judicial I para Asuntos Administrativos tuvo por objeto el reconocimiento y pago de las diferencias del auxilio de cesantías que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como **empleador,** debía a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por diferencias en la liquidación de dicha prestación, practicada sobre sumas inferiores a los salarios reales que el mismo

devengó desde **1990 hasta el año 2003** cuando ha laborado para el mismo en el exterior.

Pago que tuvo como fundamento legal, el vínculo laboral existente entre el Ministerio y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, generador de dicha prestación conforme a lo establecido en la Ley 6 de 1945, artículo 17 y lo declarado por la Corte Constitucional en la Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y mucho antes, en la Sentencia T-1016 de 2000, que evidencian la condición *inconstitucional* de las prácticas anteriores que al respecto tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores.

b) Se pretende, inmerso irregularmente bajo este medio de control judicial, que se avance en un juicio de declaratoria y condena de condena por la ***responsabilidad*** que se les endilga a mi representada, la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** por haber supuestamente omitido el deber –si lo tenía-, de notificar personalmente las liquidaciones *anuales* del auxilio de cesantías desde **1990 hasta el año 2003** desconociéndose que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental al debido proceso, garantiza que ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa***.

Para el caso, el anterior Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 184, que rigió hasta el 1º de julio de 2012, cuando entró en vigencia la ley 1437 de 2011. Así como la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, conforme a la cual: *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...."* (Artículo 5º).

c) Tanto por lo establecido por el anterior Código Contencioso Administrativo C.C.A., preexistente a la conducta que se le endilga a mi representada la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** la acción para la eventual responsabilidad, en ese caso *conexa* con la entidad, caducó conforme al artículo 136 del C.C.A, dos años después de la presunta omisión del deber, si lo tenía. A la vez prescribió, cinco (5) años después la disciplinaria (art. 34 ley 200 de 1995), transcurrido como lo han sido **más de trece (13) años**, contados a partir de la última presunta omisión que se les imputa y se retrotrae a la liquidación anual de cesantías del año **2003**.

d) La demanda, como está visto, no tiene como materia la restitución de lo pagado por un reconocimiento *indemnizatorio* -que no lo ha habido-, sino la recuperación para el Ministerio de lo que debía y pagó por ajuste de cesantías generadas en la vinculación laboral que establece la Ley 6 de 1945 y de conformidad con los términos fijados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y excluyen también, cualquier supuesto de la afectación del Ministerio de Relaciones Exteriores como empleador de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por un "daño antijurídico".

e) La Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** no fue convocada, ni citada como tercero, ni oída a ningún título, que le permitiera que le permitiera ejercer su derecho de

Conciliación surtido en la Procuraduría 84 Judicial I el 29 de marzo de 2012. Tampoco ante el Comité de Conciliación y Defensa del Ministerio de Relaciones, que se pronunció y decidió que se entablara la acción por supuestamente haber incurrido aquél en la omisión del presunto deber de notificar personalmente las cesantías de esta última desde **1990 hasta el año 2003** sin ninguna facultad, el Comité, para hacerlo en lugar de la autoridad disciplinaria correspondiente y sin las garantías del debido proceso

f) Colíguese de todo lo anteriormente expuesto, que no resulta legítimo el empleo de este medio de control judicial sobre la materia propuesta (art. 169 -núm. 3°-, Ley 1437 de 2011).

IV. De las EXCEPCIONES

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

A. EXCEPCIONES PREVIAS

1. Falta de competencia

Conforme lo establece el **artículo 7º** de la **Ley 678 de 2001**, de la acción de repetición conocerá de acuerdo con las reglas de competencia, el **juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial** contra el Estado y, si la reparación patrimonial impuesta al mismo tiene origen en una **conciliación** o cualquier otra forma establecida en la ley para la solución de conflictos, es competente el **juez o tribunal que haya aprobado el respectivo acuerdo**.

En este caso, el pago que se pretende repetir, proviene de la *Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "C"*, del 17 de abril de 2008 confirmada por el Consejo de Estado mediante Sentencia del 6 de julio de 2011. En consecuencia, El Tribunal Administrativo de Cundinamarca es el **competente** para conocer de esta acción.

En efecto, según la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, la competencia en razón al factor de ***conexión*** es prevalente por ser especial y en este caso se trata de la consagrada por la ley 678 en su artículo 7º respecto de la acción de repetición. No obstante, lo establecido aun siendo posterior, por el artículo 155 del C.P.A.C.A. en razón a la cuantía.

Dijo, pues, el Consejo de Estado:

> *"Para efectos de la competencia en acciones de repetición el artículo 7º de la Ley 678, establece como premisas: la preexistencia de una sentencia condenatoria al Estado y por ende el trámite de un proceso previo ante la jurisdicción de lo contencioso; sin embargo en hipótesis distintas, es decir, [illegible] previo y la reparación se hubiese originado en*

una conciliación u otra forma autorizada por la ley, conocerán el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo. Cuando no medie aprobación judicial conocerá el jue que ejerza jurisdicción en el territorio donde se celebró el acuerdo. De igual forma existen otros eventos por fuera de los presupuestos del artículo 7°, es decir sin condena previa en la jurisdicción contenciosa, tales como: condenas en la jurisdicción ordinaria en materia laboral a favor de trabajadores oficiales, condenas al Estado Colombiano en tribunales de arbitramento, o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc.; casos en los cuales se aplicarán plenamente las reglas de competencia previstas en el Código Contencioso Administrativo (...)" (Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación 11001-03-15-000-2007-00433(c) Consejero Ponente: MAURICIO TORRESCUERVO, once (11) de diciembre de dos mil siete (2007)

Precisamente, el Doctor **JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ**, en su obra "El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo" de Ediciones Doctrina y Ley LTDA 2014, resume así el tema:

"La incompatibilidad entre la conexidad y la cuantía ya fue resuelta por la sala plena del Consejo de Estado, dando prelación a la conexidad para determinar el juez natural de la repetición.

No se desconoce que el nuevo código es posterior, pero en materia de aplicación de las reglas de hermenéutica jurídica, el artículo 5 de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad de la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.

De lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, por lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario al de una norma anterior resulta ésta derogada, pues deberá tenerse en cuenta criterio de la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3 de la Ley 153 de 1887 y 5 de la Ley 57 del mismo año.

Por último, no puede perderse de vista, que el legislador en el momento establecer los fueros de competencia para cada uno de los medios de control, no realizó ninguna precisión frente al medio de control de repetición, teniendo en cuenta que, la competencia ya estaba prevista en la Ley 678 de 2001.

Se quiere significar con lo anterior, que toda vez que el, C.P.A.C.A. no derogó de manera expresa la competencia establecida en la Ley 678 de 2001, esta disposición se encuentra vigente y teniendo en cuenta la especialidad de esta norma respecto de la acción de repetición, se debe aplicar la conexidad a fin de establecer el juez natural de la pretensión de repetición y no el factor cuantía". (pag. 170)

2. **Caducidad de la acción declarativa de responsabilidad**

El **artículo 29 de la Constitución Política** garantiza el derecho fundamental del *debido proceso*.

En tal virtud nadie puede ser juzgado ni condenado sino conforme a las leyes preexistentes a la conducta que se les imputa.

En este caso, se pretende la declaratoria de responsabilidad y subsiguiente condena a la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** por supuestamente haber omitido el deber –que no tenía, de notificar personalmente y no lo hiciera, a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** las liquidaciones anuales de sus cesantías en los períodos en los que éste prestó sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores ***en el exterior*** y se remontan desde **1990 hasta el año 2003**

Más aún, abarca lo que se pretende repetir, lo pagado a dicho exfuncionario en los períodos de **1990 hasta el año 2003** períodos éstos, -todos- durante los cuales rigió el Código Contencioso Administrativo promulgado por el **Decreto Ley 01 de 1984,** que lo fue hasta el **1º de julio de 2012**, con la entrada en vigencia, el 2 de julio del mismo año, de la Ley 1437 de 2011, *"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".*

En este orden, la acción de responsabilidad de los funcionarios por los eventuales daños antijurídicos causados por culpa grave o dolosa en el desempeño de sus funciones (artículos 77 C.C.A.) en conexidad con la entidad (art. 78 C.C.A.), **caducó** a los **dos (2) años** de la presunta *omisión* (art. 136 ibídem)

Y sea del caso prevenir que otra es, por supuesto, la *caducidad* de la acción en cuanto a la *condena* sobre repetir lo pagado, que corre a partir del pago (Ley 1437 de 2011, art. 142) la cual, legal y constitucionalmente puede arrastrar la primera, si bien cabe lógicamente derivar de la responsabilidad la *condena* no así lo contrario, cuando aquélla no ha emanado del juicio previo y correspondiente, con las plenas garantías del *debido proceso* y dentro de la oportunidad fijada en la ley preexistente a la conducta imputada.

3. **Inepta demanda**

a) **Por indebida acumulación de *pretensiones***

Se pretende bajo una misma cuerda, por el medio de control de repetición, que a la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** se la declare administrativamente responsable y se la condene a reembolsar al Ministerio de Relaciones Exteriores lo que éste, en cumplimiento de la **Sentencia C-535 de 2005**, pagó a la Señora **ANGELA** [redacted] cesantías de los períodos que esta laboró

en el exterior, **desde 1990 hasta el año 2003** cuando aquélla se desempeñó como *Asesor con funciones de Jefe de Recursos Humanos* entre el **14 de diciembre de 1992 hasta el 22 de enero de 1995** regía el Decreto Ley 01 de 1984 por el cual se expidió el anterior Código de lo Contencioso Administrativo, vigente hasta el 1º de julio de 2012, al que precedió la Ley 13 de 1984, subrogado por el Decreto Ley 2400 de 1998 y regía también, en materia disciplinaria, la Ley 25 de 1974 -Orgánica de la Procuraduría General- y su Decreto Reglamentario 3404 de 1983, parcialmente modificada y adicionada por la misma Ley 13 de 1984 y el mismo Decreto Ley 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, de manera que a la luz de lo establecido por el artículo 29 de la Constitución Política a la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** no cabe enjuiciarla bajo el actual CPACA que rige en cuanto a la repetición y, en consecuencia no procede la acumulación, pues a voces del art. 165 del CPACA se exige que tanto lo relativo a la declaratoria de responsabilidad como la condena a reembolsar lo pagado, puedan enjuiciarse bajo la misma normativa.

De acuerdo al artículo 29 de la Constitución, ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y como está visto, las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que supuestamente la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** no le notificó personalmente cuando esta fungía como **Asesor con funciones de Jefe de Recursos Humanos desde el 14 de diciembre de 1992 hasta el 22 de enero de 1995** se remonta a los años **de 1992, 1993, 1994, 1995** y no pueden juzgarse sino a la luz de las normas preexistentes a dichas presuntas omisiones en el año de **1992-hace 24 años-, 1993- Hace 23 años-, 1994- Hace 22 años, 1995- Hace 21 años**, entre otras cosas, caducadas y prescritas pues según la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, vigente para la época de las conductas que a la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** se endilgan, *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...."* (Artículo 5º).

Así, pues, la presunta responsabilidad que se le endilga a la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** no es susceptible de enjuiciarse ***sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y no por este medio de control, sin campo alguno para pronunciarse legítimamente sobre una disposición de orden constitucional como la impartida en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005** que dio lugar al pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores le hizo en virtud del Acuerdo Conciliatorio celebrado.

De otra parte, según lo expuesto por el artículo 136 del C.C.A. preexistente a la conducta que se le endilga a la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** la acción para derivar una eventual responsabilidad suya en el pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso hizo, caducó dos años después de la presunta omisión que se le endilga y también prescribió a los cinco (5) años la acción disciplinaria propia para definirla (art. 34 ley 200 de 1995), cuando han transcurrido desde entonces **no menos de trece (13) años y hasta veinticuatro años (24).**

Además, es infundada y falaz la afirmación de que de haberse notificado aquéllas liquidaciones anuales de cesantías, que en el proceso ni siquiera se conocen, hubiera prescrito la acción o caducado el derecho de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** puesto que la posibilidad de demandar nace desde el momento en que la Administración, al **retiro del servidor** no hace entrega de la suma correspondiente a este concepto, es decir omite el cumplimiento de su obligación.[2]

B. EXCEPCIONES DE FONDO

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

a. *Ineptitud sustantiva de la demanda;*
b. *Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad.*
c. *Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición;*
d. *Ilegitimidad de personería por pasiva;*
e. *Inexistencia de nexo causal;*
f. *Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación;*
g. *Inexistencia de daño antijurídico;*
h. *Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso;*
i. *Falta de legitimación en la causa por pasiva;*
j. *Abuso del derecho; e,*
k. *Ilegitimidad del derecho sustantivo.*

EXPOSICIÓN DE LAS EXCEPCIONES DE FONDO

a. *Ineptitud sustantiva de la demanda*

Derivada ésta del desconocimiento de las garantías constitucionales del derecho fundamental al *debido proceso*[3] a NO *"(...) ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (...) y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio..."*, pues fuerza distinguir en el proceso lo que atañe a la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial del demandado, la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** como se pretende y lo que concierne a la eventual condena a retribuir lo pagado.

---

[2] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de septiembre de 2011 radicado interno (2005-

A lo primero, indiscutiblemente corresponde la aplicación de las normas preexistentes a la supuesta conducta omisiva de los implicados, del deber –si lo tenían-, de notificar personalmente a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO *año por año***[4], *l*as *liquidaciones anuales* de sus cesantías, causadas en los años **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años-, durante los cuales laboró al servicio del Ministerio de Relaciones en **el exterior,** pues rigió desde el **1º de marzo de 1984**[5] hasta el **1º de julio de 2012**[6], el Decreto Ley 01 de 1984 que reformó el Código Contencioso Administrativo[7] anterior.

Ahora bien, a efectos de derivar la responsabilidad que correspondiera a los funcionarios aquí implicados para la época en que supuestamente omitieron el deber, -si lo tenían-, de notificar personalmente las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** causadas en los años de **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años-, el **artículo 78** del Decreto Ley 01 de 1984, vigente en esos años, permitió que fueran demandados, en conexidad con la entidad pública, los funcionarios responsables de culpa grave o dolo en ejercicio de sus funciones, que le fueren generados a terceros (art. 77 *ibídem*), conforme a las reglas generales de los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, de ser así, fuera la misma la sentencia que dispusiera que el funcionario responsable satisficiera los perjuicios ocasionados a la Entidad, repitiendo contra el mismo lo pagado, para lo cual el término para hacerlo era de "***(2) dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa...***" establecido para las acciones de su género.

En cuanto a lo segundo, aspecto propio de la ritualidad de los procesos, es claro, que al tipo de acción incoada ha de dársele el trámite del medio de control judicial de repetición, sin que por ello pueda legitimarse a accionar, como se proponen, frente a los demandados en procura de una declaratoria de responsabilidad que caducó y sustrae al juez de proveer legítimamente al respecto, hoy décadas después de acontecido el supuesto incumplimiento del deber, si lo tenía, que a los demandados se les endilga, que en ese tiempo no cumplieron, válido, el demandante, que hoy el término para el medio de control de repetición caduca a *partir del pago,* y baste ésa consideración para traer ahora a este juicio a los demandados quebrantándoles todas las garantías constitucionales al debido proceso.

De ahí que, la demanda adolezca de la actitud sustantiva para derivar una condena en contra de los demandados, habiendo caducado como está visto cualquier acción encaminada a la declaratoria de la responsabilidad administrativa y patrimonial de los

---

[4] Decreto 3118 de 1968 *"Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantías de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, reorganizado por la Ley 432 de 1998".*

[5] Diario Oficial 36.439 del 10 de enero de 1984.

[6] Fecha de entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 "por la cual se expidió el Código de Procedimiento

demandados por hechos que se remontan, como ya ha quedado visto, entre **trece (13) y veintiséis (26) años atrás**, enmarcados dentro de un ordenamiento legal preexistente y también, por supuesto, más favorable[8].

Descendiendo a la demanda, ésta se apoya en una sentencia en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores fue condenado a restablecer los derechos que por su parte le vulneró a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** con el reconocimiento y pago que le había hecho de las cesantías causadas a su favor durante los períodos de sus servicios al mismo **en el exterior**, en los años en que desempeñó el cargo referido de la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** basándose en sumas inferiores a los salarios reales que el ex funcionario devengó, debiendo en consecuencia, re-liquidarle dicha prestación, conforme a lo ordenado en la Sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto Legislativo 10 de 1992, que el Ministerio siguió aplicando, no obstante su derogatoria con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993[9] y posteriormente la Ley 797 de 2003, de ninguna manera vinculante con los demandados, quienes son totalmente ajenos a las prácticas entronizadas en ese orden por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de donde se deriva el pago que por concepto de reliquidación de dichas cesantías, debió atender y **no del reconocimiento de una indemnización ocasionado por un daño antijurídico** que fuera imputable como se formula, a los demandados.

Es claro entonces, que no existe sentencia alguna de condena al pago a una indemnización que vincule a los demandados o que lo hubiese vinculado, conforme a las previsiones de los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984, ni pueda hacerlo ahora, lo cual conduce a la imposibilidad jurídica de despachar la demanda dada y, en consecuencia, la ineptitud sustantiva de la misma.

b. *Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad*

Siguiendo al tratadista *Bonnard,* quien participando de las mismas ideas de Deguit en materia de responsabilidad administrativa, lo que se advierte es una "falta de la administración" y la jurisprudencia ha advertido de *la responsabilidad* basada en una irregularidad de la actividad administrativa. Así, *"(...) Se ha deducido que la responsabilidad del patrimonio público surge cuando el daño resulta de una mala organización o de un funcionamiento defectuoso del servicio, y es, sin que sea necesario que en esa mala organización o defectuoso funcionamiento haya culpa de parte de un agente administrativo. Esto es lo que constituye la llamada culpa del servicio público, así denominada para indicar "que no hay culpa individualizada de un agente administrativo", sino solamente una irregularidad de origen anónimo y de aspecto objetivo en la organización y en el funcionamiento del servicio."*[10]

Y, como aquí se advierte la falta de la notificación personal de las liquidaciones anuales de cesantías a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores **en el exterior**,

---

[8] Art. 53 C.P.

no fue, -está visto- un hecho aislado, sino que corresponde a una condición propia de un defectuoso servicio público de la entidad a falta de una regulación y apremios del orden de conformación y asignación de actividades puntuales, cuya omisión no cabe, pues, imputar individualmente a uno u otro funcionario con remisión a normas generales, sino que es más bien producto anónimo del funcionamiento de la Entidad, generador cuando menos de un ***error communis facit ius***[11] o, que hace derecho

Por otra parte, cabe señalar que de tiempo atrás la jurisprudencia ha establecido los requisitos para dar aplicación a la "doctrina del error común creador de derechos" o teoría de la apariencia[12], a saber:

1. *"Debe existir una situación que realmente sea contraria a la normatividad, pero oculta, es decir, (...) ajena en su etiología y desarrollo a quien eventualmente resultare perjudicado con la apariencia de juridicidad (...)*
2. *Que esa situación de apariencia de legalidad esté respaldada en hechos, situaciones o documentos cuyo vicio no sea posible advertir con diligencia y cuidado.*
3. *Que la conducta de quien resultó perjudicado con la situación de aparente legalidad esté respaldada por una buena fe del particular (...)*
4. *Que la situación no esté regulada expresamente por una ley imperativa que imponga soluciones diferentes a las que resultarían de la aplicación de la doctrina".*

c. <u>Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición</u>

El Artículo 90 de la Constitución Nacional establece que:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este."

Adviértase la inexistencia de una condena o conciliación al Estado en la que conste la indemnización por la ocurrencia de un ***daño antijurídico,*** producto de la conducta dolosa o gravemente culposa imputable a mí representada, la doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO**.

Lo que ha traído el Ministerio como fundamento para sustentar la pretensión de repetición es una Conciliación que obliga a la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores a pagar a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las diferencias de cesantías originadas durante el tiempo en que aquel prestó sus servicios en el

[11] Conc. artículo 8°. Ley 153 de 1887
[12] Al respecto se puede consultar la Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del

exterior, atendiendo lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 535-2005.

Así las cosas, el **Acuerdo Conciliatorio** tiene como fundamento el cumplimiento de una Sentencia de la Corte Constitucional - no de la ocurrencia de un daño antijurídico - elemento necesario para que se pueda predicar la procedencia de la acción de repetición. Asimismo, el pago efectuado corresponde al reajuste de cesantías que el Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** durante el tiempo en que esta prestó sus servicios en el exterior. De allí que tampoco pueda derivarse que el pago efectuado por el Ministerio haya sido en calidad de indemnización, como bien lo exige el Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.

Por otra parte, la **Ley 678 de 2001** *"Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.",* estableció la **acción de repetición** con el fin de restituir al Estado lo pagado, exclusivamente, a título de una indemnización, como *reparación* –directa- del **daño antijurídico** irrogado por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes, o de un acuerdo conciliatorio u otra forma de terminación de un conflicto de responsabilidad civil contra una entidad pública.

Adviértase que cuando los hechos que generan la pretensión de repetición ocurren con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2001, se debe establecer la normatividad sustancial y material aplicable al caso en concreto. Al respecto ha indicado en Consejo de Estado que:

"En cuanto a las normas sustanciales, se tiene que las normas aplicables para dilucidar si el demandado actuó con culpa grave o dolo, serán las vigentes al tiempo en que tuvo lugar la conducta del agente estatal. En tal sentido, **las presunciones de dolo y culpa grave que traen los arts. 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 no pueden ser aplicables a casos concretos donde los hechos que generaron la repetición se dieron con anterioridad al 4 de agosto de 2001.**"[13]

Por su parte, establece el **artículo 142** de la **Ley 1437 de 2011**:

> ***Ley 1437 de 2011. Artículo 142.***
> ***"Repetición.*** *Cuando el Estado haya debido hacer un* ***reconocimiento indemnizatorio*** *con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.*
>
> *La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.*
>
> *Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad*

[13] [illegible] (28.448) del 31 de agosto

realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño." (Negrillas fuera de texto)

Como aquí está visto la demanda aquí incoada tiene como base lo pagado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de la diferencia de cesantías surgida por efecto de los servicios que prestó dicha entidad **en el exterior,** devengando realmente sumas inferiores a las que realmente devengó y el Ministerio le liquidó cuando prestó sus servicios desde **1990 hasta el año 2003** en cumplimiento a lo dispuesto en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el día 29 de marzo de 2012**, no es vinculante con los demandados ni podría serlo, pues no fueron llamados al mismo con fines de repetición ni citados como terceros ni en ninguna otra condición que les permitiera haber sido **oídos** y ejercido su legítimo derecho de *contradicción,* petición y discusión de pruebas para su defensa, como lo garantiza el debido proceso que consagra el **artículo 29** de la Constitución Política.

Por eso, tal acuerdo no les es oponible, por lo que constitucional y legalmente es posible derivar en su contra la declaratoria de responsabilidad e imposición de la condena que se procura.

d. *Ilegitimidad de personería por pasiva*

Aun cuando se demanda, entre otros, a la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** por supuestamente haber omitido el deber – si lo tenía- de notificar las liquidaciones anuales de cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** en los periodos entre el **14 de diciembre de 1992 hasta el 22 de enero de 1995** cuando aquélla se desempeñó *como Asesor con funciones de Jefe de Recursos Humanos* la acción de repetición se encamina a obtener indistintamente del mismo el pago que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES hizo a aquélla, de la suma de **$133.148.564** por el reajuste anual de sus cesantías liquidadas como inicialmente lo fueron, sobre sumas inferiores a los salarios reales que devengó durante los periodos de sus servicios en el exterior y corresponden a los años de **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años, **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años cuando la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** ninguna vinculación, ni relación funcional, administrativa ni causal tuvo al frente de las liquidaciones anuales de cesantías que el MINISTERIO le liquidó a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Luego no existe legitimación en la causa por pasiva entre el MINISTERIO y la doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** para que aquel demande indistintamente, sin relación de proporcionalidad ni de racionabilidad alguna, lo comprendido en la totalidad de lo pagado que se pretende repetir, lo generado por todo el tiempo reliquidado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.**

La *causa* generadora del pago, vertida en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012,** que obligó al Ministerio de Relaciones Exteriores a reliquidar las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en los períodos de sus servicios en el exterior, conforme a los salarios reales que entonces devengó y no sobre las sumas inferiores que en esa época el Ministerio le liquidó, tiene su origen en la Ley 6ª de 1945 -art. 17- en razón de la vinculación de naturaleza laboral, de carácter legal y reglamentaria, que compromete exclusivamente, como empleador, al Ministerio de Relaciones Exteriores y lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**. En ningún caso por causa de la demandada, la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO**.

En cumplimiento de la Sentencia C- 535-2005, que declaró inexequible el Artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, y ordenó liquidar las cesantías de los funcionarios que laboraron en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores teniendo en cuenta en el Ingreso Base de Liquidación la suma total de los salarios reales devengados durante los periodos laborados en el exterior, se llegó a la Sentencia proferida el 6 de julio de 2011 por el H. Consejo de Estado, que corresponde a lo que el Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de *reajuste de cesantías* según lo establecido en la Sentencia C- 535- 2005.

Así, aquello en lo que funda la pretensión de repetición el Ministerio atinente a la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaron las cesantías, para efectos de que pudiese operar el fenómeno de la prescripción trienal de las acciones laborales es completamente inane habidas las siguientes consideraciones:

Primero: Siendo la cesantía una prestación de carácter unitario, el término para iniciar el cómputo de la prescripción trienal de la acción laboral solo puede ser al momento de la finalización de la relación laboral que coincide con el momento a partir del cual se hace exigible el derecho por parte del trabajador. Así lo ha entendido el Consejo de Estado al establecer que: "[...] se concluye que **mientras esté vigente el contrato de trabajo, no se puede hablar de prescripción de la cesantía como derecho social**."[14]

Habida cuenta de lo anterior, mal puede hablarse de prescripción de las cesantías contada a partir de la notificación ***anual*** de dicha prestación, pues ninguna de ellas es independiente de las demás. Son partes de un todo que conforman una prestación unitaria.

Al ser una prestación social de *carácter unitario* cuya exigibilidad solo se produce a partir de la finalización de la relación laboral, resulta inane la notificación anual de dichos actos administrativos para el cómputo de la prescripción trienal. De tal forma que con notificación o sin ella, la causa generadora del pago no es la supuesta omisión de la notificación anual de los actos administrativos de liquidación. Esta se genera en el cumplimiento de la Sentencia C- 535- 2005 de la Corte Constitucional.

Segundo: Segundo Fue a partir del 24 de mayo de 2005 con la Sentencia C- 535-2005 de la Corte Constitucional que se conoció e hizo exigible para el Ministerio de

Relaciones Exteriores la obligación de liquidar y pagar el reajuste de las cesantías en los términos de dicho fallo y el derecho correlativo de los funcionarios a reclamar su efectividad.

Así, el término de inicio para el cómputo de la prescripción trienal es la fecha de expedición de la sentencia de la Corte Constitucional; fecha a partir de la cual se hizo exigible la obligación. No antes, que es lo que predica la demanda pretendiendo inferir responsabilidad en cabeza de la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** por supuestamente haber omitido la notificación anual de los actos administrativos de liquidación de las cesantías.

La verdadera causa del pago es la Sentencia C- 535- 2005 del 24 de mayo de 2005 que declaró inexequible el Artículo 10 del Decreto Ley 10 de 1992, que establecía el pago de las cesantías de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando laboraban en el exterior, con base en las asignaciones salariales de cargos equivalentes en la planta interna. Teniendo en cuenta que los efectos de las sentencias de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro, a menos que la Corte resuelva lo contrario, en los términos del Artículo 45 de la Ley 270 de 1996, la eventualidad del término prescriptivo trienal encaminado al reajuste de las cesantías es la fecha de expedición de la Sentencia.

Así lo ha entendido el Consejo de Estado en varias providencias al manifestar que:

"[...] Conforme a lo antes indicado se precisa que existía un obstáculo de orden legal que no permitía liquidar las prestaciones de los empleados del servicio exterior, con base en lo que devengaban sino sólo de acuerdo con los valores equivalentes a los de la planta interna, de manera que se puede decir, como ya lo ha precisado esta Sala, que el derecho a devengar la cesantía liquidada con base en lo devengado en el servicio exterior, sólo surgió, con certeza, a partir de la expedición de las sentencia referida, pues antes, es evidente que la entidad pública se abstenía de liquidarla.

A partir de la remoción del obstáculo normativo cuya sentencia fue proferida el 24 de mayo de 2005, el demandante estaba legitimado para pedir el reconocimiento de su derecho, por ende, no es procedente declarar la ineptitud sustantiva de la demanda, conforme lo pidió la entidad recurrente en el recurso de alzada.[15]"

Por su parte, indicó en Sentencia del 6 de julio de 2011, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren:

"[...] Además, con el pronunciamiento de inconstitucionalidad efectuado por la Corte Constitucional en sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, efectuado el 24 de mayo de 2005, la parte demandante quedó legitimada para reclamar la reliquidación de sus prestaciones, en especial de sus cesantías, porque la vigencia y aplicabilidad del aludido artículo, impedía su reconocimiento.

---

[15] 2012 - M.P: Víctor Hernando Alvarado Ardila,

El fallo recurrido amerita ser confirmado porque pese a que la sentencia de la Corte Constitucional C-535 de 2005, fue proferida luego de que se causaron las respectiva anualidades en las que el demandante prestó sus servicios en el exterior, y ésta tiene efectos hacia el futuro, lo cierto es que, por las razones arriba expresadas, es procedente declarar la denominada excepción de inconstitucionalidad para darle prevalencia a la interpretación constitucional y así, **en aplicación de los principios de primacía de la realidad frente a las formas y favorabilidad evitar que una norma que es inconstitucional desde sus orígenes produzca efectos en los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestaron sus servicios en el exterior.**"

Estas sentencias encuentran su fundamento en que la fecha a partir de la cual se hizo exigible el derecho a la reliquidación de la cesantía por parte de los funcionarios que laboraban en el exterior, es el 24 de mayo de 2005; fecha de expedición de la Sentencia C-535 de 2005. Esto es así teniendo en cuenta que solo con la promulgación de la Sentencia de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del Artículo 57 del Decreto extraordinario 10 de 1992, se declaró el derecho de los funcionarios que laboraron en la planta exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de exigir la reliquidación de sus cesantías con base en el salario realmente devengado. En este punto fuerza distinguir *la exigibilidad de la cesantía misma que, dada su naturaleza, se da al momento de desvinculación del trabajador* y la *exigibilidad de la reliquidación del auxilio de cesantía que sólo puede computarse a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005.*

Por su parte, son varios los pronunciamientos judiciales proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los que ha interpretado que los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que no hayan exigido la reliquidación de sus cesantías dentro del término de tres años contados a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005, aplica la excepción previa de prescripción extintiva de los derechos laborales.

En relación con lo anterior, los procesos judiciales en los que se ha aplicado esta posición son:

1- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-01180-00. Demandante: Martha Angélica Marín Colorado- Demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

2- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-01182-00. Demandante: Sofía Salgado de Goméz- [illegible] Relaciones Exteriores

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

3- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-0018500.

Mediante auto del 22 de octubre de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C- 535 de 2005.

En síntesis, el argumento esbozado en la demanda en virtud del cual se generó un daño antijurídico por la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaban el auxilio de cesantía, impidiendo así que operara la prescripción trienal de los derechos, carece de todo sustento jurídico y se constituye en un abuso del derecho de acción por parte de la Cancillería. Además, es de mala fe buscar repetir lo pagado a **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** por haberse cumplido la Sentencia C-535-2005, que reiteró que la pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le corresponde.

f. ***Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación***

De otra parte, de conformidad con lo establecido en el **artículo 19 del Decreto 1716 de 2009**, el *Comité de Conciliación* del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** no es el competente para decidir que la conducta de la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** sea *gravemente culposa* por los hechos u omisiones que se le endilgan. Dicha *competencia* es privativa del Superior disciplinario[16] y con observancia del *debido proceso* que descansa en la garantía constitucional a ser *oída* y ejercer la *defensa* que, en ese orden, no se dio.

En tal sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado[17] en respuesta a la consulta formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto de los estudios que deben realizar los comités de conciliación de las entidades públicas para determinar la procedencia de la acción de repetición, advirtió lo siguiente:

> *"El alcance de los estudios y evaluaciones que debe realizar el comité de conciliación para determinar la procedencia de la acción de repetición, está dado por los requisitos fijados en la normatividad vigente, (...). En desarrollo de dichos estudios, el comité de conciliación* ***no puede invadir la competencia atribuida a la jurisdicción de lo contencioso***

***administrativo**, al cuestionar los argumentos que sirvieron de fundamento al fallador"* (Resalto).

Por lo anterior, concluye el Alto Tribunal que los estudios que debe realizar el comité *"(...) deben dirigirse a demostrar los presupuestos fácticos en que se basa la presunción a favor del Estado"*[18].

g. *Inexistencia de daño antijurídico*

El pago realizado, que se pretende repetir en contra de la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** consiste en el reconocimiento, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la diferencia a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, siendo aquél su empleador, generada en la incompleta liquidación de sus cesantías, realizada sobre sumas inferiores a los salarios realmente devengados por el mismo cuando prestó sus servicios a dicha entidad en el exterior, en el período de la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** y otros más cuyo producto se encuentra incluido en el total demandado y tienen por única y son el producto exclusivo de una prestación de naturaleza laboral, nacida del vínculo legal y reglamentario habido entonces entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que establece la Ley 6ª de 1945, y obedece para el caso a lo ordenado en la Corte Constitucional en la sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.

En tal orden, el **Acuerdo Conciliatorio**, versó sobre la reliquidación de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, ordenando al Ministerio a dicho pago en cumplimiento de la Sentencia C-535-2005.

De ahí pues, que no pueda válidamente predicarse la existencia de un pago constitutivo de **"daño antijurídico",** como sí por el contrario, lo fue de una prestación legal de carácter laboral, legítima como quiera que estaba basada en la Ley 6ª de 1945, en el *trabajo* que merece la especial protección del Estado (art. 25 de la Constitución Política) y en la *cosa juzgada* constitucional emanada de la sentencia C-535 de 2005.

h. *Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso*

El **Acuerdo Conciliatorio** que trae el Ministerio de Relaciones Exteriores como base de la acción de repetición, no es constitutivo de condena alguna de la responsabilidad de la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** ni podría hacerlo so pena de violación del debido proceso, puesto que al trámite judicial, no fue éste convocado, ni citado u oído de manera que hubiera podido ejercer su derecho de contradicción, de oportunidad de pruebas y defensa sobre en orden a determinar la existencia y el grado de una eventual responsabilidad *conexa* a la del Ministerio de Relaciones Exteriores la cual, además, ya habría caducado conforme a las normas preexistentes a la presunta ocurrencia de la omisión al deber que aquí se le endilga remontándose a trece (13) y

más años atrás, de donde siguiese necesariamente la improsperidad de una condena en su contra.

i. ***Falta de legitimación en la causa por pasiva***

La Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** no tenía la función que se le endilga de notificar personalmente las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

De una parte porque dicha función no se encuentra específica ni determinada en el **Decreto No. 019 de 1992, ni en el Decreto 2126 de 1992,** ni en la **Resolución 033 del 11 de enero de 1994 (Manual Descriptivo de Funciones),** vigentes para la época en que mi representada se desempeñó como *Asesor con funciones de Jefe de Recursos Humanos.*

Por otra parte, a mi representada se le llama a responder en repetición respecto de las liquidaciones anuales de cesantías por unos periodos **anteriores** y ***posteriores*** a su desempeño como *como Asesor con funciones de Jefe de Recursos Humanos.* Así, **anterior** desde 1990 hasta el 13 de diciembre de 1992; ***posterior*** desde el 23 de enero de 1995 hasta el año 2003, conforme el periodo que la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** prestó sus servicios en el exterior.

Además de lo anterior, durante los periodos desde 1990 hasta el año 2003 correspondiente a las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, éste se encontraba y permanecía en el exterior, circunstancia que constituye un imponderable fuera de la órbita del desarrollo de las tareas habituales de la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** quien se encontrara en la *planta interna* del Ministerio de Relaciones Exteriores entre el **14 de diciembre de 1992 hasta el 22 de enero de 1995,** lo que permite asumir que a quien habría correspondido notificar personalmente los respectivos actos administrativos, si los hubo, de liquidación anual de cesantías, fue a quienes desempeñaron funciones Consulares[19]. Entre ellas las de carácter administrativo, como fuera la de dar a conocer a los Funcionarios de la Misión, los actos administrativos de carácter particular de interés del propio Ministerio.

j. ***Abuso del Derecho*** -Temeridad o mala fe por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores-

Se demanda aquí, entre otros, a la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** por haberse desempeñado en el Ministerio de Relaciones Exteriores como *Asesor con funciones de Jefe de Recursos Humanos* del **14 de diciembre de 1992 hasta el 22 de enero de 1995,** y a quien se le endilga haber faltado al deber que no tenía, de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, correspondientes al lapso comprendido desde 1990 hasta el año 2003, pues como a simple vista se puede apreciar el periodo comprendido desde el 23 de enero de 1995 hasta el año 2003, es **posterior** a su designación como Asesor con funciones de Jefe de Recursos Humanos.

Lo mismo que sucede, infiriéndose la falta de buena fe debida en sus actuaciones por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, y abuso de su derecho a demandar en **87 procesos** más, de iguales presupuestos, por las liquidaciones anuales de las cesantías generadas a favor de Ignacio Enrique Ruiz Perea, Lilia Stella Cepeda Ulloa, Zaida Patricia Cristancho Guerrero, Gladys Cecilia Acosta Vidal, Luis Guillermo Becerra Torres, AURA PATRICIA PARDO MORENOFernando Alzate Donoso ,Enrique Antonio Celis Durán, Ana Cecilia Pulido Guerrero, Francia Rodríguez Romero, María del Pilar Gómez Valderrama, Armando González Cortés, Eduardo Alonso Rodríguez, Myriam Duarte Bernal, Consuelo del Socorro Tirado, Reinaldo Vélez Londoño, José Fernando Cendales, Eduardo Casas Acosta, María Nelly Tascón Maya, María Eugenia Beltrán de Chaparro, Miguel Camilo Ruiz Blanco, Esperanza Castro Duque, Raúl Arturo Rincón, Martha Osorio Villamizar, Divia Desideria Cepeda, Felicia Mercedes Valera, Blanca Marina Villacrees, Nydia Inés Aguirre Acevedo, Janneth Victoria Truque P, Adda Isabel Borda Medina, Edgardo Alfredo Llorente Méndez, Luis German Estrada, Henry Javier Arcos, María Helena Londoño, Patricia Klein, María Victoria Eugenia Senior Pava, Julia Inés Mora López, Maria Cristina Guerrero López, Margarita Eliana Manjarrez Herrera, René Correa Rodríguez, Gladys Mireya Paéz Herrera, Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez, Alberto Bula Bohórquez, María Helena Pastrana Pastrana, María Inés Herreño Pinto, María Smith Rueda Centeno, Juan Norberto Colorado Correa, Amparo Flórez López, Álvaro Sandoval Bernal, Alicia Alejandra Alfaro Castillo, Pablo Antonio Rebolledo Schools, Alejandro Borda Rojas, Carlos Rodríguez Bocanegra, Miguel Ángel Rodríguez Melo, Edwin Ostos Alfonso, Mauricio González López, Jaime Girón Duarte, Nacianceno López Restrepo, Rafael Juan Carlos Espinosa, Santiago Salcedo, Mery Cecilia Hurtado, Flor Ángela Martínez, Alberto Barrantes Ullos, Juan José Quintana A, Carlos Arturo Forero, Olga Cielo Molina de la Villa, Hernán Vargas Martín, Álvaro Enrique Ayala Meléndez, Carmen Estavana Zapateiro B, Fernando Salavarrieta García, Marcela Ordóñez Fernández, Gilberto Poveda Rodríguez, Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi ,Alfonso de Jesús Vélez Rivas, Fabio Emel Pedraza Pérez, Ana del Socorro Bornacelli Guerrero, Marcela Rodríguez Velandia, Alvaro Eugenio Márquez Sarmiento, Javier Darío Higuera Ángel, Carlos Arturo Morales López, Daniel Ávila Camacho, José Antonio Solarte Gómez, Blanca Stella Barrero Barrero, María Consuelo Porras, Concepción Concha Agudelo.

i. ***Ilegitimidad del derecho sustantivo***

Existe Ilegitimidad del uso del derecho sustantivo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por cuanto lo que se pretende es el REEMBOLSO de una prestación social como lo es el **auxilio de cesantías**, cuyo PAGO emana de la OBLIGACION LEGAL de aquélla, producto del VINCULO LABORAL con la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Aquello que la causa en que se fundan las pretensiones del actor, devienen del supuesto deber de haber notificado o no las liquidaciones, es un sofisma para distraer la atención del verdadero derecho sustantivo que es aquélla -las cesantías- y no éste, con razón o sin ella, el derecho a dicha prestación, existe, en virtud de lo

dispuesto por la **Ley 50 de 1990** y por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**.

Dada la *materia*, de acuerdo a la cuantía cuyo valor pretende que se le reembolse por los funcionarios o ex funcionarios demandados, pues se trata de una prestación social de carácter laboral, nacida del vínculo de trabajo que existió entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y aquélla a quien se realizó el pago, en el cual el Ministerio es, por el contrario, deudor de la obligación, conforme al artículo 249 del C.S.T., que establece el auxilio de cesantía, y lo dispuesto en la Sentencia de Constitucionalidad C-535 de 2005, toda vez que la causa de lo pagado, es producto de dicho fallo que le impuso a dicha entidad, la obligación de liquidar tales prestaciones con base en el salario realmente devengado por la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, durante los periodos de sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior desde 1990 hasta el año 2003, y para cuyo cumplimiento no puede predicarse la existencia como engañosamente se formula, de una indemnización, que diera lugar al daño antijurídico.

V. FUNDAMENTACIÓN DE LA DEFENSA

a. Fáctica

Lo que da origen a lo pagado, cuyo monto se pretende *repetir*, corresponde al **derecho** de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** al reconocimiento y pago de las diferencias a su favor por concepto de ***cesantías*** desde 1990 hasta el año 2003 de acuerdo con los salarios que en esos períodos realmente devengó[20]

No es, pues, racional, ni lógico y sí sofístico, afirmar como lo expone la demanda, que obedezca al deber que en el período del **14 de diciembre de 1992 hasta el 22 de enero de 1995** la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** habría tenido y ***omitiera*** *"(...) en su condición de Asesor con funciones de Jefe de Recursos Humanos ..."*, de notificar *personalmente* a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, sus ***cesantías*** anuales desde 1990 hasta el año 2003 e impedido así, con *culpa grave,* que no ocurriera el fenómeno *prescriptivo* trienal de las acciones laborales y de caducidad de las propias ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que le hubieran permitido al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES eludir el reconocimiento y pago de dicha prestación conforme a los salarios reales que en esos períodos la misma devengó, incrementándose su valor, que es lo que al Ministerio le resulta *antijurídico* y asume como el *daño* que alega le irrogó *pagar* lo que, inclusive despojado de las acciones llamadas a hacer efectivo el cobro de lo debido, persiste jurídicamente como una *obligación natural* que encuentra en su naturaleza la causa legítima del pago, que, en consecuencia, no cabe *repetir*.

De manera que del Catálogo de Funciones mencionados genéricamente no se desprende la prueba que permita afirmarse, como lo expresa la demanda, que la

Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** tuviera el deber de *notificar personalmente* las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** con destino al Fondo Nacional del Ahorro **desde 1990 hasta el año 2003** tampoco era esa la *práctica común* adoptada al respecto como política general por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por eso, *repetir* lo pagado generaría más bien, un *enriquecimiento sin causa* en cabeza de **LA NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**, a la vez que le irrogaría un injusto *empobrecimiento* a la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** por cierto, el extremo débil de la relación laboral que se le opone para sustentar la acción.

b. Jurídica

La Ley 6 de 1945, establece la obligación del empleador, en este caso el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, de reconocer y pagar al trabajador el auxilio de **cesantía**, un mes de salario por año de servicio, o proporcionalmente a su fracción, debiéndose tener por *salario* todo emolumento que este reciba ordinariamente en desarrollo de su vinculación laboral.

Ahora bien, la Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005 en materia de cesantías de los funcionarios y ex funcionarios que prestaron servicios al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en el exterior, sobre las mismas consideraciones que antes en materia de *pensiones* sirvieron de sustento a la Sentencia C-173 del 02 de marzo de 2004, definió que dicha prestación debe corresponder a los salarios realmente devengados y que una disposición como la que contenía el Decreto 10 de 1992 (art. 57[21]) y retomó el Decreto Ley 274 de 2000 (art. 66[22]), que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 derogó, no debieron aplicarse y sí, haber acudido la Entidad a la *excepción de inconstitucionalidad,* lo que no se hizo y vino a remediar el Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012 y aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F". En tal virtud, lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de sus ***cesantías*** anuales en el periodo comprendido desde **1990 hasta el año 2003**, no es de carácter indemnizatorio, por lo que no le ocasiona legítimamente a LA NACION -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- un detrimento patrimonial, presupuesto inescindible de la acción de repetición.

De otra parte, si como está visto durante varios años, desde 1990 hasta el año 2003 todos los quince (15) ex funcionarios aquí y en otros procesos[23] también demandados,

---

[21] Declarado Inexequible Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.
[22] Declarado Inexequible Sentencia C-292 de 2001.
[23] Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B", Radicados **2014-00835-00** y **2014-00841-00**, J. 4° Administrativo de Descongestión Radicados **2014-00004-00** y **2013-00440-00**, J. 8° Administrativo del Circuito Radicado **2013-00622-00**, J. 9° Administrativo del Circuito, Radicados **2014-00026-00, 2014-00065-00, 2014-00260-00** y **2014-00605-00**, J. 31 Administrativo del Circuito Radicados **2014-00092-00, 2014-00111-00, 2013-00244-00, 2014-00286-00, 2014-00479-00, 2014-00304-00** y **2014-00387-00**, J. 35 Administrativo del Circuito Radicados **2013-00056-00, 2014-00467-00, 2014-00467-00, 2014-00152-00** y **2013-00115-00, 2013-00123-00,**

siempre hicieron u omitieron lo mismo como lo afirma la demanda, lógico es colegir que esa fue sistemáticamente la política establecida sobre la materia por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y no la manifestación independiente y autónoma de la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** por la que deba responder patrimonial ni administrativamente, pues habríase dado *culpa* de la propia Entidad que la exime al respecto y cuanto más, un ***error communis facit ius***[24] o, que hace derecho.

Por lo anterior, en este caso no puede afirmarse que se hayan configurado los elementos para considerar probada la culpa grave de la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** conforme lo prevé el artículo 6º de la Ley 678 de 2001 y, en tal sentido, se trae a colación lo expuesto por el H. Consejo de Estado respecto a la carga de la prueba en la acción de repetición (denominada pretensión con la Ley 1437 de 2011):

> *"Es claro que el solo desconocimiento de la norma por el operador jurídico encargado de aplicarla a través de actos administrativos (...) no implica de plano una responsabilidad a título de imputación de culpa grave o dolo, puesto que, en estos casos, existe un margen de error admisible en condiciones normales y más aún extraordinarias cuando se trata de la interpretación y ejecución de las normas jurídicas o de la percepción de la realidad atendiendo las circunstancias específicas del caso, toda vez que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de la función pública se trata de una labor humana, que implica la posibilidad de yerros en las actuaciones. Como en el sub exámine no son procedentes las presunciones de dolo y culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001, por la echa de ocurrencia de los hechos, dichos conceptos requieren de una carga probatoria mayor por parte de la entidad pública en cuanto que debe desplegar una actividad prolífica tendiente a demostrar y acreditar el dolo y la culpa grave..."*[25].

Por otra parte, los servidores públicos tienen un régimen de responsabilidad subjetivo y, en consecuencia, el título de imputación, sea dolo o culpa grave, debe estar plenamente demostrado dentro del proceso en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, pues el mismo no se presume en estos casos. En otras palabras, no basta simplemente citar uno de los presupuestos de la ley para que se configure la pretensión de repetición, debe acreditarse en debida forma la actuación dolosa o gravemente culposa del agente demandado.

Ahora bien, se advierte que existen serias y graves deficiencias respecto de las pruebas que ordenan a la entidad pública al pago de las diferencias de cesantías a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** que, en este caso, corresponde al **Auto de aprobación de la conciliación proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"**, ya que tal documentos debió ser aportados con la demanda en originales según lo dispone el Art. 245 del C.G.P: "[...] *Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en donde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.*

---

[24] Cfr. artículo 8º Ley 153 de 1887

En un asunto similar al que nos ocupa, la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó:

> *"Por tanto, las copias aportadas por la entidad demandante carecen de valor probatorio, porque, en tratándose de copias de documento público (...), para que puedan ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial, deben reunir las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra la diligencia de autenticación.*
>
> *En ese orden de ideas, se concluye que no está demostrado dentro del proceso el primero de los hechos generadores de la acción de repetición, cual es la existencia de una sentencia (o providencia) que condene al Estado a reparar patrimonialmente un daño antijurídico,* ***situación que por sí sola implica que se deben negar las pretensiones de la demanda, en tanto ello tiene incidencia en la acreditación de los otros requisitos (...)"***[26] (Resalto).

De esta manera, se reitera lo establecido en el Artículo 173 del Código General del Proceso que establece el deber por parte de los jueces de *abstenerse de ordenar la práctica de pruebas* que directamente, o por medio del derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que la solicite.

VI. PRUEBAS

Ruego al Señor Juez, decretar y tener como pruebas de mi parte, las siguientes:

VI.1 Documental

a) **Aporto** poder original con que actúo.

b) **Se oficie**

1. A la Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso y con base en sus *archivos*, se informe sobre los documentos, si los hubiere, que sirvieron de soporte para la erogación del *gasto*, por concepto de las **cesantías** anuales del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde julio de 1992 a diciembre de 1996- octubre 1999 a diciembre de 2003;

2. Al Fondo Nacional del Ahorro FNA, para que con destino al proceso, se informe sobre los documentos remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, soportando los depósitos efectuados por el mismo a favor del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde julio de 1992 a diciembre de 1996- octubre 1999 a diciembre de 2003;

3. A la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se informe y remita copia de las resoluciones por medio de las cuales el Ministro de Relaciones Exteriores delegó, como ordenadores del gasto, entre otros, lo que es hoy la Dirección Administrativa y Financiera, el *pago* al Fondo Nacional del Ahorro de los depósitos de cesantías anuales del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde 1990 hasta el año 2003

4. A la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se dé cuenta, individualizándolos de los demás funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quienes, como en este caso a la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** se ha demandado o dispuesto demandar en acción de repetición, por supuestamente haber omitido *notificar personalmente,* las cesantías anuales depositadas al Fondo Nacional del Ahorro, indicando los cargos y periodos por los que en cada caso se les llama a responder;

5. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se remita copia de las liquidaciones, **año por año**, de las cesantías del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde 1990 hasta el año 2003 y particularmente en el periodo ***desde el 14 de diciembre de 1992 hasta el 22 de enero de 1995*** como dice la demanda, conciliadas por un total de **$133.148.564** cuyo monto se pretende repetir sin razón de proporcionalidad alguna, entre otros, en contra de la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO**.

Procura esta prueba establecer que los hechos u omisiones, en relación con el deber que se dice *supuestamente* tenía la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** de notificar al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** las cesantías por el periodo desde 1990 hasta el año 2003 habría sido cuanto más, una política sistemática y generalizada del Ministerio de Relaciones Exteriores, generadora, como tal, de un *error communis facit ius*, imputable a la *propia culpa* de la entidad.

6. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores o a quien en su defecto, corresponda, (art. 21 CPACA) a fin de que con destino al proceso de cuenta del lugar donde el Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** se desempeñaba al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior, en los años desde 1990 hasta el año 2003 a los que corresponden el pago que se le hizo de las cesantías, por cuya cancelación se pretende repetir y se diga qué condiciones de traslado, si se encontraba en el exterior, tenían los demandados para notificarle personalmente allí las liquidaciones anuales de dicha prestación durante tales periodos, a que alude la demanda.

Con esta prueba pretendo demostrar la imposibilidad real que los demandados, y en este caso, la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** tenía para haber cumplido el deber que supuestamente tenían de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de las liquidaciones anuales de cesantías, encontrándose el mismo en el exterior, con mayor razón si esa era una condición extendida en todo el mundo, donde tenían asiento las distintas Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares

7. A los siguientes Despachos Judiciales, para que a mi costa, y a fin de que por sus respectivas Secretarías se certifique la existencia de tales procesos instaurados por el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** en acciones de repetición, por la misma causa del que en este caso nos ocupa:

Pago realizado a:	Despacho Judicial	Radicado Proceso
Ignacio Enrique Ruiz	Consejo de Estado-Sección III-Sub B	**2014-00043-00**
Lilia Stella Cepeda Ulloa	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	**2014-00835-00**
Zaida Patricia Cristancho Guerrero	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	**2014-00841-00**
AURA PATRICIA PARDO MORENO	J. 4° Admtivo de Descongestión	**2014-00004-00**
Fernando Alzate Donoso	J. 4° Admtivo de Descongestión	**2013-00440-00**
Enrique Antonio Celis Durán	J. 8° Administrativo del Circuito	**2013-00622-00**
Ana Cecilia Pulido Guerrero	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00026-00**
Francia Rodríguez Romero	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00065-00**
María del Pilar Gómez Valderrama	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00260-00**
Armando González Cortés	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00605-00**
Eduardo Casas Acosta	J. 16 Administrativo del Circuito	**2013-00599-00**
María Nelly Tascón Maya	J. 18 Administrativo del Circuito	**2013-00511-00**
María Eugenia Beltrán de Chaparro	J. 19 Administrativo del Circuito	**2013-00128-00**
Miguel Camilo Ruiz Blanco	J. 19 Admtivo Descongestión Cto	**2014-00200-00**
Janeth Victoria Truque Rivera	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00188-00**
Raul Arturo Rincón Ardila	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00037-00**
Henry Javier Arcos Muñoz	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00391-00**
Nidia Inés Aguirre Acevedo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00084-00**
María Inés Aldana Nieto	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00036-00**
Anyul Molina Suarez	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00211-00**
Mauricio Baquero Pardo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00268-00**
Álvaro Eugenio Márquez Sarmiento	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00183-00**
Marcela Rodríguez Velandia	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00238-00**
Cruz Elena Mosquera Monteros	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00009-00**
María Victoria Eugenia Senior Pava	J. 23 Administrativo del Circuito	**2013-00392-00**
Margarita Eliana Manjarrez Herrera	J. 26 Administrativo del Circuito	**2013-00535-00**
René Correa Rodríguez	J. 27 Administrativo del Circuito	**2013-00211-00**
Gladys Mireya Paéz Herrera	J. 27 Administrativo del Circuito	**2014-00314-00**
Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez	J. 30 Administrativo del Circuito	**2013-00597-00**
Alberto Bula Bohórquez	J. 30 Administrativo del Circuito	**2014-00071-00**
María Helena Pastrana Pastrana	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00092-00**
María Inés Herreño Pinto	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00111-00**
María Smith Rueda Centeno	J. 31 Administrativo del Circuito	**2013-00244-00**
Juan Norberto Colorado Correa	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00286-00**
Amparo Flórez López	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00479-00**
Álvaro Sandoval Bernal	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00304-00**
Alicia Alejandra Alfaro Castillo	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00387-00**
Pablo Antonio Rebolledo Schools	J. 32 Administrativo del Circuito	**2014-00118-00**
Alejandro Borda Rojas	J. 32 Administrativo del Circuito	**2013-00389-00**
		2014-00153-00

Carlos Rodríguez Bocanegra	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00316-00**
Miguel Ángel Rodríguez Melo	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00317-00**
Edwin Ostos Alfonso	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00383-00**
Mauricio González López	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00384-00**
Jaime Girón Duarte	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00430-00**
Nacianceno López Restrepo	J. 34 Administrativo del Circuito	**2013-00279-00**
Álvaro Enrique Ayala Meléndez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2013-00056-00**
Carmen Estavana Zapateiro B.	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00467-00**
Fernando Salavarrieta García	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00152-00**
Marcela Ordóñez Fernández	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**
Gilberto Poveda Rodríguez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00399-00**
Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi	J. 36 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**
Alfonso de Jesús Vélez Rivas	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00087-00**
Fabio Emel Pedraza Pérez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00115-00**
Ana del Socorro Bornacelli Guerrero	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00123-00**
Javier Darío Higuera Ángel	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00303-00**
Carlos Arturo Morales López	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00304-00**
Daniel Ávila Camacho	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00479-00**
José Antonio Solarte Gómez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00480-00**
Diego Felipe Cadena Montenegro	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00271-00**
Amalia Rodriguez Fuque	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00290-00**
Victoria Eugenia Olga Pauwles T.	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00268-00**
Blanca Stella Barrero Barrero	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00106-00**
María Consuelo Porras	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00117-00**
Concepción Concha Agudelo	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00446-00**

VI. 2 Testimonios

a) Respetuosamente solicito que se llame a declarar en audiencia en la fecha y hora que para tales efectos señale el Despacho, sobre los hechos y omisiones que sean de su conocimiento, en relación con el diligenciamiento, liquidaciones y pago al Fondo Nacional de Ahorro FNA, en materia de liquidaciones anuales de *cesantías*, al Señor **ABELARDO RAMÍREZ GASCA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19'054.598 de Bogotá, con domicilio en la Carrera 14 No. 109 – 79 Apartamento 301, Edificio Caminos del Parque, en Bogotá.

b) Así mismo, con el fin de que deponga sobre la ejecución presupuestal en materia de cesantías anuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y del traslado de las mismas al FNA, con ocasión del desempeño que tuvo a su cargo la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Doctora **ARAMINTA BELTRÁN URREGO**, Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No. 9-03, en Bogotá.

c) A quienes fungieron como miembros del Comité de Conciliación del Ministerio de [illegible] en relación con las razones que tuvieron en

consideración para llevarlos a determinar que hubo *culpa grave*, y demandar en repetición a la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** cuando se desempeñó como ***Asesor con funciones de Jefe de Recursos Humanos*** del Ministerio de Relaciones Exteriores en los periodos reseñados en la demanda, (Acta No. 229 del 22 de julio de 2013), consistente en haber omitido el deber que *supuestamente* tenía, según la demanda, de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las liquidaciones anuales de las cesantías por valor de **$133.148.564** para cuyos efectos se le citará en el día y hora que señale su despacho, a través de la Dirección del Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No.9-03, en Bogotá y son:

1. Doctor EDWIN OSTOS ALFONSO, Director de Asuntos Jurídicos Internacionales (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

2. Doctor ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO, Director de Talento Humano; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

3. Doctora CLAUDIA LILIANA PERDOMO ESTRADA, Jefe Oficina Asesora Jurídica Interna (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

4. Doctora MARTHA RUBY CUÉLLAR CALDERÓN, Coordinadora Grupo Interno de Gestión; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

5. Doctora LUZ ANDREA CORREDOR ARTEAGA, Abogada Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

6. Doctora HELGA VELASQUEZ AFANADOR, Abogada Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

7. Doctor JORGE ENRIQUE BARRIOS SUÁREZ, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

8. Doctor HUGO ARMANDO GRANJA ARCE, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

9. Doctor ANDRES LEONARDO MENDOZA PAREDES, Secretario Técnico (E) del Comité de Conciliación; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

VII. COSTAS

Sean a cargo de la demandante, LA NACION –MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- incluyendo *agencias en derecho*, toda vez que es manifiesta la falta de buena fe de dicha entidad al demandar en repetición a varios exfuncionarios, cuando no se cumplen a cabalidad todos los presupuestos establecidos de manera expresa por la Ley 678 de 2001 para el ejercicio de dicho medio de control, ya que en ningún caso existió una condena al Ministerio a reconocer una indemnización, sino que se le ordena efectuar la reliquidación de las cesantías, que es una prestación social de naturaleza laboral, en favor de un trabajadora por no habérsele incluido todos los factores salariales devengados en la planta externa, lo cual fue una política de dicho ministerio y no la decisión unilateral de los ahora demandados.

VIII. NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones, junto con mi representada la Doctora **AURA PATRICIA PARDO MORENO** en la Secretaría de su Despacho; en mi oficina de la Carrera 15 No. 86A- 57 of. 501, teléfono 7027824, en Bogotá; y, a través de mi correo electrónico: cilinof@hotmail.com.

Señor Juez,

Franklyn Liévano Fernández
C.C. No. 19.154.294 de Bogotá
T.P. No. 12.667 del C.S.J.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA
DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL
El documento fue presentado personalmente por Franklyn Liévano Fernández
Quien se identificó C C No 19'154'294
T P No 12.667 Bogotá D C 05 MAY 2016
Responsable Centro de Servicios _____ VHPP

32.
834

Señor Juez
JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ - Sección Tercera
E. S. D.

Proceso : Ordinario
Acción : **Repetición**

Radicado : **No. 110013336722-2014-00109-00**

Demandante : **LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**

Demandados : *CLARA INÉS VARGAS SILVA y otros*

AURA PATRICIA PARDO MORENO, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 41'536.424 de Bogotá, con domicilio en la ciudad, a usted respetuosamente manifiesto que por medio de este escrito confiero **Poder Especial**, amplio y suficiente al Doctor **FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ**, mayor y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501 teléfono 7027824, en la ciudad y correo electrónico: cilinof@hotmail.com, para que en mi nombre concurra, se **notifique** del *auto* admisorio de la demanda y me represente en este proceso hasta su terminación.

Mi apoderado dispondrá en el ejercicio de su gestión, de todas las facultades generales de ley, así como de las especiales de recibir, desistir, conciliar, transigir, sustituir y reasumir.

Ruego al Señor Juez reconocer y tener a mi apoderado en los términos de este escrito.

Del Señor Juez,

AURA PATRICIA PARDO MORENO
C.C. No 41'536.424 de Bogotá

Acepto el poder conferido,

FRANKLYN LIEVANO FERNÁNDEZ
C.C. No. 19'154.294 de Bogotá
T.P. No. 12.667 de C.S.J.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO CON HUELLA

NOTARÍA CUARENTA Y DOS (42)
CÍRCULO DE BOGOTÁ - COLOMBIA

NOHORA EMILCE AGUILAR BECERRA,
NOTARIA ENCARGADA

CERTIFICA:

Que **PARDO MORENO AURA PATRICIA**

Se identificó con: **C.C. 41536424**
manifestó que reconoce expresamente el contenido de este documento y que la firma que en él aparece es la suya. En constancia, firma nuevamente y estampa la huella de su dedo índice derecho.
(La certificación de huella causa derechos notariales según tarifa)

Bogotá D.C. **01/04/2016**

2qwzs2a21g1a9fqs

www.notariaenlinea.com
G07MQA9VOD71DTHU



NLN

Nohora Emilce Aguilar Becerra
Notaria Encargada

555
849

Franklyn Liévano Fernández [1]

DOCTOR EN DERECHO

000006

OFICINA DE APOYO
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS
2016 AUG 8 PM 4 27
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Señor Juez
JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - Sección Tercera
E. S. D.

Proceso : Ordinario

Naturaleza : **Repetición**

Asunto : ***Contestación de demanda***

Radicado : **No. 110013336722-2014-00109-00**

Demandante : **LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**

Demandados : CLARA INES VARGAS SILVA *y otros*
-Hernando Leyva Varón, Hilda Stella Caballero Ramírez, Aura Patricia Pardo Moreno, Luis Miguel Domínguez García, Leonor Barreto Diaz, Juan Antonio Liévano Rangel, María Hortensia Colmenares Facinni , Rodrigo Suarez Giraldo ,María del Pilar Rubio Talero, Patricia Rojas Rubio,Ituca Helena Marrugo Pérez, **PATRICIA ROJAS RUBIO,** y Miriam Consuelo Ramírez Vargas-,

FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ, mayor y vecino de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la ciudad en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501 teléfono 7027824, con correo electrónico: cilinof@hotmail.com, obrando como apoderado de la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO**, mayor y de la misma vecindad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 31.170.344 de Bogotá, con en Bogotá, en nombre y representación de la misma, respetuosamente doy ***Contestación*** en oportunidad, como sigue, a la demanda que dentro de este proceso se le formula:

I. En cuanto a las PRETENSIONES

ME OPONGO a todas y cada una de ellas, conforme a las excepciones y las razones de la defensa que en lo fáctico, así como en lo jurídico, expondré a continuación:

A la ***PRIMERA***: Porque es engañosa la hipótesis de asumir como fundamento de la acción, que no se hubiere generado el pago realizado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, si la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** le hubiere personalmente *notificado* las liquidaciones anuales, año por año, de sus cesantías de los períodos de sus servicios en el exterior, desde **1990 hasta el año 2003** pues al **Acuerdo Conciliatorio del 29 de marzo de 2012 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F",** se llegó en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005,**

que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, originándose así la obligación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de reajustar la liquidación de las cesantías de los funcionarios que prestaron sus servicios en el exterior con base en los salarios reales y no sobre sumas inferiores de otros cargos en los que el funcionario no se desempeñó, dando lugar a lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores en tal virtud pagó.

Además es falsa la afirmación en virtud de la cual se impidió que operará la prescripción trienal los derechos laborales, por la omisión de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** toda vez que dicho término prescriptivo sólo puede computarse a partir del *retiro definitivo* del empleado.

A la ***SEGUNDA***: *"(...) Que se condene a..."*, entre otros, a mi representada al *pago y reparación* de la suma de **$133.148.564** que el Ministerio pagó en virtud del **Acuerdo Conciliatorio celebrado ante la Procuraduría 84 Judicial I**, reseñado en el proceso, puesto que la acción de repetición a voces del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, tiene por objeto la recuperación de lo pagado por el estado **exclusivamente** por concepto de un ***reconocimiento indemnizatorio***, que aquí, no existe (¡) porque dicha suma, el Ministerio de Relaciones Exteriores los pagó, en este caso a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** por reajuste de **CESANTÍAS**, en virtud de la relación laboral habida entre los mismos en los periodos de sus servicios en el exterior que reseña la demanda y lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005.

En efecto, cabe distinguir que lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en virtud del **Acuerdo Conciliatorio** tiene su causa en el restablecimiento del derecho subjetivo del mismo, amparado en una norma jurídica cual es la Ley 6ª de 1945 que establece el derecho a las cesantías y en lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-535 de 2005, que es lo que aquí se ha traído al proceso, en apoyo de la acción de repetición, cuando ésta ha de tener su apoyo en una sentencia o conciliación previa respecto a un reconocimiento indemnizatorio, que se diga, como aquí se expone, producido por la acción u omisión de los agentes del Estado (art. 140 CPACA), de donde es imperativo echar de menos el presupuesto *objetivo* para la acción de repetición, consistente en una sentencia o conciliación de un reconocimiento indemnizatorio, por su naturaleza antijurídico. Esto es lo opuesto integral y absolutamente al presupuesto esgrimido por la demandante como pie de la acción.

A la ***TERCERA***: Que se *declare* que el Acuerdo Conciliatorio aprobado por el **Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"** existe una *obligación clara, expresa y actualmente exigible, que presta mérito ejecutivo,* con remisión al artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, para efectos del cobro *coactivo* de una obligación, conforme a las prescripciones del artículo 488 del CPC sobre títulos ejecutivos (Actual 422 C.G.P), dicha pretensión difiere del medio de control de repetición, el cual busca la declaratoria de responsabilidad de un servidor o ex servidor público, quien debido a su conducta dolosa o gravemente culposa conllevó a que el

Estado se viera en la obligación de reconocer una suma de dinero. Ahora bien, el **Acuerdo Conciliatorio** reúne en sí mismo los requisitos del título ejecutivo, con lo cual presta mérito ejecutivo únicamente en favor del beneficiario del pago, esto es, del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

A la ***CUARTA***: Sobre la pretensión del pago de intereses, no existe causa legítima para derivarlos, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraba en el deber legal de liquidar y pagar las cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, dada la relación laboral habida entre los mismos.

A la ***QUINTA:*** En cuanto a la pretensión de condena en costas a mi representada, puesto que ha de ser la NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, quien debe salir al pago a favor del mismo, por ser esta acción un ostensible abuso del derecho a litigar.

II. Sobre los HECHOS

Al hecho ***PRIMERO***: No es un hecho. Se trata de la cita de una normativa legal y al respecto me remito a la vigencia de las mismas en el tiempo.

Al hecho ***SEGUNDO***: Distingo entre la cita que se hace de normas legales, de una parte, y la interpretación interesada que se hace de las mismas para el señalamiento de obligaciones funcionales de mi representada la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** entre las cuales la que se le endilga del deber de *"(...) liquidar y notificar personalmente el auxilio de cesantías..."*, pues el funcionario que desempeña las funciones en planta interna no puede hacerlo coetáneamente en la planta externa, como lo reseña la demanda.

Al hecho ***TERCERO***: No me consta. No obstante que se pruebe, pues el periodo en el cual mi representada fungió como *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales y como Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones* ninguna relación tuvo respecto de los funcionarios que, como la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, prestaron sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al hecho ***CUARTO***: No me consta. Mi representada ha sido completamente ajena al trámite de petición de reliquidación de cesantías ejercido por **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.** No obstante, es menester advertir desde ya la inconsecuencia del Ministerio al negar la pretensión de reliquidación de cesantías mediante el derecho de petición radicado para conciliar posteriormente y de manera inconsecuente el pago de las diferencias de las cesantías originadas en el exterior.

Al hecho ***QUINTO***: No es un hecho atribuible a mi representada, la doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO,** pues como se ha indicado, no tenía el deber de notificar personalmente los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el exterior.

Al hecho ***SEXTO***: No me consta y deberá probarse. El trámite de audiencia de conciliación extrajudicial fue entre la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, con quien fuera su empleador, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adviértase que el Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo la oportunidad de reliquidar las cesantías de la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia C-535-2005, optó por denegar las peticiones formuladas por el peticionario para posteriormente y de manera inconsecuente, aceptarlas en Audiencia de Conciliación.

Al hecho **SÉPTIMO:** No me consta y deberá probarse. El trámite de conciliación surtido fue exclusivamente entre empleador y empleado y ninguna participación tuvo mi representada, la doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO.**

Al hecho ***OCTAVO***: No me consta el trámite de pago que enuncia el Ministerio. Cualquier actuación surtida se dio en virtud de la relación laboral habida entre estos.

Al hecho ***NOVENO:*** No obstante la multiplicidad de hechos, difiero, pues dentro de las funciones que atribuye el artículo 19 del Decreto 1716 de 2009, a los Comités de Conciliación NO le es dada la facultad o competencia para determinar la culpa grave o dolo en las actuaciones de alguno de sus funcionarios y menos aún decidir *"(...) en forma unánime...* como se hizo, en cuanto a la responsabilidad que se le endilga, dice que tenía mi representada, la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO**.

Además, La función de notificar los actos administrativos de liquidación de las cesantías en el *exterior* no se encuentra establecida de manera alguna en el Manual Descriptivo de Funciones y Requisitos (Resolución 0033 de 1994), ni en el Decreto 2126 de 1992.

Al hecho **DECIMO**: No es un hecho. Me atengo a la normatividad legal y su vigencia en el tiempo, pero sí es del caso señalar que los Comités de Conciliación son órganos consultivos y de asistencia, que si bien tiene la facultad de decidir cuando deba instaurarse una acción de repetición, no la tienen para hacerlo en relación con la declaratoria de responsabilidad administrativa y disciplinaria de los funcionarios de las entidades y eventual sobre el grado de culpa o dolo en la conducta de algún funcionario. En este caso del Ministerio de Relaciones Exteriores.

II. RAZONES DE LA DEFENSA

a) El **Acuerdo Conciliatorio** celebrado a instancias de la **Procuraduría 84 Judicial I** para Asuntos Administrativos tuvo por objeto el reconocimiento y pago de las diferencias del auxilio de cesantías que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como **empleador,** debía a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por diferencias en la liquidación de dicha prestación, practicada sobre sumas inferiores a los salarios reales

que el mismo devengó desde **1990 hasta el año 2003** cuando ha laborado para el mismo en el exterior.

Pago que tuvo como fundamento legal, el vínculo laboral existente entre el Ministerio y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, generador de dicha prestación conforme a lo establecido en la Ley 6 de 1945, artículo 17 y lo declarado por la Corte Constitucional en la Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y mucho antes, en la Sentencia T-1016 de 2000, que evidencian la condición *inconstitucional* de las prácticas anteriores que al respecto tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores.

b) Se pretende, inmerso irregularmente bajo este medio de control judicial, que se avance en un juicio de declaratoria y condena de condena por la ***responsabilidad*** que se les endilga a mi representada, la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** por haber supuestamente omitido el deber –si lo tenía-, de notificar personalmente las liquidaciones *anuales* del auxilio de cesantías desde **1990 hasta el año 2003** desconociéndose que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental al debido proceso, garantiza que ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa***.

Para el caso, el anterior Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 184, que rigió hasta el 1º de julio de 2012, cuando entró en vigencia la ley 1437 de 2011. Así como la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, conforme a la cual: *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...."* (Artículo 5º).

c) Tanto por lo establecido por el anterior Código Contencioso Administrativo C.C.A., preexistente a la conducta que se le endilga a mi representada la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** la acción para la eventual responsabilidad, en ese caso *conexa* con la entidad, caducó conforme al artículo 136 del C.C.A, dos años después de la presunta omisión del deber, si lo tenía. A la vez prescribió, cinco (5) años después la disciplinaria (art. 34 ley 200 de 1995), transcurrido como lo han sido **más de trece (13) años**, contados a partir de la última presunta omisión que se les imputa y se retrotrae a la liquidación anual de cesantías del año **2003**.

d) La demanda, como está visto, no tiene como materia la restitución de lo pagado por un reconocimiento *indemnizatorio* -que no lo ha habido-, sino la recuperación para el Ministerio de lo que debía y pagó por ajuste de cesantías generadas en la vinculación laboral que establece la Ley 6 de 1945 y de conformidad con los términos fijados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 y excluyen también, cualquier supuesto de la afectación del Ministerio de Relaciones Exteriores como empleador de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por un "daño antijurídico".

e) La Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** no fue convocada, ni citada como tercero, ni oída a ningún título que le permitiera que le permitiera ejercer su derecho de

contradicción, aportación y discusión de pruebas y defensa dentro del proceso de **Conciliación surtido en la Procuraduría 84 Judicial I el 29 de marzo de 2012.** Tampoco ante el Comité de Conciliación y Defensa del Ministerio de Relaciones, que se pronunció y decidió que se entablara la acción por supuestamente haber incurrido aquél en la omisión del presunto deber de notificar personalmente las cesantías de esta última desde **1990 hasta el año 2003** sin ninguna facultad, el Comité, para hacerlo en lugar de la autoridad disciplinaria correspondiente y sin las garantías del debido proceso

f) Colíguese de todo lo anteriormente expuesto, que no resulta legítimo el empleo de este medio de control judicial sobre la materia propuesta (art. 169 -núm. 3°-, Ley 1437 de 2011).

IV. De las EXCEPCIONES

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

A. EXCEPCIONES PREVIAS

1. Falta de competencia

Conforme lo establece el **artículo 7º** de la **Ley 678 de 2001**, de la acción de repetición conocerá de acuerdo con las reglas de competencia, el **juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial** contra el Estado y, si la reparación patrimonial impuesta al mismo tiene origen en una **conciliación** o cualquier otra forma establecida en la ley para la solución de conflictos, es competente el **juez o tribunal que haya aprobado el respectivo acuerdo**.

En este caso, el pago que se pretende repetir, proviene del **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012** y aprobado por el **Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"**. En consecuencia, El Tribunal Administrativo de Cundinamarca es el **competente** para conocer de esta acción.

En efecto, según la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, la competencia en razón al factor de ***conexión*** es prevalente por ser especial y en este caso se trata de la consagrada por la ley 678 en su artículo 7º respecto de la acción de repetición. No obstante, lo establecido aun siendo posterior, por el artículo 155 del C.P.A.C.A. en razón a la cuantía.

Dijo, pues, el Consejo de Estado:

> *"Para efectos de la competencia en acciones de repetición el artículo 7º de la Ley 678, establece como premisas: la preexistencia de una sentencia condenatoria al Estado y por ende el trámite de un proceso previo ante la jurisdicción de lo contencioso; sin embargo en hipótesis distintas, es decir,*

una conciliación u otra forma autorizada por la ley, conocerán el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo. Cuando no medie aprobación judicial conocerá el jue que ejerza jurisdicción en el territorio donde se celebró el acuerdo. De igual forma existen otros eventos por fuera de los presupuestos del artículo 7º, es decir sin condena previa en la jurisdicción contenciosa, tales como: condenas en la jurisdicción ordinaria en materia laboral a favor de trabajadores oficiales, condenas al Estado Colombiano en tribunales de arbitramento, o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc.; casos en los cuales se aplicarán plenamente las reglas de competencia previstas en el Código Contencioso Administrativo (...)" (Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación 11001-03-15-000-2007-00433(c) Consejero Ponente: MAURICIO TORRESCUERVO, once (11) de diciembre de dos mil siete (2007)

Precisamente, el Doctor **JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ**, en su obra "El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo" de Ediciones Doctrina y Ley LTDA 2014, resume así el tema:

"La incompatibilidad entre la conexidad y la cuantía ya fue resuelta por la sala plena del Consejo de Estado, dando prelación a la conexidad para determinar el juez natural de la repetición.

No se desconoce que el nuevo código es posterior, pero en materia de aplicación de las reglas de hermenéutica jurídica, el artículo 5 de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad de la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.

De lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, por lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario al de una norma anterior resulta ésta derogada, pues deberá tenerse en cuenta criterio de la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3 de la Ley 153 de 1887 y 5 de la Ley 57 del mismo año.

Por último, no puede perderse de vista, que el legislador en el momento establecer los fueros de competencia para cada uno de los medios de control, no realizó ninguna precisión frente al medio de control de repetición, teniendo en cuenta que, la competencia ya estaba prevista en la Ley 678 de 2001.

Se quiere significar con lo anterior, que toda vez que el, C.P.A.C.A. no derogó de manera expresa la competencia establecida en la Ley 678 de 2001, esta disposición se encuentra vigente y teniendo en cuenta la especialidad de esta norma respecto de la acción de repetición, se debe aplicar la conexidad a fin de establecer el juez natural de la pretensión de repetición y no el factor cuantía". (pag. 170)

2. **Caducidad de la acción declarativa de responsabilidad**

El **artículo 29 de la Constitución Política** garantiza el derecho fundamental del *debido proceso*.

En tal virtud nadie puede ser juzgado ni condenado sino conforme a las leyes preexistentes a la conducta que se les imputa.

En este caso, se pretende la declaratoria de responsabilidad y subsiguiente condena a la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** por supuestamente haber omitido el deber –que no tenía, de notificar personalmente y no lo hiciera, a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** las liquidaciones anuales de sus cesantías en los períodos en los que éste prestó sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores ***en el exterior*** y se remontan desde **1990 hasta el año 2003**

Más aún, abarca lo que se pretende repetir, lo pagado a dicho exfuncionario en los períodos de **1990 hasta el año 2003** períodos éstos, -todos- durante los cuales rigió el Código Contencioso Administrativo promulgado por el **Decreto Ley 01 de 1984,** que lo fue hasta el **1º de julio de 2012**, con la entrada en vigencia, el 2 de julio del mismo año, de la Ley 1437 de 2011, *"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".*

En este orden, la acción de responsabilidad de los funcionarios por los eventuales daños antijurídicos causados por culpa grave o dolosa en el desempeño de sus funciones (artículos 77 C.C.A.) en conexidad con la entidad (art. 78 C.C.A.), **caducó** a los **dos (2) años** de la presunta *omisión* (art. 136 ibídem)

Y sea del caso prevenir que otra es, por supuesto, la *caducidad* de la acción en cuanto a la *condena* sobre repetir lo pagado, que corre a partir del pago (Ley 1437 de 2011, art. 142) la cual, legal y constitucionalmente puede arrastrar la primera, si bien cabe lógicamente derivar de la responsabilidad la *condena* no así lo contrario, cuando aquélla no ha emanado del juicio previo y correspondiente, con las plenas garantías del *debido proceso* y dentro de la oportunidad fijada en la ley preexistente a la conducta imputada.

3. **Inepta demanda**

a) **Por indebida acumulación de *pretensiones***

Se pretende bajo una misma cuerda, por el medio de control de repetición, que a la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** se la declare administrativamente responsable y se la condene a reembolsar al Ministerio de Relaciones Exteriores lo que éste, en cumplimiento de la **Sentencia C-535 de 2005**, pagó a la Señora **ANGELA MARÍA**

exterior, **desde 1990 hasta el año 2003** cuando aquélla se desempeñó como *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales y como Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones* entre el **11 de diciembre de 2000 hasta el 11 de marzo de 2001- 31 de diciembre de 2001 al 7 de enero de 2002,** regía el Decreto Ley 01 de 1984 por el cual se expidió el anterior Código de lo Contencioso Administrativo, vigente hasta el 1º de julio de 2012, al que precedió la Ley 13 de 1984, subrogado por el Decreto Ley 2400 de 1998 y regía también, en materia disciplinaria, la Ley 25 de 1974 -Orgánica de la Procuraduría General- y su Decreto Reglamentario 3404 de 1983, parcialmente modificada y adicionada por la misma Ley 13 de 1984 y el mismo Decreto Ley 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, de manera que a la luz de lo establecido por el artículo 29 de la Constitución Política a la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** no cabe enjuiciarla bajo el actual CPACA que rige en cuanto a la repetición y, en consecuencia no procede la acumulación, pues a voces del art. 165 del CPACA se exige que tanto lo relativo a la declaratoria de responsabilidad como la condena a reembolsar lo pagado, puedan enjuiciarse bajo la misma normativa.

De acuerdo al artículo 29 de la Constitución, ***nadie podrá ser juzgado ni condenado sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y como está visto, las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que supuestamente la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** no le notificó personalmente cuando esta fungía como **como** *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales y como Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones* **desde el 11 de diciembre de 2000 hasta el 11 de marzo de 2001- 31 de diciembre de 2001 al 7 de enero de 2002,** se remonta al año 2000 y no pueden juzgarse sino a la luz de las normas preexistentes a dichas presuntas omisiones **Hace 16 años,** entre otras cosas, caducadas y prescritas pues según la Ley 200 de 1995 -Código Disciplinario Único-, modificada por la Ley 734 de 2002, vigente para la época de las conductas que a la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** se endilgan, *"(...) Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya...."* (Artículo 5º).

Así, pues, la presunta responsabilidad que se le endilga a la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** no es susceptible de enjuiciarse ***sino conforme a las normas preexistentes a la conducta u omisión que se le imputa*** y no por este medio de control, sin campo alguno para pronunciarse legítimamente sobre una disposición de orden constitucional como la impartida en la **Sentencia C-535 del 24 de mayo del 2005** que dio lugar al pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores le hizo en virtud del Acuerdo Conciliatorio celebrado.

De otra parte, según lo expuesto por el artículo 136 del C.C.A. preexistente a la conducta que se le endilga a la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** la acción para derivar una eventual responsabilidad suya en el pago que el Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso hizo, caducó dos años después de la presunta omisión que se le endilga y también prescribió a los cinco (5) años la acción disciplinaria propia para

definirla (art. 34 ley 200 de 1995), cuando han transcurrido desde entonces **no menos de trece (13) años y hasta veinticuatro años (24).**

Además, es infundada y falaz la afirmación de que de haberse notificado aquéllas liquidaciones anuales de cesantías, que en el proceso ni siquiera se conocen, hubiera prescrito la acción o caducado el derecho de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** puesto que la posibilidad de demandar nace desde el momento en que la Administración, al **retiro del servidor** no hace entrega de la suma correspondiente a este concepto, es decir omite el cumplimiento de su obligación.[1]

B. EXCEPCIONES DE FONDO

Propongo frente a esta acción, las siguientes:

a. *Ineptitud sustantiva de la demanda;*
b. *Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad.*
c. *Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición*;
d. *Ilegitimidad de personería por pasiva;*
e. *Inexistencia de nexo causal;*
f. *Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación;*
g. *Inexistencia de daño antijurídico;*
h. *Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso;*
i. *Falta de legitimación en la causa por pasiva;*
j. *Abuso del derecho; e,*
k. *Ilegitimidad del derecho sustantivo.*

EXPOSICIÓN DE LAS EXCEPCIONES DE FONDO

a. *Ineptitud sustantiva de la demanda*

Derivada ésta del desconocimiento de las garantías constitucionales del derecho fundamental al *debido proceso*[2] a NO *"(...) ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (...) y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio..."*, pues fuerza distinguir en el proceso lo que atañe a la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial del demandado, la

[1] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de septiembre de 2011 radicado interno (2005-

Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** como se pretende y lo que concierne a la eventual condena a retribuir lo pagado.

A lo primero, indiscutiblemente corresponde la aplicación de las normas preexistentes a la supuesta conducta omisiva de los implicados, del deber –si lo tenían-, de notificar personalmente a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** ***año por año***[3], *las liquidaciones anuales* de sus cesantías, causadas en los años de **1990-** Hace 26 años, **1991-** Hace 25 años **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años-, durante los cuales laboró al servicio del Ministerio de Relaciones en **el exterior,** pues rigió desde el **1º de marzo de 1984**[4] hasta el **1º de julio de 2012**[5], el Decreto Ley 01 de 1984 que reformó el Código Contencioso Administrativo[6] anterior.

Ahora bien, a efectos de derivar la responsabilidad que correspondiera a los funcionarios aquí implicados para la época en que supuestamente omitieron el deber, -si lo tenían-, de notificar personalmente las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** causadas en los años de **1990**- Hace 26 años-, **1991-** Hace 25 años-, **1992-** Hace 24 años, **1993-** Hace 23 años, **1994**- Hace 22 años, **1995-**hace 21 años-, **1996**-hace 20 años-, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años **1999** -hace 17 años-, **2000**-hace 16 años, **2001**-hace 15 años-, **2002**-hace 14 años y **2003**-hace 13 años-, el **artículo 78** del Decreto Ley 01 de 1984, vigente en esos años, permitió que fueran demandados, en conexidad con la entidad pública, los funcionarios responsables de culpa grave o dolo en ejercicio de sus funciones, que le fueren generados a terceros (art. 77 *ibídem*), conforme a las reglas generales de los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, de ser así, fuera la misma la sentencia que dispusiera que el funcionario responsable satisficiera los perjuicios ocasionados a la Entidad, repitiendo contra el mismo lo pagado, para lo cual el término para hacerlo era de "***(2) dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa...***" establecido para las acciones de su género.

En cuanto a lo segundo, aspecto propio de la ritualidad de los procesos, es claro, que al tipo de acción incoada ha de dársele el trámite del medio de control judicial de repetición, sin que por ello pueda legitimarse a accionar, como se proponen, frente a los demandados en procura de una declaratoria de responsabilidad que caducó y sustrae al juez de proveer legítimamente al respecto, hoy décadas después de acontecido el supuesto incumplimiento del deber, si lo tenía, que a los demandados se les endilga, que en ese tiempo no cumplieron, válido, el demandante, que hoy el término para el medio de control de repetición caduca a *partir del pago,* y baste ésa consideración para traer ahora a este juicio a los demandados quebrantándoles todas las garantías constitucionales al debido proceso.

---

[3] Decreto 3118 de 1968 *"Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantías de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, reorganizado por la Ley 432 de 1998".*

[4] Diario Oficial 36.439 del 10 de enero de 1984.

[5] Fecha de entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 "por la cual se expidió el Código de Procedimiento [illegible] Contencioso Administrativo"

De ahí que, la demanda adolezca de la actitud sustantiva para derivar una condena en contra de los demandados, habiendo caducado como está visto cualquier acción encaminada a la declaratoria de la responsabilidad administrativa y patrimonial de los demandados por hechos que se remontan, como ya ha quedado visto, entre **trece (13) y veintiséis (26) años atrás**, enmarcados dentro de un ordenamiento legal preexistente y también, por supuesto, más favorable[7].

Descendiendo a la demanda, ésta se apoya en una sentencia en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores fue condenado a restablecer los derechos que por su parte le vulneró a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** con el reconocimiento y pago que le había hecho de las cesantías causadas a su favor durante los períodos de sus servicios al mismo **en el exterior**, en los años en que desempeñó el cargo referido de la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** basándose en sumas inferiores a los salarios reales que el ex funcionario devengó, debiendo en consecuencia, re-liquidarle dicha prestación, conforme a lo ordenado en la Sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto Legislativo 10 de 1992, que el Ministerio siguió aplicando, no obstante su derogatoria con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993[8] y posteriormente la Ley 797 de 2003, de ninguna manera vinculante con los demandados, quienes son totalmente ajenos a las prácticas entronizadas en ese orden por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de donde se deriva el pago que por concepto de reliquidación de dichas cesantías, debió atender y **no del reconocimiento de una indemnización ocasionado por un daño antijurídico** que fuera imputable como se formula, a los demandados.

Es claro entonces, que no existe sentencia alguna de condena al pago a una indemnización que vincule a los demandados o que lo hubiese vinculado, conforme a las previsiones de los artículos 77 y 78 del Decreto Ley 01 de 1984, ni pueda hacerlo ahora, lo cual conduce a la imposibilidad jurídica de despachar la demanda dada y, en consecuencia, la ineptitud sustantiva de la misma.

b. *Exclusión de responsabilidad de los demandados por culpa imputable exclusivamente a un defectuoso servicio público de la Entidad*

Siguiendo al tratadista *Bonnard,* quien participando de las mismas ideas de Deguit en materia de responsabilidad administrativa, lo que se advierte es una "falta de la administración" y la jurisprudencia ha advertido de *la responsabilidad* basada en una irregularidad de la actividad administrativa. Así, *"(...) Se ha deducido que la responsabilidad del patrimonio público surge cuando el daño resulta de una mala organización o de un funcionamiento defectuoso del servicio, y es, sin que sea necesario que en esa mala organización o defectuoso funcionamiento haya culpa de parte de un agente administrativo. Esto es lo que constituye la llamada culpa del servicio público, así denominada para indicar "que no hay culpa individualizada de un agente administrativo", sino solamente una irregularidad de origen anónimo y de aspecto objetivo en la organización y en el funcionamiento del servicio."*[9]

---

[7] Art. 53 C.P.

Y, como aquí se advierte la falta de la notificación personal de las liquidaciones anuales de cesantías a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores **en el exterior**, no fue, -está visto- un hecho aislado, sino que corresponde a una condición propia de un defectuoso servicio público de la entidad a falta de una regulación y apremios del orden de conformación y asignación de actividades puntuales, cuya omisión no cabe, pues, imputar individualmente a uno u otro funcionario con remisión a normas generales, sino que es más bien producto anónimo del funcionamiento de la Entidad, generador cuando menos de un ***error communis facit ius***[10] o, que hace derecho

Por otra parte, cabe señalar que de tiempo atrás la jurisprudencia ha establecido los requisitos para dar aplicación a la "doctrina del error común creador de derechos" o teoría de la apariencia[11], a saber:

1. *"Debe existir una situación que realmente sea contraria a la normatividad, pero oculta, es decir, (...) ajena en su etiología y desarrollo a quien eventualmente resultare perjudicado con la apariencia de juridicidad (...)*
2. *Que esa situación de apariencia de legalidad esté respaldada en hechos, situaciones o documentos cuyo vicio no sea posible advertir con diligencia y cuidado.*
3. *Que la conducta de quien resultó perjudicado con la situación de aparente legalidad esté respaldada por una buena fe del particular (...)*
4. *Que la situación no esté regulada expresamente por una ley imperativa que imponga soluciones diferentes a las que resultarían de la aplicación de la doctrina".*

c. Inexistencia de los presupuestos de la acción de repetición

El Artículo 90 de la Constitución Nacional establece que:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este."

Adviértase la inexistencia de una condena o conciliación al Estado en la que conste la indemnización por la ocurrencia de un ***daño antijurídico,*** producto de la conducta dolosa o gravemente culposa imputable a mí representada, la doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO**.

Lo que ha traído el Ministerio como fundamento para sustentar la pretensión de repetición es una Conciliación que obliga a la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores a pagar a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las diferencias

[10] Conc. artículo 8°. Ley 153 de 1887
[11] Al respecto se puede consultar la Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del [illegible] M.P. Dr. Jorge Salcedo Segura

de cesantías originadas durante el tiempo en que aquel prestó sus servicios en el exterior, atendiendo lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 535-2005.

Así las cosas, el **Acuerdo Conciliatorio** tiene como fundamento el cumplimiento de una Sentencia de la Corte Constitucional - no de la ocurrencia de un daño antijurídico - elemento necesario para que se pueda predicar la procedencia de la acción de repetición. Asimismo, el pago efectuado corresponde al reajuste de cesantías que el Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** durante el tiempo en que esta prestó sus servicios en el exterior. De allí que tampoco pueda derivarse que el pago efectuado por el Ministerio haya sido en calidad de indemnización, como bien lo exige el Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.

Por otra parte, la **Ley 678 de 2001** *"Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.",* estableció la **acción de repetición** con el fin de restituir al Estado lo pagado, exclusivamente, a título de una indemnización, como *reparación* –directa- del **daño antijurídico** irrogado por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes, o de un acuerdo conciliatorio u otra forma de terminación de un conflicto de responsabilidad civil contra una entidad pública.

Adviértase que cuando los hechos que generan la pretensión de repetición ocurren con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2001, se debe establecer la normatividad sustancial y material aplicable al caso en concreto. Al respecto ha indicado en Consejo de Estado que:

"En cuanto a las normas sustanciales, se tiene que las normas aplicables para dilucidar si el demandado actuó con culpa grave o dolo, serán las vigentes al tiempo en que tuvo lugar la conducta del agente estatal. En tal sentido, **las presunciones de dolo y culpa grave que traen los arts. 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 no pueden ser aplicables a casos concretos donde los hechos que generaron la repetición se dieron con anterioridad al 4 de agosto de 2001.**"[12]

Por su parte, establece el **artículo 142** de la **Ley 1437 de 2011**:

> ***Ley 1437 de 2011. Artículo 142.***
> ***"Repetición.*** *Cuando el Estado haya debido hacer un* ***reconocimiento indemnizatorio*** *con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.*
>
> *La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.*

---

[12] Consejo de Estado, Expediente 25000232600020030030001 (28.448) del 31 de agosto

Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño." (Negrillas fuera de texto)

Como aquí está visto la demanda aquí incoada tiene como base lo pagado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de la diferencia de cesantías surgida por efecto de los servicios que prestó dicha entidad **en el exterior,** devengando realmente sumas inferiores a las que realmente devengó y el Ministerio le liquidó cuando prestó sus servicios desde **1990 hasta el año 2003** en cumplimiento a lo dispuesto en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el día 29 de marzo de 2012**, no es vinculante con los demandados ni podría serlo, pues no fueron llamados al mismo con fines de repetición ni citados como terceros ni en ninguna otra condición que les permitiera haber sido **oídos** y ejercido su legítimo derecho de *contradicción,* petición y discusión de pruebas para su defensa, como lo garantiza el debido proceso que consagra el **artículo 29** de la Constitución Política.

Por eso, tal acuerdo no les es oponible, por lo que constitucional y legalmente es posible derivar en su contra la declaratoria de responsabilidad e imposición de la condena que se procura.

d. *<u>Ilegitimidad de personería por pasiva</u>*

Aun cuando se demanda, entre otros, a la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** por supuestamente haber omitido el deber – si lo tenía- de notificar las liquidaciones anuales de cesantías a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** en los periodos entre el **11 de diciembre de 2000 hasta el 11 de marzo de 2001- 31 de diciembre de 2001 al 7 de enero de 2002,** cuando aquélla se desempeñó *como Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales y como Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones,* la acción de repetición se encamina a obtener indistintamente del mismo el pago que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES hizo a aquélla, de la suma de **$133.148.564** por el reajuste anual de sus cesantías liquidadas como inicialmente lo fueron, sobre sumas inferiores a los salarios reales que devengó durante los periodos de sus servicios en el exterior y corresponden a los años de **1990-** Hace 26 años-, **1991**- Hace 25 años-, **1992**- Hace 24 años-, **1993**- Hace 23 años-, **1994**- Hace 22 años, **1995-**<u>hace 21 años-</u>, **1996**-<u>hace 20 años-</u>, **1997-** Hace 19 años, **1998-** Hace 18 años, **1999** -<u>hace 17 años-</u>, **2000**-<u>hace 16 años</u>, **2001**-<u>hace 15 años-</u>, **2002**-<u>hace 14 años</u> y **2003**-<u>hace 13 años,</u> cuando la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** ninguna vinculación, ni relación funcional, administrativa ni causal tuvo al frente de las liquidaciones anuales de cesantías que el MINISTERIO le liquidó a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Luego no existe legitimación en la causa por pasiva entre el MINISTERIO y la doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** para que aquel demande indistintamente, sin relación de proporcionalidad ni de racionabilidad alguna, lo comprendido en la totalidad de lo

pagado que se pretende repetir, lo generado por todo el tiempo reliquidado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO.**

e. ***Inexistencia de nexo causal***

La *causa* generadora del pago, vertida en el **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012,** que obligó al Ministerio de Relaciones Exteriores a reliquidar las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en los períodos de sus servicios en el exterior, conforme a los salarios reales que entonces devengó y no sobre las sumas inferiores que en esa época el Ministerio le liquidó, tiene su origen en la Ley 6ª de 1945 -art. 17- en razón de la vinculación de naturaleza laboral, de carácter legal y reglamentaria, que compromete exclusivamente, como empleador, al Ministerio de Relaciones Exteriores y lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**. En ningún caso por causa de la demandada, la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO**.

En cumplimiento de la Sentencia C- 535-2005, que declaró inexequible el Artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, y ordenó liquidar las cesantías de los funcionarios que laboraron en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores teniendo en cuenta en el Ingreso Base de Liquidación la suma total de los salarios reales devengados durante los periodos laborados en el exterior, se llegó al **Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012,** que corresponde a lo que el Ministerio debía y pagó a la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de *reajuste de cesantías* según lo establecido en la Sentencia C- 535- 2005.

Así, aquello en lo que funda la pretensión de repetición el Ministerio atinente a la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaron las cesantías, para efectos de que pudiese operar el fenómeno de la prescripción trienal de las acciones laborales es completamente inane habidas las siguientes consideraciones:

Primero: Siendo la cesantía una prestación de carácter unitario, el término para iniciar el cómputo de la prescripción trienal de la acción laboral solo puede ser al momento de la finalización de la relación laboral que coincide con el momento a partir del cual se hace exigible el derecho por parte del trabajador. Así lo ha entendido el Consejo de Estado al establecer que: "[...] se concluye que **mientras esté vigente el contrato de trabajo, no se puede hablar de prescripción de la cesantía como derecho social.**"[13]

Habida cuenta de lo anterior, mal puede hablarse de prescripción de las cesantías contada a partir de la notificación ***anual*** de dicha prestación, pues ninguna de ellas es independiente de las demás. Son partes de un todo que conforman una prestación unitaria.

Al ser una prestación social de *carácter unitario* cuya exigibilidad solo se produce a partir de la finalización de la relación laboral, resulta inane la notificación anual de dichos actos administrativos para el cómputo de la prescripción trienal. De tal forma que con

---

[13] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "B", sentencia del 22 de enero de 2015, Radicado interno

notificación o sin ella, la causa generadora del pago no es la supuesta omisión de la notificación anual de los actos administrativos de liquidación. Esta se genera en el cumplimiento de la Sentencia C- 535- 2005 de la Corte Constitucional.

Segundo: Fue a partir del 24 de mayo de 2005 con la Sentencia C- 535-2005 de la Corte Constitucional que se conoció e hizo exigible para el Ministerio de Relaciones Exteriores la obligación de liquidar y pagar el reajuste de las cesantías en los términos de dicho fallo y el derecho correlativo de los funcionarios a reclamar su efectividad.

Así, el término de inicio para el cómputo de la prescripción trienal es la fecha de expedición de la sentencia de la Corte Constitucional; fecha a partir de la cual se hizo exigible la obligación. No antes, que es lo que predica la demanda pretendiendo inferir responsabilidad en cabeza de la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** por supuestamente haber omitido la notificación anual de los actos administrativos de liquidación de las cesantías.

La verdadera causa del pago es la Sentencia C- 535- 2005 del 24 de mayo de 2005 que declaró inexequible el Artículo 10 del Decreto Ley 10 de 1992, que establecía el pago de las cesantías de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando laboraban en el exterior, con base en las asignaciones salariales de cargos equivalentes en la planta interna. Teniendo en cuenta que los efectos de las sentencias de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro, a menos que la Corte resuelva lo contrario, en los términos del Artículo 45 de la Ley 270 de 1996, la eventualidad del término prescriptivo trienal encaminado al reajuste de las cesantías es la fecha de expedición de la Sentencia.

Así lo ha entendido el Consejo de Estado en varias providencias al manifestar que:

"[...] Conforme a lo antes indicado se precisa que existía un obstáculo de orden legal que no permitía liquidar las prestaciones de los empleados del servicio exterior, con base en lo que devengaban sino sólo de acuerdo con los valores equivalentes a los de la planta interna, de manera que se puede decir, como ya lo ha precisado esta Sala, que el derecho a devengar la cesantía liquidada con base en lo devengado en el servicio exterior, sólo surgió, con certeza, a partir de la expedición de las sentencia referida, pues antes, es evidente que la entidad pública se abstenía de liquidarla.

A partir de la remoción del obstáculo normativo cuya sentencia fue proferida el 24 de mayo de 2005, el demandante estaba legitimado para pedir el reconocimiento de su derecho, por ende, no es procedente declarar la ineptitud sustantiva de la demanda, conforme lo pidió la entidad recurrente en el recurso de alzada.[14]"

Por su parte, indicó en Sentencia del 6 de julio de 2011, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren:

---

[14] Consejo de Estado del 4 de noviembre de 2010, M.P: Víctor Hernando Alvarado Ardila,

"[...] Además, con el pronunciamiento de inconstitucionalidad efectuado por la Corte Constitucional en sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, efectuado el 24 de mayo de 2005, la parte demandante quedó legitimada para reclamar la reliquidación de sus prestaciones, en especial de sus cesantías, porque la vigencia y aplicabilidad del aludido artículo, impedía su reconocimiento.

El fallo recurrido amerita ser confirmado porque pese a que la sentencia de la Corte Constitucional C-535 de 2005, fue proferida luego de que se causaron las respectiva anualidades en las que el demandante prestó sus servicios en el exterior, y ésta tiene efectos hacia el futuro, lo cierto es que, por las razones arriba expresadas, es procedente declarar la denominada excepción de inconstitucionalidad para darle prevalencia a la interpretación constitucional y así, **en aplicación de los principios de primacía de la realidad frente a las formas y favorabilidad evitar que una norma que es inconstitucional desde sus orígenes produzca efectos en los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestaron sus servicios en el exterior**."

Estas sentencias encuentran su fundamento en que la fecha a partir de la cual se hizo exigible el derecho a la reliquidación de la cesantía por parte de los funcionarios que laboraban en el exterior, es el 24 de mayo de 2005; fecha de expedición de la Sentencia C-535 de 2005. Esto es así teniendo en cuenta que solo con la promulgación de la Sentencia de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del Artículo 57 del Decreto extraordinario 10 de 1992, se declaró el derecho de los funcionarios que laboraron en la planta exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de exigir la reliquidación de sus cesantías con base en el salario realmente devengado. En este punto fuerza distinguir *la exigibilidad de la cesantía misma que, dada su naturaleza, se da al momento de desvinculación del trabajador* y la *exigibilidad de la reliquidación del auxilio de cesantía que sólo puede computarse a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005.*

Por su parte, son varios los pronunciamientos judiciales proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los que ha interpretado que los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que no hayan exigido la reliquidación de sus cesantías dentro del término de tres años contados a partir de la promulgación de la Sentencia C-535 de 2005, aplica la excepción previa de prescripción extintiva de los derechos laborales.

En relación con lo anterior, los procesos judiciales en los que se ha aplicado esta posición son:

1- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-01180-00. Demandante: Martha Angélica Marín Colorado- Demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los

derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

2- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-01182-00. Demandante: Sofía Salgado de Goméz- Demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante auto del 13 de agosto de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C-535/2005.

3- Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad No 25000-23-42-000-2012-0018500.

Mediante auto del 22 de octubre de 2013 aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se determinó que operaba el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos del demandante contado a partir de la promulgación de la Sentencia C- 535 de 2005.

En síntesis, el argumento esbozado en la demanda en virtud del cual se generó un daño antijurídico por la indebida notificación anual de los actos administrativos que liquidaban el auxilio de cesantía, impidiendo así que operara la prescripción trienal de los derechos, carece de todo sustento jurídico y se constituye en un abuso del derecho de acción por parte de la Cancillería. Además, es de mala fe buscar repetir lo pagado a **ANGELA MARÍA CORREA MORENO,** por haberse cumplido la Sentencia C-535-2005, que reiteró que la pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le corresponde.

f. ***Desbordamiento de las competencias del Comité de Conciliación***

De otra parte, de conformidad con lo establecido en el **artículo 19 del Decreto 1716 de 2009**, el *Comité de Conciliación* del **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** no es el competente para decidir que la conducta de la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** sea *gravemente culposa* por los hechos u omisiones que se le endilgan. Dicha *competencia* es privativa del Superior disciplinario[15] y con observancia del *debido proceso* que descansa en la garantía constitucional a ser *oída* y ejercer la *defensa* que, en ese orden, no se dio.

En tal sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado[16] en respuesta a la consulta formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto de los

estudios que deben realizar los comités de conciliación de las entidades públicas para determinar la procedencia de la acción de repetición, advirtió lo siguiente:

> *"El alcance de los estudios y evaluaciones que debe realizar el comité de conciliación para determinar la procedencia de la acción de repetición, está dado por los requisitos fijados en la normatividad vigente, (...). En desarrollo de dichos estudios, el comité de conciliación* ***no puede invadir la competencia atribuida a la jurisdicción de lo contencioso administrativo****, al cuestionar los argumentos que sirvieron de fundamento al fallador"* (Resalto).

Por lo anterior, concluye el Alto Tribunal que los estudios que debe realizar el comité *"(...) deben dirigirse a demostrar los presupuestos fácticos en que se basa la presunción a favor del Estado"*[17].

g. ***Inexistencia de daño antijurídico***

El pago realizado, que se pretende repetir en contra de la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** consiste en el reconocimiento, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la diferencia a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, siendo aquél su empleador, generada en la incompleta liquidación de sus cesantías, realizada sobre sumas inferiores a los salarios realmente devengados por el mismo cuando prestó sus servicios a dicha entidad en el exterior, en el período de la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** y otros más cuyo producto se encuentra incluido en el total demandado y tienen por única y son el producto exclusivo de una prestación de naturaleza laboral, nacida del vínculo legal y reglamentario habido entonces entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, que establece la Ley 6ª de 1945, y obedece para el caso a lo ordenado en la Corte Constitucional en la sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.

En tal orden, el **Acuerdo Conciliatorio**, versó sobre la reliquidación de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, ordenando al Ministerio a dicho pago en cumplimiento de la Sentencia C-535-2005.

De ahí pues, que no pueda válidamente predicarse la existencia de un pago constitutivo de **"daño antijurídico"**, como sí por el contrario, lo fue de una prestación legal de carácter laboral, legítima como quiera que estaba basada en la Ley 6ª de 1945, en el *trabajo* que merece la especial protección del Estado (art. 25 de la Constitución Política) y en la *cosa juzgada* constitucional emanada de la sentencia C-535 de 2005.

h. ***Inexistencia de condena de declaratoria de responsabilidad y de las garantías del debido proceso***

595
864

El **Acuerdo Conciliatorio** que trae el Ministerio de Relaciones Exteriores como base de la acción de repetición, no es constitutivo de condena alguna de la responsabilidad de la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** ni podría hacerlo so pena de violación del debido proceso, puesto que al trámite judicial, no fue éste convocado, ni citado u oído de manera que hubiera podido ejercer su derecho de contradicción, de oportunidad de pruebas y defensa sobre en orden a determinar la existencia y el grado de una eventual responsabilidad *conexa* a la del Ministerio de Relaciones Exteriores la cual, además, ya habría caducado conforme a las normas preexistentes a la presunta ocurrencia de la omisión al deber que aquí se le endilga remontándose a trece (13) y más años atrás, de donde siguiese necesariamente la improsperidad de una condena en su contra.

i. ***Falta de legitimación en la causa por pasiva***

La Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** no tenía la función que se le endilga de notificar personalmente las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** en el exterior.

De una parte porque dicha función no se encuentra específica ni determinada en el **Decreto No. 1295 de 2000 derogado por el 2105 de 2001,** ni en la **Resolución 0316 del 7 de febrero de 1997,** vigentes para la época en que mi representada se desempeñó como *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales y como Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones.*

Por otra parte, a mi representada se le llama a responder en repetición respecto de las liquidaciones anuales de cesantías por unos periodos **anteriores** y ***posteriores*** a su desempeño como *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales y como Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones.*Así, **anteriores** desde 1990 hasta el 10 de diciembre de 2000; ***posterior*** desde 8 de enero de 2002 hasta el año 2003, conforme el periodo que la señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** prestó sus servicios en el exterior.

Además de lo anterior, durante los periodos desde 1990 hasta el año 2003 correspondiente a las liquidaciones anuales de cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, éste se encontraba y permanecía en el exterior, circunstancia que constituye un imponderable fuera de la órbita del desarrollo de las tareas habituales de la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** quien se encontrara en la *planta interna* del Ministerio de Relaciones Exteriores entre el **11 de diciembre de 2000 hasta el 11 de marzo de 2001- 31 de diciembre de 2001 al 7 de enero de 2002,** lo que permite asumir que a quien habría correspondido notificar personalmente los respectivos actos administrativos, si los hubo, de liquidación anual de cesantías, fue a quienes desempeñaron funciones Consulares[18]. Entre ellas las de carácter administrativo, como fuera la de dar a conocer a los Funcionarios de la Misión, los actos administrativos de carácter particular de interés del propio Ministerio.

j. ***Abuso del Derecho*** -Temeridad o mala fe por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores-

Se demanda aquí, entre otros, a la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** por haberse desempeñado en el Ministerio de Relaciones Exteriores como *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales y como Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones* del **11 de diciembre de 2000 hasta el 11 de marzo de 2001- 31 de diciembre de 2001 al 7 de enero de 2002** y a quien se le endilga haber faltado al deber que no tenía, de notificar personalmente las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, correspondientes al lapso comprendido desde 1990 hasta el año 2003, pues como a simple vista se puede apreciar el periodo comprendido desde 1990 hasta 10 de diciembre del 2000, es **anterior** a su designación como *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales y como Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones*

Lo mismo que sucede, infiriéndose la falta de buena fe debida en sus actuaciones por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, y abuso de su derecho a demandar en **87 procesos** más, de iguales presupuestos, por las liquidaciones anuales de las cesantías generadas a favor de Ignacio Enrique Ruiz Perea, Lilia Stella Cepeda Ulloa, Zaida Patricia Cristancho Guerrero, Gladys Cecilia Acosta Vidal, Luis Guillermo Becerra Torres, PATRICIA ROJAS RUBIOFernando Alzate Donoso ,Enrique Antonio Celis Durán, Ana Cecilia Pulido Guerrero, Francia Rodríguez Romero, María del Pilar Gómez Valderrama, Armando González Cortés, Eduardo Alonso Rodríguez, Myriam Duarte Bernal, Consuelo del Socorro Tirado, Reinaldo Vélez Londoño, José Fernando Cendales, Eduardo Casas Acosta, María Nelly Tascón Maya, María Eugenia Beltrán de Chaparro, Miguel Camilo Ruiz Blanco, Esperanza Castro Duque, Raúl Arturo Rincón, Martha Osorio Villamizar, Divia Desideria Cepeda, Felicia Mercedes Valera, Blanca Marina Villacrees, Nydia Inés Aguirre Acevedo, Janneth Victoria Truque P, Adda Isabel Borda Medina, Edgardo Alfredo Llorente Méndez, Luis German Estrada, Henry Javier Arcos, María Helena Londoño, Patricia Klein, María Victoria Eugenia Senior Pava, Julia Inés Mora López, Maria Cristina Guerrero López, Margarita Eliana Manjarrez Herrera, René Correa Rodríguez, Gladys Mireya Paéz Herrera, Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez, Alberto Bula Bohórquez, María Helena Pastrana Pastrana, María Inés Herreño Pinto, María Smith Rueda Centeno, Juan Norberto Colorado Correa, Amparo Flórez López, Álvaro Sandoval Bernal, Alicia Alejandra Alfaro Castillo, Pablo Antonio Rebolledo Schools, Alejandro Borda Rojas, Carlos Rodríguez Bocanegra, Miguel Ángel Rodríguez Melo, Edwin Ostos Alfonso, Mauricio González López, Jaime Girón Duarte, Nacianceno López Restrepo, Rafael Juan Carlos Espinosa, Santiago Salcedo, Mery Cecilia Hurtado, Flor Ángela Martínez, Alberto Barrantes Ullos, Juan José Quintana A, Carlos Arturo Forero, Olga Cielo Molina de la Villa, Hernán Vargas Martín, Álvaro Enrique Ayala Meléndez, Carmen Estavana Zapateiro B, Fernando Salavarrieta García, Marcela Ordóñez Fernández, Gilberto Poveda Rodríguez, Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi ,Alfonso de Jesús Vélez Rivas, Fabio Emel Pedraza Pérez, Ana del Socorro Bornacelli Guerrero, Marcela Rodríguez Velandia, Alvaro Eugenio Márquez Sarmiento, Javier Darío Higuera Ángel, Carlos Arturo Morales López, Daniel Ávila Camacho, José Antonio Solarte Gómez, Blanca Stella Barrero Barrero, María Consuelo Porras, Concepción Concha Agudelo.

i. ***Ilegitimidad del derecho sustantivo***

Existe Ilegitimidad del uso del derecho sustantivo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por cuanto lo que se pretende es el REEMBOLSO de una prestación social como lo es el **auxilio de cesantías**, cuyo PAGO emana de la OBLIGACION LEGAL de aquélla, producto del VINCULO LABORAL con la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**.

Aquello que la causa en que se fundan las pretensiones del actor, devienen del supuesto deber de haber notificado o no las liquidaciones, es un sofisma para distraer la atención del verdadero derecho sustantivo que es aquélla -las cesantías- y no éste, porque con razón o sin ella, el derecho a dicha prestación, existe, en virtud de lo dispuesto por la **Ley 50 de 1990** y por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-535 de 2005**.

Dada la *materia*, de acuerdo a la cuantía cuyo valor pretende que se le reembolse por los funcionarios o ex funcionarios demandados, pues se trata de una prestación social de carácter laboral, nacida del vínculo de trabajo que existió entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y aquélla a quien se realizó el pago, en el cual el Ministerio es, por el contrario, deudor de la obligación, conforme al artículo 249 del C.S.T., que establece el auxilio de cesantía, y lo dispuesto en la Sentencia de Constitucionalidad C-535 de 2005, toda vez que la causa de lo pagado, es producto de dicho fallo que le impuso a dicha entidad, la obligación de liquidar tales prestaciones con base en el salario realmente devengado por la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, durante los periodos de sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior desde 1990 hasta el año 2003, y para cuyo cumplimiento no puede predicarse la existencia como engañosamente se formula, de una indemnización, que diera lugar al daño antijurídico.

V. FUNDAMENTACIÓN DE LA DEFENSA

a. Fáctica

Lo que da origen a lo pagado, cuyo monto se pretende *repetir*, corresponde al **derecho** de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** al reconocimiento y pago de las diferencias a su favor por concepto de ***cesantías*** desde 1990 hasta el año 2003 de acuerdo con los salarios que en esos períodos realmente devengó[19]

No es, pues, racional, ni lógico y sí sofístico, afirmar como lo expone la demanda, que obedezca al deber que en el período del **11 de diciembre de 2000 hasta el 11 de marzo de 2001- 31 de diciembre de 2001 al 7 de enero de 2002,** la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** habría tenido y ***omitiera*** *"(...) en su condición de Jefe de*

División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales y como Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones ...", de notificar *personalmente* a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, sus ***cesantías*** anuales desde 1990 hasta el año 2003 e impedido así, con *culpa grave,* que no ocurriera el fenómeno *prescriptivo* trienal de las acciones laborales y de caducidad de las propias ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que le hubieran permitido al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES eludir el reconocimiento y pago de dicha prestación conforme a los salarios reales que en esos períodos la misma devengó, incrementándose su valor, que es lo que al Ministerio le resulta *antijurídico* y asume como el *daño* que alega le irrogó *pagar* lo que, inclusive despojado de las acciones llamadas a hacer efectivo el cobro de lo debido, persiste jurídicamente como una *obligación natural* que encuentra en su naturaleza la causa legítima del pago, que, en consecuencia, no cabe *repetir*.

De manera que del Catálogo de Funciones mencionados genéricamente no se desprende la prueba que permita afirmarse, como lo expresa la demanda, que la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** tuviera el deber de *notificar personalmente* las liquidaciones anuales de las cesantías de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** con destino al Fondo Nacional del Ahorro **desde 1990 hasta el año 2003** tampoco era esa la *práctica común* adoptada al respecto como política general por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por eso, *repetir* lo pagado generaría más bien, un *enriquecimiento sin causa* en cabeza de **LA NACION-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**, a la vez que le irrogaría un injusto *empobrecimiento* a la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** por cierto, el extremo débil de la relación laboral que se le opone para sustentar la acción.

b. Jurídica

La Ley 6 de 1945, establece la obligación del empleador, en este caso el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, de reconocer y pagar al trabajador el auxilio de **cesantía**, un mes de salario por año de servicio, o proporcionalmente a su fracción, debiéndose tener por *salario* todo emolumento que este reciba ordinariamente en desarrollo de su vinculación laboral.

Ahora bien, la Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005 en materia de cesantías de los funcionarios y ex funcionarios que prestaron servicios al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en el exterior, sobre las mismas consideraciones que antes en materia de *pensiones* sirvieron de sustento a la Sentencia C-173 del 02 de marzo de 2004, definió que dicha prestación debe corresponder a los salarios realmente devengados y que una disposición como la que contenía el Decreto 10 de 1992 (art. 57[20]) y retomó el Decreto Ley 274 de 2000 (art. 66[21]), que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 derogó, no debieron aplicarse y sí, haber acudido la Entidad a la *excepción de inconstitucionalidad,* lo que no se hizo y vino a remediar el Acuerdo Conciliatorio celebrado el 29 de marzo de 2012 y aprobado por el Tribunal

---

[20] Sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005.

579
868

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F". En tal virtud, lo pagado a la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de sus ***cesantías*** anuales en el periodo comprendido desde **1990 hasta el año 2003**, no es de carácter indemnizatorio, por lo que no le ocasiona legítimamente a LA NACION -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- un detrimento patrimonial, presupuesto inescindible de la acción de repetición.

De otra parte, si como está visto durante varios años, desde 1990 hasta el año 2003 todos los quince (15) ex funcionarios aquí y en otros procesos[22] también demandados, siempre hicieron u omitieron lo mismo como lo afirma la demanda, lógico es colegir que esa fue sistemáticamente la política establecida sobre la materia por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y no la manifestación independiente y autónoma de la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** por la que deba responder patrimonial ni administrativamente, pues habríase dado *culpa* de la propia Entidad que la exime al respecto y cuanto más, un ***error communis facit ius***[23] o; que hace derecho.

Por lo anterior, en este caso no puede afirmarse que se hayan configurado los elementos para considerar probada la culpa grave de la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** conforme lo prevé el artículo 6º de la Ley 678 de 2001 y, en tal sentido, se trae a colación lo expuesto por el H. Consejo de Estado respecto a la carga de la prueba en la acción de repetición (denominada pretensión con la Ley 1437 de 2011):

> *"Es claro que el solo desconocimiento de la norma por el operador jurídico encargado de aplicarla a través de actos administrativos (...) no implica de plano una responsabilidad a título de imputación de culpa grave o dolo, puesto que, en estos casos, existe un margen de error admisible en condiciones normales y más aún extraordinarias cuando se trata de la interpretación y ejecución de las normas jurídicas o de la percepción de la realidad atendiendo las circunstancias específicas del caso, toda vez que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de la función pública se trata de una labor humana, que implica la posibilidad de yerros en las actuaciones. Como en el sub exámine no son procedentes las presunciones de dolo y culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001, por la echa de ocurrencia de los hechos, dichos conceptos requieren de una carga probatoria mayor por parte de la entidad pública en cuanto que debe desplegar una actividad prolífica tendiente a demostrar y acreditar el dolo y la culpa grave..."*[24].

Por otra parte, los servidores públicos tienen un régimen de responsabilidad subjetivo y, en consecuencia, el título de imputación, sea dolo o culpa grave, debe estar plenamente demostrado dentro del proceso en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, pues el mismo no se presume en estos casos. En otras palabras, no basta simplemente citar uno de los presupuestos de la ley para que se

---

[22] Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B", Radicados **2014-00835-00** y **2014-00841-00**, J. 4° Administrativo de Descongestión Radicados **2014-00004-00** y **2013-00440-00**, J. 8° Administrativo del Circuito Radicado **2013-00622-00**, J. 9° Administrativo del Circuito, Radicados **2014-00026-00**, **2014-00065-00**, **2014-00260-00** y **2014-00605-00**, J. 31 Administrativo del Circuito Radicados **2014-00092-00**, **2014-00111-00**, **2013-00244-00**, **2014-00286-00**, **2014-00479-00**, **2014-00304-00** y **2014-00387-00**, J. 35 Administrativo del Circuito Radicados **2013-00056-00**, **2014-00467-00**, **2014-00467-00**, **2014-00152-00** y **2014-00399-00**, J. 37 Administrativo del Circuito Radicados **2013-00087-00**, **2013-00115-00**, **2013-00123-00**, **2013-00303-00**, **2013-00304-00**, **2013-00479-00** y **2013-00480-00**, entre muchos otros.

[23] Conc. artículo 8°. Ley 153 de 1887

[24] Consejo de Estado, Sección Tercera, Rad. 11001032600020030019-

configure la pretensión de repetición, debe acreditarse en debida forma la actuación dolosa o gravemente culposa del agente demandado.

Ahora bien, se advierte que existen serias y graves deficiencias respecto de las pruebas que ordenan a la entidad pública al pago de las diferencias de cesantías a favor de la Señora **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** que, en este caso, corresponde al **Auto de aprobación de la conciliación proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F"**, ya que tal documentos debió ser aportados con la demanda en originales según lo dispone el Art. 245 del C.G.P: "[...] *Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en donde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.*

En un asunto similar al que nos ocupa, la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó:

> *"Por tanto, las copias aportadas por la entidad demandante carecen de valor probatorio, porque, en tratándose de copias de documento público (...), para que puedan ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial, deben reunir las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra la diligencia de autenticación.*
>
> *En ese orden de ideas, se concluye que no está demostrado dentro del proceso el primero de los hechos generadores de la acción de repetición, cual es la existencia de una sentencia (o providencia) que condene al Estado a reparar patrimonialmente un daño antijurídico,* ***situación que por sí sola implica que se deben negar las pretensiones de la demanda, en tanto ello tiene incidencia en la acreditación de los otros requisitos (...)"***[25] (Resalto).

De esta manera, se reitera lo establecido en el Artículo 173 del Código General del Proceso que establece el deber por parte de los jueces de *abstenerse de ordenar la práctica de pruebas* que directamente, o por medio del derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que la solicite.

VI. PRUEBAS

Ruego al Señor Juez, decretar y tener como pruebas de mi parte, las siguientes:

VI.1 Documental

a) **Aporto** poder original con que actúo.

b) **Se oficie**

---

[25] Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sent. del 28 de

1. A la Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso y con base en sus *archivos*, se informe sobre los documentos, si los hubiere, que sirvieron de soporte para la erogación del *gasto*, por concepto de las **cesantías** anuales **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde 1990 hasta el año 2003;

2. Al Fondo Nacional del Ahorro FNA, para que con destino al proceso, se informe sobre los documentos remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, soportando los depósitos efectuados por el mismo a favor de **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde 1990 hasta el año 2003;

3. A la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se informe y remita copia de las resoluciones por medio de las cuales el Ministro de Relaciones Exteriores delegó, como ordenadores del gasto, entre otros, lo que es hoy la Dirección Administrativa y Financiera, el *pago* al Fondo Nacional del Ahorro de los depósitos de cesantías anuales del Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, por concepto de cesantías anuales desde 1990 hasta el año 2003

4. A la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se dé cuenta, individualizándolos de los demás funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quienes, como en este caso a la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** se ha demandado o dispuesto demandar en acción de repetición, por supuestamente haber omitido *notificar personalmente,* las cesantías anuales depositadas al Fondo Nacional del Ahorro, indicando los cargos y periodos por los que en cada caso se les llama a responder;

5. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que con destino al proceso se remita copia de las liquidaciones, **año por año**, de las cesantías de **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** desde 1990 hasta el año 2003 y particularmente en el periodo ***desde el 11 de diciembre de 2000 hasta el 11 de marzo de 2001- 31 de diciembre de 2001 al 7 de enero de 2002,*** como dice la demanda, conciliadas por un total de **$133.148.564** cuyo monto se pretende repetir sin razón de proporcionalidad alguna, entre otros, en contra de la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO**.

Procura esta prueba establecer que los hechos u omisiones, en relación con el deber que se dice *supuestamente* tenía la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** de notificar a **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** las cesantías por el periodo desde 1990 hasta el año 2003 habría sido cuanto más, una política sistemática y generalizada del Ministerio de Relaciones Exteriores, generadora, como tal, de un *error communis facit ius*, imputable a la *propia culpa* de la entidad.

6. A la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores o a quien en su defecto, corresponda, (art. 21 CPACA) a fin de que con destino al proceso de cuenta del lugar donde el Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** se desempeñaba al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior, en los años desde **1990 hasta el año 2003** a los que corresponden el pago que se le hizo de

las cesantías, por cuya cancelación se pretende repetir y se diga qué condiciones de traslado, si se encontraba en el exterior, tenían los demandados para notificarle personalmente allí las liquidaciones anuales de dicha prestación durante tales periodos, a que alude la demanda.

Con esta prueba pretendo demostrar la imposibilidad real que los demandados, y en este caso, la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** tenía para haber cumplido el deber que supuestamente tenían de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO** de las liquidaciones anuales de cesantías, encontrándose el mismo en el exterior, con mayor razón si esa era una condición extendida en todo el mundo, donde tenían asiento las distintas Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia.

7. A los siguientes Despachos Judiciales, para que a mi costa, y a fin de que por sus respectivas Secretarías se certifique la existencia de tales procesos instaurados por el **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES** en acciones de repetición, por la misma causa del que en este caso nos ocupa:

Pago realizado a:	Despacho Judicial	Radicado Proceso
Ignacio Enrique Ruiz	Consejo de Estado-Sección III-Sub B	**2014-00043-00**
Lilia Stella Cepeda Ulloa	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	**2014-00835-00**
Zaida Patricia Cristancho Guerrero	Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sec. III – Sub "B"	**2014-00841-00**
PATRICIA ROJAS RUBIO	J. 4° Admtivo de Descongestión	**2014-00004-00**
Fernando Alzate Donoso	J. 4° Admtivo de Descongestión	**2013-00440-00**
Enrique Antonio Celis Durán	J. 8° Administrativo del Circuito	**2013-00622-00**
Ana Cecilia Pulido Guerrero	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00026-00**
Francia Rodríguez Romero	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00065-00**
María del Pilar Gómez Valderrama	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00260-00**
Armando González Cortés	J. 9° Administrativo del Circuito	**2014-00605-00**
Eduardo Casas Acosta	J. 16 Administrativo del Circuito	**2013-00599-00**
María Nelly Tascón Maya	J. 18 Administrativo del Circuito	**2013-00511-00**
María Eugenia Beltrán de Chaparro	J. 19 Administrativo del Circuito	**2013-00128-00**
Miguel Camilo Ruiz Blanco	J. 19 Admtivo Descongestión Cto	**2014-00200-00**
Janeth Victoria Truque Rivera	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00188-00**
Raul Arturo Rincón Ardila	J. 19 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00037-00**
Henry Javier Arcos Muñoz	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00391-00**
Nidia Inés Aguirre Acevedo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00084-00**
María Inés Aldana Nieto	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00036-00**
Anyul Molina Suarez	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00211-00**
Mauricio Baquero Pardo	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00268-00**
Álvaro Eugenio Márquez Sarmiento	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00183-00**
Marcela Rodríguez Velandia	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00238-00**
Cruz Elena Mosquera Monteros	J. 22 Admitivo Descongestión Cto	**2014-00009-00**
María Victoria Eugenia Senior Pava	J. 23 Administrativo del Circuito	**2013-00392-00**
Margarita Eliana Manjarrez Herrera	J. 26 Administrativo del Circuito	**2013-00535-00**

Gladys Mireya Paéz Herrera	J. 27 Administrativo del Circuito	**2014-00314-00**
Luis Carlos Rodríguez Gutiérrez	J. 30 Administrativo del Circuito	**2013-00597-00**
Alberto Bula Bohórquez	J. 30 Administrativo del Circuito	**2014-00071-00**
María Helena Pastrana Pastrana	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00092-00**
María Inés Herreño Pinto	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00111-00**
María Smith Rueda Centeno	J. 31 Administrativo del Circuito	**2013-00244-00**
Juan Norberto Colorado Correa	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00286-00**
Amparo Flórez López	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00479-00**
Álvaro Sandoval Bernal	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00304-00**
Alicia Alejandra Alfaro Castillo	J. 31 Administrativo del Circuito	**2014-00387-00**
Pablo Antonio Rebolledo Schools	J. 32 Administrativo del Circuito	**2014-00118-00**
Alejandro Borda Rojas	J. 32 Administrativo del Circuito	**2013-00389-00**
Hector Montoya Añez	J. 32 Administrativo del Circuito	**2014-00153-00**
Carlos Rodríguez Bocanegra	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00316-00**
Miguel Ángel Rodríguez Melo	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00317-00**
Edwin Ostos Alfonso	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00383-00**
Mauricio González López	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00384-00**
Jaime Girón Duarte	J. 33 Administrativo del Circuito	**2013-00430-00**
Nacianceno López Restrepo	J. 34 Administrativo del Circuito	**2013-00279-00**
Álvaro Enrique Ayala Meléndez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2013-00056-00**
Carmen Estavana Zapateiro B.	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00467-00**
Fernando Salavarrieta García	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00152-00**
Marcela Ordóñez Fernández	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**
Gilberto Poveda Rodríguez	J. 35 Administrativo del Circuito	**2014-00399-00**
Fortuna Tuny Mugrabi Mugrabi	J. 36 Administrativo del Circuito	**2014-00462-00**
Alfonso de Jesús Vélez Rivas	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00087-00**
Fabio Emel Pedraza Pérez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00115-00**
Ana del Socorro Bornacelli Guerrero	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00123-00**
Javier Darío Higuera Ángel	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00303-00**
Carlos Arturo Morales López	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00304-00**
Daniel Ávila Camacho	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00479-00**
José Antonio Solarte Gómez	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00480-00**
Diego Felipe Cadena Montenegro	J. 37 Administrativo del Circuito	**2013-00271-00**
Amalia Rodriguez Fuque	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00290-00**
Victoria Eugenia Olga Pauwles T.	J. 37 Administrativo del Circuito	**2014-00268-00**
Blanca Stella Barrero Barrero	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00106-00**
María Consuelo Porras	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00117-00**
Concepción Concha Agudelo	J. 38 Administrativo del Circuito	**2014-00446-00**

VI. 2 Testimonios

a) Respetuosamente solicito que se llame a declarar en audiencia en la fecha y hora que para tales efectos señale el Despacho, sobre los hechos y omisiones que sean de su conocimiento, en relación con el diligenciamiento, liquidaciones y pago al Fondo Nacional de Ahorro FNA, en materia de liquidaciones anuales de *cesantías*, al Señor **ABELARDO RAMÍREZ GASCA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.

584
873

19'054.598 de Bogotá, con domicilio en la Carrera 14 No. 109 – 79 Apartamento 301, Edificio Caminos del Parque, en Bogotá.

b) Así mismo, con el fin de que deponga sobre la ejecución presupuestal en materia de cesantías anuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y del traslado de las mismas al FNA, con ocasión del desempeño que tuvo a su cargo la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Doctora **ARAMINTA BELTRÁN URREGO**, Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No. 9-03, en Bogotá.

c) A quienes fungieron como miembros del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores para que depongan en relación con las razones que tuvieron en consideración para llevarlos a determinar que hubo *culpa grave*, y demandar en repetición a la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** cuando se desempeñó como *Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales y como Coordinadora del Grupo Interno de Nóminas y Prestaciones* del Ministerio de Relaciones Exteriores en los periodos reseñados en la demanda, (Acta No. 229 del 22 de julio de 2013), consistente en haber omitido el deber que *supuestamente* tenía, según la demanda, de notificar personalmente al Señor **ANGELA MARÍA CORREA MORENO**, las liquidaciones anuales de las cesantías por valor de **$133.148.564** para cuyos efectos se le citará en el día y hora que señale su despacho, a través de la Dirección del Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Palacio de San Carlos - Calle 10a. No. 5-51, Edificio Luis López de Mesa - Carrera 6 No. 9-46, Edificio Marco Fidel Suárez - Carrera 5 No.9-03, en Bogotá y son:

1. Doctor EDWIN OSTOS ALFONSO, Director de Asuntos Jurídicos Internacionales (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

2. Doctor ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO, Director de Talento Humano; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

3. Doctora CLAUDIA LILIANA PERDOMO ESTRADA, Jefe Oficina Asesora Jurídica Interna (E); aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

4. Doctora MARTHA RUBY CUÉLLAR CALDERÓN, Coordinadora Grupo Interno de Gestión; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

5. Doctora LUZ ANDREA CORREDOR ARTEAGA, Abogada Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

585
804

6. Doctora HELGA VELASQUEZ AFANADOR, Abogada Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

7. Doctor JORGE ENRIQUE BARRIOS SUÁREZ, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

8. Doctor HUGO ARMANDO GRANJA ARCE, Abogado Contratista Coordinación Asuntos Legales; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

9. Doctor ANDRES LEONARDO MENDOZA PAREDES, Secretario Técnico (E) del Comité de Conciliación; aun al servicio en el Ministerio de Relaciones exteriores quien podrá ser citada en sus oficinas mediante comunicación dirigida a través del mismo.

VII. COSTAS

Sean a cargo de la demandante, LA NACION –MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- incluyendo *agencias en derecho*, toda vez que es manifiesta la falta de buena fe de dicha entidad al demandar en repetición a varios exfuncionarios, cuando no se cumplen a cabalidad todos los presupuestos establecidos de manera expresa por la Ley 678 de 2001 para el ejercicio de dicho medio de control, ya que en ningún caso existió una condena al Ministerio a reconocer una indemnización, sino que se le ordena efectuar la reliquidación de las cesantías, que es una prestación social de naturaleza laboral, en favor de un trabajadora por no habérsele incluido todos los factores salariales devengados en la planta externa, lo cual fue una política de dicho ministerio y no la decisión unilateral de los ahora demandados.

VIII. NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones, junto con mi representada la Doctora **PATRICIA ROJAS RUBIO** en la Secretaría de su Despacho; en mi oficina de la Carrera 15 No. 86A- 57 of. 501, teléfono 7027824, en Bogotá; y, a través de mi correo electrónico: cilinof@hotmail.com.

Señor Juez

Franklyn Liévano Fernández
C.C. No. 19.154.294 de Bogotá
T.P. No. 12.667 del C.S.J.

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
El documento fue presentado personalmente por Franklyn Liévano
Quien se identificó C.C. No. 19 154 294
T.P. No. 12667 Bogotá D.C. 08 AGO 2016
Responsable Centro de Servicios VHPP

586
875

Señor Juez
JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - Sección Tercera
E. S. D.

Proceso	:	Ordinario
Naturaleza	:	**Repetición**
Asunto	:	***Contestación de demanda***
Radicado	:	**No. 110013336722-2014-00109-00**
Demandante	:	**LA NACIÓN -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-**
Demandados	:	CLARA INÉZ VARGAS DE LOZADA *y otros*

PATRICIA ROJAS RUBIO, mayor y vecina de Cali, Valle del Cauca, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 31'170.344 de Palmira, Valle, con domicilio en la ciudad, a usted respetuosamente manifiesto que por medio de este escrito confiero **Poder Especial**, amplio y suficiente al Doctor **FRANKLYN LIEVANO FERNANDEZ**, mayor y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'154.294 de Bogotá, Abogado Titulado e inscrito con T.P. No. 12.667 del C.S.J. y oficinas en la Carrera 15 No. 86A - 57 Of. 501 teléfono 7027824, en la ciudad y correo electrónico: cilinof@hotmail.com, para que en mi nombre concurra, se **notifique** del *auto* admisorio de la demanda y me represente en este proceso hasta su terminación.

Mi apoderado dispondrá en el ejercicio de su gestión, de todas las facultades generales de ley, así como de las especiales de recibir, desistir, conciliar, transigir, sustituir y reasumir.

Ruego al Señor Juez reconocer y tener a mi apoderado en los términos de este escrito.

Del Señor Juez,

PATRICIA ROJAS RUBIO
C.C. No. 31'170.344 de Palmira, Valle

Acepto el poder conferido,

FRANKLYN LIÉVANO FERNÁNDEZ
C.C. No. 19'154.294 de Bogotá
T.P. No. 12.667 de C.S.J.

DILIGENCIA DE AUTENTICACION

En Santiago de Cali A: 14 JUL 2016

ante el suscrito Notaria Veintiuno (E) del Círculo de Santiago de Cali, compareció el S. Omar Rojas Ruiz quien se identificó con C.C. No. 31.170.344 expedida en Yumbo

manifestó que la firma que aparece en el presente documento fue puesta por él (ella) y que es la misma que usa y acostumbra en sus actos públicos y privados. En constancia firma esta diligencia.

El Compareciente

NOTARIA VEINTIUNA
Andrea Milena García V
NOTARIA ENCARGADA

RV: 11001-3336-722- 2014-00109-00 - CONTESTACIÓN DEMANDA

Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C.
<correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 22/02/2021 16:34

Para: Juzgado 61 Administrativo Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <jadmin61bta@notificacionesrj.gov.co>

1 archivos adjuntos (469 KB)

CONTESTACION DEMANDA - MARIA DEL PILAR RUBIO TALERO - JUZGADO 61.pdf;

Cordial saludo,

De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplicativo siglo XXl podrá confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo.

Atentamente,

Grupo de Correspondencia
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
Sede Judicial CAN
CAMS

De: Notificaciones Almanza <notificaciones@abogadosalmanza.com>
Enviado: lunes, 22 de febrero de 2021 4:26 p. m.
Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Johhan Meyer Tarazona Nieto <judicial@cancilleria.gov.co>
Asunto: 11001-3336-722- 2014-00109-00 - CONTESTACIÓN DEMANDA

SEÑORA JUEZA
JUZGADO SESENTA Y UNO (61) ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
DOCTORA EDITH ALARCÓN BERNAL

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DEMANDA

MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE REPETICIÓN
RADICADO: 11001-3336-722- 2014-00109-00
DEMANDANTE: NACIÓN- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DEMANDADO: CLARA INÉS VARGAS SILVA Y OTROS

Reciba un cordial saludo de Almanza Abogados S.A.S así como de la suscrita abogada por medio de la presente y de la manera más respetuosa me permito enviar contestación de la

demanda del proceso de la referencia.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente

ALMANZA
ABOGADOS

SEÑORA JUEZA
JUZGADO SESENTA Y UNO (61) ADMINISTRATIVO DE BOGOTA
DOCTORA EDITH ALARCON BERNAL

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DEMANDA
MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE REPETICIÓN
RADICADO: 11001-3336-722- **2014-00109-00**
DEMANDANTE: NACION- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DEMANDADO: CLARA INES VARGAS SILVA Y OTROS

CLAUDIA MILENA ALMANZA ALARCON identificada como aparece al pie de mi firma, obrando como CURADORA AD-LITEM de la señora **MARIA DEL PILAR RUBIO TALERO**, estando en el término correspondiente presento **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA** cuya finalidad es que se denieguen las pretensiones del medio de control. Lo hago en la siguiente forma:

I. A LAS PRETENSIONES:

Me opongo a las pretensiones, declaraciones y condenas respecto a mi defendida, habida consideración que en el ejercicio de las funciones públicas que le correspondieron desempeñar a la señora María Del Pilar Rubio Talero como Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales desde el 8 de noviembre de 1999 hasta el 8 de febrero de 2000 y desde el 11 de febrero de 2000 hasta el 11 de marzo de 2000; sus actuaciones se ajustaron en un todo a la normatividad vigente para la época en que ellos acontecieron y por tanto carecieron de la intención de causar daño (no se configuro una actuación dolosa ni gravemente culposa); por ende, no están dados los supuestos constitucionales y legales que constituye la acción de repetición, y no podrá ser declarado responsable patrimonialmente, ni condenado a pagar suma alguna.

II. A LOS HECHOS SUSTENTO DE LAS PRETENSIONES:

AL HECHO PRIMERO: Es cierto, se puede concluir del Decreto 274 de 2000.

AL HECHO SEGUNDO: No puedo aceptarlo, ni negarlo y me atendré a lo que se pruebe, aunque vale la pena aclarar que dentro de los mandatos legales que recoge la demanda, en ninguna parte se le asigna a mi representada la función específica de notificar el auxilio de cesantías a los funcionarios de éste Ministerio. Como tampoco se le asigna esta labor en la Resolución 0316 del 7 de febrero de 1997 o Manual Descriptivo de Funciones y Requisitos para su cargo.

AL HECHO TERCERO: Este hecho no tiene que ver con mi representada.

AL HECHO CUARTO: Este hecho no tiene que ver con mi representada.

AL HECHO QUINTO: Este hecho no tiene que ver con mi representada.

A LOS HECHOS SEXTO, SEPTIMO Y OCTAVO: Mi defendida no fue parte dentro del proceso que dio origen a la sentencia y que sirve de sustento a la acción de repetición, por lo que no le es oponible. Se debe tener en cuenta que esta acción tiene su origen en la ausencia de notificación de la resolución de reconocimiento de cesantías labor o función que no le competía a mi defendida.

AL HECHO NOVENO: No me consta. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO DECIMO: Es cierto.

III. FUNDAMENTOS LEGALES PARA LA INTERPOSICION DEL MEDIO DE CONTROL

La demandante presenta como fundamento legal el artículo 90 de la Constitución Política, el cual se proceden a analizar:

El artículo 90 de la Constitución Política fue cumplido en todo momento por la señora María Del Pilar Rubio Talero, por cuanto en su condición de servidora pública no infringió la ley, ni omitió, ni se extralimito en el ejercicio de sus funciones (art.6). Y si bien el Estado debería responder patrimonialmente por los daños antijurídicos, aquí lo que se dio por parte del fallador fue la interpretación sobre la aplicación de una disposición legal, puesto que, para que se configurara el daño antijurídico, debía precederlo una conducta dolosa o gravemente culposa del agente del Estado, sin que lo uno ni lo otro apareciera demostrado, ni en las actas del Comité de Conciliación, ni en la demanda.

IV. PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION

El fundamento legal de esta acción de repetición se encuentra en la Ley 678 de 2001 que permite a la Entidad Pública condenada en un proceso contencioso o en un acuerdo conciliatorio, repetir contra el servidor o ex servidor, que originó la condena por su conducta dolosa o gravemente culposa en el ejercicio de sus funciones.

Respecto de una responsabilidad patrimonial, figura constitucional y legal específicamente establecida con relación a las autoridades públicas, requiere necesariamente que se acreditase la existencia de dolo o culpa grave, y en ninguna parte se hace una exposición motivada del por qué eventualmente correspondería a la señora María Del Pilar Rubio Talero como Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales, responder patrimonialmente; por ende, no se le puede endilgar actuación u omisión negligente que infringiera la Constitución o las leyes o que hubiesen incurrido con inexcusable extralimitación en el ejercicio de sus funciones u omisión de sus deberes.

Es importante recordar que esta es una acción que debe promover el Estado cuando ha sido condenado a reparación patrimonial por daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. Es una acción judicial por la vía contencioso - administrativa instituida para responsabilizar civilmente tanto a los servidores públicos como a toda persona que actué en su nombre y, a la vez propende por la protección del patrimonio público.

Ninguno de los presupuestos exigidos por esta ley se demuestra y por el contrario mi representada actuó siempre con sujeción a la Constitución y la Ley y ante la ausencia de fundamento fáctico y jurídico no está llamada a prosperar la presente acción.

Y es que de acuerdo con la Ley 678 de 2012, son tres los requisitos para su viabilidad jurídica:

1. Que la entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativo a reparar un daño antijurídico causado.

2. Que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la actuación dolosa o gravemente culposa del funcionario o exfuncionario.

3. Que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia.

Y terminó recordando lo siguiente:

1. Es obligatorio el estudio de la procedencia del medio de control de repetición en todos los casos en que el ente público haya debido cancelar una obligación pecuniaria cuya fuente sea una sentencia o una conciliación, dentro de los términos de que trata la Ley.

2. Si en la sentencia o el acuerdo conciliatorio textualmente se señala que la conducta del agente público se enmarca en alguna de las presunciones de que tratan los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001, tendrá que recomendar el inicio de la acción de repetición pues no tiene facultad para desvirtuar las conclusiones a que ha llegado la autoridad jurisdiccional.

3. Si no se está en presencia de la situación descrita en el anterior párrafo, el Comité deberá examinar la conducta del agente público en los términos de la ley 678 de 2001 para determinar si actuó o no con dolo o culpa grave, y en consecuencia determinaría la procedencia o no de la acción de repetición.

4. El sólo hecho de que una entidad estatal resulte demandada o condenada no faculta al comité de conciliación para llamar en garantía o iniciar la acción de repetición, si no cuenta con suficientes elementos de juicio, serios y razonados que lo lleven al convencimiento de que el funcionario o exfuncionario actuó con dolo o culpa grave.

Dentro del expediente y en la misma sentencia que impuso condena a la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, no se evidencia actuación por parte de la señora María Del Pilar Rubio Talero que lleve al convencimiento de que actuó de manera dolosa o con culpa grave, pues la ausencia de la notificación que se le endilga a mi prohijada y en que se funda esta acción de repetición no le competía, ya que dentro del manual de funciones que se aporta como prueba, NO se le asigna la función de realizar la notificación de tales actos administrativos.

V. DAÑO ANTIJURÍDICO

Señala la demandante que, con el fallo descrito en la demanda, se canceló la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 133.148.563), que fueron

causados por la ausencia de la notificación de la liquidación del auxilio de cesantías a la señora Ángela María Correa Moreno pretendiendo que el funcionario involucrado responda patrimonialmente por los pagos a que fue condenado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y si bien se dice que en Acta No. 229 del 22 de julio de 2013 los miembros del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores decidieron por unanimidad iniciar la pretensión de repetición, no se demuestra la demostración de conducta dolosa o gravemente culposa, con lo que las motivaciones surgen de los pronunciamientos judiciales, mas no de un juicioso análisis de la conducta del servidor público demandado, de igual forma, en la sentencia no se fijó responsabilidad por dolo o culpa grave respecto de la actuación desarrollada por el servidor público.

El artículo 2° de la ley 678 de 2001 reza *"La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena,* conciliación u otra forma de terminación de un conflicto*. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial."*

Los artículos 5 y 6 de la misma ley enumeran las causas por las que se presume el dolo y la conducta gravemente culposa en los siguientes términos:

"*ARTÍCULO 5o. DOLO. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.*

Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.
2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.
3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.
4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.
5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

ARTÍCULO 6o. CULPA GRAVE. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. *Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.*
2. *Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.*
3. *Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.*
4. *Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal."*

Al confrontar las normas transcritas con el caso bajo examen no se hace una justificación de las razones por las cuales se inicia la acción de repetición, por el contrario en el líbelo introductorio, la demandante se limita a señalar que se reúnen los requisitos formales para la iniciación del proceso, pero no se expone la existencia de dolo o culpa grave del demandado, iniciándose la Acción de Repetición por el hecho de haber sido condenado el Estado a pagar una suma de dinero, sin dar cuenta de la conducta dolosa o culposa grave que se le endilga a mi defendida y fracturando el principio de la buena fe.

Precisamente la misma ley incluye presunciones de estirpe legal, siendo necesario que para quien resulte favorecido por ella debe probar los hechos constitutivos de la misma, supuestos fácticos que no se evidencia a través de ningún medio de prueba, ni en las actas del comité llevado a cabo por la parte demandante para agotar el requisito de procedibilidad de la presente acción, ni en la demanda que se contesta.

Sobre el particular la Corte Constitucional sostuvo en Sentencia C.285 de 2002:

> "*Ahora bien, el mismo constituyente estableció el deber del Estado de repetir contra el agente que generó la declaración de responsabilidad estatal pero claramente le dio a la responsabilidad personal de las autoridades públicas un fundamento diferente del que le imprimió a aquella. Así, sólo permitió la derivación de responsabilidad personal para el agente en los casos en que la declaración de responsabilidad estatal haya sido consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa. De ello se infiere con claridad que no existe identidad entre el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado y el fundamento de la responsabilidad personal de sus agentes pues en tanto que ella procede por la producción de un daño antijurídico, esta procede únicamente en aquellos eventos en que el daño antijurídico y la condena sobreviniente son consecuencia del obrar doloso o gravemente culposo del agente.*
>
> *"De esa manera, no se puede hacer una equiparación entre dos instituciones estrechamente relacionadas pero diferentes, como son la responsabilidad patrimonial del Estado y la responsabilidad personal de sus agentes, para afirmar que cuando el legislador enuncia los supuestos de culpa grave está restringiendo el fundamento que el constituyente le imprimió a la responsabilidad estatal pues como lo ha expuesto esta Corporación: "*
>
> *"Ahora bien, en los supuestos de responsabilidad estatal no generados en dolo o culpa grave, si bien hay lugar a declaración de tal responsabilidad, el Estado no se halla legitimado para repetir contra el funcionario. Pero en los supuestos de dolo o culpa grave no solo hay lugar a la declaración de responsabilidad estatal, sino que, además, el Estado tiene el deber de repetir contra el agente. Con todo, esta circunstancia no implica que se esté circunscribiendo el espacio de la responsabilidad estatal a contornos más estrechos que los previstos por el constituyente pues el legislador, aparte de respetar el fundamento constitucional de tal responsabilidad, ha enunciado los parámetros a los que remiten las múltiples hipótesis de culpa grave y lo ha hecho con estricto apego a la menor cobertura que el constituyente le fijó a la acción de repetición. Por ello, la Corte debe resaltar que la responsabilidad patrimonial del Estado se rige por la cláusula general contenida en el artículo 90 de la Carta y que ella constituye el fundamento de los distintos regímenes de responsabilidad establecidos en la ley y desarrollados por la jurisprudencia. "*

En el primer caso, la responsabilidad resulta de la antijuridicidad del daño; pero, frente a sus agentes esta antijuridicidad se deduce de la conducta de estos, vale decir, de que el comportamiento asumido por ellos y que dio lugar al daño, fue doloso o gravemente

culposo. En tal virtud, no puede deducirse responsabilidad patrimonial del funcionario o agente público, si no se establece que obró, por acción u omisión, constitutiva de dolo o culpa grave, y que lo hizo en ejercicio o con motivo de sus funciones. En consecuencia, si la responsabilidad del agente público no se configura en dichos términos resulta improcedente que el Estado ejerza la acción de repetición, porque ésta sólo se legitima en la medida en que éste sea condenado a reparar el daño y los agentes estatales resulten igualmente responsables. La sola existencia de una sentencia condenatoria en contra de la Entidad Pública demandante no genera responsabilidad de los servidores públicos involucrados en los actos que la generaron, porque la ley exige que se demuestre que la conducta de tales servidores públicos sea dolosa o gravemente culposa, presupuestos que no se acreditan en el presente evento.

VI. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

En el presente caso, es claro que, en relación con la responsabilidad patrimonial se requiere necesariamente acreditarse la existencia de dolo o culpa grave. Sin embargo, en el acápite no se hace una exposición motivada del por qué eventualmente correspondería a la señora María Del Pilar Rubio Talero como Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales, responder patrimonialmente, pues no se puede de manera alguna determinar que actuó de forma negligente, que con su proceder infringió la Constitución o las leyes o que incurrió con inexcusable extralimitación en el ejercicio de sus funciones u omisión de sus deberes, cuando dentro de sus funciones no se encontraba el de actuar en la manera que lo reclama el demandante.

Los comentarios y observaciones expuestos sobre el contenido de los diferentes acápites de la demanda, demuestran la ausencia de fundamentos ciertos para el ejercicio de este medio de control de repetición, en el entendido de que el elemento esencial de ésta es la existencia de “la conducta dolosa o gravemente culposa” de un agente del Estado, que trae como consecuencia un daño antijurídico imputable al Estado. Y esa conducta no la puede ni argumentar ni demostrar la parte actora con relación a mi defendida, porque sencillamente no existió.

VII. RAZONES DE DERECHO:

Las pretensiones de la parte actora se orientan al ejercicio de la acción de repetición para buscar una responsabilidad patrimonial, frente a lo cual procedo a expresar los argumentos por los cuales la conducta de mi defendida no puede enmarcarse en la hipótesis jurídica que contiene el artículo 90 de la Constitución Política.

El elemento esencial de la responsabilidad patrimonial del agente público, que allí se regula, es que la conducta de este agente, por acción u omisión, que trae como consecuencia una condena al Estado, haya sido “dolosa o gravemente culposa”.

Artículo 90 Constitución Política. - “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste.”

Con anterioridad a la Constitución, ya el artículo 77 del Código Contencioso Administrativo, adoptado por el Decreto Ley 01 de 1984, había consagrado:

“De los actos y hechos que dan lugar a responsabilidad. Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.”

Vale decir, que históricamente en nuestro ordenamiento jurídico, esta específica responsabilidad del empleado oficial /servidor público, tiene como elemento esencial el dolo o la culpa grave.

Reza el artículo 63 del Código Civil. - “*La ley distingue tres especies de culpa y descuido.*

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.

Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.”

De manera que, bajo este marco jurídico, el medio de control de Repetición en contra de un funcionario o ex funcionario, se estructura alrededor de tres presupuestos:

1. Que la entidad pública haya sido condenada.
2. Que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia.
3. Que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la actuación dolosa o gravemente culposa del funcionario o exfuncionario. (negrillas mías)

Es claro entonces, que se dieron los dos primeros presupuestos, pero no presentándose el último, la responsabilidad patrimonial del agente oficial no nace. En cuanto al primero, la señora María Del Pilar Rubio Talero no fue parte dentro del proceso que dio origen al fallo condenatorio. Y frente al tercer presupuesto, la actuación del agente público no fue ni dolosa, ni gravemente culposa.

Por conducta dolosa o gravemente culposa se entiende que es aquella que no deja lugar a duda alguna en relación con el efecto del querer hacer daño a otro, bien porque se actúe o deje de actuar con evidente negligencia o imprudencia o porque se haga evidente la voluntad de realizar un hecho antijurídico para dañar a otro, situación en que no incurrió mi defendida.

Decisión que ha sido reiterada por la Corte Constitucional, como se evidencia en sentencia C-285 de 2002 “…*la acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución y la Ley le otorgan a la administración pública para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido*

reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción contencioso administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado. Para que una entidad pública pueda repetir contra el funcionario o ex funcionario, es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los daños antijurídicos causados a un particular; (ii) que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo funcionario público; (iii) que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia."

De igual forma en sentencia C-430 de 2003, la Corte Constitucional dijo: "*Es evidente que el artículo 90 constitucional consagra una clara diferencia entre la responsabilidad del Estado, y la responsabilidad que igualmente es posible deducir a sus agentes. En el primer caso, como se ha visto, la responsabilidad resulta de la antijuricidad del daño, pero frente a sus agentes esa antijuridicidad se deduce de la conducta de éstos, vale decir, de que el comportamiento asumido por ellos y que dio lugar al daño, fue doloso o gravemente culposo, (…) en consecuencia si la responsabilidad del agente público no se configura en dichos términos, resulta improcedente que el Estado ejerza la acción de repetición porque ésta solo se legitima en la medida éste sea condenado a reparar el daño y los agentes estatales resulten igualmente responsables.".*

Pues bien, en el caso concreto, pretende la demandante, contra toda evidencia, endilgar una responsabilidad porque hubo una sentencia condenatoria, a consecuencia de una conducta omisiva por parte de la emplazada, pero se abstiene de analizar si en efecto hubo dolo o culpa grave, si se hubiera hecho el análisis que correspondía, no se habría intentado esta demanda, pues el medio de control que se ejerce carece de legitimidad porque, al contrario de lo que dice la demanda, no es el daño causado sino la acción u omisión dolosa o gravemente culposa, el elemento configurante de la procedencia de la acción.

VIII. EXCEPCIONES:

1. FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA

Por cuanto, tal como se ha dejado planteado a lo largo del presente escrito, no existió ninguna actuación dolosa o gravemente culposa de la señora María Del Pilar Rubio Talero para que sea llamada como parte pasiva en el ejercicio del medio de control de Repetición.

Aunado a lo anterior, se evidencia que la señora María Del Pilar Rubio Talero como Jefe de División de Capacitación de Bienestar Social y Prestaciones Sociales, no tenía la función de notificar personalmente las liquidaciones anuales de cesantías a la señora Ángela María Correa Moreno

2. EXCEPCIÓN OFICIOSA O GENERICA

Solicito a la señora Jueza de aplicación al artículo 282 del Código General del Proceso por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual reza: ***Resolución sobre excepciones.*** *En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una*

excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda (…).

IX. PETICIONES

De acuerdo con lo expuesto, solicito se sirva disponer que la señora María Del Pilar Rubio Talero, no es sujeto de las declaraciones y condenas que pretende la demanda y, por ende, sean negadas las pretensiones de la misma.

X. PRUEBAS:

Documentales:

Solicito se tenga como pruebas las que obran dentro del proceso

XI. NOTIFICACIONES:

Recibiré las notificaciones en la Calle 44 No. 53 – 30, tercer piso en la ciudad de Bogotá. Teléfono 3657580. Celular – WhatsApp: 3108580135. **Notificación electrónica:** notificaciones@abogadosalmanza.com.

De la señora Jueza, cordialmente



CLAUDIA MILENA ALMANZA ALARCÓN
C.C. No. 52.984.593 de Bogotá.
T.P. No. 169.960 del C.S.J.

RV: 11001-3336-722- 2014-00109-00 - CONTESTACIÓN DEMANDA

Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C.
<correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 23/02/2021 7:20

Para: Juzgado 61 Administrativo Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <jadmin61bta@notificacionesrj.gov.co>

1 archivos adjuntos (467 KB)

CONTESTACION DEMANDA - LUIS MIGUEL DOMINGUEZ GARCIA - JUZGADO 61.pdf;

Cordial saludo,

De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplicativo siglo XXl podrá confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo.

Atentamente,

Grupo de Correspondencia
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
Sede Judicial CAN
CAMS

De: Notificaciones Almanza <notificaciones@abogadosalmanza.com>
Enviado: lunes, 22 de febrero de 2021 4:14 p. m.
Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Johhan Meyer Tarazona Nieto <judicial@cancilleria.gov.co>
Asunto: 11001-3336-722- 2014-00109-00 - CONTESTACIÓN DEMANDA

SEÑORA JUEZA
JUZGADO SESENTA Y UNO (61) ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
DOCTORA EDITH ALARCÓN BERNAL

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DEMANDA

MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE REPETICIÓN
RADICADO: 11001-3336-722- 2014-00109-00
DEMANDANTE: NACIÓN- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DEMANDADO: CLARA INÉS VARGAS SILVA Y OTROS

Reciba un cordial saludo de Almanza Abogados S.A.S así como de la suscrita abogada por medio de la presente y de la manera más respetuosa me permito enviar contestación de la

demanda del proceso de la referencia.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente

ALMANZA
ABOGADOS

SEÑORA JUEZA
JUZGADO SESENTA Y UNO (61) ADMINISTRATIVO DE BOGOTA
DOCTORA EDITH ALARCON BERNAL

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DEMANDA
MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE REPETICIÓN
RADICADO: 11001-3336-722- **2014-00109-00**
DEMANDANTE: NACION- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DEMANDADO: CLARA INES VARGAS SILVA Y OTROS

CLAUDIA MILENA ALMANZA ALARCON identificada como aparece al pie de mi firma, obrando como CURADORA AD-LITEM del señor **LUIS MIGUEL DOMINGUEZ GARCIA**, estando en el término correspondiente presento **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA** cuya finalidad es que se denieguen las pretensiones del medio de control. Lo hago en la siguiente forma:

I. A LAS PRETENSIONES:

Me opongo a las pretensiones, declaraciones y condenas respecto a mi defendido, habida consideración que en el ejercicio de las funciones públicas que le correspondieron desempeñar al señor Luis Miguel Domínguez García como Subsecretario de Recursos Humanos desde el 24 de enero de 1995 hasta el 12 de diciembre de 1995; sus actuaciones se ajustaron en un todo a la normatividad vigente para la época en que ellos acontecieron y por tanto carecieron de la intención de causar daño (no se configuro una actuación dolosa ni gravemente culposa); por ende, no están dados los supuestos constitucionales y legales que constituye la acción de repetición, y no podrá ser declarado responsable patrimonialmente, ni condenado a pagar suma alguna.

II. A LOS HECHOS SUSTENTO DE LAS PRETENSIONES:

AL HECHO PRIMERO: Es cierto, se puede concluir del Decreto 274 de 2000.

AL HECHO SEGUNDO: No puedo aceptarlo, ni negarlo y me atendré a lo que se pruebe, aunque vale la pena aclarar que dentro de los mandatos legales que recoge la demanda, en ninguna parte se le asigna a mi representado la función específica de notificar el auxilio de cesantías a los funcionarios de éste Ministerio. Como tampoco se le asigna esta labor en la Resolución 0316 del 7 de febrero de 1997 o Manual Descriptivo de Funciones y Requisitos para su cargo.

AL HECHO TERCERO: Este hecho no tiene que ver con mi representado.

AL HECHO CUARTO: Este hecho no tiene que ver con mi representado.

AL HECHO QUINTO: Este hecho no tiene que ver con mi representado.

A LOS HECHOS SEXTO, SEPTIMO Y OCTAVO: Mi defendido no fue parte dentro del proceso que dio origen a la sentencia y que sirve de sustento a la acción de repetición, por lo que no le es oponible. Se debe tener en cuenta que esta acción tiene su origen en la ausencia de notificación de la resolución de reconocimiento de cesantías labor o función que no le competía a mi defendido.

AL HECHO NOVENO: No me consta. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO DECIMO: Es cierto.

III. FUNDAMENTOS LEGALES PARA LA INTERPOSICION DEL MEDIO DE CONTROL

La demandante presenta como fundamento legal el artículo 90 de la Constitución Política, el cual se proceden a analizar:

El artículo 90 de la Constitución Política fue cumplido en todo momento por el señor Luis Miguel Domínguez García, por cuanto en su condición de servidor público no infringió la ley, ni omitió, ni se extralimito en el ejercicio de sus funciones (art.6). Y si bien el Estado debería responder patrimonialmente por los daños antijurídicos, aquí lo que se dio por parte del fallador fue la interpretación sobre la aplicación de una disposición legal, puesto que, para que se configurara el daño antijurídico, debía precederlo una conducta dolosa o gravemente culposa del agente del Estado, sin que lo uno ni lo otro apareciera demostrado, ni en las actas del Comité de Conciliación, ni en la demanda.

IV. PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION

El fundamento legal de esta acción de repetición se encuentra en la Ley 678 de 2001 que permite a la Entidad Pública condenada en un proceso contencioso o en un acuerdo conciliatorio, repetir contra el servidor o ex servidor, que originó la condena por su conducta dolosa o gravemente culposa en el ejercicio de sus funciones.

Respecto de una responsabilidad patrimonial, figura constitucional y legal específicamente establecida con relación a las autoridades públicas, requiere necesariamente que se acreditase la existencia de dolo o culpa grave, y en ninguna parte se hace una exposición motivada del por qué eventualmente correspondería al señor Luis Miguel Domínguez García como Subsecretario de Recursos Humanos, responder patrimonialmente; por ende, no se le puede endilgar actuación u omisión negligente que infringiera la Constitución o las leyes o que hubiesen incurrido con inexcusable extralimitación en el ejercicio de sus funciones u omisión de sus deberes.

Es importante recordar que esta es una acción que debe promover el Estado cuando ha sido condenado a reparación patrimonial por daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. Es una acción judicial por la vía contencioso - administrativa instituida para responsabilizar civilmente tanto a los servidores públicos como a toda persona que actué en su nombre y, a la vez propende por la protección del patrimonio público. Ninguno de los presupuestos exigidos por esta ley se demuestra y por el contrario mi

representado actuó siempre con sujeción a la Constitución y la Ley y ante la ausencia de fundamento fáctico y jurídico no está llamada a prosperar la presente acción.

Y es que de acuerdo con la Ley 678 de 2012, son tres los requisitos para su viabilidad jurídica:

1. Que la entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativo a reparar un daño antijurídico causado.

2. Que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la actuación dolosa o gravemente culposa del funcionario o exfuncionario.

3. Que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia.

Y terminó recordando lo siguiente:

1. Es obligatorio el estudio de la procedencia del medio de control de repetición en todos los casos en que el ente público haya debido cancelar una obligación pecuniaria cuya fuente sea una sentencia o una conciliación, dentro de los términos de que trata la Ley.

2. Si en la sentencia o el acuerdo conciliatorio textualmente se señala que la conducta del agente público se enmarca en alguna de las presunciones de que tratan los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001, tendrá que recomendar el inicio de la acción de repetición pues no tiene facultad para desvirtuar las conclusiones a que ha llegado la autoridad jurisdiccional.

3. Si no se está en presencia de la situación descrita en el anterior párrafo, el Comité deberá examinar la conducta del agente público en los términos de la ley 678 de 2001 para determinar si actuó o no con dolo o culpa grave, y en consecuencia determinaría la procedencia o no de la acción de repetición.

4. El sólo hecho de que una entidad estatal resulte demandada o condenada no faculta al comité de conciliación para llamar en garantía o iniciar la acción de repetición, si no cuenta con suficientes elementos de juicio, serios y razonados que lo lleven al convencimiento de que el funcionario o exfuncionario actuó con dolo o culpa grave.

Dentro del expediente y en la misma sentencia que impuso condena a la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, no se evidencia actuación por parte del señor Luis Miguel Domínguez García que lleve al convencimiento de que actuó de manera dolosa o con culpa grave, pues la ausencia de la notificación que se le endilga a mi prohijado y en que se funda esta acción de repetición no le competía, ya que dentro del manual de funciones que se aporta como prueba, NO se le asigna la función de realizar la notificación de tales actos administrativos.

V. DAÑO ANTIJURÍDICO

Señala la demandante que, con el fallo descrito en la demanda, se canceló la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 133.148.563), que fueron causados por la ausencia de la notificación de la liquidación del auxilio de cesantías a la

señora Ángela María Correa Moreno pretendiendo que el funcionario involucrado responda patrimonialmente por los pagos a que fue condenado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y si bien se dice que en Acta No. 229 del 22 de julio de 2013 los miembros del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores decidieron por unanimidad iniciar la pretensión de repetición, no se demuestra la demostración de conducta dolosa o gravemente culposa, con lo que las motivaciones surgen de los pronunciamientos judiciales, mas no de un juicioso análisis de la conducta del servidor público demandado, de igual forma, en la sentencia no se fijó responsabilidad por dolo o culpa grave respecto de la actuación desarrollada por el servidor público.

El artículo 2° de la ley 678 de 2001 reza *"La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena,* conciliación u otra forma de terminación de un conflicto*. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial."*

Los artículos 5 y 6 de la misma ley enumeran las causas por las que se presume el dolo y la conducta gravemente culposa en los siguientes términos:

> "*ARTÍCULO 5o. DOLO. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.*
>
> *Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:*
>
> *1. Obrar con desviación de poder.*
> *2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.*
> *3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.*
> *4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.*
> *5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.*
>
> *ARTÍCULO 6o. CULPA GRAVE. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.*
>
> *Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:*
>
> 1. *Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.*
> 2. *Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.*
> 3. *Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.*
> 4. *Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal."*

Al confrontar las normas transcritas con el caso bajo examen no se hace una justificación de las razones por las cuales se inicia la acción de repetición, por el

contrario en el líbelo introductorio, la demandante se limita a señalar que se reúnen los requisitos formales para la iniciación del proceso, pero no se expone la existencia de dolo o culpa grave del demandado, iniciándose la Acción de Repetición por el hecho de haber sido condenado el Estado a pagar una suma de dinero, sin dar cuenta de la conducta dolosa o culposa grave que se le endilga a mi defendido y fracturando el principio de la buena fe.

Precisamente la misma ley incluye presunciones de estirpe legal, siendo necesario que para quien resulte favorecido por ella debe probar los hechos constitutivos de la misma, supuestos fácticos que no se evidencia a través de ningún medio de prueba, ni en las actas del comité llevado a cabo por la parte demandante para agotar el requisito de procedibilidad de la presente acción, ni en la demanda que se contesta.

Sobre el particular la Corte Constitucional sostuvo en Sentencia C.285 de 2002:

> "*Ahora bien, el mismo constituyente estableció el deber del Estado de repetir contra el agente que generó la declaración de responsabilidad estatal pero claramente le dio a la responsabilidad personal de las autoridades públicas un fundamento diferente del que le imprimió a aquella. Así, sólo permitió la derivación de responsabilidad personal para el agente en los casos en que la declaración de responsabilidad estatal haya sido consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa. De ello se infiere con claridad que no existe identidad entre el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado y el fundamento de la responsabilidad personal de sus agentes pues en tanto que ella procede por la producción de un daño antijurídico, esta procede únicamente en aquellos eventos en que el daño antijurídico y la condena sobreviniente son consecuencia del obrar doloso o gravemente culposo del agente.*
>
> *"De esa manera, no se puede hacer una equiparación entre dos instituciones estrechamente relacionadas pero diferentes, como son la responsabilidad patrimonial del Estado y la responsabilidad personal de sus agentes, para afirmar que cuando el legislador enuncia los supuestos de culpa grave está restringiendo el fundamento que el constituyente le imprimió a la responsabilidad estatal pues como lo ha expuesto esta Corporación: "*
>
> *"Ahora bien, en los supuestos de responsabilidad estatal no generados en dolo o culpa grave, si bien hay lugar a declaración de tal responsabilidad, el Estado no se halla legitimado para repetir contra el funcionario. Pero en los supuestos de dolo o culpa grave no solo hay lugar a la declaración de responsabilidad estatal, sino que, además, el Estado tiene el deber de repetir contra el agente. Con todo, esta circunstancia no implica que se esté circunscribiendo el espacio de la responsabilidad estatal a contornos más estrechos que los previstos por el constituyente pues el legislador, aparte de respetar el fundamento constitucional de tal responsabilidad, ha enunciado los parámetros a los que remiten las múltiples hipótesis de culpa grave y lo ha hecho con estricto apego a la menor cobertura que el constituyente le fijó a la acción de repetición. Por ello, la Corte debe resaltar que la responsabilidad patrimonial del Estado se rige por la cláusula general contenida en el artículo 90 de la Carta y que ella constituye el fundamento de los distintos regímenes de responsabilidad establecidos en la ley y desarrollados por la jurisprudencia. "*

En el primer caso, la responsabilidad resulta de la antijuridicidad del daño; pero, frente a sus agentes esta antijuridicidad se deduce de la conducta de estos, vale decir, de que el comportamiento asumido por ellos y que dio lugar al daño, fue doloso o gravemente culposo. En tal virtud, no puede deducirse responsabilidad patrimonial del funcionario o agente público, si no se establece que obró, por acción u omisión, constitutiva de dolo o

culpa grave, y que lo hizo en ejercicio o con motivo de sus funciones. En consecuencia, si la responsabilidad del agente público no se configura en dichos términos resulta improcedente que el Estado ejerza la acción de repetición, porque ésta sólo se legitima en la medida en que éste sea condenado a reparar el daño y los agentes estatales resulten igualmente responsables. La sola existencia de una sentencia condenatoria en contra de la Entidad Pública demandante no genera responsabilidad de los servidores públicos involucrados en los actos que la generaron, porque la ley exige que se demuestre que la conducta de tales servidores públicos sea dolosa o gravemente culposa, presupuestos que no se acreditan en el presente evento.

VI. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

En el presente caso, es claro que, en relación con la responsabilidad patrimonial se requiere necesariamente acreditarse la existencia de dolo o culpa grave. Sin embargo, en el acápite no se hace una exposición motivada del por qué eventualmente correspondería al señor Luis Miguel Domínguez García como Subsecretario de Recursos Humanos, responder patrimonialmente, pues no se puede de manera alguna determinar que actuó de forma negligente, que con su proceder infringió la Constitución o las leyes o que incurrió con inexcusable extralimitación en el ejercicio de sus funciones u omisión de sus deberes, cuando dentro de sus funciones no se encontraba el de actuar en la manera que lo reclama el demandante.

Los comentarios y observaciones expuestos sobre el contenido de los diferentes acápites de la demanda, demuestran la ausencia de fundamentos ciertos para el ejercicio de este medio de control de repetición, en el entendido de que el elemento esencial de ésta es la existencia de “la conducta dolosa o gravemente culposa” de un agente del Estado, que trae como consecuencia un daño antijurídico imputable al Estado. Y esa conducta no la puede ni argumentar ni demostrar la parte actora con relación a mi defendido, porque sencillamente no existió.

VII. RAZONES DE DERECHO:

Las pretensiones de la parte actora se orientan al ejercicio de la acción de repetición para buscar una responsabilidad patrimonial, frente a lo cual procedo a expresar los argumentos por los cuales la conducta de mi defendido no puede enmarcarse en la hipótesis jurídica que contiene el artículo 90 de la Constitución Política.

El elemento esencial de la responsabilidad patrimonial del agente público, que allí se regula, es que la conducta de este agente, por acción u omisión, que trae como consecuencia una condena al Estado, haya sido “dolosa o gravemente culposa”.

Artículo 90 Constitución Política. - “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste.”

Con anterioridad a la Constitución, ya el artículo 77 del Código Contencioso Administrativo, adoptado por el Decreto Ley 01 de 1984, había consagrado:

“De los actos y hechos que dan lugar a responsabilidad. Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la nación y a las entidades territoriales o

descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones."

Vale decir, que históricamente en nuestro ordenamiento jurídico, esta específica responsabilidad del empleado oficial /servidor público, tiene como elemento esencial el dolo o la culpa grave.

Reza el artículo 63 del Código Civil. - "*La ley distingue tres especies de culpa y descuido.*

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.

Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro."

De manera que, bajo este marco jurídico, el medio de control de Repetición en contra de un funcionario o ex funcionario, se estructura alrededor de tres presupuestos:

1. Que la entidad pública haya sido condenada.
2. Que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia.
3. Que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la actuación dolosa o gravemente culposa del funcionario o exfuncionario. (negrillas mías)

Es claro entonces, que se dieron los dos primeros presupuestos, pero no presentándose el último, la responsabilidad patrimonial del agente oficial no nace. En cuanto al primero, el señor Luis Miguel Domínguez García no fue parte dentro del proceso que dio origen al fallo condenatorio. Y frente al tercer presupuesto, la actuación del agente público no fue ni dolosa, ni gravemente culposa.

Por conducta dolosa o gravemente culposa se entiende que es aquella que no deja lugar a duda alguna en relación con el efecto del querer hacer daño a otro, bien porque se actúe o deje de actuar con evidente negligencia o imprudencia o porque se haga evidente la voluntad de realizar un hecho antijurídico para dañar a otro, situación en que no incurrió mi defendido.

Decisión que ha sido reiterada por la Corte Constitucional, como se evidencia en sentencia C-285 de 2002 "…*la acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución y la Ley le otorgan a la administración pública para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción contencioso administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado. Para que*

una entidad pública pueda repetir contra el funcionario o ex funcionario, es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los daños antijurídicos causados a un particular; (ii) que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo funcionario público; (iii) que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia."

De igual forma en sentencia C-430 de 2003, la Corte Constitucional dijo: "*Es evidente que el artículo 90 constitucional consagra una clara diferencia entre la responsabilidad del Estado, y la responsabilidad que igualmente es posible deducir a sus agentes. En el primer caso, como se ha visto, la responsabilidad resulta de la antijuricidad del daño, pero frente a sus agentes esa antijuridicidad se deduce de la conducta de éstos, vale decir, de que el comportamiento asumido por ellos y que dio lugar al daño, fue doloso o gravemente culposo, (…) en consecuencia si la responsabilidad del agente público no se configura en dichos términos, resulta improcedente que el Estado ejerza la acción de repetición porque ésta solo se legitima en la medida éste sea condenado a reparar el daño y los agentes estatales resulten igualmente responsables.".*

Pues bien, en el caso concreto, pretende la demandante, contra toda evidencia, endilgar una responsabilidad porque hubo una sentencia condenatoria, a consecuencia de una conducta omisiva por parte de la emplazada, pero se abstiene de analizar si en efecto hubo dolo o culpa grave, si se hubiera hecho el análisis que correspondía, no se habría intentado esta demanda, pues el medio de control que se ejerce carece de legitimidad porque, al contrario de lo que dice la demanda, no es el daño causado sino la acción u omisión dolosa o gravemente culposa, el elemento configurante de la procedencia de la acción.

VIII. EXCEPCIONES:

1. FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA

Por cuanto, tal como se ha dejado planteado a lo largo del presente escrito, no existió ninguna actuación dolosa o gravemente culposa del señor Luis Miguel Domínguez García para que sea llamado como parte pasiva en el ejercicio del medio de control de Repetición.

Aunado a lo anterior, se evidencia que el señor Luis Miguel Domínguez García como Subsecretario de Recursos Humanos, no tenía la función de notificar personalmente las liquidaciones anuales de cesantías a la señora Ángela María Correa Moreno

2. EXCEPCIÓN OFICIOSA O GENERICA

Solicito a la señora Jueza de aplicación al artículo 282 del Código General del Proceso por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual reza: ***Resolución sobre excepciones.*** *En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda (…).*

IX. PETICIONES

De acuerdo con lo expuesto, solicito se sirva disponer que el señor Luis Miguel Domínguez García, no es sujeto de las declaraciones y condenas que pretende la demanda y por ende, sean negadas las pretensiones de la misma.

X. PRUEBAS:

Documentales:

Solicito se tenga como pruebas las que obran dentro del proceso

XI. NOTIFICACIONES:

Recibiré las notificaciones en la Calle 44 No. 53 – 30, tercer piso en la ciudad de Bogotá. Teléfono 3657580. Celular – WhatsApp: 3108580135. **Notificación electrónica:** notificaciones@abogadosalmanza.com.

De la señora Jueza, cordialmente



CLAUDIA MILENA ALMANZA ALARCÓN
C.C. No. 52.984.593 de Bogotá.
T.P. No. 169.960 del C.S.J.

RV: 11001-3336-722- 2014-00109-00 - CONTESTACIÓN DEMANDA

Correspondencia Sede Judicial Can - Bogotá - Bogotá D.C.
<correscanbtahistorico@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 22/02/2021 16:44

Para: Juzgado 61 Administrativo Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <jadmin61bta@notificacionesrj.gov.co>

Cordial saludo,

De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplicativo siglo XXl podrá confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo.

Atentamente,

Grupo de Correspondencia
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
Sede Judicial CAN
CAMS

De: Notificaciones Almanza <notificaciones@abogadosalmanza.com>
Enviado: lunes, 22 de febrero de 2021 4:37 p. m.
Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Johhan Meyer Tarazona Nieto <judicial@cancilleria.gov.co>
Asunto: 11001-3336-722- 2014-00109-00 - CONTESTACIÓN DEMANDA

SEÑORA JUEZA
JUZGADO SESENTA Y UNO (61) ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
DOCTORA EDITH ALARCÓN BERNAL

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DEMANDA

MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE REPETICIÓN
RADICADO: 11001-3336-722- 2014-00109-00
DEMANDANTE: NACIÓN- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DEMANDADO: CLARA INÉS VARGAS SILVA Y OTROS

Reciba un cordial saludo de Almanza Abogados S.A.S así como de la suscrita abogada por medio de la presente y de la manera más respetuosa me permito enviar contestación de la demanda del proceso de la referencia.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente

--



SEÑORA JUEZA
JUZGADO SESENTA Y UNO (61) ADMINISTRATIVO DE BOGOTA
DOCTORA EDITH ALARCON BERNAL

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DEMANDA
MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE REPETICIÓN
RADICADO: 11001-3336-722- **2014-00109-00**
DEMANDANTE: NACION- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DEMANDADO: CLARA INES VARGAS SILVA Y OTROS

CLAUDIA MILENA ALMANZA ALARCON identificada como aparece al pie de mi firma, obrando como CURADORA AD-LITEM de la señora **MARIA HORTENSIA COLMENARES FACCINI**, estando en el término correspondiente presento **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA** cuya finalidad es que se denieguen las pretensiones del medio de control. Lo hago en la siguiente forma:

I. A LAS PRETENSIONES:

Me opongo a las pretensiones, declaraciones y condenas respecto a mi defendida, habida consideración que en el ejercicio de las funciones públicas que le correspondieron desempeñar a la señora María Hortensia Colmenares Faccini como Directora General de Desarrollo de Talento Humano – Directora de Talento Humano desde el 9 de septiembre de 1999 hasta el 7 de agosto de 2002; sus actuaciones se ajustaron en un todo a la normatividad vigente para la época en que ellos acontecieron y por tanto carecieron de la intención de causar daño (no se configuro una actuación dolosa ni gravemente culposa); por ende, no están dados los supuestos constitucionales y legales que constituye la acción de repetición, y no podrá ser declarado responsable patrimonialmente, ni condenado a pagar suma alguna.

II. A LOS HECHOS SUSTENTO DE LAS PRETENSIONES:

AL HECHO PRIMERO: Es cierto, se puede concluir del Decreto 274 de 2000.

AL HECHO SEGUNDO: No puedo aceptarlo, ni negarlo y me atendré a lo que se pruebe, aunque vale la pena aclarar que dentro de los mandatos legales que recoge la demanda, en ninguna parte se le asigna a mi representada la función específica de notificar el auxilio de cesantías a los funcionarios de éste Ministerio. Como tampoco se le asigna esta labor en la Resolución 0316 del 7 de febrero de 1997 o Manual Descriptivo de Funciones y Requisitos para su cargo.

AL HECHO TERCERO: Este hecho no tiene que ver con mi representada.

AL HECHO CUARTO: Este hecho no tiene que ver con mi representada.

AL HECHO QUINTO: Este hecho no tiene que ver con mi representada.

A LOS HECHOS SEXTO, SEPTIMO Y OCTAVO: Mi defendida no fue parte dentro del proceso que dio origen a la sentencia y que sirve de sustento a la acción de repetición, por lo que no le es oponible. Se debe tener en cuenta que esta acción tiene su origen en la ausencia de notificación de la resolución de reconocimiento de cesantías labor o función que no le competía a mi defendida.

AL HECHO NOVENO: No me consta. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO DECIMO: Es cierto.

III. FUNDAMENTOS LEGALES PARA LA INTERPOSICION DEL MEDIO DE CONTROL

La demandante presenta como fundamento legal el artículo 90 de la Constitución Política, el cual se proceden a analizar:

El artículo 90 de la Constitución Política fue cumplido en todo momento por la señora María Hortensia Colmenares Faccini, por cuanto en su condición de servidora pública no infringió la ley, ni omitió, ni se extralimito en el ejercicio de sus funciones (art.6). Y si bien el Estado debería responder patrimonialmente por los daños antijurídicos, aquí lo que se dio por parte del fallador fue la interpretación sobre la aplicación de una disposición legal, puesto que, para que se configurara el daño antijurídico, debía precederlo una conducta dolosa o gravemente culposa del agente del Estado, sin que lo uno ni lo otro apareciera demostrado, ni en las actas del Comité de Conciliación, ni en la demanda.

IV. PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION

El fundamento legal de esta acción de repetición se encuentra en la Ley 678 de 2001 que permite a la Entidad Pública condenada en un proceso contencioso o en un acuerdo conciliatorio, repetir contra el servidor o ex servidor, que originó la condena por su conducta dolosa o gravemente culposa en el ejercicio de sus funciones.

Respecto de una responsabilidad patrimonial, figura constitucional y legal específicamente establecida con relación a las autoridades públicas, requiere necesariamente que se acreditase la existencia de dolo o culpa grave, y en ninguna parte se hace una exposición motivada del por qué eventualmente correspondería a la señora María Hortensia Colmenares Faccini como Directora General de Desarrollo de Talento Humano – Directora de Talento Humano, responder patrimonialmente; por ende, no se le puede endilgar actuación u omisión negligente que infringiera la Constitución o las leyes o que hubiesen incurrido con inexcusable extralimitación en el ejercicio de sus funciones u omisión de sus deberes.

Es importante recordar que esta es una acción que debe promover el Estado cuando ha sido condenado a reparación patrimonial por daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. Es una acción judicial por la vía contencioso - administrativa instituida para responsabilizar civilmente tanto a los servidores públicos como a toda persona que actué en su nombre y, a la vez propende por la protección del patrimonio público. Ninguno de los presupuestos exigidos por esta ley se demuestra y por el contrario mi

representada actuó siempre con sujeción a la Constitución y la Ley y ante la ausencia de fundamento fáctico y jurídico no está llamada a prosperar la presente acción.

Y es que de acuerdo con la Ley 678 de 2012, son tres los requisitos para su viabilidad jurídica:

1. Que la entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativo a reparar un daño antijurídico causado.

2. Que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la actuación dolosa o gravemente culposa del funcionario o exfuncionario.

3. Que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia.

Y terminó recordando lo siguiente:

1. Es obligatorio el estudio de la procedencia del medio de control de repetición en todos los casos en que el ente público haya debido cancelar una obligación pecuniaria cuya fuente sea una sentencia o una conciliación, dentro de los términos de que trata la Ley.

2. Si en la sentencia o el acuerdo conciliatorio textualmente se señala que la conducta del agente público se enmarca en alguna de las presunciones de que tratan los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001, tendrá que recomendar el inicio de la acción de repetición pues no tiene facultad para desvirtuar las conclusiones a que ha llegado la autoridad jurisdiccional.

3. Si no se está en presencia de la situación descrita en el anterior párrafo, el Comité deberá examinar la conducta del agente público en los términos de la ley 678 de 2001 para determinar si actuó o no con dolo o culpa grave, y en consecuencia determinaría la procedencia o no de la acción de repetición.

4. El sólo hecho de que una entidad estatal resulte demandada o condenada no faculta al comité de conciliación para llamar en garantía o iniciar la acción de repetición, si no cuenta con suficientes elementos de juicio, serios y razonados que lo lleven al convencimiento de que el funcionario o exfuncionario actuó con dolo o culpa grave.

Dentro del expediente y en la misma sentencia que impuso condena a la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, no se evidencia actuación por parte de la señora María Hortensia Colmenares Faccini que lleve al convencimiento de que actuó de manera dolosa o con culpa grave, pues la ausencia de la notificación que se le endilga a mi prohijada y en que se funda esta acción de repetición no le competía, ya que dentro del manual de funciones que se aporta como prueba, NO se le asigna la función de realizar la notificación de tales actos administrativos.

V. DAÑO ANTIJURÍDICO

Señala la demandante que, con el fallo descrito en la demanda, se canceló la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 133.148.563), que fueron causados por la ausencia de la notificación de la liquidación del auxilio de cesantías a la

señora Ángela María Correa Moreno pretendiendo que el funcionario involucrado responda patrimonialmente por los pagos a que fue condenado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y si bien se dice que en Acta No. 229 del 22 de julio de 2013 los miembros del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores decidieron por unanimidad iniciar la pretensión de repetición, no se demuestra la demostración de conducta dolosa o gravemente culposa, con lo que las motivaciones surgen de los pronunciamientos judiciales, mas no de un juicioso análisis de la conducta del servidor público demandado, de igual forma, en la sentencia no se fijó responsabilidad por dolo o culpa grave respecto de la actuación desarrollada por el servidor público.

El artículo 2° de la ley 678 de 2001 reza *"La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena,* conciliación u otra forma de terminación de un conflicto*. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial."*

Los artículos 5 y 6 de la misma ley enumeran las causas por las que se presume el dolo y la conducta gravemente culposa en los siguientes términos:

"*ARTÍCULO 5o. DOLO. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.*

Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.
2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.
3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.
4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.
5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

ARTÍCULO 6o. CULPA GRAVE. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. *Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.*
2. *Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.*
3. *Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.*
4. *Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal."*

Al confrontar las normas transcritas con el caso bajo examen no se hace una justificación de las razones por las cuales se inicia la acción de repetición, por el contrario en el líbelo introductorio, la demandante se limita a señalar que se reúnen los requisitos formales para la iniciación del proceso, pero no se expone la existencia de dolo o culpa grave del demandado, iniciándose la Acción de Repetición por el hecho de haber sido condenado el Estado a pagar una suma de dinero, sin dar cuenta de la conducta dolosa o culposa grave que se le endilga a mi defendida y fracturando el principio de la buena fe.

Precisamente la misma ley incluye presunciones de estirpe legal, siendo necesario que para quien resulte favorecido por ella debe probar los hechos constitutivos de la misma, supuestos fácticos que no se evidencia a través de ningún medio de prueba, ni en las actas del comité llevado a cabo por la parte demandante para agotar el requisito de procedibilidad de la presente acción, ni en la demanda que se contesta.

Sobre el particular la Corte Constitucional sostuvo en Sentencia C.285 de 2002:

> "*Ahora bien, el mismo constituyente estableció el deber del Estado de repetir contra el agente que generó la declaración de responsabilidad estatal pero claramente le dio a la responsabilidad personal de las autoridades públicas un fundamento diferente del que le imprimió a aquella. Así, sólo permitió la derivación de responsabilidad personal para el agente en los casos en que la declaración de responsabilidad estatal haya sido consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa. De ello se infiere con claridad que no existe identidad entre el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado y el fundamento de la responsabilidad personal de sus agentes pues en tanto que ella procede por la producción de un daño antijurídico, esta procede únicamente en aquellos eventos en que el daño antijurídico y la condena sobreviniente son consecuencia del obrar doloso o gravemente culposo del agente.*
>
> *"De esa manera, no se puede hacer una equiparación entre dos instituciones estrechamente relacionadas pero diferentes, como son la responsabilidad patrimonial del Estado y la responsabilidad personal de sus agentes, para afirmar que cuando el legislador enuncia los supuestos de culpa grave está restringiendo el fundamento que el constituyente le imprimió a la responsabilidad estatal pues como lo ha expuesto esta Corporación: "*
>
> *"Ahora bien, en los supuestos de responsabilidad estatal no generados en dolo o culpa grave, si bien hay lugar a declaración de tal responsabilidad, el Estado no se halla legitimado para repetir contra el funcionario. Pero en los supuestos de dolo o culpa grave no solo hay lugar a la declaración de responsabilidad estatal, sino que, además, el Estado tiene el deber de repetir contra el agente. Con todo, esta circunstancia no implica que se esté circunscribiendo el espacio de la responsabilidad estatal a contornos más estrechos que los previstos por el constituyente pues el legislador, aparte de respetar el fundamento constitucional de tal responsabilidad, ha enunciado los parámetros a los que remiten las múltiples hipótesis de culpa grave y lo ha hecho con estricto apego a la menor cobertura que el constituyente le fijó a la acción de repetición. Por ello, la Corte debe resaltar que la responsabilidad patrimonial del Estado se rige por la cláusula general contenida en el artículo 90 de la Carta y que ella constituye el fundamento de los distintos regímenes de responsabilidad establecidos en la ley y desarrollados por la jurisprudencia. "*

En el primer caso, la responsabilidad resulta de la antijuridicidad del daño; pero, frente a sus agentes esta antijuridicidad se deduce de la conducta de estos, vale decir, de que el comportamiento asumido por ellos y que dio lugar al daño, fue doloso o gravemente

culposo. En tal virtud, no puede deducirse responsabilidad patrimonial del funcionario o agente público, si no se establece que obró, por acción u omisión, constitutiva de dolo o culpa grave, y que lo hizo en ejercicio o con motivo de sus funciones. En consecuencia, si la responsabilidad del agente público no se configura en dichos términos resulta improcedente que el Estado ejerza la acción de repetición, porque ésta sólo se legitima en la medida en que éste sea condenado a reparar el daño y los agentes estatales resulten igualmente responsables. La sola existencia de una sentencia condenatoria en contra de la Entidad Pública demandante no genera responsabilidad de los servidores públicos involucrados en los actos que la generaron, porque la ley exige que se demuestre que la conducta de tales servidores públicos sea dolosa o gravemente culposa, presupuestos que no se acreditan en el presente evento.

VI. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

En el presente caso, es claro que, en relación con la responsabilidad patrimonial se requiere necesariamente acreditarse la existencia de dolo o culpa grave. Sin embargo, en el acápite no se hace una exposición motivada del por qué eventualmente correspondería a la señora María Hortensia Colmenares Faccini como Directora General de Desarrollo de Talento Humano – Directora de Talento Humano, responder patrimonialmente, pues no se puede de manera alguna determinar que actuó de forma negligente, que con su proceder infringió la Constitución o las leyes o que incurrió con inexcusable extralimitación en el ejercicio de sus funciones u omisión de sus deberes, cuando dentro de sus funciones no se encontraba el de actuar en la manera que lo reclama el demandante.

Los comentarios y observaciones expuestos sobre el contenido de los diferentes acápites de la demanda, demuestran la ausencia de fundamentos ciertos para el ejercicio de este medio de control de repetición, en el entendido de que el elemento esencial de ésta es la existencia de “la conducta dolosa o gravemente culposa” de un agente del Estado, que trae como consecuencia un daño antijurídico imputable al Estado. Y esa conducta no la puede ni argumentar ni demostrar la parte actora con relación a mi defendida, porque sencillamente no existió.

VII. RAZONES DE DERECHO:

Las pretensiones de la parte actora se orientan al ejercicio de la acción de repetición para buscar una responsabilidad patrimonial, frente a lo cual procedo a expresar los argumentos por los cuales la conducta de mi defendida no puede enmarcarse en la hipótesis jurídica que contiene el artículo 90 de la Constitución Política.

El elemento esencial de la responsabilidad patrimonial del agente público, que allí se regula, es que la conducta de este agente, por acción u omisión, que trae como consecuencia una condena al Estado, haya sido “dolosa o gravemente culposa”.

Artículo 90 Constitución Política. - “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste.”

Con anterioridad a la Constitución, ya el artículo 77 del Código Contencioso Administrativo, adoptado por el Decreto Ley 01 de 1984, había consagrado:

“De los actos y hechos que dan lugar a responsabilidad. Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.”

Vale decir, que históricamente en nuestro ordenamiento jurídico, esta específica responsabilidad del empleado oficial /servidor público, tiene como elemento esencial el dolo o la culpa grave.

Reza el artículo 63 del Código Civil. - “*La ley distingue tres especies de culpa y descuido.*

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.

Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.”

De manera que, bajo este marco jurídico, el medio de control de Repetición en contra de un funcionario o ex funcionario, se estructura alrededor de tres presupuestos:

1. Que la entidad pública haya sido condenada.
2. Que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia.
3. Que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la actuación dolosa o gravemente culposa del funcionario o exfuncionario. (negrillas mías)

Es claro entonces, que se dieron los dos primeros presupuestos, pero no presentándose el último, la responsabilidad patrimonial del agente oficial no nace. En cuanto al primero, la señora María Hortensia Colmenares Faccini no fue parte dentro del proceso que dio origen al fallo condenatorio. Y frente al tercer presupuesto, la actuación del agente público no fue ni dolosa, ni gravemente culposa.

Por conducta dolosa o gravemente culposa se entiende que es aquella que no deja lugar a duda alguna en relación con el efecto del querer hacer daño a otro, bien porque se actúe o deje de actuar con evidente negligencia o imprudencia o porque se haga evidente la voluntad de realizar un hecho antijurídico para dañar a otro, situación en que no incurrió mi defendida.

Decisión que ha sido reiterada por la Corte Constitucional, como se evidencia en sentencia C-285 de 2002 “…*la acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución y la Ley le otorgan a la administración pública para obtener de sus*

funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción contencioso administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado. Para que una entidad pública pueda repetir contra el funcionario o ex funcionario, es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los daños antijurídicos causados a un particular; (ii) que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo funcionario público; (iii) que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia."

De igual forma en sentencia C-430 de 2003, la Corte Constitucional dijo: "*Es evidente que el artículo 90 constitucional consagra una clara diferencia entre la responsabilidad del Estado, y la responsabilidad que igualmente es posible deducir a sus agentes. En el primer caso, como se ha visto, la responsabilidad resulta de la antijuricidad del daño, pero frente a sus agentes esa antijuridicidad se deduce de la conducta de éstos, vale decir, de que el comportamiento asumido por ellos y que dio lugar al daño, fue doloso o gravemente culposo, (…) en consecuencia si la responsabilidad del agente público no se configura en dichos términos, resulta improcedente que el Estado ejerza la acción de repetición porque ésta solo se legitima en la medida éste sea condenado a reparar el daño y los agentes estatales resulten igualmente responsables.".*

Pues bien, en el caso concreto, pretende la demandante, contra toda evidencia, endilgar una responsabilidad porque hubo una sentencia condenatoria, a consecuencia de una conducta omisiva por parte de la emplazada, pero se abstiene de analizar si en efecto hubo dolo o culpa grave, si se hubiera hecho el análisis que correspondía, no se habría intentado esta demanda, pues el medio de control que se ejerce carece de legitimidad porque, al contrario de lo que dice la demanda, no es el daño causado sino la acción u omisión dolosa o gravemente culposa, el elemento configurante de la procedencia de la acción.

VIII. EXCEPCIONES:

1. FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA

Por cuanto, tal como se ha dejado planteado a lo largo del presente escrito, no existió ninguna actuación dolosa o gravemente culposa de la señora María Hortensia Colmenares Faccini para que sea llamada como parte pasiva en el ejercicio del medio de control de Repetición.

Aunado a lo anterior, se evidencia que la señora María Hortensia Colmenares Faccini como Directora General de Desarrollo de Talento Humano – Directora de Talento Humano, no tenía la función de notificar personalmente las liquidaciones anuales de cesantías a la señora Ángela María Correa Moreno

2. EXCEPCIÓN OFICIOSA O GENERICA

Solicito a la señora Jueza de aplicación al artículo 282 del Código General del Proceso por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual reza: ***Resolución sobre excepciones.*** *En cualquier*

tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda (…).

IX. PETICIONES

De acuerdo con lo expuesto, solicito se sirva disponer que la señora María Hortensia Colmenares Faccini, no es sujeto de las declaraciones y condenas que pretende la demanda y, por ende, sean negadas las pretensiones de la misma.

X. PRUEBAS:

Documentales:

Solicito se tenga como pruebas las que obran dentro del proceso

XI. NOTIFICACIONES:

Recibiré las notificaciones en la Calle 44 No. 53 – 30, tercer piso en la ciudad de Bogotá. Teléfono 3657580. Celular – WhatsApp: 3108580135. **Notificación electrónica:** notificaciones@abogadosalmanza.com.

De la señora Jueza, cordialmente



CLAUDIA MILENA ALMANZA ALARCÓN
C.C. No. 52.984.593 de Bogotá.
T.P. No. 169.960 del C.S.J.